



FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES

Sede Académica México

**Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales
Mención en Sociología**

Tesis para optar el grado de Doctor de Investigación en Ciencias Sociales
IX Promoción, 2012/2015

**El orden político kirchnerista.
Hegemonía y populismo en Argentina, 1998-2015**

Francisco J. Cantamutto

Directores: Dr. Luis Daniel Vázquez Valencia
Dr. Martín Schorr

Seminario de Tesis: Procesos políticos contemporáneos de América Latina
Línea de investigación: Procesos políticos, representación y democracia
México, D. F., 24 de agosto de 2015

Se agradece el auspicio de CONACYT para la realización de este posgrado.



FLACSO
MEXICO

RESUMEN

Esta investigación estudia el kirchnerismo como orden político. El argumento defendido es que se trató de un orden político de tipo hegemónico, dirigido por una fracción del bloque en el poder, concretamente, el capital industrial. El proceso político que dio lugar al kirchnerismo se estructuró bajo una forma de ruptura populista del orden neoliberal, que implicó la incorporación de demandas de las clases populares. Esto implicó un cambio en las políticas públicas y el discurso oficial, que impulsó a las organizaciones de las clases populares a demostrar su consenso activamente. A partir de la impugnación de ciertas fracciones del bloque en el poder (que aquí llamamos desgarradas) al orden político en 2008, se produjo la afirmación particular del gobierno, dando lugar a una renovación de las identidades políticas, superando la mera alianza entre agentes. Metodológicamente, se abordó el proceso a partir de la conceptualización del modo de desarrollo como marco de continuidad y ruptura en las relaciones sociales, que ayuda a definir las dimensiones de análisis.

PALABRAS CLAVE

Kirchnerismo, hegemonía, populismo, bloque en el poder, clases populares, orden político, proceso político, modo de desarrollo

ABSTRACT

This research studies the kirchnerism as a political order. The defended argument is that it was a hegemonic type of political order, led by a fraction of the power block, namely, industrial capital. The political process that resulted in the kirchnerist order was structured in the shape of a populist rupture of the neoliberal order, which involved the incorporation of popular classes' demands. This implied a shift in the public policies and the governmental discourse, a change that urged the popular classes' organizations to actively express their consensus. The challenge of certain fractions of the power block (which we call here as torn ones) to the political order in 2008, produced a particular affirmation of the government, which led to a renewal of political identities, overcoming a simple alliance between agents. Methodologically, the process was

studied using the concept of development mode as a frame to analyze continuity and change in social relationships, at its different dimensions.

KEY WORDS

Kirchnerism, hegemony, populism, power block, popular classes, political order, political process, development mode

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación nunca hubiera sido posible sin el apoyo intelectual y emocional de muchas/os colegas, amigas/os, familiares. Estos agradecimientos son apenas un reflejo de lo mucho que debo a tantas y tantos.

Ante todo, tengo que agradecerle a Agos, porque sin su apoyo constante, de todo orden y nivel, nunca hubiera completado este proyecto. En el calor de la cotidianidad, su aporte excede lo sentimental, pues fue responsable de llevar a buen puerto cientos de preguntas sobre la investigación, aportándome material, ideas y correcciones. Muchos hallazgos aquí presentados son una empresa intelectual compartida.

Daniel y Martín, en sus funciones de co-directores, me ofrecieron una excelente guía para trabajar, aportando ideas y debatiendo conmigo como un par. Debo decir que Julio y Gerardo se comportaron de una manera similar, excediendo largamente sus tareas como lectores. El diálogo crítico, sopesado y amigable con los cuatro ha sido para mí un crecimiento inigualable en mi formación. En todos los casos, además, debo reconocer una enorme disposición a ayudarme a ampliar mis horizontes.

Tuve, además, en esta tarea intelectual y académica, el privilegio de construir propuestas con amigos y colegas de una enorme altura, que me jalaban hacia arriba. Adri (Jaro), Andrés, Emi (Carpa) y Héctor en calidad de coautores, pero también Beila, Fer, Jorge, Lean, Viro (incansable fuente de comentarios generosos) y Yulai, como lectores/as críticos/as, que más de una vez me desafiaron a ver hasta dónde llegaban mis propuestas. Todos ellos han sido vitales para llegar a este resultado, obligándome a repensar, a estudiar más, a revisar posturas y hallazgos. Sole y Vir me abrieron la puerta de la historia reciente, a ellas también el agradecimiento.

Un intercambio semejante fue posible en espacios colectivos como la línea de investigación de Procesos políticos contemporáneos de FLACSO y el Grupo de Trabajo de CLACSO América Latina: gobiernos, movimientos, persistencias. Quiero remarcar los aportes que me hicieron a partir de esos espacios Gime, Jairo y Sandra. Alicia Puyana y Javier Franzé me ofrecieron también oportunidades muy significativas para

poner a prueba ideas y avances parciales. Todas estas instancias de diálogo y debate son la base del trabajo científico y académico, especialmente para aquellos que no hacemos apologías del individualismo.

A todos los entrevistados, que desde lugares muy distintos me propusieron perspectivas novedosas, distintas maneras de entender lo que ocurría; en particular, Diego K. –amigo siempre presente- y luego Hugo Cañón, que me contactaron con otras valiosas personas, haciendo más profundo mi trabajo. A quienes entrevisté, porque realmente me dieron mucho que pensar.

Dos colectivos de referencia han sido muy importantes para compartir ideas, impresiones, opiniones sobre el proceso político estudiado. Los/as compañeros/as de Marcha, donde pude aprender a poner a prueba ideas que se entendieran en 6000 caracteres (¡quizás esta tesis se hizo revancha de ese límite!). De esta fuente de comunicación popular, obtuve devoluciones muy gratificantes y constructivas. Y los/as compañeros/as de la Sociedad de Economía Crítica, que proporcionaron todo este tiempo un espacio de referencia y construcción colectiva, permitiendo el laburo cálido en la distancia.

A la promoción IX del doctorado, que hizo de la compañía mutua casi una bandera, en la que nos envolvimos y supimos ir juntos en las sensaciones encontradas de esta etapa. Incluyendo las iniciativas culinarias. Por la gran mano y afable compañía en la estadía en España, quiero agradecerles a Bea y Tere.

A mi familia, por toda la garra le pusieron acortando la distancia. Loise, Bochi, Ruso, Lu y Magui, el círculo cercano, de fuego; pero también la familia ampliada, Zuli, Jose, Mati y Mer que estuvieron siempre pendientes. La Nona que, hasta que se fue, no dejó de llamarme para cantarme canciones mexicanas de los lugares que nosotros visitábamos. Tagala nunca dejó de estar atento a mis avances, como un joven lector de 90. Julio, Moni, Seba y Alfon, siempre con gestos afectuosos, pendientes y atentos. Nico, que aprovechó esta distracción y se casó con Lu. Ana, responsable de iniciar la siguiente generación con Kipi. Todo esto, mientras esta tesis se escribía, y la vida siguió.

Gracias.

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN	i
AGRADECIMIENTOS	iii
ÍNDICE GENERAL.....	vi
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES	vii
ÍNDICE DE GRÁFICOS	viii
ÍNDICE DE TABLAS.....	viii
INTRODUCCIÓN	1
CAPÍTULO 1. ESTADO DEL ARTE.....	11
1.1. Un cambio en la situación regional	11
1.2. Matriz marxista de interpretación del kirchnerismo.....	18
1.2.1. Acumulación, conflictos de clases y Estado	18
1.2.2. El kirchnerismo desde el marxismo	30
1.3. Matriz postfundacional.....	36
1.3.1. Racionalización formal del populismo.....	37
1.3.2. El kirchnerismo como ruptura populista	48
1.4. Recuperación de conjunto	57
CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO	62
1. Ontología y explicación	64
2. Fundamentos epistemológicos y metodológicos.....	70
3. Agentes sociales	78
4. El Estado	86
5. Hegemonía	100
6. Modo de desarrollo.....	112
6.1. Patrón de reproducción económica (PRE).....	117
6.2. Patrón de dominación	120
6.3. Políticas públicas y discurso gubernamental	121
CAPÍTULO 3. CRISIS DEL ORDEN NEOLIBERAL	124
1. El orden neoliberal	124
2. PRE.....	135
3. Políticas públicas.....	142
4. Disputas políticas y patrón de dominación	152
4.1. Representantes en el Estado.....	152

4.2. Disputas socio-políticas	159
5. La crisis mirada de conjunto	183
CAPÍTULO 4. EL PROGRAMA PRODUCTIVO DESNUDO.....	189
1. PRE	190
2. Políticas públicas.....	200
3. Disputas políticas y patrón de dominación	214
3.1. Representantes en el Estado.....	214
3.2. Disputas socio-políticas	227
4. Mirada de conjunto: el programa “productivo”	246
CAPÍTULO 5. LA RUPTURA POPULISTA Y EL ORDEN HEGEMÓNICO	253
1. PRE.....	257
2. Políticas públicas.....	271
3. Disputas políticas y patrón de dominación.....	291
3.1. Representantes en el Estado.....	291
3.2. Disputas socio-políticas	301
4. Mirada de conjunto.....	321
CAPÍTULO 6: LA RADICALIZACIÓN PARTICULARISTA	328
1. PRE.....	329
2. Políticas públicas.....	343
3. Disputas políticas y patrón de dominación.....	368
3.1. Representantes en el Estado.....	370
3.2. Disputas socio-políticas	388
4. Mirada de conjunto.....	419
CONCLUSIONES	423
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	433
REFERENCIAS HEMEROGRÁFICAS	484
ENTREVISTAS	486
SIGLAS Y ABREVIATURAS	487

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Modo de desarrollo y sus dimensiones	117
Ilustración 2. Mapa social durante la crisis.....	188
Ilustración 3. Mapa social en la salida de la crisis	251
Ilustración 4. Mapa social del orden hegemónico.....	327
Ilustración 5. Mapa social de la radicalización particularista	422

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1. Riesgo país (EMBI) para Argentina, en puntos básicos	137
Gráfico 2. Precios implícitos de sector productor de bienes y productor de servicios, tipo de cambio real multilateral. 1993=100.....	138
Gráfico 3. Fuentes y usos de los recursos externos, en millones de dólares, 1999-2001	141
Gráfico 4. Cantidad de muertos por represión estatal por año	143
Gráfico 5. Desempleo (% de la PEA) y prestaciones de planes sociales	147
Gráfico 6. Tipo de Cambio Nominal (TCN), Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM), Índice de Precios al Consumidor (IPC) e Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM). IV-01 = 100	193
Gráfico 7. Fuentes y usos de los recursos externos, en millones de dólares, 2002	198
Gráfico 8. Fuentes y usos de los recursos externos, en millones de dólares, 2003-2007	266
Gráfico 9. Resultado fiscal y de la cuenta corriente respecto del PBI	270
Gráfico 10. Tipo de cambio nominal e índices de precios al consumidor (oficial y corregido)	332
Gráfico 11. Tasa de desempleo y beneficiarios planes de empleo y seguros de desempleo	336
Gráfico 12. Salarios medio y mínimo, en términos reales y en dólares (IV-01 a IV-14). IV-01 = 100	337
Gráfico 13. Salarios reales (IV-01 a IV-14). IV-01 = 100	338
Gráfico 14. Salario real medio (I-70 a IV-14). 1974=1	339
Gráfico 15. Fuentes y usos de los recursos externos (2008-2014).....	341

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Principales organizaciones de trabajadores desocupados	177
Tabla 2. Beneficiarios del plan JJHD, en miles de personas.....	281

INTRODUCCIÓN

El inicio del siglo XXI marcó un nuevo escenario en América Latina. Tras la fuerza con la que irrumpieron los movimientos sociales impugnando el programa neoliberal en diferentes países de la región, aparecieron –como una ola- gobiernos con una nueva impronta, líderes que de una u otra forma retoman demandas y discursos de las clases populares. La ciencia política llamó –con cierto apuro- a este cambio “giro a la izquierda”, asumiendo que cualquier apelación que contuviera significantes ligados a movimientos populares se convertía automáticamente en un programa de izquierda. Esa premura, sin embargo, esconde un problema real, que es la difícil comprensión de los procesos políticos recientes de Latinoamérica: tras más de una década, seguimos debatiéndonos por el sentido y alcances de estas experiencias, que, no obstante, siguen avanzando al calor de desafíos concretos.

La presente investigación se ubica en este contexto, y como tal, no tiene pretensión alguna de neutralidad o asepsia, si ésta es pensada como ausencia de carga valorativa. La objetividad de esta investigación está en declarar el lugar de enunciación ante cada observación, hacer explícita la mirada, para permitir su reconstrucción por otros/as investigadores/as. El resultado aquí presentado tiene el interés declarado de aportar, en una forma limitada y parcial, a la emancipación de las clases populares de nuestra región, de las que somos problemáticamente parte. La exploración del proceso político en cuestión nos involucra como parte antes, durante y después de la tarea de estudio. Como las discusiones sobre historia reciente han recuperado, lo mejor que podemos hacer es tomar esta implicación para pensar el lugar desde el cual decimos. Esto no realza ni demerita las páginas que siguen, les da la credibilidad de permitir reconstruir la mirada.

El tema de esta tesis es el proceso político argentino que resulta en la emergencia del kirchnerismo, proceso que se desarrolla como parte de este escenario latinoamericano y que al momento de escribir estas líneas aún está en plena vigencia. La pregunta, motivo de preocupación permanente en investigaciones de doctorado, fue desde el principio qué era el kirchnerismo. Con mayor precisión, se puede preguntar ¿cómo explicar el orden político kirchnerista? Esto implica definirlo, caracterizarlo, y

dar cuenta de la lógica que le dio forma. Nuestra argumentación apostó a reconstruir el proceso político a través de las disputas de agentes sociales, que resultaron en ese orden particular.

Como tal, asumimos que el kirchnerismo hunde sus raíces en las trayectorias de la disputa social, siendo imposible entenderlo como un puro efecto de una “administración”, como se llama al gobierno desde un anglicismo proveniente de cierta concepción de la política. Una mirada de este tipo sería tributaria de la vieja división que hace el liberalismo de la realidad en esferas culturales autónomas, que ha tenido gran peso en la conformación de las ciencias sociales como disciplinas separadas (Wallerstein, 1998). La perspectiva defendida en este estudio asume como punto de partida la posibilidad de remitir a totalidades sociales, aun cuando se acepte que éstas son imperfectas, contingentes y no cerradas. Remitir a la totalidad no significa conocer todo, como falsamente se ha acusado en el renovado albor de las perspectivas empiricistas (Cuevas Valdés, 2013). La perspectiva que defendemos apuesta a encontrar los pasos necesarios para construir teóricamente la mirada, usando como horizonte la idea de que la realidad existe como conjunto integral, complejo pero no absolutamente indeterminado. Usando como hipótesis de trabajo esta suposición de sistematicidad, los aportes parciales de cualquier investigación tienen una fuente de orden que, a diferencia de un ideal decimonónico, no nos llevara nunca a un conocimiento completo.¹

Los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) forman parte de una metamorfosis más amplia de la sociedad argentina, que tiene por motor la disputa social y política entendida más allá de las fronteras de la estatalidad. La lucha de clases, esa referencia desestimada como vetusta, sigue siendo, creemos, el fundamento del cambio social. Pero esta creencia no está puesta de modo atolondrado como puro auto de fe, destinado a validar el estudio para algunos y volverlo hereje para otros. Este principio es utilizado como herramienta de trabajo para indagar la realidad argentina, y puesto en movimiento a través de sucesivas adecuaciones teórico-metodológicas que permitan hacer observaciones empíricas precisas, claras y rigurosas:

¹ Las discusiones teóricas y metodológicas ligadas a esta posición son múltiples y profundas. No pretendemos resolverlas aquí, sino tan solo dejar en claro nuestro punto de partida. Se pueden encontrar argumentos más precisos y rigurosos en otras obras. Remitimos, por la importancia que tuvieron para esta investigación, los aportes de Aibar Gaete, Cortés, Martínez y Zaremborg (2013), Isaac (1987), Osorio (2001) y Pereyra (1988).

quien acepte estas premisas, esperamos, puede reconstruir nuestros razonamientos con la misma información gracias a esta clave hermenéutica.

Asumimos que la sociedad es conflictiva, siempre está en relaciones tensadas. No podemos dar cuenta de la sociedad como totalidad, pero podemos estudiar las determinaciones sociales que genera en términos de relaciones estables, regulares. En tal sentido, la investigación se da inicio en 1998, porque es a partir de allí que los agentes sociales comenzaron a revisar sus interpretaciones sobre el orden prevaleciente (la Convertibilidad), elaborando nuevas demandas y estrategias de acción. El orden político neoliberal se comienza a disgregar en ese momento, y de ello se desprende la crisis vivida (y no de un problema económico). La cadena de acciones y reacciones que se desató, modificó las interpretaciones, demandas y alianzas de los agentes sociales, terminando por definir un nuevo orden político, que llamamos kirchnerista. Afirmamos de éste que es un orden hegemónico a diferencia del neoliberal, y estudiamos esta condición a partir del proceso político que le da lugar, que toma la forma de una ruptura populista.

En relación a los aportes específicos de esta tesis, creemos que la misma ofrece algunos puentes para cubrir la laguna existente entre estudios sobre el kirchnerismo provenientes de distintos enfoques. Concretamente, y más allá de otras referencias, se ha estudiado al kirchnerismo como proceso político desde tres grandes perspectivas: aquella que lo entiende en el “giro a la izquierda” regional, la que lo aborda desde una matriz del marxismo interesado en la política (especialmente desde Gramsci, Poulantzas o Holloway), y la que lo interpreta desde corrientes postfundacionales (centralmente, desde la propuesta de Laclau). Como es natural para un abanico de enfoques así de amplio, existen zonas grises donde no es posible compatibilizar los análisis; pero también es cierto que hay oportunidad para múltiples diálogos hasta ahora poco explorados.² Esta tesis se inscribe en ese espacio de diálogos posibles, apostando por un trabajo afincado en un problema empírico concreto: el estudio del kirchnerismo. Esta discusión está explicada en el capítulo 1 de esta tesis, que revisa el estado del arte del fenómeno en cuestión.

² Un esfuerzo en este mismo sentido es el de Emiliano López (2013). El diálogo con sus aportes ha sido particularmente fructífero para esta investigación.

Para poder hacer los vínculos entre perspectivas, trazando los lineamientos propios del enfoque teórico y metodológico, el capítulo 2 desarrolla los conceptos centrales utilizados en esta tesis. Vale la pena resaltar la ayuda de la perspectiva de la historia reciente para fundamentar epistemológicamente la investigación, cuyo detalle se trabaja en ese capítulo. Como mediación entre la discusión teórica y epistemológica, y el análisis concreto a realizar, se lanza ahí la propuesta para pensar la idea de totalidad bajo la categoría de *modo de desarrollo*, la cual ha sido trabajada junto a Agostina Costantino durante los estudios de doctorado.³ La misma no tiene intenciones de profunda novedad, puesto que recupera otras propuestas a las que intenta ordenar metodológicamente. Justo por esto, se constituye en una herramienta apropiada para proceder al análisis empírico a través de dimensiones especificadas con anterioridad. Éstas son el patrón de reproducción económica, las políticas públicas y discurso gubernamental, y el patrón de dominación, integrado a su vez en aquellas disputas ligadas a la representación en el Estado, a las de las clases dominantes y a las de las clases populares.

La suposición de fondo es que el proceso político no ocurre en el vacío, sino que modifica relaciones sociales existentes, algunas de ellas persistentes, otras cambiantes. La apuesta es a esclarecer esas mutaciones (cambio y continuidad) de las relaciones sociales, a partir del proceso político. La propuesta de modo de desarrollo da un marco donde esto ocurre, y permite rastrear continuidades en las relaciones de dominación y explotación, ordenadas en dimensiones específicas. Esta noción nos permite estudiar el frágil deslizamiento entre los condicionamientos estructurales, y la contingencia de la historicidad. Los agentes sociales actúan dentro de un espacio, preservándolo y cambiándolo en el marco de una disputa de poder. La pugna por estructurar el espacio de lo social tiene por principal orientación definir un orden político, como mito trascendente que ofrece lugares y tareas a los actores para conciliar la promesa de comunidad unificada.

La tesis busca explicar el resultado (el orden político) a través de la disputa (el proceso), que se da en el marco de relaciones sociales condicionadas (modo de desarrollo). Para ello se optó por construir un conjunto de conceptos que permitieran hacer dialogar los aportes de diferentes corrientes de estudios, y se procedió a recuperar

³ La categoría fue discutida por ambos en el marco de una lectura dirigida con Alicia Puyana.

la secuencia histórica de los hechos sociales. La discusión metodológica de la tesis se ofrece en el capítulo 2. Los capítulos 3 al 6 ofrecen la investigación empírica. Cada capítulo hace un doble movimiento, donde se aborda detalladamente el análisis de las dimensiones, para recuperar una síntesis que dé coherencia al momento del proceso político. Este camino de dispersión y concentración busca reconstruir la complejidad del proceso, dándole coherencia. Consideramos que este esfuerzo de periodización, ajustado a una lógica procesual ordenado por dimensiones precisas, es un aporte de esta investigación, no necesariamente por su novedad sino por su especificación coherente. Cada momento-período de este proceso político guarda una consistencia interna, encadenándose en una lógica más amplia, que lo excede. Estos momentos-períodos son la crisis del orden neoliberal (capítulo 3), la nueva estructuración política a partir del programa “productivo” (capítulo 4), la ruptura populista y el orden hegemónico (capítulo 5) y radicalización particularista (capítulo 6).

La hipótesis de interpretación de este proceso político es que una fracción de la clase dominante logró construir hegemonía a partir de una ruptura de tipo populista. Para ello, a través de los capítulos, se mostrará como el bloque en el poder se escinde internamente, y, sin perder acuerdos básicos, busca construir a partir de sus demandas particulares un consenso que superó sus límites corporativos. En definitiva, logró proponer sus demandas como las de toda la sociedad, definiendo un orden político. Para ello, debió considerar efectivamente demandas de otras clases, al punto de ocasionarle cambios en su propio programa (conjunto de demandas). Concretamente, la gran burguesía industrial logró incorporar demandas no solo de otras fracciones de la clase dominante, sino también de clases populares en su discurso y propuesta de orden político, lo que le permitió construir consenso activo.

Esta ampliación del discurso y programa no se resolvió sólo por vía propia, sino que la instancia de mediación de representantes políticos tuvo una cuota no trivial en la estructuración final del proceso: no en vano, a pesar de que sostenemos que es una fracción de la gran burguesía la que construye hegemonía, el fenómeno en cuestión lo conocemos como *kirchnerismo*. La mediación política a través de representantes constituye una parte esencial del devenir Estado en la conquista de la legitimidad, y en

ciertos casos, el consenso. Esta investigación afirma esta mediación, pero, a diferencia de ciertos estudios politológicos, no se ciernen con exclusividad a ella.

Debemos enfatizar que en esta investigación no afirmamos que se trate de un proyecto prefigurado de esta fracción de clase, ni tampoco de la fuerza política que lo representó. Muy diferente, se trata de una estructuración de relaciones no establecida *ex ante* por ningún agente social; es el resultado de la interacción conflictiva. Esta interacción conflictiva es una clave central de la tesis: a pesar de afirmar la existencia de relaciones estables de dominación y explotación, estas regularidades estructurales no explican por sí mismas la existencia de las clases sociales, pues es necesaria su actuación concreta, histórica, organizada y polémica. Las clases sociales actúan a través de sus organizaciones, y a través de ellas elaboran interpretaciones, demandas, alianzas con las cuales se proponen alcanzar sus objetivos (Adamovsky, 2015; Vilas, 1995). En tal sentido, se hablará de clases populares como el conjunto de organizaciones representativas de aquellos sectores subordinados en las relaciones de dominación y explotación: no hay pasaje de la economía a la política, o de la estructura a la contingencia, sino existencia real en la polémica política.

Justamente, la dinámica política por la cual el capital industrial logró ampliar sus demandas es descrita como populismo. La apelación a referencias simbólicas construidas alrededor del significante pueblo, construyendo un juego de tensiones con las instituciones la democracia liberal, que divide porosamente la comunidad política afirmando tanto la legitimidad de la parte relegada (*plebs*) como la del todo (*populus*). Esta forma del proceso político es explicada en detalle en los capítulos siguientes, y sólo resta decir aquí que no remite a la comprensión liberal o republicana que entienden el populismo como pura falta de virtud. Al contrario, a través del populismo, demandas de las clases populares lograron ser parte de las políticas públicas y el discurso oficial, funcionando como una profundización de la democracia. En tal sentido, efectivamente, el pueblo irrumpe en el orden político logrando que sus demandas sean consideradas. Estos puntos serán discutidos en mejor detalle más adelante.

Tres hallazgos relevantes se derivan de lo anterior. El primero es que el orden político kirchnerista es de tipo hegemónico, lo cual significa que organiza de una manera particular la dominación, logrando convocar consenso activo, deliberado por parte de las

clases populares. Esto es una novedad remarcable y distinguible de órdenes previos como el neoliberal, que se constituyó sobre la base de desarticular, desorganizar las clases populares, siendo un orden estable basado en los mecanismos de consenso negativo (ver capítulo 3). Observar organizaciones de las clases populares defendiendo a través de interpretaciones propias es una novedad, previamente desconocida en este modo de desarrollo.

El segundo se deriva de este, y es que la constitución de nuevas identidades políticas (la existencia de ‘kirchneristas’) es el resultado de este orden político específico. No todo orden político estable define una renovación de identidades políticas: el kirchnerismo lo hizo, y es un desafío explicar cómo ocurrió esto. La disputa de agentes sociales de clase y las mediaciones de los partidos políticos debe ser explicada, y esta investigación apuesta a realizarlo. En este sentido, la mediación significativa del discurso es considerada central para entender la disputa polémica por el orden político, pero no aceptamos la reducción de toda la realidad a actos discursivos. Se tomará al discurso como una dimensión más de la disputa política, cuya estructuración oficial desde el gobierno tiene efectos particularmente relevantes.

El tercer hallazgo de interés es que en este orden “el sujeto” de la construcción hegemónica es una fracción del bloque en el poder. Resulta llamativa tanto la indeterminación de quiénes dirigen el proceso en las perspectivas postfundacionales, como la tendencia de la matriz marxista a reducir el proceso político a la economía política: las fracciones que ganan, serían las que dirigen. La presente investigación desafía esa comprensión, distinguiendo los puntos de contacto y distancia de los procesos (y por ello no es una economía política del proceso). En particular, se encontró un desplazamiento significativo para explicar el proceso, que es la existencia de fracciones *desgarradas* entre la clase dominante: esto es, ganadoras en lo económico, pero desplazadas en lo político. En esta situación se encuentran las fracciones agropecuarias, y seguir su derrotero, a pesar de no ser los agentes hegemónicos, resulta un claro énfasis en esta particular relación entre economía y política.

Se pueden señalar diversos problemas a la hora de definir los alcances de la investigación. Mencionaremos 4 elementos que marcan limitaciones. En primer lugar, todo el trabajo ha sido realizado con base en acciones y declaraciones realizadas en el

espacio público, lo cual oscurece cualquier tipo de acuerdo generado por fuera de este escenario. No abonamos a teorías conspirativas o complots, pero tampoco afirmamos su inexistencia: simplemente, entendemos que ningún proceso político de esta escala se explica nada más que por oscuros pactos entre pocos.

En segundo lugar, las interacciones analizadas corresponden casi por completo a organizaciones de diverso tipo (cámaras empresariales, sindicatos, movimientos, partidos, etc.). Esto significa que: a) no hay espacio dedicado a las características más individuales de los actores del proceso (lo cual es una limitación, específicamente, en relación a los/as líderes); y b) no se aprovechan estudios de tipo de opinión pública (aunque estos podrían incorporarse sin mayor problema). Resulta en extremo difícil (si es que acaso es posible) “medir”, “observar” el consenso que es piedra de toque del propio concepto de hegemonía: ¿cómo determinar la valoración positiva, en qué consiste ésta, qué grados tiene, en relación a exactamente qué? Esta dificultad no es propia de la tesis, sino en general de las perspectivas que abrevan a esta visión de la construcción política.⁴

En el caso del enfoque postfundacional, tiende a existir un supuesto oculto a la mirada, y es que se asume que si el líder que interpela gana las elecciones, quiere decir que la mayoría apoya el discurso enunciado, o más sintéticamente: si logró construir hegemonía, gana elecciones. Para un enfoque tan reñido con los límites de las perspectivas liberales de análisis de la política, esto es un problema relativamente poco indagado. Cierta variante de la perspectiva gramsciana, de cuño latinoamericano, se volcó al análisis de las instituciones y las organizaciones, dando una pista que aquí seguimos. Éste es el camino elegido por esta investigación para estudiar la construcción de hegemonía. Ciertamente, cabe la duda sobre la hipótesis de Gramsci sobre aquello de que “todo el mundo está organizado” tras la emergencia y consolidación del neoliberalismo a escala mundial. La crisis de representatividad de las más diversas organizaciones ha sido una y otra vez referida en la bibliografía, y levantada como bandera en la propuesta de sociedades “poshegemónicas” (Beasley-Murray, 2010).

⁴ Hasta donde el autor conoce, los esfuerzos más sistemáticos por abordar este problema han sido los de Balsa (2006) y Thwaites Rey (1994).

No obstante ello, como hipótesis propia, podemos asumir que la estructuración pública de los discursos en confrontación es producto de la acción colectiva. Las personas que no participan de organizaciones, hasta cierto punto, aceptan los términos del debate tal como son reñidos en la lid pública: aunque no compartan los puntos de vista, sabemos que el problema es definir el campo de juego. El estudio a través de organizaciones permite captar entonces las interpretaciones en disputa que dan forma a distintos proyectos de orden social. A pesar de ello, se podría decir que esta investigación recupera relativamente poco los puntos de vista, las interpretaciones de los actores considerados, lo que puede mencionarse como tercera limitación. En rigor de verdad, en los últimos años, distintos estudios postfundacionales han comenzado a analizar, justamente, los discursos de las organizaciones populares con mayor detalle (excediendo la mirada centrada en el discurso del líder). El presente estudio, en cambio, busca comprender la constitución y cambio de un orden político determinado, poniendo en relación interpretaciones y acciones de un conjunto de actores (no sólo quienes se sienten parte del discurso oficial). Es por ello que ninguno de los actores está suficientemente indagado, y sin embargo, están en su mayoría considerados. Cada vez que se pudo, se recurrió a estudios secundarios para compensar este déficit.

Finalmente, en cuarto lugar, aunque son considerados en distintas oportunidades, hay relativamente poco lugar destinado a niveles sub y supranacionales de análisis. Si estos últimos son muy relevantes para la misma escena política regional que define el espacio “popular”, de “izquierda”, “progresista”, la construcción de las fuerzas políticas y sociales tiene la mayor parte de las veces origen en procesos locales que no son captados aquí (la excepción puede ser, quizás, las mínimas referencias a Capital Federal). Ambos niveles son relativamente poco indagados, aunque no desestimados.

Un problema que ha cruzado esta tesis de principio a fin es la tensión entre extensión y claridad. Como se puede apreciar en el índice, la exposición de los resultados es abultada, lo que repercute negativamente en la síntesis del argumento. El problema está en que, en aras de reducir el detalle, terminaríamos por dejar elementos de la explicación sin comprobar. El nivel de detalle, aunque ha sido cuidado lo más posible, apunta a no dejar afirmaciones sin corroborar, evitar los juicios infundados. Para tratar de sostener la atención del lector, además del tono de narrativa elegido, se intentó poner

en cada cierre e inicio de sección recuperaciones de conjunto, que funcionen como versión sintéticas de lo que se afirma, esperando que funcionen como aliciente a la lectura. Para quien quiera una lectura abreviada de los hallazgos de la investigación, sugerimos seguir los resúmenes ofrecidos al principio y al final de cada sección. La investigación se presenta siguiendo un orden sistemático en cada capítulo, según se describió.

CAPÍTULO 1. ESTADO DEL ARTE

El presente capítulo presenta el estado del arte sobre las interpretaciones del kirchnerismo. Se reúnen tres cuerpos de bibliografía, el primero sobre el cambio en la situación regional (sección 1.1), el siguiente desde una perspectiva clasista clásica (sección 1.2) y el último desde un enfoque post-fundacional que analiza el proceso como populismo (sección 1.3). Estas últimas dos secciones se dividen presentando primero los fundamentos teóricos de cada enfoque, y luego sus hallazgos empíricos.

Debe señalarse que esta propuesta de división entre lecturas no se traduce de modo automático a matrices de intelección del kirchnerismo. Por ejemplo, se pueden constatar análisis divergentes del proceso basados en la lectura de un mismo autor (Gramsci) en A. López (2011) y Rosso (2011). La división opera desde los ángulos por los que se busca ordenar la interpretación, más allá del resultado final.

El capítulo termina con una discusión de conjunto de los aportes, sesgos y limitaciones de cada cuerpo de la bibliografía (sección 1.4).⁵ Nuestro marco teórico se presenta en el capítulo siguiente, y nuestras precisiones del análisis empírico referido al proceso, en los 4 siguientes capítulos.

1.1. Un cambio en la situación regional

El inicio del siglo XXI encontró una situación política novedosa en América Latina. Luego del regreso a la democracia en los ochenta y las reformas estructurales neoliberales en los noventa (la “doble transición”), muchos de los nuevos gobiernos mostraron un sesgo progresista o popular, que se registró bajo el rótulo de “giro a la izquierda”. El debate se originó en la necesidad de explicar este súbito ascenso por la vía electoral de estos gobiernos de diferente cuño. Los ejemplos citados por la literatura son: Chávez en 1999 (Venezuela), Lagos en 2000 (Chile), Lula da Silva y Kirchner en 2003 (Brasil y Argentina), Vázquez en 2005 (Uruguay), Morales en 2006 (Bolivia), Correa y Ortega en 2007 (Ecuador y Nicaragua). Es claro que el rótulo de “izquierda” reúne

⁵ La sección 1.1. fue desarrollada en Cantamutto (2013). Las secciones 1.2 y 1.3. fueron publicadas en otra parte (Cantamutto, 2013b). Una revisión alternativa con el mismo interrogante en Gamallo (2014).

experiencias políticas *muy* diversas.⁶ Preferimos utilizar, la denominación de “popular”, en abierta referencia a las tradiciones latinoamericanas de nacionalismo atento a las necesidades de la población: el tipo de gobierno que busca instituir derechos para las mayorías, con cierto grado de tensión con las elites.

Se refieren como antecedentes que dan origen a este nuevo escenario: a) el fracaso del neoliberalismo como proyecto (Laclau, 2006b; Paramio, 2006); b) la crisis de las instituciones de la democracia liberal procedimental (Borón, 2004); c) el aumento de la pobreza y la desigualdad (Calderón, 2008; Castañeda, 2006); d) la ruptura entre Estado y sociedad provocada por todo lo anterior (Campioni, 2002; Tapia, 2007). Las reformas estructurales y sus efectos indujeron a un proceso de creciente movilización social, que no fue canalizada por las organizaciones tradicionales (partidos, sindicatos) sino que constituyeron nuevos actores y nuevos repertorios de acción (Esteve, 2010; Galafassi, 2006; Puricelli, 2005; Svampa, 2005), que mantuvieron una relación de oposición con el Estado, demandándole derechos sin elaborar estrategias de poder en la disputa por su control (Rauber, 2004; Wallerstein, 2008).

La retracción de los capitales transnacionales a fines de los noventa indujo una oleada de crisis económicas en los países periféricos. La digestión nacional de éstas produjo no pocas crisis políticas: las instituciones de muchas de las democracias latinoamericanas no estaban en condiciones de soportar procesos de movilización colectiva de carácter masivo (Pérez Liñán, 2008; Valenzuela, 2008). Según Cameron (2009), fueron los mencionados efectos del neoliberalismo (pobreza, desigualdad, pérdida de credibilidad de las instituciones, polarización social, etc.) los que dieron base social a muchas de las ideas fuerza de la izquierda (ver también Tovar Mendoza, 2008). Así, contra el fundamentalismo de mercado comenzaron a erigirse un conjunto valores asociados a la igualdad, la justicia social, la solidaridad, los derechos humanos (Arditi, 2009; Moreira, 2007). Los nuevos gobiernos habrían tomado estas demandas y valores para articular proyectos que los incluya en alguna medida. De este modo, considerando las trayectorias personales o partidarias de los nuevos gobiernos, el cambio no parece

⁶ Barbosa (2012) llama la atención sobre la diversidad de las experiencias, lo que impediría agruparlas. Creemos que tal variabilidad no impide intentar clasificaciones que permitan aprehender el fenómeno: es un problema de toda interpretación humana la reducción de dimensiones para categorizar. Aceptamos, sin embargo, que la clasificación da cierta idea de estabilidad a experiencias que cambian en el tiempo.

obedecer necesariamente a una convicción ideológica, sino al resultado de las circunstancias (García, 2008; Leiras, 2007; Moreno Brid y Paunovic, 2006), específicamente a la conflictividad social de clase (Kan y Pascual, 2011).⁷

Una de las principales características definitorias de estos nuevos gobiernos ha sido la importancia asignada a la política social (Lustig, 2012; Lynch, 2007; Paramio, 2006; Reygadas, 2007), poniendo al Estado en un rol activo (Beasly-Murray, Cameron y Hershberg, 2009; Moreira, 2007). Vale remarcar que estos gobiernos no han apelado a la presencia del Estado *contra* el mercado, sino que han diseñado su política social sobre la base de aceptar el mercado como institución básica de asignación de bienes y recursos, con una relativa ausencia de medidas radicales (Arditi, 2009; Lanzaro, 2008). Incluso la propia política social pareció ser, en muchos casos, una versión ampliada de la aplicada durante el neoliberalismo (Moreira, 2007). Sin dejar de valorar esta ampliación, fueron pocos los casos donde se retornó a una lógica universalista: la lógica de focalización siguió siendo la regla, aunque ahora ampliada (Uggla, 2008). Borón (2004) criticó la escasa confrontación con los actores poderosos del mercado en sociedades altamente desiguales y empobrecidas, como un “posibilismo” reformista.

Moreno Brid y Paunovic (2006), evaluando los resultados económicos de los primeros años de estos gobiernos, afirmaron que el “giro a la izquierda” sería, ante todo, un énfasis retórico. Sin embargo, aún si esto fuera así, *no es una novedad menor*: es una fuerte diferencia que los gobiernos tiendan a favorecer o facilitar un proceso de cambio cultural asociado a la crítica del neoliberalismo (Gallardo, 2007), donde ciertos temas vuelvan a estar en la agenda y se valore la participación democrática. Lo que unificaría a los nuevos gobiernos sería justamente una *disputa simbólica contra el neoliberalismo*, que es un proyecto político en extremo regresivo, pero no contra el capitalismo o sus fundamentos (Beasly-Murray et al., 2009).⁸ Más allá de esta negativa primaria, no pareció existir un proyecto claro, ni a nivel nacional ni a nivel regional (Davydov, 2008; Leiras, 2007; Malamud, 2009). En la mayoría de estos procesos, no habría una respuesta realmente nueva a la pregunta de qué regula la lógica del régimen: si las ganancias o las

⁷ Se ha apuntado que EUA desatendió su agenda en América Latina, dando espacio a la emergencia de gobiernos no alineados con su política (Arditi, 2009; Lynch, 2007; Reygadas, 2007; Wallerstein, 2008).

⁸ Los logros concretos de esta disputa, en términos institucionales, económicos, culturales, requerirían un análisis detallado de cada caso, lo que excede los intereses del presente escrito.

necesidades sociales (C. Katz, 2006b). Esto no significa que, en el decurso de los conflictos sociales, estos mismos gobiernos se modificasen en formulaciones más claras de proyectos sociales (socialismo del siglo XXI o revolución ciudadana, por ejemplo).⁹

De hecho, esta literatura busca distinguir entre situaciones dentro del “giro”. La diferencia más referida (y criticada) es la de Castañeda (2006), que buscó diferenciar una izquierda “buena”, moderada, reformista (Brasil, Chile y Uruguay), de aquella “mala”, de nacionalismo extremo, enfrentada a EUA (Bolivia, Ecuador, Venezuela). Si bien esta clasificación ha sido reputada de exageradamente centrada en la retórica (Leiras, 2007), fue retomada en diversas variantes. Así, Tovar Mendoza (2008) señaló diferencias entre una izquierda *moderna*, cercana a la socialdemocracia, con liderazgos consolidados en partidos tipo “atrapa todo”, favorables a la globalización y la democracia liberal; y una izquierda *populista*, de orientación plebiscitaria y delegativa, con liderazgos carismáticos, contrarios a la globalización, con vocación de intervención de los mercados, nacionalistas. El autor intentó distinguir en esta segunda izquierda una versión populista en Bolivia, Ecuador, Venezuela, gobiernos cuyos líderes eran *outsiders* que basaron sus proyectos económicos en recursos estratégicos, respecto de Argentina, que presentaba partidos más consolidados y una economía más diversificada.

Estas clasificaciones parecen cuestionar las credenciales democráticas de las izquierdas llamadas populistas (Paramio, 2006).¹⁰ Bolivia, Ecuador y Venezuela se encontrarían en este polo populista, mientras que Brasil, Chile y Uruguay en el contrario, con Argentina como caso intermedio. Beasley-Murray et al. (2009) y Roberts (2008), en cambio, distinguieron entre orientaciones más relacionadas con los movimientos sociales y otras más centradas en los partidos. Sin necesidad de suponer que los movimientos sociales fuesen más democráticos o progresistas que los partidos, es un hecho que fueron quienes protagonizaron la lucha contra el neoliberalismo. Se ha señalado que esta articulación fue más bien débil, aunque las variaciones nacionales son amplias (Borón, 2004; Touraine, 2006; Ugglá, 2008; Wallerstein, 2008).

⁹ Si bien esta polaridad (ganancias – necesidades) puede parecer un tanto extrema, creemos que no deja de ser relevante poner sobre la mesa el estrechamiento de opciones de organización social que el neoliberalismo produjo (Vázquez Valencia, 2009). Por las diferencias *efectivas* producidas por estos gobiernos, remitimos al resto de la discusión aquí presentada.

¹⁰ Como si la derecha tuviera sus credenciales democráticas a la orden del día (Leiras, 2007).

Por su parte, Borsani (2008), Cameron (2009), Lanzaro (2008) y Reygadas (2007) proponen diferenciar los gobiernos según la crisis o continuidad institucional de la que emergieron, y la consolidación del sistema de partidos. Gobiernos surgidos de crisis institucionales tendrían menos ataduras para lograr cambios importantes, mientras que la continuidad genera ciertos contrapesos y ataduras difíciles de cambiar. Cuando los partidos políticos se encuentran consolidados existen mayores inercias de continuidad, ligadas a la pluralidad competitiva y las coaliciones necesarias para negociar en el poder legislativo. Así, Bolivia, Ecuador y Venezuela, con partidos nuevos y crisis institucionales fuertes, podrían encarar mayores cambios –y lograr una inclusión acelerada de los marginados mediante mecanismos directos- que Chile y Uruguay, de democracias estables y partidos consolidados. Argentina y Brasil se encontrarían en lugares intermedios (el primero por la magnitud de la crisis atravesada, y el segundo por la volatilidad de los partidos). Otros factores que facilitarían mayores cambios son la posición dominante del partido gobernante dentro de la coalición de apoyo, una relación sólida con los sindicatos y la incoherencia de las reformas neoliberales previas.

Finalmente, otros autores evaluaron la orientación económica de los gobiernos, en particular relación a las estrategias de inserción externa. Así, García (2008) distinguió entre los países del Cono Sur, con economías más diversificadas y posibilidades de una política social más integrada, de los países andinos, dependientes de la disponibilidad de recursos estratégicos. Katz (2006a, 2006b) distinguió entre reconstrucción neoliberal, neodesarrollismo y radicalización. Calderón (2008) diferenció entre modernización conservadora, reformismo práctico (la izquierda pragmática), nacionalismo popular y el indigenismo neodesarrollista (ambas de la izquierda radical).

La bibliografía de esta sección tiene cuatro aportes relevantes a nuestro tema. El primero de ellos es que identifica la existencia de un set de políticas públicas que se distingue de la trayectoria previa del país. Este set de políticas está asociado a lo que comúnmente se denomina “populismo”, y remite a experiencias previas de la región, y en el caso de Argentina, concretamente al primer peronismo. Este set de políticas involucra, al menos: a) una mayor presencia del Estado como regulador, y eventualmente como productor; b) una mayor participación de los asalariados en el

ingreso nacional, a través de aumentos en el empleo o los salarios; c) mayor importancia del mercado interno, d) crecimiento industrial; y e) política social activa.

Definido como tal conjunto de políticas, el populismo se asoció a una fase particular de desarrollo capitalista (Balsa, 2010b; Dussel, 2001; Germani, 1962; Mazzeo, 2011; Mónica Peralta Ramos, 1978; Vilas, 1994). La reiteración de este set más allá de aquel momento histórico, disociado de una etapa particular de desarrollo, pasó a considerarse centralmente desde una mirada economicista, que asume un irresponsable privilegio del crecimiento y el empleo en la política de Estado, que impacta en severos desequilibrios macroeconómicos (Dornbusch y Edwards, 1991; Escudé, 2006; Palacio, 2011; Rodrik, 1996). En una línea de análisis más político, el neopopulismo se asoció en los noventa a un set distinto de políticas, pero apoyadas a partir de liderazgos personalistas, con escaso respeto de la institucionalidad republicana. Ambas visiones, criticadas por el enfoque postfuncional (ver sección 1.3), tienen vigencia en la bibliografía, y han impactado en el sentido común de las sociedades latinoamericanas.

El segundo aporte a nuestro problema tiene que ver con identificar una crisis de representación (política) expresada en vicisitudes institucionales, renovación del escenario partidario e intensificación de la protesta social. Se puede describir el proceso como de crisis orgánica (ver sección 1.2), donde las dificultades para constituir una voluntad general dentro del esquema de políticas neoliberales se expresaron en la forma de creciente movilización social y la creciente apatía respecto de las instituciones políticas representativas. Cualquiera fuera la salida a esta crisis, requería tomar este dato de la realidad en cuenta, aun cuando no fuera para tramitar las demandas y reclamos sino para contenerlos. De hecho, según observamos en un ejercicio muy general (Cantamutto, 2013a), el conjunto de países de la región mostró un giro de corte conservador antes de su viraje popular. En el caso de Argentina, la primera digestión de la crisis pasó por un gobierno no electo y de sesgo represivo, el de Eduardo Duhalde (ver capítulo 4). Los límites para contener la protesta de los gobiernos que sostuvieron o incrementaron la exclusión se expresaron en su rápida caída, y la emergencia de los gobiernos de sesgo popular que detectó esta literatura. El denominado “giro” es una respuesta (no la única posible ni la única existente) a una crisis generalizada del proyecto neoliberal. Estas semejanzas entre cambios políticos no parecen ser una casualidad, sino que obedecen a

la pertenencia de la región a un mismo sistema económico y político mundial, que estructura la relación global del capital (Bonnet, 2011).

En tercer lugar, el contexto regional de estos procesos marcó una referencia simbólica relevante (Biglieri, 2007). Se ha propuesto pensar a estos procesos como rupturas populistas (Errejón Galván, 2012b), más que como un “giro a la izquierda”. Las características específicas de coincidencia entre los nuevos gobiernos de la región, así como sus diferencias respecto de gobiernos o proyectos previos, son materia de debate, que no pretendemos saldar aquí. Pero queda claro que el proceso argentino se inscribió en un espacio y tiempo más amplios de cambios significativos en diferentes planos. Como veremos, esta situación regional tuvo impactos al menos en tres niveles: como parte de la innovación institucional de los años del kirchnerismo,¹¹ en materia económica, y en la estrategia discursiva de legitimación del gobierno. Tener trazas básicas de la situación regional es fundamental para comprender al kirchnerismo, y esta bibliografía abona a tal tarea.

Por último, dentro de la pauta comparativa, parece haber acuerdo en que el proceso argentino resulta distinguible de los cambios en países más moderados pero también respecto de los procesos más radicales (Bolivia, Ecuador y Venezuela). Estos gobiernos han puesto en discusión, desde el punto de vista programático, la regulación capitalista de la reproducción de la vida (Borón, 2013). Argentina, en cambio, reafirmó los parámetros capitalistas dependientes, bajo la formulación programática del neodesarrollismo como proyecto económico-político (Cantamutto y Costantino, 2013; Félix y López, 2010; Félix, 2012b; C. Katz, 2006b). Es necesario evaluar este proyecto político en términos de la institucionalidad de fondo que acepta (Zemelman, 2007).¹²

En términos simplificados, el proceso kirchnerista no cuestionó los fundamentos de propiedad y producción sobre los que se basa la posición privilegiada de las clases

¹¹ La aparición de diversos tipos de proyectos de integración regional fue un cambio institucional relevante: la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la reactivación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). En general, estos procesos se caracterizaron por morigerar la injerencia de EUA en los asuntos de la región.

¹² Por supuesto, son discutibles los alcances de estos programas en los procesos boliviano, ecuatoriano y venezolano, y difícilmente se pueda sostener que estos países no continúen condicionados por la lógica del capital; crítica que hicimos en Cantamutto (2013b). Sin embargo, resulta relevante distinguir diferencias básicas entre estos procesos y el argentino, que se ven muchas veces obliterados en el discurso que propone una homogeneidad más cuestionable que la comparación que aquí señalamos.

dominantes, con especial énfasis en la condición dependiente del país, que implican modos específicos de inserción externa, de especialización productiva, de remuneración a la fuerza de trabajo, entre otros. Esto significa que las clases dominantes o participan de la articulación política que el kirchnerismo representa o la condicionan con mayor fuerza que en otros procesos, y éste es un dato a estudiar.

Las siguientes secciones analizan el caso argentino en particular, primero con base en categorías marxistas más “clásicas” y luego desde el enfoque postfundacional.

1.2. Matriz marxista de interpretación del kirchnerismo

Una corriente de estudios ha desarrollado interpretaciones del kirchnerismo basándose en categorías marxistas, aprovechando especialmente los conceptos de Gramsci y Poulantzas, aunque también del marxismo abierto (Holloway). Estos estudios se centran en el análisis la lógica del capital, y por ello prestan particular atención a la acumulación económica y su relación con los conflictos de clase. Ofrecemos primero un recorrido mínimo por los conceptos básicos de esta matriz, que –por supuesto- no hacen justicia a la densidad de los debates (nuestra propuesta se presenta en el capítulo 2); por lo que remitimos enfáticamente a la bibliografía referida. Luego se presentan algunas interpretaciones del kirchnerismo a partir de esta matriz.

1.2.1. Acumulación, conflictos de clases y Estado

Es imposible saldar en unas líneas las discusiones sobre los aportes de Marx para pensar la relación entre acumulación, clases y Estado. Según él mismo (Marx, 1852), su aporte principal no fue descubrir la existencia de clases en conflicto, sino asociarlas a un modo de producción específico. La historia se explicaría por la lucha entre clases sociales, lo que permitía comprender la especificidad de las contradicciones que cada etapa histórica desplegaba. Para Marx, el modo de producción capitalista es un estadio particular de la historia humana, centrado en la valorización del capital en la forma de acumulación ampliada, operación lograda a través de la contratación de fuerza de trabajo formalmente libre y la propiedad privada de los medios de producción (Marx y Engels, 1999; Marx, 1981; Shaikh, 2006). El capital es una relación social, en la que los individuos se

encuentran en relación en virtud de su condición de seres sociales, no como entidades pre-existentes a la sociedad en la que viven.¹³

El hallazgo de la historicidad de las clases y su relación con la forma de producir y reproducir la vida en sociedad estableció una línea de interpretación que se distingue de otras tradiciones de pensamiento social. En particular, no debe confundirse la clase – con toda su carga de ambigüedades y elementos discutibles- con cualquier propuesta de estratificación. Esta última está basada en la medición de atributos individuales, que se distribuyen de modo continuo, y necesitan ser interrumpidos por una operación del encargado de la medición. Remite a una concepción estática y descriptiva de la sociedad, replicando una idea jerárquica de los estratos, que es incapaz de relacionarse con las causas de la distribución de recursos y el cambio social (Adamovsky, 2013; Allen, 1981; Stavenhagen, 1970). La discusión, siguiendo este esquema, sería qué atributos clasificar, el camino seguido por la mayor parte de los autores que tratan el problema (Adamovsky, 2013; Dalle, 2012; Osorio, 2001). La clase sería así un contrato entre individuos (Duek y Inda, 2006), sin razones para estimarla por encima de cualquier otro contrato, de modo que la misma no tendría ningún efecto particular en determinar probabilidades de cursos de acción, ni oportunidades o estilos de vida. No se deriva de ellas ningún antagonismo particular, menos como explicación del cambio social (Weber, 1964: 243).¹⁴

Volviendo entonces a las clases sociales como agentes en la historia, hay una distinción central para lograr su definición. Marx, por un lado, ofreció una definición de corte más estructural, según la relación a la posesión y propiedad de medios de producción y el control del proceso de trabajo, pero por otro lado, también señaló que las clases sólo existen al entrar en la escena política como unidad organizada, en oposición a otras clases (Marx y Engels, 1968, 1981). Esta definición dualidad ha llevado a una interminable discusión sobre las determinaciones de las clases. La ortodoxia estalinista defendió la postura de que la clase se definía en las relaciones económicas, y su posterior pasaje a la política admitía diversos niveles de conciencia y organicidad.¹⁵ La

¹³ Este ángulo de interpretación es recuperado especialmente por el marxismo abierto (Astarita, 2005; Bonnet, Holloway y Tischler, 2005).

¹⁴ Hemos comentado sobre los debates en la definición de clase en Cantamutto y Costantino (2014).

¹⁵ Dice al respecto Hall (1981: 63) que “(...) las clases *están constituidas en forma compleja* en cada uno de los niveles de la formación social, esto es, en lo económico, lo político y lo ideológico”. Por esto, no

tardía difusión de los trabajos más filosóficos y políticos de Marx facilitó este sesgo (Cerroni, 1976; Reiss, 2000). La metáfora toponímica de base y superestructura –por cierto, mencionada por Marx sólo en un prólogo- sólo generó confusiones, alentando una definición positivista y mecanicista de las clases.¹⁶ Frente al difundido modelo dual del Manifiesto Comunista, Marx estudió la existencia de múltiples clases y fracciones de clase en escritos más coyunturales, sobre lo que Osorio (2001) ha llamado la atención, señalando los diversos niveles de análisis posibles bajo este esquema general.

El economicismo y el mecanicismo fueron problemas que acosaron al marxismo desde sus orígenes, y gran parte de sus referentes intelectuales debatieron estas tendencias desde dentro del propio enfoque (Meiksins Wood, 2000). Los trabajos de Gramsci se ubican en esta disputa (Frosini, 2007; Grisoni y Maggiori, 1974). Gran parte de sus reflexiones remiten a las determinaciones políticas y culturales de la formación de las clases. Partiendo de la discusión sobre de las alianzas de clases de Lenin, y de la lingüística como modificación del sentido a partir de la relación (Balsa, 2010a; Ives, 2005; Liguori, 2000; Portelli, 1976), Gramsci propuso pensar el modo en que las clases sociales no sólo realizaban acuerdos externos (que suponían su existencia plena antes de relacionarse), sino cómo éstas se *constituían* a partir de estos acercamientos y enfrentamientos.

Si bien Gramsci defendía la existencia de clases fundamentales, parecía claro que carecía de sentido pensarlas en una actividad política impoluta, donde todo se resumiera a un mero conteo de fuerzas. La propia posibilidad de relacionarse entre sí requería de la contemplación activa de los intereses y demandas de las otras partes involucradas. Alguna de las clases fundamentales, entonces, debía proceder a esta consideración de otros intereses, permitiendo la definición de intereses comunes mediante la agregación. Ahora bien, si allí acabara el proceso, no habría cambiado nada respecto de la mera sumatoria de fuerzas. Lo que Gramsci propuso es que esta consideración de intereses diversos sólo puede aglutinarse a partir de la conformación de una voluntad nueva,

tendría sentido pensar en un interés de clase, carente de problemas, definido en lo económico, cuya aparición habría que constatar luego en lo político. Ver discusión en la sección 3 del capítulo 2.

¹⁶ Apoyándose sobre las determinaciones estructurales de las clases, diversos autores han buscado medir las clases en las sociedades, según su relación a los medios de producción y el proceso de trabajo (Olin Wright, 1983; Portes y Hoffman, 2003; Veltmeyer y Petras, 2005). Hemos relacionado una medición de este tipo con la dinámica política y económica para Argentina en (E. López y Cantamutto, 2013).

distinta a la suma de las partes, que funcione como *cemento* del bloque social (Dussel, 2001), que unifique un conjunto social heterogéneo. Esta voluntad podía, sin engaños, presentarse como el interés general de una sociedad dada, que, de acuerdo con la organización política moderna, se expresaba como una *voluntad nacional* (Gramsci, 1975, 1981; C. Pereyra, 1979).

Esta voluntad construía una unidad más allá de la heterogeneidad que la originaba, a través de una elaboración que no podía deslindarse de sus aspectos culturales. La operación era eminentemente *política* e ineludiblemente *histórica*, no definida por una determinación estructural *a priori*. Al mismo tiempo, si bien su construcción partía de clases fundamentales, éstas que se veían modificadas por su acción política: la determinación conflictiva de un interés general que pueda presentarse como el de toda la sociedad, acabaría por constituir a las propias clases, en tanto se combinaban aspectos organizativos, culturales, ideológicos, de maneras novedosas, más allá de sus condicionantes estructurales. Esta voluntad nacional no era un mero efecto superestructural, sino que definía a los propios agentes sociales. Quebraba así Gramsci la dualidad estructura-superestructura, a través de la idea de bloque histórico (Balsa, 2006; Portelli, 1976).

Esta conformación ideológica y política de los intereses de las clases llevó a Gramsci a desarrollar la idea de hegemonía, como el proceso de constitución de la voluntad nacional a partir de un conjunto de intereses particulares de clase. En primer lugar, la clase (o fracción) fundamental que protagonizaba el proceso debía ofrecer a sus contrapartes concesiones reales (simbólicas y materiales), sin las cuales no había imbricación posible. Esto es, las clases subalternas debían obtener algo a cambio, mientras las clases dominantes no cedían en lo fundamental, aún viendo alterado sus intereses o programas originales (Emmerich, 1980; Kohn, 1991; Thwaites Rey, 1994). Pero más aún, para que la hegemonía fuera tal, las clases dominantes debían ofrecer un horizonte de sentido, si se quiere, civilizatorio, que permitiera ordenar los valores e ideas que aglutinaban las clases más allá de cualquier anodino interés. A esto llamó Gramsci constituir una dirección intelectual y moral, quebrando definitivamente la idea de dominación como puro ejercicio de la coerción o la coacción: sin un aspecto de consenso era impensable el dominio clasista moderno. Las sociedades capitalistas

modernas no dejaban de constituirse a partir de relaciones de dominación de clase, pero la misma no era lineal y de pura opresión, sino –si se quiere- creativa. No en vano Gramsci dio tanto valor al rol de los intelectuales como ordenadores de elementos de la cultura, cemento del bloque social, constitutivo por ello de las propias clases sociales.

Sin embargo, las propuestas de Gramsci respecto de las clases y la política comenzaron a utilizarse bastantes años después de su muerte (1937). De hecho, su difusión en Latinoamérica fue bastante temprana, haciendo un ejercicio denso de traducción del pensador sardo, de sus obras a la realidad regional (Aricó, 2010; Portantiero, 1982). Justamente, se señalaron las dificultades de las clases dominantes para superar su corporativismo y avanzar hacia la construcción de un interés general, lo que habría llevado a una mayor centralidad del accionar estatal y las elites asociadas. Ello habría producido efectos relevantes en la constitución de las clases locales, signadas por el peso de la intervención del Estado desde sus orígenes.

Una conceptualización diferente de las clases partió del estructuralismo marxista, que también tuvo amplio impacto en el pensamiento latinoamericano. Contra el historicismo, su análisis partía de identificar una lógica sistémica totalizante, a partir de la cual se derivaban los elementos del sistema. Althusser y Balibar (1990), dos de sus grandes intelectuales, proponían comprender –tomando una idea de Lenin- a las formaciones sociales específicas como la yuxtaposición de diferentes modos de desarrollo, cada uno de ellos con sus respectivas instancias económica, política e ideológica. Las clases sociales se definían por posiciones estructurales, que combinaban las diferentes instancias de los distintos modos de desarrollo, explicando así la pluralidad de clases existentes (Harnecker, 1969). Se les ha criticado con dureza el carácter arbitrario de esta tríada de instancias (transferencia ilegítima de categorías descriptivas en conceptos teóricos), así como la innecesaria duplicación de órdenes de análisis – modo de producción/formación social (Laclau, 1991; Meiksins Wood, 2000). Además, el excesivo énfasis en la condición determinante del sistema, acababa anulando toda posibilidad de agencia, resultándole casi imposible explicar los fenómenos empíricos, particularmente, las revoluciones. A pesar de su fuerte disputa intelectual, en ciertos puntos, la cercanía con el funcionalismo sociológico era mayor de lo que estaban dispuestos a reconocer los propios contendientes.

A pesar de estos problemas, la difusión del estructuralismo marxista en América Latina fue muy amplia. No pocos debates sobre el carácter feudal o semi-feudal de la región tenían influencia de estas ideas. Otro autor de esta corriente que tuvo particular impacto fue Nicos Poulantzas. Uno de sus conceptos fue de particular utilidad para comprender la relación entre clases dominantes y sus fracciones, y resulta clave para la presente investigación. Se trata del Bloque en el Poder (en adelante, BEP). Dice Poulantzas (1969a: 102-103):

En el caso de una *pluralidad* de clases o fracciones dominantes, el bloque en el poder indica su *unidad contradictoria* de tipo marxista (y de ningún modo su “fusión”-totalidad de tipo hegeliano). La dominación de esas clases o fracciones del “bloque en el poder” se relaciona con *estructuras objetivas relativamente macrocrónicas* –a “fases”- *del conjunto de las relaciones de producción* (de ningún modo con “compromiso” o “alianza” *tácticos*). Esta *unidad contradictoria* se establece *bajo la égida de la fracción hegemónica*: constituye exactamente *la instancia “dominante”* característica del tipo de unidad marxista a nivel propiamente político de las estructuras de dominación. En esta medida, la hegemonía designa la estructuración *objetiva* de los “intereses” *específicos* de una clase o fracción como representativa de un interés *político* general de las clases o fracciones en el poder a pesar de sus contradicciones profundas.

Esta forma de comprender las clases sociales, y en particular la clase dominante, como unidades contradictorias resulta de inestimable ayuda a la hora de pensar los *bloques sociales* gramscianos. Como la cita señala, sin dejar de considerar a la sociedad moderna como basada en relaciones de dominación, Poulantzas defiende la idea de que el BEP sólo puede sostener su dominio sobre la base de una operación hegemónica, es decir, que logre una consideración de las clases subalternas y les dé, a su vez, una orientación general de la acción política. Esta propuesta sobre las clases, como se puede ver, tiene diferencias marcadas respecto tanto de su comprensión como una mera sumatoria de individuos, como de las teorías de las élites, como las de Wright Mills o de Schumpeter (Gold, H. Lo y Olin Wright, 1977; Hall, 1981; Poulantzas, 1969b, 1991). Mencionamos esto porque, al menos en principio, ésta sería la posición de Miliband (1970) al tematizar la relación de dominación de la clase capitalista, confundiendo las clases sociales con una forma de estratificación. Ralph Miliband, quizás la versión más sofisticada del instrumentalismo marxista, proponía una mirada altamente centrada en lo empírico para reconocer las posiciones de poder de clase. Su discusión estaba centrada

en comprender la relación entre ese poder y el estatal. El Estado en la sociedad capitalista y su relación con las clases es, de hecho, el eje faltante en este recorrido mínimo de conceptos de la matriz marxista.

Entendemos que no existe algo así como una “teoría marxista ortodoxa del Estado”, no hay acuerdo sobre cuál sería esta teoría, ni hay forma de definir entre las distintas interpretaciones a partir de la obra de Marx (Barrow, 2000; Bobbio, 1977; Sonntag y Valecillos, 1977). Existen apenas una serie de acuerdos básicos muy generales e insuficientes (Casar, 1982): su origen en la división del trabajo, su carácter clasista, su función general de mantener las relaciones sociales capitalistas, y su futura destrucción.¹⁷

Aún así, sobre la base de estos acuerdos generales se puede establecer una distinción clara respecto de teorías que lo asumen como un contrato entre individuos, como un tercero (neutral u opresivo), como una superación ética de las contradicciones de la sociedad. El Estado está signado por la conflictividad social: la discusión dentro del marxismo está en determinar de qué modo se define esa relación. Es un acuerdo que no existe como tal un interés general-universal dado: se trata del interés común de un grupo que es presentado como de toda la sociedad. “El Estado es necesario para poder presentar el interés particular como interés general: una ilusión bajo la forma de Estado” (Marx y Engels 1968: 35-36). Así,

el Estado es la forma bajo la que los individuos de una clase dominante hacen valer sus intereses comunes y en la que se condensa toda la sociedad civil de una época, se sigue de aquí que todas las instituciones comunes tienen como mediador al Estado y adquieren a través de él una forma política. (Marx y Engels 1968: 72)

Se despliega así la ambigüedad del Estado como “reflejo” de la sociedad civil. Por un lado, está señalando que a través del Estado la clase dominante presenta sus intereses como generales (instrumentalismo). Por otro lado, se dice que “condensa toda la sociedad civil”, es decir la relación de fuerzas en un momento dado: el Estado no es un puro instrumento a disposición de una clase, sino una arena política. Es característica de la sociedad dividida en clases requerir de un Estado que cumpla la función (estructural) de garantizar la continuidad de las relaciones de dominación, esto es ser

¹⁷ Sobre la teoría del Estado en Marx y su relación con las clases sociales ver (Cantamutto, 2013d).

factor de cohesión en una sociedad dividida (Casar 1982; Meckstroth 2000: 57; Solé-Tura 1975: 16).

La visión instrumentalista fue la que primó en *El Manifiesto Comunista*, donde se presenta abigarradamente un resumen de los elementos básicos de las posteriores interpretaciones mecanicistas (economía → política) y deterministas (necesidad de los papeles históricos), reforzadas en otros textos, como el prólogo a *La lucha de clases en Francia* escrito por Engels (1895) casi medio siglo después del *Manifiesto*. La política se reducía así a un simple epifenómeno. El Estado quedaba reducido a un puro instrumento al servicio de la clase burguesa. Como tal, aparecía como herramienta neutral, que podía ser tomada y utilizada con otros fines, por ejemplo, la revolución proletaria (Balibar, 1977: 74; Marx y Engels, 1999: 26).

Miliband (1970) desarrolló esta visión instrumental, discutiendo con el pluralismo al atender a las múltiples formas en que la clase capitalista tendría control directo del aparato del Estado a través de sus representantes, que son reclutados de su propia clase, condicionados por sus estilos de vida e ideas, y por el poder estructural de la clase en términos de empleo y producción.¹⁸ Se le criticó oportunamente que este tipo de conexión se definía a partir de una exterioridad, donde el Estado aparece como instrumento neutral que puede ser ocupado y utilizado para distintos fines (Poulantzas, 1991; Sonntag y Valecillos, 1977; Tarcus, 1991b). De hecho, desde el pluralismo se terminó por aceptar este tipo de condicionamiento de exterioridad, bajo la noción de poder estructural (Lindblom, 1999): el Estado aparece sitiado bajo grupos de presión con diverso grado de poder.

Esta forma de enfocar el problema se centraba en el sesgo de comprender al Estado como puro “reino de la fuerza” (Bobbio, 1985).¹⁹ Se obliteraba la discusión ya planteada por Gramsci (1975, 1981) respecto de la dimensión de consenso del Estado moderno, aquella que remite a la consideración real de intereses de clases subalternas en su seno, como única forma posible de constituir una comunidad política nacional.

¹⁸ Miliband introduce una útil distinción respecto del Estado como aparato, como compuesto por el gobierno nacional, los gobiernos sub-nacionales, el poder legislativo, el poder judicial, las fuerzas armadas y la burocracia. Según mostró su análisis, la clase capitalista condiciona al Estado en todos estos niveles, aunque de diferentes formas y con distintos alcances (Miliband, 1970).

¹⁹ Ya Lenin (2007) se había detenido sobre la necesidad de distinguir entre aparatos del Estado, según fueran conservables tras la Revolución, identificando instancias de administración que necesariamente persistirían en la dictadura del proletariado. Reconocía así que no todo el Estado era fuerza de opresión.

Gramsci, observando la expansión de actividades estatales de principios del siglo XX, no pudo dejar de notar que la coerción como función característica del Estado decimonónico se diluía con la inclusión organizada de las clases subalternas, aquella que despertó no pocas –ni excéntricas- esperanzas en el revisionismo marxista (Portantiero, 1981).

Más aún, Gramsci propuso comprender que el poder de las clases dominantes no se constituía sólo a partir del control de un aparato coercitivo (Estado, o sociedad política), sino que comprendía un elemento consensual, positivo, creativo, que se extendía más allá de aquel. Por eso propuso que la construcción de hegemonía burguesa atravesaba la sociedad toda, incluyendo los organismos que el liberalismo entendía como sociedad civil, que funcionan como “trincheras” en la lucha de clases, contenciones culturales y mediaciones políticas que impedían cualquier consideración catastrofista sobre el curso de los acontecimientos a partir de determinaciones de la economía (Paggi, 1981; Portantiero, 1981). La sociedad política y la sociedad civil constituían lo que propuso pensar como Estado Ampliado (Chihu Amparán, 1991).

Se ha discutido largamente sobre la pertinencia de incluir a los organismos de la sociedad civil dentro de la noción de Estado Ampliado, debido a que podría llevar a una indistinción de lo específico del Estado y la política, una superpolitización de lo social que impide una comprensión cabal del Estado (Althusser, 1970; Anderson, 1978; Balsa, 2006; Laclau, 1991; C. Pereyra, 1979; Poulantzas, 1969a). Sin embargo, la principal contribución de este planteo está en la existencia de una disputa generalizada de las clases a través de espacios de lo social en la obtención de consenso, y su existencia concreta en la forma de instituciones y aparatos. Como ha señalado Aboy Carlés (2001: 31), a través de la idea de Estado Ampliado, Gramsci iba más allá del ejercicio meramente topográfico de clasificar instituciones como civiles o políticas, buscando distinguir sobre el efecto que producen estas instituciones: funciones coercitivas y consensuales. El Estado Ampliado es aquel que cumple ambas funciones, y es el característico de la modernidad capitalista avanzada.

Centrado en esta forma de comprender la estatalidad (y con ello, la dimensión política de las clases), Poulantzas desarrolló, en polémica con la visión instrumentalista, la propuesta estructuralista. Según ésta, el Estado tiene la función específica de

constituirse en factor de cohesión de los niveles de una formación social, pues da “cohesión del conjunto de los niveles de una unidad compleja, y como factor de regulación de su equilibrio global, en cuanto sistema” (Poulantzas, 1969b: 44). No por presiones externas el Estado cumple esta función: tiene de hecho un interés propio en mantener las relaciones capitalistas para poder garantizarse recursos y actividad, organizadas tal como están (Offe y Ronge, 1975).

El Estado capitalista, a diferencia de otros estados, no se presenta como el dominio directo de una clase: no está fundado en privilegios y la voluntad divina, sino sobre la igualdad y libertad de los ciudadanos frente a leyes generales, formales y abstractas (Poulantzas, 1969a). No se trata de un engaño “ideológico”: es la estructura formal real de las leyes en el Estado capitalista, estructura de leyes y recursos normativos que permiten el intercambio generalizado de equivalentes, que requiere el “prejuicio” de igualdad formal de los individuos, liberados de medios de producción y de ataduras jurídicas para vender su fuerza de trabajo (Marx, 1981). La economía y la política se presentan como dominios separados, relativamente autónomos, y son efectivamente vividos de esa forma (Osorio, 2004b). En palabras de Marx y Engels (1981: 52),

para mantener intacto su poder social tiene que quebrantar su poder político; que los individuos burgueses sólo pueden seguir explotando a otras clases y disfrutando apaciblemente de la propiedad, la familia, la religión y el orden bajo la condición de que su clase sea condenada con las otras clases a la misma nulidad política; que, para salvar la bolsa, hay que renunciar a la corona, y que la espada que había de protegerla tiene que pender al mismo tiempo sobre su propia cabeza como la espada de Damocles.

Esto no significa que exista una *decisión* de abstenerse de borrar la línea de clase del Estado, como entiende Elster (1985): los capitalistas buscan hacerse del poder, pero les resulta imposible. Por empezar, existe una contradicción fundamental del programa de la burguesía: para lograr garantizar sus intereses de largo plazo, necesitan de medios democráticos, que abren espacio a demandas de otros sectores (Meckstroth, 2000). La burguesía no sólo debió históricamente disputar el poder con otras clases, sino además contener los intereses particulares de sus propias fracciones. La única forma de contener estas tensiones es a través de un sistema que las contenga a todas, al menos de forma parcial, desplazándose del centro de la escena: el sistema político que se presenta a

través del Estado. Los partidos políticos –el moderno príncipe (Gramsci, 1975)- cumplen esta función de agregar y combinar intereses más allá de sus fuentes corporativas originarias: los partidos de la burguesía no se constituyen sólo a partir de individuos burgueses, ni defienden sólo sus estrechos intereses. Los partidos generalizan intereses, representándolos más allá de un mandato restringido: cumplen una función creativa con y sobre los propios representados (Aboy Carlés, 2001a; Arditi, 2015; Vilas, 1995).

“El Estado capitalista moderno se presenta, pues, como encarnación del interés general de toda la sociedad, como materialización de la voluntad del ‘cuerpo político’ que sería la ‘nación’” (Poulantzas, 1969b: 150). Para que esta operación sea posible, es necesaria la separación de los medios de producción de los productores, generando como concepto (no como realidad) individuos-sujetos políticos y jurídicos que son la base del Estado, separados de su relación con los medios de definición de clase. El Estado, dicho de otra forma, necesita crear la ficción –vivienda como real- de individuos independientes, y no de agentes que son soporte de una estructura de clase: eso es lo que Poulantzas llama *efecto de aislamiento*. Por esto, el Estado se presenta como una entidad externa, con la cual los individuos se relacionan, en lugar de verse como una condensación de una relación social de clase, de dominación (Hirst, 1981; Holloway, 1980).²⁰

Según Aricó (2010), el esquema teórico de Marx enfatizó el aspecto dinámico y determinante de la lucha de clases en el desarrollo de las relaciones capitalistas y su aspecto político (lo que según Aricó, le habría impedido comprender la historia de América Latina). Sólo dio al Estado capacidad de iniciativa en ocasiones particulares, de “empate” de fuerzas y crisis, que lleva a una salida de tipo bonapartista (Marx y Engels, 1981). Esto fue tematizado también por Gramsci (1975) como cesarismo, bajo formas progresivas o regresivas.²¹ Sin embargo, para Poulantzas, el Estado capitalista es siempre, en cierta forma, bonapartista: porque sus propias condiciones de funcionamiento normal requieren de un distanciamiento respecto de la lucha de clases, y en particular de las clases dominantes. Dice Poulantzas (1969b: 372) que

²⁰ La polémica idea de la dictadura de clase tiene asidero en este aspecto. “El poder del Estado es siempre poder político de una clase, no se comparte: por eso es una dictadura de clase” (Balibar, 1977: 33-34). Esta dictadura de clase es un concepto sociológico-económico y no político-institucional (Solé-Tura, 1975: 12-13): nada se dice del régimen ni de la forma del Estado.

²¹ Esta noción es recuperada en análisis de raíz trotskista (C. Katz, 2013; Rosso, 2013).

Esta autonomía relativa le permite precisamente intervenir, no sólo para realizaciones de compromiso con las clases dominadas, que, a la larga, resultan útiles para los intereses económicos de las clases fracciones dominantes, sino también intervenir, según la coyuntura concreta, contra los intereses económicos a largo plazo de *tal* o *cual* fracción de la clase dominante: compromisos y sacrificios necesarios a veces para la realización de su interés político de clase.

Esta separación, que es sólo relativa, es típica de la sociedad capitalista, pues queda claro que históricamente los capitalistas, como clase dominante, no son la clase gobernante. No se trata de un límite de la estructura, donde empezaría a tener relevancia la agencia, como confunde Hirst (1981): es la delimitación estructural entre el poder de clase y el del Estado (Isaac, 1987: 168 y 185).²² Se ha propuesto, además, que el Estado necesita funcionar de modo relativamente independiente para incurrir en gastos de legitimación que el capital no realiza por cuenta propia, así como para intervenir en auxilio de los desarreglos propios de la producción basada en decisiones atomizadas (Alvater, 1977; Shaikh, 2006). Asimismo, la escuela de la regulación, y más tarde Jessop, propusieron que el Estado tiene una función en ordenar las relaciones semi-caóticas que fundamentan la acumulación, dando lugar a trayectorias relativamente estables de valorización del capital.²³

Los últimos trabajos de Poulantzas se inclinaron hacia una idea de Estado como condensación de relaciones sociales (Poulantzas, 1980). El Estado mantendría su función de garantizar la reproducción social bajo el dominio del capital, pero adoptando una forma cambiante según las coyunturas estables de la lucha de clases. De esta forma, Poulantzas buscó explicar los alcances del Estado de Bienestar: mediando políticamente los intereses que los propios capitalistas no pueden garantizar por su accionar corporativo, los compromisos que adopta con las clases populares son en definitiva una herramienta para garantizar la reproducción ampliada. No hay en esto ni engaño ni

²² Hirst insiste con que, en la medida en que la práctica de representación crea los intereses representados, y no simplemente recrea en otro escenario, la noción de autonomía relativa no tendría sentido, pues o los intereses existen fuera de la política (y en tal caso no hay autonomía) o se forman en la política sin ninguna remisión a la economía (no es relativa, sino absoluta). El problema de esta forma de comprender el problema es que Hirst –como muchos críticos del marxismo, incluyendo al propio Laclau– asumen que las clases están definidas plenamente en la dimensión económica antes de cualquier interacción. Esto vulnera directamente lo que hemos señalado respecto de la comprensión marxista de las clases sociales.

²³ Cierta lectura de la escuela regulacionista ha sido utilizada en la interpretación de la realidad argentina (Basualdo, 2011). La lectura propuesta por Jessop es recuperada por López (2013).

manipulación: es un auténtico cambio de la forma estatal según las condiciones de disputa entre el BEP y las clases populares.

Esta interpretación fue recuperada en el debate alemán por la escuela de la derivación: la lógica del capital estructura las relaciones sociales como un todo –es decir, a la sociedad históricamente situada–, del que puede distinguirse al Estado y la acumulación económica como dos de sus momentos. A diferencia de los planteos anteriores, el Estado aparece cruzado por las tensiones de conflicto social, y por lo tanto, ya no se trataría de una estructura que acata funcionalmente las necesidades del capital. Esta noción de Estado como forma de las relaciones sociales (Astarita, 2005; Holloway, 1980; Jessop, 2008; Míguez, 2010), ha tenido influencia en interpretaciones sobre el caso argentino (Bonnet y Piva, 2013; Bonnet, 2012; Piva, 2011, 2012).

Con este conjunto de categorías, que retomaremos en el capítulo 2, podemos avanzar en la discusión empírica de interpretación del kirchnerismo. Por supuesto, han existido otras discusiones sobre la relación entre clases, acumulación y Estado, aquí nos ceñimos a las discusiones centradas en los autores más referidos como fuentes teóricas.

1.2.2. El kirchnerismo desde el marxismo

Las principales interpretaciones referidas en esta sección entienden al kirchnerismo como una construcción hegemónica, bonapartista o transformista. Cuando se lo cataloga como populismo, hay generalmente una remisión difusa de esta categoría a un set de políticas y una alianza de clases, que se presenta como una distorsión de los verdaderos proyectos populares. Se lee así al proceso actual en relación a los populismos de mediados del siglo XX, con sus políticas distributivas, la valorización del rol del Estado, el impulso industrializador y ciertos rasgos de antiimperialismo burgués (Dussel, 2007; Vilas, 1994). En otros casos, se piensa al populismo como la –operación política de confusión entre el pueblo relegado (*plebs*, bloque social de los oprimidos) con el pueblo soberano (*populus*) (Dussel, 2001; Mazzeo, 2011). Este último rasgo puede ser recuperado, sin visos de perversión, en el planteo postfundacional (ver sección 1.3.1).

Para comprender qué significa el kirchnerismo es necesario comenzar, al menos, por los cambios acaecidos en el país durante la década de los noventa, mientras el régimen de la Convertibilidad ordenó la mayor parte de la actividad económica y

política de la sociedad. Hay un consenso bastante generalizado en identificar la Convertibilidad como el apogeo del modo neoliberal de regulación económica y política (Basualdo y Nahon, 2007).²⁴ La reconstrucción institucional post-dictadura habría privilegiado una dimensión procedimental de la democracia, relegando las demandas de recomposición y restitución de las clases populares. El control privilegiado por parte de la gran burguesía tanto del aparato estatal como de la estructura económica habrían sesgado las posibilidades de la democracia en un sentido excluyente para las mayorías (Campione, 2002). Los intereses de las clases dominantes confluyeron a un programa de reformas que, bajo el comando de las fracciones internacional y financiera de la gran burguesía, implicaron la apertura, desregulación, privatización y liberalización de la economía. Basualdo (2006b) llamó muy atinadamente a esta confluencia “comunidad de negocios”. El régimen de acumulación y el Estado que emergieron de la derrota histórica de las clases populares se configuraron de modo excluyente, haciendo coincidir forma y función del Estado como un instrumento excluyente (Sanmartino, 2009).

Este programa entró en crisis en la segunda mitad de los noventa, por la confluencia de distintos procesos concomitantes. La reversión a nivel internacional de los flujos de capitales hacia los países centrales forzó diverso tipo de crisis en la periferia. La aplicación de los programas de reformas había hecho particularmente vulnerables a los países a estos movimientos, induciendo importantes “efectos de contagio”: la crisis de Brasil en 1998 generó un serio problema en Argentina. Agotado el programa de privatizaciones, el eje de confluencia de la gran burguesía mostró sus límites, y el capital extranjero inició una etapa de claro avance sobre la propiedad nacional de la estructura productiva. Esto fomentó una creciente separación de estrategias al interior del BEP: por un lado, el capital extranjero -financiero y las empresas privatizadas de servicios públicos-, el comercial y parte del capital agropecuario abogando por una profundización de las reformas (programa dolarizador), y por el otro, el capital industrial, el sector de la construcción, otra parte del agropecuario, abogando por una salida diferente (programa de devaluación)

²⁴ Existe un problema de polisemia respecto de qué se entiende por neoliberalismo, si el programa de reformas estructurales, si el discurso individualista y consumista, si el proyecto de clase triunfante, etc. La sección 1 del capítulo 3 propone nuestra interpretación del asunto.

(Cantamutto, 2012; Gaggero y Wainer, 2006; Schorr, 2001). La disputa entre estos programas se sostuvo a lo largo de más de 3 años, sin una resolución prefigurada.

De modo concomitante, las clases populares, perjudicadas por el programa neoliberal, iniciaron un proceso de creciente organización y movilización, socavando las bases de legitimidad del consenso de la Convertibilidad. El esquema de políticas se encontraba cerrado a las demandas de estos sectores por empleo y mejoras en la distribución del ingreso, pues contradecían el sentido de la apertura y competitividad externa de la economía. La acumulación de experiencia de los sectores subalternos a lo largo de los años desgastó lentamente la autoridad estatal para sostener el programa tal como se encontraba (Bonnet, 2002). Muy lejos entonces se encuentra la explicación de la crisis de la idea de “estallido” en el 2001 (Félix y Chena, 2006; Giarracca, 2001; Schuster et al., 2006; Sevares, 2002). Este desgaste se acopló a la disputa entre fracciones del bloque dominante, inclinando la balanza a favor del sector devaluador. Así, la salida de la Convertibilidad no fue estructurada por un programa popular, sino en función de las necesidades de un sector del BEP. Pero para que la crisis tuviera salida, las fracciones ahora al comando del BEP debieron apoyarse en las demandas e intereses de los sectores populares, repudiando activamente el orden previo (Basualdo, 2006a; Bonnet y Piva, 2009; Lucita, 2007).

Las explicaciones de las características del período iniciado a partir de allí difieren. En general, se acepta la idea de que se trata de un tipo de acumulación neodesarrollista (Basualdo, 2011; Félix, 2008, 2012b; C. Katz, 2013; Rinesi, 2011; Sanmartino, 2009), aunque las precisiones sobre qué implica exactamente tal tipología están en discusión (Félix y López, 2010, 2012). Entre otros tópicos, se entiende que la mayor presencia regulatoria del Estado, en las inversiones y en la institucionalidad de la relación patronal-obrera, forman parte central de este tipo de régimen. Aunque se apela a la industrialización, no está claro que tal proceso sea en efecto una realidad: más bien, se ha dado continuidad al tipo de inserción externa dependiente, basada en la explotación de recursos primarios o industriales de bajo valor agregado, y el aprovechamiento de mano de obra barata.²⁵ En este sentido, varios autores señalan bases fuertes de continuidad (Borón, 2013; Castorina, 2009; Rajland, 2012; Zemelman, 2007). Svampa

²⁵ Hemos discutido en otra parte los logros del neodesarrollismo (Cantamutto y Costantino, 2013).

(2011) llamó jocosamente a esta situación “consenso de los *commodities*”, en reemplazo del consenso de Washington de los noventa.

Sin embargo, asumir que todo continúa igual que en la década anterior (como hace por ejemplo Castillo, 2007), no resulta adecuado. Comprendiendo que toda formación social cambia a lo largo del tiempo, manteniendo continuidades y rupturas que nunca son iguales a sí mismas, Bonnet (2012), Katz (2013) y Lucita (2013) hablan de una *recomposición capitalista*.²⁶ La inusitada recuperación de la actividad, basada en una mejora sustancial de las ganancias de las fracciones dominantes dentro del BEP (CENDA, 2007; Michelena, 2009), permitió una recuperación de sectores intensivos en mano de obra, mejorando de modo marcado la situación del mercado de empleo: la desocupación desciende y los salarios reales se recuperan luego de la caída histórica. Aunque esta situación repercutió en una mejora en la distribución del ingreso (Graña y Kennedy, 2007, 2010), los procesos que le dieron lugar se agotaron aproximadamente en 2007 (Basualdo, 2011; Piva, 2011). A partir de allí se ha observado una serie de procesos contradictorios (devaluación, impuesto a las ganancias aplicado al salario, ajustes salariales en función de inflación desfasada, ampliación y mejora de asignaciones familiares, etc.), cuyo resultado neto no es evidente; aunque los indicios no parecen indicar mejoras de la distribución del ingreso (López y Cantamutto, 2013).

El conflicto de clases descrito impactó sobre la forma específica del Estado. Así, parece haber consenso sobre que el período iniciado luego de la Convertibilidad tiene como uno de sus núcleos la reconstrucción del Estado *capitalista* (Bonnet, 2012; Colectivo Situaciones, 2005; C. Katz, 2013; Lucita, 2013a; Rajland, 2012). Esto es, el Estado ganó capacidad de intervención (recuperó la política fiscal, monetaria y cambiaria), pero no cuestionó ninguna de las bases del privilegio de los sectores dominantes. El resultado neto del nuevo proceso no es claro. Si bien se pueden observar cambios en la forma del Estado respecto de los noventa,²⁷ no hay señales de que los

²⁶ Katz no realiza sus planteos desde una perspectiva abiertamente gramsciana, pero abreva a su aparato conceptual (Rosso, 2013). Bonnet recurre al marxismo abierto en su explicación.

²⁷ Bonnet (2012) y Piva (2011) realizan los intentos más sistemáticos de analizar estos cambios, aunque Basualdo (2011) aporta elementos. Se consigna, en general, el creciente peso del Estado (por empleados, por dependencias, por tamaño en el PBI), la preeminencia del poder ejecutivo al interior del mismo, la re-estatización –forzada– de algunas de las privatizadas, el mayor peso de las dependencias “políticas” en detrimento de las “técnicas-económicas”.

mismos se encuentren consolidados. Por esto, prácticamente todos estos autores hablan de una crisis de la forma Estado neoliberal, sin la consolidación de una nueva forma.

Quizá uno de los rasgos más significativos de la nueva forma Estado es su carácter eminentemente político: contra el discurso mistificador de los noventa, que retraía de la esfera de la decisión colectiva algunas de las políticas más significativas para ponerlas al servicio de algunos sectores específicos, el kirchnerismo reivindicó el carácter de árbitro del Estado, su capacidad de intervenir en función de decisiones políticas. Esta reivindicación del rol del Estado y su falta de consolidación de una forma estable (del modo que ocurriera con la Convertibilidad), serían los rasgos que ponen en discusión la constitución hegemónica o no del proceso kirchnerista. Así, Lucita (2013) habla de un régimen transicional, Katz (2013) apela a la idea de bonapartismo, Basualdo (2006) y Castorina (2009) remiten a la categoría de transformismo, Modonesi (2012) y Sanmartino (2009) lo interpretan como revolución pasiva o revolución-restauración.

Algunos autores señalan que el Estado y las fracciones dominantes del BEP para construir cierta legitimidad han tenido que considerar, aunque sea parcialmente o de modo distorsionado,²⁸ las demandas de las clases populares que empujaron la salida de la Convertibilidad, como mecanismo para quitarles iniciativa a estos sectores, recanalizándola dentro del Estado (Piva, 2011; Sanmartino, 2009; Svampa, 2011). En este sentido, habría un principio de construcción hegemónica por parte de los sectores dominantes, toda vez que buscan basar su dominación sobre mecanismos de consenso, cediendo compromisos reales con los sectores subalternos sin que éstos lleguen a afectar sus propios intereses.²⁹ Sin embargo, se ha señalado también que la necesidad de que el Estado arbitre entre clases y fracciones de clase estaría dando cuenta de la falta de un acuerdo sólido entre los sectores dominantes, lo que impediría hablar de hegemonía (Bonnet, 2012; Borón, 2013; R. Gómez, 2012). El populismo señalaría aquí estos

²⁸ La parcialidad o distorsión no refiere tanto a los efectos de la negociación que toda decisión política tiene, sino a la selectividad del gobierno a la hora de recuperar las demandas: ciertas demandas de ciertos grupos en ciertos límites. Como ejemplos, se puede considerar que los salarios se recuperan pero no crecen respecto de sus niveles previos, se amplía la cobertura de los planes de desempleo pero siguen bajo lógica focalizada y controlados por el gobierno, se abren los juicios a los participantes de la última dictadura pero no se sanean las fuerzas policiales ni penitenciarias, a la vez que se aumenta la cantidad de procesados por causas sociales y políticas.

²⁹ El intento por la construcción de transversalidad, entre partidos y organizaciones sociales, es interpretado por varios autores como la declaración abierta de ese intento hegemónico (Basualdo, 2011; C. Katz, 2013; Svampa, 2011)

compromisos débiles entre clases y fracciones de clase, que administra la construcción precaria de hegemonía. Schuster (2008: 267) llega incluso a plantear que el gobierno construye hegemonía *desgastando* su relación con la gran burguesía.

En relación a esta dinámica, esta bibliografía distingue diferentes periodizaciones, basándose en los mecanismos por los que los sectores dominantes procuran integrar demandas de los sectores subalternos (o no). Intentamos aquí hacerlas confluir para lograr una descripción estilizada. Así, Gaggero y Wainer (2006), Muñoz (2004), Piva (2007), Rajland (2012), Retamozo (2011), Svampa (2006, 2011) y Wainer (2010) precisan elementos para comprender los alineamientos de los diferentes actores sociales durante la crisis de 2001, sus demandas, acciones y alianzas, que permiten comprender la estructuración de la forma de la crisis, y cómo impactará en la recomposición posterior. Duhalde cumpliría las primeras tareas en la recomposición capitalista, el programa desnudo de las *nuevas* fracciones dominantes del BEP, bajo el acuerdo básico de exclusión de las clases populares en la decisión (Bonnet, 2012; R. Gómez, 2012; Retamozo, 2011). Kirchner cumpliría la tarea de lograr consenso de las clases subalternas, a partir de la consideración de algunas de sus demandas e intereses, sin por ello alterar el rumbo trazado por su predecesor (Basualdo, 2011; Bonnet, 2012; Piva, 2011; Svampa, 2011).

El punto de quiebre fue, y esto es una coincidencia con el cuerpo de bibliografía de la sección 1.3, el conflicto con el campo de 2008. Si bien tanto Basualdo (2011) como Bonnet (2012) indican que este conflicto es de carácter estrictamente político, donde se pone en cuestión la capacidad del Estado de arbitrar entre las fracciones del bloque dominante, sacan conclusiones distintas a partir de allí: mientras que para Basualdo los sectores subalternos ganan capacidad de control del Estado, para Bonnet –al igual que para Piva (2011)- se nota el agotamiento del intento de estrategia hegemónica de la gran burguesía. Svampa (2011) interpreta una cierta exacerbación de la lógica de construcción hegemónica, aunque pareciera de su análisis que el sujeto que la llevaría a cabo sería el propio gobierno, y no un actor social definido en el campo de las clases.

Esta bibliografía aporta elementos para comprender el proceso a partir de la articulación de clases sociales, acumulación y Estado. Aunque discutimos sus aportes y limitaciones en la sección 1.4, vale la pena señalar que tiene ciertas dificultades para

interpretar el kirchnerismo como populismo más allá del set básico de políticas (que se encuentra lleno de contradicciones flagrantes incluso desde el diseño), no teniendo recursos teóricos para darle asidero formal. El populismo queda así como una apelación algo vaga, lo que dificulta explicar con claridad la operación política que permite la construcción de hegemonía. Asimismo, tiende a procurar explicar el proceso populista a partir de la manipulación, la cooptación y el engaño, que –aunque definitivamente existieron- tiene poca potencia explicativa sociológica. Así, mientras fueron el eje de la disrupción de la Convertibilidad, su capacidad política de esfuma en los siguientes años. El proceso hegemónico populista involucra una construcción que difumina las identidades de clase, aunque lo haga con una distribución desigual. Revisamos en la próxima sección la interpretación en clave postfundacional del kirchnerismo.

1.3. Matriz postfundacional

Entre fines de los setenta y principios de los ochenta, se produjo un importante cambio en la forma de problematizar la relación entre sociedad y Estado. En el contexto de regresión generalizada de las conquistas sociales y la crisis de los regímenes socialistas de Estado (Harvey, 2007), se produjo una crisis dentro del marxismo, que llevó a no pocos autores a deslindarse este enfoque teórico (Meiksins Wood, 2000; Palti, 2005). En una fuerte revisión teórica, se señalaron posibles caminos alternativos (posmarxismo, neomarxismo, etc.) que buscaban renovar la matriz de pensamiento referida. Influenciados por discusiones del postestructuralismo, varios autores (Badiou, Laclau Rancière, Zizek, entre otros) tematizaron particularmente la política, buscando un enfoque que no tuviera que partir de fundamentos que garantizaran el sentido de la interpretación (como solía funcionar la apelación a las clases sociales, su lucha, o a la acumulación de capital). Por ello, una de las formas de referirlos ha sido como postfundacionales (Franzé, 2012), que adoptamos aquí.

En la revisión de conceptos de la sección 1.3.1, nos enfocamos en los aportes de Laclau, puesto que sus propuestas son las más recuperadas para analizar el kirchnerismo

como proceso político desde esta perspectiva.³⁰ No obstante, los estudios recuperados en la sección 1.3.2 hacen uso también de otros aportes de la matriz postfundacional.

1.3.1. Racionalización formal del populismo

Al igual que respecto del marxismo, no pretendemos dar cuenta del recorrido completo de la obra de Ernesto Laclau, sino mencionar algunos conceptos clave para el análisis.³¹

Desde sus primeras intervenciones teóricas, Laclau buscaba discutir con el economicismo de la interpretación marxista ortodoxa, especialmente para poder captar la particularidad de la política, y más en específico, de los populismos, lo que resultaba en una incompreensión fatídica de los proceso de nuestra región (Gunder Frank, Puigrrós y Laclau, 1970; Laclau, 1978, 1991).³² Aunque no puede negarse la existencia –y presencia- de esta ortodoxia en la matriz marxista (ver sección 1.2.1), debe señalarse que desde su propio seno se abrían en aquellos años nuevas variantes. Laclau era apenas uno de los muchos intelectuales buscando alternativas teóricas para pensar la política.³³

Sin embargo, Laclau dirigió sus críticas a un marxismo cada vez más satirizado (Dussel, 2001; Meiksins Wood, 2000; Vilas, 1995). Haciéndose eco del estructuralismo en boga, ya en sus primeros trabajos cuestionó la presencia de las clases sociales en el plano de la política: los *sectores populares* se presentaban en la *formación social* latinoamericana de un modo que difería de la *clase trabajadora* propia del *modo de*

³⁰ Otros autores, como Paolo Virno, Antonio Negri y Michael Hardt, tuvieron fuerte gravitación en la interpretación de la realidad argentina en la crisis de 2001/02, a la vista de la movilización sin organización aparente (focalizado sobre las protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001), sin proyecto de conquista del Estado y con una composición multiforme. Fue muy difundido el uso de las categorías de estos autores para explicar la crisis, pero pocas luces han dado para comprender la recomposición estatal posterior. Probablemente la producción intelectual más lúcida desde una perspectiva de este tipo sea la del Colectivo Situaciones y la editorial asociada Tinta Limón, <http://colectivosituaciones.blogspot.com/>

³¹ Además de las obras del propio Laclau, se puede recurrir a múltiples estudios de gran rigor y claridad (Aboy Carlés, 2001a, 2001b, 2010; M. Barrera, 2011; Barros, 2009; Biglieri y Perelló, 2007; Biglieri, 2011; Fair, 2009b; Muñoz, 2010; G. Pereyra, 2012; Retamozo y Stoessel, 2014).

³² Se ha señalado el reduccionismo de la versión del marxismo criticada por Laclau, al suponer que las clases estarían definidas en la economía y luego requerirían un pasaje a la disputa política, error esencialista imputable incluso a Gramsci (Ives, 2005).

³³ Los seminarios de Oaxaca (1973) y Mérida (1973) sobre clases sociales y política fueron posiblemente de los encuentros más importantes en este camino, reuniendo a la mayor parte de la intelectualidad crítica. Laclau participó del seminario de Morelia (1980), que continuó esta tarea. No debe desconocerse, además, la importancia de la teoría de la dependencia aparecida a fines de los sesenta de la mano de André Gunder Frank, Ruy Mauro Marini, Theotonio dos Santos, Vania Bambirria, entre otros. El enfoque dependentista partía de pensar la particularidad de América Latina en la acumulación de capital a escala mundial, poniendo en crisis el etapismo modernizador que confundía categorías puras con análisis histórico.

producción capitalista. El problema básico de este planteo era la reducción de la clase a una posición en la estructura económica, que aqueja de al menos 4 problemas por asumir: a) que modo de producción equivale a economía; b) que la economía es un orden autorregulado (relativamente independiente de otros subsistemas); c) que la clase indica un rol sólo en ese sistema; d) que los sujetos políticos no tienen por qué corresponderse con posiciones estructurales. Los tres primeros son supuestos solo pueden aceptarse bajo el economicismo más ramplón, y el cuarto sólo es un problema si se asumen los tres anteriores. Accesoriamente, igual que el estructuralismo (ver sección 1.2.1) se duplicaban innecesariamente los órdenes de análisis (formación social y modo de producción remitían a ontologías diferentes).

No obstante lo anterior, Laclau partió su trayectoria teórica de cuestionar la presencia de las clases sociales en la política, y en particular, para el caso latinoamericano, su actuación en el marco de procesos populistas. La noción clave a partir de entonces fue la de *populismo*, sobre cuya depuración formal avanzó con los años. En su esfuerzo por lograr una teoría política comprehensiva, fue trasladando su referente de discusión a una versión del pluralismo liberal (Balsa, 2010b; Ives, 2005). En cierta forma, igual que el marxismo hacía con las clases, el liberalismo *asumía* la existencia de individuos como totalidades estructuradas, listas para interactuar antes de entrar en relación con otros. Tomando herramientas del psicoanálisis lacaniano y del análisis del discurso, Laclau introdujo la cuestión de las identidades políticas, como procesos nunca cerrados, que no se pueden suponer, sino, al revés, se deben explicar.

El primer paso fue la discusión de las caracterizaciones casuísticas de populismo, que buscaban definirle con base en sus atributos o, más bien, por la falta de atributos (Biglieri y Perelló, 2007; Laclau y Mouffe, 1987; Laclau, 1978). El populismo no sería una expresión de una clase, aunque las clases estuvieran presentes. No es pura ideología ni un concepto vacío, no es resultado de una asincronía tampoco. Laclau iría desplazándose a la búsqueda de una racionalidad formal en el populismo, contra las interpretaciones que enfatizan los aspectos no racionales del mismo, pensándolo como epifenómeno, desviación o resabio de subdesarrollo (Balsa, 2010b).

En el trabajo de 1978, el populismo se presentó como la apelación al pueblo por encima de las clases, que organizaba las “interpelaciones popular-democráticas como un

conjunto sintético-antagónico respecto de la ideología dominante” (Laclau, 1978: 201). Como parte de las contradicciones de la formación social, el discurso que contenía la interpelación debía formarse como un conjunto sintético (con *ciertos* límites y coherencia internos) y antagónico (no como una diferencia, sino como opuesto al BEP). Siempre era una clase (o fracción de ella) la que articulaba las interpelaciones populares, tratando de darse existencia político-ideológica. Es decir, alguna clase, fracción o conjunto de ellas, era la que organizaba las interpelaciones con componentes populares-democráticos para oponerlas al actual BEP: tal era el modo específico de modificar una hegemonía previa, o su crisis, es decir, de actuar políticamente.

Laclau iniciaba su recuperación de las nociones de Gramsci para pensar la política. Refería a la hegemonía como la articulación que una clase realizaba en el discurso político de las contracciones e interpelaciones no clasistas, absorbiendo el contenido del discurso de las clases dominadas: no era uniformidad, sino articulación, por lo que había espacio para la disputa (Laclau, 1978: 188-189). Afirmaba entonces que las clases dominantes realizaban esta operación desde el Estado como polo de unificación, mientras que la historia de las clases subalternas se mantenía dispersa. Proponía como lógica de construcción hegemónica para la clase dominante la anulación de las interpelaciones clasistas antagónicas como puras diferencias, neutralizándolas al interior de un discurso.³⁴

En una temprana recuperación de la propuesta, De Ípola le criticó su énfasis en las condiciones de producción de los discursos (desde una clase), olvidando tanto el contexto de recepción como la distancia entre ambos (de Ípola, 1979, 1982). Analizando el peronismo, señalaba dos problemas que serán centrales para nuestro análisis: los intentos fallidos de organización de las clases populares y las políticas de Estado por parte de Perón (de Ípola, 1979: 123).³⁵ Si los primeros desorganizaban y dificultaban la articulación de una interpelación nacional popular, lo segundo daba fuente de credibilidad tangible a la articulación discursiva realizada desde el Estado. En la misma línea, de Ípola y Portantiero (1981) le criticaban la discontinuidad existente entre

³⁴ Esta práctica de anulación, contención y modificación de las interpelaciones subalternas ha sido tematizada teórica y metodológicamente, siguiendo a Therborn, en Balsa (2006) y Thwaites Rey (1994).

³⁵ Llamativamente, el mismo sesgo se puede detectar en otra interpretación muy difundida y relevante del peronismo, la de Puiggrós. Allí también se desestima completamente el lugar ocupado por el líder al momento de constituir el proceso político (Puiggrós, 1969).

populismo y socialismo, pensado como democratización radical (según dirían más tarde Laclau y Mouffe), por la capacidad del Estado de quitar la iniciativa a los sectores populares, reconduciendo el proceso discursivo en canales institucionalmente aceptables en términos del régimen de explotación y de dominación (en términos semejantes, ver Dussel, 2001; Mazzeo, 2011, y Vilas, 1994). Las posibilidades abiertas a partir del lugar de enunciación marcarían una diferencia clave para comprender las posibilidades mismas de su éxito frente a otros posibles procesos articularios.³⁶

Según señalaban Aricó (2005) y Portantiero (1981), el populismo expresó la manera concreta-histórica de irrupción política de las masas populares, como parte de una totalidad que involucraba fracciones de las clases dominantes. Es decir, no en oposición, sino en conjunción. Este elemento sería constitutivo de la memoria de las clases populares. Es decir, la irrupción como populismo expresaba un dato estructural de la organización política e ideológica de las masas populares, y como tal, era la forma concreta para entender las clases en el país. No se podía comprender los sectores populares sin pensarlos en relación al peronismo.

Los siguientes aportes de Laclau (Laclau y Mouffe, 1987; Laclau, 1993, 2006c) abandonaron de modo creciente las referencias clasistas, en un pasaje a un constructivismo más radical.³⁷ La recuperación de los aportes de Schmitt (2001) sería central en este descentramiento, al modificar la comprensión de la política. Se omitieron así los llamados de atención de de Ípola y Portantiero: el Estado se convirtió en “una arena más” (Laclau y Mouffe, 1987: 161), perdiendo toda especificidad. El Estado era pensado como la asociación política por antonomasia, pero no la única: la distinción amigo-enemigo, basada en la decisión de la voluntad e infundamentada (sostenida en última instancia por la fuerza) sería el fundamento del orden político (Franzé, 2012). La política, entonces, ya no será reductible al Estado, dejará de tener una “instancia” específica, para ser coextensiva del espacio social mismo; incluso más

(...) se podría decir que como la política es lo que da forma a la propia sociedad, en verdad no se circunscribe a ella, sino que la desborda o, más

³⁶ Se ha señalado la asimetría lógica en que incurren estos autores, al tomar en consideración los populismos “realmente existentes” y compararlos con los “socialismos utópicos” (Balsa, 2010b)

³⁷ Se ha criticado a Laclau que en este pasaje abandonó un materialismo economicista para pasar a un formalismo politicista (Dussel, 2001; Meiksins Wood, 2000).

apropiadamente dicho, se encuentra en un nivel diferente de esta, inconmensurable, en tanto es capaz de configurarla (Franzé, 2012: 77)

Se producía así una pluralización de los sujetos políticos (ya no sólo las clases sociales), basada en los supuestos ontológicos de apertura de lo social e imposibilidad de fijación permanente de las identidades. Según esta perspectiva, la sociedad no existe: toda la realidad social se asienta sobre una dislocación que es constitutiva, que le impide cerrarse como totalidad estructurada. Haciéndose eco de la reflexión heideggeriana, la realidad –como ente- se volvía una quimera sólo aprehensible a través de categorías significantes, una operación tan ineludible como necesaria. Por eso, la realidad es discursiva, o no es: no tenemos otra forma de actuar en ella, de aprehenderla.

Todo orden político sería, en definitiva, un intento de suturar esa dislocación originaria. La construcción discursiva de un posible orden tiende a sostenerse mediante la traducción de la experiencia de la dislocación como un antagonismo: algo o alguien impide que la realidad persista como un orden previsible, introduciendo un conflicto constitutivo. Pero ese antagonismo, contra lo que suponía el marxismo, no tendría sustento en ninguna contradicción fundamental: porque contradicción (categoría lógica) y antagonismo (categoría política) no son lo mismo. Lo político aparece entonces como una “domesticación de lo real”, que no termina nunca de ser contenido en el discurso: lo político es la disputa por la conformación de un orden. En tanto esa disputa siempre se origina en una *parte*, la operación de sutura parcial y contingente del orden es siempre de tipo hegemónica.³⁸

La hegemonía en Laclau (2006c) se define como la particularidad que asume la representación inconmensurable de la totalidad inalcanzable; es la sinécdoque, la parte que se pasa por el todo. Ya no habría remisión a clases fundamentales –como el autor planteaba en 1978-, pues las identidades políticas no son fijas; o, lo que es más, la política misma se trataría de la construcción de identidades (Errejón Galván, 2012a). La construcción de hegemonía requiere del vaciamiento tendencial de significantes, que puedan operar como superficie de inscripción de demandas múltiples. La lógica de equivalencia permite esta confluencia de demandas en una misma cadena de solidaridad,

³⁸ Retamozo y Muñoz (2013) identifican acciones no hegemónicas en la política (por ejemplo, las corporativas). Su lógica, justamente, impide que constituyan un orden político, aunque formen parte del mismo. Sobre la relevancia del antagonismo en este planteo, ver (Retamozo y Stoessel, 2014).

cuya discursividad propone un orden político. En esta última obra de Laclau se propone que este vaciamiento ocurre sobre la figura de un líder como significante capaz de permitir la confluencia de demandas. Esta hegemonía nunca podría suturar el espacio social, ya que lo real siempre emergería, desbordaría toda simbolización, y los sujetos se las ingenian para conservar alguna capacidad de resistencia (Balsa, 2010a).

La operación hegemónica se logra a través de la *articulación*, que es aquella práctica que establece una relación tal entre los elementos que modifica la identidad de los mismos (Laclau y Mouffe, 1987: 119). En este sentido, se trata de un proceso denso, que requiere lograr una interpelación efectiva entre los sujetos políticos involucrados. La construcción de hegemonía sería, justamente, el resultado exitoso de una articulación. El formato populista de articulación, en cierta forma, se encuentra presente en toda política democrática, que requiere de la construcción del sujeto democrático que sustente el proyecto político (Laclau, 2006c). Toda articulación que busca enlazar el todo desde la posición de una parte -que se visualiza como antagónica con otra parte-, implica una construcción hegemónica, que, según Laclau y Mouffe (1987: 157), para debe presentar fuerzas antagónicas y fronteras inestables separándolas.

Su propuesta teórico-metodológica desplaza la unidad básica del análisis de las clases –o los sujetos, más en general- a las *demandas*, consideradas como las peticiones y reclamos ante un orden político reconocido, sostenidas por sujetos diversos. Las demandas democráticas –satisfechas o no- son tramitadas separadamente, bajo una lógica diferencial (que privilegia la particularidad), típica del planteo institucionalista. La insatisfacción sistemática de algunas demandas puede dar lugar a un principio de equivalencia entre sí, dando forma a demandas populares que se erigen ante un orden que parece excluir a los grupos demandantes de la comunidad legitimada.

Ese principio de equivalencia, frente a un orden institucional que tramita separadamente las demandas específicas, constituye la base de identificación mutua de una parte de la comunidad: comienza a erigirse como sistema estable des significación. Para que esta identificación cobre sentido, es necesario que alguna de las demandas se vacíe de significado (pierda cierta precisión, si se quiere) para poder contener a las demás. Este proceso de articulación de demandas insatisfechas define una posición popular (Laclau y Mouffe, 1987), base del populismo. Se ha señalado que no sólo la

insatisfacción de demandas permite el principio de equivalencia (lógica de lo universal), puesto que a través de la emergencia del líder que representa, como efecto socialmente productivo de nombrar, y un gobierno que tramita demandas, pueden confluir actores que se identifican parcialmente con el mismo proceso (Orsini, 2007).

Las pre-condiciones para el populismo serían entonces (Laclau, 2006c):

- a. La formación de una frontera interna antagónica, separando al “pueblo” del “bloque en el poder”: los límites de la formación discursiva populista no coinciden con los de la comunidad política, una parte se erige como totalidad;
- b. La articulación equivalencial de demandas que hacen posible el surgimiento del pueblo, al menos como vaga solidaridad. Para esto es necesario que alguna demanda se vacíe tendencialmente de significado para ser superficie de inscripción de otras; así, demandas que no tenían nada en común –salvo su insatisfacción- se comienzan a articular;
- c. La unificación de las demandas en un sistema estable de significación, que es el que constituye la identidad popular como algo más que sus partes (demandas): por el mismo efecto de nombrar, se produce una inversión, donde aquello que era residuo de sentido comienza a ser fuente.³⁹ La aparición del líder tiende a estabilizar el discurso en cuestión.

A diferencia del planteo de 1978, la articulación no se hace desde ninguna clase: es un proceso formal, sin sujetos pre-definidos. De este esquema formal resulta difícil, sino imposible, identificar un proceso como populista de otro que no lo es: el populismo es la forma de acceso a la ontología de la política (Laclau, 2006c: 10). En este sentido, se produjo así una discutible expansión semántica del populismo a toda la política, a toda construcción de hegemonía, y a la democracia misma (Aboy Carlés, 2001b; Balsa, 2010b; G. Pereyra, 2012).⁴⁰ De hecho, Laclau –y Mouffe- pasaron a problematizar la radicalización de la democracia como programa, antes que el socialismo como horizonte (como ocurría con la teorización previa): el contenido mismo de la democracia se ve

³⁹ Laclau (2006a, 2006b) ha insistido con la importancia del liderazgo como forma específica de representación en esta articulación, en la medida en que permite una identificación creativa entre representantes y representados que una articulación burocrático-administrativa no sería capaz de lograr. El líder puede ocupar el lugar del significante tendencialmente vacío de significado: las demandas confluirían en el líder, logrando reconocimiento mutuo en virtud de ello.

⁴⁰ La figura del pueblo y el líder que dicotomizan el espacio social señalarían un límite a la homologación entre populismo y política, según Biglieri y Perelló (2007).

alterado a partir del juego democrático, superando la base de reglas que el liberalismo acepta como procedimiento.⁴¹

El populismo se caracterizaría por una identificación antagónica frente a aquellos elementos identificados como “enemigos del pueblo”, logrando así una equivalencia de demandas al interior del campo popular. Se puede señalar con Balsa (2010b), que se superponen dos operaciones. La primera es la inclusión radical dentro de la comunidad política (*demos*), mientras la segunda donde los sectores agraviados (pueblo bajo, la *plebs*) ahora incluidos, especialmente en el discurso oficial, son validados como los legítimos representantes del pueblo soberano (*populus*), fundamento de la democracia. La vocación de inclusión de los relegados se estructura como la búsqueda por profundizar la democracia, sustantivarla, poniendo así sobre la palestra una intención refundacional altamente disruptiva. Esta superposición entre *plebs* y *populus* forma parte central del populismo. El gobierno populista, nacido de la ruptura al orden institucional previo, realiza una operación de relectura de toda la historia, para fundar en el discurso una narrativa que dé coherencia a su vocación: la nación democrática ha sido siempre relegada por los poderes contenidos dentro de la comunidad política, a los que hay que neutralizar para poder finalmente lograr el destino de unificación nacional.

Pero para hacer creíble el discurso, las demandas tienen que ser en efecto atendidas. Tramitar las demandas de modo diferencial (una a una) es lo que hace el liberalismo, pero el populismo, en el gobierno, necesita mantener la división del campo social, necesita reactualizar la ruptura interpelando a los sectores populares. Pero esto implica la imposibilidad de definir un “bien común”, lo que hace que el populismo necesite reforzarse hacia “adentro”, reactualizando la ruptura. Justamente, Aboy Carlés (2005, 2010) propone entender al régimen populista como aquel que administra de modo permanente y abierto las tensiones entre ruptura (refundación) y estabilización (continuidad), especialmente fuerte respecto de la institucionalidad liberal, entre la parte y el todo (*plebs* y *populus*), entre ruptura y sutura, hegemonía (homogeneizar el espacio político) y reafirmación particular (la diferencia propia), entre división excluyente de la

⁴¹ Dussel (2001: 196) se pregunta, irónicamente, si esto no reproduce un nuevo etapismo, ahora político: sería necesaria una democracia procedimental a la cual radicalizar para volver una democracia popular.

comunidad y regeneracionismo del enemigo. Estas tensiones son la marca del populismo como proceso, según comprenderemos en esta investigación.⁴²

Sin lugar a dudas, los planteos de Laclau permitieron renovar la comprensión de los procesos políticos, guiados por la construcción de identidades hegemónicas. Señalamos brevemente algunas polémicas relevantes. En primer lugar, afirmar el papel performativo del discurso permite superar la distinción estructura-superestructura, elaborando un constructivismo político de gran alcance explicativo. Sin embargo, no se puede exagerar los alcances de este logro: como explicamos (sección 1.2.1), este pasaje ya había sido realizado por Gramsci, quien sin dejar de ser un constructivista político, admitía la existencia de condicionantes de la realidad sobre el discurso (Ives, 2005). Dussel (2001) ha criticado la omisión de marcos de referencia en el análisis del discurso propuesto por Laclau. Balsa (2010a), por su parte, ha llamado la atención sobre la atribución exagerada del rol del discurso en la constitución de realidad, siendo que se trata de un conjunto de relaciones semánticas en disputa, que ordenan la realidad, pero no la constituyen. En este sentido, la propuesta de Laclau nos deja relativamente huérfanos a la hora de analizar los discursos porque oblitera: a) la dimensión polémica de los discursos en pugna (sincronía); b) los marcos de referencia de los discursos, esto es, b.1) las condiciones de enunciación; b.2) las condiciones de recepción de los discursos; c) la dinámica procesual de configuración de los discursos (diacronía), que no se reduce al efecto retroactivo de la nominación. Aún cuando sin tener objeciones ontológicas –la realidad está mediada por la significación– nos resulta un problema metodológico la aplicación de sus categorías a la realidad (ver siguiente sección).

En segundo lugar, se ha cuestionado la relativa subteorización de las limitaciones a la interpelación de los sujetos, quedando su identidad indeterminada a incontables reconstrucciones. Esto oblitera estabilidades más difíciles de alterar, como las basadas en la memoria, el imaginario y su impacto en el componente mítico de las identidades, y la perspectiva de la tradición (Aboy Carlés, 2001a; Aibar Gaete, s. f.; Balsa, 2010b). En

⁴² Según Aboy Carlés (2001a), el fuerte respeto de la institucionalidad democrática procedimental a partir del regreso a la democracia habría anulado la existencia de nuevos populismos: no se pone nunca en juego real la exclusión de adversarios debido al respeto a la pluralidad. La redefinición del *demos* estaría, por tanto, limitada por esa institucionalidad, y en particular, la frontera de los DDHH. De nuestra parte, aún con una reducción del espacio de variación, creemos que la presencia del juego de tensiones arriba descrito permite seguir hablando de populismo.

rigor, la categoría de sedimentación podría sortear relativamente esta indeterminación dentro del planteo mismo de Laclau: aunque no podemos decir *a priori* qué peso particular tendrá cualquier elemento en cada reconstitución identitaria, se acepta la existencia de persistencias remanentes de procesos de identificación previos.

Pero aún así no queda claro cómo operarían en este marco las relaciones de poder para organizar discursos. Se hace relevante recuperar la noción de clase social, toda vez que no la reduzcamos a su versión economicista: no parecen ser iguales las posibilidades de las distintas clases de interpelar o ser interpelada por diferentes discursos. Existen contradicciones estructurales –económicas y políticas– que condicionan las constituciones identitarias, aun cuando no las fijen de modo estable, completa ni total: tras la crítica al reduccionismo economicista, se produce una indeterminación absoluta de las identidades, sujetas a la contingencia casi total (Balsa, 2010b; Bensaïd, 2004; Isaac, 1987a). Por supuesto, ninguna contradicción tiene relevancia alguna en las identidades políticas si no es estructurada en un discurso que le dé sentido, permitiendo su “traducción” en cierto antagonismo. La discusión es, justamente, que esas contradicciones tienen influencia persistente en la constitución de identidades, y esto es relegado en un afán de formalismo anti-fundamentos (Dussel, 2001).

En tercer lugar, por lo anterior, resulta llamativo el tratamiento que se hace de las clases en el estudio del populismo. Toda vez que el populismo divide la comunidad política, parece asumirse –sin discutirlo ni analizarlo– que la *plebs* reúne a todos los relegados, sin mácula de privilegios, y se opone a un bloque en el poder sin fisuras. La escisión populista apela de modo oblicuo a las clases dominantes y las populares, y esto es indistinto en Laclau. A menos que se predique algo concreto de la *plebs*, el esquema completamente formal del populismo está en problemas, y debe recurrir a metáforas o juicios *ad hoc* sobre los actores concretos que se presentan. Claro que esto no significa definir un sujeto popular / *plebs* siempre igual a sí mismo, que sólo debe esperar al momento adecuado para presentarse en escena, algo que simplemente no ocurre. Ni tampoco aceptar que toda presencia pública de desplazados, de relegados, sea automáticamente una operación hegemónica populista. ¿Hay alguna relación entre la *plebs* y la clase trabajadora? ¿La hay entre el bloque en el poder desplazado y la clase dominante? ¿Hay paralelos, discontinuidades, inconexión o qué?

En cuarto lugar, la crítica de Laclau al marxismo en favor del constructivismo incurre en otro exceso. Aunque sin afirmarlo abiertamente, todo su planteo da lugar a aceptar como supuestos: a) que se puede distinguir la economía de la política como esferas con lógicas no sólo parcialmente autónomas sino independientes; b) sostener que el capital es sólo una fuerza determinante en la primera esfera; y que por ello c) la lógica ineluctable del capital produce la posibilidad de desarrollar leyes tendenciales en la economía, que no aplican a la política, reino de la contingencia. La aceptación de la economía de mercado como equivalente a modo de producción capitalista es un error significativo, muy difundido entre pensadores sociales. Pero resulta necesario considerar la lógica del capital como unitaria, expresada en momentos distinguibles, de los cuales la economía y la política son dos relevantes (Bonnet, Holloway y Tischler, 2005). *La idea misma de una economía autorregulada sólo tiene sentido mediante una intervención discursiva que así lo interprete*: las prácticas económicas reconocen una variación muy amplia, y su ordenamiento significativo como tendencias es una herramienta heurística (Jessop, 2008). Es decir, también se podría hablar de la contingencia en economía, y esto no implica abandonar la idea de regularidades. Ahora bien, las relaciones económicas, sin ser ninguna “última instancia” (*deus ex machina* del estructuralismo antihistórico), son condicionamientos de las relaciones políticas –y viceversa. Ambas presentan regularidades, a pesar de estar abiertas al cambio.

Una forma particularmente regular de las relaciones políticas es, ni más ni menos, que el Estado, que establece la quinta polémica. Resulta problemático de definir al Estado “como una arena más”: no son iguales las posibilidades de acceso y control de las distintas clases al aparato de Estado, y no es igual la capacidad de interpelar y modificar las condiciones de recepción de las interpelaciones teniendo la posibilidad de sostener políticas públicas como sustrato de las mismas. De aceptar que el Estado tiene una incidencia particular en las disputas políticas, y omitir una discusión precisa, la postura parece resolverse en un planteo instrumental (ver sección 4 del capítulo 2).

Existen otras discusiones con los planteos de Laclau, para los cuales remitimos a la bibliografía especializada. La intención de resaltar estos 5 campos polémicos tiene que ver con los sesgos que introducen en las interpretaciones del kirchnerismo como populismo, que se desarrollan a continuación.

1.3.2. El kirchnerismo como ruptura populista

Pensado como un proceso político, una parte de la bibliografía explica el kirchnerismo como populismo, representando una ruptura respecto de la lógica institucional que lo precedió. Las categorías desarrolladas en el anterior apartado forman el acervo teórico de estos estudios. En este sentido, si bien algunos estudios que retoman ideas sobre el populismo centrado en rasgos como el personalismo o la política de distribución del ingreso (Castorina, 2009; Lieberman, 2011), no creemos que tales trabajos aporten a la interpretación más que elementos particulares. Los estudios postfundacionales, llamativamente, escasean respecto del gobierno de Cristina Fernández, enfocándose en la ruptura original producida con la asunción de Néstor Kirchner.

Esta bibliografía enfatiza la importancia de la construcción discursiva de identidades, entendiendo por discurso toda práctica socialmente significativa y no sólo la palabra hablada. A pesar de esta aclaración, la mayor parte de los estudios efectivamente se enfoca sobre la palabra del presidente Néstor Kirchner y, en menor medida, de la presidenta Cristina Fernández, dando cuenta de la estructuración que en ella se realiza de la realidad, pero abandonando relativamente las condiciones de recepción (de Ípola, 1979, 1982) que hacen tal discurso creíble, o –más precisamente- capaz de interpelar eficazmente sujetos sociales.⁴³ Al aceptar la formulación presidencial como la estructuración discursiva compartida por la mayoría, se asume una (válida) dimensión creativa de la representación, que debe constatarse en términos de la relación: ¿qué es lo que da validez a esa relación de representación, sólo el voto? Por la definición de la que se parte, se busca encontrar los “puntos nodales” que permitan estructurar internamente el discurso -descentrado de los sujetos-, obliterando los aspectos disruptivos, conflictuales y de exterioridad que existen en las prácticas discursivas reales.⁴⁴ No hay tampoco en estos estudios una incorporación sistemática de otras prácticas socialmente

⁴³ La labor teórica de Laclau muestra un elevado grado de abstracción, que dificulta su aplicación empírica y ha llevado a algunas premuras metodológicas (Grosso, 2009; Patrouilleau, 2010). En todo caso, el propio Laclau (2006c) ha advertido sobre la necesidad de considerar ampliamente estas condiciones de recepción del discurso. Sintomáticamente, no contamos con ningún estudio empírico del propio Laclau sobre el kirchnerismo, más allá de ciertas declaraciones a la prensa (Laclau, 2011).

⁴⁴ Así, por ejemplo, en los casos en que se amplía el espectro de “voces” a considerar (como genuinamente lo hace Biglieri, 2007), se remite a agrupaciones afines al gobierno, omitiendo eventos, políticas públicas y dichos –tanto de agrupaciones opositoras como del propio gobierno- que contradicen la coherencia del discurso oficial.

significativas, como ciertas políticas públicas: éstas con recuperadas (lo cual es acertado), pero sin ninguna lógica clara, tendiendo a incorporar sólo aquellas que guardan coherencia con la narración oficial.

La caracterización del período de crisis previo suele ser muy general, sin dar cuenta de la lógica de la crisis, sino más bien enunciando síntomas de la misma. Tal es el caso de los rigurosos trabajos de Barbosa (2012) o Biglieri (2007). Allí la crisis aparece ante todo como la ruptura de la lógica de articulación previa, ligada a la idea de estabilidad (Barbosa, 2010; Fair, 2009b). La estabilidad (política, económica, etc.) habría operado como significativo vacío capaz de articular demandas, estableciendo una frontera discursiva sobre la cual se definía el campo de equivalencias: por un lado, todos los que aportaban a esa estabilidad, y por el otro quienes la amenazaban. A medida que se acumularon demandas no satisfechas por el sistema institucional, se generó un descontento generalizado, que acabó por poner al régimen mismo como obstáculo para la obtención de respuestas: el punto nodal “Convertibilidad” como expresión de tal articulación quedó desestabilizado, y apareciendo como un “enemigo” que facilitó la interpretación de demandas dispersas como equivalentes entre sí. Se trazó de esta forma una nueva frontera por oposición al régimen, nucleando demandas sin relación necesaria entre sí, aunque contiguas en la oposición al gobierno (Biglieri, 2007). El “que se vayan todos” emergió como significativo bajo el cual proliferaron demandas de distinto cuño.

Tras el estallido de la crisis –que, insistimos, no se explica sino que se describe– el esfuerzo de Eduardo Duhalde no habría sido más que un “intento frustrado” (Barbosa, 2012: 39, Muñoz, 2010: 204), dejando abierta hasta la llegada de Néstor Kirchner la posibilidad de dar identidad a la acumulación de demandas postergadas (trabajo, mejoras salariales, planes sociales, lucha contra la corrupción, juicio y castigo por los derechos humanos, entre otras). Por un motivo no explicado, Duhalde no pudo erigirse en representante, en líder, a pesar de ser responsable de gran parte de los cambios en las políticas públicas y en el mismo discurso (ver capítulo 4). Kirchner apeló al uso de un discurso “llano”, que disminuyera la distancia respecto de sus receptores: utiliza un habla familiar, expresiones coloquiales, refranes, dichos populares, anécdotas, alusiones

deportivas.⁴⁵ Kirchner se encargó, como líder, de expresar estas demandas bajo la polarización con el pasado reciente. Así, consolidó una historicidad que iba desde la dictadura hasta el menemismo como una continuidad del proyecto neoliberal, origen de todos los males, trazando una frontera clara respecto de ese pasado ignominioso y el proyecto que él encarnaría (Barbosa, 2012; Bitonte, 2010; Donot, 2012).

El neoliberalismo se conformó en un significativo capaz de reunir ideas, actores y valores a los que el nuevo proyecto se oponía antagónicamente: el FMI, los acreedores de la deuda externa, el menemismo, las fuerzas armadas como violadoras de los derechos humanos, la Iglesia católica, la especulación financiera, la corrupción, el cortoplacismo, etc. (Barbosa, 2012; Biglieri y Perelló, 2007; Patrouilleau, 2010). Al trazar una frontera respecto del neoliberalismo y el pasado, Kirchner produjo un efecto de identificación con quienes habían protagonizado la disputa con el régimen de la Convertibilidad (Retamozo, 2011). Garzón Rogé (2009) muestra cómo el discurso de Kirchner forjó tal identificación con el uso de estrategias discursivas basadas en figuras retóricas incluyentes: elaboró un “nosotros” a veces inclusivo, a veces ambiguo, que acabó por permitir presentarse a sí mismo como el hombre humilde, común que llega a un lugar extraordinario –lo que reforzó su lugar de *outsider* que encarnaba la renovación del espacio político. Canoni (2007) y Guerrero Iraola (2011) resaltan cómo a poco de llegar al gobierno, esto se expresa en gestos (como bajar los cuadros de Videla y Bignone en la ESMA) y políticas (como la derogación de las leyes de obediencia debida y punto final, llamadas “leyes de impunidad”, y los indultos) que hace “denso” ese nosotros, pasando a elaborar un discurso basado en la memoria (en lugar de privilegiar el “perdón” o la “reconciliación”). En el plano exterior, Kirchner apeló a una cierta identificación latinoamericanista, inscribiéndose como parte de los procesos políticos reseñados en la sección 1.1 (Patrouilleau, 2010).

La figura misma de Néstor Kirchner fue configurándose como un significativo vacío alrededor del cual se podían agrupar sujetos sólo reunidos por oposición al neoliberalismo. El presidente fue afirmando su condición de líder a través de recursivas operaciones de identificación. Proporcionó una narración que permitía hacer inteligible

⁴⁵ Ésta es *exactamente* la descripción que De Ípola (1982) hace del discurso de Juan Domingo Perón, explicando su capacidad de interpelar al pueblo. Por una comparación entre peronismo y kirchnerismo en relación a usos, hábitos y gestos populares recuperados desde el discurso oficial, ver Barbieri (2007).

la historia, un relato daba carácter duradero a la identidad, haciendo síntesis de lo heterogéneo, forjando la cadena de equivalencias (Patrouilleau, 2010). Es decir, la operación de leer la historia previa formó parte central de la articulación. Pero no todo es pasado: ante la miseria y crisis que éste representó, Kirchner remitió permanentemente a un proyecto por hacerse, el proyecto que él venía a encarnar. Esta intención de completar la promesa de la nación, habría sido sistemáticamente interrumpida por actores que continuaban amenazándola hasta el presente, actores que ponían en cuestión la patria misma (Donot, 2012; Garzón Rogé, 2009; Patrouilleau, 2010).

Aparece entonces una dimensión central en la definición del kirchnerismo como articulación populista, y es la convivencia de una comunidad escindida: al tratar de representar el proceso que subsanaría el agravio recibido por aquellos “que no eran parte”, aquellos que el régimen dejó insatisfechos permanentemente por no tramitar sus demandas, el populismo se enfrentó al problema de querer representar a toda la comunidad, pero a la vez reconocer que no todos eran parte de ésta. En otros términos, se trató de una articulación hegemónica, donde una parte buscó representar al todo, siendo a la vez parte y todo: el pueblo como plebe (*plebs*) y como ciudadanía (*populus*). En el discurso kirchnerista convivió la utopía de una Argentina unificada con la imagen de “dos Argentinas”, donde estaban los agraviados y los que agravian (Barbosa, 2012). Permanentemente se excluyeron intereses y demandas particulares, por desafiar la construcción colectiva, pero se reconocía a todos como actores de un mismo proyecto. Esta superposición entre parte y todo, entre la exclusión y la regeneración, es característica central para definir al kirchnerismo como populismo.

Kirchner mismo responderá al doble sentido de las demandas expresadas en la crisis de 2001. Por un lado, frente a las demandas postergadas que las organizaciones sociales habían puesto sobre el horizonte, Kirchner llamó a la solidaridad y apeló a la construcción de un modelo inclusivo. Es decir, explícitamente buscó coligar demandas dispersas bajo un mismo proyecto: solidaridad e inclusión como ejes de esa convergencia. Por otro lado, ante la demanda de normalización y orden, de gobernabilidad frente al caos, Kirchner la articuló con un discurso de reformas ciudadanas y el llamado a un capitalismo “normal, serio” (R. Gómez, 2012; Rajland, 2012, Schuster, 2008). Se superponían así lógicas equivalenciales y diferenciales de

tramitación de las demandas (Barbosa, 2012), explotando la ambivalencia fundante del populismo que apela al pueblo como parte y como todo (Retamozo, 2011). Se mencionan en la literatura como políticas y gestos que abalan ambas interpelaciones la reforma de la Corte Suprema de Justicia, la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, la política económica heterodoxa, que reivindica la intervención del Estado para regular el mercado, valorando así la política como operación sobre la gestión de lo común (Basualdo, 2006b; R. Gómez, 2012; Lucita, 2013a; Rajland, 2012; Rinesi, 2011; Svampa, 2011).

La apelación discursiva al pueblo permitió reunir bajo un mismo campo a todos aquellos que hubieran sido amenazados por los privilegios de los sectores dominantes. La apelación a la tradición nacional-popular, en particular del peronismo, como la forma específica de la democratización de las masas fue un recurso utilizado por el kirchnerismo, (Barbosa, 2010; Donot, 2012; Patrouilleau, 2010; Rinesi, 2011). Esto permitió interpelar fácilmente a muchas organizaciones que se reconocían en tal tradición (Muñoz, 2004; Retamozo, 2011; Svampa, 2006), creando una primera identificación popular (Patrouilleau, 2010). Esto permite entender la relación del kirchnerismo con las organizaciones populares sin necesidad de sostenerla sobre ideas de cooptación –aunque ésta haya existido (Rajland, 2008).

De hecho, la posibilidad de interpelar eficazmente a sujetos previamente no organizados habría sido efectiva recién a partir del conflicto con el agro en 2008. Cuando se desató esta disputa, a raíz del aumento de los derechos de exportación, las organizaciones rurales que se autoidentificaron con “el campo” facilitaron la construcción de una cadena de equivalencias sobre este significante, asociándolo a oligarquía-dictadura-golpismo-antipueblo (Guerrero Iraola, 2011). Ante tal articulación antagónica, el gobierno se erigía como representante del pueblo, democráticamente electo. Esto atrajo hacia el gobierno a muchos intelectuales progresistas, que se agruparon en *Carta Abierta*. Esta situación se repetiría en 2009 con los debates de la ley de Medios Audiovisuales y la ley de Matrimonio Igualitario, atrayendo hacia sí a personajes de la cultura y artistas (C. Katz, 2013; Svampa, 2011). El gobierno reforzó esta identificación a través de una política cultural activa, a través de la propaganda oficial y la producción de contenidos, tanto en los medios oficiales como en los medios

privados aliados, fortaleciendo la construcción de hegemonía en el campo cultural (R. Gómez, 2012). El evento fortuito de la muerte en 2010 de Néstor Kirchner terminaría por atraer masivamente a amplios sectores de la juventud (Svampa, 2011). Resulta una incógnita cuán intensa ha sido la identificación popular con las ideas, prácticas y símbolos kirchneristas (de Ípola, 2005), pero pocas dudas caben de que efectivamente interpeló a la ciudadanía, dicotomizando el espacio social (Barbosa, 2012).

Creemos que esta apretada presentación permite comprender los rasgos centrales de las interpretaciones post-fundacionales del kirchnerismo como populismo. En resumidas cuentas, se trató de una ruptura discursiva que compuso nuevas identidades – siempre precarias- a partir de la apelación al pueblo, instituyéndose como significativa vacío que permitió estabilizar la cadena de equivalencias formada por las demandas irresueltas por el régimen neoliberal. Se realza la figura de Kirchner como líder popular, intérprete y garante de la articulación populista. Desde el punto de vista de la operación estrictamente política, el enfoque es capaz de dar cuenta de la forma específica que toma la construcción de hegemonía, frente a otras posibilidades de acción. Además, permite considerar como parte de ese “pueblo” construido en el kirchnerismo diversos actores que no admitirían *a priori* una identificación clasista, al menos no sin adjetivos. La dinámica de identificaciones políticas resulta poderosa para explicar el proceso más allá de transacciones utilitarias, en la forma de alianzas, cooptación o prebendas.

Sin embargo, es necesario señalar algunos déficits. En primer lugar, como se insistió, en la explicación del orden político estos estudios no suelen tomar en cuenta el discurso de otros actores. Existen valiosos estudios desde esta perspectiva que son clarificadores para comprender el proceso de identificación política de algunos actores con el kirchnerista (por ejemplo, Moreno, 2010; Perelmiter, 2010; Retamozo, 2011; Schuttenberg, 2011), que son recuperados más adelante. El vacío metodológico y empírico se produce cuando buscan explicar el orden político como tal: ¿bajo qué criterio eligen los agentes que validan el orden político como tal? ¿Qué ocurre con los agentes que cuestionan ese orden, cómo se relacionan con él? Concretamente, veremos en esta investigación, se omite la consideración cuidadosa de las clases dominantes, sesgando el resultado desde el método: la definición del orden político se basa analizar la diada sectores populares-gobierno, omitiendo otros agentes significativos. Para un

enfoque que valora tanto el antagonismo, la dimensión polémica de los discursos tiende a estar muy relegada.

Derivado de lo anterior, vale señalar que hay una escasa consideración de otras prácticas socialmente significativas; y cuando se las incorpora, se lo suele hacer de manera muy vaga, poco precisa, asistemática. En particular, no hay un criterio claro en la selección de políticas públicas y gestos públicos que son significativos en la construcción del discurso kirchnerista. Es necesario agregar, además, que el uso del discurso del gobierno como fuente de validación, tiene que asumir que el líder efectivamente interpela y representa al pueblo, y la única manera que parece garantizar esto es... apelar a los resultados de las elecciones, lo cual parece un regreso no discutido a las lides del institucionalismo que se buscaba superar. Todos estos elementos, si bien son parcialmente una falencia empírica, tienen base en el enfoque teórico, que introduce un reduccionismo equiparable a la crítica economicista: no distingue condicionantes en la estructuración de la realidad por fuera del discurso, o mejor, asume que toda la realidad se subsume a un discurso.

En segundo lugar, aunque es cierto que en la reconstrucción narrativa del relato que construye la identidad kirchnerista no es relevante la cronología histórica, tal aproximación analítica es válida para entender cómo decantó tal identificación *ex post*: si se busca explicar las condiciones de posibilidad de las interpelaciones sucesivas que formaron tal identificación, es necesario observar la historicidad “en el orden que transcurrió”. Es decir, no se puede contestar a la pregunta de cómo construyó la articulación hegemónica omitiendo la secuencia en que ésta ocurrió. No hay en esta literatura demasiadas especificaciones temporales, cronológicas respecto del proceso. En términos generales, pasada la crisis de 2001, la construcción kirchnerista se establece y consolida, alimentada a partir de la reactivación antagónica de la identificación popular en el conflicto de 2008 y los sucesivos. No está claro qué hace posible mantener la interpelación a lo largo del tiempo; por ejemplo: ¿por qué se puede hablar de un modelo productivo, industrializador, cuando esto no se condice con las operaciones estructurales observadas? Esta crítica no debe entenderse como una impugnación al “engaño”, más bien, resulta interesante que exista una identificación política tal que no se someta a pruebas, y pueda sostenerse *contra* la información que la realidad cotidiana ofrece o los

análisis teóricos que de ella se hagan. No estamos pensando en un problema de manipulación, sino que resulta valioso para la explicación de la hegemonía kirchnerista el que esta operación pueda llevarse adelante *incluso* cuando los sujetos políticos sepan que no es necesariamente verdadera.

En tercer lugar, suele faltar una identificación precisa de las demandas pre-existentes a la interpelación populista: ¿quiénes sostenían esas demandas y por qué lo hacían? No trivialmente, la propuesta de pensar al discurso como totalidad impide identificar lugares de enunciación y de recepción, lo cual implica un serio desafío con la mayor parte de la lingüística, que analiza acepta la existencia de posiciones en la comunicación. Sin este análisis, al omitir los sujetos políticos concretos con los que se relaciona, pareciera que el populismo puede interpelar “en el vacío” cuando quiera y a quiénes quiera, algo ciertamente falso. Al respecto de estas identificaciones, los estudios de Muñoz (2004), Retamozo (2011) y Svampa (2011) constituyen los ejemplos mejor logrados de cómo subsanar estas faltas. En los tres casos, se trabaja identificando cuáles son las organizaciones populares que están tematizando el espacio público sin respuesta a sus demandas, cuáles eran sus diagnósticos de la situación, sus propuestas y sus tradiciones identitarias (ver sección 4.2.2 del capítulo 3). Éste es el sustrato sobre el que el populismo actuará.⁴⁶

Así, por ejemplo, es valiosos el hallazgo de Retamozo (2011), respecto de que las organizaciones de derechos humanos (en particular, HIJOS) y el nuevo sindicalismo (CTA) ya habían dado los primeros pasos para forjar las cadenas de equivalentes, vaciando sus demandas de sentido para hacerlas capaces de contener otras demandas, articulando así un conjunto de sujetos políticos de otra forma dispersos. El kirchnerismo recuperó el discurso de los derechos humanos – memoria, verdad y justicia- y la idea de un modelo de crecimiento, productivo e inclusivo a partir de esas articulaciones previas. Asimismo, tanto Svampa (2006, 2011) como Muñoz (2004) muestran cómo el kirchnerismo incorporó demandas de organizaciones identificadas con las tradiciones

⁴⁶ Un conjunto de investigadores ha avanzado en esta línea en años recientes, estudiando la estructuración del discurso en organizaciones populares (Cortés, 2010; Gusmerotti, 2013; Moreno, 2010; Natalucci y Schuttenberg, 2013; Schuttenberg, 2012). Los estudios referidos en la primera crítica también abonan a esta discusión, con sólidos aportes.

nacional-populares, optando por dividir, controlar y contener organizaciones con una impronta autonomista o clasista (ver sección 3.2.2 del capítulo 5).

En cuarto lugar, al no dar cuenta de cómo ni por qué se acumularon demandas insatisfechas (como se dijo, la crisis es descrita, pero no explicada), no es posible explicar por qué algunas de ellas serían atendibles o no, ni tampoco la emergencia de nuevas demandas. La materialidad discursiva del populismo también se restringe en un campo de demandas que acepta como tramitables, como atendibles, excluyendo otras que no puede procesar, aún cuando sean democráticas y provengan de sectores subalternos.⁴⁷ Es decir, la articulación populista también puede dejar (y de hecho lo hace) demandas irresueltas por escapar al rango circunscripto de orden aceptable. ¿De qué depende este rango, este orden? Esta bibliografía no lo analiza.

En quinto lugar, derivado de lo anterior, al tratar diversas políticas aplicadas, estos estudios se enfocan en ver cómo aportan a la constitución o consolidación de la identidad popular, pero no explican cómo opera la lógica diferencial el ordenamiento populista. Aboy Carlés (2005) sugiere que justamente la definición de populismo está centrada en esta tensión de lógicas equivalenciales y diferenciales, nunca resuelta. Esta crítica debe ser matizada por un dato central: al enfatizar cómo aportan a la consolidación de la identidad popular kirchnerista, ofrecen una interpretación valiosa de por qué esta fuerza política se sostiene en la tensión irresuelta. Qué demandas atiende y cuáles relega en cada momento forma parte de la descripción densa del populismo como gobierno, pues explica los movimientos de la frontera interna a la comunidad política.

En sexto lugar, no hay ninguna lectura integrada respecto del espacio que ocupan los sectores dominantes en la construcción hegemónica populista. Esto es un problema no sólo desde el punto de vista de la crítica clasista, sino incluso de la misma construcción de identidades populares: ¿acaso no hay grandes empresarios kirchneristas? ¿Qué los interpela, qué hace posible que ocupen un lugar en esta articulación, cuando claramente no es obvio que se ubiquen del mismo lado de la frontera trazada con el pasado o el neoliberalismo? Como se señaló, esta perspectiva tiene herramientas muy

⁴⁷ Por ejemplo, ¿por qué motivo demandas relativas a la sostenibilidad medioambiental no pueden ser procesadas? La pura desidia de los representantes es una mala explicación: tiene que haber fundamentos estructurales que lo dificulten o impidan (ver Costantino y Gamallo, 2014).

potentes, especialmente para estudiar los procesos de identificación política, pero faltan algunas precisiones para poder pasar a la estructuración de un orden político.⁴⁸

Finalmente, hay un marcado abandono de la discusión del rol del Estado. En este sentido, a pesar de estudiar a profundidad el discurso de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, no hemos encontrado reflexiones que aborden el problema del poder que implica la investidura presidencial, ni por qué ésta tiene mayores recursos de interpelación que otros discursos en disputa con éste.⁴⁹ No son pocos los estudios críticos que recuperan la reflexión de De Ípola y Portantiero (1981) respecto de la capacidad del Estado de quitar la iniciativa a los sectores populares, reconduciendo el proceso discursivo en canales institucionalmente aceptables en términos del régimen de explotación y de dominación (Basualdo, 2006b; Castorina, 2009; Colectivo Situaciones, 2005; C. Katz, 2013; Sanmartino, 2009; Svampa, 2011). La idea del Estado como condensación de relaciones sociales no implica una exterioridad del mismo al proceso político de conformación de la sociedad, y no sería, por lo tanto, necesariamente contradictorio con los presupuestos de este enfoque.

1.4. Recuperación de conjunto

Los estudios referidos en la sección 1.1 inscriben al kirchnerismo en un proceso socio-político más amplio: la modificación de las coordenadas de referencia de la región. Estas nuevas coordenadas fueron elementos que el propio kirchnerismo enalteció, al identificarse como parte de un proceso general. En parte, el relato histórico propuesto por el gobierno movilizó como polo de identidad la nación ya no sólo como sus formaciones existentes (Argentina) sino como una promesa mayor, la de la región. Aunque la apelación kirchnerista dista de agotarse en esta matriz, esta referencia discursiva se materializó en prácticas concretas, como la institucionalidad de integración

⁴⁸ El excesivo énfasis en los gestos del gobierno hacia los sectores populares, parece relegar la importancia que tuvo el apoyo de la gran burguesía para el kirchnerismo. Así, se esconde el rol de una parte de las clases dominantes en la ruptura populista, haciéndola coincidir, sin más, con una lectura ya no política sino sociométrica: la de representar un sector social específico, el compuesto por las posiciones de clase confluyentes en lo popular. Sobre el salto del populismo a “lo popular”, ver Aboy Carlés (2012).

⁴⁹ Por ejemplo, se dice que “es el ‘pueblo argentino’ quien ha ‘tomado las cosas en sus propias manos’, ya que ha aceptado la responsabilidad de ejecutar directamente las decisiones de las cuales además es partícipe” (Biglieri, 2007: 80), soslayando la posición subordinada de las organizaciones populares en la toma de decisiones, y el peso de sus propios discursos frente a la palabra enunciada por el presidente.

regional creada o los acuerdos de intercambio mutuo (clave, por ejemplo, para la etapa previa al canje de deuda de 2010).

En este sentido, esta bibliografía abona al énfasis sobre una trayectoria novedosa en el set de políticas, respecto del pasado reciente (mayor importancia del Estado como regulador o productor, aumento de la participación asalariada en el ingreso, protección industrial, mayor relevancia del mercado interno, entre otras). Asimismo, resalta la importancia de la crisis de representación, expresado en crisis política y movilización social. El “giro a la izquierda” compone pues un dato no trivial de la interpretación del kirchnerismo: al ponerlo en una perspectiva más amplia, es posible postular la existencia de elementos comunes que explican *en parte* el fenómeno. Si bien no es ánimo de la presente investigación realizar una comparación de los procesos, parece relevante considerar el peso de la situación regional en la constitución del fenómeno nacional: por un lado, en términos de una identificación popular que se generaliza a través de los gobiernos y procesos; y por otro lado, en términos de la señalada institucionalidad, que alimentó las proclamas de soberanía frente a potencias extranjeras.⁵⁰

Sin embargo, de la misma forma en que las dictaduras, las transiciones a la democracia procedimental o el neoliberalismo fueron fenómenos que atravesaron a la región entera, tienen especificidades en cada país que no pueden desmerecerse. Justamente, éste es el principal límite de la propuesta de la literatura del primer apartado. La especificidad del caso argentino no remite a un mero provincianismo, sino a la intención de dar cuenta de los procesos subyacentes a lo que podría ser una imputación causal incorrecta, debida a la unidad de análisis considerada.⁵¹ En esta línea de razonamiento, son claros los aportes de las siguientes dos matrices de estudios, pues no conformes con resultados económicos específicos o características de las políticas públicas, dan cuenta de la intensa actividad de actores y sujetos que da forma al proceso en cuestión.⁵² Las diferencias centrales entre ambas perspectivas –tal como se expresan

⁵⁰ Por ejemplo, la defensa de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas ocupadas por los ingleses, valió un apoyo general de la CELAC, que incluyó medidas coordinadas por los países miembros para prohibir el ingreso a puerto de barcos con bandera de las Falklands (el nombre inglés para las Malvinas).

⁵¹ Así, el “giro a la izquierda” puede ser postulado en algunos países, pero no en otros: la confusión sería generada por la confluencia de elementos comunes y la imputación de causalidad a una mera correlación.

⁵² Muchos de estos actores se ubican en lo que el liberalismo tiende a asociar a la sociedad civil, y que por ello mismo los análisis político y económico estándar abandonan. Nuestra perspectiva, coherente con las

en los análisis, más allá de otras cuestiones teóricas- resultan de los actores considerados, la relación con el proceso económico y el rol del Estado.

En este sentido, el enfoque post-fundacional aporta al menos cuatro ventajas. Primero, considera actores que no son definidos *a priori* en una superficie de interpretación. Esto permite tomar en cuenta el rol de diversas organizaciones que el análisis clasista –sin negar- oscurece. Segundo, esta perspectiva ofrece una interpretación plausible y empíricamente fructífera del fenómeno populista, como *forma* de la dinámica política, que en el análisis clasista suele quedar confundida con cierto resabio de añoranza de teoría de la modernización (propuesto como set de políticas o como remisión a una etapa de desarrollo). La lógica de articulación populista permite comprender las dimensiones de ruptura y reorganización de la comunidad política que el kirchnerismo propone, más allá de los procesos económicos o la acción del Estado. Tercero, es relevante su énfasis en el carácter *construido* del orden político, que implica dar cuenta de la disputa (el momento de “lo político”) por definir el mito trascendental que unifica a la comunidad así como la distribución de roles a su interior. Finalmente, esta perspectiva alienta el estudio de los discursos como forma de aproximar la interpretación que los agentes hacen de la realidad en la que actúan.

La perspectiva muestra también algunas limitaciones. Así, su énfasis en la creación de identidades de alguna manera soslaya la persistencia de ciertos agentes en el campo político, oscureciendo incluso la presencia central de agentes definidos por su identidad clasista. Adicionalmente, el análisis del discurso, como totalidad articulada, suele limitarse al análisis de actos de habla, eludiendo la incorporación consistente de dimensiones de la realidad (como los procesos económicos y, en menor medida, los institucionales). En este sentido, suelen relegar en el análisis –no su mera mención- la dinámica del PRE, de las políticas públicas y de las alianzas entre agentes. En este sentido, se relega la importancia que tiene para la constitución del kirchnerismo su estructuración polémica entre agentes en disputa, y los alcances de su interpelación enunciada desde el aparato estatal frente a otros posibles procesos articulatorios.

referencias teóricas propuestas, no acepta esta división de la sociedad más que como recurso analítico (ver capítulo 2). Y como tal, cuando resulta ineficaz para explicar, debe ser abandonado.

La matriz marxista puede pensarse –con ciertos límites- como complemento para las omisiones de la matriz post-fundacional. En este sentido, su reconocimiento de agentes de clase, el rol del Estado a través de las políticas públicas, y su relación con el PRE, permiten incorporar los aspectos soslayados. Como reverso de su foco de atención, omite aquello que la otra matriz teórica permite ver, tal como señalamos párrafos atrás.

Estas posibles confluencias complementarias no deben oscurecer ni negar discrepancias fundantes de las matrices en cuestión. Por referir a dos categorías centrales de esta investigación, las distancias no son mínimas. Respecto del populismo, mientras la matriz clásica lo asocia a un set de políticas, una etapa histórica, o a una operación de engaño, la matriz post-fundacional lo entiende como forma del proceso político. Respecto de la hegemonía, esta segunda matriz entiende que este tipo de operación existe toda vez que una parte busca representar a la totalidad, por la operación simbólica de trocar la parte por el todo. Por eso, en los análisis empíricos, prácticamente se puede identificar un proceso de este tipo ante cada gobierno que gana una elección. En la matriz marxista, en cambio, la hegemonía define a un tipo de dominación, que combina mecanismos de consenso y coerción. Mientras que los sujetos políticos son resultado de la hegemonía en el primer enfoque, son las clases las que lo hacen en el segundo.

La presente investigación busca llenar esta laguna originada en la falta de diálogo entre enfoques. Reconocemos la existencia de ciertos “ruidos” teóricos en esta confluencia analítica, dado por el hecho de que las perspectivas se construyen sobre supuestos contradictorios: no se trata sólo de “olvidos” sino de ontologías (qué constituye la realidad) y epistemologías (cómo accedemos a ella) diferentes, que suponen prestar atención a distintos agentes, procesos y situaciones. Pero nuestra intención no es enfrentar dos enfoques teóricos entre sí, sino ambos frente a los hechos. La mirada que buscamos construir no es una arquetípico-lineal que parta de la teoría a los hechos sin vuelta atrás: partimos del análisis que las perspectivas teóricamente informadas realizan del kirchnerismo, para buscar de allí una interpretación comprensiva. Nuestra investigación se propone superar los puntos ciegos de las

diferentes perspectivas, haciéndolas entrar en diálogo, evitando sesgos politicistas o economicistas (de los que mutuamente se acusan los enfoques trabajados).⁵³

La discusión del marco teórico debe abordar, entonces, estos puntos de discrepancia para permitir la comparación. Centralmente, encontramos entonces 5 grandes problemas de comparación: i) qué compone la realidad a investigar; ii) cómo abordar el problema de un proceso histórico; iii) quiénes son los agentes políticos a considerar; iv) el tipo de articulación entre la política (hipostasiada en el Estado) y la sociedad en general; y v) qué significa construir hegemonía. Estos son los puntos que sucesivamente se desarrollan en el siguiente capítulo.

⁵³ López (2013) ofrece una excelente revisión bibliográfica, que incluye gran parte de los trabajos aquí referidos, mostrando los sesgos politicistas y economicistas que suelen contener los estudios como *a priori* de la investigación. En su revisión, estos sesgos se combinan de modo novedoso con otra polaridad, aquella que marca énfasis activos sobre el rol del Estado o sobre la sociedad.

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO

El presente capítulo estructura el marco teórico y metodológico de la tesis, discutiendo los conceptos clave para la investigación con fundamento en las discusiones ya referidas.

El punto de partida más básico de la investigación es postular qué compone la realidad que se va a investigar. De acuerdo con la pregunta inicial, corresponde definir qué entendemos por kirchnerismo, y se pueden distinguir al menos tres variantes: i) como el grupo en el gobierno desde 2003 hasta la actualidad; ii) a la fuerza política creada por el nuevo gobierno; o iii) como el orden político estable que define al período. Cada una de estas maneras de entender al kirchnerismo abarca a la anterior, y en nuestro caso, nos interesa indagar la última, es decir, la más inclusiva. Es decir, vamos a estudiar al *kirchnerismo como un orden político*, vigente entre 2003 y, en principio, 2015 (final del segundo mandato de Cristina Fernández).

¿Qué es un orden político? Apoyándonos en las propuestas de Aboy Carles (2001a) y Muñoz (2010), diremos que se trata de *la distribución esperada de posiciones y roles entre los agentes sociales para alcanzar objetivos sociales comunes*. Esto no significa ni que los agentes se ubiquen donde se espera ni que cumplan sus roles como si fueran actores con un libreto o meros efectos estructurales: designa la *expectativa* sobre las tareas a cumplir y quiénes las llevarían adelante. Esa expectativa depende de cuáles sean los objetivos sociales que se buscan alcanzar, objetivos que no son metas perfectamente diseñadas. La sociedad no es una totalidad dada a nuestra experiencia (sección 1), no la percibimos como un todo: definir en cada momento qué nos constituye como sociedad depende de una operación discursiva que propone una imagen unitaria de sí misma, una comunidad imaginada que funciona como mito trascendente (Laclau, 1993). Esos objetivos son una traducción inestable, imprecisa quizás, de esa utopía de rumbo unificado que es la sociedad. El orden político es instituyente respecto de lo social, lo interrumpe proponiendo cierta unidad que lo coligue (Retamozo y Stoessel, 2014). *El orden político es una propuesta de tareas y responsables para que la sociedad alcance su plenitud*, así como una advertencia de las amenazas que la ponen en riesgo.

Esto no implica que se trate de un ordenamiento elegido racionalmente entre opciones predefinidas, que sólo permita establecer trayectorias estratégicas de acción. Se

trata de un resultado relativamente estable de la disputa política entre diferentes agentes (ver sección 3), que pugna por hacer prevalecer sus opciones (de objetivos, de mitos deseados, de estrategias válidas, etc.). No es una imposición externa de ninguno de los agentes, sino el efecto conflictivo y contingente de esa contienda.

Esta disputa por definir el orden es lo que llamamos *proceso político*, que hace explícito el carácter *construido* de la narrativa que propone objetivos y distribuye los roles para –en el límite- alcanzarlos (sección 2). La multiplicidad de agentes sociales repartida en relaciones de conflicto y solidaridad procura proponer el orden político, incurriendo en secuencias inteligibles de operaciones (o eventos) que se siguen unas a otras en el tiempo. Se trata, en definitiva, de una disputa por modificar una y otra vez las relaciones de poder, que condicionan lo que los propios agentes pueden o no pueden hacer. Es por ello que, aunque estas operaciones atraviesan todo lo social, se consolidan en el Estado como reflejo y garante de la comunidad ilusoria (Lechner, 1985), que se erige como estructura regular de tramitación de demandas (ver sección 4).⁵⁴

Aunque el orden político es intrínsecamente disputado, conflictivo, esto no implica que no pueda lograr cierta estabilidad –de lo contrario, no constituye un orden como tal. Ahora bien, la continuidad de ese orden se puede apoyar sobre diferentes mecanismos, de acuerdo con el modo en que se desenvuelva el proceso político. Cuando se privilegien mecanismos de generación de consensos, de modo que incluso agentes ocupando posiciones no favorecidas en la distribución de poder lo apoyen activamente, hablaremos de un orden hegemónico (sección 5). Existen distintos caminos por los cuales se puede alcanzar un orden de este tipo; por interés de nuestra investigación, explicaremos en qué consiste la forma populista del proceso político (sección 5).

Finalmente, nos interesa remarcar que ningún proceso político ocurre en el vacío. Se trata de eventos enraizados en una historicidad que marca trayectorias de regularidad y cambio. Las relaciones sociales siempre se juegan en mutaciones no evolutivas, donde nada es completa novedad ni total conservación. La herramienta de análisis que proponemos para pensar esa dinámica de cambio y continuidad es la categoría de *modo de desarrollo* (sección 6). El orden político kirchnerista, resultado de un proceso político de forma populista, se inscribe en un modo de desarrollo histórico.

⁵⁴ Las secciones 4 y parte de la 5 de este capítulo fueron publicadas en otra parte (Cantamutto, 2015a).

1. Ontología y explicación

Una investigación completa requiere determinar sus propios principios de posibilidad. Esto significa dar cuenta de las categorías teóricas que dan forma al planteo. Tal como el caso que aquí nos ocupa, rara vez se comparan teorías contra hechos (como prefiere creer el falsacionismo), más bien lo que se compara son teorías entre sí, es decir, cuerpos de conceptos ordenados con cierta coherencia interna en referencia al mundo empírico (Aibar Gaete, Cortés, Martínez y Zaremborg, 2013; Isaac, 1987a; C. Pereyra, 1988). Las hipótesis de comportamiento de la realidad no se enfrentan a una realidad empírica dada, asequible y observable de modo neutral (Bechhofer y Paterson, 2000). Parte de la discusión entre los enfoques clasistas y los post-fundacionales tiene por fundamento que no “ven” lo mismo: construyen un ordenamiento de la realidad tal que les permite observar ciertas áreas, al tiempo que se ocultan otras. “La teoría no explica hechos *dados* en la realidad, sino hechos contruidos por ella, pero estas construcciones tienen sentido, en definitiva, según su mayor o menor capacidad para ordenar de manera inteligible la caótica información que proporciona la realidad” (Pereyra, 1988: 176-177).

Como ya señalamos, entendemos al kirchnerismo como un orden político, que propone una posible forma de suturar el espacio social. Ahora bien, para que esta afirmación tenga sentido, es necesario partir del supuesto de apertura de lo social, es decir, su carácter dislocado, abierto a distintos posibles órdenes.

Esta postura se distingue de aquellas que asumen que la sociedad existe como totalidad organizada, de modo completo, como tiende a ocurrir con la matriz marxista, en particular, en su versión estructuralista.⁵⁵ No se corresponde tampoco con la aproximación que entiende la sociedad como un agregado de individuos, algo que suele presentarse en el pluralismo. Finalmente, tampoco se trata de la postura de Laclau, quien afirma la inexistencia de la sociedad como entidad, pues únicamente se puede entender por tal a la domesticación discursiva de la realidad social. No compartimos estos puntos de partida. Entendemos que *la sociedad existe*, y se puede definir como el *conjunto semi-caótico de relaciones sociales*. Decimos semi-caótico porque no es una totalidad

⁵⁵ La presentación esquemática que se sigue no hace justicia a debates más específicos de cada postura. Se trata sólo de un recurso expositivo.

estructurada completamente, suturada: no hay un sistema cerrado, autorregulado, con algún tipo de tendencia a un equilibrio a-histórico. Sin embargo, tampoco es que es caos indeterminado, donde todo es posible: simplemente, hay mayor variación de la que se puede estandarizar.

Las relaciones sociales son el punto de inicio de la realidad, componen la unidad básica de la ontología que proponemos (Isaac, 1987a; C. Pereyra, 1988). Son las relaciones sociales las que dan origen a las personas, desde el sentido más básico de la afirmación (somos seres que nacemos de uniones previas) hasta el complejo e inagotable proceso de subjetivación. Son las relaciones sociales las que permiten a las personas tener cualquier tipo de acceso significativo a la realidad, para actuar y conocerla, y no ser simples organismos conductuales. Las personas no crean de la nada categorías que den sentido a la realidad: recuperan, utilizan y renuevan desde su más tierna infancia categorías heredadas, ordenadas en discursos.

Las relaciones sociales tienen por nodos (puntos de conexión) a las personas, pero también objetos (materiales o no) y organismos. *Las relaciones sociales son vínculos de diverso grado de intensidad, duración y alcance, cuyo orden de prioridad (ontológica) es previo a sus propios nodos: todo sujeto social se constituye a partir del entrecruzamiento de diversos conjuntos de relaciones sociales que lo informan. Incluso los objetos que existen para una sociedad dada sólo lo hacen en la medida en están relacionados con ella. Esto no significa que sólo existe lo que conocemos, sino –más simplemente- que podemos conocer lo que existe, porque está relacionado a nosotros.*⁵⁶ “El fundamento (punto de partida) del movimiento histórico son las conexiones sociales (...) en las que necesariamente se despliega la actividad humana y de las cuales recibe su contenido la conciencia y la voluntad de los agentes históricos” (Pereyra, 1988: 32).

De esta forma, buscamos hacer a un lado aproximaciones dualistas al estudio de la sociedad, que caen en aporías irresolubles. Nos referimos a una dicotomía planteada entre individualismo (agencia) y holismo (estructuralismo), que durante décadas dividió enfoques en ciencias sociales (Alexander y Giesen, 1994). Sin dudas, como polaridades resultan quizás simplificaciones, pero vale la pena resaltar la diferencia: no tratamos con

⁵⁶ Sugerimos vehementemente la revisión que hace del enfoque realista Jeffrey Isaac (1987). Aunque tengamos diferencias, sin dudas su planteo abarca con claridad y rigor la discusión que aquí sintetizamos.

individuos plenos, dotados de una voluntad indeterminada, que entran luego en relaciones interpersonales, ni con estructuras abstractas que determinan todo fenómeno social con fuerza de necesidad. Hace al menos 3 décadas que las ciencias sociales iniciaron un camino de superación de estas aproximaciones dicotómicas (probablemente Bourdieu y Giddens sean dos de los más reconocidos autores en esta tendencia, aunque de ninguna forma los únicos). El enfoque que aquí presentamos se inscribe en esta corriente de análisis.

Ahora bien, *no todas las relaciones que existen son igualmente estables*: aquellas que se reproducen con mayor sistematicidad son lo que llamamos *estructura*. Estas relaciones estables no cubren toda la sociedad: he ahí el “error” del estructuralismo más ortodoxo, que se acerca inevitablemente al funcionalismo, anulando casi todo margen de innovación y cambio. Las relaciones que se estabilizan en el tiempo, adquieren fuerza de determinación en el sentido de que su probabilidad de ocurrencia se eleva, pero no porque su actualización sea automática: siempre existe la posibilidad de que la relación sea negada, detenida, rechazada, aspecto sobre el que ha insistido Luhmann (1995, 1998).

Estas relaciones estructurales no son necesarias ni deterministas, en el sentido de cumplirse todo el tiempo a la vez; más bien *marcan propensiones, tendencias*. Los procesos reales son contingentes porque implican a) la conjunción de múltiples relaciones estructurales y b) la actualización (su puesta en acto) parcial o total de cada una de ellas. Así, lo que hacen estas relaciones estructurales es dar determinaciones a cualquier evento, es decir, informarlo, darle forma: pero no lo agotan, ahí está la “infinitud” del evento frente a cualquier propensión o tendencia. Como señala Osorio (2001), se trata de explicar las determinaciones que estructuran el fenómeno a explicar, sin necesidad de remitirlo a una entidad dada, con voluntad infundada y capacidad propia de actualizarse, de hacerse real. La agencia tiene precondiciones estructurales, que son sociales, es decir, no se actúa en el vacío (Isaac, 1987: 57). Existe una difundida creencia de que la economía equivale a estructura, y es por ello el reino de las tendencias, mientras que la política es el ámbito de la contingencia, lo indeterminado. Ambas afirmaciones son resultado de sendos ordenamientos heurísticos, es decir, interpretaciones para comprender su funcionamiento. La contingencia existe tanto en las

actividades de la economía como de la política, y de la misma manera, podemos hablar de regularidades.

Justamente, un tipo de relaciones estructurales particularmente relevantes son las relaciones de poder, entendido como capacidad de hacer (*potere*). Se trata de las facultades para actuar que poseen los agentes sociales en virtud de las relaciones durables en que participan (Isaac, 1987: 80). Esta capacidad de hacer no siempre se actualiza, se hace real: por ejemplo, podemos enunciar un discurso, pero no significa que hablemos todo el tiempo. El error del empiricismo es ver sólo las relaciones de poder cuando efectivamente ocurren: siguiendo el ejemplo, no necesitamos hablar todo el tiempo para saber que podemos hacerlo. Las capacidades de hacer no se distribuyen de modo homogéneo; por referir a una capacidad muy indagada por el marxismo, la capacidad de invertir recursos de capital está vedada para la mayoría de la población.

Las relaciones de poder pueden definir además capacidades *sobre* algo o alguien. *La dominación es la distribución asimétrica del poder social, distribución que no contingente y que no es simple diferencia, sino jerárquica* (Isaac, 1987: 83-84). Por ejemplo, cuando un presidente aprueba un decreto, su marco de aplicación no es voluntario sino obligatorio por fuerza de ley. El debate sobre las dimensiones del poder se enfocó centralmente sobre el poder-sobre cuando está en acto: cuando se impone en la decisión (Dahl, 1963), cuando excluye opciones de la toma de decisión (Bachrach y Baratz, 1962, 1963), cuando logra alterar las preferencias sobre las opciones a elegir (Lukes, 2007). Aquí estamos entendiendo que las relaciones de poder se distribuyen estructuralmente de un modo asimétrico, aunque no se hagan operativas (actuales) en cada momento del tiempo (Isaac, 1987). Esta asimetría permite sesgar en ciertos sentidos la reproducción de las relaciones sociales, así como desestimular ciertas variaciones. Toda distribución en las relaciones de poder pretende condicionar el orden político para autoperpetuarse.

Como sujetos que acceden a la realidad a través de la construcción de sentido, las personas buscan ordenar este conjunto de relaciones sociales, proponer subconjuntos de relaciones como más significantes, darles prioridad de prelación, definir las como estructuras (Jessop, 2008). Esto lo que hace es promover un orden específico como explicación del conjunto de la sociedad, permite habitar, vivir esas relaciones. Ese orden

no agota las relaciones que existen, pero al reducir la complejidad, permite a los agentes -todo el tiempo- dos opciones básicas: intentar preservar o alterar ese orden particular (Luhmann, 1998). Esas relaciones pueden verse reforzadas o alteradas en función de su ordenación significativa previa: no se puede operar sobre lo que no se puede decir, reconocer, conocer.

Aparece así una distinción importante respecto del planteo de Laclau en torno al discurso. En su propuesta, discurso equivale a una estructuración ordenada de prácticas socialmente significativas. Una definición así de amplia significa su virtual indistinción de la vida en sociedad, no existiendo nada por fuera del discurso (Jorgensen y Phillips, 2002). Se ha criticado que esto es una reducción a un estructuralismo lingüístico tan severo como el criticado al estructuralismo marxista, ya que los discursos parecen tener existencia propia y separada de los propios agentes que los producen (Isaac, 1987a). Incluso, se llega a afirmar que los sujetos son *efectos* del discurso, lo que dificulta severamente identificar tanto disputas polémicas (el conflicto entre diversos discursos puede no estar presente de modo explícito en uno de ellos) como relaciones de poder (no las que se establecen al interior de un discurso, sino aquellas que hacen que se privilegie un discurso sobre otro). Ives (2005), por su parte, señala que se abusa de una definición sincrónica de discurso, que impide detectar las variaciones de sentido que en él se expresan, quitándole historicidad al análisis. Finalmente, se presenta una extrema dificultad metodológica para comprender el ordenamiento de la realidad a partir de *cualquier* acto significativo de los agentes sociales (Jorgensen y Phillips, 2002). Entender que la realidad sólo se aprehende a partir de prácticas significativas es una cosa, asumir que la realidad *es* discurso es otra más extrema.

Nuestra aproximación no niega la importancia de la construcción discursiva del mundo. El discurso no es un mero instrumento de transmisión, posee un carácter performativo, que construye la realidad y habilita la acción (Balsa, 2010a). Para los agentes involucrados, el discurso debe -en cierta forma- dar cuenta de la realidad que los circunda, provocar sentido y permitirles habitar la realidad: a esto refería la interpelación althusseriana, inducir a los agentes a vivir cotidianamente las relaciones en que se inscriben (Althusser, 1970). No hay posibilidad de acción social sin interpretación, así esta mediación conceptual no sea un proceso consciente del que los agentes puedan dar

cuenta.⁵⁷ Las categorías que utilizan son útiles para nuestra construcción conceptual (la “doble hermenéutica” de Giddens, 1987), pero no puede atribuirseles necesariamente coherencia y completitud (que sí pueden, y deben, demandársele a una teoría).

Fairclough (2003) propone entender al discurso como una dimensión de las prácticas sociales, que se caracteriza por dar cuenta de los significados asociados para los agentes, a través del uso de signos estructurados. Dado que todo discurso es un orden significativo particular de una realidad que siempre lo excede, no hay posibilidad de “medir” esos excesos: es imposible definir “cercanía o distancia” entre discurso y realidad, porque todo acceso a la realidad está mediado por categorías. Todo discurso es una construcción novedosa sobre el magma de lo real, es representativo sólo de sí mismo (Franzé, 2013). Esto no significa excederse asumiendo que los discursos no tienen marco de referencia alguno: hablan sobre algo que se percibe como real (Dussel, 2001). El análisis del discurso aporta entonces a la comprensión del sentido del accionar de los agentes, sin pretender que toda su acción se explica por el discurso ni que éste deba tener alguna coherencia particular respecto de otros discursos o de dimensiones de la realidad.

Las elaboraciones discursivas que nos interesan no son nunca producto de un agente individual, sino que son indicadores de las tensiones relacionales en las que se encuentran los agentes: el discurso nunca es uno sólo, sino que son múltiples ordenaciones de la realidad en lid, disputando el lugar central de definición de la situación, y por ello mismo, sus posibilidades, límites y alternativas (E. López, 2013; van Dijk, 1993). En un sentido semejante, Balsa (2010a, 2010b) resalta que no existe un solo discurso, una disputa generalizada de discursos que buscan dar un orden a la realidad. Estos discursos, mediados por relaciones de poder, buscan sedimentar ciertos sentidos en detrimento de otros, para impulsar una cierta reproducción o cambio del orden de la realidad (Errejón Galván, 2012a).

Recuperando lo discutido en esta sección, afirmamos el lugar originario de las relaciones sociales como ontología de la realidad. Éstas tienen diversos grados de regularidad, y a aquellas que tienden a estabilizarse, marcando propensiones, las llamamos estructuras. Estas estructuras se expresan en cualquier ámbito de la vida

⁵⁷ Al respecto, valen las reflexiones que Pierre Bourdieu (1997, 2007) propone con sus conceptos de *habitus* y práctica social.

social: cualquier análisis que realicemos debe considerar que todo proceso se juega entre el cambio y la permanencia. El conjunto semi-caótico de relaciones sociales compone la sociedad, que está abierta no sólo al cambio, sino a múltiples interpretaciones significativas sobre cuáles de esas relaciones la compone (y de qué manera). Si bien accedemos a la realidad a través de prácticas significantes, estructuradas en discursos, la realidad no es discurso: la excede como una inundación puede ahogar sin importar cómo la llamemos o pensemos (Jorgensen y Phillips, 2002). El discurso no tiene en esta investigación un lugar originario (a diferencia del enfoque post-fundacional), sino que aporta a la comprensión de la dinámica del proceso político en tanto permite recuperar las interpretaciones de los agentes que lo protagonizan.

La explicación de un fenómeno social consiste en dar cuenta de cómo éste se hizo posible a partir de las relaciones sociales que lo forman (en lugar de remitir a entidades individuales o colectivas que ocasionan eventos a partir de su voluntad o intereses). Explicar, en este marco, es determinar cómo fue posible que ocurriera como ocurrió. Particularmente, explicar cómo el proceso político devino en un orden de tipo hegemónico, entonces, deberá dar cuenta de las relaciones sociales que lo estructuraron, tanto en continuidades como en cambios. La secuencia de mutaciones puede recuperarse a través de las relaciones entre agentes, visibles en sus demandas, estrategias, etc., pero también de las interpretaciones discursivas que realizaron. En el análisis de las disputas por el orden, daremos lugar a los discursos como una dimensión más. Pero además, en particular, el discurso estructurado desde el Estado representa, de alguna forma, el resultado coagulado de esta disputa, y tiene por eso importancia central: explica cómo se ordenan –qué sentido tienen- un conjunto de acciones de los gobernantes, incluyendo las políticas públicas, por lo que también será recuperada para cada momento.

2. Fundamentos epistemológicos y metodológicos

Definimos en la sección anterior cómo entendemos la realidad social y qué implica explicar en este marco. Según dijimos, se trata de dar cuenta del conjunto de relaciones que hizo posible el fenómeno en cuestión. Esta sección ofrece fundamentos sobre cómo abordar este objeto de estudio, aprovechando debates de la historia reciente. Dado que queremos explicar por qué el kirchnerismo es un orden hegemónico, recurrimos al

proceso político que le da esa forma. Este resultado es una combinación particular de atributos del sistema de relaciones sociales, lo que se busca es mostrar cómo se establecieron esos vínculos específicos, mediante qué mutaciones –cambio y continuidad- a través de la historia.

Se suele recurrir para la explicación de los fenómenos políticos de la combinación de leyes generales –abstraídas de uniformidades empíricas- y propensiones establecidas de los actores. Este enfoque ha sido criticado por su defectuosa capacidad de dar cuenta de los relaciones causales implicadas: es decir, no logra superar el mero registro de covariación de eventos (Aguilar y Funes, 2011; Tilly, 2001). Tal como explica Isaac (1987: 50), refiriendo al enfoque realista de Bhaskar, la ciencia debe ser capaz tanto de encontrar uniformidades en la realidad como de explicar la contingencia particular de un hecho histórico (en un mismo sentido, Pereyra, 1988). Para ello, es necesario dar cuenta de la red de relaciones establecidas en torno a un evento o proceso (Aguilar y Funes, 2011).

Explicar implica dar cuenta de las *conexiones* entre los eventos, vínculo que – sabemos desde Hume- sería imposible de establecer desde la empiria pura. Éste es el error del empirismo, suponer que la realidad (los datos) está dada a la observación sin mediación categorial. Como debe quedar claro de la sección anterior, no aceptamos esta aproximación como válida: los hechos sociales sólo se pueden aprehender a través de categorías, y para estudiarlos científicamente, éstas se deben construir teóricamente, es decir, ordenando conceptualmente la perspectiva. Para ello, proponemos un conjunto de conceptos que permiten explicar la forma concreta en que se establecieron esos nexos, su imbricación específica como proceso (Máiz, 2011; Tilly, 2001). Explicar, en este marco, significa dar cuenta, de modo teóricamente informado, cuál fue la concatenación (combinación y secuencia) de eventos que produjo ese orden político.⁵⁸

El *proceso político* es esta combinación secuencial de relaciones sociales que se hacen inteligibles a partir de su imbricación conflictiva como operación de construcción de sociedad a través del Estado. Dicho de otro modo, el proceso es político porque pone en disputa la distribución de las relaciones de poder, la conservación o alteración del

⁵⁸ Si bien creemos que es correcto postular que se trata de dar cuenta de los ‘mecanismos causales’ subyacentes al proceso –como hacen muchos de los autores referidos en esta sección-, evitamos esa referencia para evitar confusiones respecto de las explicaciones mecanicistas basadas en leyes.

orden político. Esto implica un conflicto por definir una narrativa que proponga objetivos sociales comunes, la distribución de tareas para intentar alcanzarlos, y las amenazas que lo ponen en riesgo. Aunque el conflicto no reconoce ningún ámbito social particular para desarrollarse, la consolidación de un nuevo orden requiere de la estabilización de la narrativa y su puesta en práctica a través del Estado (ver sección 4).

La remisión a las intenciones de los agentes involucrados facilita comprender los cursos de acción tomados, pero de ninguna forma completa una explicación. Proponer al *individuo* como fundamento de los procesos es un absurdo. Si se lo propone como “lo más concreto”, se olvida que cada individuo particular es el resultado de múltiples determinaciones que lo conforman, al punto de ser prácticamente inaprensibles en su totalidad, y que, por ser tan único, es imposible tomarlo como típico; no tendríamos, por lo tanto, “individuo” al que remitir. Si, en cambio, lo consideramos como una abstracción, el individuo no involucra ninguna determinación y por lo tanto se puede predicar de él cualquier cualidad que sea conveniente, atribuida por el investigador (C. Pereyra, 1988). Es decir, la remisión a los individuos resulta completamente imprecisa. Pero, lo que es más, se trata de un voluntarismo finalista, pues se asume que los fenómenos sociales ocurren con arreglo exacto a una voluntad indeterminada (se reemplaza la voluntad divina por la del “individuo”) y predefinida (Isaac, 1987a). Se desplaza así la explicación del proceso, a la explicación de esa voluntad. Respecto del kirchnerismo, por ejemplo, no nos dice demasiado remitir a la voluntad de poder de Néstor Kirchner, pues se mantendrían como incógnitas la formación misma de esa voluntad y sus condiciones de posibilidad en el marco de un proceso social.

Naturalmente que detectar estas intenciones ayuda a la comprensión del fenómeno, pero podríamos enfatizar aquí: i) las intenciones de los agentes no se forman en el vacío; ii) su capacidad de dialogar o interpelar otros actores no depende sólo de su estructuración previa; iii) los agentes que las enuncian no tienen una constitución identitaria propia inamovible; iv) ni existen por sí mismos si no es en la continua diferenciación respecto de otros agentes y sus intenciones. “Quienes actúan son los individuos y no las relaciones sociales, pero esa actividad no se despliega con base en un libre facultad autónoma, sino en formas decididas por las relaciones sociales” (Pereyra, 1988: 31). Los agentes y sus intenciones se reconfiguran una y otra vez en la relación

con otros agentes, sin que por esto dejen de existir condiciones estructurales que fomenten ciertas permanencias. “Se trata de comprender que la formación de esas mismas condiciones subjetivas (...) es el resultado de procesos objetivos, no un acto milagroso de la voluntad” (Pereyra, 1988: 66).

De forma simétrica, el estudio de las condiciones estructurales del fenómeno no es suficiente para dar cuenta de su ocurrencia. Tal como sugiere el viejo adagio marxista, la estructura no determina lo que ocurre, sino las condiciones de lo que ocurre, el escenario sobre el que los agentes deben resolver sus intenciones al interactuar (Aguilar y Funes, 2011; Marx y Engels, 1981). Una explicación exclusivamente estructural resolvería el problema de una forma semejante al empirismo positivista, en el sentido de señalar que frente a un factor (o conjunto de factores) X ocurrirá Y. Sin embargo, se mantiene como un problema por qué estructuras fijas que operan en el vacío, sin tiempo, no son válidas para todo momento, todas las estructuras a la vez: dicho de otro modo, por qué existe actividad y cambio, y no una perpetua repetición de lo mismo. Como dice Carlos Pereyra (1988: 85),

En la tarea de reducir la parte de indeterminación y de no saber en el conocimiento de un situación histórica no basta, en efecto, con elaborar argumentos generales que den cuenta de los aspectos estructurales del proceso: se requiere explicar también el comportamiento de los actores y las peculiaridades de su actuación; mostrar la necesidad de ese comportamiento y de esas peculiaridades.

El dualismo explicativo (estructura – agencia) ha llevado a sistemáticos puntos ciegos y callejones sin salida en la explicación de procesos políticos (Aguilar y Funes, 2011; Davidsen, 2010; Isaac, 1987a; C. Pereyra, 1988; Tarcus, 1991b). La específica imbricación de determinaciones (relaciones estructurales, regulares) se enlaza en una contingencia irreductible: no hay determinismo en el reconocimiento de las fuerzas que definen los rasgos centrales dentro de los cuales los eventos ocurren, sino la búsqueda por una explicación más completa, que no remita a elementos no explicados en el análisis (Osorio, 2001). Lo que buscamos defender no es una necesidad *ex ante*, sino una necesidad *ex post facto*: no hay voluntad de predicción ni teleología, sino una intención de desentrañar las relaciones sociales que dieron forma a un resultado específico, contingente, imposible de predecir (Bensaïd, 2006; Isaac, 1987a; C. Pereyra, 1988).

La pregunta que nos guía no es cómo X puede provocar Y, sino *cómo fue que llegamos a Y*, cuál fue la cadena de acontecimientos que, no teniendo ninguna *necesidad* de ocurrencia *ex ante*, sin embargo, ocurrió. Para ello, hay que desentrañar el conjunto de relaciones sociales que le dio *posibilidad* de ocurrir “tal como ocurrió”. Explicar es, aquí, desenredar la red de relaciones sociales, distinguiendo continuidades y rupturas, rasgos estructurados y contingentes. Concretamente, el orden político que analizamos no es la realización de un proyecto preconstituido de un grupo social o político, ni la salida autocorregida del sistema económico en recesión. Diversos factores interactuaron en constantes reacomodamientos, resultando en una determinada secuencia de sucesos.

Para poder estudiar estos factores que interactúan, se vuelve necesario ordenarlos en dimensiones que los distingan. La forma específica de entrelazamiento de estas dimensiones no debe resultar de ninguna razón *a priori*. Más bien, deben ser una categorización analítica para ordenar conceptualmente el proceso político según su ocurrencia histórica concreta. La perspectiva teórica busca reconstruir *ex post facto*, remitiendo a la tradición de la sociología histórica (Ramos Torre, 1993; Skocpol, 1991). Se trata de recuperar la mirada histórica que sobrepase las divisiones de la conformación decimonónica de las ciencias sociales, aquella que aisló las perspectivas en disciplinas autónomas (Wallerstein, 1998).⁵⁹

El problema en este anclaje histórico sería su reciente ocurrencia. En este sentido, son de ayuda las discusiones epistemológicas de la ciencia histórica, asociadas a los estudios sobre el pasado reciente, y en particular sobre la memoria (Alonso, 2007; Franco y Levín, 2007; Pérotin-Dumon, 2007).⁶⁰ Aunque la especialidad parece haberse ganado su espacio en la academia, es fuente de debate cómo se configura su objeto de estudio (Romero, 2007). Hablar de procesos que se encuentran cronológicamente cercanos resulta de muy difícil determinación, respecto de cuál serían los límites de esa cercanía, y dónde se ubicaría el período en cuestión. Esta flexibilidad ha llevado a

⁵⁹ Se resalta así la importancia de una mirada sociológica que esté “en disposición de mostrarse más sensible a las secuencias de acontecimientos en el tiempo y a las diversas trayectorias históricas sin abandonar por ello su tradicional interés en explicar, en términos potencialmente generalizables, los procesos y los efectos de las estructuras sociales y de las acciones grupales” (Skocpol, 1991: 107).

⁶⁰ La discusión ha dado lugar a un campo denominado con diversos nombres: historia reciente, historia del tiempo presente, historia muy contemporánea, historia de nuestros tiempos, historia inmediata, historia vivida, historia actual (Aróstegui, 2004; Fazio, 1998; Franco y Levín, 2007; Mateos, 1998; Ordaz Sánchez, 2012).

sostener que no se trata de un problema cronológico sino más bien epistemológico: una periodización móvil que se identifica con el período de existencia cronológica de los propios actores e historiadores (Aróstegui, 2004; Pérotin-Dumon, 2007). El kirchnerismo se encuentra en plena vigencia al momento de escribir esta tesis, por lo que se vuelve necesario dar cuenta de su validez como objeto de estudio desde una perspectiva histórica.

Bresciano (2010) resume las tres grandes objeciones a la legitimidad del estudio de procesos históricos recientes como: i) un *argumento cognitivo*, que señala un cuestionamiento a la neutralidad valorativa y la imparcialidad del investigador, en la medida en que el investigador estudia los hechos en los que participa; ii) un *argumento heurístico*, que cuestiona las fuentes disponibles para el estudio de los procesos recientes, debido a su inexistencia, su carácter fragmentario, asistemático o poco fidedigno; iii) un *argumento hermenéutico*, que cuestiona la posibilidad de tener perspectiva sobre procesos que se encuentran inacabados.

Frente a estas impugnaciones, la historia reciente dio sus propias respuestas. Respecto del riesgo de parcialidad, nada permite sostener que la *distancia* temporal garantice neutralidad, ni la proximidad inhibe al investigador de proceder con rigor (Águila, 2012; Figueroa Ibarra y Iñigo Carrera, 2010; Franco y Levín, 2007). El apasionamiento y la interferencia de valores del investigador están presentes con independencia de la distancia de los hechos; de lo que se trata es de utilizar herramientas que permitan dar cuenta del objeto de estudio más allá de aquellos. Respecto de las fuentes confiables, se ha discutido largamente sobre la validez de las fuentes no documentales en la historia, y parece haber un creciente acuerdo en las ambigüedades y sesgos de todas las fuentes (Águila, 2012; Aróstegui, 2004; Iuorno, 2010; Romero, 2007). Para otras disciplinas sociales, este problema de las fuentes documentales resulta prácticamente ajeno.

Finalmente, respecto del carácter inconcluso de los procesos contemporáneos, resulta relevante señalar que nunca se tiene la plena certeza de que un proceso histórico haya finalizado. En todo caso, la supuesta fijeza cerrada de los procesos del pasado condiciona la mirada de los investigadores tanto como su ausencia: condicionan la mirada toda vez que le dan una perspectiva particular de lo estudiado. Todo objeto de la

historia es una construcción cultural de lo pasado realizada desde el presente, “y por lo tanto sujeta a los avatares de los intereses presentes” (Jelin, 2007: 309). Por esto mismo, “no es posible resolver de modo definitivo algo para que sea sólo pasado y quede como historia, sin involucrar conflicto presente. Nunca es algo fijo, cerrado y definitivo” (Jelin, 2007: 336). Al respecto, agregan de modo cabal Franco y Levín (2007: 17), que

podemos afirmar que las cualidades de los procesos que estudian los historiadores (entre ellas su posibilidad de estar “acabados”, “cerrados” o “concluidos”) no son inherentes a “lo real” de esos procesos, sino a las construcciones discursivas que elaboran los historiadores generalmente en estrecha relación con sentidos decantados socialmente (de hecho, la noción misma de proceso es una construcción y no un objeto real observable como tal).

Esto convalida nuestra aproximación al proceso político reciente, fundamentado en categorías conceptualizadas de modo coherente. El kirchnerismo se erige así como un legítimo objeto de estudio construido desde una perspectiva histórica. La interdisciplinariedad, además, aparece como una exigencia para este tipo de objetos de estudio, según se ha reconocido en el campo de la historia (Aróstegui, 2004; Iuorno, 2010; Ordaz Sánchez, 2012; Pérotin-Dumon, 2007; Zapata, 2008) y en la sociología histórica (Aguilar y Funes, 2011; Máiz, 2011; Ramos Torre, 1993; Skocpol, 1991; Tilly, 2000).

Hasta aquí aceptamos que el proceso político reciente es abordable como objeto de estudio legítimo, toda vez que se construyan con claridad y coherencia las categorías conceptuales a través de las cuales se lo busca aprehender. Para ello, se vuelve necesario establecer dimensiones del fenómeno que permitan explicarlo analíticamente y sintéticamente. Esto dista de ser un intento holista, que pretenda dar cuenta de toda circunstancia o aspecto del fenómeno. Las dimensiones involucradas en el análisis, si bien son múltiples, no agotan la infinitud de lo social. Se intenta un ejercicio comprensivo que recupere la noción de totalidad de los procesos sociales, buscando incorporar las dimensiones estudiadas como partes de un sistema más amplio que les da cierta coherencia (Osorio, 2001, 2012). La idea de proceso en el marco de una totalidad permite comprender los fenómenos particulares como partes de una secuencia lógica que le otorga inteligibilidad, sin que esto signifique la pretensión de hallar una totalidad ontológica.

La identificación de las diferentes razones que confluyen en un proceso histórico específico anula la búsqueda de causas eficientes únicas: las diversas dimensiones son expresiones parciales de un fenómeno más amplio. Aprovechando nuevamente la discusión de Carlos Pereyra (1988: 136), podemos sintetizar:

La narración procura reconstruir de manera inteligible lo que en primera instancia aparece como una sucesión caótica. En esta labor de ordenamiento se identifican entidades y conexiones entre éstas: la actividad de los agentes sociales aparece inscrita en un conjunto de circunstancias económico-políticas e ideológico-culturales. Tal conjunto de circunstancias conforma un sistema estructurado y las partes componentes sólo adquieren sentido en el interior de sus complejas relaciones. Ahora bien, la capacidad del discurso de identificar tanto entidades como relaciones en la realidad social depende del aparato teórico a partir del cual se elabora aquel.

El objeto de estudio de la investigación es el orden político kirchnerista, que se busca explicar a través del proceso político que le dio forma. El proceso no existe como tal dado en la realidad, sino que se estructura a partir de categorías conceptuales. Estas categorías deben ser capaces de distinguir diferentes dimensiones del proceso, y mostrar a la vez su arraigo histórico, esto es, su posibilidad *ex post facto* a partir de la red de relaciones estructurales y contingentes. Para ordenar teóricamente la aproximación, propondremos la categoría de modo de desarrollo y sus dimensiones: el patrón de reproducción económica y el patrón de dominación, en el marco de las cuales se pueden distinguir disputas políticas guiadas por diferentes agentes (ver sección 6). A través del tamiz de esta categoría y sus dimensiones, podemos distinguir la historicidad específica del proceso como red de relaciones, sin tornar el estudio en un caos acumulado de información. Las dimensiones no son un dato de la realidad, sino una propuesta teórica para el abordaje de ésta, y esto debe quedar claro como fundamento epistemológico de la investigación. Las siguientes secciones explican la construcción de estas dimensiones, a partir de definir los agentes que consideraremos (sección 3), el rol del Estado (sección 4), y cómo se imbrican para definir un orden de tipo hegemónico (sección 5).

Metodológicamente, la investigación tenía por objetivo reconstruir la secuencia de eventos y sus relaciones, ordenadas por las dimensiones conceptuales. Para ello, se partió de detectar para cada dimensión qué características marcaba la bibliografía del capítulo 1 como más relevantes. Esto se complementó con 18 entrevistas exploratorias a sujetos representativos de diferentes fuerzas sociales y políticas, que sirvieron de

orientación en la construcción de las interpretaciones en disputa. Así, se ordenaron los hechos sociales más relevantes, y establecer su relación –tentativa- con el proceso. Para comprender cómo estos hechos fueron interpretados por los agentes, y cómo actuaron en relación a estos, se complementó la información con datos recabados a través de una extensa revisión hemerográfica –se consultaron 21 periódicos, y documentos de varias asociaciones, según su disponibilidad. Toda esta información se volcó en una línea de tiempo disgregada en las dimensiones y subdimensiones conceptuales. Las tendencias y los momentos de cambio en cada dimensión fueron la clave para distinguir una periodización interna al proceso. Finalmente, se procedió a reconstruir el proceso político a partir de la síntesis de las relaciones observadas en cada dimensión.

3. Agentes sociales

Según desarrollamos en las previas secciones, la investigación apunta explicar cómo se configuró un orden político específico, y para hacerlo se recurre al proceso que lo originó. El orden kirchnerista fue el resultado relativamente estable de la disputa política entre diferentes agentes, que pugnaron entre sí por hacer prevalecer sus opciones (de objetivos, de mitos deseados, de estrategias válidas, etc.), opciones que se definieron en el propio curso de la disputa por alterar la distribución de poder. Debemos, entonces, señalar quiénes son los agentes que protagonizaron el proceso.

Según establecimos, carece de sentido explicativo remitir a una disposición de la estructura (o conjunto de estructuras) o a la voluntad de un individuo. En el planteo de Laclau, la unidad de análisis se desplazó a las demandas –como fragmentos de discurso-, relegando relativamente los agentes que los enuncian. Creemos que esto es un error que impide la observación histórica de cómo se disputan los discursos en el marco más amplio de conflictividad. Concretamente, entendemos que es necesario observar quiénes son agentes en pugna, que estructuran esos discursos como *parte* de sus estrategias de acción. La disputa discursiva *puede* tener por resultado una modificación de las identidades políticas; pero este proceso de identificación sucesiva no transcurre en el vacío estructural, sino en un derrotero histórico específico. Así, las identidades políticas resultarían de una disputa política entre agentes, no entre discursos ni menos aún como efecto de un solo discurso (el hegemónico). Sobre estos agentes, que pueden redefinirse

como nuevos agentes, distintos, se ponen en juego las lógicas de la identificación: la disputa política no empieza nunca de cero, siempre tiene una trayectoria previa que ya definió antagonismos, representaciones y tradiciones (ver sección 1.3 del capítulo 1).

Los agentes sociales existen en la confluencia de distintas relaciones sociales, como nodos de múltiples y cambiantes vínculos, y esto vale tanto para agentes individuales, como colectivos (Ana Fernández, 2006). Indagar esta constitución a nivel personal no parece ser muy potente para la explicación de fenómenos macrosociales. Es válido explicar cómo cierto líder vivió múltiples experiencias que lo hicieron llegar a ser quien fue, y liderar cierto proceso: el kirchnerismo no podría existir sin Néstor Kirchner. Ahora bien, comprender qué lo llevó a ser quién fue, cómo se configuró su voluntad, no explica por qué fue posible su rol en el proceso: qué hace, por ejemplo, que otros agentes atiendan o cuestionen sus demandas, o, volviendo al tema, qué hizo que fuera Kirchner quien ocupe el lugar de líder. Sin perjuicio de los elementos que aporten las personas particulares al proceso, nos interesa identificar los agentes colectivos que le dan forma al mismo, antes y después del paso del líder.

En este sentido, recuperando la discusión de la sección 1, sostenemos que existen ciertas relaciones regulares, estables, estructurales, que condicionan la conformación de agentes sociales. Concretamente, hablamos de las *relaciones de explotación y dominación* que caracterizan a las sociedades capitalistas, como la que estamos analizando, e instalan un tipo de conflictividad estructurante de la disputa política, la lucha de clases (Galafassi, 2006, 2012).⁶¹ ¿Qué significa esto? Que las relaciones de poder en las sociedades capitalistas tienen ciertas continuidades básicas que no podemos omitir en el análisis, que definen grandes agrupamientos sociales: las clases. *Las clases sociales son los polos definidos por su antagonismo estructurado alrededor de las relaciones de explotación y dominación.*

Queda claro que las clases así definidas no son un conjunto de individuos con características comunes. No se parte de individuos que tienen atributos definidos que se repiten, como hace la teoría de la estratificación: los individuos pueden pertenecer a una clase, pero también pueden cambiar de clase, y eso no afecta a la persistencia de las

⁶¹ Laclau desplazó su interés del carácter capitalista de las sociedades contemporáneas al régimen democrático que la mayoría poseen, relegando características que creemos relevantes.

clases como fuerzas sociales estables (Adamovsky, 2007). Ahora bien, la idea de clases induce a múltiples confusiones y ambigüedades, que necesitamos revisar.

Posiblemente, la confusión más generalizada sea reducir capitalismo a economía, y ésta a mercado, asumiendo que las clases son una posición dentro de esa estructura (Meiksins Wood, 2000). Estos sucesivos reduccionismos y esquematismos son los que llevan a sorprenderse por los persistentes desajustes entre la clase y su presencia política. Debemos problematizar esta confusión en tres niveles sucesivos: primero, discutir la separación entre economía y política; segundo, explicar que las clases se conforman como polos en relaciones estructurales económico-políticas; y tercero, introducir el elemento organizativo de la clase, que resalta su dimensión histórica.

Primero, entonces, señalamos que la reproducción de relaciones sociales capitalistas implica la producción generalizada de mercancías mediante la contratación de fuerza de trabajo libre, lo que supone una distribución asimétrica de la propiedad de los medios de producción y el control del proceso de trabajo, cuyo resultado es la extracción de plusvalía en el proceso de valorización del capital (Astarita, 2006; Shaikh, 2006). Pero esta operación no es exclusivamente “económica”, a pesar de que, obviamente, implica la producción de valores de uso como resultado de la valorización del capital. La posibilidad de contratar fuerza de trabajo libre mediante el pago de un salario implica al menos a) la existencia y validez de contratos entre entidades privadas (personas físicas o jurídicas); b) la libre disposición de los individuos de su capacidad de trabajo; c) la propiedad privada de recursos plausibles de funcionar como medios de producción; d) la existencia de un medio de intercambio generalizado que tome la forma de dinero; e) un sistema de medición homogénea del tiempo de producción. Las 5 condiciones (no exhaustivas) de funcionamiento de la reproducción de las relaciones de explotación no son “económicas” en un sentido restringido: involucran de manera sustantiva procesos jurídicos,⁶² culturales,⁶³ físicos,⁶⁴ etc. (Polanyi, 1989).

⁶² Cada una de las 5 condiciones enunciadas requiere de codificación legal para poder estructurar un sistema de intercambio estable: sin ello, los contratos no tendrían validez necesaria en el tiempo, los individuos podrían ser esclavos, o los medios de producción podrían arrebatarse una y otra vez. La garantía legal de las condiciones arriba comentadas permite trazar un horizonte de validez en el tiempo, que posibilita la acción capitalista de inversión especulativa: es decir, tratar de incrementar el valor disponible bajo la expectativa de que las condiciones estipuladas se preservarán.

La “economía” es, pues, un conjunto muy amplio de relaciones variables, no todas coherentes entre sí, con múltiples determinaciones de factores “extraeconómicos”, que dificultan asumir una separación óptica entre dimensiones de lo social (Jessop, 2008; Laclau, 1991). No hay, pues, *una* relación económica fija, estable, única, que determine clases que luego hay que encontrar en “la política”, tratando de establecer si hubo desfasajes en la representación (Hirst, 1981). Si la relación política se estructura por la definición y articulación conflictiva de los comportamientos colectivos de cumplimiento obligado en una comunidad (Monedero, 2008; T. Parsons, 1974), entonces, la dominación significa la prioridad asimétrica de ciertas clases sociales en su capacidad de prevalecer en esa definición. Las clases existen porque existe una distribución asimétrica del poder, que condiciona los comportamientos colectivos. Esta asimetría compone las relaciones de dominación, que se conjugan con las de explotación, para definir al capitalismo. Subrayamos entonces el segundo punto, insistiendo, enfatizando: las clases no son posiciones en la estructura económica, sino polos en relaciones de dominación y explotación, que son lógicamente previas.

Ahora bien, en este marco general, hay lugar para una variación muy amplia. De acuerdo al nivel de abstracción que utilicemos, estas relaciones se pueden definir de un modo muy general, adoptando una simple dicotomía polar (explotadores-dominantes versus explotados-dominados) o incorporar múltiples determinaciones más específicas (Arrighi, Hopkins y Wallerstein, 1999; Osorio, 2001). Las relaciones sociales son múltiples y los agentes sociales se encuentran inscriptos en sus infinitas intersecciones: el nivel de especificidad que busquemos determinará el alcance de determinaciones que debamos considerar. Ni la dominación ni la explotación explican todo fenómeno social, ni cada relación existente, pero sí condicionan, es decir, trazan ejes en ciertas direcciones con mayor probabilidad que en otros. Sin embargo, aún no hemos resuelto el problema. Ubicarse en el marco de relaciones persistentes de explotación y dominación no indica por sí misma ningún curso de acción ni interpretación particular.

⁶³ Considerarse dueño de la propia fuerza de trabajo o comprender la medida del tiempo homogéneo no son procesos “naturales” de la humanidad, ni se pueden simplemente decretar legalmente, necesitan una validación normativa en la cultura

⁶⁴ La desposesión de recursos plausibles de utilización como medios de producción se ha caracterizado en toda época por no prescindir del recurso de la violencia física. Es lo que estudió Marx como acumulación originaria, pero que está presente actualmente como acumulación por desposesión (Harvey, 2004).

Es por esto que, como tercer punto, la determinación estructural es insuficiente, y, tal como ya desarrollamos (sección 1.2.1 del capítulo 1), el propio Marx agregaba otra dimensión para definir las clases: su constitución antagónica. La lucha de clases es, en este sentido, previa a las clases (Adamovsky, 2007, 2015; Meiksins Wood, 2000). Laclau asume la constitución conflictiva de la sociedad, su error consiste en subvaluar la persistencia de la conflictividad sistémica. El doble error de la ortodoxia marxista fue asumir que las relaciones de dominación y explotación eran las únicas que importaban y sólo admitían una interpretación.⁶⁵ Como venimos insistiendo, en cualquier fenómeno social confluyen múltiples determinaciones, y éstas son susceptibles de diferentes interpretaciones por parte de los agentes. *La lucha de clases indica el conflicto sistémico que atraviesa la sociedad, pero el antagonismo concreto es siempre contingente a la traducción que hagan de ella las organizaciones históricamente existentes.*

La dimensión de organización de la clase para representarse tiene una importancia central, que no es meramente instrumental, es decir, no se reduce a transmitir lo existente en un plano distinto. La clase no existe como una pura y simple posición estructural, incluso si combinamos las estructuras económica y política. Las clases existen porque se encuentran en disputa, porque se definen en oposición: porque se estructuran en relación antagónica con otras clases. Sus organizaciones cumplen la tarea de interpretar y definir esos antagonismos, y no sólo a un nivel general, sino en relación a procesos y eventos específicos. La única forma que tienen las clases de existir es a través de sus múltiples representantes, que activamente les dan constitución (Vilas, 1995). *Las clases se constituyen en las relaciones de explotación y dominación*

⁶⁵ Existen otras relaciones estructurales de alcance generalizado que condicionan la distribución del poder: el género, la raza o etnia, la nacionalidad, por referir las más controversiales. Mucho se ha discutido sobre si estas relaciones estructurales son co-determinantes de la relación de explotación y dominación capitalista (tienen el mismo orden de prelación) o son determinantes de segundo grado (la determinación “en última instancia” es la relación del capital). Por supuesto, no resolveremos aquí tamaña discusión, aunque resaltamos que el enfoque propuesto no toma partido por ninguna de ambas opciones. Si por un lado, entendemos que el ordenamiento capitalista de las relaciones sociales tiene un nivel de generalidad tal que permite comprender por sí misma múltiples procesos (omitiendo otras relaciones estructurales); por otro lado, esta relación no necesariamente es actualizada en cada vínculo o fenómeno social (por ejemplo, una amistad no se define centralmente por la relación capitalista), ni permite entender por sí sola todos los fenómenos (en la explotación de la fuerza de trabajo, por ejemplo, se suele encontrar un sesgo contrario a mujeres y minorías de género): el problema de qué relaciones estructurales son las que se actualizan concretamente depende de qué fenómeno social estemos analizando. Esto no significa que las relaciones capitalistas sólo existen cuando nos resultan de interés: significa que no tienen el mismo peso en la determinación de todos los fenómenos.

mediadas por la capacidad de organizarse para tener representación. La representación organizada es lo que da existencia a las clases sociales, que, de otra forma, serían una simple multitud explotada y dominada por otra multitud mejor posicionada.

Las clases son quienes interpretan sus propias posiciones en las relaciones sociales, y a partir de esto, estructuran demandas, se oponen o alían a otras clases, etc. Como las clases no son ni homogéneas ni unitarias, no hay motivo alguno para que sólo haya una organización que sea “legítima” representante de una clase. En cada proceso concreto, las clases pueden considerar múltiples determinaciones relacionales para definirse a sí mismas, incluyendo no sólo antagonismos presentes, sino trayectorias previas.⁶⁶ Las clases, definidas a partir de la disputa conflictiva bajo la lógica del capital, tienen una historia propia, no comienzan de cero en cada proceso: sus prácticas no son plenamente libres, están situadas en una trayectoria histórica (Meiksins Wood, 2000). “Si bien la lucha de clase es inmanente a toda sociedad de clase, las formas concretas que asume la resistencia y la composición política del/los sujeto/s que la encarna/n son radicalmente históricos” (Vilas, 1995). Como agentes colectivos, definirán por sí mismos sus demandas, objetivos, estrategias, en relación a esas relaciones estructurales en las que se insertan (Schuster, 2005).

De todo lo anterior queda claro que es un error suponer la existencia de intereses fijos para las clases. Es cierto que las relaciones estructurales en las que se hallan inmersas condicionan algunas decisiones. Por ejemplo, el capitalista busca elevar sus ganancias porque de ello depende su supervivencia como personificación de la relación del capital; pero esto no significa que cada decisión de su vida como capitalista, y fuera de ese rol, solamente abonen a aumentos de las ganancias. Aún más, incluso si aceptásemos como interés general de las clases dominantes la preservación de la distribución de poder, esto no nos permite comprender sus demandas específicas en torno a definiciones de políticas públicas, o sus posturas sobre ideas y valores en un momento dado. Es que la interpretación de una situación, y las demandas y reclamos que a partir de ello puedan surgir, no pre-existen a su elaboración a través de representantes.

⁶⁶ Es por eso válido lo que señala Romero (1990), que imitando a Heráclito, “podría decirse: no encontrarás dos veces la misma clase; o más exactamente, una clase no es de un cierto modo, sino que está siendo, es decir, se está haciendo, deshaciéndose y rehaciéndose permanentemente”. Esto no implica abandonar la perspectiva de clase en favor de agentes que se definen *ad hoc* para cada caso, sin determinaciones teóricas, incurriendo en un empiricismo (Becher et al., 2013).

No hay posibilidad de “brecha” entre un interés real y las demandas expresadas, porque el primero es una quimera. Las demandas concretas son elaboraciones de las propias organizaciones de clase, según sus propias interpretaciones de su situación, y la investigación histórica no debe presuponerlas, sino analizarlas según se presentan.

Como vimos (sección 1.3.1 del capítulo 1), tempranamente Laclau (1978) señalaba a las clases como una determinación estructural del modo de producción que no se condecía con su presencia política. Por ello, en lugar de clase trabajadora y capitalista, oponía entonces a los sectores populares con el BEP. De lo desarrollado en esta sección, debería quedar claro que no coincidimos con el planteo, que duplica innecesariamente los órdenes de análisis. Las clases existen por su histórica actuación antagónica (esto es, política) en el marco de relaciones desiguales y jerárquicas. A medida que Laclau desplazó su discusión hacia la creación de identidades políticas, su interés por las clases se fue diluyendo, pues su existencia dejaba de ser un dato relevante *per se* para la teoría (aunque sí podía serlo en un proceso político, pero eso dependía del análisis empírico). Sin embargo, persistió como referencia remanente el uso de los sectores populares –los relegados, los incontados, los menos privilegiados- y los dominantes –oligarquía, grupos dominantes, etc. El problema es que sin predicar nada de estos “sectores”, no hay nada formalmente hablando que impida, por ejemplo, que terratenientes se consideren “relegados” por “el régimen” y den forma a un proceso de confluencia equivalencial de tipo populista (Cantamutto y Hurtado Grooscors, 2014). ¿Cualquier agente puede presentarse como la plebe y ser creíble?

Esto nos remite al contexto más general de nuestra discusión. Es innegable que las organizaciones autodefinidas como clasistas perdieron creciente gravitación en las últimas décadas, en parte por la propia derrota histórica de la clase trabajadora (ver sección 1 del capítulo 3), pero también por la creciente pluralización de las identidades sociales en las sociedades contemporáneas. Ahora bien, al momento de hablar -con gran imprecisión- de “sectores populares” es posible detectar con claridad que la referencia es siempre a agentes que ocupan todos lugares subordinados en la distribución de poder, es decir, en las relaciones de dominación y explotación (Vilas, 1995). Lo que está sin dudas en crisis, entonces, es una definición estrecha de la clase trabajadora, como el proletariado industrial (Adamovsky, 2007, 2015; Becher, Martín y Martín, 2013).

Para evitar la estrechez de esta referencia y las confusiones que conlleva, es que preferimos hablar de *clases populares* y *clases dominantes*. Proponemos entender por *popular* al bloque social de los/as oprimidos/as, como un conjunto heterogéneo y sincrético, pero unificado por su subordinación relativa en las relaciones de dominación y explotación –y por eso vale seguir hablando de *clase-*, es decir, en oposición a otro conjunto de clases, igualmente heterogéneo, que es el bloque en el poder (Dussel, 2001; Mazzeo, 2011; Vilas, 1995). Recordando la definición de Poulantzas del BEP (ver sección 1.2.1 del capítulo 1), ambos bloques son una amalgama contradictoria de clases, fracciones de clase, y, agregamos, organizaciones múltiples (que interpretan sus propias situaciones y actúan). La propuesta de distinguir entre clases populares y dominantes (o BEP) permite al mismo tiempo conciliar esta pluralidad con los elementos de unidad, así como las dimensiones política y económica.

Finalmente, sobre la cuestión de las identidades políticas.⁶⁷ Esta sección desarrolló quiénes son los agentes que consideraremos para explicar el proceso político, que son las organizaciones representativas de clase. Sin duda, esta perspectiva no agota la pluralidad de identidades que se constituyen y reconfiguran en la disputa política. No obstante, nos permite explicar, a través de interpretaciones, decisiones, estrategias, alianzas y conflictos, cómo se dio forma al proceso político. En muchos casos, las identidades políticas de estos agentes de clase fueron clave para comprender su accionar. Puestas en juego en el propio proceso, algunas de ellas se vieron alteradas (como se desarrolla en esta investigación: ver en particular el capítulo 6). Aunque la identificación política excedió con mucho a los agentes aquí considerados, la elección de estos es una estrategia metodológica, que permite *explicar* el proceso, y señalar sus efectos en términos de sucesivas identificaciones. Como dice Errejón Galván (2011: 77-78),

los alineamientos políticos de una sociedad –las razones que unen y enfrentan a la gente– no pueden darse por determinados en ninguna esfera externa a la política. Esto no equivale en modo alguno a defender que sean arbitrarios, que cualquier criterio pueda convertirse en una fractura que

⁶⁷ Las identidades políticas son el “conjunto de prácticas sedimentadas, configuradoras de sentido, que establecen, a través de un mismo proceso de diferenciación externa y homogeneización interna, solidaridades estables, capaces de definir, a través de unidades de nominación, orientaciones gregarias de la acción en relación a la definición de asuntos públicas” (Aboy Carlés, 2001a: 54). Como el referido autor señala, la identificación política se produce por la interacción entre las lógicas de la tradición, de la representación y el antagonismo.

ordene el campo político, pero sí a postular que ninguna condición material produce por sí misma posiciones y subjetividades políticas.

Las organizaciones que se analizan en esta investigación se incluyeron en uno u otro conjunto (clases populares o BEP), según cómo interpretan su propio lugar en esta disputa política, es decir, su propia formulación de la representación, y no por una determinación sociométrica externa. Dado que sólo aceptamos la existencia de las clases a través de sus organizaciones representativas, fue a través de éstas que llevamos adelante la investigación, para analizar demandas, alianzas, etc. En este sentido, las centrales sindicales, las organizaciones territoriales y de desocupados, las organizaciones de DDHH, fueron todas consideradas como parte de las clases populares. Las asociaciones del capital concentrado son por defecto parte del BEP. Un rol más ambiguo tienen las asociaciones del pequeño y mediano capital, más inestables en el lugar que ocupan sus alianzas, interpretaciones y demandas. Por motivos expositivos, se decidió incluirlas en la dimensión del BEP, aunque en rigor no pertenezcan a él. Desarrollamos el rol de los partidos políticos en las siguientes secciones.

4. El Estado

Según propusimos, existen relaciones sociales estables que definen regularidades, y éstas no tienen un dominio particular en una “instancia”: contra la (engañosa) comprensión de la economía como reino de las leyes y de la política como imperio de la contingencia, afirmamos regularidades y contingencias en ambas dimensiones. Una economía sin economicismos es una política sin politicismos.⁶⁸ Vamos a desarrollar en esta sección la estructura que creemos más relevante para el estudio del proceso político, que es el Estado. Debido a características que discutiremos aquí, entre las que resaltan el carácter universalizante y su capacidad coactiva, cualquier disputa por definir un orden político tiene que atravesar la estructura estatal –puede originarse en ella o no, lo que no puede, es eludir la estructura política estatal. Revisaremos brevemente formas de entender el Estado.⁶⁹

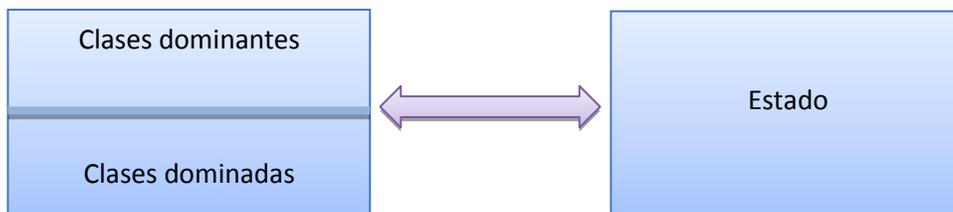
⁶⁸ Consideramos que las relaciones estructurales económicas son muy relevantes para comprender los procesos políticos. La sección 6.1 explica el lugar que les damos en el análisis.

⁶⁹ Sobre las corrientes de estudio del Estado en Argentina, consultar Bohoslavsky y Soprano (2010).

De nuestra anterior exposición, debería ser claro que considerar al Estado como un agente sería un error de definición, asignándole una voluntad indeterminada y extra-histórica. Darle entidad como un actor o como un tercero imparcial suelen ser formas de tematización del liberalismo: por la vía de considerarlo una entidad ajena al libre desenvolvimiento de la sociedad o por la vía de considerarlo un contrato inocuo, una superficie neutral de inscripción de relaciones entre pares. Si la primera imagen es típica en la escuela económica neoclásica, el enfoque pluralista en teoría política promueve especialmente la segunda imagen. Incluso cuando se discute la definición de políticas públicas, se busca comprender el juego de presiones externas al Estado, a través de grupos de presión que condicionan la toma de decisiones (Grossman y Helpman, 2001; ver crítica en Kan y Pascual, 2011). Esta relación se puede estilizar en el siguiente esquema:



Ambas formas de definirlo, como agente o como plano imparcial, son formas semi-explicitas de fetichismo, pues separan el resultado de su proceso de conformación y le atribuyen características (voluntad en el primer caso, neutralidad en el segundo) externas: se mistifica al Estado como una entidad que sirve a la totalidad, en lugar de una instancia sometida a presiones sociales (Gold et al., 1977). De hecho, en clave hegeliana, se puede comprender al Estado como factor de unidad frente a la dispersión social, el Estado como la *comunidad ilusoria* (Lechner, 1985). Lechner (1994) señala que, en la modernidad, ese polo de unidad que el Estado representa apela a la nación como comunidad política de iguales, unificando lo que aparece en contradicción en la sociedad civil. Se puede estilizar la relación con el siguiente esquema:



Tempranamente Marx criticó la filosofía hegeliana, enfatizando el carácter ilusorio de esa comunidad, que parece tener un interés general propio, con forma independiente, separada, y el Estado representaría (Marx y Engels 1968: 34-35). La “aparente comunidad en que se han asociado hasta ahora los individuos ha cobrado siempre una existencia propia e independientes frente a ellos” (Marx y Engels 1968: 87), es decir, el Estado toma una forma alienada y aparece como realidad externa.⁷⁰ La crítica de Marx en ese temprano escrito se centraba en la inexistencia de un interés general como un universal dado: se trata del interés común de un grupo (el mínimo común denominador entre sus intereses particulares) que es presentado como de toda la sociedad (ver sección 1.2.1 del capítulo 1).

Una variación de esta propuesta fue particularmente relevante para la historia del marxismo, prevaleciendo como la interpretación estándar del Estado a la que critican liberales y post-marxistas: se trata de la interpretación instrumental, aquella que entiende al Estado como una maquinaria, una cosa, disponible neutralmente para ser utilizada de la manera en que la clase dominante lo desee. La diferencia con la interpretación pluralista sería que se entiende que -por diversas vías- esta herramienta estaría capturada por una clase específica: si esa clase perdiera el privilegio de control, el Estado bien podría usarse para otros fines. En los debates de teoría política marxista, han sido tan sistemáticos los intentos por alejarse de esta visión, como su persistencia renovada. Sostener que el Estado simplemente “cristaliza” una relación de fuerzas de clases sociales, sin más determinaciones, es un rodeo para sostener esta misma neutralidad (Bonnet, 2011). La relación se puede estilizar como aparece en el siguiente esquema:

⁷⁰ Bobbio (1977) ha criticado que Hegel no era la máxima expresión de la filosofía de la burguesía: el utilitarismo lo era. La revolución francesa, máxima expresión de la revolución burguesa, propuso la igualdad ante la ley, algo incompatible con el Estado gremial de Hegel. El Estado del utilitarismo es opuesto el Estado ético: su principal preocupación es cómo tenerlo a raya. Sin embargo, Marx mismo diría que Hegel había presentado el Estado tal como idealmente se lo entendía en ese momento, es decir, era que el que lograba la mejor descripción tal como la burguesía se lo representaba, no necesariamente como era (Marx 2002, p. 194).



En el debate Miliband-Polantzas, se criticó al primero la defensa de esta versión instrumentalista del Estado, acusación que éste en cierta forma aceptó (Miliband, 1991). Lo que Miliband (1970) intentó mostrar, en polémica con el pluralismo, es que la clase dominante existe y tiene capacidad de influir de modo determinante en los distintos aparatos del Estado: en el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, las fuerzas armadas, la burocracia. Su preocupación era mostrar que “(...) la clase (económicamente) dominante no es *inmediatamente* dominante (reinante) también en el terreno político: necesita llevar a cabo múltiples estrategias para instrumentar el *poder estatal* de acuerdo a los intereses del *poder de clase*” (Tarcus, 1991: 33).⁷¹ Esta autonomía relativa es relevante: con pocas excepciones, *la clase burguesa nunca gobernó directamente a pesar de ser la clase dominante* (Isaac, 1987a; Meckstroth, 2000; Meiksins Wood, 2000).

El problema estaría en reducir la relación entre clase dominante y Estado como una exterioridad reagrupada a través de vínculos personales, contingentes (Gold et al., 1977). El Estado aparece como patrimonio de una clase, unificada y con una voluntad unívoca, que además es definida de un modo economicista (ver sección 3), desconociendo las determinaciones políticas (Poulantzas, 1969a). Dice Pereyra (1988: 201):

La afirmación justa de que se trata de un Estado de clase, es decir, del Estado de una sociedad dividida en clases, se rebaja hasta significar que es el Estado *de* una clase, ya sea *de* la fracción hegemónica del bloque dominante o *de* la

⁷¹ Resulta llamativa la recuperación implícita de este enfoque que aparece en algunos recientes estudios críticos del Estado en Argentina. Estos buscan resaltar, desde una perspectiva socioantropológica, la dimensión conflictual a nivel de agencias estatales, enfatizando las trayectorias de participación política y las representaciones de los sujetos involucrados (Perelmiter, 2007). Sin perjuicio de los aportes de esta mirada (que son recuperados en esta investigación), creemos que esconde rasgos histórico-estructurales que no se expresan a través de la actuación de sujetos. El Estado no se reduce a los agentes que lo representan.

burguesía en su conjunto. (...) Las variaciones de la forma Estado no son producto de la intencionalidad de la clase-sujeto dominante, sino resultado de transformaciones en los mecanismos de acumulación y, sobre todo, efecto de la lucha política de clases.

El estado moderno constituye un factor de unidad interna con autonomía relativa ante una sociedad dividida: entre clases dominantes y dominadas, y entre fracciones de las primeras (Poulantzas, 1969: 70). Poulantzas, como señalamos, reconoce la pluralidad de las clases dominantes, y su imposible unificación en una única clase y voluntad. El Estado tiene la función específica de constituir el factor de cohesión de los niveles de una formación social, operando como “cohesión del conjunto de los niveles de una unidad compleja, y como factor de regulación de su equilibrio global, en cuanto sistema” (Poulantzas, 1969b: 44).⁷² El Estado capitalista, a diferencia de otros estados, no se presenta como el dominio directo de una clase: no está fundado en privilegios y la voluntad divina, sino sobre la igualdad y libertad de los ciudadanos frente a leyes generales, formales y abstractas. Por lo tanto, en sus relaciones con las estructuras objetivas del Estado, los intereses de las clases dominantes no estarían traspuestos bajo su forma “inmediata” de intereses privados “(...) sino que deben revestir una forma mediatizada *verdaderamente política* y presentarse como encarnando el interés general de toda la sociedad” (Poulantzas, 1969a: 44). “El Estado capitalista moderno se presenta, pues, como encarnación del interés general de toda la sociedad, como materialización de la voluntad del ‘cuerpo político’ que sería la ‘nación’” (Poulantzas, 1969b: 150).⁷³

Así, el Estado estaría al servicio del interés general de las clases dominantes constituido en interés general de la sociedad.⁷⁴ No puede, pues, ratificar unívocamente intereses económicos de las clases dominantes: debe considerar, en alguna medida,

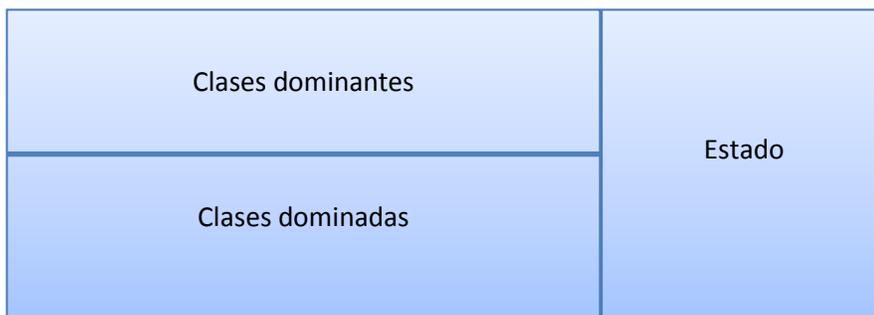
⁷² Tarcus (1991: 12) sintetiza las miradas opuestas así: “(...) mientras Miliband sostiene la tesis “instrumentalista” según la cual el aparato del Estado sirve a los intereses de la clase dominante, dada la participación efectiva de miembros de esta clase en dicho aparato; el origen de clase común entre la elite estatal y las élites económicas; y el poder de presión de estas últimas sobre el aparato estatal; para Poulantzas la relación entre clase dominante y Estado es una *relación objetiva*: si la función del Estado y los intereses de la clase dominante coinciden, es en virtud del propio sistema”.

⁷³ Criticamos la idea de “interés” en la sección 3; mantenemos esta terminología por ser la del autor referido.

⁷⁴ “Como lo político es al fin y al cabo la creación de una forma histórica de sociedad, también forma parte de él el ocultar el principio de sentido de esa sociedad, para presentarlo como algo objetivo y no precisamente como lo que es, una construcción humana contingente. Lo político es el movimiento de hacer aparecer y de ocultar a la vez el sentido de la sociedad. Politizar y despolitizar, en definitiva.” (Franzé, 2012: 71).

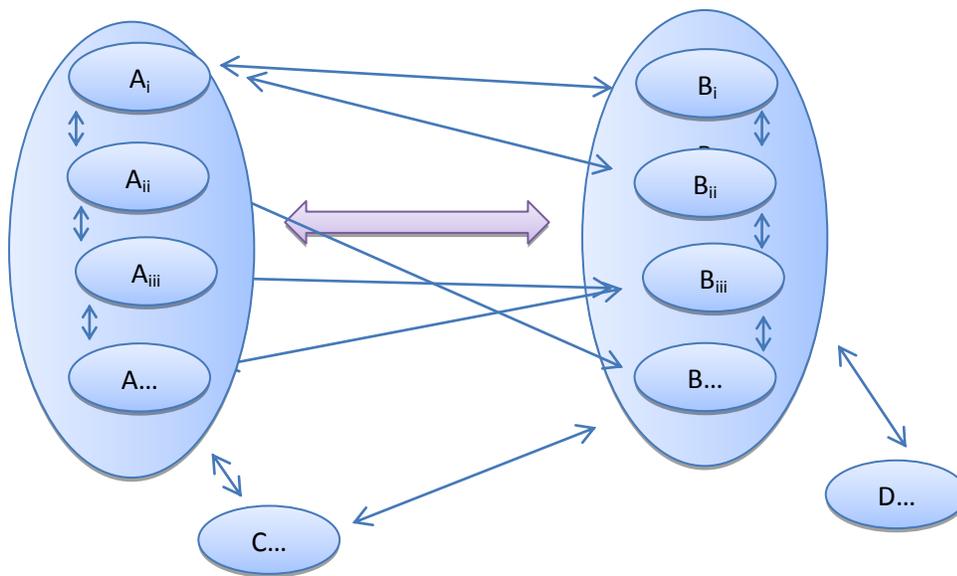
intereses de las clases dominadas, aunque sea sólo en la medida en que sean compatibles con los intereses de las clases dominantes. Estar al servicio de los intereses políticos de las clases dominantes, puede incluso significar que esté en contra de sus intereses económico-corporativos más inmediatos. De modo que no se podría pensar al Estado moderno (a diferencia de Estados históricamente previos) como pura violencia o fuerza, su especificidad estaría en relación al “consentimiento” que articula: dirección revestida de violencia (ver sección 5).⁷⁵

Justamente porque no responde de modo automático ni es fruto de una voluntad unívoca definida por una clase a un nivel extrapolítico, es que Poulantzas habla de “autonomía relativa” del Estado (Poulantzas, 1969b). Se ha criticado esta noción, asumiendo que si se da cierta capacidad de producir al Estado, si la representación es algo más que reproducción y tiene efectos sobre los propios intereses representados, entonces no tiene por qué existir relación alguna con las clases económicas (Hirst, 1981). Ya criticamos esta definición economicista de clase (sección 3), pero, accesoriamente, la idea de autonomía relativa designa a dos estructuras sociales que generan determinaciones, cada una específica e interrelacionada: no es el límite de la estructura, donde empieza la agencia, sino una delimitación entre estructuras (Isaac, 1987: 166-168 y 185). Aunque Poulantzas ha definido la relación de la forma concreta del Estado con la configuración del BEP, no avanzó demasiado en determinar los alcances y formas específicas de esta autonomía (Tarcus, 1991b). La relación se puede estilizar como aparece en el siguiente esquema:



⁷⁵ “Doble característica, pues, del Estado capitalista: por una parte, su autonomía respecto de lo económico implica la posibilidad, según la relación concreta de las fuerzas de una política “social”, de sacrificios económicos en provecho de ciertas clases dominadas; por otra parte, es esa misma autonomía del poder político institucionalizado lo que permite a veces atacar el poder económico de las clases dominantes, sin llegar nunca a amenazar su poder político” (Poulantzas, 1969b: 245). En el mismo sentido, señala Portantiero (1981: 45) que el “(..) Estado es un complejo de actividades destinadas a obtener consenso activo de las masas, coordinando sus intereses con los de la clase dominante”.

Criticando una definición economicista y determinista de la clase, Laclau y Mouffe señalaron la escasa relevancia de la dimensión política. En su propuesta teórica, no hay un fundamento último de la distribución de “lugares” (identidades) políticos. La sociedad no existe, ni –presumiblemente- el Estado, como tampoco las identidades de los grupos en disputa. Por eso, los grupos que se configuran son múltiples, y lo hacen necesariamente en mutua relación (aunque no necesariamente con todos los demás grupos sociales). Cada grupo se puede pensar a su vez como la unión de grupos más pequeños, que no están sólo en relación entre sí, sino que se encuentran en algún tipo de relación de diferencia más “fuerte” con otro grupo (A y B, en el esquema a continuación). Las posibilidades de establecer solidaridades y antagonismos sería el núcleo de la política, según el planteo recuperado de Schmitt. Formalmente, se puede pensar que estos agrupamientos con mayor influencia mutua de diferencia (y oposición) son las clases sociales, pero Laclau no da señales de suponer que esto sea así. El esquema estiliza la relación:



La radical operación que proponen consiste en desligar el análisis político de su base en grupos pre-existentes, y partir de las demandas, que tendrían una productividad performativa propia: los grupos se identifican y adquieren existencia a partir de la enunciación de una demanda (Orsini, 2007). Como dijimos, la demanda es una petición y un reclamo realizada ante un orden político al que se reconoce como potencialmente

capaz de tramitarla, debido a que representa cierta legitimidad de la comunidad política instituida (Laclau y Mouffe, 1987). Es decir, se reconoce de modo subrepticio la relevancia del Estado, a pesar de sostener que es sólo “una arena más”. Sin este orden simbólico reconocido como representación de la comunidad política, la demanda no podría realizarse a nadie: en el corazón mismo de su teorización está implícita una caracterización definida del Estado, como institución con capacidad no automática de respuesta. Ese no-automatismo no remite a una voluntad del propio Estado, sino a los intereses definidos por el grupo que mantiene un control privilegiado de esa institución: el BEP. Llamativamente, como campo, el Estado parecería estar ocupado sólo por el grupo que configura el BEP, al determinar qué demandas se tramitan o no (Laclau no explica qué hace que unas se puedan tramitar y otras no). En este sentido, tras un complejo rodeo, Laclau parece aceptar –sin admitirlo – una visión instrumental del Estado. En el camino, fusiona la relación de dominación con su efecto como exclusión: la primera parece reducirse a la falta de tramitación de demandas (Logiudice, 2015).

Luego de esta sucinta revisión, pasemos a buscar determinaciones que nos sirvan a la presente investigación. Posiblemente el aporte privilegiado de la teoría marxista sea la idea de que no es posible comprender al Estado y la política fuera del sistema social (Borón, 2000a; Maguire, 1984) ni por oposición a él (como tendían a hacer los filósofos políticos previos a Marx). La imposibilidad de una separación ontológica tiene implicaciones epistemológicas, que ciertas variantes de la ciencia política moderna parece haber olvidado. Señala Pereyra (1988: 201-202)

el Estado tiene carácter de clase porque es el Estado de una sociedad dividida en clases; no puede articular en plenitud los intereses globales de la sociedad porque en el interior de ésta existen intereses contradictorios. De ahí no se sigue, es obvio, que el Estado articula sólo los intereses dominantes haciendo tabla rasa de los intereses dominados. La conclusión, más bien, es que el Estado articula desigualmente los intereses de las diversas clases y las formas que adopta esa articulación desigual dependen de la correlación de fuerzas en la lucha política y no están predeterminadas de una vez para siempre como suponen los instrumentalistas, para quienes la política es, en definitiva, un ejercicio cerrado. *El Estado no es*, por tanto, una cosa o instrumento que alguna clase posea en propiedad, *sino un campo de relaciones*. (énfasis agregado)

Esta visión relacional no significa desconocer que el Estado tenga sus propias características (Holloway, 1980; Jessop, 2008; Míguez, 2010; Poulantzas, 1980). Como

relación estructural política, el Estado se estabiliza en instituciones y aparatos que mantienen funciones y atribuciones propias. Sin particularidad alguna, se priva al Estado de cualquier tipo de autonomía, volviéndolo un simple reflejo de condiciones externas. En este sentido, hay gran consenso en que el Estado detenta el monopolio de la violencia física organizada, normada (Franzé, 2013; Jessop, 2008; O'Donnell, 2004; Poulantzas, 1969b; Weber, 1964). Esto hace de la función represiva es una de sus características definitorias, pero no la única.⁷⁶ Apoyado en esa capacidad, las disposiciones del Estado tienen carácter coactivo, lo cual lo distingue de otras instituciones y agentes.

El Estado provee un marco legal, un conjunto de normas y códigos que hacen posible la actividad capitalista (Alvater, 1977; Isaac, 1987a; O'Donnell, 2004). Como resaltan las corrientes institucionalistas, se puede entender al Estado "(...) como una organización e institución dotada de poder, económico y político, [tiene capacidad] para imponer el marco de obligaciones, regulaciones y restricciones a la vida social y el intercambio económico" (Cavadias, 2001: 18). Esta capacidad de dar forma al sistema de relaciones sociales se sostiene en el control del sistema legal y la supremacía en el control de los medios de coerción física (O'Donnell, 2004: 149-150). Es decir, se funden en esta dimensión tres aspectos concomitantes: el Estado es origen de derecho ya que instituye reglas formales, de aplicabilidad obligatoria; es también el sistema mismo de esas reglas formales; y es, por último, la garantía última de ese sistema, tanto por su capacidad de legitimarse como representante de la sociedad como por su control privilegiado de los medios de coerción. La obligatoriedad de estas reglas involucra al conjunto de la sociedad, más allá de su anuencia. Dice Errejón Galván (2012: 6):

Los códigos jurídicos y las instituciones serían así el resultado del pacto, entre diferentes actores, que congela un determinado equilibrio de fuerzas, subordinando a unos y privilegiando a otros, pero integrando a todos en un sistema común que asegure que sus diferencias no atentan contra la comunidad política y sus perspectivas de vida en común hacia el futuro.

⁷⁶ Hablamos de función en el sentido de operaciones típicamente realizadas, y no en el sentido estructural-funcionalista de necesidades del sistema (Astarita, 2005). El Estado no es un mecanismo funcional de la clase. De esta forma, lo funcional no es negado, simplemente es puesto como una relación social más: el análisis relacional rompe con la comodidad del determinismo estructural (Monedero, 2008: XXXVI-XXXIX).

Por lo anterior, resulta de interés para esta investigación resaltar los cambios legales que se introducen en el período. Una vez aprobada una disposición estatal, ésta tiene fuerza de aplicación coactiva. Esto no significa que se imponga por la fuerza, sino que su aplicabilidad no depende de la anuencia explícita del conjunto de la sociedad. Y en tanto estas disposiciones legales no surgen de una racionalidad supra-social, es posible detectar ese “equilibrio” de fuerzas que la rodea, según las perspectivas que origine para los diferentes agentes sociales. La dimensión de políticas públicas del análisis recupera este aspecto de la estatalidad (ver sección 6.3).

Pero para evitar darle entidad propia, vale señalar que se puede comprender también al Estado *como burocracia*, pues éste se compone de un conjunto de agentes y agencias (órganos) dedicados a la administración pública. Se ha subrayado el carácter no unitario, no monolítico de la acción estatal, dividida en múltiples agencias administradas por diversos funcionarios que actúan sin arreglo a un único sentido (Perelmiter, 2007; Thwaites Rey, 2004). Para nuestra investigación, entonces, será de interés analizar el Estado en tanto burocracia, en un doble sentido: cómo se organiza como conjunto de agencias y quiénes cumplen las tareas en éstas. Desentrañar el organigrama del Estado permite detectar qué funciones y tareas se privilegian, lo que puede asociarse a demandas de agentes concretos. Esto ha sido discutido para el caso argentino hablando de la forma del Estado (Bonnet y Piva, 2013; Piva, 2012), y será recuperado como parte del análisis de las políticas públicas (ver sección 6.3). En un sentido más llano, como el discutido por Miliband, la filiación laboral y de formación de los funcionarios permite, en algunos casos, dar cuenta de vínculos de clase (Niosi, 1974). Esta dimensión será recuperada en el análisis de los representantes en el Estado (ver sección 6.2).

Justamente, incluso en regímenes democráticos, sólo un segmento de esa burocracia está sujeto a elección: se trata de aquella fracción que no sólo administra, sino que decide. Se trata de lo que normalmente entendemos como *gobierno*, la cúpula de funcionarios cuyas decisiones tiene aplicabilidad universal sobre el territorio abarcado por el Estado.⁷⁷ Por esta capacidad de tomar decisiones con carácter –en última

⁷⁷ La mayor parte de los sistemas democráticos sólo somete a elección a los miembros del poder ejecutivo y el legislativo, dejando fuera a los del poder judicial y los del poder militar. Por lo tanto, incluso en regímenes democráticos, la posibilidad de elegir esta “cúpula” de gobierno suele estar restringida (Miliband, 1970).

instancia- coercitivo sobre un territorio dado (Jessop, 2008), el gobierno es foco de disputa entre los diferentes grupos sociales. En los Estados modernos, esta disputa se suele realizar a través de un sistema de representación conformado por partidos políticos. Es un error -llamado “sociologismo”- asociarlos de modo directo con una población determinada (o una clase), asumiendo que la representación traslada, en diferentes planos, mandatos ya definidos en esa población de origen (Vilas, 1995). Los partidos políticos son organizaciones con determinaciones propias, ligadas a su rol en el sistema político, que conjugan estrategias de poder (su carácter instrumental) con tradiciones, compuestas por corrientes ideológico-políticas, símbolos e historia. Los partidos tienen una relación creativa en tanto representantes, una relación constitutiva con sus representados (que, por ello mismo, muy rara vez representan un agrupamiento social restringido), que es central en la formación de identidades políticas (Aboy Carlés, 2001a). La interacción entre partidos y agentes de clase será analizada en esta investigación en la sección de representantes en el Estado (ver sección 6.2).

Esta interacción señala cierta confluencia sobre el Estado de las relaciones sociales de dominación y explotación que caracterizan las sociedades capitalistas. El Estado sistemáticamente interactúa en torno a la acumulación. Lo hace desde lo más básico, estableciendo un marco legal que permita la libre contratación de fuerza de trabajo, la existencia de unidades de pesos y medidas homogéneos, la libre circulación interna de mercancías, el establecimiento de una moneda única de curso legal, entre las más básicas y generales. Estas regulaciones generales de la actividad son formas fuertes de intervención (Polanyi, 1989). Pero, incluso actualmente, la intervención estatal involucra la provisión de ciertos servicios públicos, la gestión de infraestructura, amplios márgenes de gastos ligados a la política social como forma de legitimación y contención de las demandas de los sectores populares (Alvater, 1977; Gough, 1977; Offe, 1977; Sonntag y Valecillos, 1977). Éstas son todas formas sistemáticas de intervención, que buscan garantizar el funcionamiento de la vida social cumpliendo tareas que ningún capitalista individual solventa por cuenta propia: el Estado actúa, en este sentido, como capitalista general.

Además, el Estado, como aparato con requerimientos fiscales para funcionar, tiene un interés propio en la acumulación capitalista, puesto que del éxito de esta

operación es que obtiene recursos para sus propias intervenciones, y puede utilizar como mecanismos de legitimación el crecimiento de la actividad y del empleo (Isaac, 1987a; Jessop, 2008; Offe y Ronge, 1975). Es decir, el propio gobierno, los partidos en el Estado, los funcionarios, tienen interés en que la acumulación se desenvuelva para poder obtener recursos fiscales e intervenir, en el sentido que deseen. Algunos autores entienden esto como una limitación estructural, que induce a la estructura estatal a interceder para sostener el actual estado de cosas, la actual conformación de normatividad y reglas. Se trata de la *dependencia estructural* de la acumulación privada (Gough y Farnsworth, 2000; Isaac, 1987a; Lindblom, 1999),⁷⁸ también llamada *límite de la compatibilidad funcional* (Olin Wright, 1983), *selectividad estructural* (Offe y Ronge, 1975),⁷⁹ o *selectividad estratégica* (Jessop, 2008).⁸⁰ “El Estado es movimiento histórico congelado en estructuras” (Monedero, 2008: XXXIII). Por eso mismo, aunque refleja procesos históricos y responde a demandas estructuradas en el conflicto político, tiene una predisposición –por herencia de las estructuras ancladas- a inclinarse a defender lo que existe, a tramitar ciertas demandas con mayor celeridad que otras. No se trata de una necesidad determinista, es simplemente predisposición; no hay ninguna garantía de que los resultados coincidan con las demandas del capital (Jessop, 2008: 47).

Más allá de un interés genérico en la acumulación, el Estado puede intervenir cumpliendo una función activa –no meramente reactiva, ni sólo en períodos de crisis– en la conformación del modo específico en que se estructura la acumulación (Costantino y Cantamutto, 2014; Félix y López, 2012; Osorio, 2004a). La regulación de la acumulación, en determinados sentidos, definirá el patrón de reproducción económica

⁷⁸ El planteo de Lindblom y Gough se basa en una imposición externa de la acumulación sobre el Estado, en la lógica instrumental ya explicada. El planteo de Isaac, a pesar de compartir la denominación, es más semejante al de Jessop, pensado como una internalización estructurada dentro del Estado de relaciones sociales asimétricas.

⁷⁹ El planteo de Olin Wright, sostenido sobre una lógica estructuralista dura, y el de Offe, basado en la teoría de sistemas luhmanniana, buscan explicar los mecanismos internos de selección del Estado que favorecen cierto tipo de opciones políticas en detrimento de otras. En ambos casos, sin embargo, se origina un sesgo hiper-racionalista que a) tienden a ontologizar la separación de órdenes sociales weberianos; b) eliminar la capacidad de agencia de las clases sociales, definidas de modos economicistas. Es por ello que ambas aproximaciones han mostrado dificultades para abordar el estudio histórico (Tarcus, 1991a).

⁸⁰ “Por selectividad estratégica entiendo la forma en la que el Estado, considerado como un conjunto social, posee un impacto específico y diferenciado sobre la capacidad de las distintas fuerzas políticas para perseguir sus intereses y estrategias particulares en contextos espaciotemporales específicos” (Jessop, 2008: 46).

(ver sección 6.1). A través de las políticas públicas, el Estado impone regulaciones, estimula ciertas actividades, desestimula otras, etc. Esta regulación promueve una distribución de ganadores y perdedores (Shaikh, 2006), que es lo que la economía política tiende a detectar. Esta perspectiva será recuperada en la investigación, aunque subrayando que se trata sólo de una dimensión del proceso político: no hay transferencia automática de resultados económicos a la política; ser ‘ganador’ no significa automáticamente ser ‘dominante’.

Justamente, en términos de la relación entre Estado y las fracciones del capital, se ha referido la tendencia estatal a apoyar al capital nacional frente a competidores externos (Alvater, 1977). Este tipo de relación refuerza la asimetría entre países centrales y dependientes, dado que las ventajas competitivas de los propios capitales se refuerzan por la capacidad diplomática y militar de los Estados centrales (Astarita, 2006; Lenin, 1972; Osorio, 2004b). La defensa de los capitales locales puede comprenderse por dos razones: por lado, por los vínculos directos (personales) de estas fracciones del capital con el aparato estatal; y por otro lado, porque se suele asumir que los recursos obtenidos por el capital local favorecen la acumulación local y la generación de empleo (auto-interés del Estado). Por este segundo motivo es que, a partir de las reformas estructurales de las últimas décadas, la acción de los Estados parece haberse orientado a atraer a su territorio capitales de cualquier país, de modo que la acumulación genere efectos positivos en ese espacio de valorización (Arrighi et al., 1999; Hirst y Thompson, 1995). Es decir, el Estado, en la intervención para regular la acumulación, indefectiblemente arbitra entre fracciones del capital, y entre capitales de diversos orígenes.

Se ha señalado que, en los países dependientes, el capital local históricamente se desarrolló como apéndice de negocios del capital transnacional, dificultando la emergencia de ideologías propiamente nacionales (Cardoso y Faletto, 1986; Cardoso, 1970). La debilidad competitiva e ideológica de los capitales locales en los países dependientes indujo no pocas veces a ejercer una presión directa sobre el aparato estatal, que funcionó así como un aparato de clase, sin recubrirse de un halo general (Alavi, 1977; Aricó, 2010; Portantiero, 1981). Cortés (2008: 7), siguiendo a Zabaleta Mercado y a Aricó, señala que

en América Latina el Estado no puede situarse vulgarmente en la “superestructura”, es más bien una activa fuerza productiva, la precondition para la producción de una base económica capitalista. Dado que la Nación no es, a diferencia de Europa, preexistente al Estado, tampoco aparece un mercado nacional como base para el nacimiento de éste. De hecho, tanto el mercado como la Nación (en términos de pautas culturales comunes) son creaciones *ex novo* del Estado. Hasta la burguesía es prácticamente inexistente como tal en los momentos de conformación del Estado nacional.

Menos alejado en el tiempo, la emergencia del Estado Autoritario Burocrático se pensó a partir de la incapacidad de las clases dominantes de conciliar modernización económica y política (O’Donnell, 1982). Es decir, el Estado participa activamente no sólo arbitrando entre fracciones del capital, sino también en un proceso de legitimación. Ésta es, finalmente, otra característica clave del Estado, aparecer como *foco de identidad colectiva*, como la promesa de integración de sus ciudadanos, más allá de sus diferencias fácticas: la igualdad formal como marco de solidaridad, expresado normalmente en la idea de nación (Lechner, 1985; O’Donnell, 2004). Para que el Estado pueda erigirse como polo de unidad ante la diversidad de la sociedad, es necesario que se le reconozca a ésta una instancia de igualdad, expresada en tanto conjunto de ciudadanos. La posibilidad de realización de tal igualdad, más allá de las reglas jurídicas, parece estar sostenida en la capacidad de remitir al conjunto de prácticas, costumbres y tradiciones que forman el contenido de la idea de nación.⁸¹

Esta “promesa” se expresa cabalmente en las tensiones inmanentes a la democracia liberal (Borón, 2000b; Fitoussi, 2004): toda decisión política favorece ciertos grupos por sobre otros; la cuestión es que, al menos en un contexto de democracia –incluso considerada en términos sólo procedimentales–, estos deben legitimarse ante el conjunto de la sociedad nacional. La democracia moderna, democracia capitalista, se caracteriza por ser capaz de contener potencialmente la incorporación al Estado de toda la sociedad en tanto *representada*.⁸² Es por esto que el

⁸¹ No se pretende afirmar aquí que la idea de nación tenga un contenido fijo o natural al cual remitir: al contrario, el modo en que se completa empíricamente la nación es una construcción política, en la que se disputan interpretaciones del pasado, sus mitos fundantes y sus promesas de consagración.

⁸² “La revolución producida por la clase burguesa en la concepción del derecho y, por ende, en la función de Estado consiste especialmente en la voluntad del conformismo (y, por consiguiente, eticidad del derecho y del Estado). Las clases dominantes eran en esencia conservadoras en el sentido de que no tendían a elaborar un acceso orgánico de las otras clases a la suya, vale decir, no tendían “técnica” e

Estado capitalista moderno se presenta como una *estructura hegemónica*: un dispositivo que requiere cierta universalización de las demandas, de modo de contener – al menos en potencia- otras demandas, unificadas en una comunidad proyectada. Es decir, la dominación en el Estado moderno y bajo un régimen democrático no puede expresarse nunca como dominio abierto y directo. Requiere de una mediación, en la que participan los partidos políticos y sus representantes, que permita estructurarla como un orden político: como señalamos al inicio de este capítulo, una distribución esperada de posiciones y roles entre los agentes sociales para alcanzar objetivos sociales comunes.

El Estado, entonces, define a las relaciones sociales estructurales conocidas como políticas. Por un lado, se trata de un conjunto de aparatos, que se distribuye en agencias y funcionarios. Podemos analizar esta distribución para detectar posibles vínculos con la disputa de poder entre agentes sociales de clase. Por otro lado, el Estado interviene en la sociedad, promoviendo ciertas relaciones en detrimento de otras –lo que es particularmente visible en relación a la acumulación. Podemos analizar estas intervenciones a través de la herramienta de las políticas públicas. Si bien la bibliografía de la administración pública tiende a separar su análisis del contexto político más general, es posible reintegrar su dinámica en el marco de la conflictividad aquí discutida. Las políticas públicas aparecen como condensaciones de fuerzas sociales –dentro y fuera del aparato del Estado- e interceden en el devenir de la disputa por el orden. Esta disputa, que definimos como el proceso político, atraviesa necesariamente el Estado si pretende lograr presentarse como un proyecto común de la comunidad política. Veremos esto en la sección siguiente.

5. Hegemonía

Según lo desarrollado hasta aquí, aceptamos que la sociedad está compuesta por múltiples relaciones sociales, de diverso grado de regularidad, y cuya interpretación está siempre sometida a disputa. A partir de las relaciones que consideramos más regulares, de dominación y explotación, definimos la existencia de agentes sociales de clase a

ideológicamente, a ampliar su esfera de clase: la concepción de casta cerrada. La clase burguesa (en cambio) se considera a sí misma como un organismo en continuo movimiento, capaz de absorber toda la sociedad, asimilándola a su nivel cultural y económico” (Gramsci, 1984: 214-215). Lechner (1978) insiste sobre esta idea.

partir de su organización como tales—de alguna forma, no hay aquí privilegio de una organización particular- para interpretar su situación. Esta intervención política está mediada por el carácter creativo de la representación. En tanto los agentes de clase busquen modificar la distribución de poder al interior de la sociedad, se ven compelidos a atravesar la estructura regular de relaciones políticas conocida como Estado. El Estado introduce una nueva dimensión creativa de la representación, que requiere de cierta potencia de universalidad, expresada en la idea de nación como polo de identidad. Los agentes de clase interactúan a través del Estado para disputar el orden político, tratando de redefinir los objetivos comunes que orientan a la sociedad, distribuyendo roles y tareas (ver supra).

El tipo de intervención política que busca construir un orden político a partir de las demandas e interpretaciones de un agente de clase dado, considerando demandas de otros agentes, es una acción *hegemónica*, y se distingue de otro tipo de intervenciones no orientadas en este sentido (Muñoz y Retamozo, 2013). Sin embargo, en nuestra propuesta, nos interesa evaluar la construcción de hegemonía como predicación del orden político: es decir, como tipo de orden con ciertas características. La hegemonía no es mera preeminencia, ni es una alianza de clases reforzada, ni un tipo de acción. La hegemonía constituye una forma particular de la dominación, expresada en un orden político que combina coerción y consenso expreso. Contra los enfoques que afirman la dispersión indefectible de las sociedades contemporáneas (Beasley-Murray, 2010), afirmamos la vigencia del enfoque de la hegemonía para pensar la constitución específica de la dominación.⁸³ Veamos en detalle.

La función del Estado como polo de identidad y, con ello, de unidad social puede pensarse en un nivel estructural, y estaremos ante una definición válida para el estudio de la modernidad estatal en general. Como vimos, si bien el Estado tiene el monopolio de la violencia normada, está compelido a sostenerse en una legitimidad social que

⁸³ Según Beasley-Murray, uno de los promotores de esta visión, la dominación se basaría más en el hábito, el afecto y “la multitud” que en la ideología forjada a través de la intervención del Estado. Se trata de una visión instrumental (responde a una “elite”) y reducida del Estado (sólo acepta sus intervenciones como aparato). Defendemos aquí la visión por la cual incluso los hábitos y el afecto están condicionados — aunque claro, no determinados— por la estructuración de las relaciones sociales a través del orden político. Sin dudas, cada individuo puede formar sus propias opiniones y afectos, la falacia de composición comienza al suponer que las forma desde un juicio independiente: la estructuración de los temas de agenda pública responde a disputas que se llevan adelante mediante representantes y organizaciones, composición del juego en la que los individuos toman —o no— postura luego. Pero el diseño del tablero ya está hecho.

exceda el uso de la violencia para lograr la aplicación obligatoria de sus actos legales, (Jessop, 2008). El Estado no es, pues, pura coerción, sino que mantiene una dimensión de consenso que es constitutiva de su propio carácter como relación social. Dice Errejón Galván (2012: 8): “(...) el monopolio de la violencia es sólo la *última ratio*, pero es el consenso, la consecución de la aceptación pasiva o activa de los gobernantes por parte de los gobernados, el pilar central en el que descansa el poder político”.

Tal como señalamos con Poulantzas, (1969a, 1980), las estructuras del Estado capitalista moderno son tales que ninguna clase puede alcanzar el dominio de sus aparatos e instituciones sin mediar una operación de universalización de sus intereses y demandas. A diferencia de otras instituciones de dominio político y otros Estados, el correspondiente a la modernidad capitalista requiere una mediación representativa: las clases sociales no se presentan directamente a controlar el Estado. La competencia por el control del Estado, en regímenes democráticos, se realiza a través de partidos políticos, que son votados por ciudadanos, reconocidos soberanos e iguales ante la ley (Althusser, 1970; Osorio, 2004b; Poulantzas, 1969b). Son los partidos los que se disputan el control (de parte) del aparato de Estado, en particular, del gobierno. La importancia de este aparato reside en que desde allí se intercede en la tramitación de demandas, según los límites ya discutidos (sección 4).

Ahora bien, si asumiéramos que los partidos tienen un carácter simple y directo de clase, jamás entenderíamos como el 5% de la población que es dueña de los medios de producción es capaz de ganar elecciones (a menos que se asuma al restante 95% como víctimas ingenuas de sistemáticos engaños, lo que aquí rechazamos de plano). Pero los partidos no son una mera correa de transmisión, sino, traducía Gramsci (1975) de Maquiavelo, una suerte de *príncipe moderno*. El príncipe, para llegar al gobierno y ejercerlo, debe realizar múltiples mediaciones para constituirse en representante de la comunidad –o parte de ella. La representación es una interpelación mutua, aunque posiblemente asimétrica, que da forma a la propia identidad de las partes: representantes y representados (Aboy Carlés, 2001a; Arditi, 2015; Vilas, 1995). En tal sentido, los partidos combinan de manera original distintas “poblaciones”, o, con mayor precisión para esta investigación, distintas clases y sus fracciones. Lo que es más, combinan de manera novedosa sus interpretaciones de lo común, sus demandas, sus reclamos. Incluso

más, hacen esta operación recurriendo a valores e ideas, que se recuperan de la historia compartida, buscando diferenciarse de otras articulaciones de sentido para la representación. Los partidos, que compiten por controlar una parte del Estado, son organizaciones que participan de la lucha de clases sin ser una clase.

Como señalamos, el Estado remite a cierta comunidad política que unifica lo que se presenta disperso en la sociedad: esa comunidad es la nación, y el Estado la representa creativamente, pues la nación no existe fuera de esa relación de representación. El Estado nacional como unidad ilusoria de lo social es un resultado de la disputa entre las clases. La nación es el espacio de la lucha de clases y no un simple instrumento de la burguesía, como la entendía una parte del marxismo: la disputa entre clases resulta en una división territorial del espacio porque los contendientes se asumen parte de una comunidad que las abriga, aunque sea conflictivamente. Las clases que son dominantes son las que logran que sus intereses, demandas, proyectos, interpretaciones, se presenten como las de toda la comunidad política nacional: la clase es “nacional” en tanto logra presentar sus intervenciones como las que representan a la nación. Como ésta no existe fuera de la disputa (Mazzeo, 2011), no se trata de una remisión a valores o ideas fijas. “Lo nacional “es un Proteo”, un proceso que reaparece una y otra vez, no está estáticamente dado para siempre” (Pereyra, 1988: 184).

Las clases, a través de sus agentes, se disputan la idea de la nación como comunidad unificada de lo social. Las clases se hallan así en mutua relación conflictiva, proponiendo interpretaciones de lo que constituya la idea de “lo nacional”, qué símbolos, valores, ideas, qué historia lo constituye. Nada de esto está dado. Para poder enaltecer aquello que constituyan sus demandas en un momento dado, deben entonces trasgredir sus propios límites y considerar qué buscan otros agentes de clase, pues “lo nacional” se debe distinguir de lo corporativo, como aquello limitado al interés (las demandas) particular. Y esta disputa por representar de la comunidad nacional, es decir, el Estado, se realiza a través de los partidos políticos. La disputa por la nación es una amalgama, es unificación y mixtura, protagonizada por los agentes de clase y los partidos (y sus intelectuales) (Hobsbawm, 1992; Wallerstein y Balibar, 1991).

Esa amalgama no es ningún tipo de alianza. La representación de la nación a través del Estado requiere de la formación de un proyecto de lo común, una

interpretación de lo que constituye el sustrato (inexistente por fuera de la representación) que unifica la sociedad. Ese proyecto es lo que Gramsci (1975) llamó voluntad nacional, y que aquí definimos como orden político. Ese orden propone un rumbo común, presentado como general, presenta las tareas necesarias para acercarse a esa comunidad, quiénes son los responsables, qué es lo que amenaza la plena constitución común. Retornado a palabras de Gramsci, supone una dirección política, como proyecto de reforma intelectual y moral, compone un cierto modo de vivir, de ser, actuar y pensar, una concepción del mundo que funda gustos y costumbres. La hegemonía, dice Aricó (2005: 112-113), construye a los propios sujetos y a la propia realidad a medida que deviene Estado. La hegemonía se convierte así en un proyecto de nación, de integración de la sociedad bajo la unidad nacional.

Según expusimos en las secciones 1.2.1 y 1.3.1 del capítulo 1, se puede entender la construcción de hegemonía de distintas formas. El planteo de la hegemonía surge para resolver el imposible paso de clases definidas de un modo economicista (por las relaciones respecto de los medios de producción) a un comportamiento político dado: las clases no se constituyen en un nivel del cual tienen que trascender luego, sino que toman forma concreta en la lucha de clases concretas, donde deben establecer relaciones políticas con otras clases, y en la medida de lo posible, recuperar sus intereses y demandas para volverlos suyos. Éste es el punto de vista que resaltó con sus aportes Gramsci (1975, 1981). Visto desde el ángulo propuesto por Laclau y Mouffe (1987) y Laclau (2006), es la forma de comprender la constitución de una voluntad nacional dada, toda vez que una parte logra proponerse como representante de la totalidad, operación discursiva equivalente al sinécdoque.

Hay una arista particularmente relevante del planteo post-fundacional, que resaltamos: lo real siempre excede lo que es plausible de ordenar simbólicamente. Más concretamente, *la construcción de hegemonía jamás es una tarea completa ni total*: siempre tiene un exceso dado por sentidos que escapan a la interpretación del grupo dirigente (cualquiera sea éste), que expresado políticamente se puede entender como la

existencia de remanentes de disenso, grupos que no acuerdan con el proyecto hegemónico. La dominación nunca es total.⁸⁴

Ahora bien, en el planteo post-fundacional de Laclau, nos encontramos con una aporía: tal como su propuesta sostiene, no se puede partir de los grupos para analizar políticamente la constitución de hegemonía. Sin remisión a grupos concretos, en distribuciones asimétricas de poder, la hegemonía parece un efecto del discurso que nadie pone en práctica. Dicho de otro modo, parece un efecto estructural sin agencia alguna. En los estudios empíricos (ver sección 1.3.2 del capítulo 1), esto se expresa en el exceso de énfasis en la estructuración del discurso por parte del líder, sin consideración del resto de los agentes que participan de la disputa política.⁸⁵ La pregunta de quién construye la hegemonía es imposible de contestar, porque ésta es la que construye a los sujetos políticos. Este planteo del problema enfatiza el exceso de contingencia de la matriz post-fundacional, que relega relativamente las relaciones sociales más estables.

Como hemos insistido, la permanencia de ciertos agentes sociales nos habilita a pensar no sólo la contingencia, sino también la persistencia: justamente porque existen históricamente, en distribuciones desiguales de poder, y con ello, de capacidad de estructurar discursos que ordenen la realidad, las clases sociales participan de la construcción de hegemonía, y se ven modificadas por ella. Aceptando esta premisa, se puede entender la hegemonía de dos grandes formas (Balsa, 2006).

En un primer sentido básico, se trataría de una “alianza de clases”, un acuerdo político entre agentes sociales pre-existentes. Se expresaría cuando “(...) la clase dominante logra articular sus propios intereses (cediendo hasta donde sea necesario) con intereses parciales de fracciones de las clases subalternas (o fracciones dominadas de la clase dominante) de modo de integrarlas en su propuesta hegemónica” (Balsa, 2006: 17). Se trata prácticamente de un cálculo de costos y beneficios, una acepción casi pre-gramsciana del término. La “voluntad hegemónica” no sería sino el efecto de una cierta correlación de fuerzas, de cierta interpenetración de demandas y discursos entre

⁸⁴ Este punto no estaba ausente de la reflexión original de Gramsci, pero pareció ocluida por las propuestas de Althusser y Poulantzas, que en un exceso especialmente marcado en el lenguaje estructuralista utilizado (Laclau, 1991), terminó por generar la *impresión* de una dominación completa, sin resquicios disponibles para la lucha de clases.

⁸⁵ El sujeto de la hegemonía sería en esta corriente de análisis el propio kirchnerismo (Biglieri, 2007; Orsini, 2007). Se mantiene como duda si se refiere con esto a lo que aquí denominamos proceso político, o a la fuerza política creada a partir de la llegada al gobierno del presidente Kirchner.

diferentes agentes: concesiones inteligentes para garantizar la preeminencia. Aunque muy utilizada en la economía política, esta acepción no se condice con nuestro planteo, ya que implicaría que la hegemonía se constituye a partir de una voluntad de una clase definida por fuera de la propia disputa (C. Pereyra, 1988).

En un segundo sentido, la hegemonía supone la generación de una dirección intelectual y moral. Esto significa, por un lado, la difusión del complejo de ideas y doctrinas de la clase dominante (intelectual), y por el otro, de sus preceptos de moral y ética, el conjunto de valores, prácticas y representaciones sociales. En esta acepción aparece implicada la trasposición de interpretaciones particulares como si fueran del conjunto social, y en particular, de los sectores subalternos (Isaac, 1987a; Jessop, 2008). Según Balsa (2006: 24-26), esta operación de universalización en la construcción de la voluntad general, se acompaña dos operaciones más; la de despolitización (ya que los intereses si son generales, no son de nadie, o en todo caso, son del colectivo representado, la nación) y la de deslizamiento (desplazar el eje de antagonismo social, mediante la descripción de lo que es, lo que es bueno y lo que es posible).⁸⁶

En la forma más densa de esta acepción, la hegemonía se vuelve la difusión de un determinado modo de vida que favorece la dominación existente. Se trata de anclar en bases vivenciales concretas la forma de las clases dominantes de entender el mundo: las estructuraciones más básicas de cómo funciona la realidad, que permiten ordenarla de acuerdo con valores de las clases dominantes. “La hegemonía es plena cuando cada uno acepta su lugar en el mundo capitalista, y los integrantes de las clases subalternas piensan que son incapaces de alterar la situación en la que viven” (Balsa, 2010a). La discusión sobre aparatos ideológicos se halla en este punto, por su función particularmente relevante en torno a la difusión de una visión del mundo (Balsa, 2006).⁸⁷

Proponemos entender *la hegemonía como una forma específica de dominación, caracterizada por la anuencia activa de los dominados*. Detengámonos a analizar esto.

⁸⁶ “La clase hegemónica es la que concentra en sí, en el nivel político, la *doble función* de representar el interés general del pueblo-nación y de detentar un dominio específico entre las clases y fracciones dominantes: y esto, en su relación particular con el Estado capitalista” (Poulantzas, 1969b: 175).

⁸⁷ Creemos que la discusión sobre los aparatos ideológicos ha aportado a señalar que la disputa por valores e ideas se materializa en instituciones, pero al mismo tiempo indujo a asumir la dominación como una relación total, sin fisuras, donde no tenía lugar la disputa.

La dominación moderna combina siempre –a través de la estructura estatal- diversos mecanismos de coerción y consenso. Como ya explicamos, el Estado remite a la comunidad ilusoria, y lograr su control –siempre parcial- implica incorporar en la disputa interpretaciones, demandas, significantes que superen las definiciones particularistas. Las clases no disputan directamente el control del Estado, son los partidos quienes lo hacen, y, según ya señalamos, los partidos no son *de* una clase. En la búsqueda por representar la comunidad nacional, los partidos políticos interactúan con los agentes de clase, buscando dar forma a un proyecto común, proyecto siempre difuso, contingente y conflictivo. Agentes que formulan interpretaciones de sus situaciones y formulan a partir de ellas demandas, estructuran estrategias de intervención, forman alianzas, etc. Esas interpretaciones y demandas no se definen de una vez y para siempre, sino que están sometidas a permanente cambio, merced de la interacción conflictiva con otros agentes, con los partidos políticos, con las estructuras estatales y económicas.

Sin embargo, estas demandas tampoco son contingencia absoluta y cambio permanente. En tanto pueden asentarse, estabilizarse como objetivos más o menos generales, podemos llamar a este conjunto como el proyecto político, que define tareas y roles para los integrantes de la comunidad –no necesariamente dispuestos en agentes de clase-. Estamos hablando de que un conjunto estable de interpretaciones, del que se derivan objetivos, roles, tareas, amenazas, puede constituirse en un orden político. Para que ello ocurra, necesariamente deben tener difusión a través de las estructuras estatales y económicas. En lo referido al Estado, esto implica ser gobierno.

Un orden político, dijimos, es este proyecto común, estos objetivos comunes, que distribuyen tareas, roles, y definen amenazas. Ahora bien, más allá de requerir cierta generalidad por atravesar la estructura estatal, no todo orden político es hegemónico. La dominación puede ser persistente por la vía de la coerción o por mecanismos de consenso negativo, como el miedo, la resignación y la apatía (Balsa, 2006; Piva, 2007; Thwaites Rey, 1994). La característica de estos mecanismos es que produce una desorganización relativa de las clases populares: dificulta su capacidad de representarse, de estructurar interpretaciones propias, de realizar reclamos o peticionar. Sectores desfavorecidos por las relaciones de explotación y dominación siempre existirán mientras las sociedades sean capitalistas; pero como ya discutimos (ver sección 3) esto

no es equivalente a la presencia de clases, que requieren de una dimensión organizativa para representarse. Si existen expresiones no organizadas de apoyo, y cada vez que las clases populares logran presentarse mediante sus organizaciones, lo hacen para repudiar el orden, éste no es de tipo hegemónico, aún cuando pueda ser perdurable, y pueda difundir valores e ideas que lo establezcan.

¿Cuándo un orden político es hegemónico? Cuando la forma de la dominación involucra no sólo mecanismos de coerción o consenso negativo (que pueden estar presentes), sino de consenso activo. Esto es, cuando *hay una inclusión real de las clases populares en el orden discursivo y en las políticas públicas, lo que promueve la interpretación por parte de sus propias organizaciones representativas de su anuencia con el orden político*. Es decir, si la constitución del orden político incorpora demandas, significantes, discursos que las organizaciones populares formulan, son éstas mismas las que pueden interpretar su inclusión, sin necesidad de que esto sea imputado por el investigador: las propias organizaciones lo ven así. Enfatizamos que la inclusión no puede restringirse a la dimensión discursiva, o nos veríamos engañados una y otra vez por la demagogia (“salariazos” y “revolución productiva” de la campaña de Menem), sino que debe expresarse en políticas públicas, es decir, en intervenciones constatables del Estado que cristalizan la relación entre clases. El Estado, como unificación de lo social, debe tramitar demandas de las clases populares, haciendo así concesiones simbólicas y materiales.⁸⁸ Cuando esto ocurre, las clases populares pueden interpretarlo de esta manera: la intervención pública para expresar anuencia es la manera de observar ese consenso activo –no hablamos necesariamente de verbalización, los actos públicos de expresión organizada pueden tomar diversas formas-. La presencia de las clases populares interviniendo públicamente a través de sus diferentes organizaciones es la forma visible de ese consenso activo. Cuando un orden político logra esto, diremos que es hegemónico: logra revestir la dominación de consenso.

¿Por qué este énfasis en distinguir tipos de órdenes políticos a través de la hegemonía como consenso activo? Porque de lo contrario el carácter hegemónico puede predicarse de ciertas intervenciones políticas, pero no del orden resultante. Si

⁸⁸ “Una reforma intelectual y moral no puede dejar de estar ligada a una reforma económica, o mejor, el programa de reforma económica es precisamente la manera concreta de presentarse de toda reforma intelectual y moral” (Gramsci, 1975: 31).

caracterizamos como hegemónico a cualquier orden construido a partir de un particular que asume la representación de la totalidad, básicamente todo gobierno democráticamente electo es hegemónico (algo que aparece en varios estudios empíricos). Pero entonces esta caracterización queda, por un lado, atrapada en la secuencia electoral (la Alianza habría construido una hegemonía, por ejemplo), y por otro, es incapaz de distinguir los mecanismos de dominación privilegiados (si el menemismo y el kirchnerismo son ambos igualmente hegemónicos, ¿qué los distingue?). Nuestro herramental teórico debe ser capaz de distinguir estas diferencias, y creemos que el concepto de hegemonía que proponemos lo hace. Accesoriamente, permite enfatizar la continuidad –obliterada en el planteo post-fundacional- de las relaciones de dominación: la hegemonía expresa un tipo de dominación.⁸⁹

De lo que desarrollamos hasta aquí queda claro que el orden político requiere atravesar las relaciones estructurales estatales (y económicas). Pero esto no es equivalente a decir que la dominación sólo se exprese en el Estado, o por su cuenta. El orden político implica a toda la sociedad, y condiciona la disputa política por mantener o alterarlo. Carlos Pereyra (1988) propone entender como *patrón de dominación* a la forma estable que adquiere la dominación, con independencia de su expresión en el aparato estatal o fuera de él. El proceso político involucra a agentes de clase y al Estado, en interacciones creativas y conflictivas, superando al sistema político en sentido restringido (ver sección 6.2). Los discursos en pugna, y en particular, el emanado desde el gobierno como síntesis de las relaciones políticas, forman parte de este patrón de dominación, porque expresan las interpretaciones en pugna, pero no lo agotan.

Entonces, *predicamos el carácter hegemónico del orden político, de la forma de la dominación*. No debe confundirse con el proceso político que le da lugar, pues existen diversas formas de constituir un orden hegemónico, que no desarrollamos aquí (Balsa, 2010b: 13).⁹⁰ Nos interesa resumir una forma específica de construir hegemonía, y es a través de la forma populista del proceso político.

⁸⁹ Insistimos: el capitalismo se caracteriza por relaciones persistentes de dominación y explotación. Pero decir que la sociedad es capitalista no parece suficiente para explicar procesos políticos concretos, ni los órdenes resultantes. La dominación combina coerción y mecanismos de consenso, pasivo y activo. La dominación en el capitalismo no es pura fuerza o imposición.

⁹⁰ Por ejemplo, habría que discutir el Estado de Bienestar tal como se estructuró en los países centrales.

Errejón Galván (2011) sintetiza a la interpelación populista como aquella que realiza las siguientes operaciones: i) construcción de un *nosotros* basado en la exclusión institucional (“el pueblo”), que incluye un campo amplio de referencias simbólicas a las tradiciones, valores, opiniones e ideas contenidas en el campo popular (Balsa, 2010b; Errejón Galván, 2012a); ii) construcción de un *ellos*, basado en su relación a los centros de poder, que determina su carácter de elites, oligarquía, representantes del sistema, etc.; iii) la dicotomización entre ambas partes contiene una convocatoria *refundacionalista*, la búsqueda por realizar cambios que adecuen las instituciones al “país real” (Aboy Carlés, 2001b), una solución imaginada para los problemas del país; iv) dado que busca readecuar todas las instituciones, aún cuando opere a través de ellas, la apelación populista no construye legitimidad sólo a partir de las mismas, sino del “nosotros” por el que dice hablar. Agregamos de nuestra cuenta 3 características más.

Siguiendo a Laclau (2006c), remarcamos que v) la operación de construcción del “nosotros-pueblo” se ve consolidada con la emergencia de un liderazgo que lo unifique, que sea capaz de representar la exclusión de que son parte el pueblo-relegado, pero más aún, que complete la articulación de sus demandas generando una nueva identidad. El liderazgo agrega a la relación de representación componentes y características que no estaban allí antes. En relación a nuestra investigación, es que nos importa el *kirchnerismo* como orden político porque entendemos que Néstor Kircher –y luego, Cristina Fernández- agregó al proceso algo que no estaba allí antes. De lo contrario, en lugar de estudiar el kirchnerismo, estudiaríamos el “bonapartismo argentino del siglo XXI” o “la revolución pasiva” o algo semejante.

Siguiendo a Aboy Carlés (2001a, 2005, 2010), resaltamos la importancia de vi) la conquista del gobierno, en orden de ser capaz de operar sobre la tensión refundación-democracia, la administración y la política, la lógica diferencial y la equivalencial. El populismo se caracteriza por una serie de tensiones que le son características, que administra de modo permanente y polémico: entre ruptura y estabilización, entre la parte y el todo que representa (*plebs* y *populus*), entre ruptura y sutura, hegemonía y democracia. Sin operar sobre estas tensiones a partir de la experiencia de gobierno, el populismo queda atrapado en la pura discursividad como narración.

Y tal como propone Balsa (2010b), vii) el populismo implica la regulación de la acumulación en una forma tal que permita cierta incorporación –subordinada, parcial- de las clases populares y sus demandas (en términos generales, se puede proponer que admita la creación de empleo y la recuperación salarial, ampliación del a política social). Éste sería un olvido del planteo de Laclau, pues, según señala Balsa (2010b: 23),

Toda hegemonía necesita basarse en un modelo de acumulación que sea viable en términos de no solo considerar los intereses de las clases y fracciones de clases (tanto aliadas como dominadas pero hegemonizadas), sino también de garantizar la reproducción de la sociedad en su conjunto.

Recuperando de conjunto lo discutido hasta aquí, podemos resumir la perspectiva teórica como sigue. La sociedad es un conjunto semi-caótico de relaciones sociales, que incluyen bajo el capitalismo las relaciones estructurales de dominación y explotación. Esto induce a una conflictividad inmanente, que se expresa en diferentes antagonismos, contruidos a partir de las interpretaciones de las organizaciones de clase. Esta conflictividad no reconoce ningún ámbito particular para desarrollarse. Sin embargo, cualquier agente que busque que sus interpretaciones, objetivos y estrategias logren privilegiarse necesita estabilizarlas a través de las estructuras estatales, que permiten su generalización. Pero, justamente, la característica estructural de generalización del Estado implica una transformación de estas interpretaciones y demandas, que debe trasgredir su particularidad. Los partidos políticos son las organizaciones que cumplen esta tarea de transformación representativa, interactuando con agentes de clase. Cuando un conjunto –discursivamente elaborado—de interpretaciones, demandas, estrategias se logra estabilizar y ganar una posición privilegiada en el Estado, como representante de la comunidad política, se conforma un orden político.

El orden político, como distribución esperada de posiciones y roles entre los agentes sociales para alcanzar objetivos sociales comunes, propone una imagen unitaria de sí misma a la sociedad, una comunidad imaginada que funciona como mito trascendente (Laclau, 1993). Esos objetivos son una traducción inestable, imprecisa quizás, de esa utopía de rumbo unificado para la sociedad. El orden político es instituyente respecto de lo social, lo interrumpe proponiendo cierta unidad que lo coligue

(Retamozo y Stoessel, 2014). *El orden político es una propuesta de tareas y responsables para que la sociedad alcance su plenitud*, así como una advertencia de las amenazas que la ponen en riesgo.

Cuando el orden político logra considerar discursivamente (incorporar significantes, reconocer en la narración) y tramitar demandas de las clases populares, estimulando la expresión abierta de consenso de parte de éstas, diremos que el orden es de tipo hegemónico. Esto expresa una forma particular de las relaciones de dominación: no es una alternativa a éstas. Se pueden lograr órdenes hegemónicos por más de una vía, nos interesa aquí remarcar como una de ellas a la forma populista del proceso político. Al estructurar una ruptura del orden político que toma en consideración demandas populares, el populismo puede dar lugar a un orden hegemónico.

6. Modo de desarrollo

Nos parece importante cerrar este capítulo con una recuperación de conjunto de los planteos asociados a la investigación propuesta. Se analiza aquí al kirchnerismo como un orden político hegemónico, construido a partir de un proceso populista. En este sentido, proponemos pensar el proceso como la incorporación real de demandas de clases populares a partir de una lógica de construcción política específica.

Esto no significa que las clases populares pasen a ser gobierno durante el kirchnerismo, ni que dirijan el proceso político: sólo implica que sus demandas fueron consideradas, en el discurso y en las políticas públicas. El kirchnerismo, entendido de esta forma, no fue el resultado de ninguna voluntad particular: ni del presidente Néstor Kirchner, ni de su sucesora, Cristina Fernández, ni del gobierno nacional post 2003, ni de la fuerza política Frente para la Victoria (FpV), ni de una clase social o alguna de sus fracciones. El kirchnerismo es el orden político, la estructuración específica de las relaciones sociales que da lugar a cierta representación de la Argentina contemporánea. En el proceso político subyacente, los agentes sociales interpretan sus propias situaciones en relación a otros agentes, y actúan a partir de ello. El resultado combinado de las distintas estrategias de acción escapó al control de cualquier agente social tomado por separado.

El proceso político proviene de una multiplicidad de relaciones de antagonismo, resultantes de las interpretaciones señaladas de los agentes sociales. Sus raíces, por tanto, se hunden en el tiempo más allá de su nominación como tal: no es la llegada de Néstor Kirchner el inicio del proceso, sino uno de sus momentos álgidos. La forma concreta de las relaciones entre agentes de clase -lo que incluye un conjunto de solidaridades y antagonismos, de demandas, de discursos- se estructuró antes de que Kirchner apareciera en escena. El flamante presidente tuvo sus méritos en la forma concreta que adoptaron estas relaciones en los años siguientes a su llegada, y eso será estudiado en esta tesis; no en vano, definimos al orden político como kirchnerista, y no de otra manera.

Ahora bien, ¿qué estructura la disputa política? No hay determinismo posible que defina en torno a qué elementos de la realidad se desenvolverá una disputa política cualquiera. Sin embargo, es posible suponer –como hemos hecho- que existe una superficie de inscripción dada de las situaciones comprendidas como problemáticas por los agentes de clase. Hablamos de las relaciones de dominación y explotación. Estas relaciones estructurales no son sólo una tendencia genérica del capitalismo, sino que, como explicamos ya, se organizan regularmente en torno a ciertos privilegios, objetivos, sentidos. Estas regularidades las podemos estudiar, para detectar las mutaciones de las relaciones sociales en su doble faceta de cambio y continuidad.

El proceso político es la disputa que tiene lugar en un marco más amplio, que llamaremos *modo de desarrollo*.⁹¹ Con este concepto apuntamos a *explicar formas concretas de organización de la sociedad capitalista, regulares en períodos de tiempo específicos*. Es decir, se trata de una herramienta conceptual útil para *periodizar las trayectorias históricas*, capaz de definir etapas en el cambio de una sociedad nacional (sin relación alguna con conceptos evolutivos de progreso pre-definido). La propuesta es abstraer el modo de desarrollo de la realidad empírica, no como puro inductivismo, sino mediado por categorías teóricas definidas lógicamente. Su método por excelencia es el

⁹¹ El concepto de modo de desarrollo, sus dimensiones y las discusiones asociadas, han sido elaboradas junto a Agustina Costantino (ver discusión detallada en Costantino, 2015). El concepto se fue puliendo en sucesivas publicaciones sometidas a discusiones de pares (Cantamutto y Costantino, 2014; Costantino y Cantamutto, 2014).

histórico: no establecemos una tipología formal de modos de desarrollo, sino que nos interesa cómo se configuran según su ocurrencia en la realidad.

Por su naturaleza, no pretende exceder la categoría marxista de modo de producción, sino más bien ubicarse en un menor nivel de abstracción, de mayor concreción empírica. Asimismo, su aplicación está centrada en sociedades nacionales, debido a la existencia de la estructura estatal, con capacidad de llevar adelante políticas de ejecución obligatoria, que coagulan, cristalizan una relación de fuerzas sociales en un momento dado.⁹² Es a través del Estado que los agentes de clase generalizan sus demandas y discursos, expresándolos en intervenciones concretas –y un discurso “oficial” que las ordena. La disputa por el orden político, esto es, el proceso político, toma curso al interior de un modo de desarrollo, y se explica como una de sus dimensiones (patrón de dominación). Cuando cierto conjunto de discursos logra estructurarse a través del Estado, propone una serie de regularidades identificables: el orden político (ver sección 4).

El concepto es semejante al utilizado por López (2013) o Svampa (2005), o al de “modo de acumulación” (Arceo, 2011; Belloni y Wainer, 2014b; Wainer, 2010). No es equivalente a la noción regulacionista homónima (Lanata Briones y Lo Vuolo, 2011; Neffa, 1998) que enfatizan las formas institucionales estables que regulan la acumulación, desplazando la importancia de las disputas políticas. Los conceptos de patrón de acumulación (Basualdo, 2007; Valenzuela Feijóo, 1990) y patrón de reproducción del capital (Osorio, 2008) reconocen la importancia de la dimensión de conflictividad política, pero no la abordan metodológicamente. La noción cepalina de estilos de desarrollo (Pinto, 2008) es más limitada aún, centrándose únicamente en una caracterización económica.

Podemos caracterizar como una *etapa* del modo de desarrollo a la forma regular que toma la acumulación del capital y la dominación a través del Estado, estructurando cierta forma de la conflictividad social y política. Aunque la definición parece un tanto abstracta, la determinación histórica permite poner, a partir de las dimensiones que

⁹² Aunque ciertamente se podrían pensar adecuaciones del concepto, no consideramos adecuado hablar de modo de desarrollo a nivel subnacional o supranacional. Existen algunas determinaciones –como, por ejemplo, la moneda, el sistema de pesos y medidas, o el sistema de contratos– que se definen a escala nacional, siendo por ello motivo de presiones organizadas a esa escala.

desarrollamos a continuación, en perspectiva los trazos de continuidad: ¿cuáles son los límites infranqueables que distinguen a un modo de desarrollo? ¿Y cuáles son las contradicciones internas y los antagonismos que lo reproducen? Establecidos éstos, se pueden identificar variaciones internas al modo de desarrollo, cuando se observan cambios en una o algunas de las subdimensiones. En este caso, hablaremos de *fase* del modo de desarrollo. Según nuestra propuesta, *habrá un cambio en la etapa del modo de desarrollo cuando coincidan, en un lapso de tiempo de corta o mediana duración, cambios en todas las dimensiones en un mismo sentido o dirección. Si el cambio se expresa sólo en algunas dimensiones, hablaremos de un cambio de fase, más no de etapa.*

Por supuesto, lo que comienza como una nueva fase puede evolucionar en una nueva etapa del modo de desarrollo, toda vez que acabe por afectar las demás dimensiones. En este sentido, no hay un presupuesto teleológico de los cambios en una coyuntura dada: a partir de la modificación en una dimensión se pueden desplegar contradicciones y conflictos que acaben por modificar al conjunto del modo de desarrollo, pero también puede ser que se establezcan los cambios en esa dimensión sin provocar modificaciones en el resto. Es decir, no hay filosofía finalista de la historia, no hay en esta propuesta un supuesto *a priori* del desenlace de los cambios. Así, la metodología de análisis que resulta de aquí permite estudiar etapas históricas con rigurosidad científica (basada en la replicabilidad del método), y permitirá, en el análisis de coyuntura, identificar los puntos de continuidad y de cambio como una totalidad, sin por ello predecir el resultado futuro.

La herramienta tiene una orientación explicativa, mas no predictiva: de acuerdo a todo lo que hemos desarrollado en este capítulo, queda claro que la contingencia aceptada no es total, pero sí constitutiva. Justamente, el proceso político analizado en la presente investigación se inició en la crisis de la fase neoliberal del modo de desarrollo, y se dio continuidad en esta nueva fase a partir de 2002. Las continuidades estructurales en el PRE, en ciertas políticas públicas y en ciertas relaciones de poder estructural – como se verá a lo largo de los capítulos empíricos- marcan que se trataría de la misma etapa del modo de desarrollo, que ingresó en una nueva fase. Esto condiciona límites del proceso, y define continuidades que servirán para explicar el proceso político. Ahora

bien, en el marco de este proceso, no hay nada que evite que esta nueva fase derive en cambios en todas las dimensiones en una misma dirección, llevando a una nueva etapa. Pero este desenlace no está predicho en la configuración actual, sino sólo condicionado.

Una gran parte de la discusión para caracterizar el período depende de cómo se consideren las dimensiones referidas. La matriz post-fundacional abreva de lleno a las disputas políticas de los representantes en el Estado y de las clases populares, considerando en particular el discurso gubernamental, pero omitiendo un tratamiento sistemático de las disputas al interior del BEP, del PRE y de las políticas públicas, que tienden a ser incorporadas sólo cuando aportan al mismo sentido de la interpretación que se quiere postular. Esto lleva a reforzar el quiebre en 2003 con la llegada al gobierno de Néstor Kirchner. Los estudios de la matriz marxista prestan mayor atención a disputas del BEP, las políticas públicas y el PRE, relegando las consideraciones sobre las disputas de las clases populares, de los representantes en el Estado y del discurso gubernamental, que tienden a ser leídos como engaños o distorsiones. Esto lleva a discutir los cambios en 2002, bajo la presidencia de Eduardo Duhalde.

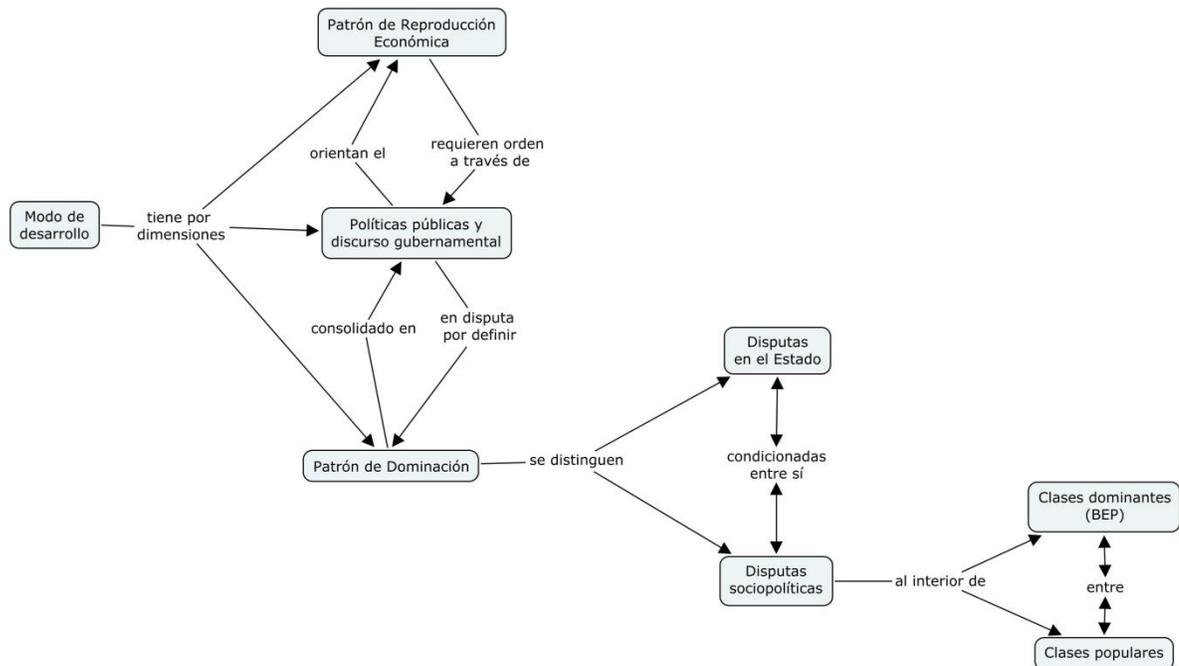
Por eso, debe enfatizarse una vez más que se trata de una distinción metodológica, analítica, es decir, basada en el propósito metodológico de abordar una realidad de modo ordenado y coherente, y no ontológica. No se asume que las dimensiones propuestas sean características de la realidad (sección 1) sino que son herramientas de investigación, que ordenan los hechos para reponer la lógica del proceso (sección 2). A pesar de que cada una de ellas tiene cierta autonomía relativa, no se le da prioridad explicativa a ninguna. Las relaciones estructurales, regulares, se expresan en la economía –PRE- tanto como en la política (Patrón de dominación). Lo mismo ocurre con la contingencia y el cambio, que se puede encontrar en ambas dimensiones. No hay presupuesto ni economicista (la acumulación lo determinaría todo) ni politicista (el Estado, o algún agente político, determina qué se hace *ex nihilo*): el cambio puede originarse en cualquier subdimensión, condicionando a las demás, y retroalimentando la dinámica de cambio.⁹³

El modo de desarrollo tiene tres dimensiones básicas, como se puede ver en la ilustración 1. Esas dimensiones son (6.1) el patrón de reproducción económica, (6.2) el

⁹³ Esta discusión fue planteada en estos términos por López (2013).

patrón de dominación, y (6.3) las políticas públicas y el discurso gubernamental. Desarrollamos cada una de ellas a continuación.

Ilustración 1. Modo de desarrollo y sus dimensiones



Fuente: elaboración propia.

6.1. Patrón de reproducción económica (PRE)

Se trata de la dimensión económica del modo de desarrollo: ¿cómo se organiza la reproducción material de la vida? Se trata de la dimensión explícitamente más desarrollada por el enfoque estructuralista cepalino (Pinto, 2008; Sunkel y Paz, 2005). El enfoque dependientista se desarrolló criticando el sesgo economicista de la CEPAL (Beigel, 2006; Borón, 2008; dos Santos, 1998). Los autores de raíz marxista, aunque reconocen la relevancia teórica de las otras dimensiones, tienden a desarrollar metodológica y empíricamente esta misma dimensión (Basualdo, 2007; Osorio, 2004a, 2008; Valenzuela Feijóo, 1990). Este énfasis, entonces, no tiene que ver con la ignorancia de otras dimensiones, sino con un problema de foco de atención.

La acumulación refiere al proceso por el cual el capital se expande, a través de su aplicación a la producción de mercancías. En este sentido, se entiende que, en el modo capitalista de producción, el capital-dinero es transformado en bienes y servicios, para ser vendidos buscando obtener una ganancia, logrando así un capital-dinero mayor en el momento final. Esta decisión de invertir en la producción es tomada individualmente por los poseedores del capital, atendiendo a las propias expectativas para valorar la potencial verificación futura de esta expansión de su capital. Este proceso se repite entre las múltiples unidades que componen el sistema económico, debiendo incurrir en diversos mecanismos de coordinación, no necesariamente exitosos (Shaikh, 2006). El marxismo entiende que un sistema de este tipo se enfrenta a obstáculos de diverso tipo (coyunturales, estructurales, históricos), que le impiden progresar indefinidamente sin realizar ajustes sustantivos (Astarita, 2006, 2008; Félix, 2008).

De acuerdo a la forma que tomen estos ajustes, se definen temporalidades específicas en la acumulación de capital, más concretas que la categoría de modo de acumulación. Las regularidades que se pueden identificar en el proceso de acumulación, la “huella” dejada al pasar por la producción y la circulación (Osorio, 2004a), se puede llamar *patrón de reproducción económica del capital*. Podemos entender por este concepto a un criterio de periodización que “(...) apunta a dar cuenta de las formas como el capital se reproduce en períodos históricos específicos y en espacios económico-geográficos y sociales determinados” (Osorio, 2008: 150). Se pueden identificar subdimensiones, ligadas a la forma específica que adquiere la generación, circulación y distribución del excedente. Por ello, proponemos analizar (F. Barrera y López, 2010; Cantamutto, 2012b):

i) *El contexto externo*, que caracteriza la relación del “espacio nacional de acumulación” con la economía mundial, lo que se puede observar a través de los flujos de capital en sus diversas formas: mercancías (intercambio comercial), préstamos, inversión, pagos al capital, etc. El balance de pagos es la herramienta clave para analizar esta relación.

ii) *La acumulación propiamente dicha*, que identifica la intensidad del proceso (a través de la generación de valor agregado y su inversión), así como los agentes que lo

guían (empresas nacionales, extranjeras o estatales), y las fuentes de financiamiento a las que recurren (excedente interno, préstamos, etc.).

iii) *La producción*, que identifica qué sectores o ramas lideran el crecimiento, nivel de ocupación de los factores, productividad.

iv) *La distribución de los excedentes*, o del ingreso, que tiene origen en una determinada “constelación” de precios relativos (Vitelli, 1990), a partir de la cual se pueden hacer visibles la tasa de ganancia, los salarios reales, y la distribución del ingreso.

Es posible lograr una descripción acabada del proceso de acumulación con base en estas dimensiones, dando cuenta de las continuidades y rupturas que en ellas se den durante el período estudiado. Todas las subdimensiones señaladas poseen indicadores disponibles en las estadísticas nacionales, y algunos trabajos especializados en la materia. Un punto central en la definición de un patrón de acumulación es identificar las principales contradicciones a partir del análisis de estas dimensiones: ¿qué procesos, al mismo tiempo que favorecen la acumulación, señalan límites para su reproducción? La especificación de estas contradicciones debe dar cuenta de los obstáculos endógenos que el proceso contiene (Félix y López, 2010). Estas barreras y límites a la acumulación establecen periodicidades detectables en las regularidades de la acumulación.

Las relaciones estructurales económicas se expresan en esta dimensión. Sin embargo, su determinación no es un efecto puro de decisiones individuales ni del capital por cuenta propia. La determinación de las regulaciones básicas para la toma de decisiones está en manos del Estado, a través de las políticas públicas (ver sección 6.3). Por eso, las clases –que reproducen su vida material a través del proceso de acumulación capitalista- necesitan influir sobre el Estado (ver sección 6.2), para lograr definiciones de política que se ajusten mejor a sus necesidades o demandas. El capital, sin embargo, cuenta con una capacidad de influencia ligada a la propiedad de los medios de producción y el control del proceso de trabajo, poder que llamamos estructural, y le permite condicionar al Estado sin necesidad de actuar (ver secciones 3 y 4). El análisis del PRE nos permite detectar la economía política del proceso (ganadores y perdedores), así como las fracciones de clase que detentan mayor poder estructural. En una economía

dependiente, como la argentina, el capital extranjero tiende a detentar este poder de manera sistemática, pero no ocurre lo mismo con otras fracciones, como veremos.

6.2. Patrón de dominación

Se trata de la dimensión política del modo de desarrollo. La misma se estudia desde la perspectiva ya explicada de continuidad en la dominación de clase en la sociedad capitalista, pero aceptando que ésta admite gran variabilidad pues, como decía Portantiero (1977), se pueden estudiar tanto patrones de reproducción del capital, como patrones de legitimación o, con más precisión, de dominación. Esta dimensión apunta en ese sentido, establecer los patrones, las regularidades encontradas en las disputas por orientar el proceso social y las formas de obtener legitimidad en la construcción de esa orientación. Asimismo, esta dimensión permite estudiar el cambio, la contingencia resultante de la lucha de clases y la conflictividad social en general. Se estudian entonces en esta dimensión las relaciones políticas conjugando estructura y contingencia. Para ordenar su estudio, se proponen las siguientes subdimensiones:

i) *Representantes en el Estado*: se estudia la configuración del sistema político, atendiendo a las relaciones entre los tres poderes del Estado, y los partidos políticos en competencia. Eso significa explicar la fisonomía cambiante de los partidos políticos según su participación en los poderes del Estado, sus relaciones con los agentes de clase, y las disputas ideológico-políticas.

ii) *Disputas sociopolíticas*: como ya insistimos, aunque para lograr la difusión generalizada y consolidarse la estructura estatal es ineludible, la disputa por orientar el orden político en un sentido u otro no reconoce limitaciones institucionales, y atraviesa todo el espacio de lo social. Esto permite estudiar las disputas políticas entre agentes sociales que la ciencia política suele excluir. Concretamente, agrupamos estos agentes de clase (ver sección 3) en dos grandes grupos: *las clases dominantes* (o BEP) y *las clases populares*. Estos conjuntos construyen solidaridades y tienen disputas internas a sí mismas, y entre sí. Es necesario analizar y ordenar estas disputas, para poder comprender sus posibles relaciones con las estructuras estatales. Estas disputas y solidaridades se constituyen en mutua relación, y se expresan en acciones públicas de

diversa índole: actos, movilizaciones, protestas, declaraciones, reuniones entre representantes, etc.

Es muy importante detectar en estas subdimensiones las interpretaciones de los propios agentes de clase y partidos. La disputa política admite diversos recursos, y los discursos son un aspecto de ella (ver sección 1): para analizar cómo se construyen diferentes interpretaciones, es central observar esta polémica. Se estudia de esta forma cuáles son las demandas y peticiones de los agentes, así como los significantes que utilizan para estructurar sus discursos. Incluso se puede reconstruir así los puentes discursivos que permiten trazar solidaridades (Schuttenberg, 2011).

El estudio de esta dimensión del patrón de dominación permite verificar regularidades y cambios, pero además, permite ver paralelos y desfasajes con la dimensión del PRE. Un error común en los estudios del estructuralismo marxista es asumir por dominante las fracciones del BEP que son ganadoras en el PRE: pero esto es una imputación externa, no analizada. Aunque ciertamente los recursos económicos constituyen parte de los insumos de las posiciones de poder político, la relación no es automática, y estudiar en detalle sus sincronías y interrupciones puede ser de interés.

6.3. Políticas públicas y discurso gubernamental

Uno de los puntos de intersección entre las dimensiones económicas y políticas del modo de desarrollo se expresa en las políticas públicas y el discurso gubernamental. Se suele estudiar desde la administración pública a las políticas en su dinámica aislada, bajo presupuestos de diverso tipo de racionalidad (W. Parsons, 2007). En el mejor de los casos, se acepta la existencia de presiones externas por grupos organizados (Grossman y Helpman, 2001). Sin embargo, es posible pensar las políticas públicas y el discurso gubernamental que las inscribe en una narración que busca darles coherencia, como una cristalización de cierta situación socio-política.

Desde una matriz marxista, Briones (1988) ha señalado que se puede entender a las políticas públicas como expresión de una cierta coalición de intereses de clase. Tanto a través de representantes en el Estado como mediante un juego de presiones externas (dimensiones analizadas en el patrón de dominación), es posible condicionar la orientación esperada de las políticas públicas. Éstas expresan, en definitiva, una forma

de llevar adelante el orden político que se intenta estructurar, que está en permanente disputa, son la forma condensada que adopta la relación de fuerzas entre los agentes sociales en disputa, que se expresa en intervenciones concretas establecidas desde el aparato estatal, y por ello mismo, tienen fuerza coactiva (son de aplicación obligatoria en un territorio dado). El discurso del gobierno, por sus condiciones de enunciación, tiene una especial importancia en la disputa política general, pues traza directrices que proponen un orden de sentido para esas políticas, y por eso debe estudiárselo de modo separado. La intervención organizada a través de la estructura estatal, pues, juega un rol clave en la disputa política, como dice Muñoz (2010: 68):

Con el paso del tiempo (otorgado por el período entre elecciones), las políticas públicas son una herramienta para la construcción hegemónica. Estas pueden reconfigurar el espacio social de manera de lograr los consensos necesarios, debilitar las oposiciones políticas y tienen la capacidad, incluso, de crear nuevas demandas que sustituyan las previas.

En esta dimensión, estudiaremos cuáles son las políticas públicas de cada momento del proceso político, y cuál el discurso gubernamental que las contiene, al menos en el sentido esperado del orden político. Las políticas y el discurso “oficial” traducen el orden político y permiten estudiarlo. Asimismo, se estudia las relaciones de esta dimensión con las contradicciones del PRE y las disputas del patrón de dominación. La forma que adquiere el aparato estatal, en agencias especializadas, permite visualizar el orden más regular de las relaciones con agentes sociales, mediante las funciones típicamente esperadas. Asimismo, la composición de los funcionarios, y su relación con agentes de clase y partidos políticos, permite reconstruir los rasgos más instrumentales del Estado.

De conjunto, entonces, estudiaremos a continuación el proceso político argentino, que dio por resultado un orden político hegemónico. Para hacerlo, se ordenará el proceso en el marco del modo de desarrollo, que permitirá ordenar de modo coherente, las continuidades y cambios que procedieron en la disputa política. Cada capítulo empírico agrupa un momento del proceso político, y lo estudia analizando cada dimensión por separado, siguiendo siempre la misma lógica de exposición.



FLACSO
MEXICO

CAPÍTULO 3. CRISIS DEL ORDEN NEOLIBERAL

El primer momento analizado en esta investigación es el que va de mediados de 1998 a diciembre de 2001, y constituye el inicio del proceso político de construcción de hegemonía en clave populista. En 1998, el orden político neoliberal comenzó a mostrar sus resquebrajamientos. Ante un cambio en la situación internacional, los agentes sociales comenzaron a desplegar una serie de demandas que este orden no es capaz de procesar. Esto impulsó una modificación de sus interpretaciones respecto del mismo, que se construyeron con base en los nuevos recorridos de acercamientos y alejamientos entre los propios agentes.

El gran resultado de este período analizado fue *la imposibilidad de dar continuidad al orden político tal como estaba estructurado*: el progresivo aislamiento de las fracciones de la gran burguesía y el gobierno condicionó las políticas públicas en un sentido de continuidad que promovió crecientes oposiciones, que acabaron en la ruptura de este orden. Se analizan aquí estos cambios, mostrando la multiplicidad de demandas y agentes relegados, que dieron lugar a la crisis del orden neoliberal y, por ende, el final de una fase del modo de desarrollo. Para ello, la primera sección inicia con una explicación de esta fase, que fue la que entró en crisis. Las secciones siguientes se corresponden con las dimensiones conceptuales propuestas (sección 6 del capítulo 2).⁹⁴

1. El orden neoliberal

A principios de los '70, el capitalismo global comenzó a desarrollar una serie de cambios que dieron por finalizada la organización de postguerra emergente de los tratados de Bretton Woods. La dura experiencia bélica posibilitó la rehabilitación de la acumulación a partir de la combinación de: a) un insignificante costo laboral; b) las oportunidades de inversión ligadas a la reconstrucción de Europa; c) un importante desarrollo tecnológico con posibilidades de aplicaciones civiles; y d) la preeminencia definitiva del capital estadounidense (sólo competido por la potencia soviética). El

⁹⁴ Este capítulo debe mucho a trabajos previos realizados por el autor con Andrés Wainer y con Adrián Velázquez (Cantamutto y Velázquez, 2014; Cantamutto y Wainer, 2013). Cualquier reiteración de esos trabajos sólo enfatiza en valor de sus aportes a esta tesis.

desgaste de estos factores generó una presión descendente sobre la tasa de ganancia en los países centrales, que indujo a fuertes cambios durante la referida década.

A partir de esos años, el sistema financiero y monetario mundial se altera, al determinarse la libre flotación y la inconvertibilidad del dólar, moneda que fungía como unidad de referencia y reserva de valor a escala global. Mediante diversos acuerdos, se inicia una progresiva liberalización de los flujos de capital, tanto financieros como comerciales, promoviendo una creciente integración de la economía mundial. A partir de estas nuevas posibilidades, y gracias al abaratamiento de los costos de transporte y comunicación (gracias a una nueva revolución tecnológica), las corporaciones de los países centrales inician un proceso de inversiones extraterritoriales que alteran la organización del proceso productivo en el mundo, en lo que se conoce como deslocalización y fragmentación productiva. El paulatino desmantelamiento de las instituciones del Estado de Bienestar permitió la flexibilización y precarización de la fuerza de trabajo en esos países. El ingreso de China al mercado capitalista mundial, seguido por la URSS en la década siguiente, significaría tanto un nuevo marco de oportunidades rentables de inversión, como una presión descendente sobre los salarios y condiciones laborales del mundo entero. Con el abandono definitivo del régimen socialista por parte de la URSS esas oportunidades se acrecentarían, magnificadas por el triunfalismo ideológico de la agenda política neoconservadora. Este proceso de cambios fue descrito como mundialización, o también como globalización.⁹⁵

Como proyecto social, se caracterizó por una avanzada del capital concentrado – bajo el comando de su fracción financiera- sobre las conquistas de las clases populares, en términos políticos (desorganización de clase), económicos (incremento de la explotación de la fuerza de trabajo) y culturales (individualismo y consumismo). La reorganización del territorio mundial con base en criterios de producción y geopolítica reactualizó los mecanismos del imperialismo histórico. Cada país gestionó, en cierta medida, los alcances de este proceso, en función sus propias trayectorias y disputas políticas. No obstante, como premisa general, se erigió la idea de que “no había

⁹⁵ No corresponde desarrollar aquí el debate sobre las razones y los alcances de estos cambios. Ver, entre otros, (Astarita, 2006; Block, 1989; Harvey, 2007; Hobsbawm, 2003; Ianni, 2011; Osorio, 2004b; Sotelo Valencia, 2002; Ugarteche, 2009).

alternativa”.⁹⁶ A esta avanzada, algunos autores han llamado *neoliberalismo* (Bourdieu, 1998; Duménil y Lévy, 2007; Harvey, 2007; Udry, 1997). Sin embargo, a pesar de la intuitiva claridad que el adjetivo neoliberal parece poseer, resulta materia de profundo debate determinar si se trata de un conjunto de ideas y valores, un programa de reformas estructurales (set de políticas públicas), una determinada preeminencia de cierta fracción de clase, entre otras. Cada aspecto considerado muestra posibles variaciones durante la etapa, por lo cual *preferimos llamar mundialización* a esta profunda reestructuración.

Esta modificación del capitalismo global significó también, claro, cambios para América Latina. En las economías más grandes, se produjo un abandono del proyecto de industrialización autocentrado (Bulmer-Thomas, 1998; Ocampo, 2004). En la mayor parte de los países de Sudamérica se produjeron golpes de Estado, que, con sus esperables diferencias, se orientaban por la doctrina de Seguridad Nacional (que identificaba como prioridad el enemigo interno). Según la propuesta de O’Donnell, estos golpes respondían a las necesidades del capital para superar las barreras a la modernización periférica, que requería de una modificación profunda de la sociabilidad popular (O’Donnell, 1977, 1982). El caso argentino se ubicaría entre estos casos.

La emergencia del *Estado Autoritario Burocrático* fue resultado de un proceso de convergencia de intereses entre fracciones de la gran burguesía, que desplazaron sus diferencias en busca de un proyecto mínimo común, y una tecnocracia burocrática, quebrando de una vez el *empate hegemónico* existente (Portantiero, 1977, 1981). El golpe de Estado perpetrado el 24 de marzo de 1976, autonominado como *Proceso de Reorganización Nacional*, se propuso sentar nuevas bases para el funcionamiento de la economía, la política y la cultura argentinas, a fuerza de represión y disciplina económica (Canitrot, 1980; Izaguirre y Aristizábal, 2002; Llovich y Bisquert, 2008).

Si bien algunos objetivos del Proceso estuvieron claros desde el inicio, no fueron pocas las digresiones internas respecto de las precisiones del programa de reformas económicas y políticas. Sin embargo, con el paso del tiempo, se asentó la idea de que se inicia en esos años la etapa *neoliberal* para el país, debido a la aplicación de reformas estructurales que favorecieron a los sectores más concentrados del capital extranjero,

⁹⁶ El famoso TINA (There is no alternative) de Margaret Thatcher expresaba con palmaria claridad la violencia del proceso de reorganización social que representaba.

orientando la acumulación hacia las finanzas, en detrimento de la aplicación productiva del capital y de los grupos económicos locales (Arceo, 2006; Basualdo, 2006a, 2006b). Se habría dado inicio allí a un proceso de desindustrialización, de carácter socialmente regresivo, y degradante de la soberanía nacional.⁹⁷

Ni los años de la dictadura fueron un tiempo sin contradicciones ni tampoco los gobiernos que le siguieron. Al pulso de las disputa de clases, esto es, de las clases populares con la gran burguesía y de fracciones de ésta entre sí, se sucedieron programas diversos, expresados en coyunturas económicas y gobiernos de diverso cuño y tradición política. Resulta dificultoso llamar neoliberal sin más al gobierno de Alfonsín, dada su propia filiación socialdemócrata. Ahora bien, esto no quita la persistencia de ciertos rasgos característicos, que deben ser resaltados. Como todo proceso social, ni pura ruptura ni pura continuidad sirven para dar cuenta de la realidad. A estas variaciones dentro del marco de una continuidad estructural hemos llamado, como se explicó en la sección 6 del capítulo 2, *fases del modo de desarrollo* (Cantamutto y Costantino, 2014; Costantino y Cantamutto, 2014). La etapa que hasta aquí se viene refiriendo como neoliberal definiría, en nuestros términos, un modo de desarrollo, compuesto por fases diversas, con especificidades propias.

Resulta, sin embargo, un problema no trivial la pertinencia de esta nominación. Asociado a un set de políticas o a un conjunto de valores e ideas, el neoliberalismo habría tenido una aparición disputada tanto durante la dictadura como durante el gobierno de Alfonsín. La continuidad más relevante, creemos, está en la preeminencia política (y económica) de la gran burguesía, con independencia de sus fricciones internas, que fue capaz de sostener sus prerrogativas no sólo ante las clases populares sino incluso ante el propio aparato de Estado cuando éste buscó alguna distancia. En términos del PRE, esto significó una inserción externa con menores mediaciones, basada en ventajas comparativas estáticas y un rol más significativo de los flujos de capitales (de crédito y de inversión) de la cuenta capital, con mayor concentración y

⁹⁷ En particular, se ha difundido fuertemente en las ciencias sociales del país la interpretación de Basualdo, que considera este modo de acumulación como de valorización financiera, que habría terminado en 2001. Se ha criticado el carácter nacional-centrado de esta interpretación, que tiende a relegar los cambios a nivel global del sistema capitalista, presentando la etapa como efecto casi excluyente de vernáculos políticas perversas (Grigera, 2011). Asimismo, se ha criticado la poca atención prestada a las lógicas de continuidad en términos de actores, con sus proyectos y limitaciones (Burachik, 2009).

extranjerización de la estructura productiva, y una distribución profundamente regresiva del ingreso. Con variaciones, esta caracterización se sostiene, según nuestra interpretación, hasta los años de la presente investigación.

La fase que es de particular interés para nuestro actual problema, es la llegada al gobierno de Carlos Menem (1989-1999), de la mano de un programa de reformas que profundizaba y ordenaba el sesgo de los anteriores años (mediante las leyes N° 23,696 de Reforma del Estado y N° 23,697 de Emergencia Económica). Su viabilidad inicial estuvo marcada tanto por la habilidad política del equipo presidencial como por la convergencia de intereses del capital local y extranjero. Si bien no se pueden desestimar las falsas promesas (“salario” y “revolución productiva”) erigidas en campaña para acercar votos de clases populares atosigadas por la crisis (Murillo, 2001; Vázquez Valencia, 2009), creemos errado caracterizar como populista o neopopulista al gobierno usando sólo este elemento para caracterizarlo. El engaño forma parte de los instrumentos disponibles en la política: en todo caso, se trataría de demagogia.⁹⁸

Con las compensaciones y acuerdos necesarios, las distintas fracciones del capital confluyeron en un acuerdo que contemplaba ganancias y rentas para casi todas.⁹⁹ La convergencia de presiones externas –incluidas como decálogo en las condicionalidades del Plan Brady y popularizadas como Consenso de Washington (Brenta, 2008)- con una organización particular de la gran burguesía, que superaba nuevamente sus discrepancias para constituir una auténtica “comunidad de negocios”

⁹⁸ Se ha llamado la atención sobre la participación de una fracción del sindicalismo, conocido como el sector de “Los Gordos”, en la aplicación de las reformas de esta etapa (Etchemendy, 2004, 2005; Levitsky y Murillo, 2005; Murillo, 2001). Aunque esta connivencia es digna de estudio, creemos un exceso considerarlos parte de la “coalición gobernante” del período, dada la evidencia de su subordinación en el programa de gobierno, más allá de posibles prebendas. Más importante aún, resulta un claro caso de acuerdo de cúpulas, sin representatividad real sobre la clase social en cuestión, que mostró creciente descontento por su accionar tanto en su evaluación en la opinión pública como en la organización de nuevos sindicatos (Piva, 2009).

⁹⁹ El programa general de liberalización, desregulación y apertura incidía negativamente sobre algunas fracciones de la gran burguesía, en particular algunos de los conocidos como Capitanes de Industria, ligados a la obra pública. Por ejemplo, la apertura comercial generó no pocas disputas y controversias (Viguera, 1998). La clave de la convergencia está en las privatizaciones, nudo de la reforma del Estado, donde participarían no sólo capitales extranjeros (como inversionistas) sino también socios locales, que se retiraron luego de obtener suculentas ganancias por la venta de su participación (Azpiazu, Forcinito y Schorr, 2001; Azpiazu y Schorr, 2002; Schvarzer, 1996).

(Basualdo, 2006a),¹⁰⁰ dieron forma específica al programa de liberalización, apertura, desregulación y privatización que decantaría en el plan de Convertibilidad (1991-2001).

La Convertibilidad expresó, entonces, una conformación concreta del BEP en relación al Estado. Su esquema de desregulación y apertura significaron un fuerte impulso a los actores predominantes en cada cadena productiva, consolidando posiciones de poder contra el resto del tejido empresarial y contra la fuerza de trabajo. Las desgravaciones fiscales buscaban alimentar la competitividad de estos capitales, pero derruían las finanzas públicas. De conjunto, esto funcionó como aliciente a la centralización del capital, y reforzó la tendencia a valorizar las aplicaciones productivas ligadas a ventajas estáticas. Para aquellos capitales de talla que se veían perjudicados por estas reformas, y para el conjunto del capital en general, las privatizaciones funcionaron como nichos de ganancias extraordinarias, que tentaban la inversión hacia esas actividades protegidas. Allí se encontraba la oportunidad de negocio a aprovechar, por lo que el Estado se desprendió de casi todos sus activos. Esto incluye en particular al sistema previsional, del que se desprendió creando las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), lo que indujo a un fuerte aumento del déficit fiscal.

La necesidad de sostener la caja de conversión con tipo de cambio fijo reforzó la naturaleza “divisa-dependiente” del esquema, dando mayor centralidad al capital con capacidad de ingresar recursos. Si bien las exportaciones (ligadas a ventajas estáticas) crecieron durante el período, dando poder a la burguesía responsable de esas ventas, el rol central en equilibrar la balanza de pagos lo ocupó el capital extranjero, en general, y el capital financiero en particular. Durante los primeros años, la IED cumplió la tarea de ingresar divisas, pero esta tarea cayó de modo creciente sobre el crédito, y con fuerza cada vez mayor, sobre la toma de deuda pública. Los grandes ganadores de la fase fueron la fracción financiera de la gran burguesía, las privatizadas y el capital extranjero en general. La deuda cumplió una labor central en el esquema, y sería uno de los ejes de la conflictividad que analizamos en la siguiente sección.

En este período, en efecto, el Estado se pareció más a la “junta de negocios” del capital que el Manifiesto Comunista describiera, mostrando su formato más instrumental

¹⁰⁰ Esta convergencia se visibilizó en la conformación en 1987 del poderoso Grupo de los Ocho (G8), que reunía a las cámaras de la gran burguesía: SRA, UIA, CACom, ADEBA, ABRA, UAC, CACons y la Bolsa de Comercio (Beltrán, 2014; Birle, 1997).

respecto a los intereses de la burguesía (Bonnet, 2008). Las designaciones de Miguel Ángel Roig y Néstor Rapanelli como sucesivos ministros de Economía al inicio del mandato de Menem mostraron el creciente peso de representantes directos del poder económico concentrado en el gobierno.¹⁰¹ La tecnocracia neoliberal tuvo su presencia en figuras icónicas como Álvaro Alsogaray (asesor) o el ministro de Economía Domingo Cavallo.¹⁰² La presencia directa de miembros de la clase dominante o sus intelectuales en cargos clave evidencia el sesgo social en que se asentaba el gobierno de la Convertibilidad. El acuerdo básico en torno al formato de negocios del período (cuáles eran las oportunidades y cómo se aprovechaban) signaba la forma de gestionar las políticas públicas, excluyendo a la mayor parte de la población de la toma de decisiones.

Las premisas de funcionamiento económico del plan era una creciente mercantilización de la vida social (expresado como privatizaciones de todos los activos públicos posibles), la competencia casi irrestricta frente a los capitales centrales mediante una inserción subordinada, que fomentó un proceso de fuerte extranjerización y centralización de la propiedad y concentración de la producción (Burachik, 2009). Sin embargo, tal como hemos desarrollado en más detalle en otra parte (Cantamutto y Wainer, 2013), no se puede comprender a la Convertibilidad como una simple caja de conversión con tipo de cambio fijo (un peso a un dólar), sino como la forma específica de un rediseño social más amplio, que explica el peso simbólico que adquirió en el imaginario social y su difícil cuestionamiento.¹⁰³

La Convertibilidad se erigió como idea de estabilidad, que funcionaba como punto nodal en el discurso político, trazando una frontera en la comunidad política entre aquellos que la defendía -y con ello el bienestar del pueblo- y quienes la ponían en riesgo (Barbosa, 2010; Fair, 2009b; Muñoz, 2010). Su construcción discursiva y en políticas públicas tuvo como fuente inicial la idea de que los costos de la estabilidad eran un “mal menor” frente a la amenaza de revivir la crisis de la hiperinflación (1989-1990). Por eso, el miedo a la hiperinflación y al desempleo funcionaron como una fuente de

¹⁰¹ Se trataba de dos directivos de una empresa de la burguesía más concentrada y añeja del país (Bunge y Born). Los sucedió Antonio Erman González, funcionario que acompañó a Menem desde sus inicios en La Rioja, y fue responsable de la incautación de plazos fijos conocida como Plan Bonex.

¹⁰² Alsogaray era un viejo referente del partido liberal Ucedé, y Cavallo un economista de formación neoclásica, que fuera presidente del Banco Central durante la dictadura.

¹⁰³ Hasta el final de su vigencia, la Convertibilidad contaba con un apoyo mayoritario en la opinión pública, a pesar del reconocimiento explícito de sus costos sociales (Vázquez Valencia, 2009).

consenso negativo, como aceptación resignada (Thwaites Rey, 1994), fue presentada como fundamento de la *hegemonía débil* del período (Piva, 2007, 2009). No habría una convicción real sobre las bondades del esquema socio-político entre las clases populares, sino más bien una incapacidad de confrontarlo y superarlo mediante propuestas propias (Balsa, 2010a, 2010b).

Esta idea ha sido llevada más lejos, al proponer pensar la constitución de una *hegemonía neoconservadora* en el período (Bonnet, 2008). Las clases dominantes ya organizadas en forma y contenido no requerirían de una interacción sistemática para administrar el programa, mientras que las clases populares vencidas no ofrecían resistencia suficiente. Así, se habría desplazado la política del centro de gravedad de la sociedad, es decir, su capacidad de decidir colectivamente de modo vinculante, reemplazado por la idea de buena administración, propia de la economía. Este cambio se puede notar en el peso adquirido por el Poder Ejecutivo, y en particular por el ministerio de Economía, que incluso quitaron funciones a otros aparatos del Estado. La separación por ley del Banco Central de su potestad de definir la política monetaria y del gobierno central fue una forma concreta de ponerlo bajo la órbita del capital financiero. De la misma manera, las privatizaciones ofrecieron un cambio semejante de la forma estatal, quitando del control ciudadano la garantía de derechos básicos para dejarlos como abastecimiento de servicios pertinentes a la vigilancia del consumidor.¹⁰⁴ Todo este conjunto de reformas modifica la *forma misma del Estado* en favor de una selectividad particular en la representación: algunas demandas específicas pueden ser procesadas, mientras que otras no, *más allá de quiénes ocupen los cargos gubernamentales*.

Al poner sucesivas áreas de la vida común fuera de la decisión colectiva y en manos de “especialistas”, se pretendía montar un halo de precisión y justicia sobre las mismas, que la discusión colectiva en el espacio público distorsionaría, generando conflictos e injusticias. Este discurso tecnocrático reforzaba los prejuicios de la política como algo corrupto, sucio, que manchaba lo que tocaba, además de incentivar el desacuerdo. La política, en todo caso, debía restringirse a la administración eficiente de

¹⁰⁴ El Estado se desprendió del abastecimiento de agua, gas, telefonía, electricidad y combustibles, la recolección de basura, los correos, la aeronáutica, la gestión de puertos, aeropuertos y carreteras, entre otros. Además, se avanzó fuertemente en términos de privatización parcial sobre la salud y la educación. Es decir, casi todos los derechos básicos para una vida digna estaban en manos de agentes privados, sin ningún tipo de obligación por garantizarlos a quienes no pudieran pagar por ellos.

la cosa pública: todo exceso era pernicioso. Por supuesto, se obturaba así el hecho de que los “especialistas” que decidían en cada área eran intelectuales no neutrales, formados en particulares formas de entender el mundo y asociados a fracciones de clases muy identificables (Gramsci, 1984b). La contraparte de este desplazamiento de la política fue la “farandulización” del accionar de los políticos, su aparición como figuras mediáticas en los medios masivos de comunicación (Wortman, 1997).¹⁰⁵ Este desplazamiento de la política se vio además impulsado por un individualismo exacerbado –que dificulta las bases de la acción colectiva-, a su vez alimentado por el consumismo preconizado como mecanismo simbólico de inclusión (Balsa, 2010b; Muñoz, 2010; Svampa, 2005).¹⁰⁶ Lo que esta forma de neoliberalismo hizo fue apelar a construir un sentido común, y dominar por las ideas (Balsa, 2006). En un sentido semejante, puede entenderse la descripción de la *hegemonía neoliberal* de Basualdo (2011), quien enfatiza además el *transformismo* como forma de cooptar cuadros políticos, referentes culturales e intelectuales de las clases populares.

*No nos parece adecuado, sin embargo, reforzar esta idea de hegemonía para describir la década.*¹⁰⁷ Tal como el propio Balsa (2010a) señala, en consonancia con las primeras reflexiones de Laclau (1978), la construcción de consenso debe tomar nota de la discursividad de los sectores subalternos, para calibrar las interpelaciones que establece con éstos: tomar en consideración sus demandas y símbolos, e incorporarlos, anulando su organización autónoma y potencialmente disruptiva. Si algo parece haber ocurrido en la década de los noventa, fue exactamente lo opuesto: anular las demandas y los reclamos de los sectores populares mediante su silenciamiento. El recurso discursivo del gobierno reconocía la existencia de sectores populares vulnerados por el modelo, pero era un costo que se veía compensado en el largo plazo por la estabilidad y el

¹⁰⁵ Por un lado, hubo una importante llegada a la política de referentes culturales populares sin trayectoria militante previa (los casos más visibles fueron el cantante Ramón “Palito” Ortega y el piloto de Fórmula 1 Carlos Reutemann como gobernadores), y por otro, una escenificación de los políticos en los medios como parte de programas de chismes o contenido no ligado a su actividad gubernamental.

¹⁰⁶ La apertura comercial favoreció el ingreso al país de múltiples mercancías novedosas, más cercanas al estado del arte tecnológico, que –junto a la recuperación del poder de compra en pesos y en dólares del ingreso- favoreció para sectores medios su lectura de ciudadanía en clave de consumo. No en vano las organizaciones de defensa al consumidor cobraron vigor en la década.

¹⁰⁷ Lo que entendemos por hegemonía fue explicado en la sección 5 del capítulo 2: remitimos ahí por mayores precisiones. No aceptamos tratar a todo orden político como hegemónico por el hecho de construirse con base en la operación de tipo sinécdoque. La discusión que sigue da mayores detalles.

crecimiento: Menem no dejó de apelar al pueblo y al ideario peronista, pero lo subordinó a la estabilidad como punto nodal (Muñoz, 2010).

Tras la simbólicamente fuerte derrota de las huelgas ante la privatización de ENTEL en 1989 y de los ferroviarios de 1991, y de la combativa dirección ubaldinista de la CGT (Piva, 2009), una parte del sindicalismo se adecuó al nuevo régimen, buscando prerrogativas para sí, funcionando como socio del gobierno y los empresarios (Etchemendy, 2005; Murillo, 2001), bloqueando demandas de sus propios asociados. Pero las nuevas formas de contratación y la propia desafiliación producida por la modificación del mercado laboral quitaban representatividad a los sindicatos. Esto no significa que la clase trabajadora dejara de reclamar: aunque la mayor conflictividad contra el modelo propiamente dicho se estructuró en la segunda mitad de la década, las resistencias a despidos y reclamos por salarios, así como la aparición de centrales alternativas, señalan la existencia de demandas irresueltas (Schuster, 2005). En el marco de una derrota de la clase trabajadora, su menor capacidad de respuesta en los primeros años se conjugó con la coerción económica del miedo al desempleo y el retorno a la hiperinflación (Piva, 2007, 2009), que no excluyó otras formas de coerción política.

La difusión sistemática de ciertas ideas y símbolos sin dudas logró cierto impacto sobre el imaginario popular, difícilmente pueda cuestionarse ello.¹⁰⁸ Sin embargo, resaltamos lo antes dicho sobre el carácter *negativo* del consenso así movilizado: la falsa inclusión de consumo individual no pudo ser más que una quimera para una porción creciente de la población que se veía marginada dentro del sistema económico. Y aunque existió cierta recuperación parcial de referentes de las clases populares, es imposible negar que la resistencia organizada a la Convertibilidad fue prácticamente una constante para aquellas.¹⁰⁹

La Convertibilidad fue entonces la forma precisa que adoptó en Argentina el orden político que referimos en esta investigación como *neoliberal*. El término que no

¹⁰⁸ Balsa (2010b) llama la atención sobre cierta continuidad de este ideario de consumo como parte de la noción de ciudadanía, posterior al colapso de la Convertibilidad. En la entrevista con el autor, García Vázquez insistió en que el kirchnerismo forjó en el discurso y en las políticas una idea de ciudadanía centrada en el impulso al consumo, una idea aceptable a los intereses de los grandes empresarios.

¹⁰⁹ Diversos autores periodizan el ciclo de protestas que se inicia en la primera mitad de la década, con hitos como la constitución de la CTA en 1992, el Santiagueñazo de 1993, la Marcha Federal de 1994 y la aparición del MTA, las puebladas de Cutral-có, Plaza Huincul (Neuquén) y General Mosconi (Salta) en 1996, que marcarían el inicio del movimiento de desocupados (Giarracca, 2001; N. Iñigo Carrera y Cotarelo, 2006; Naishtat, Schuster, Nardacchione y Pereyra, 2005; Piva, 2009; Schuster et al., 2006).

alude entonces al modo de desarrollo abierto con la dictadura, sino a una fase particular del mismo: aquella que corresponde al período 1991-2001. El orden neoliberal fue una forma estable, que a través de la irrupción de *lo político*, logró producir una distribución de roles en la comunidad política, incluyendo los actores que amenazan al propio orden. Conformó un conjunto muy integrado de políticas públicas, que reguló el patrón de acumulación económica con cierta coherencia, consolidando una preeminencia evidente de ciertas fracciones en el BEP. Incluso más, logró difundir ideas y valores que le daban sustento normativo e ideológico, permeando al conjunto social.

Ahora bien, aceptar la Convertibilidad como un orden político estable no significa decir que éste sea hegemónico. Como ya insistimos, el tipo de acción política requerida para formar un orden considerado general a partir de una parte social es una acción hegemónica (o tiende a serlo). Pero esto no nos describe al orden como tal: si el modo de desarrollo que emergió con la dictadura se caracteriza por una fuerte regresividad social en general, la Convertibilidad fue particularmente clara en este sentido. La exclusión no fue sólo económica, sino también política: la multiplicación de las resistencias territoriales no puede dejar de leerse considerando un componente de derrota en la lucha por el Estado (Mazzeo, 2011). Es decir, las clases populares no encontraron satisfacción a sus demandas ni por una vía material ni una discursiva, sino al contrario, se vieron *sistemáticamente* excluidas.¹¹⁰ La cooptación y connivencia de *algunos* dirigentes (transformismo) impulsó, por un lado, la resistencia popular de algunos sectores organizados (nuevas organizaciones, nuevas formas de protesta), y por otro, un creciente desencanto, expresado en la resignación y retracción de la participación. Cada vez que las clases populares lograron organizarse, fue para expresar el repudio al lugar que se les asignaba en este orden. Los mecanismos *negativos* de consenso (el miedo y la resignación) y la coerción pueden sostener un orden de modo estable, pero no lo hacen hegemónico.

La clase dominante no realizó ninguna concesión relevante de sus intereses económicos, ni con las clases populares ni con estratos inferiores del propio capital. El

¹¹⁰ Las compensaciones por los despidos y jubilaciones prematuras en las empresas públicas, así como la revalorización de los salarios gracias al control de la inflación durante los primeros años de la Convertibilidad no tienen magnitud alguna comparada con los beneficios obtenidos por el capital en esos mismos años. Se trata apenas de mecanismos compensatorios para contener la presión de los perdedores, algo que el propio neoliberalismo teorizó abiertamente (Alesina y Drazen, 1991; Rodrik, 1992).

proyecto social surge de una serie de exclusiones amplias, que alcanzan incluso al propio territorio nacional: la propia idea de nación como proyecto de comunidad integrada se ve vulnerada desde que se asumió que territorios completos del país no serían áreas eficientes, y por lo tanto, no merecerían un rol en el espacio nacional.¹¹¹ De estas exclusiones amplias surge la articulación discursiva que permite la confluencia de lo más concentrado del capital junto a una elite política. El problema es que quedaba fuera la mayor parte del país. Es por eso que la dominación se apoyaba sobre *mecanismos de coerción y de consenso negativo*, no solo respecto de las clases populares, sino de estratos más débiles del propio capital.

La estabilidad del orden neoliberal estaba basada en esas exclusiones amplias. Su fundamento comenzó a tambalear cuando: a) una parte de la comunidad política reconocida (fracciones del propio BEP) cuestionan el orden, b) las clases populares logran irrumpir organizadamente rechazando el orden; c) se agotaron las vías para sostener el patrón de reproducción económica. En ese momento, la fase del modo de desarrollo, el orden neoliberal, entra en crisis. Éste será el primer momento en el proceso político kirchnerista, y lo analizamos a continuación.

2. PRE

El funcionamiento económico de la Convertibilidad repetía de modo magnificado el experimento de la “Tablita” del ministro de economía de la dictadura José Martínez de Hoz, que rigió entre 1978 y 1980 (Burachik, 2009; Costantino y Cantamutto, 2014). La brusca apertura comercial (el arancel promedio cayó a un tercio de su valor en menos de dos años) impuso un mayor grado de exposición de los sectores transables locales, que los indujo a disputar su lugar en el mercado mediante incrementos en la competitividad. Las vías para lograrlo fueron la inversión en bienes de capital mediante el endeudamiento externo y el incremento en la explotación de la mano de obra (Graña,

¹¹¹ En esta fase se eliminan gran parte de los regímenes de promoción industrial de las provincias, y se modifica la co-participación de los impuestos federales, aumentando el porcentaje acaparado por el Estado nacional y desfinanciando a las provincias. Los gobernadores se vieron forzados a pactar acuerdos con el Estado central para evitar quedarse sin recursos. Esto fomentó una fragmentación territorial más acentuada en Argentina, concentrando la actividad económica y la demografía en pocos espacios.

2009).¹¹² Diferente era la situación de los sectores no transables –en particular, los servicios recientemente privatizados- que estaban menos expuestos a la competencia (tenían un mercado cautivo), y podían por ello aumentar sus precios, lo que generaba un aumento en los costos de producción del resto de la cadena de valor (Azpiazu y Schorr, 2003). La presión de esta pérdida de competitividad y los límites al endeudamiento (por encarecimiento del mismo) forzaban al capital a presionar por otras vías: avanzar más en la precarización y flexibilización de la fuerza de trabajo, y en la desgravación impositiva. La dinámica de la crisis de la Convertibilidad está guiada por este eje.

Si bien estas tensiones se planteaban desde el inicio de la Convertibilidad, su peso se veía con claridad a partir de determinantes externos. Tras una primera recesión en 1995 debida al Efecto Tequila (Astarita, 2001), Argentina volvía a enfrentar problemas a partir de las crisis en otros países dependientes, promovidos en esos años como modelos “emergentes”. Concretamente, a partir de 1997 se suceden fuertes crisis en el Sudeste Asiático (Tailandia, Malasia, Indonesia, Filipinas, Hong Kong y Laos), lo que implicó una retracción de los fondos internacionales hacia los países centrales, significando un aumento del costo de financiamiento para los países dependientes.

La forma visible de este aumento tuvo en Argentina un impacto mediático muy fuerte en esos años: el riesgo país.¹¹³ Si bien el aumento de este indicador promovió fuertes incrementos para el conjunto de los países de la periferia, a partir de fines de 2000 Argentina desplegó una dinámica propia. Como se puede ver en el gráfico 1, su crecimiento fue exponencial: pasó de 773 puntos el 1 enero de 2001 a 4,372 el 31 de diciembre (con un pico el 24 de ese mes, con 5,501 puntos).¹¹⁴ Esto significaba un aumento explosivo del costo de financiamiento, en el marco de sucesivas reestructuraciones de deuda (ver sección 3), y con ello, una presión descendente sobre la

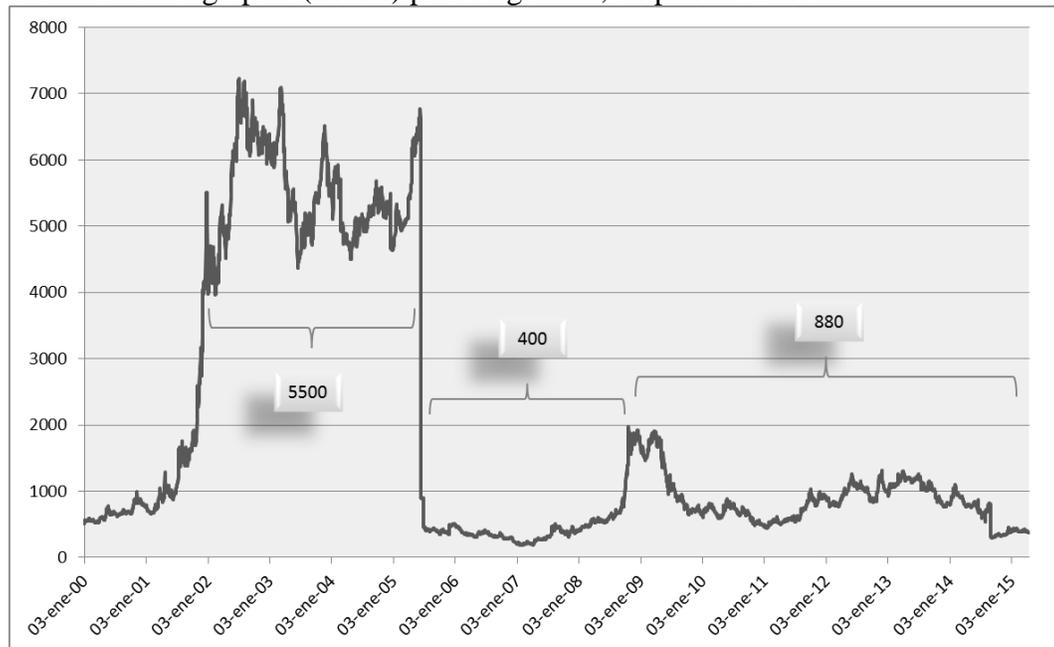
¹¹² La Ley de Empleo (N° 24,013) y la de Accidentes de Trabajo (N° 24,028) de 1991, complementadas por el Decreto 1,334/91, se encargarían de precarizar, flexibilizar y abaratar el costo laboral.

¹¹³ Se trata de un índice calculado por agencias evaluadoras privadas (Moody's y Goldman Sachs, entre las más conocidas), que estiman el riesgo asociado al incumplimiento por parte del país. Su resultado arroja una prima de interés que el país deberá pagar por su nivel de riesgo: una suba del riesgo país implica tasas de interés más altas. La falta de transparencia en el cálculo de esta clase de índices se vio con palmaria claridad con el estallido de la crisis subprime en Estados Unidos en 2007.

¹¹⁴ En marzo de 2000, el índice Nasdaq alcanzó su pico (5,048 puntos) y comenzó a caer, iniciando así la crisis de las punto.com. Esta marcó el final de la “nueva economía” promocionada por el gobierno de Clinton, e implicó un fabuloso proceso de concentración de la industria de las “nuevas tecnologías”. Para contener la crisis, la tasa de interés de referencia del Tesoro estadounidense se redujo sistemáticamente, compensando relativamente el aumento del costo de financiamiento por el mayor riesgo país.

tasa de ganancia de las fracciones productivas del capital. A diferencia de la crisis de 1995, la crudeza de este efecto explica su mayor reacción del capital no financiero. A partir de entonces y hasta el canje de 2005, el indicador promediaría los 5,500 puntos.

Gráfico 1. Riesgo país (EMBI) para Argentina, en puntos básicos

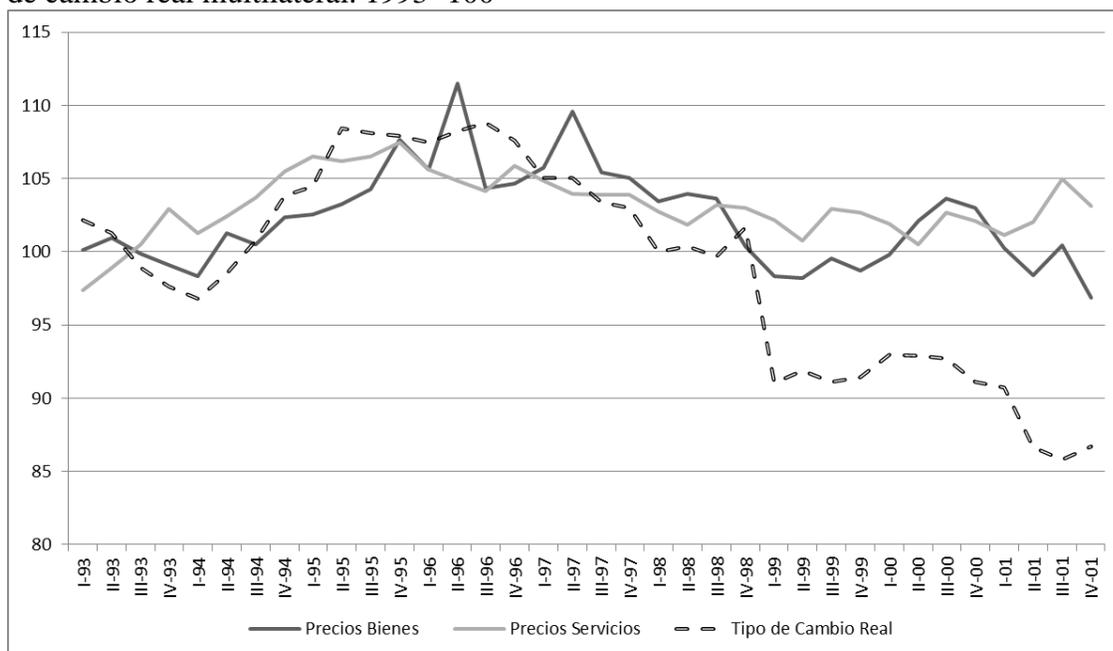


Fuente: elaboración propia en base a datos de MEcon.

El aumento del costo de financiamiento implicaría un aumento del costo de producción para los capitalistas, que los llevaría, al igual que al Estado, a una permanente renegociación de los compromisos de pagos. Entre 1992 y 1998, la deuda externa pública había crecido un 64%, mientras la privada no financiera lo hizo en un 411%. Las sucesivas reestructuraciones operadas a partir del escenario de crisis fueron completadas en condiciones cada vez más gravosas. El Estado incrementó aceleradamente su deuda pública: de \$112,358 millones en 1998 llega a \$144,453 millones en 2001, una suba del 29%. De ese total, el 61% era deuda externa según el criterio de residencia. Esto culminaría en la cesación de pagos de 2001. Entre los capitalistas se apreció un proceso de rápida extranjerización (compra por parte de capitales foráneos) y centralización de la propiedad, debido a las diferentes condiciones de financiamiento obtenidas (Burachik, 2008).

Pero la crisis no tenía su origen solamente en el aspecto financiero. Cuando en enero de 1999 Brasil abandonó el plan Real y devaluó su moneda, la crisis agregó un componente productivo. El impacto de la crisis en el país vecino fue mucho más directo, dado que era el principal socio comercial de la Argentina. No resulta sorprendente que, tras obtener superávit comercial durante cuatro años seguidos, la Argentina volviera a ser deficitaria en sus intercambios bilaterales en 1999. La crisis, entonces, no era sólo financiera sino también comercial, y por ambas vías, productiva. La pérdida de competitividad se puede apreciar en la caída del tipo de cambio real multilateral en el gráfico 2, que si bien ya mostraba esta tendencia desde 1996, sufrió un importante cambio el primer trimestre de 1999. La presión ejercida por la apreciación del tipo de cambio motivó a un proceso deflacionario, que puede notarse en el mismo gráfico en la caída de los precios de los productos transables (bienes) desde mediados de 1996. Asimismo, se puede notar que los precios de los servicios mostraron una deflación menos pronunciada, marcando la presión diferenciada de la competencia externa sobre los diferentes sectores.

Gráfico 2. Precios implícitos de sector productor de bienes y productor de servicios, tipo de cambio real multilateral. 1993=100



Fuente: elaboración propia en base a datos de Banco Central y Mecon.

Por efecto de la caída en las ganancias, la gran burguesía dejó de volcar sus recursos a la acumulación. A partir del tercer trimestre de 1998, la economía comenzó una larga recesión, que le hizo perder 16% del PBI entre ese momento y el último trimestre de 2001. Si bien la caída en la actividad fue relativamente generalizada, la construcción (-18%) y la industria (-9%) fueron los sectores donde más impactó la crisis (contabilizado entre IV-98 y IV-01). Los sectores primarios, en cambio, no sufrieron en igual medida: mientras que el sector agrícola-ganadero mostró un muy leve crecimiento en ese período (1%), el de minas y canteras se expandió un 7%. Otro tanto ocurrió con los servicios: mientras que los recientemente privatizados (agua, electricidad y gas) crecieron un 8%, la actividad financiera creció “sólo” hasta mitad del 2001, momento a partir del cual comenzó a resentirse (cierra el año con una caída total del 0.01%). Es decir, la recesión no se repartía igual entre las fracciones del capital. El impacto de la competencia externa y las ventajas comparativas para tolerarla marcaban un trasfondo estructural sobre el que las asociaciones representativas debían dar forma a los intereses de sus representados (ver sección 4.2.1).

Si bien las actividades primarias pudieron tomar provecho de la renta asociada a los recursos naturales, hasta 1999 los términos de intercambio no favorecieron al país, mostrando ese año una reversión de la tendencia a la caída de los precios (Puyana y Costantino, 2013). El capital industrial, por su parte, dependía más fuertemente del aumento en la explotación de la fuerza de trabajo (J. Iñigo Carrera, 2007; Kennedy, 2014). El salario medio real de la economía, tras una leve recuperación del poder adquisitivo hasta 1994 debida al control de la inflación, comenzó un descenso que sólo conoció por límite la propia deflación del 2001. De conjunto, al final de la Convertibilidad, el poder adquisitivo del salario medio era algo menor al de una década antes (ver gráfico 14 del capítulo 6). Sin embargo, la heterogeneidad en la estructura salarial se había incrementado (Graña y Kennedy, 2007b), y una porción creciente de la fuerza de trabajo ni siquiera accedía al empleo que le permitiera ganarlo. El desempleo escala del 6% de la fuerza de trabajo en octubre de 1990 (antes de la Convertibilidad) a 13.3% en el mismo mes de 1998 (último año de crecimiento), y a 19% en 2001 (ver gráfico 5 en la siguiente sección). Es decir, tanto la expansión como la contracción de la actividad expulsaban empleo. En las mismas fechas, la subocupación pasa del 8.9% al

13.6%, y de allí al 16.3%. Así, para fines de 2001 más del 35% de la fuerza de trabajo no conseguía un empleo de ocupación plena, a pesar de estar interesada en hacerlo.¹¹⁵

Este cuadro de recesión provocada por el vínculo de Argentina al mundo tenía impactos en términos de la dinámica del sector externo. Para analizar esta situación, se pueden recategorizar las fuentes y destinos de los recursos consignados en la balanza de pagos (Cantamutto y Costantino, 2012). Así, podemos ver en el gráfico 3 que existen múltiples usos de las divisas: los pagos de intereses de deuda, la remisión de utilidades y dividendos y el proceso de desendeudamiento privado.¹¹⁶ Las dos primeras vías son un efecto directo de la entrada de capitales en años previos, es decir, una consecuencia esperable del modo de inserción externa del país. Se puede ver que los intereses de la deuda se constituyen en la principal vía de salida de recursos del período. La segunda vía de salida en orden de relevancia fue la fuga de capitales, esto es, el retiro de capital del circuito doméstico sin una finalidad directamente ligada a la valorización (atesoramiento).¹¹⁷ El saldo del comercio exterior también originó constantes salidas de recursos, aunque en rigor para el año 2001 alcanzó un leve superávit, gracias a la caída de las importaciones.

Para compensar estas salidas, existieron básicamente dos fuentes de ingreso de divisas: la inversión extranjera directa (IED) y el endeudamiento público.¹¹⁸ Esto es, el Estado se endeudó progresivamente no por necesidades fiscales propias, como sostenía el recetario neoliberal, sino para mantener el equilibrio externo en un contexto de salidas masivas de recursos. El Estado, por la vía indirecta de endeudarse para sostener el tipo de cambio fijo y apreciado, constituyó un seguro de cambio que produjo una socialización del costo del atesoramiento privado. El capital extranjero, a través de la

¹¹⁵ Por todo lo anterior, se puede constatar un feroz deterioro producido en la distribución funcional del ingreso (Lindenboim, Kennedy y Graña, 2011b). Naturalmente, esto impactaba en los niveles de pobreza e indigencia. Según los cálculos del MEcon, en octubre de 2001 el 35.4% de las personas eran pobres, y el 12.2% indigentes (es decir, no lograban adquirir la canasta básica alimentaria).

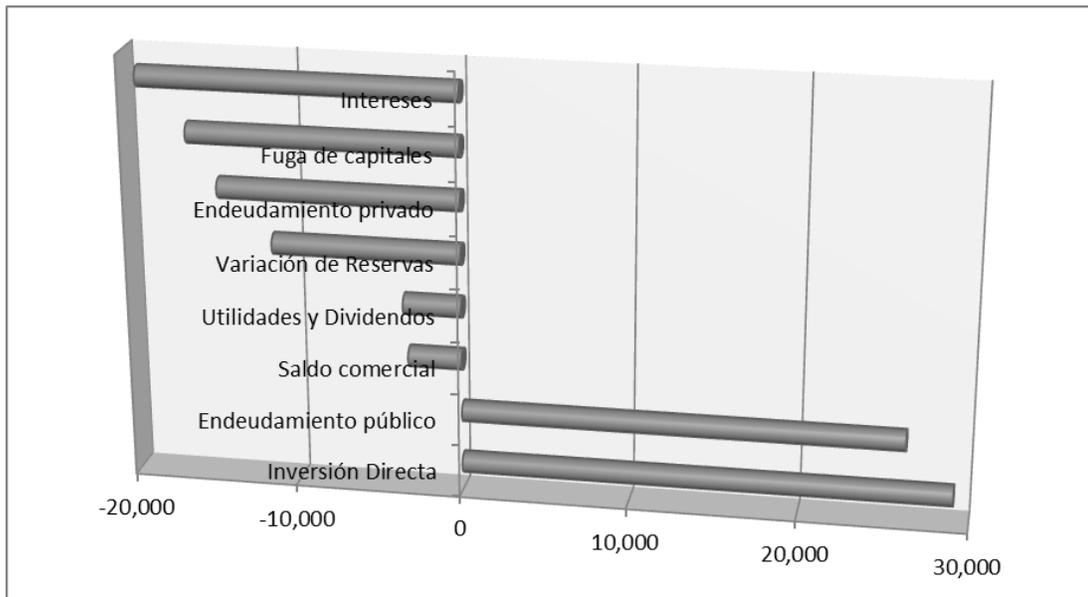
¹¹⁶ Este desendeudamiento se explica exclusivamente por el sector financiero. Una parte no trivial de estas deudas canceladas correspondían a obligaciones entre filiales y casas matrices. El sector financiero argentino vivió un duro proceso de extranjerización en la década (Cibils y Allami, 2010; Cobe, 2009).

¹¹⁷ Se ha establecido ya que el principal destino de la deuda externa es la fuga de capital, y no la aplicación productiva ligada a necesidades de financiamiento (Basualdo, 2006a; Cantamutto y Costantino, 2014; Cantamutto, 2012c). La fuga es calculada a través de las cuentas de la Balanza de Pagos, descontando el saldo de la Inversión Extranjera (ligado a aplicaciones productivas) de la Formación de Activos Externos del Sector Privado no Financiero. Esta metodología difiere de la presentada por A. Gaggero, Gaggero y Rúa (2015), aunque arriba a semejantes resultados.

¹¹⁸ La mayor parte del monto por IED corresponde a la venta del último tramo de YPF, en 1999.

IED, componía el socio clave para sostener el balance externo, mostrando su peso estructural. Durante los años de expansión de la Convertibilidad, el capital financiero había aportado divisas vía crédito, pero esa fuente se interrumpió súbitamente en 1999.

Gráfico 3. Fuentes y usos de los recursos externos, en millones de dólares, 1999-2001



Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC.

Así, el período que va de 1998 a fines de 2001 hace explícitas las tendencias más regresivas del PRE del orden neoliberal (Félix y López, 2012). Ante un escenario externo adverso (encarecimiento del crédito, pérdida de competitividad, bajos precios internacionales), la gran burguesía retiró sus capitales de la acumulación doméstica, para destinarlos al atesoramiento o valorizarlos en otro espacio. Esto produjo una gran recesión, que impactó duramente en las condiciones de vida y empleo de las clases populares. Las actividades que sostuvieron su reproducción ampliada, lo hicieron elevando la tasa de explotación de la fuerza de trabajo o basándose en ventajas naturales. El Estado garantizó este comportamiento mediante un severo proceso de endeudamiento, que permitió dilatar el momento del colapso económico. Es decir, el peso de la crisis se transfirió al Estado (vía deuda) y a las clases populares (vía empobrecimiento).

3. Políticas públicas

Tal como se explicó antes, la Convertibilidad expresaba, ante todo, un programa de reformas. Luego de la crisis del Tequila, el gobierno de Menem cerró el trato por el mayor activo disponible del país: la empresa petrolera YPF, que termina de venderse en 1999.¹¹⁹ Ese año, último del mandato del riojano, la recesión ya estaba instalada, pero aún no era evidente que se trataba de la crisis terminal del esquema de políticas. Como veremos más adelante, el gobierno de la novel Alianza (Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación) asumió prometiendo sostener el modelo, apuntando a avanzar en las reformas de segundo orden, corrigiendo los vicios de corrupción y falta de transparencia (Dikenstein y Gené, 2014; Vázquez Valencia, 2009). La defensa de la Convertibilidad como lógica de reforma social fue el eje de las políticas públicas de este período, contra toda prueba contraria que ofreciera el contexto económico y social. No debe entenderse este proceder como un torpe empecinamiento: la lógica responde a que, a pesar de las críticas, no existía aún una propuesta de orden político alternativo, que diera un programa (guía) de acción. Sin ésta, las respuestas se fueron calibrando según los apoyos y posibilidades que marcaba el orden neoliberal.

El accionar estatal se convirtió entonces en una defensa a ultranza de la caja de conversión con tipo de cambio fijo, hasta el final del mandato.¹²⁰ Como vimos, para 1999, la apreciación del tipo de cambio real era ya evidente, y una corrección nominal podría haber mejorado la competitividad de la economía. Sin embargo, esa opción parecía estar políticamente obturada, y por lo tanto, el gobierno sólo podía avanzar por la vía de reducir los costos de producción, en términos fiscales y de flexibilización laboral. La Alianza defendió hasta el final una visión fiscalista, que entendía –de acuerdo con la interpretación neoliberal- que la ineficiencia del gasto público ocasionaba mayor presión fiscal y elevaba el costo del financiamiento, lo que producía esa merma competitiva (Pucciarelli, 2014). La solución, pues, era ajuste fiscal para garantizar los

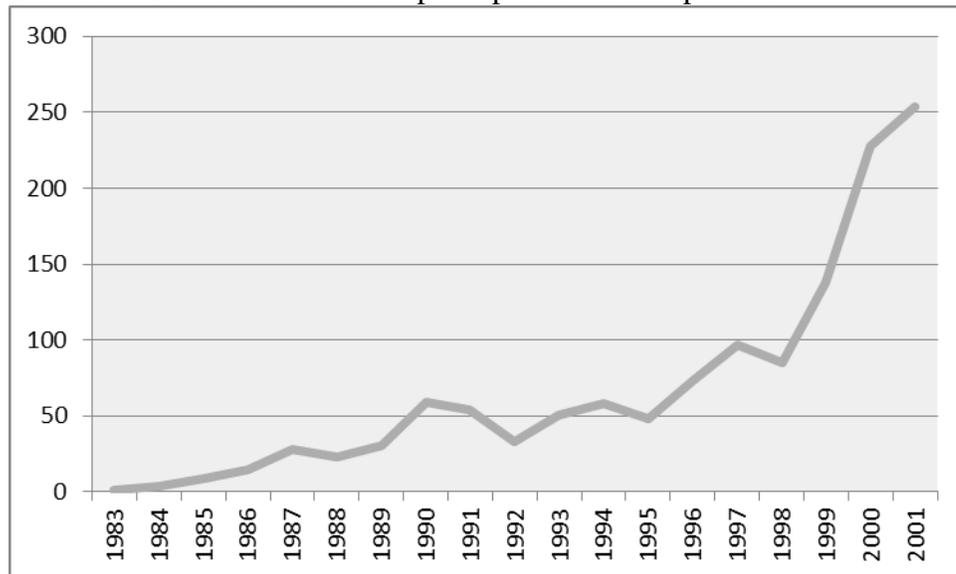
¹¹⁹ Los únicos grandes activos atractivos que quedarían para privatizar eran el Banco Nación Argentina, la Lotería Nacional y las obras sociales en manos de los sindicatos.

¹²⁰ En entrevista con el autor, el ex ministro de Economía Remes Lenicov afirmó la existencia de un acuerdo electoral entre Duhalde y De la Rúa para corregir el tipo de cambio, sin importar quien ganase. Al asumir, claramente, De la Rúa no optó por honrar el acuerdo. Entrevistado años más tarde, Duhalde ratificó que junto a Alfonsín enviaron una propuesta al presidente en el año 2000 para buscar alternativas de salida de la Convertibilidad (Sehinkman, 2013).

pagos de deuda y reducción del costo laboral.¹²¹ Esto en el marco de un eje de reformas claro, que diera certidumbre al rumbo elegido, incentivando de esa forma la inversión. La agenda era, entonces, la propuesta por el FMI, y en tal sentido se avanzó en esos dos años de gobierno (Brenta, 2008; Damill, Frenkel y Rapetti, 2005; Ministerio de Economía y Producción, 2004; J. Rodríguez, s. f.).

Así, a dos días de asumir el gobierno, el ministro del Interior Federico Storani ordena una cruenta represión a una protesta en Corrientes, donde autoconvocados reclamaban por el pago de sueldos atrasados (5 meses de retraso) (Campos, 2009; Kohan, 2002). Se designó como interventor al ex gobernador de Córdoba, Ramón Mestre. Como expresión programática, el gesto fue claro: el gobierno marcó desde el inicio que no toleraría el cuestionamiento al modelo, y éste implicaba ajuste fiscal a toda costa. La represión se erigiría como eje principal de contención de la protesta y los reclamos. Como se ve en el gráfico 4, la tendencia al aumento de la represión durante la democracia mostró un salto cualitativo en 1999, y mantuvo estos elevados niveles durante todo el gobierno de la Alianza. De estas muertes, 45 se produjeron directamente en la represión de la protesta social (CORREPI, 2013).

Gráfico 4. Cantidad de muertos por represión estatal por año



Fuente: elaboración propia con datos de CORREPI (2013).

¹²¹ Este eje de acción es lo que hizo rápidamente inocuo al recién creado Ministerio de Infraestructura y Vivienda, ocupado por Nicolás Gallo.

En el mismo diciembre de 1999, la Alianza aprobó la ley de financiamiento educativo, y logró así desmontar la Carpa Blanca de la Plaza de Mayo, tras 1,003 días de protesta de los docentes.¹²² Dado el derrotero posterior de ajuste sobre la educación, pocas dudas caben que esta política respondía a desplazar el conflicto. La tercera acción clave de ese primer mes fue remover a Víctor Alderete –símbolo de la corrupción menemista- como interventor del Programa de Atención Médica Integral (PAMI, la obra social de los jubilados), para dar credibilidad al discurso anti-corrupción de su campaña (Raus, 2014).¹²³ Alderete estaba ligado al sector del sindicalismo (concretamente, a Juan José Zanola de bancarios) que se asoció a Menem en las reformas, dando su anuencia por prebendas que los convirtieron en empresarios. Removerlo a él en primer lugar, entonces, era no sólo atacar la corrupción, sino limitar el poder del sindicalismo.

De hecho, la siguiente política clave de la Alianza fue la Reforma Laboral (Ley N° 14,250) en abril de 2000, orientada a debilitar a los sindicatos y abaratar el costo laboral. Se ampliaba el período de prueba hasta un año, se reducía la carga fiscal de contribuciones a los empleadores, y se descentralizaban los convenios colectivos, quitando la “ultraactividad” –como se conocía la renovación automática del convenio si no se firma uno nuevo (Dikenstein y Gené, 2014). La ley habría sido aprobada gracias al pago de coimas (sobornos) a través de una conocida entidad bancaria, por lo que se la conoció como ley “Banelco”. Los hechos de corrupción que rodearon la ley refuerzan la hipótesis de subordinación de este tema en la agenda gubernamental, a la vez que realza el avance contra los sindicatos. Es que la agenda del FMI incluía avanzar en la privatización de las obras sociales, controladas por los sindicatos (Dikenstein y Gené, 2014; Pucciarelli y Castellani, 2014). Si bien esta reforma no se logró, el gobierno no dejó de impulsar el tema, mientras insistía en deslegitimar a los dirigentes sindicales,

¹²² Piva (2009) señala la relevancia de la lucha docente en este período, en tanto era capaz de convocar a sectores medios –interpelados en valores compartidos- como a la clase obrera –en tanto asalariados en proceso de ajuste. En este sentido, la lucha docente por “Educación y Trabajo” contenía una dosis de vaguedad que lo facilitaba como demanda tendencialmente vacía, funcionando como eje de la articulación de una amplia cadena equivalencial. Esto pone de relevancia la existencia de otros actores dentro del campo popular con demandas no corporativas, tendencialmente capaces de construir hegemonía, más allá de los piqueteros que señala Muñoz (2010).

¹²³ Por una extraña coincidencia, el interventor del PAMI entre 1994 y 1995 se llamaba Carlos Alderete, y fue procesado también por cargos de corrupción.

centralmente a través de la ministra de Trabajo Patricia Bullrich –quien promovió además en 2001 una ley de transparencia sindical fuertemente resistida.¹²⁴

La relación con el resto de las clases populares no fue mejor. En esta etapa cobraron relevancia las organizaciones de trabajadores desocupados (luego conocidos como piqueteros por su método de lucha más frecuente), con quienes el gobierno tendió a no negociar, prefiriendo la represión directa con Gendarmería, particularmente visible en las provincias del interior.¹²⁵ La persecución judicial era otra vía de “atención” a esta demanda. En marzo de 2001, el ministro Storani impulsó casi 2.800 causas judiciales contra piqueteros y gremialistas (Kohan, 2002). El punto máximo de esta escalada represiva sería la declaración del Estado de sitio el 19 de diciembre de 2001 (ver sección 4.2.2), pero reconocía toda una trayectoria previa consistente con este modo de tramitación de la protesta (ACTA, 2011; Massetti, 2006).¹²⁶

Hubo, sin embargo, otra política pública relevante en la dinámica del período, que fueron los planes sociales de empleo (cuya aparición en la escena nacional estuvo a cargo del Plan Social de Menem, en 1993). En el marco de una creciente expulsión del mercado laboral formal, las instituciones remanentes del Estado de Bienestar resultaban insuficientes para contener las necesidades sociales (Barba Solano, Ordóñez Barba y Valencia Lomelí, 2009; Isuani y Nieto, 2002). Asimismo la lógica de ajuste fiscal implicaba una racionalización (recorte) de los recursos asignados a la asistencia social, que se producía mediante el giro de focalización (definición de grupos específicos de atención contra las lógicas de universalización) y demanda de contraprestación (acción que valide la asistencia demostrando “merecer” la ayuda), generando políticas tipo *workfare* promovidas por el Banco Mundial. Es, de hecho, mediante el asesoramiento y financiamiento de este organismo que se lanzó en 1997 el Plan Trabajar, como reacción

¹²⁴ De hecho, para poder promover una privatización del sistema previsión –tal como demandaba el FMI– el gobierno creó en octubre de 2001 (Decreto 1366/2001) un Ministerio de Seguridad Social, separado del de Trabajo. Bullrich pasó al nuevo ministerio, siendo reemplazada por el radical José Dumón.

¹²⁵ El uso de la fuerza regó al país con muertos. Algunos de ellos, como Aníbal Verón, asesinado en noviembre de 2000, serían recuperados como símbolos de resistencia por las organizaciones populares.

¹²⁶ El gobierno sostuvo que los piquetes eran una estrategia de deslegitimación del PJ. Cuando su influencia creció, acusaron a partidos de izquierda, y finalmente dijeron que eran subversivos armados y terroristas. La gran disputa discursiva fue lograr poner las demandas expresadas en los piquetes como un problema político, y no como una cuestión administrativa, como buscaba el gobierno (Muñoz, 2010).

a la ola de protestas en el interior del país, que generó la necesidad del gobierno de negociar planes con las organizaciones sociales (Golbert, 2004; Lodola, 2005).¹²⁷

Si bien existían otros planes de asistencia, el Plan Trabajar fue muy importante por ampliar la cobertura (Lodola calcula que alcanzó el 20% de los desocupados) y funcionar como instrumento de negociación entre partidos, niveles de gobierno y organizaciones sociales. Se caracterizó por “una marcada ambigüedad al no constituir ni un seguro de desempleo, ni una política asistencial, ni una política de reinserción laboral” (Svampa, 2004b). La mayor parte de los planes sociales dependería de la gestión de las provincias, lo que daba mayor poder a los gobernadores y era fuente de tensión con el objetivo del gobierno federal de ajuste fiscal. Por este motivo, que beneficiaba particularmente a la red clientelar del PJ, es que la Alianza tempranamente buscó reordenar los planes (pasar de 69 a 18) y sortear la intermediación, distribuyéndolos entre las propias organizaciones de desocupados (Svampa, 2004b).

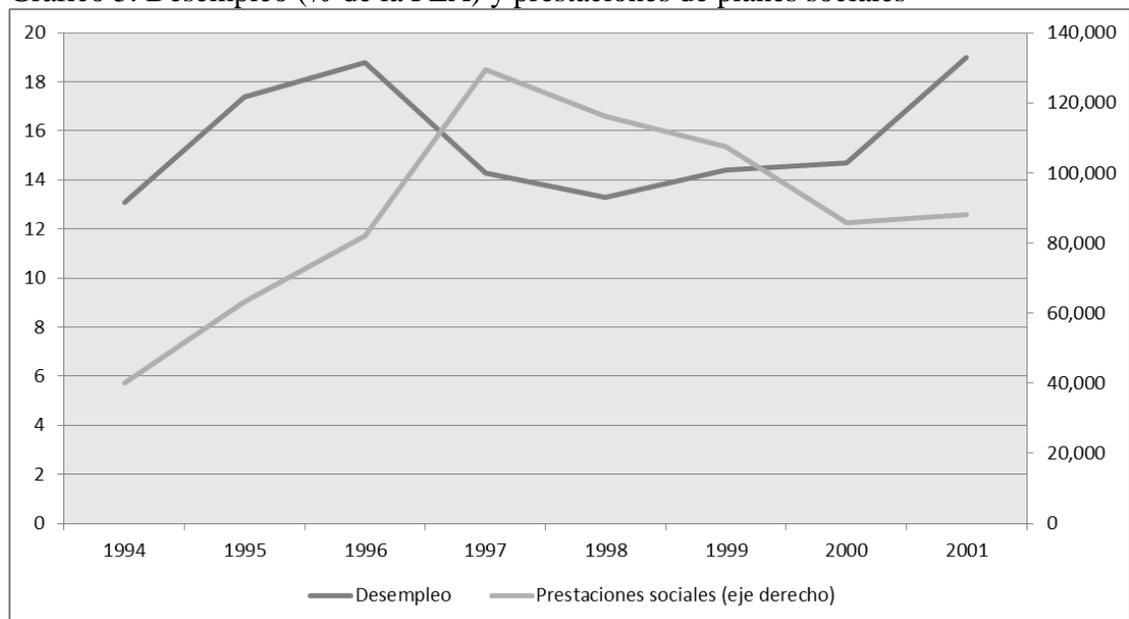
Justamente, la Alianza puso en marcha un nuevo plan, el Programa de Emergencia Laboral (PEL), con dos líneas centrales, una destinada a consorcios productivos locales y otra al autoempleo productivo, que debían ser ejecutadas por municipios y ONGs (Golbert, 2004). Este plan fomentó el proceso de “ongización” de las organizaciones de desocupados, incentivando un nuevo tipo de gestión de la acción colectiva (Masseti, 2010), e introdujo la idea de dispersar la asistencia según las posibilidades de *empleabilidad* del beneficiario, reforzando la perspectiva de focalización. De hecho, aunque no llegó a implementarse, el programa que la Alianza defendía era el “Solidaridad o Plan Integral de Ataque a la Exclusión Social”, que no ponía el foco en el empleo sino en la nutrición, salud y formación, incrementando las distinciones entre beneficiarios (Golbert, 2004). El organismo de gestión dejó de ser el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para pasar a manos del de Desarrollo Social, Medio Ambiente y Deportes.¹²⁸ Ambos elementos anticiparían la estrategia de rediseño de la política social del kirchnerismo.

¹²⁷ Por una revisión de las políticas socio-laborales aplicadas en Argentina y su lógica de funcionamiento, ver Martos (2014).

¹²⁸ El Ministerio de Desarrollo fue creado en agosto de 2000 (Decreto 677/00) para distinguir las políticas destinadas a ocupados (MTESS) de las que atenderían necesidades de los desocupados o subocupados (políticas sociales). Se trata de un reconocimiento institucional del rebasamiento del modelo de políticas

De todas formas, la cantidad de planes manejados por las organizaciones sociales fue ínfimo –nunca superó el 10% (Rajland, 2008). Aún así, en marzo de 2001, la ministra Bullrich intentó un reempadronamiento masivo para quitárselos. Como se ve en el gráfico 5, el número de prestaciones ligadas a planes de empleo disminuyó a pesar de la dinámica creciente del desempleo durante la crisis, incrementando así la tensión por la asignación de los mismos. Lodola (2005) señala la importancia de la protesta social para determinar la asignación de planes, confirmando que cumplían una tarea de contención.

Gráfico 5. Desempleo (% de la PEA) y prestaciones de planes sociales



Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC y Golbert (2004).

La necesidad de reducir los gastos (y tentativamente, los impuestos) guiaban las preocupaciones del gobierno. Sin embargo, algunos gastos no eran reducibles, pues el objetivo era garantizar los pagos de deuda para generar certidumbre a los mercados. En mayo de 2000, mediante el Decreto 430/00, el ministro de Economía José Luis Machinea estableció una reducción de sueldos y jubilaciones públicas (12% para haberes de entre \$1000 y \$6500; 15% para montos superiores), lo que le ocasionó fuertes reproches y resistencias (ver sección 4.2.2). Cuando el ministro fue reemplazado en

del Estado de Bienestar, y la realidad de la creciente marginación de la fuerza de trabajo. El aparato del Estado modificó su forma para adecuarse a la realidad social en que se insertaba.

marzo de 2001 por el ultra-ortodoxo Ricardo López Murphy, hasta entonces ministro de Defensa, la apuesta se redobló. Éste demostró gran entusiasmo, y fue aplaudido en la Bolsa de Comercio cuando anunció su programa: un recorte anualizado de \$2,500 millones, de los que \$1,100 se quitaban del presupuesto educativo (universidades y Fondo de Incentivo Docente), más la eliminación del subsidio al gas patagónico y del Fondo Especial del Tabaco, y un incremento del IVA (Página/12, 17/3/01). Una ola de protesta impidió que el programa se lleve a término.

El ministro que lo sucedió, Cavallo, tuvo un primer intento menos ortodoxo, en el sentido de correr relativamente el eje de la cuestión fiscal, buscando incentivar el crecimiento para salir de la recesión. Al momento de asumir, impuso la condición de obtener “superpoderes”, que consistían en delegarle facultades legislativas al poder ejecutivo. De esta forma, el “superministro” podría legislar por decreto (Pucciarelli, 2014), lo que acentuaba la concentración del poder en el área ministerial de economía, desplazando simbólica y jurídicamente las atribuciones de la política propiamente dicha (Bonnet, 2011). Rápidamente envió al congreso su proyecto de ley de Competitividad (N° 25,413), que incluía un impuesto a transacciones financieras (impuesto al “cheque”), la modificación aranceles externos y una ampliación de la Convertibilidad con una canasta de monedas. Pedía además un préstamo “patriótico” al 9% anual de interés a los bancos, y un aporte igualmente “patriótico” a las empresas privatizadas.

La importancia de esta ley no está en buscar aportes de los sectores no afectados por la crisis, sino en que se trata de la única acción que implicaba una salida cambiaria al problema de la apreciación de la moneda. La heterodoxia consistía en ganar competitividad sin salirse de la Convertibilidad, porque se mantenía la regla de conversión, pero debido al menor valor del euro respecto del dólar, su incorporación implicaría una devaluación controlada (Levy Yeyati, 2001). Esta idea de la *Convertibilidad ampliada* suscitó debates y resistencias dentro del propio BEP (ver sección 4.2.1). Un impedimento para este proyecto era la permanencia del menemista Pedro Pou como presidente del BCRA (Pucciarelli, 2014). Para ello, se lo desplazó bajo el argumento de “mala conducta y negligencia”, reemplazándolo por Roque Maccarone

(La Nación, 26/4/01).¹²⁹ El menemismo reaccionó presentando un proyecto para dolarizar la economía, a pesar de saberse en minoría en el Congreso.¹³⁰

Ante la presión de los sectores financieros (que prestaron al 14-16% de interés en lugar del 9% que pedía el ministro), Cavallo avanzó desde junio con el “Megacanje” y la Ley N° 25,453 de Déficit Cero (Pucciarelli y Castellani, 2014). Esta última indicaba que el gobierno no podía gastar más de lo que recaudaba mes a mes, para garantizar los pagos de deuda, ajustando en los pagos a proveedores, sueldos y haberes jubilatorios. El recorte del gasto a la medida de los acreedores generó mayores fricciones con las clases populares, pero también con las provincias, que debían contener el conflicto sin recursos. Esto fue lo que desató la emisión masiva de cuasi-monedas en 18 provincias (Schvarzer y Finkelstein, 2003) e incluso en el propio Estado nacional, con el LECOP (Decreto 1004/01). El déficit cero era inviable mientras se pagara la deuda.

Los acreedores, por su parte, en tanto sus intereses se satisfacían, accedían a nuevas reestructuraciones de las deudas. La Alianza completó 3 canjes de deuda.¹³¹ El primero de ellos, fue el Blindaje financiero en diciembre de 2000, acordado con el FMI, algunos gobiernos extranjeros (España en primer lugar) y bancos privados nucleados en ABA. Consistía en la promesa de fondos por US\$39,700 millones (US\$13,700 millones del FMI, US\$1,000 de España, US\$5,000 de ABA) a cambio de privatizar el Banco Nación y avanzar en la reforma tributaria y previsional. Gracias a este acuerdo, en enero de 2001, el FMI amplió el *stand by* (préstamo de menores condicionalidades en materia de reformas pero mayores controles), permitiendo al país disponer de casi US\$3,000 millones, que se transformaron en austeros US\$611 millones efectivamente transferidos, bajo las mismas condicionalidades de 1998 (Brenta, 2008).

Pero esta negociación sólo permitiría ganar tiempo. Apenas 6 meses después, llegaría el Megacanje (Decreto 648/01), acordado con el FMI y los bancos de ABA, para reestructurar los vencimientos de deuda extendiendo los plazos de vencimiento. La

¹²⁹ Pou provenía de la ortodoxia neoliberal impulsada por el Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina (CEMA). Su reemplazante estaba ligado a los bancos de origen nacional, nucleados en ADEBA antes de su fusión con ABA. El enroque provocó malestar entre los economistas del CEMA (Jorge Ávila, Roque Fernández y Carlos Rodríguez), que en julio de ese año salieron a atacar sistemáticamente a Cavallo en los medios, acusándolo de “keynesiano simplista” (C. Rodríguez, 2001). Ávila iría más lejos en su hermetismo ideológico, según mostraba el epígrafe de su blog personal: “La Argentina es el problema; el mundo es la solución; el ALCA es la puerta al mundo” (ver Gálvez, 2011).

¹³⁰ Sobre la dolarización y el menemismo, ver Cantamutto y Wainer (2013) y Cantamutto (2012a).

¹³¹ Ver más detalles de estos canjes en (Cantamutto, 2012b).

mayor parte de los US\$29,477 millones involucrados estaban en manos de bancos asociados a ABA, que fungieron a la vez como colocadores de deuda.¹³² Amén de las elevadas tasas pactadas (hasta 12.44% en dólares), la operación elevó la deuda total en US\$40,000 millones, cobró importantes comisiones y fue denunciada por fuertes irregularidades (A. García, 2001).¹³³ Técnicamente, para estas fechas, Argentina ya estaba en cesación de pagos (J. Iñigo Carrera, 2001). La recesión había generado un superávit comercial externo, pero éste no alcanzaba para compensar la salida de fondos.

Completado este canje, el FMI aprobó un nuevo préstamo, por un monto similar al de las reservas fugadas en los meses previos (US\$6,300 millones). El acuerdo con el organismo implicaba avanzar en el ajuste fiscal de la ley de Déficit Cero. El Estado nacional transfería el ajuste a las provincias (forzando a que paguen hasta 24% en dólares de interés por sus deudas), lo que indujo a un nuevo canje en noviembre. La mayor parte de los US\$55,344 millones en títulos canjeados estaba en manos de las AFJP y, nuevamente, de bancos de ABA. Se redujeron las tasas de interés al 7%, pero se comprometió la recaudación fiscal para hacer creíbles los bonos, llamados “préstamos garantizados” (Decreto N° 1,387). Cavallo, en su ánimo de pagos, prometía incluso recursos aún no existentes. Se lanzaron ese mes algunas medidas destinadas a reactivar la economía, entre ellas desgravaciones a compras con tarjeta y exenciones fiscales a la repatriación de capitales (Decretos N° 1,382).

Uno de los objetivos del canje de noviembre era lograr el visto bueno del FMI para un nuevo desembolso de los montos comprometidos por el Blindaje. Sin embargo, el organismo alegó la falta de cumplimiento de metas fiscales (el déficit no se reducía), y se negó a aportar fondos frescos. Al negar su apoyo para pasar a una fase externa del canje de préstamos garantizados, puso al gobierno en un severo aprieto: su principal referente le había soltado la mano. El BM y el BID congelaron sendos envíos de fondos, por un total de US\$850 millones, ante la falta de acuerdo con el FMI (que también congela fondos por US\$1,264 millones). Dado que la caída de depósitos para comprar

¹³² Ante las denuncias de ilícitos, el titular de ABA, Escasany, afirmó que no era bueno criticar o investigar estas irregularidades porque dificultaban la aplicación del “plan económico” y creaban ruido político (La Nación, 24/6/01).

¹³³ El movimiento piquetero, la CTA y el MTA denunciaron este acuerdo como una nueva renovación de una deuda ilegal e inmoral, demandando su revisión: seis meses antes ya se había pronunciado el juez federal Ballesteros sobre el carácter ilegítimo de la deuda, y había derivado la investigación al Congreso nacional (Olmos Gaona, 2011; Rodríguez Kauth, 2002).

dólares no se detenía, el 2 de diciembre de 2001, días después de cerrado el nuevo canje, el ministro de Economía anunció la aplicación de un sistema de restricciones al retiro de depósitos (máximo de \$250 a la semana, acumulables en el mes), conocido como el “corralito” financiero (Decreto 1,570/01). La bolsa de valores cae un 40%, en lo que los propios inversores señalaron como una “toma de ganancias” (La Nación, 10/12/01). Se suspendieron los planes de competitividad y las exenciones impositivas, lo que fue un golpe directo al apoyo empresarial. Esta medida desataría la furia de los sectores medios, golpeados por una década de empobrecimiento que ahora no les dejaba siquiera mantener sus ahorros. Aparecerían en escena las protestas de los “ahorristas”.

Esta medida significaba en los hechos el fin de la Convertibilidad en tanto caja de conversión: al prohibir al público la libre disponibilidad de los depósitos para evitar la fuga al dólar, se estaba declarando indirectamente la incapacidad del BCRA de responder a la demanda de divisas extranjeras (Levy Yeyati y Valenzuela, 2007). Ante la imposibilidad de convertir pesos a dólares, aunque el tipo de cambio aún no se hubiera modificado, la Convertibilidad estaba ya en bancarrota. Fue en este momento cuando comienzan a aparecer referencias explícitas del equipo de gobierno a la posibilidad de dolarizar la economía, en particular de Cavallo (La Nación, 6/12/01 y 17/12/01). De hecho, se negoció ese mes la entrada de funcionarios ligados al ex presidente Menem, único defensor abierto y sistemático de la dolarización.

El gobierno de la Alianza quedó así atrapado en su propia lógica de ajuste fiscal y flexibilización laboral, al punto de depender íntegramente del ingreso de fondos del exterior. El endeudamiento para sostener la Convertibilidad acabó por ser imposible de sostener (ver sección 2). La principal política frente a quienes se opusieron a estos lineamientos, fue la represión. No obstante, vale la pena remarcar la consolidación de planes sociales como mecanismos de contención de la protesta. Sin un proyecto alternativo de orden político, que diera un programa de políticas públicas, la Alianza no tenía más remedio que insistir con los instrumentos disponibles, lo cual incrementaba las tensiones del propio orden neoliberal. Sobre estas tensiones y la lenta definición de proyectos en disputa, se trata la siguiente sección.

4. Disputas políticas y patrón de dominación

4.1. Representantes en el Estado

El regreso de la democracia institucional en los ochenta supuso una serie de cambios a la dinámica de representación, marcada por el duro trance de la represión de la dictadura. Sin discutir estos cambios aquí, vale la pena señalar sucintamente el giro en los dos principales partidos políticos del país, la Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Justicialista (PJ). En función de un fenómeno de menor afiliación partidaria, ambos partidos fueron modificando su estructura hacia un componente más tecnocrático, menos ligado a la militancia, que les produjo una pérdida de base programática e ideológica, orientándose en un giro “atrapa-todo” (Roberts, 2002). Este cambio se relaciona con otro a nivel global hacia democracias cruzadas por la lógica de lo mediático, que refuerzan el rol de los líderes y su capacidad de interactuar con los públicos “de audiencia” (Fair, 2008; Manin, Przeworski y Stokes, 2002; Manin, 1998). A su vez, tiene relación con la pérdida de peso del empleo formal en la estructura social, que reducía el peso de la representación corporativa sindical, e incrementaba el peso de representantes territoriales de base, que actúan como operados políticos vinculando al partido con los habitantes “del barrio” (Auyero, 2007; Levitsky y Murillo, 2005; Paladino, 2006; Schuttenberg, 2012; Varela, 2010). Estos factores, entre otros, generaron fricciones internas entre los partidos y dentro de ellos, buscando redefiniciones acordes a los tiempos pero sin poder renegar de sus propias trayectorias.¹³⁴

Tras la guerra de Malvinas, el liderazgo de Raúl Alfonsín había quedado consolidado, dentro y fuera de las filas de la UCR. Ya en las elecciones internas de 1983, la Línea Nacional promovida por Balbín (Fernando De la Rúa-Carlos Perette) decidió desistir de la competencia ante el gran apoyo al futuro presidente. Este liderazgo entraría en crisis con la salida adelantada de Alfonsín del gobierno, en 1989, y su posterior renuncia a la presidencia del partido en 1991. Esto motivaría la recuperación de la línea Nacional dentro del partido, de la mano de Rodolfo Terragno y De la Rúa, sin mayores éxitos electorales. En 1992, Alfonsín fundó el MODESO (Movimiento para la Democracia Social), reivindicando la socialdemocracia frente al neoliberalismo

¹³⁴ Creemos que la lectura obligada para comprender estos cambios es (Aboy Carlés, 2001a).

impulsado por Menem.¹³⁵ Sin embargo, su participación en el Pacto de Olivos fue clave para logra la reforma constitucional, que habilitó la reelección de Menem. Entre las críticas al neoliberalismo y la necesidad de aumentar su caudal electoral, el radicalismo se vio impulsado a buscar alianzas con sectores disidentes del peronismo.

El PJ había tenido una importante disputa interna durante los ochenta, con la corriente de Renovación Peronista, liderada por Antonio Cafiero.¹³⁶ Esta corriente perdería las internas contra Menem-Duhalde ante las elecciones de 1989, y pasaría a estar relegada en los siguientes años. Frente al giro neoliberal del gobierno de Menem, y en particular respecto de los indultos a los represores, el PJ sufrió varios desprendimientos. El primero (en 1990) fue el del Grupo de los 8, liderado por Carlos “Chacho” Álvarez, que se une con otro antiguo aliado del PJ que se aleja del menemismo, el Partido Demócrata Cristiano dirigido por Carlos Auyero. Tras sucesivas alianzas, juntos forman el Frente Grande, en el que participarán el Partido Intransigente (PI), el Partido Comunista (PC), el Frente del Sur (con la figura central de Fernando “Pino” Solanas) y algunos miembros del Partido Humanista. Serían una de las voces más sentidas de oposición al Pacto de Olivos de 1994. Cuando ese año José Octavio Bordón también abandonó el PJ para fundar su propio partido (PAIS -Política Abierta para la Integridad Social), estas fuerzas críticas del menemismo formaron el Frente País Solidario (FREPASO). Se unió además Unidad Socialista, integrada por los partidos Socialista Popular y Socialista Democrático, y se retiró el Frente del Sur.

Se constituía así un polo crítico, el peronismo de centro-izquierda dispuesto a disputar el gobierno al menemismo (Godio, 1998; Mocca, 2009). El PJ, en tanto, quedaba bajo el control de Menem, y no dudaba en incluir en el gobierno funcionarios provenientes de la tecnocracia empresarial y partidos de fuerte liberalismo conservador – concretamente, la Unión del Centro Democrático (UCeDé).¹³⁷ El éxito del Frepaso –

¹³⁵ “La sociedad Argentina debe optar entre el orden conservador que se le propone desde el gobierno o la democracia social”, señalaba el Manifiesto fundacional del MODESO. Disponible en http://www.leopoldomoreau.com.ar/entrada_notas_manifiesto_fundacional_hacia_la_democracia_social#.VS3i7_mUeSo

¹³⁶ Otros dirigentes de esta corriente eran José Manuel de la Sota, José Pampuro, Aníbal Fernández y Ginés González García (los últimos tres, futuros ministros del gabinete de Kirchner).

¹³⁷ Si bien el liberalismo y el conservadurismo son corrientes ideológicas diferentes –antagónicas en muchos aspectos- su influencia en dirigentes y partidos políticos argentinos no es “pura”, sino más bien admite combinaciones diversas. Una amalgama frecuente es la defensa ferviente del liberalismo económico (o neoliberalismo, en el caso contemporáneo) y una no menos vehemente adhesión a valores

saldría segundo en las elecciones presidenciales de 1995- plantearía el desafío de crecer para ser una alternativa de poder. Para ello, el frente abandonó relativamente su discurso crítico al modelo, para enfocarse exclusivamente en los elementos de corrupción y falta de transparencia, lo que le permitió avanzar en las negociaciones con la UCR, que contaba con una estructura de cuadros de cobertura nacional (Dikenstein y Gené, 2014).

El proceso de convergencia resultaría en la creación de la Alianza, fuerza política que se enfrentó exitosamente al candidato del PJ, Eduardo Duhalde,¹³⁸ consagrando a De la Rúa como presidente (1999-2001). El candidato vencido había sido muy crítico de la Convertibilidad, insinuando valorizar la producción industrial doméstica. Su candidatura no fue apoyada por Menem, lo que abrió una etapa de conflictos dentro del PJ: Duhalde controlaba el poderoso aparato bonaerense, pero perdió la elección; mientras Menem seguía presidiendo el partido, a pesar de su creciente ilegitimidad (Raus, 2014). El PJ quedaría por el resto del período dividido en “tribus” sin un liderazgo claro, que abría la puerta para la proyección de otras figuras; en particular, los gobernadores de Córdoba (De la Sota), Santa Fe (Reutemann) y Buenos Aires (Carlos Ruckauf). El gobierno buscó lograr pactos de gobernabilidad con estas fracciones, que le serían esquivos.

Al interior de la Alianza, la dinámica de las candidaturas y la composición del gabinete de gobierno mostrarían el peso del aparato de la UCR (Dikenstein y Gené, 2014). En el primer gabinete, el Frepaso sólo tenía 2 ministerios de un total de 11, 8 secretarías de 42, y 4 subsecretarías de 58. Del total de 27 ministros que hubo en la presidencia, sólo 4 fueron del Frepaso (Graciela Fernández Mejjide, Alberto Flamarique, Marcos Makón y Juan Pablo Cafiero). Sin embargo, no sólo el Frepaso sería relegado, sino incluso las propias filas orgánicas de la UCR (el único representante de esta estirpe fue Federico Storani), mientras que el gabinete se orientaría en un sentido claramente tecnocrático (Machinea, López Murphy, Juan José Llach y Adalberto Rodríguez Giavarini). Esto comprometió de modo creciente el diálogo entre el gobierno y las dos fuerzas políticas que componían la Alianza, aislando progresivamente al primero.

morales conservadores, traducidos políticamente en restricción de derechos individuales. El caso de la UCeDé encaja perfectamente en esta descripción.

¹³⁸ No intentamos resumir aquí el derrotero político de Duhalde. Se trata de un dirigente peronista del conurbano bonaerense, cuyo ascenso político en la escena nacional está atado a su vínculo (como vicepresidente) y luego ruptura con Menem. Fue gobernador de Buenos Aires (1991-1999).

De hecho, con el correr de los meses, estos sesgos no harían sino exacerbarse. El primer conflicto vino de la mano de los escándalos por pagos de coimas en el Senado para la aprobación de la Reforma Laboral. Entre junio y octubre de 2000, el vicepresidente Álvarez realizó una cruzada en el cuerpo parlamentario, por la investigación y juicio a los responsables. El nulo apoyo por parte del presidente De la Rúa acabó con la renuncia de Álvarez, ocasionando un sisma en la Alianza, y dejando libre la vía de sucesión en caso de acefalía. El ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, implicado en las denuncias, presentó su renuncia también, siendo reemplazado por Patricia Bullrich. Finalmente, Flamarique fue trasladado a la Secretaría General de la Presidencia, alimentando al propio escándalo (por ser premiado en lugar de desplazado). El Frepaso se debatiría—igual que la fracción del radicalismo ligada a Alfonsín— entre la crítica frontal y el apoyo distante (Dikenstein y Gené, 2014). El jefe de gabinete Terragno (considerado un radical no orgánico) también renuncia, y es reemplazado por Christian Colombo. Nicolás Gallo abandona el ministerio de Infraestructura y pasa a la secretaría de la presidencia. Los tres reemplazos eran gente más cercana a De la Rúa que a cualquiera de los partidos de la Alianza. Según Peralta Ramos (2007), Alfonsín llegó a insinuar que si De la Rúa no cambiaba de política económica se iba a quedar sin partido.

El gabinete se volvió a alterar con la renuncia en marzo de 2001 de Machinea a la cartera de economía, hombre ligado a la UIA y promovido por Álvarez y Alfonsín.¹³⁹ Su reemplazo, López Murphy, vino acompañado por todo el equipo de FIEL, expresando con total claridad su defensa del neoliberalismo y los intereses de la banca.¹⁴⁰ Su planteo era “disciplinar a los políticos” ajustando gastos innecesarios, lo que generó dudas en el radicalismo alfonsinista (La Nación, 7/3/01). Anunciado el plan de recortes, renuncian masivamente funcionarios del Frepaso: se van Fernández Meijide (vice jefa de gabinete), Makón (Desarrollo), Mitre (secretario general de la presidencia) y Garré (secretaria de Interior). “Es demasiado. Nos vamos” dijo Álvarez (Página/12, 17/3/01). También renuncian los ministros radicales Storani (Interior) y Hugo Juri

¹³⁹ Machinea fue funcionario de carrera dentro del Banco Central durante la dictadura militar. Ya en el gobierno de Alfonsín, sustituyó garantías del Estado respecto a la deuda privada, convirtiéndola en deuda pública. A partir de 1992 trabajó para la UIA, y particularmente para Techint.

¹⁴⁰ La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) es un think tank neoliberal creado en 1964 por varias cámaras empresariales (La Nación, 6/3/01). López Murphy, economista jefe de FIEL hasta su arribo al gobierno, llevó consigo otros prominentes apellidos de la fundación: Artana, Solanet, Sturzenegger, Navajas y Savanti.

(Educación), dejando al gobierno en soledad en el rumbo elegido. Las protestas populares obligaron a renunciar a López Murphy a las dos semanas de asumir.

El regreso de Cavallo como ministro de Economía representaba la idea misma de la estabilidad y el éxito de la Convertibilidad, pero significaba asentar el ascenso de la tecnocracia ajena a los partidos.¹⁴¹ Según se sabe, pretendió formar un “gran acuerdo nacional” para solventar políticamente sus propuestas, motivo por el cual requirió el regreso de Álvarez al gobierno (Dikenstein y Gené, 2014). Estas gestiones fueron imposibles (“los puentes estaban absolutamente rotos” diría el ex vicepresidente un año más tarde), y de hecho, se afianzó la incorporación de jóvenes cercanos al gobierno, de extracción social alta (motivo que sirvió para el mote de “Grupo Sushi”).¹⁴² La UCR publicó en agosto un documento llamado “Hacia la unión nacional”, donde se sentenciaba que “el modelo está agotado”. Sin embargo, más allá de inconformidades, tanto el Frepaso y la UCR como el PJ votaron todas las propuestas de ley de Cavallo.

Las elecciones de octubre de 2001 fortalecieron la presencia del peronismo (37.36% de los votos válidos) en el Congreso y en las provincias (Raus, 2014). Las tensiones entre el poder ejecutivo y el legislativo no podían ser mayores. El PJ quedaba acomodado con la presidencia de ambas cámaras, lo que le daba ventaja en caso de hacerse efectiva la ley de Acefalía (N° 25,716): un claro incentivo a no cooperar con el gobierno. Esta situación se conjugaba con un incremento del conflicto entre el Estado nacional y las provincias. Los ajustes fiscales pactados con el FMI que afectaban a la coparticipación generaban un alejamiento explosivo de la mayoría de gobernadores peronistas. Ruckauf manejaba explícitamente la hipótesis de que De la Rúa no terminase su mandato: “Se vienen épocas de profunda convulsión en la Argentina (...) es hora de prepararse para tomar el poder (...) el gobierno debe ser reemplazado por otro peronista” (La Nación, 18/11/01). El entonces gobernador Kirchner dijo en el Consejo Federal de Inversiones: “Acá hay que tomar una decisión: o buscamos una salida institucional porque este gobierno está terminado o hacemos algo distinto” (La Nación, 13/12/01).

¹⁴¹ Cavallo había creado en 1997 su propio partido, Acción por la República, con un claro sesgo liberal. Aunque tenía un escaso peso electoral, la influencia de su líder era innegable.

¹⁴² Se trataba de un grupo de jóvenes liderados por Antonio de la Rúa (hijo del presidente) y apadrinados por el liberal Fernando de Santibañes (banquero, estudió en Chicago, fundador CEMA y vicepresidente de FIEL), quien estaba a cargo de la estratégica Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

Para diciembre de 2001, el gobierno se encontraba completamente aislado. Cuando en medio de la crisis, De la Rúa llamó a un gobierno de unidad nacional, las tres mayores fuerzas políticas le dieron la espalda. El aislamiento político del gobierno aliancista alcanzó su punto máximo tras haber reflatado la idea de dolarizar la economía, un gesto que lo acercaba al ex presidente Menem. De hecho, en los últimos días de diciembre, el gobierno se acercó al ex presidente Menem y su proyecto dolarizador, incorporando incluso funcionarios a su gabinete (La Nación, 15/12/01). Esto no sólo le granjeó la oposición del peronismo no alineado a Menem, sino del radicalismo. “La Convertibilidad nos tiene prácticamente encorsetados, movemos los pies y las manos y no podemos hacer nada más; (...) Como partido, creemos que el peor camino de las alternativas que están dando vuelta, por lejos, es la dolarización” dijo Ángel Rozas, por entonces presidente de la UCR (Clarín, 15/12/01).

Sin embargo, el gran “ganador” de las últimas elecciones había sido una combinación entre el voto nulo, el voto blanco y el ausentismo: distintas formas de “voto bronca” (Pucciarelli y Castellani, 2014). Lo que mostraba este comportamiento electoral era un rechazo generalizado al conjunto de la clase política, al sistema de representación tal como estaba organizado, excluyendo los intereses de las mayorías (Bruno, 2012; Campione, 2002). El 42.67% del electorado no se presentó a votar, o lo hizo en blanco o anulado: una fuerte discontinuidad respecto de los valores previos.¹⁴³ La crisis de representatividad se incubaba en años de políticas contrarias a las demandas populares: la consigna del “que se vayan todos” aparece porque había una acumulación previa de descontento y rechazo. Su problema es que sólo abría una dimensión negativa de equivalencia entre quienes protestaban, sin generar una instancia de estabilización del discurso que permitiera disputar el poder político e instituir un nuevo simbólico (Fair, 2008; Magrini y Quiroga, 2011).

Algunas fuerzas políticas nuevas trataron de capitalizar este descontento. Una de ellas fue el Polo Social, creado en el 2000 por el párroco Luis Farinello (sacerdote

¹⁴³ En el contexto de 2001, estas diversas formas de evitar elegir candidatos han sido leídas como un mismo proceso (Cheresky, 2002). De hecho, un porcentaje creciente del electorado se expresaba por estas vías desde el regreso a la democracia: partiendo del 16.74% del electorado en 1983, el valor de 2001 supone un incremento sustancial. En términos absolutos, significó pasar de tres millones de votantes que se expresan por esta vía, a más de diez millones.

tercermundista, ex detenido por la dictadura).¹⁴⁴ Sin una cohesión ideológica fuerte, se planteaba como anti-neoliberal, introduciendo en su programa la recuperación de los recursos estratégicos de la nación y la integración latinoamericana (Página/12, 9/9/01). Con gran presencia mediática, que ponía en la agenda sus postulados, tuvo encuentros para posibles alianzas con múltiples sectores (PAIS, Izquierda Unida, ARI y PS, referentes salidos del Frepaso, e incluso con Kirchner), sin sellar ningún acuerdo. La Iglesia mostró fricciones por esta iniciativa de Farinello, pero no era más que una de las múltiples expresiones en que la representación católica buscaba influir en los hechos (Goldman y Grandinetti, 2013). El gran proyecto de la Iglesia era el *Diálogo Social*, como institucionalización de mecanismos de consulta entre partes (Ugarte, 2005).¹⁴⁵

Desde dentro de la propia Alianza gobernante se produjo una escisión, cuando en diciembre de 2000 se formó la alianza ARI (Argentinos por una República de Iguales), entre el Partido Socialista Popular (PSP) y el Partido Socialista Democrático (PSD), disidentes de UCR (Elisa Carrió) y del Frepaso (Mario Cafiero). En marzo de 2001 se lanzó en un acto el Movimiento Argentinos por una República de Iguales, presentando candidatos propios en octubre. El ARI buscaba llenar el espacio de centro-izquierda que la Alianza relegó en su gobierno.

Finalmente, los partidos de izquierda buscaban también capitalizar electoralmente el descontento. El caso más significativo quizás fue el de Autodeterminación y Libertad (AyL) de Luis Zamora, que logró reunir por sí mismo el 10% de los votos en las legislativas de octubre de 2001 en la Ciudad de Buenos Aires. Izquierda Unida (IU), compuesta por el PC y el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), y la alianza entre el Partido Obrero (PO) y el Movimiento al Socialismo (MAS), lograron los mejores resultados a nivel federal, reuniendo casi 8% en total –entre ambas alianzas. De estos partidos, sólo el PC y el PO tenían relación directa con movimientos de desocupados (Movimiento Territorial Liberación –MTL- el

¹⁴⁴ Otros referentes del Polo Social eran Daniel Carbonetto, Héctor Recalde (abogado de la CGT), Luis D’Elía (FTV), Francisco “Barba” Gutiérrez. Humberto Tumini (Patria Libre) fue cercano al espacio.

¹⁴⁵ A instancias de la Iglesia Católica y el PNUD, De la Rúa se reunió el 19 de diciembre con empresarios, sindicalistas y referentes del PJ en diciembre, cuando la situación era insostenible (Zuleta Puceiro et al., 2004). Un mes antes, ya se habían reunido en busca de “consensos básicos sobre las cuestiones centrales que deben encararse para enfrentar la crisis” la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, ABA, Bolsa de Cereales, Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, Bolsas de Comercio de Buenos Aires y Rosario, Cámara Argentina de Supermercados, CaCom, Cámara Argentina de Shopping Centers, CEAL, CEA, COPAL, IDEA y SRA, es decir, el arco más liberal de la gran burguesía.

primero, y Polo Obrero el segundo). Los más recientes ARI y el Polo Social lograron mejores resultados en esas elecciones, consiguiendo 4 bancas cada fuerza.

De conjunto, el período se puede sintetizar como sigue. El reemplazo de Menem en el gobierno fue una Alianza constituida por sectores provenientes del radicalismo, el peronismo y el socialismo. Su programa de sostenimiento del orden neoliberal fomentó un creciente aislamiento del gobierno respecto de su propia alianza, generando una diáspora de referentes de centroizquierda hacia nuevas fuerzas. Para dar continuidad a las políticas públicas orientadas a buscar estabilidad y confianza (ver sección 3), el gobierno incorporó cada vez más funcionarios no ligados a los partidos. La función de representación quedaba cada vez más obstruida por la defensa del programa neoliberal, al ser incapaz de tramitar demandas en cualquier otro sentido. La UCR pagó la crisis muy duramente (Torre, 2005). El PJ, dividido en liderazgos internos, lograba posicionarse en el poder legislativo y en las provincias. Sin embargo, el descontento con las figuras representativas de la política desembarcaría en una impugnación generalizada al patrón de dominación. Las fuerzas de izquierda buscaron construir a partir de este descontento, sin lograr capitalizarlo electoralmente. Este magma de descontento protagonizaría las jornadas del 19 y 20 de diciembre, haciendo caer un gobierno que, a esas alturas, estaba prácticamente solo en la defensa del orden neoliberal.¹⁴⁶

4.2. Disputas socio-políticas

Las disputas socio-políticas del período de la crisis se estructuraron con base en *dos grandes ejes*: por un lado, *la ruptura del acuerdo entre fracciones de la gran burguesía* y, por el otro, *el creciente acervo organizativo y disruptivo de las clases populares*. Las interacciones entre ambos ejes son diversas y merecen especial atención.

Llamativamente, el primer eje está prácticamente *ausente* en los estudios realizados desde la perspectiva postfundacional, olvidando el rol que juega en la estructuración de la crisis y en su salida (no sólo en lo económico, sino en el orden

¹⁴⁶ A nivel continental, esta clase de descontento ya había logrado expresión política organizada en Venezuela con la llegada de Hugo Chávez al gobierno en 1999. Si bien su programa en ese momento era cercano a una suerte de Tercera Vía, de alguna manera empezaba el llamado “giro a la izquierda”.

político).¹⁴⁷ Esto lleva estos estudios a enfatizar un componente *sociológico* popular sobre el proceso político: esto es, a reconocer una ruptura populista cuyos únicos actores serían sólo las clases populares. Pero esto parte de un sesgo metodológico infundado, que es omitir del análisis la disputa al interior del BEP. Dentro de las demandas no tramitadas por el orden neoliberal se hallaban también las sostenidas por una parte de las clases dominantes (el GP), y éstas podían –y lo hicieron- jugar parte de la dinámica de tendencial equivalencia con otras demandas (como veremos en esta investigación).

Respecto del segundo eje, suele ser omitida también en estos estudios una *explicación* de las razones por las cuales las demandas populares se acumulan (ver capítulo 1, sección 1.3). Esto significa preguntarse: a) por los motivos que generan la insatisfacción que moviliza el reclamo o la demanda, y b) por qué no pueden ser tramitadas por el Estado. Según explicamos (sección 3), las políticas públicas se orientaban en un sentido específico no por capricho o perversión, sino para sostener la coherencia del orden político que privilegiaba las demandas de ciertas fracciones muy específicas de la gran burguesía. La forma concreta de la acumulación (sección 2) implicaba un empobrecimiento sistemático de las clases populares, y su defensa requería formar un orden político excluyente (sección 4.1). Esto ya fue explicado en las secciones anteriores, las que siguen explican ambos ejes de conflicto.

4.2.1. Disputas dentro del BEP

La viabilidad de la Convertibilidad como programa de reformas dependía necesariamente del consenso de la gran burguesía, que se ordenó a través del G8 como sostén de la misma. A partir del Tequila, sin embargo, comenzaron las fricciones: no sólo por la vulnerabilidad a los cimbronazos externos sino porque se agotaban los activos privatizables, que constituían la prenda de cambio para las fracciones que no comandaban el bloque en el poder. Sin estas oportunidades de inversión, los capitales ubicados en actividades transables enfrentaban una pérdida de competitividad debida a

¹⁴⁷ Si bien los estudios sobre protesta social también se enfocan de modo exclusivo en las organizaciones populares, queda claro que su interés no es definir o explicar las modificaciones en el patrón de dominación, y por lo tanto, esta omisión tiene una relevancia –teórica o empírica- menor para los mismos.

la apreciación del tipo de cambio y a un encarecimiento del financiamiento (ver sección 2).¹⁴⁸ Esto acrecentó las tensiones en el BEP desde 1998.

El ajuste al alza del tipo de cambio suponía conflictos entre fracciones del capital. Por un lado, los servicios en general, privatizadas y sector financiero en particular, tenían cierta protección a la competencia, y la apreciación del peso les permitía valorizar sus ganancias en moneda fuerte, por lo que no estaban interesados en devaluar. Por otro lado, otras fracciones podían ganar competitividad con una devaluación, pero esto les implicaba un riesgo financiero, debido a su alta proporción de deuda en dólares. Gran parte del agro estaba en esta situación. Al respecto, la presión del costo financiero creciente operaba sobre todas las fracciones del capital, excepto sobre la financiera, que consolidaba su primacía por esta vía. Esto la aislaba del resto del BEP, siendo la fracción más interesada en la continuidad de las reformas.

Éstas, como explicamos antes (sección 3), implicaban ajustes del presupuesto público. Si bien ninguna fracción del capital se oponía a menores impuestos, el punto de conflicto estaba en qué partidas del gasto reducir. El capital financiero, naturalmente, defendía los pagos de deuda con el argumento de generar previsibilidad. Aquellas fracciones del capital orientadas a las ventas en el mercado externo, no encontraban conflicto en este sentido, aunque para compensar la pérdida de competitividad exigían con mayor ímpetu desgravaciones impositivas de diverso tipo. Pero aquellas fracciones que dependían en algún grado de la reactivación del mercado interno veían un problema en la dinámica de ajuste y recesión. Gran parte de la industria, la construcción y los sectores menos concentrados del agro, de hecho, estaban interesados en planes públicos de reactivación. Asociaciones empresarias de tradición liberal –como SRA o CACom– encontraban beneplácito en casi cualquier recorte.¹⁴⁹

¹⁴⁸ Según datos referidos por Beltrán (2014), entre 1998 y 2001, la rentabilidad de las grandes empresas industriales cayó un 70%. El agro disminuyó su margen bruto en un 50% para trigo, 32% en maíz, 51% en girasol y 30% en soja. En servicios privatizados, cayó un 13%, aunque la banca privada tiene ganancias ascendentes hasta mediados de 2001. Debe remarcarse, sin embargo, que las tasas de ganancia diferían fuertemente a favor de las empresas extranjeras y contra las nacionales, con una importante incidencia de la vocación exportadora en cada caso (Burachik, 2008). Cfr. Michelena (2009).

¹⁴⁹ Más allá de su impronta liberal, CACom representa grandes cadenas de comercialización e incluso algunas empresas de servicios públicos (junto con ADESPA, que tomó similares posturas). Dado que: a) gran parte de los insumos o de los bienes comercializados eran importados; b) utilizaban ampliamente el crédito externo; y c) eran mayormente filiales de transnacionales; estas empresas no veían con buenos ojos la devaluación, porque encarecía las mercaderías y el crédito, reduciendo las ganancias en dólares.

Un punto de convergencia para el capital concentrado era la necesidad de reducir el costo laboral. El conjunto de la gran burguesía encontraba atractiva esta forma de incrementar la rentabilidad y al mismo tiempo reducir el gasto público. Esto explica la importancia que el gobierno de la Alianza le otorgó a este punto de la agenda, con la ley de Reforma Laboral y la negativa sistemática a atender reclamos sindicales. Asimismo, este punto de confluencia del BEP sería central para estructurar la salida de la Convertibilidad: la devaluación, aunque resistida por otros motivos, cumplía esta tarea.

La presentación esquemática de estas posiciones busca sintetizar los puntos más relevantes de encuentro y desencuentro al interior del BEP.¹⁵⁰ Sin embargo, las mismas no estaban predefinidas desde el inicio. Más bien, se fueron presentando lentamente, y no sin algunas ambivalencias, a medida que las tensiones económicas y políticas se incrementaban. Gálvez (2011) propone dos grandes agrupamientos, entre quienes querían radicalizar la Convertibilidad y quienes la cuestionaban. Creemos más adecuada la presentación tripartita de Beltrán (2014), entre sostener el modelo, profundizarlo con una dolarización o salirse vía devaluación. La postura de sostener el modelo era un intermedio donde se ubicaron en general las fracciones insertas en el sector transable con mayor productividad relativa -básicamente, el agro, la agroindustria y productores de *commodities* industriales. El caso de las automotrices era similar. La evaluación de una posible devaluación para este grupo consideraba tanto las potenciales mayores ganancias como la propia exposición financiera, su importante dependencia de insumos importados y, en el caso de las extranjeras, la necesidad de remitir las utilidades a sus casas matrices (Cantamutto y Wainer, 2013). Por último, un amplio sector de PyMEs necesitaba de la devaluación para poder sostenerse frente a la competencia externa, pero a la vez la temían debido a su alto nivel de endeudamiento en dólares. Por eso, éstas defendían sostener la Convertibilidad, aunque demandaban ciertas medidas de redistribución.

En cada grupo había situaciones heterogéneas, que fueron cambiando a lo largo del tiempo. Así, un sector de las finanzas (la banca nacional) fue alejándose de su posición original hasta confluir en la demanda de devaluación en diciembre de 2001. Con el aumento de los costos económicos (la recesión), sociales (el repudio) y políticos

¹⁵⁰ Aunque tratando de respetar una presentación del proceso, algunas disputas y posicionamientos de estos sectores se omitirán. Se pueden consultar mayores precisiones en Beltrán (2014), Cantamutto y Wainer (2013), Cantamutto (2012b) y Gálvez (2011).

(el aislamiento) de defender la Convertibilidad, esta fracción cambió de postura. Así, la temporalidad establecida por Beltrán (2014) de dos subperíodos (1999 hasta enero de 2001, y de ahí a 2002) busca mostrar que, a medida que las tensiones se agravaban, la distancia entre las fracciones se hacía más explícita. Sin embargo, en rigor, antes de la coyuntura electoral de 1999 las posiciones extremas ya habían sido presentadas, aunque aún no agrupaban con claridad las fracciones del capital.

La primera señal fue la aparición pública del Grupo Productivo (GP) en 1998, que si bien no se planteó inicialmente como una oposición, en los hechos separaba a 2 de las asociaciones del G8 (la UIA, CACons y CRA).¹⁵¹ El adjetivo de “productivo” remarcaba una distancia respecto del sesgo especulativo de otras actividades representadas en el G8, y mostraba tempranamente una tensión interna al BEP.¹⁵² Debe enfatizarse el uso del significante “productivo”, que al mismo tiempo aislaba relativamente al capital financiero como adversario, y coincidía con apelación de Duhalde en la campaña de 1999. Ambos elementos serían claves para la potencial expansión de este agrupamiento para contener demandas de otros agentes bajo este significante, y de esa forma, construir hegemonía.

Si bien el comando del GP estaba claramente en manos de la UIA, ésta contenía en su interior posiciones diversas (A. Gaggero y Wainer, 2006). En 1998, el único en pronunciarse al respecto, cuestionando la continuidad del régimen fue el presidente de la UIA, Claudio Sebastiani, quien no recibió apoyo de su propia organización.¹⁵³ Sin

¹⁵¹ SRA fue invitada a formar parte de la alianza. Sin embargo, la asociación declinó la oferta, lo que fue percibido como una señal de distanciamiento entre las cámaras representativas de grandes productores agropecuarios (La Nación, 4/9/99). Posiblemente, esto se debía a la mayor presencia de productores ganaderos, sector en visible crisis, entre los socios de CRA. Por otra parte, el sesgo liberal, que cuestiona la intervención del Estado, es más fuerte en SRA. Por el surgimiento y derrotero del GP, ver Merino (2014). CRA no pertenecía al G8, aunque formaba parte de la gran burguesía. CACons había absorbido a la otra cámara de la construcción, la UAC, ambas pertenecientes al G8.

¹⁵² “Los tres sectores del GP compartimos problemas en una proporción del 80%, en cambio algunos de esos puntos no son comunes con los intereses de los grupos financieros. La cosa pasa un poco por ahí. La crisis puso de manifiesto que la banca privada es mucho más dura, más fría, y que cuando el sector productivo está mal, no presta absolutamente nada, se borra. Eso es lo que genera la reacción del sector productivo” explicó el presidente de CRA, Juan Bautista Corea. “El comportamiento de la banca privada agudizó la recesión, porque no confió en la solidez de la estabilidad macroeconómica de la Argentina. Dejaron de prestar, obligaron a cancelar créditos ya otorgados y generaron graves dificultades en el sector productivo”, agregó el presidente de la UIA, Osvaldo Rial” (Clarín, 10/10/99).

¹⁵³ “Hace siete años que no se toca el tipo de cambio. (...) Hay que tomar medidas urgentes; por ejemplo, la suspensión de los aportes patronales: sería una devaluación compensada. (L)legará un momento en que habrá que discutir la Convertibilidad” (Clarín, 24/03/98). Sus declaraciones causaron un conflicto interno, que llevó a una presidencia compartida con Alberto Álvarez Gaiani, de la fracción interna de la UIA más

embargo, bajo la presidencia de su sucesor, Osvaldo Rial –un crítico de la ultraortodoxia- la UIA financiaría la campaña de Duhalde. Se trata de “una oportunidad histórica para que el presidente que surja de las próximas elecciones deje de privilegiar lo financiero y aliente lo productivo” (Clarín, 10/4/99). Comenzaba así una estrategia de posicionar los intereses de la industria como los intereses nacionales, diferenciando entre producción y especulación (Beltrán, 2014). El peso de ambos significantes (productivo y nacional) para estructurar el discurso político aumentaría luego de la devaluación.

La reacción se hizo notar, al presentarse la opción polar opuesta: la dolarización. La única asociación que la estimaría favorable fue ABA, representativa de los bancos privados extranjeros,¹⁵⁴ cuyos negocios se verían favorecidos por la anulación del riesgo cambiario (CEA dejó entrever su apoyo implícito). “La dolarización es un fenómeno inexorable, porque toda la sociedad va en ese camino, así que vamos a terminar allí, a través de un tratado con los Estados Unidos o de manera unilateral y natural” dijo Carlos Fedrigotti, de ABA (La Nación, 30/5/99). Los representantes de la banca internacional se dividían entre apoyos explícitos y declaraciones ambiguas, mientras que el gobierno estadounidense sólo aceptaba un proceso unilateral.¹⁵⁵ Ante objeciones de tipo político, el economista jefe del BID, Guillermo Calvo, afirmó que era posible “reducir las objeciones nacionalistas” emitiendo dólares con las caras de Zapata, San Martín y Bolívar (La Nación, 26/1/99). Menem, al defender el proyecto, declaró que estaba asociado a las demandas de este sector: “lo que yo propongo desde hace bastante tiempo, que es la dolarización. Incluso, los banqueros la proponen” (La Nación, 28/5/00). Esta opción, como se ve, no tenía gran consenso entre fracciones del BEP, ni en el exterior, y

liberal e internacionalizada, el MIA - Movimiento Industrial Argentino. La otra fracción interna, el MIN (Movimiento Industrial Nacional), era la que impulsaría el GP, siendo De Mendiguren su representante más conspicuo. Sobre las fracciones de la UIA, ver Birle (1997), Dossi (n.d.), y Gaggero y Wainer (2006).

¹⁵⁴ ABA surgió de la fusión de la Asociación de Bancos de la República Argentina (ABRA) y ADEBA en 1999, efecto de la concentración y extranjerización del sector (Cobe, 2009; Noriega, s. f.).

¹⁵⁵ Mientras Paul O’Neill (secretario del Tesoro de EUA) proponía la libre flotación, Alan Greenspan (Reserva Federal) abría la puerta a dolarizaciones unilaterales. Larry Summers (segundo del Tesoro) defendió en un primer momento la dolarización bajo un argumento memorable: “La dolarización es sexy. Es una idea que tiene la ventaja de ser original, atractiva y fácilmente comprensible para todo el mundo” (La Nación, 31/1/99). El FMI tendría también en el plano público una posición un tanto ambigua frente al tema, centrandose en avanzar con las reformas: Michel Camdessus (director hasta febrero de 2000) no apoyó la idea, pero John Thornton (uno de los representantes en la negociación con Argentina) era un activo promotor de la dolarización. Cavallo confesó años más tarde que, contra lo que sostenía públicamente, el FMI incluyó subrepticamente en el acuerdo de agosto de 2001 la intención de dolarizar, por boca del propio Köhler (La Nación, 28/6/06).

a nivel de representantes políticos sólo tenían al cuestionado ex presidente. Todas estas eran limitaciones relevantes para poder operar como demanda tendencialmente vacía.

Para evitar mayores tensiones, en junio de 1999 el G8 se volvió a reunir para avalar la Convertibilidad. Di Fiori, presidente de CACom, fue quizás el más entusiasta, refiriendo al encuentro como una rehabilitación del poderoso agrupamiento. Pero esta defensa conjunta del régimen, sin embargo, sólo era el último aliento de la convergencia. A partir de entonces, el GP comenzaría a pronunciarse a favor de mantener el modelo pero corrigiendo la estructura de precios relativos, lo que implicaba algún ajuste al tipo de cambio.¹⁵⁶ Industriales prominentes, como Roberto Rocca de Techint o Álvarez Gaiani, vicepresidente de la UIA, harían similares declaraciones.¹⁵⁷ Otros industriales, en cambio, evitaban cuestionar el régimen, buscando mantener la previsibilidad.¹⁵⁸

ABA no avaló la candidatura de Duhalde, porque su prédica no era lo que los inversores (es decir, ellos mismos) “quieren escuchar”, mientras que mostró simpatías por De la Rúa, que les ofreció las garantías del caso (La Nación, 6/7/99). La UIA, por su parte, vio con buenos ojos que De la Rúa pusiera en Economía a uno de sus hombres, Machinea. Además, la creación del ministerio de Infraestructura respondía a uno de sus socios, CACons, que presionó desde un año y medio antes con un amplio plan de obras públicas (Plan Fundacional). El GP veía así claras señales de aliento a la demanda agregada. Sin embargo, la decisión fue atacada tanto por aquellas asociaciones que presionaban por un ajuste fiscal (ABA y CACom), como por el propio FMI (eludiendo

¹⁵⁶ “Las transformaciones estructurales realizadas en los noventa fueron aciertos de política económica. Pero (...) el sistema económico tal como está funcionando no facilita que se produzca en el país. Así, con el paso de los años, el plan de convertibilidad fue generando una distorsión de precios relativos de los sectores transables que se tradujo en pérdida de competitividad y deterioro del poder adquisitivo del mercado interno.” Documento Fundamental del GP (1999), citado por Beltrán (2014: 306).

¹⁵⁷ Dijo Rocca, en el marco de la V Conferencia Industrial: “Todo el mundo se da cuenta que el tipo de cambio es un problema. Este no es el momento para tocar el tipo de cambio fijo. Pero cuando esté consolidado el próximo gobierno, no tendría que haber inconvenientes en poder anunciar con tranquilidad un régimen de fluctuación cambiaria, como fluctúan hoy el yen contra el dólar, o el marco contra el dólar. (...) El tipo de cambio fijo es un problema” (Página/12, 19/08/1999). Álvarez Gaiani agregó: “Lo que hay que buscar es la devaluación real para que Argentina pueda ser competitiva. Duhalde y De la Rúa han remarcado que no van a devaluar. Tendrán que buscar los métodos para lograrlo”.

¹⁵⁸ “El Gobierno debe asegurar una política económica clara, defender la Convertibilidad como la única salida de este país y dar señales claras en otras áreas” decía Arturo Acevedo, propietario Acindar (La Nación, 25/07/99). “Con la devaluación no se gana nada. Las empresas y el Estado están endeudados en dólares y el perjuicio sería enorme. Además, en la Argentina es muy fuerte la memoria inflacionaria, por lo que una devaluación tendría un impacto inmediato sobre los precios. El próximo gobierno debe resolver el problema de la pérdida de competitividad. No sé qué tipo de presiones recibirá. Pero una devaluación no llevaría a nada bueno”. Así opinaba Vincenzo Barello, presidente Fiat (Página/12, 19/08/99).

la evidente recesión, señalaron que “recalentaría la economía”).¹⁵⁹ A pesar del impacto causado por la aparente orientación del nuevo gobierno, la iniciativa no pasó mucho más lejos, y persistió como un anuncio nunca realizado. Leyendo con claridad las demandas empresarias, el gobierno se enfocó en pasar la ley de Reforma Laboral, ampliamente apoyada por todo el arco del capital. El problema era superar ese acuerdo mínimo.

Las necesidades de la industria de reactivar el mercado y protegerse ante la devaluación del real brasilero no se resolvían con la presencia simbólica de Machinea. En junio de 2000, la UIA elaboró la “Declaración de Tigre”, donde se demandaba mejoras de financiamiento, subir aranceles para proteger el mercado interno, afianzar el “compre argentino” y reducir impuestos y salarios. SRA criticaría duramente este comunicado.¹⁶⁰ El gobierno, en esta fricción, tomó claro partido cuando publicó al mes siguiente un informe donde reconocía la transferencia de recursos desde el agro y la agroindustria al resto de la economía por más de \$5,000 millones. SRA se alegró por este reconocimiento, y por ello defendió al presidente hasta el final del mandato. Su presencia fue ovacionada en la inauguración de la tradicional muestra de Palermo, termómetro histórico de la relación gobierno – grandes terratenientes. A partir de este momento, SRA se separó de las demás entidades del agro, aprovechando un vínculo más cercano al gobierno, criticando los métodos disruptivos de las otras 3 asociaciones.

La UIA, separada del gobierno –aunque no enfrentada con él- iniciaría un camino para ampliar su discurso más allá de los significantes *producción y nacional*, para incorporar un nuevo énfasis en la cadena simbólica que asociaba los intereses de la industria con el mercado interno, promoviendo el bienestar nacional a través de la creación de empleo.¹⁶¹ Esta ampliación le permitía acercarse a sectores del sindicalismo

¹⁵⁹ Eduardo Escasany, presidente ABA señaló que “el doctor Fernando de la Rúa hizo un diagnóstico acertado de la difícil situación fiscal que atraviesa el país y la necesidad de corregirla a la brevedad. Ello es auspicioso para el futuro, dado que reafirma la necesidad de reducir rápidamente la tasa de riesgo país, como paso fundamental para retomar la senda de crecimiento sostenido” (La Nación, 12/12/99).

¹⁶⁰ “Seguimos siendo el pago de la boda, ya que otros sectores de la economía gozan de los recursos que le transfiere el agro, mediante regulaciones proteccionistas, que generan mercados cautivos, disminuyen la competencia e impiden la baja de costos de los bienes de capitales e insumos que requerimos ara continuar en el circuito productivo y que sólo acentúan una economía en recesión”. Comunicado de prensa de SRA, citado en Beltrán (2014: 314).

¹⁶¹ “Tengamos conciencia que existen dos proyectos económicos distintos de país. Uno de ellos es un modelo que prioriza la actividad financiera, generando concentración de la riqueza, y determinando desempleo y marginación social. nosotros queremos un país distinto (...) Todos trabajando para generar un mercado interno sólido, con financiamiento e impuestos racionales y exportando para lograr las divisas

peronista, proclives a este tipo de alianza. Asimismo, la distinción ya no era sólo de producción sino de “lo nacional”, que podía incluir a sectores populares. Por supuesto, con este énfasis se pretendía obtener políticas de reactivación de la acumulación en el espacio nacional, pero eso no excluía la participación en la misma de capitales extranjeros, que controlaban la mayor parte de las grandes empresas industriales del país (Azpiazu, Schorr y Manzanelli, 2012; Burachik, 2008).¹⁶² Como dijimos, estas empresas, al igual que SRA y ABA, continuaron defendiendo la Convertibilidad.¹⁶³

El sector financiero y SRA encontraron muy adecuada la designación de López Murphy en marzo de 2001.¹⁶⁴ De hecho, el anuncio del plan de ajuste fue realizado - simbólicamente- en la Bolsa de Comercio, donde fue aplaudido. El resto del capital no se entusiasmó particularmente con el nuevo ministro. De hecho, cuando la movilización popular lo hizo caer ese mismo mes (ver secciones 4.1 y 4.2.2), el GP vio con buenos ojos la llegada de Cavallo y sus iniciales programas heterodoxos. No sólo fueron favorables a la flexibilización la Convertibilidad con la canasta de monedas y la desgravación impositiva, que les mejoraba la competitividad, sino también a la aplicación de impuestos al sector financiero (Pucciarelli y Castellani, 2014). SRA y CRA también dieron su “bendición” a la vuelta del ex ministro (La Nación, 21/03/01).

La posición de ABA fue más ambigua. Si por un lado era considerado “uno de los suyos”, no era el candidato natural (López Murphy). Cuando éste anunció el impuesto al cheque, la distancia se expresó en el mercado: la banca elevó las tasas de interés e incrementó la fuga de capitales. Un sector interno de ABA empezó a apartarse, vislumbrando una posible alianza con el GP: Escasany comenzó a hablar de la necesidad de reactivar la economía y atender a los más necesitados, lo que claramente era un

genuinas que nos permitan cumplir con nuestros compromisos externos. El futuro de la Argentina es la industria”. Tomado de la VI Conferencia Industrial, citado en Beltrán (2014: 308).

¹⁶² Esta tensión era reconocida dentro de la UIA. En palabras de su presidente, Rial: “Hay que cambiar la orientación de la política económica (...) No creo que el camino sea profundizar el modelo (...) La Argentina ha sido una sometida a la globalización; ha sido el único país que se dejó violar en nombre de la globalización (N)o entiendo cuál es nuestro futuro como nación, estando una parte tan importante del patrimonio en manos de extranjeros” (Página 12, octubre de 2000).

¹⁶³ “Para mí, la Convertibilidad es la única forma que concebimos los empresarios para hacer negocios en este país” decía Vincenzo Barello, presidente Fiat (Clarín, 03/10/00). “En mi opinión el uno a uno es y seguirá siendo muy útil”, señaló Amadeo Vázquez, director del BBV-Banco Francés (Clarín, 13/10/00).

¹⁶⁴ El presidente de SRA, Enrique Crotto afirmó: “Me pareció una excelente elección, es un hombre a que no le van a torcer el brazo y es un enamorado del equilibrio fiscal con lo cual sabe que hay que bajar el costo fiscal” (La Nación, 7/3/01).

puente simbólico con el GP (Beltrán, 2014). De hecho, ABAPPRA –representante de la banca pública- ya había iniciado el acercamiento al GP. La banca privada nacional –a través de la figura de Escasany- se alejó lentamente de ABA para presentarse como parte del empresariado nacional junto a la UIA; como una estrategia política de separarse de los agentes señalados como responsables de la crisis (Beltrán, 2014).

Mientras tanto, la UIA tejía puentes simbólicos con algunos sectores de trabajadores, para impulsar sus demandas como los intereses de la nación. Nación era una promesa por construir, por completar, y se proponían hacerlo a través de una comunidad que incluyera mediante la producción.¹⁶⁵ Cuando los economistas del CEMA atacaron a Cavallo por su heterodoxia, el GP defendió abiertamente al ministro, apuntando con claridad a quiénes consideraban responsables de la crisis: aquellos que proponían las políticas neoliberales que llevaban al fracaso y la exclusión.¹⁶⁶ La *reindustrialización* se proponía herramienta concreta para esta refundación de la comunidad inclusiva. Debe notarse que *todos estos elementos discursivos serían la base del discurso de Duhalde y, posteriormente, el de Kirchner*: las oposiciones producción – finanzas (especulación) e inclusión – exclusión por el mercado de trabajo como ejes del antagonismo por la reconstrucción de la nación. La industria se colocaba en el centro de ambas tensiones, como procesos opuestos: reindustrialización o desindustrialización.

La ley de Déficit Cero marcó el alejamiento de la UIA del gobierno (Pucciarelli, 2014), aunque sin pasar al enfrentamiento abierto. Las elecciones de octubre de 2001 dejaron un gobierno debilitado (ver sección 4.1), que hacía dudar al GP sobre si sería éste capaz de llevar adelante el programa que venía impulsando. Frente a ello, y el peligro de un “desborde” del Estado en tanto garante y organizador de las relaciones sociales, el GP enfatizó la necesidad de unidad del empresariado: “más allá de (las) discrepancias, hoy está en peligro el país” dijo el hombre de Techint y presidente de

¹⁶⁵ “Estamos ante el desafío de construir una gran Nación o resignarnos a ser una factoría próspera. No se trata sólo de lograr una economía en crecimiento, sino de recobrar la voluntad de ser, de ser una Nación que nos incluya a todos los argentinos. La reindustrialización debe ser la herramienta privilegiada del desarrollo económico y la integración social. Ello supone la necesidad de reconstruir junto al tejido industrial un reivindicado capitalismo nacional vinculado a la producción” UIA, “Sin industria no hay nación”, mayo de 2001, citado en Beltrán (2014:317).

¹⁶⁶ “Alertamos a la opinión pública que un conjunto de economistas, responsables ideológicos de la crisis más severa que reconoce la historia argentina, caracterizada por niveles inéditos de desocupación y subocupación, están volviendo a proponer las políticas que nos llevaron a esta desgraciada situación” Comunicado del GP, 4 de julio de 2001.

CACons, Eduardo Baglietto (Clarín, 20/11/01). El GP, ABA, CEA y la CGT firmaron juntos un comunicado pidiendo respetar la Convertibilidad (Clarín, 19/11/01).

A fines de noviembre de 2001, a instancias del llamado de De Mendiguren – entonces presidente de la UIA- se realizó una reunión entre esas entidades y ABAPPRA con el objetivo de lograr una agenda común frente al “inminente” llamado del gobierno a la concertación. Apenas horas más tarde, se reunieron en Olivos con el presidente, el ministro de Economía y el jefe de Gabinete para delinear los términos de la convocatoria. Por el lado sindical, la concertación nacional no tuvo acogida; mientras la CGT oficial dilató su respuesta, la CGT disidente la rechazó en pleno (La Nación, 26/11/01). La CTA no estuvo siquiera invitada. La efímera confluencia conocida como *Núcleo Nacional* no pudo pronunciarse más que por una defensa de la Convertibilidad, acuerdo de compromiso que señalaba los límites de cualquier concertación.

Resulta notable la falta de diálogo de estos sectores con asociaciones representativas del capital de mediano y pequeño porte, atrapadas por el encarecimiento del crédito y la contracción del mercado interno. Las asociaciones de este tipo de capitales agropecuarios (FAA y FAN) y sus equivalentes urbanas (APYME y CGE) reclamaron sostenidamente por moratorias financieras y fiscales. La crisis de competitividad y de crédito las estaba llevando a la quiebra. Una gran parte de estas asociaciones (entre otras, FAA, FAN, APYME, CGE) se reunieron en la Mesa del Empresariado Nacional PyME, reclamando que no se las deje fuera de la concertación convocada por De la Rúa. Ni el gobierno ni los miembros del *Núcleo Nacional* se hicieron eco del reclamo (La Nación, 29/11/01). De hecho, todas estas asociaciones convergieron con la CGT disidente y la CTA en reclamos “contra el modelo económico” (que en el agro se expresaba como reclamos contra la concentración de la tierra). Todas estas asociaciones, junto a CONINAGRO y CAME, terminaron expresándose contra la Convertibilidad, reclamando políticas de reactivación y renegociaciones de la deuda. De todas estas cámaras, FAA y APYME fueron las que más se radicalizarían en sus reclamos. Se acercaron a las centrales sindicales a través de movilizaciones, protestas callejeras e incluso de una de las mayores iniciativas populares del período, el Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPO) (ver siguiente sección).

Mientras el GP había deslizado la idea de una devaluación durante 3 años, ABA y el CEA volvían a coquetear subrepticamente con la idea de la dolarización. No todo el capital financiero estaba de acuerdo sobre qué hacer. Como dijimos antes, las posturas no dependían sólo de elementos estructurales: ABAPPRA se acercó al GP, mientras que la Bolsa de Comercio se mantuvo ambivalente hasta el final. La exclusión de estos acuerdos de SRA –entidad junto a CACom y ADESPA defendieron hasta el final la Convertibilidad- no era menor, e incluso la propia CRA tenía sus dudas sobre una posible devaluación. La CGT necesitaba propuestas concretas para resolver sus problemas, más allá de elementos discursivos. Cualquier programa de salida implicaba que habría perdedores, por lo que la alianza no podía abarcar a todos.

Con conciencia de esta realidad, el GP junto a ABAPPRA presentaría, a pocos días de la caída de De la Rúa, un documento en donde se pedía explícitamente la flotación del peso, la pesificación de las deudas y una moratoria en el pago de la deuda externa, la desdolarización de las tarifas de servicios públicos y la prohibición de ajustes tarifarios por el tipo de cambio (Clarín, 22/12/01). Habían transcurrido más de 3 años del GP impulsando una lectura de la crisis, que dejaba a los capitales asociados al gobierno y el esquema de la Convertibilidad como responsables de la misma, anulando la lectura del ajuste fiscal como interpretación plausible de la salida.

Las alianzas concretas y los puentes discursivos trazados hacia otros sectores le servían al GP de fundamento para impulsar su programa. Así, aparecieron los significantes de producción, inclusión y reindustrialización como nodos en una cadena de equivalencias que se oponía a la especulación, la exclusión y la desindustrialización del orden neoliberal. Ambas fracciones de la CGT se vieron interpeladas por esta cadena, acercándose explícitamente al GP. Las fracciones ganadoras del orden neoliberal quedaban así aisladas con el gobierno, como representantes de la exclusión que las clases populares impugnaban, como veremos en la siguiente sección.

4.2.2. Disputas de las clases populares

El período considerado se caracterizó por el crecimiento organizativo y disruptivo de las clases populares en sus diversas expresiones. Hablar de su irrupción súbita en la escena pública sería injusto con las múltiples expresiones de resistencia previas, del mismo

modo que se hace cuando se habla de “estallido” para describir las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001. Se trató de un progresivo y complejo proceso de acumulación en términos de poder popular (AAVV, 2007; Bonnet, 2002; E. López, 2012a), que puso en jaque el rumbo de las políticas públicas. Si bien la protesta social se había fragmentado durante los '90, el escenario se revirtió –al menos, en parte- en los últimos años de la Convertibilidad, donde se observó una progresiva agregación política: aunque era imposible definir las características exactas que tomaría el estallido, era esperable que ocurriera por el propio incremento de las acciones de protesta, multiplicación de demandas y ampliación de los actores involucrados (Schuster, 2005). El mismo autor señala que la construcción del escenario de diciembre de 2001 respondió a la actividad de varios meses antes, tanto de desocupados y precarizados como del sindicalismo de la CTA y el MTA, a los que los sectores medios se le suman en los últimos momentos. Esto pone en cuestión tanto la versión de un “Argentinazo” basado en la acción exclusiva del movimiento piquetero (Rieznik, 2003) como la acción destituyente de los sectores medios insatisfechos. Veamos este proceso.

La resistencia al programa neoliberal de reformas apareció en este período a escala global. En noviembre de 1999 en Seattle el mundo entero puede ver las manifestaciones contra la cumbre de la OMC, donde convergieron sindicatos, organizaciones de DDHH, ambientalistas y otros (“tortugas y camioneros unidos al fin”), mostrando las posibilidades de convergencia. Los movimientos antiglobalización y alterglobalización aparecieron en escena. Nació Indymedia, una red de escala inusitada de comunicaciones alternativas. En julio de 2001, la Contracumbre de Génova reunió a 150,000 manifestantes. El descontento popular se notaba a nivel mundial.

A escala regional, este proceso se alimentó de –a la vez contribuyó a- la creciente capacidad organizativa de las clases populares. Desde el lanzamiento del proyecto de integración continental de EUA, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) durante la I Cumbre de las Américas de 1994 en Miami, sindicatos y movimientos sociales habían comenzado un proceso de confluencia crítica (Rossi, 2014). Dado que la siguiente reunión de la Cumbre excluyó a estos sectores, se decide lanzar la Cumbre de los Pueblos, un espacio que sería clave en la resistencia al ALCA. De esta confluencia plural se formará la Alianza Social Continental en 1997. En este marco fue que, en enero

de 2001, la Asociación internacional para la Tasación de las Transacciones Financieras para la Ayuda al Ciudadano (ATTAC) y el Partido de los Trabajadores de Brasil convocaron al I Foro Social Mundial en Porte Alegre, cuyo lema fue “Otro mundo es posible”. Se resquebrajaba así la idea de que no existían alternativas (TINA).

De las organizaciones argentinas que participaron de este proceso, la CTA fue la más involucrada. La CTA era la central sindical alternativa que surgió en 1992 como crítica al orden neoliberal y a las prácticas antidemocráticas de la CGT. Resulta interesante su combinación de lógicas corporativistas y territoriales, que admitía la afiliación de sindicatos de ámbito nacional, comités de empresa de base, asociaciones vecinales e incluso afiliaciones personales (Rossi, 2014). Esta lógica amplia le permitió tempranamente involucrar organizaciones de desocupados, siendo las más visibles la Federación Tierra y Vivienda (FTV) liderada por Luis D’Elía y la organización Barrios de Pie, de la Corriente Patria Libre. La CTA, influida por el discurso peronista de muchos de sus dirigentes, dirigió desde el inicio sus reclamos por la presencia del Estado en defensa de los trabajadores, arbitrando en la relación con el capital (Quiroga, 2014; Reisenman, 2005). No obstante, siempre se planteó en una relación de autonomía respecto tanto del Estado como de los partidos políticos (ACTA, 2011). Su representatividad entre trabajadores formales tuvo desde el inicio mayor peso entre empleados públicos que en sectores dominados por la producción privada.

La CGT, central histórica, se encontraba dividida desde 1994 entre la conducción oficial (Rodolfo Daer), que colaboró activamente en la aplicación de las reformas estructurales, y la corriente crítica liderada por Hugo Moyano, el MTA.¹⁶⁷ Además de los problemas de representación originados en el aumento del desempleo y el empleo precario, esta central arrastraba un importante desprestigio social debido a su rol durante la dictadura y la transición a la democracia. Ninguna de las fracciones de la CGT tuvo relación directa con el movimiento piquetero, más que algunas vagas referencias del MTA (N. Iñigo Carrera y Cotarelo, 2006).

¹⁶⁷ Por mayores precisiones sobre el MTA, consultar Merino (2012). Esta división fue precedida por la que ocurrió en 1989 entre la CGT San Martín (oficialista) y la CGT Azopardo (dirigida por Saúl Ubaldini, más combativa). A su vez, habría que agregar la gravitación de la CCC, que comenzó como una tendencia al interior de la CGT, para después independizarse e incorporar a jubilados y desocupados. Ver Piva (2009).

El papel de la CGT oficial durante la crisis fue, en realidad, secundario. A pesar de haber sido blanco de críticas por parte de la Alianza como corresponsables de los ilícitos de corrupción (Alderete), sus dirigentes mantuvieron la tesitura de diálogo y cercanía. Incluso durante las negociaciones de la Reforma Laboral, el sector de “los Gordos” estaba dispuesto a negociar a cambio de más fondos para las obras sociales (Raus, 2014). El gobierno, a través de sus ministros de Trabajo Flamarique y Bullrich, no dejó de criticar al sindicalismo, como estrategia para legitimarse, y porque las obras sociales se encontraban en el centro de la escena de las demandas del FMI.¹⁶⁸ La relación del gobierno con la CGT oficial se mantuvo tirante, pero sin mayores traspies.

Al abandonar la CGT a Moyano en sus críticas, éste endureció sus posiciones: de hecho, sería él el primero en denunciar las coimas en el Senado. En mayo de 2000 el MTA convocó a un paro general contra la Alianza, el primero de 9 que realizarían. Esto acercó al MTA y la CTA en la movilización, confluencia que se repetiría en diversas ocasiones, pero no avanzó en acuerdos programáticos.¹⁶⁹ De un lado, la CTA estaba ligada a sectores más radicalizados –piqueteros-, bregando por un programa amplio de redistribución ciudadana mediante métodos más democráticos.¹⁷⁰ Del otro lado, el MTA encontraría eco para sus aspiraciones en el discurso del GP. De hecho, el GP convocó en más de una oportunidad a la CGT (oficial y disidente) a reuniones y acuerdos, hablando de “impulsar el sector productivo”. Moyano incorporó esta idea a su discurso, llamando a un “Frente Nacional, Social y Productivo”, que dejaba clara su voluntad de diálogo con las fracciones críticas del BEP (La Nación, 9/1/01).

A mediados de 2001, al igual que la CTA, la CGT de conjunto rechazó el plan de ajuste de Cavallo, lo cual afianzó el enfrentamiento con el gobierno. Las críticas se

¹⁶⁸ El presidente De la rúa no distinguía entre centrales sindicales, criticando las medidas de fuerza contra la Reforma. “Durante estos diez años las cúpulas sindicales fueron cómplices silenciosas del abandono y la desprotección de los trabajadores. Hacerle un paro al país no ayuda al país; llamar a la rebelión fiscal, perjudica a los que menos tienen. No es bueno que se utilice el sufrimiento y la impaciencia de la gente para defender intereses sectoriales”, discurso de De la Rúa, citado en Quiroga (2014).

¹⁶⁹ En particular, se movilizaron de conjunto contra la Reforma laboral, contra la represión (luego del asesinato de Aníbal Verón en noviembre de 2000) y contra el Blindaje Financiero. Durante 2001, lo harían ante el recorte de López Murphy, por Megacanje y después del corralito financiero. En estos últimos tres casos hubo acercamientos parciales de la CGT oficial.

¹⁷⁰ Esto limitaba las posibilidades de acercamiento. La prueba más clara fue la silbatina a Moyano en el I Congreso Piquetero en junio de 2001, que requirió de la intervención de De Gennaro llamando a la unidad en la lucha (Moreno, 2010; Pucciarelli, 2014). Las agrupaciones de izquierda estaban en contra de un pacto con los líderes de la CGT (Martino, 2010).

incrementaron con el Megacanje, que marcaba la relación evidente entre ajuste recesivo y pagos de deuda.¹⁷¹ El peso creciente de la deuda llevaría incluso a la CGT oficial a pronunciarse en su contra.¹⁷² Sin embargo, bajo la tentación creciente de las ofertas del GP, ambas fracciones de la CGT se pronunciarían junto a aquel agrupamiento de la gran burguesía y el PJ por reprogramar la deuda externa ante la imposibilidad de su pago (La Nación, 19/9/01). Este acercamiento multiplicaría las reuniones entre el GP y la CGT, que participó de la VII Conferencia industrial en septiembre y del Núcleo Nacional en noviembre (ver sección 4.2.1). Esta central fue particularmente permeable a los llamados de concertación de la Iglesia católica (Goldman y Grandinetti, 2013). Así, si bien en las calles el MTA reclamaba con la CTA, en el armado programático primaría su cercanía con el proyecto del GP –basado en ideas de redistribución vía empleo industrial. La CGT oficial fue aún más clara en esta lógica, minimizando el contacto con la CTA.

La CTA, como dijimos, jugó un rol diferente. Su mayor flexibilidad organizacional e ideológica la convirtió en uno de los instrumentos más poderosos de las clases populares en el período. Esta estructura amplia permitía la confluencia de múltiples actores sociales y políticos, no sin tensiones internas. Si bien en un primer momento se sugirió cierta afinidad con el gobierno de la Alianza, la CTA protagonizó la primera marcha y corte contra De la Rúa, a una semana de haber asumido, debido a la represión en Corrientes que terminó con la vida de Francisco Escobar y Mauro Ojeda. Tres meses más tarde, ya estaba movilizada contra la Reforma Laboral, marcando un rumbo de distancia insalvable (ACTA, 2011). Amén de las ya referidas movilizaciones junto al MTA, la iniciativa más relevante fue la del FRENAPO (Quiroga, 2014).

Nacido en mayo de 2000, el FRENAPO buscaba hacer confluir sectores sociales y políticos críticos del modelo, impulsando un programa alternativo de redistribución a través de una consulta popular. El mismo se componía –según quedó en su propuesta final- de un Seguro de Empleo y Formación de \$380 para todos los jefes o jefas de hogar desocupados, una asignación universal de \$60 mensuales por hijo menor de 18 años para todos los trabajadores (desocupados, estables o precarizados), y una asignación no

¹⁷¹ Según Moyano: “ya antes había sido el famoso blindaje, y no es otra cosa que endeudar más a los argentinos y es garantizar el pago de la deuda, sin que esto tenga algún beneficio para los trabajadores, para los productores del campo y la industria” (La Nación, 4/6/01).

¹⁷² El secretario general Daer señaló que “el Gobierno no tiene la valentía de plantarse y decir que no se puede continuar (pagándola) y afirmar que es necesario reestructurarla” (La Nación, 29/8/01).

inferior a la jubilación mínima para las mujeres mayores de 60 años y los hombres mayores de 65 años (Dolce, 2011). La propuesta resultaba novedosa por estar planteada en términos universales de derechos por ciudadanía, contra la lógica ya descrita de asistencia social con contraprestación y focalización (Arcidiácono, Carmona y Straschnoy, 2011; Fernández Soto, 2009; Levy, 2003).

El 14 de julio de 2001, con la participación de más de 70 organizaciones de todo el país y más de 400 delegados, se reúnen las Juntas Promotoras por la Consulta Popular bajo el lema “Ningún hogar pobre en la Argentina”. Participaron, además de la CTA, APYME y FAA, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora y Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Federación Universitaria Argentina, el SERPAJ (Pérez Esquivel), entre otras organizaciones sociales («Documentos del Conflicto», 2001; Dolce, 2011). Además, participaban el ARI, el socialismo (PSP y PSD) y el Polo Social, mientras que las organizaciones de izquierda trotskista se distanciaron de la iniciativa (Reisenman, 2005). En ese encuentro se adhirió explícitamente al plan de lucha elaborado por el Congreso Piquetero, y se lanzó para los meses siguientes la Marcha Grande desde Rosario a la Ciudad de Buenos Aires y la Marcha de las siete columnas, que recorrieron 100 ciudades en 10 días, promoviendo la propuesta (ACTA, 2011; Dolce, 2011).

La consulta se terminó llevando a cabo del 14 al 17 de diciembre, permitiendo a 3,083,191 personas expresar su opinión, que resultó ampliamente favorable a las propuestas del FRENAPPO (Pautassi, Rossi y Campos, 2003). En el marco de la creciente apatía electoral y rechazo a las instituciones representativas, no es nada desdeñable que las organizaciones sociales hayan sido capaces de involucrar a una porción tan relevante de la ciudadanía (ACTA, 2011). “Será la primera vez, en la historia del país, en que el pueblo votará para expresar su apoyo a una propuesta y no solamente a candidatos” decía en uno de los documentos del Frente (AUNO, 2011). Señalaba entonces Horacio Verbitsky “fue la primera vez que una propuesta de transformación progresista supera la barrera del millón y medio de votos” (Dolce, 2011).

Sin embargo, las protestas de sectores medios a raíz del “corralito” y la huelga general declarada por la CGT, el MTA y la propia CTA para el 13 de diciembre, exigiendo el cambio inmediato de la política económica (N. Iñigo Carrera y Cotarelo,

2006), hicieron que el esfuerzo del FRENAPO quedara invisibilizado. Las protestas del 19 y 20 cobraron tal relevancia que borraron de la escena semejante demostración de capacidad organizativa (AUNO, 2011). Si bien no se puede negar la existencia de disparidades políticas al interior del Frente, un dato central es que se daba cuerpo concreto a la cadena de equivalencias que articulaba diversos sujetos políticos. La participación de las organizaciones de DDHH (Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, CELS, SERJAP) en esta confluencia no resulta trivial.¹⁷³ Tal como resalta Retamozo (2011) respecto de HIJOS, la presencia pública de estas organizaciones permitió construir un discurso que asociaba los delitos de lesa humanidad de la dictadura a la exclusión económica y social de las políticas del neoliberalismo. Se construía así una narración histórica que permitía explicar el continuo de la historia reciente. Los significantes de derechos humanos, ciudadanía e inclusión, ordenaban este discurso que se oponía a la dictadura política y económica, a la exclusión en ambos órdenes. El orden neoliberal y sus defensores (el gobierno y las fracciones financieras y privatizadas del BEP) se volvían un enemigo frente al cual, las diferencias internas se debilitaban.

Sin perjuicio de lo anterior, el agente que concitó más atención fue el emergente movimiento piquetero. Su lenta aparición desde el interior del país, y sus transformaciones organizativas e identitarias han sido estudiadas en otras partes (Campione y Rajland, 2006; Giarracca, 2001; N. Iñigo Carrera y Cotarelo, 2006; Kohan, 2002; Massetti, 2006; Retamozo, 2009; Schuster et al., 2006; Svampa, 2005). Los movimientos de trabajadores desocupados (MTD) aparecían como una novedosa forma de representación de aquellos marginados por el modo de desarrollo, anclados en prácticas territoriales de organización comunitaria. A pesar de que el método central de lucha (el piquete, o corte de ruta) generaba antipatías con los sectores medios – impulsadas fuertemente por los medios de comunicación-, la legitimidad de su demanda central por trabajo digno como forma de inclusión era difícilmente cuestionable. Muñoz (2010) ha resaltado la potencialidad de este actor para generar demandas capaces de superar la barrera de lo corporativo, poniendo en crisis al orden neoliberal. Como antes afirmamos, esto sólo es cierto en la interacción con otros agentes de las clases populares.

¹⁷³ La oposición al gobierno y la identidad amplia de la CTA permitieron este acercamiento. Por el derrotero de algunas de estas organizaciones, ver Llovich y Bisquert (2008) y Solis Delgadillo (2010).

Los gobiernos de la Convertibilidad actuaron rápidamente sobre este actor mediante la combinación de represión y planes sociales. Como se dijo (sección 3), muchos de los MTD se transformaron organizativamente para poder gestionar los planes, a pesar de que la mayor parte siempre estuvo en manos del gobierno, nacional o provincial (Svampa, 2004b). La reducción de los planes durante el gobierno de la Alianza y el crecimiento de la desocupación alentó una mayor difusión de este tipo de organización colectiva, que marcó su presencia activamente en todo el país. Entre sus reclamos puntuales se priorizaban la asignación de planes, el desprocesamiento de presos políticos y el no pago de la deuda, aunque eventualmente incorporaban otras demandas. Más allá de las demandas puntuales, tuvieron un rol clave en quebrar el orden político, al cuestionar su lugar en la comunidad como excluidos, instalando una grieta en el significante “estabilidad” como estructurante de toda la gestión de la política.

Las diferentes alianzas que se trazaron en este período dependieron de las trayectorias políticas e ideológicas de las organizaciones y sus dirigentes, marcando las principales orientaciones que impactarán luego en la relación con otros gobiernos. La tabla siguiente intenta sintetizar estas diferencias.¹⁷⁴

Tabla 1. Principales organizaciones de trabajadores desocupados

Organización	Creación	Referentes	Vínculos orgánicos	Orientación político-ideológica
FTV	Julio 1998	Luis D’Elía (ex FREPASO, ex Polo Social)	CTA	Teología de la liberación, nacionalismo revolucionario, peronismo de base
Corriente Clasista y Combativa (CCC) ¹⁷⁵	1994	Amancay Ardura, Juan Carlos Alderete	PCR	Maoísta, insurreccional, abstencionista.
Barrios de Pie (BdP)	Diciembre 2001	Humberto Tumini y Jorge Ceballos	Patria Libre (ex ERP), CTA	Nacionalismo revolucionario
Polo Obrero	Fines 2000	Néstor Pitrola	PO	Trotskista,

¹⁷⁴ Se trata de una síntesis muy apretada de las principales características de los MTD. Se sugiere consultar bibliografía especializada para más detalles (Burdman, 2002; Cortés, 2008, 2010; Gualdi y Roldán, 2011; Moreno, 2010, 2013; Retamozo, 2009; Schuttenberg, 2011, 2012; Svampa, 2004b). Se omiten algunos MTD muy significativos, como la UTD Mosconi o el MTD Chaco, que no se integraron a nivel nacional. Asimismo, se incluye el caso de Quebracho que, si bien tiene desarrollo territorial, no se define como organización de desocupados.

¹⁷⁵ Como antes señalamos, la CCC integraba la CGT, y luego se independiza de ella. Incorporó tempranamente un modelo de representación amplia, al incluir a grupos de jubilados (dirigidos por Raúl Castells, quien luego se separa, creando el MIJD) y a desocupados.

					insurreccional.
Movimiento Territorial de Liberación (MTL)	2001			PC	Marxista.
Movimiento Teresa Rodríguez (MTR)	Abril 1997	Roberto Martino (ex PRT)			Marxista, guevarista, insurreccional
Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD)	1999	Raúl Castells (ex MAS)			Marxismo.
MTD Evita¹⁷⁶	Inicios de 2002	Emilio Pérsico (ex Quebracho)		FpV	Peronista
Movimiento de Unidad Popular (MUP)¹⁷⁷	1999	Federico Martelli		FpV	Anarquismo, nacionalismo revolucionario.
Movimiento Popular Revolucionario Quebracho	1996	Fernando Esteche, Raúl Lescano			Peronismo de base.
CTD – Aníbal Verón¹⁷⁸	2001	Juan Cruz Daffunchio			Marxismo, autonomismo, peronismo de base, situacionismo
Coordinadora de Unidad Barrial (CUBa)	2001			Partido Revolucionario de la Liberación	Marxismo, insurreccional.
Federación de Trabajadores Combativos (FTC)	2002			MAS, Partido Revolucionario Socialista y el Frente Obrero Socialista	Marxismo, trotskismo.
Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive (MST-TV)	2002			MST	Marxismo, trotskismo.

Fuente: elaboración propia en base a bibliografía.

¹⁷⁶ El MTD Evita se forma de la fusión del MTD Resistir y Vencer, las 4 P (Pan y Poder para el Pueblo), una escisión de Quebracho, el Movimiento Patriótico 20 de Diciembre, la organización estudiantil 20 de Febrero, Peronismo que Resiste, y sectores del Partido Justicialista. Estas organizaciones eran operativas durante el período analizado, aunque sólo a partir de principios de 2002 se constituyen como MTD Evita. A partir de 2003, modificará su nombre a Movimiento Evita, y se integrará plenamente al FpV.

¹⁷⁷ El MUP tiene un origen con tintes anarquistas, y a partir de 2003 iniciará un proceso de reformulación ideológica que lo acercará a la matriz del nacionalismo revolucionario, integrándose al FpV.

¹⁷⁸ Desde abril de 2001 tuvieron lugar los encuentros que llevarán a la constitución de la Coordinadora (CTD) Aníbal Verón. Algunos MTD, reforzando su identidad autonomista, se desprendieron luego de la coordinadora: Allen, Solano, Gernica (Cortés, 2008), dejando como MTD Aníbal Verón a los sectores remanentes, más cercanos al peronismo.

La tabla, si bien sintética, muestra la pluralidad de orientaciones ideológicas y políticas que contenía este auténtico movimiento de movimientos (Bukstein, 2008). Svampa y Pereyra (2004) –seguidos por Schuster (2005)- sugirieron que se puede ordenar este conjunto en tres grandes matrices: sindical (CCC, FTV), partidaria (PO, MTL, MST, BdP) y autonomista (los MTD en general). Mazzeo (2004), por su parte, sugiere que los movimientos se ordenan en torno a tres ejes sobre cómo se organiza el cambio social: el primero sería sociedad/pueblo-partidos/movimientos políticos-representación-poder del Estado, el segundo clase obrera/pueblo-vanguardia-revolución-poder del Estado, y el tercero se forma cuestionando los dos anteriores. A pesar de haber recibido diversas críticas, ordenar esta pluralidad de orientaciones permite comprender las estrategias frente al Estado y la amplitud de las alianzas sociales que están dispuestas a construir (Cortés, 2010; M. Gómez, 2010; Massetti, 2010; Natalucci y Schuttenberg, 2013; Schuttenberg, 2011). Aprovechando este último cuerpo de autores, podemos postular la existencia de tres grandes orientaciones que combinan la matriz político-ideológica y organizacional: marxista, nacional-popular y izquierda independiente.

En este período, todos los MTD se encontraban enfrentados al gobierno, pero no todos leían de la misma forma el proceso político. Si bien recuperaremos sus diferencias más adelante, de acuerdo con la forma en que entraron al juego de definiciones políticas, vale señalar sus características centrales. La orientación marxista, de clara reivindicación ideológica, ligada a distintos partidos de izquierda, concebía a los desocupados como una fracción del sujeto histórico clase obrera, en enfrentamiento abierto con el Estado como representante de los capitalistas. La orientación nacional-popular, recupera el carácter nacional de la disputa política de las clases populares, entre las que el peronismo jugaba un rol preponderante pero no único, entendía a los desocupados como parte del pueblo oprimido, y concebía al Estado como una arena contradictoria, con la que se podía negociar y obtener concesiones. La orientación de la izquierda independiente, por último, trató de revisar un conjunto amplio de prácticas y teorizaciones en torno a la figura del sujeto histórico y el rol del Estado, que mixturaban las orientaciones previas, aunque añaden una tematización explícita del lugar de la construcción territorial. Si bien el autonomismo tuvo particular peso en esta orientación durante los primeros años, no agota el espectro de orientaciones políticas de la misma

(como veremos en el capítulo 6, la mayoría de las organizaciones agrupadas en esta orientación incluirían luego una estrategia de disputa en y por el Estado).¹⁷⁹

Así, la FTV y la CCC tenían mayor diálogo con el gobierno en aras de obtener planes, lo que no se traducía en compatibilidad programática. La referencia de la FTV, igual que BdP, era la CTA, a cuyas iniciativas se sumó usualmente la CCC. Se trata de las tres mayores organizaciones, que protagonizan acciones clave del período como el “Matanzazo” de octubre de 2000, el corte de ruta de 6 días en noviembre de 2000 a raíz de la muerte de Aníbal Verón en Salta, la Marcha del hambre, por pan y trabajo en abril de 2001, o el corte de 18 días en mayo de 2001. La FTV y BdP, a través de la CTA, participaron del FRENAPO, entrando en diálogo con sectores del pequeño capital como FAA o APYME. Los componentes nacionalistas de estas organizaciones facilitaban la amplitud de estas alianzas. Como se ve, una parte del movimiento piquetero amplió sus alianzas a través de la CTA, y con ello, su integración a otros discursos de oposición al orden neoliberal: la expansión de sus demandas estuvo inescindiblemente ligada a la interacción con otros agentes de las clases populares.

En abierta crítica a esta estrategia se constituyó a fines de 2001 el Bloque Piquetero Nacional, en la que se reunieron el MTR, el PO, la CUBa, el MST-TV y FTC. Este Bloque, constituido por la orientación marxista, enfatizaba la insurrección y negaba el diálogo con el gobierno, representante del capital. Esta distancia con la “alianza matancera” (Masseti, 2010; Retamozo, 2009) surgió luego de dos Congresos piqueteros nacionales, en junio y septiembre de 2001, que encontró a prácticamente todos los MTD unidos en un plan de lucha conjunto y similares reclamos (Iglesias, 2012; «Informe y resoluciones de la asamblea piquetera en Buenos Aires», 2001; Moreno, 2010). Los MTD de la orientación de izquierda independiente se unificaron en la CTD-AV, que posteriormente (en 2002) tuvo una escisión interna, transformándose en MTD-AV.

¹⁷⁹ “En primer lugar, las organizaciones sociales de la llamada “izquierda independiente” retoman la terminología desde una perspectiva que plantea la creación de espacios contra-hegemónicos, a partir de prácticas prefigurativas, enraizadas en formas alternativas de hacer y construir política. Se cuestionan las metodologías de la “izquierda tradicional” abordando un espacio diferente -el territorio a diferencia de la fábrica- a través de métodos horizontales, basistas y con una tendencia a la construcción de una política donde la finalidad no es la toma del poder del Estado explícitamente, a diferencia de la línea que promueve la constitución de un partido de vanguardia y la finalidad de llegar al poder para establecer la abolición última del Estado” (Becher et al., 2013). Ver también (AAVV, 2007).

A pesar de las divisiones posteriores, la dinámica del período marcó exactamente lo opuesto: una tendencia a aliarse y organizarse a escala nacional, desafiando abiertamente al gobierno y su esquema de políticas. Tal como explica Muñoz (2010), los piqueteros fueron los agentes que lograron de modo más claro desplazar el significativo estabilidad que ordenaba el discurso del gobierno y de la mayoría de los partidos al plantear la cuestión de exclusión social. La demanda de trabajo digno permitía encadenar una serie más amplia de reclamos, oponiéndose al orden neoliberal y sus responsables como fuente de exclusión.¹⁸⁰

Este cuadro de protesta y movilización crecientes da cuenta de la situación en 2001. Cuando en diciembre se instauró el “corralito”, los sectores medios aparecieron en escena, bajo la figura de *ahorristas*. Muchas de sus protestas terminaban con disturbios frente a locales de bancos. La huelga general del 13 de diciembre y los cortes de ruta del conurbano componían el cuadro de situación en el que la protesta cobraba fuerza. Desde ese día se pueden hallar repercusiones mediáticas de saqueos a cadenas de supermercados (N. Iñigo Carrera y Cotarelo, 2006), un fenómeno que no se veía desde la hiperinflación de 1989: reaparecía el riesgo de disolución de las relaciones sociales ante la imposibilidad de garantizar el abastecimiento más básico. La interacción con las fuerzas policiales, los partidos políticos y los medios de comunicación dieron forma a la expansión de este fenómeno (Auyero, 2007).

Durante la tarde del 19 de diciembre, a la vista de la masiva protesta generalizada, De la Rúa acentuó el sesgo represivo de su gobierno y declaró el Estado de Sitio.¹⁸¹ Esto provocó la expansión de la protesta, que asumió más tarde la forma de un “cacerolazo” que irrumpió en la capital del país. Se ocupó masivamente la Plaza de Mayo pidiendo la renuncia de Cavallo y se multiplicaron los escraches a los integrantes del gobierno. Los saqueos crecieron exponencialmente, los cortes de ruta sumaron a

¹⁸⁰ “A ver si somos claros: nadie se conforma con un plan de 120 pesos. No lo despreciamos pero no es eso. Repito, los millones de desocupados no están pidiendo miserias, están luchando por una sociedad digna” (D’Elía, FTV, 6/8/01). “Todo esto que tenemos es nuestro y lo han robado. Somos sujetos de derechos, pero si lo estamos reclamando es porque no lo tenemos” (referente MTD Aníbal Verón, julio de 2004). Su objetivo es “construir una identidad política que se sostenga desde el rechazo al sistema de concentración económica y la exclusión social neoliberal” (FTV, documento “Articulación Sociopolítica Marplatense”). Todas estas citas fueron extraídas de Muñoz (2010: 106-108).

¹⁸¹ En la misma reunión se aprobó el reparto de ayuda alimentaria por \$7 millones y el pago de los planes sociales adeudados de los últimos meses (La Nación, 20/12/01). Nada de esto fue suficiente para contener la protesta, que había ganado un nivel de retroalimentación difícil de contener.

organizaciones de pequeños capitales (APYME, FAA, CAME), además de los protagonizados por piqueteros. La CTA, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo se incorporaron a la protesta en el centro de la Capital Federal. La represión generalizada cargó incluso contra estas reconocidas figuras, una imagen que se expandió por todo el país, causando una profunda indignación. La jornada terminó con la renuncia del “superministro”. La suerte estaba echada: al día siguiente las protestas continuaron, obligando al presidente De la Rúa a renunciar, fugándose en helicóptero. Esa semana se produjeron 864 saqueos, y hubo 3,787 detenidos, 553 heridos, 28 muertos civiles, y 172 policías heridos (N. Iñigo Carrera y Cotarelo, 2006). La protesta popular había acabado con el gobierno. La frontera de exclusión del orden neoliberal quedaba expresada de modo visible en el descontento popular versus la represión abierta y generalizada.

De conjunto, en este período, las distintas organizaciones de las clases populares fueron sumándose a la protesta contra “el modelo” (que aquí referimos como orden neoliberal), componiendo un amplio cuadro de alianzas y propuestas, cuyo único punto de unificación era la oposición al gobierno y el capital que éste representaba. La capacidad organizativa y disruptiva de las clases populares en este período es incuestionable, y forma parte de la creciente deslegitimación del orden neoliberal: incluso los sujetos no organizados se veían, al menos parcialmente, interpelados por estos cuestionamientos. Al interior de las clases populares, se distinguen diferentes rumbos. Primero, la CGT y el MTA confluyeron con el GP en las demandas programáticas, dando forma al discurso de reindustrialización como herramienta de inclusión a través del empleo productivo. Segundo, la CTA confluía en las calles con el MTA, pero proponía demandas más amplias de redistribución basadas en derechos de ciudadanía. Este discurso se construyó en relación con organismos de DDHH, partidos de centro-izquierda y los MTD ligados a la orientación nacional-popular. En tercer lugar, al interior del movimiento piquetero, las otras dos orientaciones construyeron un discurso de confrontación más radical, contra el capital y el Estado *tout court*. Como se puede ver, hacia adentro de la cadena equivalencial de oposición al orden neoliberal, había varios “tramos” de demandas y discursos con puntos de contacto y de distancia.

5. La crisis mirada de conjunto

Como se señaló al inicio de este capítulo, el período analizado constituye el primer momento del proceso político. Se trata de la crisis de la fase neoliberal del modo de desarrollo, donde las tensiones que la caracterizaron se hicieron irresolubles bajo el mismo esquema de políticas. Tal como insistimos, no se trató del despliegue de un proyecto pre-constituido ni del natural devenir de una severa recesión económica. El inicio de la recesión económica resultó de un tipo específico de inserción de Argentina al mundo, estructurado con base en políticas específicas que lo solventaban. Asimismo, estas políticas públicas podrían haber tempranamente sorteado o al menos atenuado el problema de la acumulación: por ejemplo, ajustando el tipo de cambio o suspendiendo los pagos de deuda en 1999. ¿Por qué no se tomaron otras medidas antes?

El problema era lograr un acuerdo que impulsara cualquier salida, y ahí estuvo el conflicto que dio forma a la crisis. Éste es el *carácter eminentemente político de la crisis*: la dificultad de acordar una interpretación, y por ello, una salida, fue lo que profundizó lo que, en el inicio, era una recesión sin más. No hay, en tal sentido, ninguna dinámica progresiva, no hay un *pasaje* desde la economía a la política.¹⁸² La crisis se presentó como *global* (O'Donnell, 1982) no por una sucesión de crisis en diversos planos, sino porque de inicio lo que se quebró fue la interpretación estable del orden político descrito: entre las clases populares, entre los partidos políticos, y al interior de la clase dominante. El orden neoliberal entró en crisis por mantener su propia lógica.

¿Por qué no se aplicaron otras políticas? ¿Es acaso pura responsabilidad de un mal manejo de gobierno por miopía, ignorancia o corrupción? Tal como hemos presentado, no se trató ni de la autorregulación de la economía ni de la omnisciencia del gobierno. La emergencia de un orden específico de reformas sociales orientadas en un sentido concreto –cuya formulación conjunta se puede resumir en el esquema de Convertibilidad– había condicionado no sólo la forma del PRE sino las expectativas y posibilidades de los actores políticos y sociales. El inicio de la crisis resultó de un cambio en las condiciones externas ante un esquema que subordinaba la acumulación

¹⁸² Sin perjuicio de los elementos que aporte a la periodización y comprensión de la dinámica de la crisis, no creemos por esto acertada la sucesión de 4 fases propuesta por (Pucciarelli y Castellani, 2014): el paso de la crisis económica a la fiscal, de ahí en crisis financiera, luego crisis de hegemonía y, finalmente, crisis orgánica.

local a las condiciones del mercado mundial. Para poder estructurar una salida al problema se requería primero de una interpretación del problema, que, además, lograra convocar el acuerdo de más de un actor colectivo. Es decir, hacía falta que cierta interpretación ganara generalidad, pudiera presentarse como la mejor salida.

Esto es lo que explicamos en este capítulo. Apenas iniciada la recesión, aparecieron las primeras referencias de posibles soluciones entre las distintas fracciones de la gran burguesía. La “comunidad de negocios” (G8) se comenzó a disgregar con la aparición del GP. Sin embargo, en este primer momento, e incluso luego de que la Alianza asuma el gobierno, la gran burguesía privilegió el acuerdo mínimo de mantener el esquema de políticas existentes y avanzar en las líneas de acuerdo. Por eso el gobierno privilegió políticas afines con este lineamiento básico, que, en los hechos, significaba empeorar la situación del conjunto de las clases populares. Para las elecciones de 2001, la Alianza ya había enfatizando un sesgo tecnocrático acorde con el sentido común instituido en los años anteriores: administrar de modo eficiente y transparente.

La profundización del sesgo flexibilizador y represivo produjo no sólo el alejamiento definitivo de las organizaciones populares del gobierno, sino que además diluyó de modo creciente la base de consenso negativo del orden neoliberal: la idea de que cualquier alternativa era peor. El significativo estabilidad perdía así valor como punto nodal discursivo, quedando asociado a los significantes de “previsibilidad” y “certidumbre” que referían la banca y SRA, tomando forma así un efecto de frontera que ponía las demandas de las clases populares por fuera del orden político, facilitando la posibilidad de que éstas entraran en equivalencia. Esto no significa que existiera una interpretación ya construida: de hecho, todo el período muestra un esfuerzo creciente por organizar esas alternativas. La confluencia del MTA y la CTA, así como la iniciativa del FRENAPPO y los congresos piqueteros fueron diversas muestras de este proceso.

Pero, justamente, estas alternativas mostraban límites para confluir. Entre los MTD había al menos tres grandes variantes de interpretación y estrategia: de ellas, las orientadas desde el marxismo y la izquierda independiente estaban más lejos de encontrar acuerdos con otros sectores sociales.¹⁸³ Estas orientaciones cuestionaban al

¹⁸³ La CCC constituye una excepción, pues no sólo participaba de iniciativas de la CTA, sino que también articula acciones con FAA. El PCR tiene injerencia en esta última organización, lo que actúa como puente.

orden neoliberal y al capitalismo de conjunto, en un discurso más completamente estructurado. La variante nacional-popular, en cambio, encontraba menos reparos en actuar junto con otras organizaciones de las clases populares, concretamente, el sindicalismo. El diálogo más fuerte estaba aquí con la CTA, que actuaba como puente con el MTA de Moyano –sin relaciones orgánicas con ninguna expresión de desocupados. La mayor parte de las organizaciones de DDHH participaban de las iniciativas de la CTA, alimentando la lectura que unía los crímenes de la dictadura con “el modelo” económico y social excluyente de los noventa.

La CTA iba más lejos y componía alianzas con partidos de centro izquierda (ARI, PSP, PSD, Polo Social), lo que le permitía ganar visibilidad y capacidad organizativa, pero la alejaba aún más de las organizaciones de orientación marxista (que más tarde serían catalogadas como los sectores “duros” del espacio piquetero). Las demandas concretas, sin embargo, no diferían tanto, planteando la necesidad de modificar la distribución del ingreso como un derecho ganado por la ciudadanía.¹⁸⁴ La expansión de los derechos humanos más allá del respeto a la vida servía para hacer a un lado la discusión de la Convertibilidad como eje del problema (pues la vulneración de los derechos humanos existió bajo otras formas). El discurso basado en los significantes de derechos, ciudadanía e inclusión se enfrentaba al orden neoliberal excluyente.

El MTA, por su parte, si bien coincidía en protestas con la CTA, defendía una idea de distribución basada en la condición de empleo, remitiendo a la inclusión laboral formal que, además, le daría mayor capacidad de representación corporativa. Esta diferencia no fue menor en absoluto: es la base sobre la cual el MTA pudo confluir con el programa que el GP iba configurando. Este último se había distinguido lentamente del resto de BEP, incorporando a su discurso elementos que asociaban el interés de la industria al desarrollo productivo del mercado interno, lo que redundaba en mayor empleo, causando mayor bienestar a toda la Nación. El proceso de generalización de sus propuestas permitió al GP elaborar el discurso de reconstitución plena de la comunidad política vulnerada por el orden vigente. Al no encontrar respuesta a sus reclamos, el GP se alejaba tanto del gobierno –responsable de las políticas públicas- como de las

¹⁸⁴ Las organizaciones de izquierda marxista insurreccional entendían esto, en el mejor de los casos, como un paso en un proyecto más radical.

fracciones del BEP que defendían ese programa. Es decir, quedaba también fuera del orden político (y discursivo), lo que le permitía buscar alianzas con otros sectores excluidos. A medida que esto ocurría, el programa del GP iba tomando una forma más compleja que la simple devaluación: lo que al principio era solo una demanda por aumentar la competitividad frente a capitales externos, terminó apareciendo como el impulso a la demanda interna, al trabajo, a la producción, y el bienestar nacional.

Tanto la iniciativa del FRENAPO (que involucran a la CTA, pero también a APYME y FAA, entre otras) como las del GP muestran que no sólo los MTD pudieron romper la barrera corporativa en sus demandas. Coincidimos con Muñoz (2010) en que la capacidad disruptiva de éstos últimos tuvo vital importancia en quebrar la frontera que estructuraba el discurso político de ese momento. Sin embargo, consideramos que constituye una omisión significativa centrar la mirada sólo en este actor, pues se oblitera la existencia de una fuerte disputa entre diferentes proyectos de articulación. Es éste el mismo error magnificado por la interpretación de un “Argentinazo” protagonizado por el “ala más dura y consecuente” de los piqueteros (Rieznik, 2003). Como veremos en los siguientes capítulos, la selectividad estructural del Estado –y los partidos políticos del orden- favoreció una articulación basada en el proyecto del GP, al que lentamente se le irían incorporando significantes de otros actores, más allá de los límites que originalmente esta fracción del BEP le trazara (que llegaban a alcanzar a las demandas de la CGT y el MTA, pero no más lejos).

Un problema de difícil resolución era lograr traducir este programa en la representación de un partido, lo que obligaba –necesariamente- a introducirle cambios. La tradición peronista de la CGT y el MTA facilitaban la interpelación a su imaginario de industria y redistribución. Por esto, para esta alianza ampliada, el PJ, incluso después de las transformaciones del menemismo, representaba la alternativa lógica. Aunque las afinidades de Duhalde con el mismo habían sido planteadas en 1999, haber perdido la elección lo dejó sin capacidad de concertar al interior del propio PJ el liderazgo necesario. Sin embargo, todos los demás referentes nacionales –Ruckauf, De la Sota, Reutemann- ponían dudas y distancia sobre el programa dolarizador de Menem, lo que daba alguna ventaja al bonaerense. La Alianza, mientras tanto, sufría una permanente depuración, que dejaba al Frepaso y a la línea alfonsinista de la UCR en una posición

difícil: aunque se tornaban crecientemente críticos al modelo, no podían abandonar al gobierno a su suerte. Estos partidos quedaban sin capacidad de acción mientras el gobierno se aislaba más en su diálogo excluyente con ABA, SRA y el FMI. Este sesgo de representación del gobierno alimentaba la distancia del GP con el resto el G8.

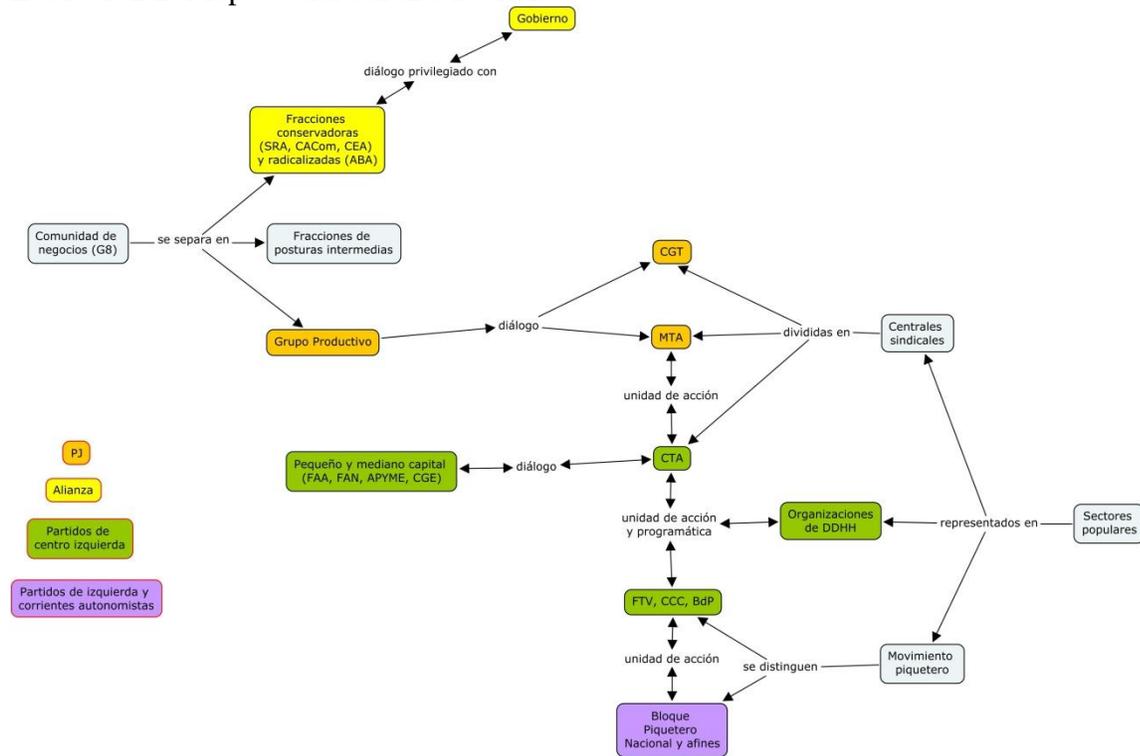
Las fuerzas de centro izquierda que se desprenden de la Alianza o sus partidos componentes se acercaron al programa de la CTA. Los partidos de izquierda buscaron capitalizar el descontento con un programa más radical, que, si bien ganó cierto lugar en las elecciones, no alcanzaba a ganar representación en el Estado. Debe enfatizarse que ambos programas tomaban demandas de los sectores piqueteros, en sus diferentes variantes. Sin embargo, en un clima de creciente desconfianza de las instituciones representativas, los alcances de estas fuerzas estaban limitados. Esta dificultad de canalizar en la representación en el Estado los programas de salida de la crisis, motorizaban aún más el descontento en las calles. Para los sectores medios, que habían depositado su confianza en la Alianza como propuesta novedosa, esta crisis se expresaba de modo más duro. Esto permitió que confluyeran en las calles con otros sectores sociales, en lo que terminó como una insurrección popular ante el Estado, con consignas magnificadas del tipo “piquete y cacerola, la lucha es una sola”.

Las discrepancias entre fuerzas populares ponían límites a su capacidad de elaborar un programa unificado. Esto no significa que no hubiera avances en tal sentido, como lo muestra el FRENAPPO o los congresos piqueteros. Sin embargo, en las elecciones de octubre de 2001, la fuerza que había conseguido las posiciones clave (presidencia en ambas cámaras) era el PJ, lo que lo dejaba al comando del gobierno y el Congreso ante la renuncia del presidente.

La ilustración 2 resume los vínculos entre gobierno, fracciones de la gran burguesía y expresiones de las clases populares. Se trata, por supuesto, de una síntesis gráfica de la economía política del período, que omite múltiples matices y cierta dinámica procesual, pero sistematiza relativamente la situación social y política del período. Asimismo, queda relegada la disputa discursiva. Sin embargo, permite notar la distribución de vínculos –de diferentes alcances- entre agentes, que nos deja entrever: a) que el gobierno quedó crecientemente aislado en su relación con sólo una parte del BEP; b) el GP fue la única fracción del BEP que logró relacionarse con organizaciones de las

clases populares; c) la CTA actuó como nodo de vínculo entre diferentes organizaciones (sindicales, de DDHH, del movimiento piquetero, e incluso del pequeño y mediano capital), siendo así agente clave en la construcción de la cadena equivalencial popular.

Ilustración 2. Mapa social durante la crisis



CAPÍTULO 4. EL PROGRAMA PRODUCTIVO DESNUDO

En el capítulo anterior mostramos cómo el conflicto social se ordenó en dos grandes ejes (uno de impugnación popular del orden y otro de disputas al interior del BEP), que cuestionaron la continuidad del esquema de políticas de la Convertibilidad. La dinámica de la crisis, lejos de ser el resultado automático de un influjo económico externo, fue determinada por la capacidad de los diversos actores en interpretar la situación, elaborar salidas y ponerlas en relación a las demandas de otros actores.

Concretamente, y según explicamos, se produce una escisión dentro del BEP, aislando a las fracciones que defendían la Convertibilidad junto al gobierno. El gobierno, a su vez, se aisló al interior del aparato estatal y del resto de los partidos políticos. Las fracciones organizadas como GP lograron atraer la atención de una parte del sindicalismo (CGT y MTA), bajo un discurso de producción industrial, mercado interno, y creación de empleo. La apelación a los significantes de “lo nacional” fue muy efectiva, remitiendo a imaginarios sobre la soberanía contra el despojo de los años del neoliberalismo. Esto mostraba una distancia respecto de las propuestas de redistribución basada en la ciudadanía impulsada desde la CTA y parte del movimiento piquetero, junto a algunos partidos de centro izquierda. Por último, algunas organizaciones de desocupados construyeron alianzas con demandas más radicales. La movilización social que gana las calles en diciembre de 2001 tenía una larga acumulación de experiencias previas, que –si bien habían desgastado la legitimidad del conjunto del aparato estatal– no habían conducido a un programa unificado ni una organización centralizada.

Esta enumeración esquemática de las características que componen el cuadro de situación a fines de 2001 sirve de base para comprender la dinámica del período explicada en este capítulo. Las jornadas del 19 y 20 de diciembre marcan una ruptura del orden institucional de la Convertibilidad, obligando no sólo la huida en helicóptero del gobierno sino a la construcción de un nuevo ordenamiento político y económico. Cualitativamente, el proceso político se ve modificado por la imposibilidad de dar continuidad al esquema previo de políticas públicas, acumulación y alianzas. Esto no significa que el orden a construir estuviera ya definido, aunque sí se hubieran planteado opciones. El presente capítulo analiza la trayectoria del proceso en la sucesión de dos

gobiernos no electos, el de Adolfo Rodríguez Saá (23 al 30 de diciembre de 2001) y el de Eduardo Duhalde (1 de enero de 2002 a 25 de mayo de 2003). Se trata de dos intentos por dar forma a salidas de la crisis, estudiadas según las dimensiones ya explicadas.

1. PRE

Dado que la consistencia externa de la Convertibilidad se sostenía sobre el equilibrio del balance de pagos mediante la entrada de capitales vía IED y deuda, ahí se encontraba el nudo de la crisis. Los flujos de capitales –y la necesidad de atraerlos por las vías al alcance- constituían el epicentro del PRE. Si bien los precios de los *commodities* habían iniciado una tendencia ascendente a fines de los '90, el efecto aún no era suficiente para recomponer el ingreso de divisas por la vía de comercio exterior. La disputa por el régimen cambiario buscaba atender a este problema. En este sentido, la reorientación de los flujos de capitales desde América Latina a Asia, dio inicio a un proceso de relativa desinversión en la región, que afectó a Argentina. Durante la crisis, el rol de balancear la situación externa recaída en el endeudamiento, que tuvo por ello una dinámica explosiva. El rol del FMI no fue trivial al respecto.

Bembi y Nemiña (2005) enfatizan la importancia del informe Meltzer para este cambio de actitud del FMI: implicaba el abandono de la función de prestamista de última instancia que el organismo cumplió durante los noventa para pasar a cumplir la de auditor o coordinador (Frenkel y Avenburg, 2009). El mencionado informe, encabezado por el especialista Allan Meltzer, fue presentado en marzo de 2000 en el Congreso de EUA, abonaba a la idea de que la existencia de un prestamista de última instancia (FMI) –particularmente en situaciones de excesivo endeudamiento- generaba un comportamiento de “riesgo moral” que inducía a los países a endeudarse irresponsablemente (Cibils, Weisbrot y Kar, 2002). La recomendación, luego impulsada por Anne Krueger dentro del organismo, era que el FMI pasara a ser una suerte de juez (y parte) en un mecanismo similar a una convocatoria de acreedores.

Este proyecto, sin embargo, quedó trunco luego de los atentados del 11 de septiembre en EUA. El rol preponderante en la crisis de Argentina, la más grande de la historia, y la falta de respuestas, sumieron al FMI en una crisis importante (Frenkel y Avenburg, 2009; Macías Vázquez, 2009; J. Rodríguez, s. f.). El propio organismo

reconocería más tarde, aunque sólo tibia y parcialmente, su responsabilidad en la crisis (“Informe sobre la Evaluación del Papel del FMI en Argentina, 1991-2001”, publicado por la oficina de evaluación interna de la entidad). Macías Vázquez (2008) señala que no existía marco jurídico sólido a nivel internacional para encarar reestructuraciones de deuda. Si bien es cierto que no existe un procedimiento de renegociación establecido, sería necesario matizar esta afirmación, pues sí existen diversos antecedentes del derecho internacional que permiten pensar en mecanismos alternativos.¹⁸⁵

La última semana del año 2001, justo después del anuncio el 23 de diciembre de la cesación de pagos de parte de la deuda (*default*), el riesgo país –termómetro de la situación económica basada en el endeudamiento externo- alcanzó los 5,501 puntos. La cesación de pagos implicaba un cambio sustancial en el desarrollo de la crisis. Como señalan Damill, Frenkel y Rapetti (2005), el *default* no es causa de la crisis sino al revés, es el resultado de la misma, al intentar seguir pagando. A pesar de los esfuerzos del gobierno de la Alianza, la falta de apoyo por parte del FMI luego de la instauración del “corralito” impidió la renovación de compromisos de pago (*roll-over*). La cesación no alcanzó la contraída con los organismos multilaterales ni la reestructurada en los canjes previos (ver sección 3 del capítulo 3). La deuda pública alcanzaba en ese momento US\$144,453 millones, el 61% de la cual era externa (Gogliormella y Malic, 2013).

Llamativamente, la primera reacción de los mercados financieros ante la declaración del estado de insolvencia fue positiva, dado que redujeron el riesgo país hasta los 3,980 puntos (una caída de casi 28%) el 4 de enero de 2002. Sin embargo, el anuncio de los primeros puntos del programa económico del nuevo gobierno señalaba una nueva correlación de fuerzas que no privilegiaba la resolución veloz del tramo de deuda en cesación. El capital financiero mundial reaccionó elevando las restricciones crediticias: durante todo el gobierno de Duhalde, el riesgo país se mantendrá en promedio en torno a los 5,817 puntos, alcanzando un máximo de 7,220 en julio de 2002.

A esta elevación del costo del crédito en el mercado privado se sumaba a la negativa del FMI a desembolsar nuevos recursos. A pesar de que el gobierno cumplió con los puntos que el organismo demandaba, éste evitó llegar a un acuerdo hasta enero

¹⁸⁵ No los discutimos aquí, pero existen recursos jurídicos para impugnar deuda, bajo las figuras de delito de ejecución continuada y deuda odiosa (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 2005; Espeche Gil, 1991; Kaiser, 2008; Olmos Gaona, 2011; Rodríguez Kauth, 2002; G. Weber, 2008a, 2008b).

de 2003, en vísperas de la elección del siguiente presidente. La razón de este cambio de disposición del organismo estuvo en el incumplimiento de Argentina en noviembre de 2002 respecto de un pago con el BM, alegando la falta de ayuda del FMI. Esta situación funcionó como una amenaza creíble, pues si el Argentina declaraba el *default* con los organismos multilaterales, quedaba virtualmente fuera de la arquitectura financiera internacional, representando un antecedente peligroso para otros países (Bembi y Nemiña, 2005). Pero además, la decisión dejaba a los organismos multilaterales en una situación complicada, pues Argentina formaba parte de los 3 deudores más importantes, y sus pagos garantizaban un flujo de recursos importante. Es posible que el organismo quisiera aplicar a Argentina un castigo ejemplar por la naturaleza de su accionar: la declaración unilateral de cesación de pagos no podía figurar como una opción para los deudores (Cibils et al., 2002).¹⁸⁶ Lo cierto es que durante este período los organismos de crédito (el FMI, en particular) pasaron de ser “prestamistas de última instancia” a ser “cobradores de primera instancia” (Damill, Frenkel, y Rapetti, 2005: 29).

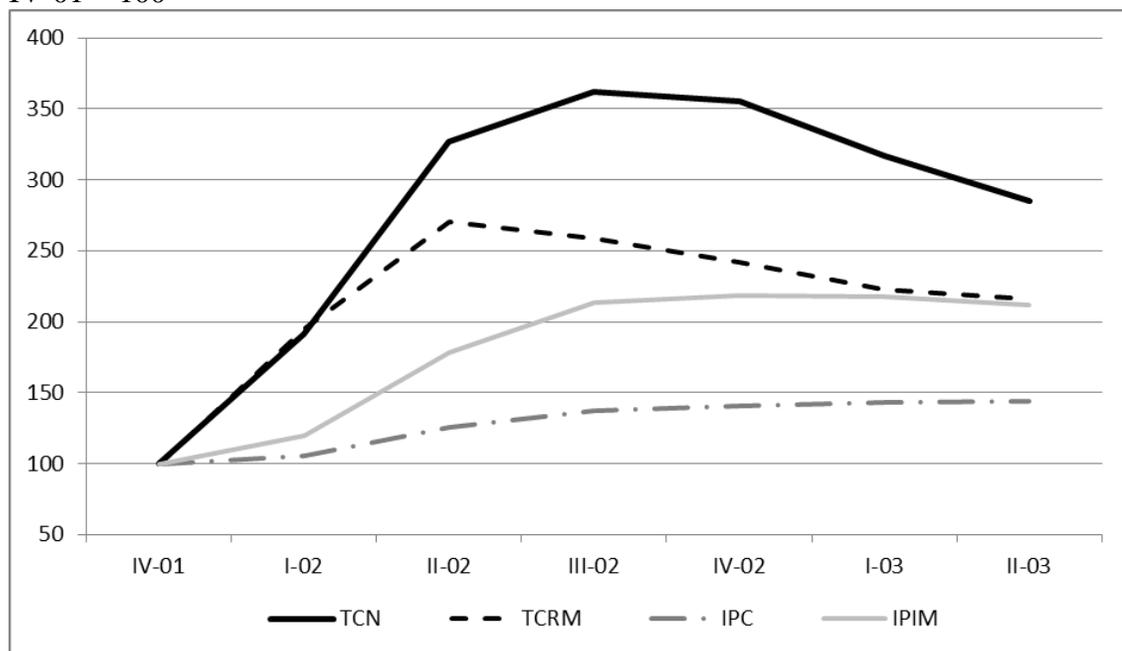
La declaración de cesación de pagos inaugura entonces una nueva fase tanto para el sector externo como para las finanzas públicas, donde el ahorro de recursos permitió pasar al superávit en ambos frentes. Si bien los intereses netos pagados al exterior aumentaron un 3% en 2002 respecto de 2001, frente a la dinámica explosiva de aumento de años previos, esto representó un freno en la lógica del endeudamiento. En las cuentas públicas el efecto fue más claro: los pagos de intereses de deuda caen entre 2001 y 2002 de \$10,174.6 millones a \$6,809.5 millones, constituyéndose en una de las principales fuentes de ahorro fiscal (en un contexto de aumento del gasto corriente del 2%). Es decir, el *default* fue una modificación sustancial de la lógica de regulación del PRE, acompañada luego por otros cambios en las políticas macroeconómicas.

Estos cambios fueron instrumentados por el gobierno de Duhalde. A partir de enero de 2002, el gobierno inicia una política de ajuste del tipo de cambio, primero a través de un desdoblamiento (\$1.4 por dólar para operaciones comerciales, libre para otras transacciones), que resistió hasta febrero, cuando se debió unificar el mercado

¹⁸⁶ “Durante mucho tiempo existió la percepción popular de que el FMI debe ayudar a la Argentina”, dijo Krueger en una entrevista, para quien “esa percepción popular fue tomada por las autoridades argentinas, quienes no son lo suficientemente realistas que deben ser, sobre la posibilidad de que les prestemos dinero, cuando no se ha hecho lo necesario” (La Nación, 21/4/02).

cambiario, permitiendo una flotación “sucia” (con intervención del BCRA). Por un lado, el FMI había demandado expresamente esta liberación del mercado cambiario, pero por otro lado, era fácticamente imposible sostener ese nivel de tipo de cambio: una vez liberado el “cepo” de la Convertibilidad, las expectativas sobre el nuevo nivel se dispararon. A pesar de que el “corralito” financiero ya había dado fin formal a la Convertibilidad (dado que interrumpía la conversión libre pesos a dólares), la pérdida de la referencia del “uno a uno” abriría toda una serie de vaticinios sobre cataclismos económicos, donde la hiperinflación era el riesgo mayor (ver detalle de predicciones del momento en Levy Yeyati y Valenzuela, 2007; Rodríguez Díez, 2003).

Gráfico 6. Tipo de Cambio Nominal (TCN), Tipo de Cambio Real Multilateral (TCRM), Índice de Precios al Consumidor (IPC) e Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM). IV-01 = 100



Fuente: elaboración propia con datos de INDEC, MEcon y BCRA.

De hecho, tal como se ve en el gráfico 6, la liberación del tipo de cambio nominal produjo una fuerte devaluación, que alcanza su máximo en el tercer trimestre de 2002 (rozando los \$4 por dólar en octubre), momento a partir del cual reduce su *overshooting*, estabilizándose a poco menos de \$3 por dólar. El gobierno utilizó una estrategia doble para contener la demanda de dólares que provocaba el aumento del tipo

de cambio: primero, el BCRA vendía divisas en el mercado; pero segundo, esterilizaba la emisión mediante la venta de diferentes títulos en pesos (BODEN el Tesoro; LEBAC y NOBAC el BCRA), que prometían elevadas tasas de interés (llegaron a pagar el 129% en julio de 2002). Al tentar con altos rendimientos en pesos, se esperaba contener la salida de recursos del sistema financiero y su fuga al dólar (Rapetti, 2005). A pesar de que este procedimiento morigeró la presión cambiaria, el verdadero punto de quiebre fue la estabilización de un nuevo nivel de tasa de ganancia, que revertió el uso del capital del atesoramiento (sea en dólares o en títulos públicos) a la acumulación (Burachik, 2009; Félix, 2008). El margen bruto de explotación en la cúpula industrial subió en 2002 un 73.8% respecto de su nivel en 2001, y aunque a partir de allí se redujo, en 2008 aún era un 20.9% más alto que en el último año de la Convertibilidad (Azpiazu y Schorr, 2010). Una vez que la acumulación cobra fuerza –vía mayores ganancias-, fueron los depósitos transaccionales (los usados para la normal operatoria) los primeros en reaccionar positivamente, dando liquidez a los bancos y frenando el aumento del dólar.¹⁸⁷

Según se ha explicado para la experiencia argentina (Diamand, 1972), este ajuste del precio de la moneda produce un fenómeno de aumento de precios originado en la modificación cambiaria. Mediante esta inflación se modifican los precios relativos, favoreciendo la rentabilidad de los sectores transables. En efecto, la inflación minorista durante 2002 (40%) fue inferior a la mayorista (118%), debido al peso de la recesión interna –que impedía mayores aumentos de precios por falta de demanda- y al componente de servicios dentro de la canasta de bienes del IPC. El gobierno actuó pasando a pesos (pesificando) las tarifas de servicios públicos, que antes se ajustaban por inflación estadounidense, y sometiendo a negociación sus ulteriores aumentos, reduciendo así su impacto en la inflación. Esto impulsó la competitividad de las actividades transables: el TCRM más que se duplica. Pero, además, el gobierno aplicó derechos de exportación (retenciones) a las producciones primarias, se contuvieron los aumentos de precios minoristas.

Este ajuste de precios relativos, tras una década del “corsé” de la Convertibilidad, produjo significativos efectos redistributivos. Las actividades transables, y en particular

¹⁸⁷ La iliquidez de la economía argentina y la falta de producción alentaron formas de intercambio precapitalistas, a través de los clubes de trueque, que se multiplicaron en todo el país.

las producciones exportables, fueron las principales beneficiarias de este nuevo esquema de precios. Incluso con la implementación de las retenciones, las exportaciones primarias lograban un incremento sustantivo de la rentabilidad (que se veía además impulsado por la mejora en los precios internacionales de los *commodities*). Algunas actividades competitivas de las importaciones ganarían protección por precios, permitiéndoles recuperar mercado.¹⁸⁸ Así, desde el primer trimestre de 2002, las exportaciones mostraron un comportamiento anticíclico, que impulsó la demanda agregada. Si bien se trata de un fenómeno de precios, lentamente las cantidades fueron aumentando también. A los sectores de exportaciones primarias más tradicionales se sumó rápidamente el turismo, que fue fuente de reactivación y de divisas.¹⁸⁹

Las actividades desfavorecidas por la nueva constelación de precios eran los servicios no transables, en particular los privatizados, cuyas tarifas pasaron a estar reguladas por el Estado. A pesar de que hubo ciertos intentos de aumentar sus precios, la protesta social y de los pequeños empresarios pusieron límite a esta posibilidad.¹⁹⁰ Por otra parte, bajo la premisa de ganar competitividad, el costo de producción industrial debía contenerse. En aras de evitar que las empresas del sector se vieran perjudicadas, el gobierno estableció una compensación fiscal por las tarifas congeladas (Bona, 2012): las transferencias al sector privado pasan de \$5,818.9 millones en 2001 a \$8,695.5 millones en 2002, un aumento del 49%. A raíz de la pesificación asimétrica de depósitos y deudas (ver siguiente sección), los bancos recibieron compensaciones por US\$8,995 millones, lo que explica el crecimiento de la deuda pública ese año. Ninguna fracción del capital perdió con el ajuste de precios, aunque sí existieron cambios en el orden de prelación al

¹⁸⁸ Aparecieron en estos meses gran cantidad de “segundas marcas”, que eran productos sustitutos de menor calidad de las marcas consagradas (“primeras”), a veces elaboradas por las mismas empresas pero vendidas con otros nombres: cervezas Diosa Tropical, yerba Mañanita, los fernet Vittone, Mr. Robot y Fernandito VII, las gaseosas Pritty, 5mentarios, Interlagos, Apetece y Mass o los cigarrillos Melbour.

¹⁸⁹ En el documento presentado por el equipo económico liderado por el ministro Jorge Remes Lenicov al momento de salir de la función pública, se reconoce explícitamente que la dinámica de crecimiento vendría impulsada por las exportaciones, a las que luego se sumaría el consumo y la inversión (Remes Lenicov, Todesca y Ratti, 2003). Con cálculos precisos y concluyentes, Raffo y Lozano (2006) demuestran que el consumo que se reactiva es el de la clase capitalista, con escasas repercusiones en el consumo popular. Esto pone en serias dudas el énfasis puesto por algunos autores en el rol del consumo y la demanda interna para explicar la reactivación (Amico, 2008b, 2008c; Rapetti, 2005).

¹⁹⁰ El Congreso aprobó una disposición prohibiendo cortar la luz, el gas y la electricidad por falta de pago, lo que dejaba atadas de manos a las empresas ante el aumento de la morosidad. El Congreso entendió que proceder con los cortes hubiera provocado un estallido social (La Nación, 10/5/02).

interior del bloque dominante, mejorando sensiblemente la situación de las actividades productivas exportables (E. López, 2012b; Wainer, 2013).

Con estas características, algunos autores buscaron señalar la fortaleza de un nuevo modelo basado en el tipo de cambio real alto competitivo (Damill y Frenkel, 2009; Frenkel y Rapetti, 2007; Frenkel, 2008, 2010). El impulso a la actividad por la vía de mayor competitividad propulsaría mayor inversión y a través de este proceso, más desarrollo. Este diagnóstico-propuesta estuvo basado en una coyuntura muy esporádica de precios relativos y diversos supuestos sobre el comportamiento de la inversión que no se sostuvieron para la economía argentina en los años siguientes (Cantamutto, 2012a). Se omitía, además, una teorización pertinente sobre los efectos de ajuste en el mercado de trabajo de una devaluación (Keifman, 2009). Entendemos que la mejor teorización de este ajuste general es lo que Vitelli (1990) y Vitelli y Brenta (1995) llamaron programa de estabilización y ajuste, típico de la etapa de industrialización, que consistía en la creación de una onda de precios relativos que lograra rehabilitar la rentabilidad del capital y desplazar la restricción externa, impulsando la actividad transable.

Ahora bien, este impulso a la acumulación de ciertas ramas de actividad no se basaba solo en una redistribución al interior del capital. Se puede decir sin temor a error que la gran perdedora del nuevo esquema de precios fue la clase trabajadora. En la onda de mayo de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la desocupación alcanzó al 22% de la población económicamente activa, a la que se suma un 18.6% de subocupación. Esto actuó como ancla para que los salarios reales se vieran fuertemente reducidos por la inflación y la devaluación: el salario real medio cayó 24% y el mínimo un 31%, mientras que sus valores en dólares se redujeron a cerca de un cuarto de su valor en diciembre de 2001 (ver gráfico 12 del capítulo 6).¹⁹¹ En la siguiente onda de la EPH, se determinó que el 54.3% de los argentinos eran pobres, y el 24.7% indigentes. De un año a otro, los trabajadores perdieron 7% en la distribución funcional del ingreso (Graña, Kennedy y Valdez, 2008). La estabilización de la tasa de ganancia, que fomentó la aplicación productiva del capital, se basó en esta abrupta jibarización del costo salarial.

¹⁹¹ Por motivos de exposición, preferimos remitir las series de salarios a la sección 1 del capítulo 6, donde se puede apreciar el panorama completo de las variaciones y tendencias de las series.

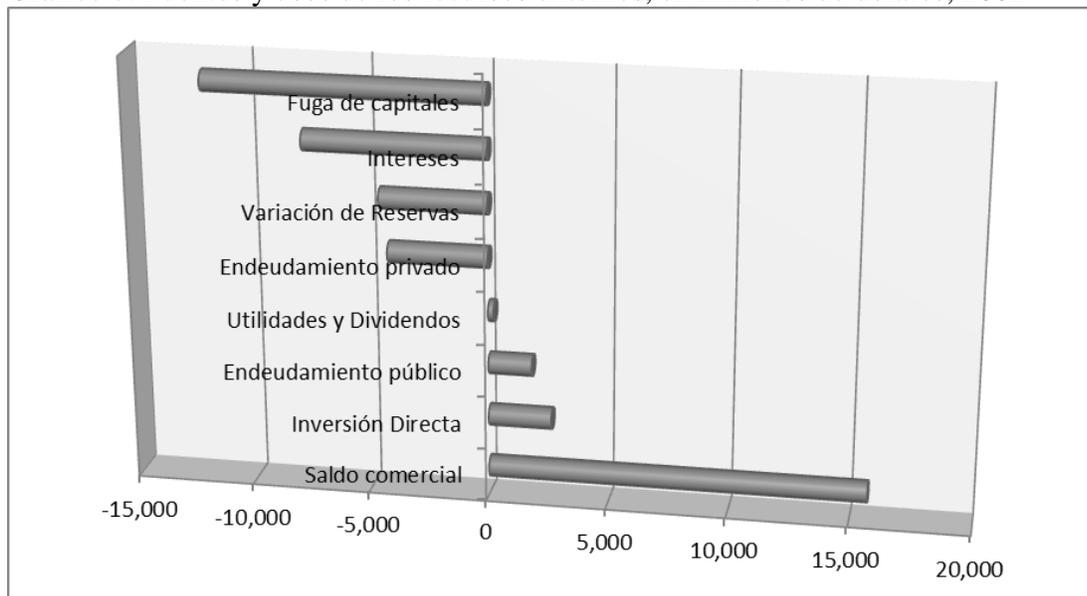
Y, en efecto, este nuevo programa produjo efectos sobre la actividad económica. El PBI desestacionalizado dejó de caer en el segundo trimestre de 2002, mostrando crecimiento (en pesos y en dólares) para el último trimestre de ese año. El peso del “efecto arrastre” de la caída previa hizo que no se pudiera detectar el crecimiento en términos interanuales sino hasta el año siguiente. La contribución sectorial mostró similares problemas de agregación: muchas ramas aglomeran tanto grandes empresas orientadas a la exportación como pequeñas dedicadas al mercado interno. Las primeras en mostrar resultados expansivos a nivel agregado fueron la industria, el suministro de gas, electricidad y agua y el turismo, a fines de 2002. El panorama de recesión generalizada en 2002 cambió a inicios de 2003, cuando ya casi todas las ramas de actividad se expandían. Reposadas sobre mejores condiciones de competencia por precios y con una elevada capacidad instalada ociosa, muchas de las ramas pudieron incrementar su actividad con relativa facilidad. La excepción la constituye la intermediación financiera, cuya recuperación se inició recién a fines de 2004.

La caída más espectacular en 2002 fue la de la construcción (33%), que es al mismo tiempo la que se reactivó con más fuerza en 2003 (34%). En la recuperación de esta rama fue relevante la puesta en marcha de planes de obra pública durante el gobierno de Duhalde, anunciado a mediados de 2002 (“Queremos poner en marcha el sector de la construcción porque es uno de los más dinámicos con relación a tomar empleo”, *Conversando con el presidente*, 13/7/02), y aplicado a partir de fines de ese año: la inversión pública muestra un crecimiento interanual de 91% ese último trimestre. La inversión estatal crecería a tasas elevadas a partir de allí, impulsando la actividad de la construcción, cuyos efectos serían particularmente notables en la creación de empleo. Los índices de desocupación y subocupación comienzan a disminuir a fines de 2002.

La posibilidad de impulsar la actividad a través del Estado se basó en la recuperación del superávit fiscal, alcanzado a fines de ese año. Resulta interesante que, a través de la devaluación y la inflación, el gobierno de Duhalde logró llevar adelante el ajuste que la Alianza no pudo hacer a través de reducciones nominales. Las remuneraciones del sector público crecieron respecto de 2001 un 7%, muy por debajo de la inflación (40%), un recorte muy superior al 13% impulsado por el anterior gobierno (ver sección 3 del capítulo 3). Junto a la cesación de pagos, este ajuste produjo la

liberación de fondos disponibles tanto para subsidiar a las privatizadas como para impulsar la obra pública luego. Por el lado de los ingresos, la principal novedad fue la aplicación de retenciones, que el gobierno aplicó en porcentajes bastante bajos (20% al petróleo, 10% para otros productos primarios y 5% a manufacturas, gas y electricidad), que además fueron resistidas por el capital –las petroleras, bajo amenaza de retirarse del país, lograron quitar las retenciones a sus ventas externas (Rodríguez Diez, 2003; Sevares, 2002). Fue la propia reactivación de la actividad la que reanimó la recaudación por IVA, sin mayores cambios en la estructura impositiva. El ajuste fiscal permitió además evadir la necesidad de tomar nueva deuda para el funcionamiento del Estado.¹⁹²

Gráfico 7. Fuentes y usos de los recursos externos, en millones de dólares, 2002



Fuente: elaboración propia con datos de MEcon.

En cuanto a la situación externa, la devaluación y recesión provocaron una situación novedosa. La tibia mejora en las exportaciones y la significativa caída de las importaciones (51% entre 2001 y 2002) produjeron un marcado aumento del superávit comercial. Esta situación, novedosa respecto de la situación promedio de la Convertibilidad se erigió como la principal fuente de recursos externos de la nueva fase del modo de desarrollo. En una escala muy menor, la IED (dirigida a la compra de

¹⁹² La mitad del incremento de deuda pública del período se explica por las compensaciones al sector financiero, por un total de US\$14,359 millones (Cobe, 2009).

empresas locales) y el endeudamiento público proveerían de algunas divisas, junto a la leve reinversión de utilidades.¹⁹³ Mientras tanto, el sector privado continuó con su proceso de desendeudamiento –en el contexto de la cesación de pagos- y de fuga de capitales, erosionando las reservas disponibles. Los intereses de la deuda continuaron retirando recursos del circuito nacional de valorización.

Comparando los gráficos 3 y 7, podemos sintetizar el cambio en las fracciones predominantes dentro del BEP: el pasaje de la deuda como fuente privilegiada de divisas al superávit comercial se condice con la pérdida de gravitación de las fracciones financieras respecto de las productivo-exportadoras. Asimismo, la persistencia de la IED como fuente de recursos externos (y el pago de utilidades como uso) reafirma la continuidad en el rol del capital extranjero en general, preeminencia que no fue disputada en este cambio del patrón de reproducción económica. El cambio mostrado entre ambos gráficos expresa sintéticamente la modificación de la distribución de poder económico, estructurado con base en las políticas públicas, a su vez definidas en la disputa política. Retomaremos más adelante el tema, pero vale dejar asentada desde aquí el interesante desplazamiento producido entre la dinámica política y económica: aún con la imposición de retenciones, el capital agropecuario fue uno de los ganadores económicos de la nueva fase. Sin embargo, resulta inadecuado tratarlo como parte de las fracciones hegemónicas –categoría política-, puesto que fue relativamente desplazado, como la propia imposición de las retenciones lo demuestra. Volveremos sobre esto.

De conjunto, entonces, la salida de la crisis de la Convertibilidad se estructuró por la declaración de cesación de pagos, la devaluación, la pesificación de la economía (tarifas, deudas y depósitos) y la fuerte reducción del costo laboral. Este conjunto de medidas permitió que a mediados de 2002, y gracias a un fabuloso aumento del margen de explotación, las actividades productoras de bienes transables dieran impulso a la rehabilitación de la acumulación, estabilizando el nivel del tipo de cambio. Los superávits gemelos, fiscal y externo (ver sección 1 del capítulo 5) que permitieron la reactivación económica, se basaron en este nuevo esquema: competitividad ganada por la licuación

¹⁹³ La pesificación de una parte de la deuda y la omisión de los registros completos de las obligaciones surgidas del default hacen que 2002 cierre con una deuda pública total de US\$137,320 millones, ligeramente inferior a la del año previo. Sin embargo, hubo un importante incremento de la deuda, básicamente por la emisión de los títulos ya señalados (BODEN, LEBAC y NOBAC). En el cálculo aquí referido se incluye no sólo la toma de deuda del Tesoro sino también del BCRA.

del costo laboral, la pesificación de tarifas y el abaratamiento de la moneda nacional (Félix y López, 2012; Grigera y Eskenazi, 2013; Varesi, 2013).

2. Políticas públicas

Como se adelantó, la salida de la crisis se estructuró con una serie de políticas que modificaron la macroeconomía del país (Cantamutto y Wainer, 2013; E. López, 2013; Varesi, 2013). Se pueden referir, sintéticamente, como la cesación de pagos, la devaluación compensada (con retenciones), la pesificación (tarifas, depósitos y deudas), la contención salarial y la contención social. Más aún, en este período se produjo un relevante giro discursivo, donde la importancia de la estabilidad y la previsibilidad del orden neoliberal fueron desplazada por la relevancia de “lo productivo” y “lo nacional” como ejes de las nuevas políticas. Es decir, no se trató solamente de un nuevo set de políticas macroeconómicas, sino una nueva estructuración de su coherencia, su proyecto, su propuesta de orden. Veamos este desplazamiento.

El muy breve gobierno de Rodríguez Saá reunió algunos cambios significativos para el devenir posterior de la política pública. Su gabinete redujo a 4 los ministerios (Cancillería y Defensa, Interior, Trabajo, y Justicia), completando con secretarías el armado gubernamental. Por un lado, esto significaba un ahorro fiscal importante –que el presidente complementó con recortes en gastos considerados excesivos, como celulares o automóviles-, y por otro, se trata de una expresión evidente de la pérdida de poder del capital concentrado financiero, en su dominio “automático” y técnico, al bajar de categoría al Ministerio de Economía, convirtiéndolo en una Secretaría de Hacienda –a cargo de un hombre del peronismo bonaerense, Rodolfo Frigeri. Este secretario estuvo ligado a una de las iniciativas más polémicas del período, la intención de emitir una tercera moneda, el “argentino” (Cantamutto, 2012a; Levy Yeyati y Valenzuela, 2007). Se trataba de un intento desesperado –ideado por el periodista, ex militante de la UCeDé, devenido en presidente del Banco Nación, David Expósito- de resolver la cuestión fiscal sin salirse de la Convertibilidad. La moneda, que no sería convertible (como en Cuba), tenía como objetivo reemplazar a las cuasi-monedas provinciales y la nacional en circulación. La idea fue duramente criticada por varios frentes, *por no tomar partido en la disputa por el régimen de políticas* tal como se estructuró en el momento

de crisis: “En la actual crisis económico-social que vive el país, son falsas las opciones de dolarización o devaluación que presentan a la convertibilidad como el mal de la sociedad argentina” (Discurso asunción, 23/12/01). Este intento de conciliar posiciones no se condecía con el antagonismo existente al interior del BEP: era necesario adoptar un lugar en el conflicto, y estructurar las políticas desde allí.

Otros tres anuncios realizados por Rodríguez Saá tendrían particular peso en las políticas públicas posteriores. Se trata del anuncio de la creación de “un millón de empleos” en el lapso de tres meses y un ambicioso plan de obra pública. Anunció también su voluntad de derogar la ley “Banelco”. Si bien ninguna de estas propuestas se alcanzó a llevar a cabo, las dos primeras serían retomadas, aunque con modificaciones, por Duhalde. La obra pública aparecería a mediados de 2002 como fuente de impulso, justamente, para la creación de empleo. Sin embargo, para resolver la necesidad de ingresos en el corto plazo, como veremos, Duhalde convirtió el “millón de empleos” en dos millones de planes sociales (Golbert, 2004).

Sin embargo, en el orden de las políticas que marcaron el rumbo posterior, la más relevante fue la declaración en el Congreso de la cesación de pagos, que significó una ruptura en la lógica sostenida hasta ese momento. Debe subrayarse que la declaración se trataba menos de un acto soberano que de la expresión de un hecho consumado. No obstante, quebró la salida de recursos en la balanza de pagos y en las finanzas públicas, por lo que impuso una nueva situación. Aunque no se repudiaba la deuda, aparecían en el discurso de Rodríguez Saá los reclamos populares por la ilegitimidad:

No siento que sea justo definir a la llamada deuda externa argentina como el endeudamiento contraído por el Estado Argentino frente a los acreedores extranjeros que merezca definir nuestra posición con la frase: debemos honrar los compromisos asumidos. Siento que las cosas no son así. No podemos obviar con crudeza que algunos dicen que la llamada deuda externa, al menos parcialmente, es el más grande negociado económico que haya vivido la historia argentina. Este concepto se agrava porque su tratamiento siempre se ha realizado en escenarios reducidos, en oficinas a puertas cerradas, con decisores desconocidos y a espaldas del interés general. Y lo que es más grave, se ha priorizado el pago de la llamada deuda externa, frente a la deuda que este país tiene con sus propios compatriotas. (...) Vamos a tomar el toro por las astas, vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Esto no significa el repudio de la deuda externa, esto no significa una actitud fundamentalista. (Discurso asunción, 23/12/01)

Esta cesación de pagos no buscaba enfrentar al capital financiero o los organismos multilaterales. La idea había sido acercada a Rodríguez Saá por Lisandro Barry y Eduardo Amadeo –luego funcionarios de Duhalde-, quienes habían llevado a Meltzer a Argentina para dar conferencias sobre el *default*. Aunque ciertamente no era el caso, esto llevó a que el presidente dijera que el *default* “lo tenía arreglado con Meltzer y Bush” (Rodríguez Diez, 2003). Es decir, la cesación de pagos no era concebida como un enfrentamiento al capital financiero o sus representantes, sino un momento necesario en la revisión de sus condiciones. Lo que el fugaz presidente cuestionaba no era el endeudamiento en sí, sino la corrupción asociada.

Rodríguez Saá desplazó la importancia de la deuda (como expresión de la confianza de los mercados en el país) a un segundo orden, haciendo prioritarios objetivos de las políticas públicas la *producción nacional* y el *empleo*, la deuda con los “propios *compatriotas*”.¹⁹⁴ Aunque su veloz paso por la presidencia impidió que el resto de su programa avanzara, marcó un hito –casi siempre invisibilizado- en el devenir posterior del proceso político, tanto por las propuestas de políticas públicas, como por el discurso que comenzó a elaborar para darles cierta coherencia. La idea de lo nacional, lo productivo, la creación de empleo como una deuda social, comenzaron a estructurarse desde el Estado. Sus limitaciones se expresaron en la indefinición respecto de la disputa central por el régimen cambiario que llevaba adelante el BEP, y la carencia de sustento propio dentro del sistema político: sin alianzas con el poder –económico y político-, sin ser un representante de las clases populares, su destino fue la pronta salida.

Esta orientación se consolidó con Duhalde, quien dispuso un tratamiento segmentado del problema de la deuda: por un lado, se cumpliría religiosamente con los organismos multilaterales (se pagaron, al menos, US\$4,200 millones según estimaciones oficiales) y algunas obligaciones provenientes de los canjes previos; mientras por otro lado, se negociaba sin prisa con el FMI para iniciar la resolución del problema de los bonos defaulteados. El programa de Duhalde al respecto era muy claro: *el acuerdo con*

¹⁹⁴ Rodríguez Saá subrayaba la responsabilidad fiscal y de los ilícitos asociados a la deuda: “El capitalismo, tal cual se nos presenta hoy, no puede dar respuestas al desempleo, la marginación, la exclusión, la pobreza. (...) El país no tolera más la evasión ni el contrabando y la inequidad fiscal. La producción, la competitividad y el empleo, dejarán de ser temas olvidados. Queda abierta nuestra agenda productiva” (Discurso asunción, 23/12/01).

el Fondo se subordinaba al objetivo de política de crecimiento productivo. No se le iba a prometer ni políticas ni pagos que pusieran en riesgo este objetivo:

Tenemos que ir dándole fuerza a esta Argentina productiva que ya está apuntando, que *los empresarios se quejan por lo que les falta: tienen mercado, pueden exportar, les falta capital de trabajo*, es un tema muy difícil de solucionar porque Argentina no tiene crédito de ningún lado, por eso la importancia de llegar a un acuerdo con los organismos internacionales de crédito, aunque muchos políticos dicen ¿para qué van? Vamos porque queremos resolver el problema de la gente, porque *necesitamos nosotros que los organismos de crédito, Banco Mundial, Fondo Monetario nos den una mano*, porque sería mucho menor el sufrimiento de nuestra gente. (“Conversando con el presidente”, 19/2/02, itálicas propias)¹⁹⁵

El acuerdo, precisamente, está direccionado a que se abran las posibilidades de recibir crédito del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. El primero de ellos, prefinanciando exportaciones, es decir, que nuestros empresarios que producen, tengan la posibilidad de tener el dinero para prefinanciar sus exportaciones y, además, para la recuperación, la rehabilitación del sector empresario que, como decía en el primer bloque de sus preguntas, necesita crédito para poder potenciar su explotación. (“Conversando con el presidente”, 15/6/02)

Mire, la idea es terminar de definir un programa aceptable para ambas partes. Yo le he pedido al ministro de Economía, que está llegando en minutos más si no ha llegado ya, que tenga muy en cuenta que *nosotros no podemos firmar un acuerdo que ponga en riesgo esta incipiente recuperación de la economía argentina*. (...) La verdad, *yo quiero el acuerdo, Argentina tiene que seguir negociando pero siempre hasta que se entienda que nosotros no podemos poner en riesgo esta estabilidad que hemos logrado*. (“Conversando con el presidente”, 2/11/02, itálicas propias)

La negociación con el FMI era la puerta de entrada para resolver el problema del *default*. Sin embargo, en el programa de gobierno de Duhalde, los organismos aparecían como socios del crecimiento, que suplían una necesidad específica (recursos), pero no como los actores centrales del proceso. Esto implicaba no ceder automáticamente en cada pedido, aunque sí se fueran negociando acuerdos. El ejemplo más claro de esta lógica es el superávit fiscal, que era un viejo reclamo del organismo. Aunque el capital financiero extranjero perdería control directo de la política económica, y en particular,

¹⁹⁵ Durante todo el primer año de gobierno, Duhalde tuvo una columna en Radio Nacional, en la que comentaba sobre los principales temas de la agenda pública. Los primeros meses, se transmitía 3 veces por semana, y luego sólo los sábados. Esto provee una excelente fuente sobre las opiniones del presidente y su programa de gobierno.

de la política monetaria, mantendría llegada dentro del aparato estatal.¹⁹⁶ El FMI presionaba con la promesa de recursos frescos (que en rigor no eran más que ajustes contables), tratando de restablecer la agenda del capital extranjero en los términos que había logrado privilegiarse en la década previa (Azpiazu y Schorr, 2003).

Uno de los principales puntos de fricción fue la ley N° 25,563 de Quiebras. A pedido del multimedio Clarín y Alberto Pierri (Canal 26), el gobierno modificó esta ley –aprobada el 30 de enero de 2002- quitando el mecanismo de *cram down*, que permitía a los acreedores quedarse con la empresa como parte de pago, y suspendía las ejecuciones por 180 días. Si bien esto generó conflictos con el FMI y los acreedores externos (interesados en cobrar de inmediato), esta ley le aseguró al gobierno un tratamiento favorable en los grandes medios: Clarín debía entonces US\$930 millones. Cada punto de la ley tenía nombre y apellido, como reconoció un diputado (Levy Yeyati y Valenzuela, 2007). La vía para resolver este conflicto fue una nueva modificación de la ley reincorporando el *cram down*, junto a otra nueva ley de “Preservación de bienes y patrimonios culturales” (N° 25,750, aprobada en junio de 2003) que protegía a los medios de comunicación de ser absorbidos por sus acreedores.¹⁹⁷

Otros dos requisitos fuertes eran la derogación de la ley N° 20,840 de Subversión Económica –por la cual se estaban llevando a juicio a banqueros- y un acuerdo fiscal con las provincias. La derogación de la ley se cumplió en mayo, mientras que el acuerdo con los gobernadores se firmó el mes anterior, elaborando un documento conocido como “Los 14 puntos”. Estos puntos resumían los acuerdos de gobernabilidad a nivel subnacional, y quitaban presión por parte de los organismos, dado que contenían todos los requisitos demandados por éstos al país: superávit fiscal y coparticipación federal,

¹⁹⁶ En enero de 2002, por la renuncia de Maccarone, asume la presidencia del BCRA Mario Blejer, ex funcionario del FMI, que había sido nombrado vicepresidente de esa institución por De la Rúa. Es decir, aunque la autonomía del BCRA había sido recortada, mantenía su dirección bajo un cuadro técnico afín al capital financiero extranjero y el FMI. De hecho, Blejer renunciaría a mediados de año por no poder defender el programa de estos actores: demandaba un proceso más profundo de quiebras y extranjerización del sector financiero, la firma del acuerdo con el Fondo e incluso retomaba el proyecto de dolarizar la economía (La Nación, 11/8/02). Su sucesor, Aldo Pignanelli, también hombre de la banca y ex funcionario del BID, aunque más cercano al presidente, terminó por renunciar en diciembre por las diferencias sistemáticas con el MEcon, en particular, la falta de acuerdo con el FMI (La Nación, 6/12/02). Sería reemplazado por otro hombre de la banca extranjera, Alfonso Prat Gay (JP Morgan), quien se mantendría en el cargo hasta septiembre de 2004.

¹⁹⁷ La gran duda del momento era por qué sólo este sector debía beneficiarse de un seguro semejante.

ley de quiebras y de subversión económica, reconstitución del sistema financiero, impulso a la producción exportable y contención social.¹⁹⁸

Como se puede apreciar, Duhalde hizo los esfuerzos requeridos para lograr un acuerdo con el organismo, tarea a la que el ministro de Economía Roberto Lavagna se abocó con énfasis. El FMI, junto a otros organismos de crédito, sostuvo una presión constante por garantizar las prerrogativas del capital extranjero en el país. Sin embargo, varios de estos requisitos entraban en conflicto con el programa del GP y con la situación social imperante. La renegociación de las tarifas de los servicios públicos era uno de estos puntos de conflicto, como veremos. El primer acuerdo con el FMI llegaría recién en enero de 2003 “para garantizar la transición” presidencial. Los reclamos del FMI no habían variado en ese largo año.¹⁹⁹

Posiblemente el eje central del programa del GP era la modificación del régimen y nivel cambiario, de modo de alterar la distribución de poder al interior del BEP, expresada en la relación con el sector externo (ver sección anterior). Esta demanda no atendida por Rodríguez Saá fue rápidamente resuelta por Duhalde mediante la devaluación. El reordenamiento del mercado cambiario fue instrumentado a través de la ley de Emergencia Económica (N° 25,561), que devolvía al BCRA la potestad de emitir

¹⁹⁸ Los 14 puntos eran: 1- Respetar los acuerdos internacionales de la Nación y reafirmar la vocación de integrar a la Argentina al resto del mundo. 2- Firmar en un plazo no mayor de 15 días los acuerdos bilaterales con las provincias dando cumplimiento al pacto fiscal suscripto oportunamente. 3- Enviar al Congreso de la Nación en un plazo no mayor de 90 días, el proyecto de ley consensuado de nuevo sistema de coparticipación federal de impuestos. 4- Propiciar las políticas fiscales y monetarias que mantengan la disciplina y los equilibrios necesarios que eviten la suba incontrolada de precios y la inestabilidad cambiaria. 5- Garantizar a los ahorristas a través de instrumentos legislativos adecuados, la previsibilidad necesaria sobre el destino de sus fondos, asegurando su liquidez. 6- Garantizar las acciones que restablezcan en forma inmediata un sistema financiero sólido y confiable. 7- Instrumentar el nuevo acuerdo de responsabilidad fiscal para la administración nacional, provincial y municipal que asegure su cumplimiento mediante un sistema explícito de premios y castigos. 8- Propiciar una reforma impositiva integral, moderna y simplificada que aliente y estimule la inversión de capital e impida la evasión, la elusión y el contrabando. 9- Propiciar la inmediata sanción de la ley de quiebras. 10- Propiciar la inmediata derogación de la ley de subversión económica. 11- Propiciar la repatriación de capitales argentinos destinados principalmente a proyectos productivos con demanda de mano de obra intensiva. 12- Alentar las inversiones nacionales y extranjeras dedicadas a la exportación de productos manufacturados o a la sustitución eficiente de importaciones. 13- Asegurar el cumplimiento efectivo de la reforma política acordada, asegurando la reducción de gastos políticos y burocráticos innecesarios y la modernización de las formas de elección electoral. 14- Asegurar los mecanismos de asignación de planes de empleo, convirtiéndolos en empleos efectivos a través del sector productivo. La mitad de los 11 gobernadores peronistas firmantes eran los que habían negado el apoyo a De la Rúa a fines de 2001.

¹⁹⁹ “El programa de transición está focalizado en el mantenimiento de la disciplina fiscal y monetaria, que evite un cambio de rumbo en las políticas y reconstruya la seguridad jurídica”, señaló en un comunicado el director del organismo, Horst Köhler (La Nación, 25/1/03).

e intervenir para adecuarse a la política del poder ejecutivo. Tras un primer momento donde se buscó establecer una nueva paridad fija y desdoblarse el tipo de cambio (Decreto 71/02), desde el 11 de febrero el mercado se unificó y liberó. Desde el 21 de diciembre de 2001 hasta el 11 de enero rigió el feriado bancario, impidiendo la libre operatoria financiera, por lo que la intervención sistemática sobre el mercado cambiario fue clave para contener una devaluación aún mayor: el objetivo estaba cumplido al haber ganado competitividad externa. La aplicación de retenciones no modificaba el enorme aumento de precios de las exportaciones, aunque dotaba al Estado de recursos.

En la misma ley (aprobada el 6 de enero de 2002) se establecía la pesificación (un peso a un dólar) de las tarifas de servicios públicos, y se anulaba su indexación por la inflación estadounidense, estableciendo la renegociación de los contratos de acuerdo con criterios de competitividad, calidad del servicio, rentabilidad e interés de los usuarios (artículos 8, 9 y 10). Esto daba potestad al gobierno para establecer el nivel de las tarifas, de modo de poder apuntalar el objetivo de otorgar competitividad a las actividades exportadoras, y contener las demandas de sectores medios y pequeños empresarios contra las subas (Bona, 2012; Burachik et al., 2010). Las empresas privatizadas presionaron duramente –incumpliendo metas de inversión, de empleo, de calidad de servicio, denunciando ante tribunales internacionales (el CIADI en particular)- al gobierno, junto al explícito lobby del FMI en su favor. El gobierno, en lugar de promover una revisión profunda de los contratos, buscaba contener las subas de tarifas, por lo que cedió ante la presión. En enero de 2003, mediante los Decretos N° 120 y 146, el presidente decidió una suba del 10% en las tarifas de electricidad y gas en tanto el proceso de renegociación llegaba a algún arreglo (Azpiazu y Schorr, 2003).

Los artículos 6 y 7 de la ley de Emergencia establecían también la pesificación de las deudas con el sistema financiero y la necesidad de articular compensaciones a las entidades afectadas. En el proyecto inicial, sólo se pesificaban las deudas de hasta US\$100,000, pero (a raíz de las presiones del GP) esto se modificó a fines de ese mes, quitando todo tope.²⁰⁰ Según un informe presentado por el presidente del BCRA, Mario

²⁰⁰ Esta quita de tope benefició fuertemente al capital concentrado (Basualdo et al., 2002). Duhalde se justificó poniendo a todo el capital como víctima de la especulación financiera: “Y a los grandes empresarios pareciera ser que no habría que ayudarlos, cuando realmente son los que le dan trabajo a miles y miles de personas, que también fueron objeto de usura. (...)Es una chiquilina, es algo absurdo,

Blejer, de no mediar una política de este tipo, la tasa de incobrabilidad hubiera rondado el 85%. Por esta razón, la banca estaba dispuesta a “tolerar” la pesificación.²⁰¹

El otro lado del balance financiero también traía problemas. Duhalde había tenido el desatino de prometer en su discurso de asunción que “quien depositó dólares, recibirá dólares”, lo que probaría rápidamente ser una falsa promesa. Esto motivó mayores protestas de los ahorristas, que lograron modificar la actuación de la Corte Suprema de Justicia. Aunque en diciembre de 2001 la Corte había fallado a favor del Banco Ciudad en el caso Kiper, ligado al corralito, en febrero de 2002, en el caso Smith, la balanza se inclinó en sentido opuesto, habilitando al retiro del dinero atrapado. Además de iniciar una batalla entre el poder judicial y el ejecutivo, este fallo abrió la puerta a una sucesión de amparos, que lentamente producían un goteo de salida de recursos que iba a presionar al dólar. El gobierno actuó con la aplicación de una nueva norma, conocida como el “corralón” que reprogramaba la devolución de los depósitos para 2003, pesificándolos a \$1.4 por dólar. La *pesificación asimétrica* (\$1 por dólar para deudas y \$1.4 por dólar para depósitos), se aprobó en febrero a través del Decreto 214/02, y actualizaría ambos montos por un índice de ajuste ligado a la inflación (el CER, o Coeficiente de Estabilización de Referencia).²⁰² Los bancos fueron compensados por esta diferencia con los BODEN, lo que constituyó una enorme transferencia de fondos al sistema financiero (Cobe, 2009).

Los principales beneficiarios fueron los capitales dedicados a la producción exportable con deudas dentro del sistema financiero local: 139 empresas obtuvieron una ganancia estimada en US\$13,132 millones gracias a la devaluación y la pesificación, equivalentes al 9% del PBI, superando los 12,000 millones de pesos/dólares de 2001 demandados por el FRENAPPO para estimular un shock distributivo (Basualdo, Lozano y Schorr, 2002; C. Lozano, 2002). Este impulso decidido a la producción, y en particular a la industria, se institucionalizó con la creación del Ministerio de la Producción –a cargo del presidente de la UIA, Ignacio de Mendiguren-, que tomaba algunas funciones y

pensar que no tenemos que defender a los empresarios. Estaba leyendo por ejemplo, críticas a Fortabat. A mí me gustaría que hubiera doscientas Fortabat en la Argentina” (Conversando con el presidente, 12/2/02).

²⁰¹ A pesar de las quejas públicas, el capital financiero había aceptado esta medida, según lo explica en una nota periodística el ex ministro de economía Remes Lenicov (La Nación, 17/8/02).

²⁰² A partir de mayo de 2002, la actualización de los préstamos se realizó mediante el Coeficiente de Variación Salarial. La diferencia entre este índice y el CER generó otra compensación a los bancos por parte del gobierno.

secretarías (Agricultura, Transporte, Turismo y Obras públicas) de Economía, que quedaría enfocado en temas macroeconómicos y externos, sin mayor énfasis en temas sectoriales. Esta readecuación del aparato del Estado –justificada por Remes Lenicov como una forma de evadir el *lobby* empresarial (Rodríguez Díez, 2003)- expresó un cambio del orden de prelación entre el mandato de la política y las decisiones del mercado presentadas en la década anterior como la máxima racionalidad técnica (Bonnet y Piva, 2013; Bonnet, 2011).

La batalla por detener la salida de recursos del sistema financiero fue definitivamente ganada aproximadamente en el tercer trimestre de 2002, cuando la acumulación se rehabilitó. En diciembre de 2002, el ministro de Economía Lavagna eliminó las restricciones al retiro de fondos, y en abril de 2003 se “abre” el corralón (Decreto 739/03), admitiendo los retiros anticipados de modo escalonado (primero los depósitos de menor monto). La política de muy elevados rendimientos en títulos públicos y las restricciones a los retiros ganaron la pulseada una vez que los capitalistas decidieron volcar sus recursos a la acumulación.

Ahora bien, para que el conjunto de políticas fuera efectivo, requería de mostrar viabilidad y capacidad de sostenerse en el tiempo, algo que quedó claro recién a mediados de año. El gobierno necesitaba, además de dar coherencia a las anteriores medidas, ser capaz de contener las demandas sociales. En este sentido, el gobierno actuó conteniendo las demandas salariales de los trabajadores ocupados. El artículo 16 de la ley de Emergencia Económica suspendió los despidos sin causa justificada por 180 días, estableciendo la doble indemnización en caso contrario. Sin embargo, en el marco de la significativa recuperación de las ganancias y el conjunto de políticas orientadas a la reactivación de la producción exportable, era esperable que la rehabilitación de la acumulación requiriera un aumento de la contratación de fuerza laboral, no su expulsión.

Dado que el objetivo de la devaluación y la inflación cambiaria era licuar el salario y aumentar las ganancias en los sectores productores de transables, la recuperación salarial no sólo no fue una prioridad para el gobierno sino que era un contrasentido. El eje estaba puesto en que la reactivación guiada por las producciones exportables produciría una recuperación del empleo y sólo después podría discutirse una

mejora salarial.²⁰³ Las mejoras en las remuneraciones aparecieron de modo tardío e insuficiente en dos reuniones con sectores de la producción y centrales sindicales, convocadas a través de la Mesa del Diálogo por el Empleo Decente, organizada por el MTESS. En la primera reunión, en junio de 2002, se decidió un aumento no remunerativo de \$100 a empleados privados, a ser percibido a partir del 1° de julio y hasta el 31 de diciembre (Decreto 1,273/02).²⁰⁴ En diciembre hay una nueva convocatoria de la Mesa, y se llega a un nuevo acuerdo que consiste en asignación no remunerativa de \$130 en enero de 2003 y \$150 desde marzo.²⁰⁵ Resulta interesante que el Decreto 2,641/02 que instrumenta el aumento, pone entre sus considerandos que el anterior aumento mejoró la distribución, pero además “como consecuencia de dicha medida se ha registrado un aumento en la producción y en el consumo sin que ello conlleve una incidencia negativa del índice de inflación, ni en el aumento del costo laboral real”. Es decir, se reconocía la posibilidad de dar aumentos de salarios y que esto tuviera una repercusión más significativa en términos de demanda que en términos de costos. El impacto sobre el consumo –que beneficiaba al empresariado mercadointernista- era relevante para el gobierno.²⁰⁶

La forma de implementar estas políticas de ingresos es notable, de marcada diferencia respecto del período previo: se trata de la convocatoria de sectores corporativos a la toma de decisiones de carácter vinculante para la política pública. Para

²⁰³ “Si bien hay mucha gente que dice que no ve un plan, yo le digo que lo único claro es que tenemos un plan y un programa que es muy sencillo; el programa es el desarrollo productivo, el programa es reindustrializar el país, el programa es darle trabajo a la gente” (Conversando con el presidente, 9/3/02, itálicas propias). El ex ministro Remes Lenicov aseguró en la entrevista con el autor que este objetivo fue pactado con el sindicalismo de la CGT y el MTA, en aras de disminuir la conflictividad sindical.

²⁰⁴ Según se afirma en el referido decreto, la CGT y las “confederaciones representativas de los distintos sectores empresarios que abarcan la totalidad del sector productivo” reconocen que “la crisis económica que atraviesa nuestro país ha deteriorado sensiblemente el poder adquisitivo de los salarios perjudicando a los trabajadores”. Participaron de la reunión la UIA, CACom, CACons, ABA, ABAPPRA y la CGT oficial (se excluyó explícitamente al agro).

²⁰⁵ Participaron de esa reunión la CGT, ABA, CAC, CAC, ABAPPRA, UIA, UDES y CGE. Se volvía a excluir al agro, aunque sí participaba el sector financiero (limitando el carácter “productivo” del programa de gobierno). La CTA participó de la reunión pero no avaló el resultado, pues reclamaba un aumento que alcanzara a cubrir la canasta familiar.

²⁰⁶ “Al revés de lo que ha pasado históricamente y de lo que pasa en todos los países, hoy el trabajador -reitero- del sector privado gana menos que el trabajador del sector público y entonces se busca acortar esa brecha. Por otra parte, *tendrá un efecto reactivador importante del consumo y del mercado interno*. Son casi 3 millones y medio de trabajadores privados que recibirán ese aumento y *son 350 millones por mes que irán directamente al consumo* y que se sumarán a partir de agosto de los planes sociales” (Conversando con el presidente, 6/7/02, itálicas propias).

un gobierno que no había sido elegido por el voto popular, la estrategia de validación por un “segundo circuito representativo” (Offe, 1992) era una forma de construir legitimidad (Zuleta Puceiro, Calvo, Gerzon y Rial, 2004).²⁰⁷ El 14 de enero de 2002, luego de una reunión en la iglesia de Santa Catalina, Duhalde habló por cadena nacional y convocó al diálogo, buscando consensuar políticas de Estado, acompañado por el titular de la Conferencia Episcopal Estanislao Karlic y el representante de PNUD en Argentina Carmelo Angulo Barturen. Dos días después, sumando a otros organismos multilaterales y múltiples organizaciones confesionales, se inician las actividades de la Mesa de Diálogo Social, que emitirá a fin de mes un documento con las políticas recomendadas, las *Bases del diálogo*, complementado al mes siguiente por otro documento, *Construir la transición*, surgido de las mesas sectoriales (Ugarte, 2005).

Si bien realizaremos algunos comentarios más sobre esta iniciativa en la siguiente sección, resulta importante señalar como guía de política pública la lógica de *diálogo social* impulsada por el PNUD y la OIT (H. García, 2004; Ugarte, 2005), que afecta particularmente las relaciones con sectores corporativos representativos del capital y el trabajo. La lógica de estructuración de la representación y toma de decisiones, continuada por Kirchner, se inició en este período. La importancia de este mecanismo de legitimación y construcción de políticas no abarcaba sólo el ámbito laboral. El discurso de creación de empleo a través de la producción (“un fuerte *shock* de trabajo y producción”), subordinando la importancia del capital financiero, era fuertemente apoyado por la Iglesia (Goldman y Grandinetti, 2013). El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Raúl Primatesta, hizo llegar a Duhalde –a través los dirigentes sindicales Hugo Ghilini (SADOP) y Luis Cejas (Viajantes), el economista Daniel Carbonetto y el industrial Osvaldo Rial- la idea de que convenía “no seguir

²⁰⁷ “Dialogaremos en este Foro de Concertación dentro del marco de la autoridad moral de la Iglesia, la que invariablemente señaló los desvíos de la clase política, y con apoyo también de las Naciones Unidas, con tanta experiencia internacional” señaló Duhalde (Diálogo Argentino, 2002a), buscando aprovechar para su proyecto político el supuesto liderazgo ético-moral de la primera y la capacidad técnica de la segunda (Zuleta Puceiro et al., 2004). Nótese que para esta construcción de legitimidad se apoya sobre cualidades no estrictamente políticas de instituciones ajenas al control democrático nacional.

endeudándose ni acceder a condiciones denigrantes del FMI que impliquen más ajustes, y contemplar determinadas medidas sociales” (Página/12, 31/03/02).²⁰⁸

Sin embargo, un área donde esta forma institucionalizada de diálogo tuvo particular relevancia fue en la política social. Por un lado, impulsó la creación del plan de Emergencia Alimentaria, para brindar asistencia a familias pobres. Se destinaban a este fin \$350 millones. Por otro lado, la transformación del plan Trabajar en su versión expandida, el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJJHD), anunciado por el gobierno como principal medida de contención social (Golbert, 2004; Goldman y Grandinetti, 2013; Zuleta Puceiro et al., 2004). En el primer anuncio, realizado el 22 de enero de 2002 (Decreto 165/02), había establecido una prestación de entre \$100 y \$200 para desocupados, por un lapso de sólo tres meses. Tras las recomendaciones del Diálogo Social, en marzo el plan se amplía, para cubrir la emergencia de dos millones de beneficiarios hasta fin de 2002 (Decreto 565/02). Se trata de una masificación de los planes a una escala inusitada, que, sin embargo, no lo volvía universal. Se pagaban \$150 por mes a desocupados/as con hijos/as a cargo, a cambio de una contraprestación laboral o de formación. Para abril de 2002, ya se registraba medio millón de beneficiarios, que llegarían a casi dos millones para fin de año. En la lógica del gobierno, este plan aportaba fondos para la demanda interna, incluyendo *a través del consumo*.²⁰⁹

El plan fue complementado a partir de octubre por el PEL (resolución MTESS 555/02), creado originalmente en 1999 como programa transitorio de empleo (resolución MTESS 23/99). Para octubre de 2002, el PEL incluyó a otros 280,777 beneficiarios. En enero de 2003, este programa fue reemplazado por el Programa de Empleo Comunitario (resolución 7/03 del MTESS), que abarcó a 157,961 beneficiarios. En ese mes se abrió la posibilidad de emplear en el sector privado a beneficiarios del PJJHD abonando la diferencia con el salario de convenio, a través de la inscripción en el Registro de Empleadores (Resolución 37/03). Continuando con la lógica del diálogo social

²⁰⁸ La figura del economista Daniel Carbonetto (Polo Social) parece haber tenido gran influencia en los planes económicos de Duhalde, poniendo incluso en cuestión las directrices trazadas por Remes Lenicov, a pesar de no ocupar ningún cargo oficial (Levy Yeyati y Valenzuela, 2007; Rodríguez Diez, 2003).

²⁰⁹ “Nos guste o no, la nuestra es una sociedad de consumo en la cual todos tienen derecho a consumir, pero el ingreso debe ser paulatino, es decir, que no se puede incorporar a todo el mundo de golpe y menos cuando estamos en un país quebrado” (Conversando con el presidente, 13/7/02). “El mercado interno y que se robustezca es esencial para el crecimiento de la economía. Nosotros vamos a poner, no solamente porque es justo sino además porque sirve para movilizar el mercado interno, una cantidad enorme de dinero en el bolsillo de los trabajadores y de los desocupados” (Conversando con el presidente, 5/10/02).

institucionalizado, se creó un Consejo Nacional de Administración, Ejecución y Control, del que participaban el sector empresarial, sindical, eclesiástico, y el propio gobierno. A este órgano central, se sumaban a fines de 2002, 22 Consejos Consultivos Provinciales, 1,873 Consejos Consultivos Municipales y algunos Consejos consultivos barriales (Golbert, 2004).

El presupuesto original previsto era de \$757 millones, provenientes del Tesoro Nacional. El sector agropecuario ofreció donar fondos para ampliar la ayuda social, a cambio de evitar las retenciones a las exportaciones. Finalmente, el gobierno optó por esta segunda fuente. El presupuesto total utilizado en 2002 para el PJJHD fue de \$2,360 millones, \$880 de los cuales vinieron de redistribución entre partidas presupuestarias, y el resto de las retenciones (Golbert, 2004).²¹⁰ Este costo representa un 1.6% del PBI, mucho menos que el 9% transferido a las grandes empresas a través de la devaluación y la pesificación. Para el año 2003 se previó un aumento de casi el 60%, financiado con aportes del Banco Mundial, es decir, con la participación de los organismos de crédito.

Ante un escenario de conflictividad social, hambre y pobreza, la recomendación surgida de este espacio fue la creación de un plan amplio que resolviera las necesidades más urgentes, tomando explícitamente de referencia la consulta popular realizada en diciembre de 2001 por el FRENAPPO (Golbert, 2004). Sin embargo, el parecido es sólo en un aspecto general, más no en un análisis más preciso: mientras que el PJJHD sólo buscó resolver el conflicto social, mediante la contención acotada –en el tiempo y en la población de cobertura- con bajos montos, la propuesta del FRENAPPO buscaba alterar la distribución del ingreso en base a la idea de derechos y ciudadanía (Fernández Soto, 2009; Levy, 2003; Pautassi et al., 2003). Las múltiples limitaciones del plan abarcan la insuficiencia de los montos en relación a lo reclamado (el valor actualizado reclamado por el FRENAPPO era de \$420) o para cubrir las necesidades básicas alimentarias (la línea de indigencia era de \$346), no cubrían al universo de personas afectadas por la pobreza (*circa* 21.5 millones de personas) ni por el desempleo (más de 3.25 millones en mayo), tenía limitaciones temporales de duración e inscripción, sin mecanismos transparentes de asignación y fiscalización, ni posibilidad de reclamo administrativo, así

²¹⁰ El proyecto de presupuesto de Rodríguez Saá incluía esta misma cifra para planes sociales de empleo, más otros \$1,200 millones para otras clases de planes sociales.

como la extraña argucia de sujetar los derechos sociales a una condición de contraprestación, todo esto bajo la lógica de inducir a los beneficiarios a “preferir” la inserción laboral (Arcidiácono, Fairstein y Kletzel, 2009; Giosa Zuazúa, 2006; C. Lozano, 2002; Pautassi et al., 2003; Pérez y Félix, 2010; Pérez, 2006). La finalidad de estos planes era triple: atenuar la pobreza y la indigencia, morigerar la conflictividad social, e introducir un factor de cooptación y conflicto con las organizaciones piqueteras y de las clases populares en general (Félix y Pérez, 2007; Rajland, 2008).

Vale la pena remarcar que las políticas social y de ingresos del gobierno de Duhalde se subordinaban al programa de impulso de la producción (principalmente exportable) y la pacificación del conflicto social para lograr un clima de negocios viable a la acumulación. No existía intención de modificar la distribución del ingreso en un sentido progresivo: los límites de estas políticas estaban en contener las demandas sociales, mantener bajo el costo de producción local a la vez que se impulse la demanda interna. Estos mecanismos se combinaron con la represión directa, especialmente al movimiento piquetero (Masseti, 2006). Con excepción parcial de la FTV, el gobierno no dialogó con estos sectores, excluyéndolos o subordinándolos en el conjunto de iniciativas institucionales para-estatales de diálogo social. La política gubernamental con los MTD se puede resumir, como propone Martos (2014), en “palos y planes”.

En este período se crea el Concejo Nacional de Seguridad Interior, que reúne al gobierno con los altos mandos de las fuerzas armadas, bajo la posibilidad de que las mismas actúen en el plano interno. De esta coordinación se puede comprender el punto más álgido de la represión, que fue la masacre de Puente Pueyrredón (Avellaneda), en una manifestación realizada el 26 de julio 2002. Ante los medios de comunicación, se asesinó a sangre fría a dos militantes de la CTD Aníbal Verón, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán (Frente Popular Darío Santillán, 2012; R. Rodríguez, 2012). Según el informe de CORREPI (2013), durante los gobiernos de Rodríguez Saá y Duhalde, hubo 244 muertes causadas por la represión de fuerzas estatales.

De conjunto, entonces, se puede señalar que las políticas públicas del gobierno de Rodríguez Saá y especialmente el de Duhalde apuntaron a “destrabar” la acumulación de las ramas productoras de bienes transables, subordinando a este objetivo los acuerdos con el capital financiero. El agro, aunque relativamente relegado por la aplicación de

retenciones, se vio beneficiado por el ajuste cambiario y la pesificación. De este modo, se modificaba la situación externa, impulsando la exportación mientras se buscaban acuerdos con los capitales extranjeros. Las políticas públicas, cuyo efecto sobre el patrón de reproducción económica vimos en la sección 1, reafirmaron el desplazamiento del poder económico de las fracciones financieras a las productivo-exportadoras, pero además dieron cuenta del desplazamiento político del agro ante los sectores industriales. Además de este doble desplazamiento dentro del BEP, las políticas públicas mostraron las respuestas estatales a las demandas planteadas por las organizaciones populares ante la paupérrima situación social: se actuó masificando los planes sociales y conteniendo los salarios, de modo de lograr la inclusión por la vía del empleo, resultado esperable de la reanimación de la acumulación. Esta vía se complementó con la creación de mecanismos institucionales de diálogo social y la represión de la protesta. Este plexo de políticas se estructuró a través de un discurso que valorizó la producción nacional y la creación de empleo como ejes del nuevo orden político, desplazando la importancia de la estabilidad y la previsibilidad del orden previo.

3. Disputas políticas y patrón de dominación

3.1. Representantes en el Estado

La renuncia del presidente De la Rúa en el punto más álgido del ciclo de movilización social dejó al país en una incómoda situación institucional. Los partidos que habían compuesto la Alianza se encontraban francamente deslegitimados. El PJ, que tenía la mayoría en el Congreso, se debatía entre nombrar a alguien para cumplir el mandato hasta 2003 o hacerlo sólo para normalizar la situación y llamar a elecciones lo más pronto posible. La pregunta giraba en torno a la capacidad de cualquier candidatura de obtener legitimidad a través del voto popular, en el marco descrito (ver capítulo 3).

En una reunión en Merlo (San Luis), realizada el 20 de diciembre, gobernadores y dirigentes del PJ (con las ausencias relevantes de Ruckauf, Eduardo Fellner –Jujuy- y Duhalde) deciden inclinarse por la segunda opción. Según la ley de Acefalía, correspondía al presidente del Senado asumir el cargo, que, debido a la renuncia de Carlos Álvarez, había quedado de modo provisorio en manos del senador por Misiones, Ramón Puerta (PJ). Puerta, viniendo de una provincia “chica”, y sin gravitación

suficiente dentro del partido, sabía que no podría llevar adelante la tarea, por lo que accedió a ocupar el cargo sólo hasta que se nombrara al sucesor. A pesar de presentar incluso un gabinete, su única decisión en los dos días que ocupó la presidencia fue restablecer el estado de sitio en Buenos Aires, Entre Ríos y San Juan –tras la derogación que realizara como último acto de gobierno De la Rúa. Tal como establece la ley, llamó a la Asamblea Legislativa para nombrar su sucesor. Si bien había varios nombres girando como opciones –Marín de La Pampa, Kirchner de Santa Cruz, De la Sota-, la mayoría tenía aspiraciones presidenciales y prefería no jugarse sus posibilidades.

Fue Adolfo Rodríguez Saá quien se propuso a sí mismo para cumplir la tarea. Se trataba del gobernador de la provincia de San Luis desde el retorno a la democracia, es decir, desde hacía 18 años (inédito en Argentina). Por 169 votos a favor (incluyendo votos de peronistas y cavallistas) y 138 en contra, fue nombrado presidente provisional por tres meses, sujeto a que se celebraran elecciones el 3 de marzo de 2002. El flamante presidente buscó diferenciarse rápidamente de su antecesor, mostrando una imagen diametralmente opuesta: si De la Rúa parecía no poder resolver ni decidir, Rodríguez Saá sería un acelerado gestor, activo y seguro.²¹¹ Esta hiperactividad signaría, de hecho, su suerte, pues generó fuertes dudas entre las filas del peronismo sobre sus intenciones de entregar el mandato en marzo. Gobernar sin el apoyo del propio PJ, en el contexto social de diciembre de 2001, y con el Congreso dividido, era una difícil misión.

El gabinete reflejaba esta estructura más ágil que pretendía el puntano, con menos ministerios. Se formó con cuadros del peronismo, incluyendo varios funcionarios del menemismo, como Daniel Scioli (convocado por Menem por su éxito como deportista), y el ex intendente de Capital Federal, Carlos Grosso.²¹² Este gesto, además de exacerbar las rispideces al interior del peronismo, le valió el fuerte rechazo popular ante figuras representativas de la corrupción de los años anteriores. Del gabinete también participaron futuros funcionarios del kirchnerismo (Jorge Taiana o Scioli). Su impronta buscaba recuperar el ideario peronista pre-Menem, presentándose como un caudillo

²¹¹ “Dejamos la velocidad de De la Rúa para ir a 3,000 kilómetros por hora”, dijo el secretario general de la presidencia, Luis Lusquiños.

²¹² Hugo Franco, Víctor Reviglio y José María Vernet completaban la presencia menemista en el gabinete. Grosso se excusó diciendo “Supongo que no me llaman por mi prontuario, sino por mi inteligencia”.

preocupado por los sectores populares. El día de su asunción en el Congreso, luego de declarar la cesación de pagos, el aplauso se cerró entonando la marcha peronista.

En esta línea de construcción de gobernabilidad, Rodríguez Saá optó por buscar el diálogo con las dos CGT, dada la tradición peronista de sus dirigentes.²¹³ También se reunió con los representantes del GP. Esta búsqueda de legitimidad en el circuito corporativo sería retomada por Duhalde, pero a diferencia de éste, Rodríguez Saá se vinculó también con organizaciones claves de la resistencia al orden neoliberal: se reunió en la Casa Rosada con algunos piqueteros (D'Elía, de la FTV) y con Madres de Plaza de Mayo (Hebe de Bonafini no entraba allí desde 1984). Este gesto político sería retomado por Kirchner, que al momento de asumir como presidente *no tenía vínculo alguno* con estas organizaciones. En aras de construir gobernabilidad, se recurría a agentes cuyas demandas fueron relegadas por los anteriores gobiernos de la democracia, como fuente de legitimidad para un proyecto de refundación de la Argentina, la renovación de la nación en un nuevo ideal que integrara a todo el pueblo.

Aparecieron así con fuerza los rasgos centrales del discurso populista: se generaba una frontera que oponía a quienes controlaron el poder estatal hasta entonces y los agentes sociales relegados, que construían el pueblo a redimir. Una de las diferencias es que esta renovación se planteaba internamente a la elite política, sin una relación clara con el BEP: una de las posibles respuestas a la demanda de “que se vayan todos” era proponerse como una nueva generación. Además de las políticas anunciadas (sección 2), y las reuniones recién señaladas, esto se expresaba en el discurso:

La Argentina se vio enfrentada con su mejor rostro, pero también con su peor cara. *El mejor rostro en el legítimo ejercicio del derecho a expresarse para poner fin a todo un período de opresión y postración que ya no soportaba más y a decirle no a toda una generación que se empeñó en pensar y actuar a espaldas de los intereses y necesidades del pueblo. La peor cara en las manifestaciones del vandalismo, el saqueo irracional y las muertes absolutamente innecesarias. Todo fue el producto de la conducción de una nueva generación que aspiramos que termine, para que desde hoy entre todos empecemos a crear y transitar una nueva República, a remover los obstáculos de la injusticia social y del atraso.*

En esas jornadas vimos algo que no pudimos nunca imaginar los hombres y mujeres que integramos esta democracia, que con tanto dolor y sangre costó

²¹³ El 26 de diciembre se reunió en la sede Azopardo de la CGT, con Rodolfo Daer y Hugo Moyano, anunciando la restitución del injusto recorte del 13% y la derogación de la reforma laboral. En un clima de euforia, se volvió a entonar la marcha peronista (La Nación, 27/12/01).

a los argentinos antes de 1983, nada más y nada menos que el símbolo de la lucha por su recuperación. Me refiero a las Madres de la Plaza de Mayo reprimidas inexplicablemente por las fuerzas de la democracia. No puedo dejar de rendir un homenaje a los muertos en estas jornadas, sangre innecesariamente derramada. *Estas pérdidas irreparables son la bisagra que hará posible una nueva Argentina, con un nuevo estilo de gobernar, un gobierno para 37 millones de argentinos* que creyeron que en cada uno de nosotros encontraría una persona que trabajaría para ellos, para su presente y el futuro de sus hijos.

Somos perfectamente conscientes de que hoy alumbra una nueva república, hoy comienza la transformación de nuestro querido país; a partir de hoy ya nada será igual, gobierna desde hoy otra generación. (Discurso asunción, 23/12/01)

Al margen de las limitaciones propias de su programa para sortear la crisis, el clima social condicionaba fuertemente las posibilidades de implementación. Con la Alianza disgregada, el apoyo del PJ era central. Las dudas expresadas por la conformación del gabinete se extremaron cuando Menem dijo públicamente que Rodríguez Saá debía quedarse hasta 2003. Para quienes estaban interesados en postularse a la presidencia (De la Sota, Kirchner, Ruckauf), esto era intolerable. El presidente intentó buscar apoyo en las provincias “chicas” (Raus, 2014), ofreciendo incluso cargos a sus gobernadores: le ofreció a Kirchner la jefatura de gabinete, a Juan Carlos Romero (Salta) la cancillería, a Eduardo Fellner (Jujuy) el Ministerio del Interior. Buscando apoyo, convocó a una reunión en la localidad de Chapadmalal el domingo 30 de diciembre. Las ausencias de los gobernadores Marín, De la Sota, Kirchner, Manfredotti y Reutemann hicieron notar que el PJ ya había soltado la mano a Rodríguez Saá (Levy Yeyati y Valenzuela, 2007; Rodríguez Diez, 2003).²¹⁴ Ante un corte de luz en medio de la reunión, mientras se escuchaban cacerolazos fuera, su secretario de Seguridad, Juan José Álvarez (del peronismo bonaerense) le anunció que no podía garantizar su seguridad. Rodríguez Saá se escapó en helicóptero a su provincia, y desde allí emitió por cadena nacional su renuncia. Se repetía la última imagen de De la Rúa.

En el mensaje de renuncia, Rodríguez Saá señalaba que su optimismo se interrumpió justo cuando estaba por anunciar un plan que iba a liberar el “corralito” financiero y el nuevo presupuesto, que equilibraba las cuentas fiscales, sin por ello dejar

²¹⁴ En su discurso de renuncia (31/12/01), Rodríguez Saá señaló que “Salvo los gobernadores peronistas de Formosa, Salta, San Luis, Buenos Aires, Misiones y La Rioja, los demás me han quitado su apoyo. Especialmente el gobernador de Córdoba que priorizó la interna partidaria a los intereses de la patria.”

de cubrir el 100% de salarios y jubilaciones, contemplando pagos de intereses por \$3,500 millones y planes sociales de empleo por \$3,600 millones.²¹⁵ Señalaba además la necesidad de revisar el rol de la Corte Suprema. Una breve enumeración de logros incluía haber “permitido” la protesta social pacífica. Debe registrarse con atención estos anuncios, que adelantan con bastante precisión las políticas públicas de sus sucesores.

A diferencia de su discurso de asunción, reconocía la vitalidad de aquellos agentes que amenazaban la nueva Argentina (la frontera interna a la comunidad política) a la que se había propuesto dar comienzo. Según entendía, esta tarea se había logrado:

Los lobos o los lobbies que andan sueltos no han entendido la esencia de los nuevos tiempos y pretenden mantener los privilegios de la vieja Argentina. No voy a ser el presidente de la continuidad de esa vieja Argentina. No voy a ser el presidente de la represión al pueblo, para sostener las posiciones de factores de poder, a los que muchos me incitan. No acepto esa infamia. He pretendido ser quien inicie el cambio en la Argentina. Estoy seguro de haberlo logrado. (Discurso de renuncia, 31/12/01)

El Senador Puerta eludió repetir la tarea de presidente provisional por segunda vez en una semana, y le pasó el turno al presidente de la Cámara de Diputados, el bonaerense Eduardo Camaño (PJ). En este escenario, se hacía claro entre los partidos políticos que la tarea debía caer en manos de un referente capaz de encolumnar al PJ tras de sí. Ante la convocatoria de Camaño, la Asamblea Legislativa decidió nombrar el 1 de enero de 2002 a Eduardo Duhalde como presidente hasta el 10 de diciembre del 2003, completando 5 presidentes en 11 días. Mostrando su capacidad de organizar el juego político, Duhalde obtuvo 262 votos a favor (del PJ, UCR, Frepaso, UCeDé, Acción por la República y el Polo Social, entre otros), y sólo 21 en contra y 18 abstenciones. El apoyo del radicalismo fue clave en este armado político, con el especial apoyo del ex presidente Alfonsín. Aunque el pueblo había rechazado el sistema de representación tal como estaba estructurado, no podría elegir representantes sino hasta un año y medio más tarde. Los partidos políticos, conscientes del riesgo al que se hallaban sometidos por la impugnación social generalizada, sabían también que no había espacio a fisuras en la faena de reconstitución la capacidad de intervención del Estado.

²¹⁵ El presupuesto final destinado por Duhalde a planes sociales fue equivalente a esta estimación, quitándole novedad a su propuesta. Los pagos de intereses, sin embargo, fueron ampliamente mayores.

Duhalde reconstruyó un gabinete con 11 ministerios, mayormente compuesto por funcionarios del PJ bonaerense (7 ministros, incluyendo a Ruckauf en Relaciones Exteriores, que dejó la gobernación a cargo de su vice, Felipe Solá), e incluyendo dos radicales (Jorge Vanosi en Justicia y Horacio Jaunarena en Defensa). El resto del PJ, en particular los gobernadores, no aportaban demasiado al gabinete, reservándose ante la duda de la capacidad de Duhalde de sostenerse y ante la posibilidad de inminentes elecciones. Del interior, solamente participó como Jefe de Gabinete un joven chaqueño, Jorge Capitanich, que ya había oficiado de Secretario de Hacienda en las 48 horas de presidencia de Puerta. Del gabinete del Rodríguez Saá permanecían Daniel Scioli y Juan José Álvarez, y aunque de modo diferente que aquel, el gobierno de Duhalde también mostró una pérdida de relevancia del Ministerio de Economía (a cargo de Jorge Remes Lenicov), separándolo con la creación del de Producción (Bonnet y Piva, 2013). El Ministerio de Desarrollo Social desapareció, quedando su actividad al mando de Hilda “Chiche” González de Duhalde, como Presidenta Honoraria del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.²¹⁶ Dos importantes funcionarios que llegaron al gabinete con Duhalde y se quedaron con Kirchner fueron Ginés González García en Salud y Aníbal Fernández como Secretario General de la Presidencia.

En abril de 2002 se produjo el recambio ministerial más relevante, el reemplazo de Remes Lenicov, por Roberto Lavagna, de la consultora Ecolatina, con buen diálogo con los radicales.²¹⁷ El radicalismo ligado a Alfonsín cumplía un rol relevante en garantizar la gobernabilidad apoyando a Duhalde. El gesto de nombrar a Lavagna reafirmaba estos vínculos entre partidos, necesarios en un clima de crisis de legitimidad.

²¹⁶ Según apareció en los discursos del presidente, esta disposición de actividades (en una organización paraestatal en manos de la esposa del presidente) procuraba emular aquella dupla de Perón y Evita. “Le he pedido a mi esposa que coordinara un Consejo Nacional de Programa Sociales que junta a todas las áreas: Desarrollo Social, Salud, Educación y Trabajo -son cuatro ministerios distintos- para que los programas estén bien unificados. Le he pedido a ella que haga un enorme esfuerzo, quiero reiterar que ella no ocupa ningún cargo rentado, simplemente, como lo ha hecho siempre, me ayuda porque es una de las personas más capacitadas que yo he conocido en materia social” (Conversando con el presidente, 29/1/02). Por la política social en tiempos de Evita, ver Stawski y Cortés (2008).

²¹⁷ Al momento de buscar reemplazo para Remes Lenicov, el primer nombre que circuló –con el entusiasmo del capital financiero– fue el liberal Alieto Guadagni, que fue vetado por los gobernadores (Rodríguez Diez, 2003). Eran candidatos también Javier González Fraga, Guillermo Calvo, Martín Redrado, Carlos Melconian y Aldo Ferrer. Salvo este último (conocido defensor del desarrollismo), el resto eran todos funcionarios afines a los preceptos liberales. Lavagna, finalmente, era un moderado frente a sus “competidores”, que lograba convocar respaldo tanto de radicales como de peronistas: fue secretario de industria de Alfonsín, y parte del equipo de asesores de Menem, dirigido por Eduardo Bauzá.

La relación del gobierno con el Congreso fue tensa, pero no tanto por diferencias políticas sustantivas, sino más bien por evitar involucrarse en el costo de la toma de decisiones. La presión de los cacerolazos y las protestas frente al Congreso era la mayor fuente de distancia. La oposición más visible era la de la bancada menemista, que aún amenazaba con improbables proyectos de dolarización de la economía. Pero el Congreso le aprobó casi todos los proyectos de ley enviados, incluyendo la ley de Emergencia Económica. La mayor parte de las tensiones venían más bien del Poder Judicial, bajo la égida de la Corte Suprema y sus decisiones, que cuestionaban al proyecto del gobierno. Esto inició un duro tironeo, pues la Corte, que venía muy cuestionada por su rol durante el menemismo (“la Corte adicta”), adoptaba ahora resoluciones “populares” que ponían en jaque al gobierno.²¹⁸ Aunque no avanzaría finalmente con medidas concretas, el gobierno, retomando las palabras del Rodríguez Saá saliente, denunciaba el rol del máximo tribunal en las políticas de los últimos años.²¹⁹

Los partidos políticos, de conjunto, atravesaron esta etapa en una seria fase de descomposición y recomposición.²²⁰ Para un presidente no elegido por el voto popular, con voluntad de ejecutar un programa de gobierno ambicioso, en el marco de severo cuestionamiento de los partidos y el conjunto del aparato de representación del Estado, la búsqueda de legitimidad se erigía como un problema relevante. La solución que Duhalde articuló fue recurrir a la construcción de consenso en espacios para-estatales, bajo la dirección “ética y moral” de la Iglesia Católica (Goldman y Grandinetti, 2013).

Esta institución había ya iniciado junto al PNUD iniciativas de diálogo social en el final del mandato de De la Rúa, mostrando evidente interés en participar de la toma de decisiones (sección 4.1 del capítulo 3). Mientras que había guardado distancia de Rodríguez Saá, no dudó en acercarse rápidamente a Duhalde (Ugarte, 2005).²²¹ La Mesa

²¹⁸ Luego del fallo Smith a favor de los ahorristas, el comediante Nito Artaza, devenido representante de aquellos, comenzó a hablar a favor de la Corte que hasta una semana antes escrachaba en las calles.

²¹⁹ “Desgraciadamente, una Corte que votó a los últimos dos gobiernos, al del doctor Menem y al del doctor De la Rúa, todas estas mismas leyes, quien ha posibilitado con sus fallos que Argentina esté como está, hoy se despacha con este agravio – diría- a la ciudadanía, un engaño para con las personas que tienen ahorros en los bancos, porque es un engaño” (Conversando con el presidente, 2/2/02).

²²⁰ Torre (2005) afirma que la crisis afectó menos al peronismo que a otros partidos, logrando mantener un electorado fiel, a pesar de los problemas de cohesión interna.

²²¹ Alberto Rodríguez Saá, hermano del fugaz presidente, se había declarado públicamente ateo en 2001 y llamado a la Biblia “un libro de ciencia ficción”, lo que alejó a la Iglesia. En cambio, Duhalde se definía a sí mismo como “hombre del humanitarismo cristiano” (Conversando con el presidente, 9/2/02).

del Diálogo Argentino se constituyó tempranamente (enero de 2002) y tuvo en los primeros meses de gobierno una importancia insoslayable, no sólo en materia de políticas específicas, sino en términos de canalizar una parte del conflicto social. Haciendo un diagnóstico muy duro sobre la incapacidad del Estado de decidir sobre lo común,²²² la Mesa buscaba explícitamente reconstruir la legitimidad al gobierno para posponer los conflictos, encauzarlos institucionalmente y mantener el orden social pre-existente ante el riesgo –real o percibido- de anomia.²²³

Un hecho relevante, prácticamente sin mención en la bibliografía sobre el tema, es que esta lógica institucional e ideológica daba un sentido más amplio al programa del presidente: “Nosotros hemos hecho de la palabra de la iglesia una guía para la acción de gobierno” (Conversando con el presidente, 24/8/02). Esta conjunción tenía pleno sentido en el marco de la doctrina social de la Iglesia, que pondera el trabajo productivo como fuente ética, y condena la actividad especulativa. Esta convergencia ideológica y política encarada por Duhalde se puede encontrar en diversos pasajes de Conversaciones con el presidente. Vale la pena resaltarlos porque marcan dentro del discurso una fractura al interior de la comunidad política argentina, donde ciertos actores concretos (una parte del capital financiero y sus representantes políticos) amenazaban la plena constitución de la nación argentina.²²⁴ Aunque se reemplazó la referencia al “pueblo” que Rodríguez Saá usó por “la gente” y “los argentinos”, se definió con claridad la frontera que unía a empresarios con trabajadores frente a “la usura”: la producción.

²²² “El Diálogo Argentino denuncia la incapacidad de las instituciones de la democracia para canalizar adecuada y eficazmente la búsqueda de soluciones a la crisis que vive el país y, en una perspectiva más general, cuestiona la capacidad de gobierno de administrar y decidir sobre lo público” (Diálogo Argentino, 2002b).

²²³ Ésta era la evaluación de la propia Mesa del Diálogo, tal como surge del Informe del PNUD (realizado con base en entrevistas a participantes): “La primera fase fue la más relevante, en la que el Diálogo fue un instrumento de contención y encauzamiento del conflicto creado por la fuerte crisis política, económica y financiera que amenazó con arrasar el patrón de dominación preexistente. (...) Los resultados indican que aquellos que querían contener, posponer conflictos, mantener el orden social pre-existente y legitimar los cambios necesarios producto de la crisis, lograron sus objetivos en el Diálogo Argentino. Quienes buscaron una tarea más profunda, en cambio, debieron contentarse con la extensión del instrumento en una nueva etapa que permitía continuar conversando. (...) La contención, moderación y postergación de conflictos es sin duda un logro del Diálogo Argentino. Ante el riesgo de anomia y disolución social, el Diálogo fue un aporte muy relevante a la pacificación social.” (Zuleta Puceiro et al., 2004).

²²⁴ Decimos “parte” del capital financiero, porque la denuncia de Duhalde es “la usura”, vuelta entidad como representante de la especulación excesiva. La actividad financiera que apoya a la producción no fue cuestionada en ningún momento, ni en el discurso, ni en las políticas (ver sección 2).

Quiero contarles también que los primeros días anuncié que *había que cambiar la alianza de los últimos años. ¿A qué alianza hacía referencia? A la alianza del Gobierno con el sector financiero y el sector bancario, una alianza que nos llevó a esta situación.* Mucha gente habla de que Argentina fue saqueada. A mí no me gusta expresar términos tan duros, pero evidentemente la riqueza no quedó en los argentinos. (...) Ningún país, absolutamente ninguno supera crisis como la nuestra si no es trabajando más, produciendo más y exportando más. (26/1/02, itálicas propias)

Que la alianza que construyamos no sea la alianza con los financistas y con los banqueros, esa alianza ya terminó y así nos fue. La única alianza que puede sacar un país adelante es con sus trabajadores, con sus empresarios, con sus productores, con sus comerciantes, con sus profesionales, con la gente de la cultura, pero una alianza que sirva para producir más, para vender más, para abrirnos al mundo pero, abrirnos para integrarnos a ese mundo y no para desintegrarnos en él. (31/1/02, itálicas propias)

Lo que debe entender la gente es que mi gobierno, que viene a ser el gobierno que pone fin a todo un modelo perverso de la Argentina, construye una nueva alianza. ¿Qué alianza? La alianza con los que trabajan, la alianza con los empresarios, los productores, las economías regionales, que va a reindustrializar el país. Es una alianza que tiene mucha contra, por supuesto, de los sectores que se sienten perjudicados, que son aquellos que empobrecieron a la patria. (5/2/02)

Duhalde enriquecía así su discurso sobre lo productivo como sinónimo de lo nacional, excediendo sus límites corporativos, como el propio GP comenzó a hacer al interpelar a la CGT (ver sección 4.2.1 del capítulo 3). Este recurso no era sólo oratoria, sino que se expresaba en políticas concretas, y en la creación de organismos paraestatales apropiados. La iniciativa, sin dudas, fue efectiva, al reunir cerca de 650 dirigentes de unas 300 entidades, entre las que se encontraban las confesiones religiosas mayoritarias, organismos internacionales, asociaciones empresariales y sindicales, partidos, algunos MTD, representantes de gobiernos provinciales (Zuleta Puceiro et al., 2004).²²⁵ La participación fue importante en los primeros meses, tras lo cual el ánimo se dispersó, aunque la Mesa siguió funcionando hasta el final del mandato de Duhalde.

Mientras tanto, los partidos buscaban formas de reacomodarse al escenario de crisis de representación. Dentro del PJ, la principal tensión la marcaba el menemismo,

²²⁵ Entre otras, participaron en alguna instancia de la Mesa del Diálogo: 1) asociaciones empresariales (AACREA, ABA, ABAPPRA, ADESPA, CAME, CGE, CEA, el GP, IDEA, SRA, Consejo Argentino de la Industria, Mesa del Empresariado Nacional Pyme); 2) organismos internacionales (BM, BID, FMI, embajadores de la Unión Europea); 3) partidos (Acción por la República, Frente Grande, Movimiento de Integración y Desarrollo, PJ, UCR); 4) centrales sindicales (CGT, MTA), 5) MTD (FTV, MIJD, CCC).

que preservaba la presidencia del partido pero sin legitimidad. Los gobernadores fuertes del interior (Reutemann y De la Sota) respaldaban a Duhalde, aunque sin comprometerse demasiado, lo que le otorgaba capacidad de gobernar. De hecho, el 24 de abril de 2002 se firmó el acuerdo de Los 14 Puntos, que sellaba la alianza federal que le daba espacio de decisión al caudillo bonaerense. Marcando distancia de sus antecesores, justo para dar este halo federal a su presidencia, Duhalde gobernó desde el inicio trasladándose a ciudades del interior todos los meses, llevando incluso consigo al gabinete nacional.

Cuando una fuerte ola de protestas sucedió a la represión de Puente Pueyrredón, Duhalde se vio obligado a adelantar las elecciones, y entregar el gobierno en mayo de 2003 (en lugar de diciembre de ese año). Esto abrió una larga discusión sobre la aplicación de la ley de lemas, que permitiera al peronismo presentarse agrupado aunque con diferentes candidatos.²²⁶ Finalmente se presentaron tres candidatos, pero ninguno de ellos fue con el lema del PJ: Menem (Alianza Frente por la Lealtad-UCeDé), Rodríguez Saá (Frente Movimiento Popular Unión y Libertad) y Kirchner (FpV). Estas tres fuerzas independientes dieron al peronismo el 59% de los votos, pero al no ser sublemas del PJ, no le retribuyeron los votos en la misma proporción. Aunque el discurso peronista tradicional recobraba importancia, el aparato del PJ iba por un rumbo diferente.²²⁷

Menem, que ganó las elecciones con el 24.45% de los votos, se presentaba como el candidato de la estabilidad, ofreciendo la añoranza por la Convertibilidad y las buenas relaciones con el capital extranjero.²²⁸ Rodríguez Saá, apostando al discurso nacional popular que había estructurado como presidente, quedó cuarto (14.11% de los votos). Farinello, del Polo Social, apoyó desde 2002 esta opción, mostrando el interés de su proyecto por esta orientación ideológica. Las dos CGT, entusiasmadas por su discurso,

²²⁶ La Ley de Lemas permitiría presentar distintas listas y candidatos (sublemas) que compiten entre sí, pero aportando al mismo partido que los cobija (lema), lo que impacta en la sumatoria de votos y su peso en el reparto de cargos. Al no aplicar la Ley de Lemas, cada candidatura solo contó con sus propios votos a la hora de definir la composición del Poder Legislativo.

²²⁷ La discrepancia entre el peronismo, como movimiento y cuerpo de ideas, y el aparato del PJ, atravesado por una fuerte burocracia y otra igualmente fuerte red clientelar, ganan cada vez más fuerza en este período. Mientras que algunas corrientes políticas (especialmente partidos y MTD) tienen una lectura positiva del peronismo, encuentran serias diferencias con lo que denominan “pejotismo”. Esta preocupación apareció referida tanto en posiciones afines como en la oposición al kirchnerismo, en las entrevistas a Cañón, Cimatti, G. López y Argumedo.

²²⁸ Menem presentó su candidatura en Estados Unidos antes que en Argentina. Dos de sus asesores, Steve Hanke y Kurt Schuler, habían sido los primeros en sugerir la dolarización de la economía argentina (en 1989). El primero de estos asesores se pronunciaría –junto a Rudiger Dornbusch– a favor de entregar temporalmente el gobierno argentino a alguna representación extranjera (La Nación, 19/5/02).

también apoyaron al puntano. Kirchner se presentó como delfín de Duhalde, tras la negativa de De la Sota y Reutemann, combinando un discurso de renovación, de distancia con el neoliberalismo menemista (del que los otros dos gobernadores mostraban menos distancias), y asegurando la continuidad de las políticas económicas de Duhalde (respaldadas por el ministro de economía Lavagna). Gracias a su carácter de relativo *outsider* mediático, por venir de una provincia de menor visibilidad nacional (que le servía para evadir el peso del “que se vayan todos”) y el apoyo del aparato duhaldista, pudo capitalizar la oposición a Menem, quedando segundo con el 22.24% de los votos (Cheresky, 2004; Lucca, 2011). Para darle viabilidad electoral a su propuesta, Kirchner creó en febrero de 2003 el Partido de la Victoria, y la alianza llamada Frente para la Victoria (FpV), que incluía parte del PJ, al Frente Grande y PAIS, además del PC Congreso Extraordinario (PCCE). La nueva herramienta electoral probaría ser efectiva.

El Frepaso desapareció luego de la crisis, obligando a los partidos que integraban la coalición a buscar nuevos rumbos (Mocca, 2008, 2009). El Frente Grande, aunque sin gravitación propia en la escena pública nacional, se mantuvo hasta la fecha como el tercer partido con más afiliados del país. El Partido Demócrata Cristiano se presentó a elecciones solo, sin mayores éxitos. El PSP (Hermes Binner, Rubén Giustiniani) y el PSD (Alfredo Bravo, Jorge Rivas) se reunificaron en 2002, dando forma de nuevo al Partido Socialista –PS- (dejando fuera al Partido Socialista Auténtico). En 2003 presentaron la fórmula Bravo-Giustiniani, obteniendo el 1% de los votos. Otros referentes del Frepaso, como Mario Cafiero, se incorporaron al ARI. Tras la unificación del PS, a raíz de un proyecto a favor del aborto, el ARI rompe esta alianza y se inscribe como partido en noviembre de 2002. En marzo de 2003, el ARI sufrió una nueva escisión en la línea de Cafiero (ARI Disidente), tras lo cual el partido quedó quinto en las elecciones de ese año. El PI, sin mejores opciones, apoyó al ARI en esas elecciones.

La UCR había quedado en bancarrota tras la crisis de la Alianza. El alejamiento de Alfonsín del gobierno en los últimos meses produjo un acercamiento a Duhalde, que se tradujo luego en apoyo en el Congreso. La UCR comenzó a fragmentarse de nuevo ante el programa de gobierno. Tal como plantea Schuttenberg (2013), si bien Alfonsín defendía una línea social-demócrata, de redistribución y producción interna, había otra línea dentro del radicalismo, la republicana-liberal. En marzo de 2002 esta se hizo

explícita con la salida del ex ministro López Murphy, que fundó el partido de centro derecha Recrear, para distinguirse ideológicamente del apoyo a un gobierno “cuya actitud ha sido de destrucción de las bases del sistema económico”. Esta fuerza resulta relevante primero porque expresa que la reconfiguración de los partidos afectaba no solo al peronismo, pero segundo porque mostró la posibilidad de que un partido liberal de derecha pudiera tener gravitación electoral: en las elecciones de 2003 obtuvo el 16.37% de los votos válidos. Ese año aparecieron también otros dos partidos de centro derecha, Unión por Todos, fundado por Patricia Bullrich, quien también había sido parte del gobierno de la Alianza, y Compromiso por el Cambio, de Mauricio Macri, ambos con presencia sólo en Capital Federal (Vommaro, 2014).

Estos partidos, al igual que la alianza de Menem con la Ucedé, mostraban un potencial de capitalizar la demanda de normalización de ciertos sectores sociales, atribulados ante la crisis. Aunque había reclamos de cambios importantes, una parte de la sociedad, tras una década de consenso negativo, aún estimaba deseable la estabilidad, incluso bajo expresiones ideológicas a las que no necesariamente adscribía. Si tomamos estas listas como expresión de esa demanda, casi el 41% de los votos válidos la avalaban. En Capital Federal, Unión por Todos-Recrear y Compromiso por el Cambio, que también apostaban a capitalizar esta demanda, mostrando la formación de “equipos capaces” y nuevos referentes (*outsiders*) (Vommaro, 2014). Obtuvieron casi el 47% de los votos válidos. Esto remarca el peso de esta demanda, a pesar de que tanto en el caso nacional como en Capital Federal, las fórmulas que la representaban no superaron la segunda vuelta (Menem abandonó el *ballotage*, Macri lo perdió frente a Ibarra).

Entre las clases populares, especialmente las centrales sindicales y el movimiento piquetero, existió mucho debate respecto tanto de la normalización institucional como de las posibilidades electorales. Frente a un desarrollo político al margen o contra el Estado de los noventa, las iniciativas de diálogo Rodríguez Saá y Duhalde –con los límites ideológicos e institucionales que tenían- ponían nuevos desafíos. Si bien retomaremos esto en la sección 3.2.2, vale señalar que la lectura sobre el repudio generalizado al patrón de dominación era un marco de lectura válido. Sin embargo, en las elecciones de 2003, la abstención, el voto en blanco y el voto nulo bajaron significativamente respecto de las anteriores elecciones (2001), expresando a un 23.9% del electorado. Tal como

señalamos respecto de los partidos de centro derecha, esta participación electoral se puede interpretar como parte de la demanda de normalización vigente entonces.

Mucho se discutió en 2002 sobre la conformación de una fuerza política surgida de la CTA. Por un lado, los partidos políticos que participaron del FRENAPO rápidamente se dieron a su juego institucional, que no convencía a las fracciones más radicales dentro de la CTA. Por otro lado, desde enero de 2002, la FTV –así como su aliada en los años previos, la CCC- comenzaron a participar de la Mesa del Diálogo Argentino, bajo el entendido de que era necesario disputar la distribución de los planes, en particular, luego de su masificación (ver sección 2).²²⁹ Una vez interrumpida la continuidad del régimen previo, los nuevos gobiernos –con discursos y ofertas políticas distinguibles- aparecían como un desafío a la participación popular, subrayando la necesidad de un debate sobre la relación con el Estado.

Según señaló Gandolfo en entrevista con el autor, la posibilidad de unificar una propuesta electoral “era lo que se hablaba en todas las reuniones”. Sin embargo, la pluralidad ideológica de esta central (que incluía trotskistas y otras tradiciones marxistas), la representación no restringida a sindicatos, y la tradición de autonomía respecto de los partidos y el Estado eran elementos que dificultaban la posibilidad electoral unificada (Quiroga, 2014). De cualquier forma, las discusiones avanzaron, y en el 6° Congreso Nacional de Delegados realizado en Mar del Plata el 14 de diciembre de 2002, se decidió la conformación de un movimiento político, social y cultural de liberación nacional, antiimperialista y anticapitalista (Indymedia, 15/12/02). Uno de los mayores escollos era la negativa de la conducción de la central (De Gennaro) a avanzar en este sentido, bajo un diagnóstico de contrapoder (AAVV, 2007) que entendía que la construcción política emancipadora no pasaba por la institucionalidad estatal.²³⁰

²²⁹ Al margen de la disputa por los planes, no se puede desestimar la importancia que pueden haber tenido en la decisión de participar de la iniciativa de la Iglesia los orígenes ideológicos de la FTV ligados a la teología de la liberación.

²³⁰ “Necesitamos construir un contrapoder que haga posible resolver en base a esas necesidades que mencionamos: el pan, el trabajo, la soberanía, la democracia. Y creemos que la crisis de representatividad no se resuelve cambiando el representante, sino construyendo y distribuyendo poder entre los representados, porque acá lo que se discute es quién va a gobernar. Y tenemos que construir la fuerza capaz de hacer que alguna vez en nuestra patria volvamos a gobernar los argentinos con un proyecto de nación.” (Discurso de De Gennaro en 6° Congreso, 2002). La relevancia de esta falta de compromiso de De Gennaro con la opción electoral fue resaltada en las entrevistas por Cornejo y Gandolfo.

La perspectiva de construcción a más largo plazo indujo una virtual diáspora de dirigentes hacia candidaturas individuales en otros partidos, que no lograban representar la fuerza unificada de la central, que fue clave –como vimos- en la crisis de 2001. La izquierda trotskista, presente en la central y en el movimiento piquetero, no consiguió un caudal de votos relevante (entre todas sus fórmulas logró menos del 3% de los votos válidos). Una gran parte de los MTD optó por desestimar la vía electoral, como una distracción o como un engaño a los verdaderos espacios de construcción de poder popular. La CCC mantuvo la posición abstencionista del PCR, y se sumó la izquierda independiente (CTD AV, MTR). En 2003, aparecieron algunas opciones electorales que buscaban capitalizar el descontento de años previos (como la Confederación para que se Vayan Todos), pero no lograron mayor importancia en términos de votos.

De conjunto, la crisis de representación profundizó su impacto sobre el sistema de partidos, que vivieron una etapa de reconfiguración importante (en especial, los partidos mayoritarios, el PJ y la UCR). El gran nivel de coordinación organizativa de las clases populares a nivel de protesta social no se tradujo en la construcción de una opción electoral, a pesar de que la discusión existió. Las estrategias de legitimación de Rodríguez Saá y de Duhalde, construyendo alternativas paraestatales de canalización del conflicto y masificando la ayuda social, fue un elemento relevante en la dispersión de las clases populares. Estos dos presidentes dieron un giro tanto en las políticas públicas (sección 2) como en el discurso que las ordenaba, avanzando en la forma populista de la construcción de hegemonía. El GP había logrado incluir de modo determinante en esta forma, dado que fueron los significantes que propuso –producción nacional, empleo, inclusión- los que ordenaron la oposición al orden neoliberal previo.

3.2. Disputas socio-políticas

Según vimos en las secciones anteriores, buscando dar respuesta a una profunda crisis de legitimidad, la superficie estatal se vio alterada en casi toda su amplitud. Es decir, el Estado modificó su fisonomía (sección 3.1.) y actuación (sección 2.), para ser capaz de estructurar una resolución de la crisis. En este sentido, tal como el propio Duhalde repetiría a menudo (Rodríguez Saá contribuyó en el mismo sentido), los dos puntos más

importantes de su gobierno fueron lograr la “pacificación social” y poner en marcha un plan económico que lanzara una nueva alianza productiva.

Estos dos logros promovidos por el gobierno se relacionan con los dos grandes ejes de la disputa sociopolítica del período. Por un lado, la escisión dentro del BEP – explicada en el capítulo anterior- alcanzó en este período toda su presencia, apareciendo como abierta fractura. En este mismo sentido, las fracciones de la gran burguesía mostraron sus diferencias programáticas pero también sus puntos de confluencia, es decir, los límites de la fractura. Por otro lado, la disrupción de las clases populares acabó en la respuesta –parcial, pero efectiva- del Estado a sus demandas, desplegando un arco de políticas que ponía a las organizaciones ante un nuevo escenario. El desafío fue construir una respuesta ante una forma de Estado que ya no era completa exclusión.

3.2.1. Disputas dentro del BEP

Las discrepancias al interior del BEP fueron haciéndose más evidentes a medida que la crisis avanzó. Como mostramos en el capítulo 3, los intentos por mostrarse unificados resultaron infructuosos. Apenas De la Rúa renunció, y mientras se resolvía la sucesión institucional, el GP hizo público un documento donde dejó en completa y palmaria claridad su programa de salida de la crisis. La estructuración de la salida ponía de relieve los límites a los acuerdos entre la gran burguesía, sobre los cuales se negociaría durante los gobiernos de Rodríguez Saá y Duhalde. Sintéticamente, se trataba de consolidar o no esta nueva forma del BEP, del cual ninguna fracción había ingresado o salido, pero sí habían modificado su orden de prelación interna (Wainer, 2013).

El documento del GP pedía explícitamente la flotación del peso, la pesificación de las deudas y una moratoria en el pago de la deuda externa, la desdolarización de las tarifas de servicios públicos y la prohibición de ajustes tarifarios por el tipo de cambio (Clarín, 22/12/01). Las siguientes demandas completaban el documento (entre paréntesis, su formulación textual original): a) recortes impositivos (rebaja del 5 por ciento del IVA, eliminación del impuestos a los bienes personales); b) nuevas fuentes de financiamiento –tributarias y no tributarias- (reimplantación de contribuciones patronales a los servicios públicos, generalización del impuesto a las ganancias, incluidas las financieras, desvío por dos años de los aportes jubilatorios de las AFJP al

Estado); c) ajuste fiscal (congelamiento del gasto público por dos años y drástica reducción del costo político, y el recorte del 30% de los presupuestos de los poderes Legislativo y Judicial); d) aumento del gasto social (seguro de desempleo de \$200 a \$250, planes de vivienda, unificación de todos los planes asistenciales). Gaggero y Wainer (2006) dudan sobre el último punto, pues en publicaciones previas del Departamento de Política Social de la UIA se sostenía la necesidad de congelar salarios y permitir despidos y suspensiones irrestrictas. No obstante, el GP no buscaba subir salarios, pagando el precio de impulsar la demanda agregada, sino que esperaba hacerlo a través de planes y seguros de desempleo salidos de las partidas del gasto público.²³¹

Se expresaba así cuál era la propuesta del GP, que mostraba el desplazamiento dentro del BEP del capital financiero (moratoria) y las privatizadas (desdolarización). La declaración del *default* por parte de Rodríguez Saá fue entonces claramente apoyada por este agrupamiento, al igual que la CGT –entonces asociada al GP- y CONINAGRO. Mario Raitieri, presidente de CONINAGRO, recomendaría que permitan “pagar con parte de nuestra producción y, de paso, nos abrirían los mercados” (La Nación, 29/12/01). Además de sincerar una situación financiera, el efímero presidente hizo visible que este programa podía cosechar el apoyo de la CGT.

El recorte fiscal y el plan para “un millón de empleos” fueron anuncios de Rodríguez Saá que aparecían contemplados en el documento del GP. Todo ajuste fiscal, además, parecía interesar a la SRA y a ABA. Las principales dudas surgieron de otro punto del programa de gobierno: el mantenimiento de la Convertibilidad y el lanzamiento de la tercera moneda, el “argentino”. Esta “tercera vía” no convenció al GP porque no era la devaluación explícita esperada, ni tampoco al resto del empresariado, pues generaba una devaluación encubierta mediante una moneda no convertible, de la que nada se garantizaba en materia de control monetario: se había anunciado la emisión por un equivalente al 50% del circulante en pesos, lo que generaría inflación en “argentinos”. Esta falta de definición en términos de la disputa entre fracciones de la gran

²³¹ En palabras del entonces presidente, De Mendiguren: “La UIA fue la primera entidad en la Argentina que propuso el seguro de desempleo. Y no porque fuéramos una entidad de beneficencia, sino porque nos parece clave para salir de la crisis. Cuando uno pone un seguro de desempleo, es demanda pura agregada: nadie a quien uno le da 150, 200 pesos, los ahorra, sino que los consume” (La Nación, 11/11/01).

burguesía dejó a Rodríguez Saá sin el apoyo consolidado de ninguna parte del BEP, lo que facilitó su desplazamiento por parte de su propio partido.

La llegada de Duhalde significó para el GP la consolidación de su primacía. Se trataba de un viejo aliado de la UIA, que no dejó espacio a dudas en su opción política: desde su asunción advirtió que *representaba una nueva alianza productiva* –que incluía a todas las empresas de todos los tamaños y a los trabajadores- *que desplazaba a la antigua alianza entre el capital financiero y el gobierno*. La Ley de Emergencia Económica daba forma de ley al programa del GP, y las negociaciones entre fracciones del capital se supeditaban a este nuevo estado de situación. Para hacerlo más claro, Duhalde creó el Ministerio de la Producción para la UIA, dejándolo en manos de De Mendiguren. Como ya señalamos, los ministros de economía Remes Lenicov y especialmente Lavagna contaban con el apoyo del capital industrial. El BCRA veía su autonomía recortada (sección 2), pero se mantenía en manos de representantes del capital financiero.

Una de las disputas centrales de esta fase fue la fijación del nivel del tipo de cambio. El GP no se entusiasmó con la primera devaluación del dólar a \$1.4, pues estaba interesado en ganar tanta competitividad como fuera posible. Para las asociaciones que defendían la Convertibilidad, la posibilidad de un tipo de cambio más alto no resultaba atractiva, porque disminuía las ganancias en dólares (ABA), encarecía el negocio de las importaciones (CACom) y ponía riesgo a sectores altamente endeudados (SRA). Estos sectores demandaban contener el precio del dólar, exigiendo incluso una apreciación cambiaria (en este período, las dos primeras defendieron incluso la dolarización). A pesar de los reclamos, la dinámica descrita del tipo de cambio (sección 1) daba pocas chances a estas ideas: el ajuste devaluatorio ya estaba en marcha.

Al respecto, uno de los puntos más relevantes de las primeras semanas fue la decisión de restablecer –tras años- las retenciones a las exportaciones. A pesar de la promesa de Duhalde de no hacerlo, tempranamente cambió de idea y aplicó una alícuota que afectaba especialmente las exportaciones agropecuarias (sección 2). Esta decisión buscaba redirigir la renta extraordinaria del agro –lograda por la suba de los precios internacionales y la devaluación- para sostener otras políticas de subsidio al capital industrial y contención social. El efecto inmediato fue quebrar el GP con el alejamiento de CRA y permitir una convergencia de las 4 principales asociaciones del agro, en una

composición política que sería clave para entender el conflicto posterior de 2008.²³² En octubre de 2002, las 4 asociaciones (CRA, CONINAGRO, FAA y SRA) ya mencionaban la idea de formar una entidad representativa de todo el sector.

Había otros elementos que favorecían la confluencia del agro. Los reclamos por rebajas de impuestos y del precio del gasoil eran dos de ellos, aunque el problema principal era el endeudamiento, que actuó como una suerte de demanda galvanizadora de acuerdos entre las distintas asociaciones: el campo enfrentaba deudas por US\$6,000 millones con el sector financiero y US\$3,000 millones con proveedores, con 14 millones de hectáreas hipotecadas (Costantino, 2012a). Los pedidos por refinanciación y pesificación de deudas fueron un común denominador entre estas asociaciones.

Sin embargo, el nuevo esquema de políticas no afectaba a todo el campo por igual. La devaluación favorecía particularmente a exportadores, pero dejaba afuera muchas producciones dirigidas al mercado interno. Al mismo tiempo, generaba un aumento de los insumos afectaba a casi todas las producciones. La ecuación, entonces, favorecía a los exportadores, pero perjudicaban a casi todos los demás. FAA y CRA denunciaron esto. Por la presión de los proveedores de insumos (que desabastecieron a los productores), el gobierno dejó afuera de la pesificación los montos adeudados con estos (US\$3,000 millones).²³³ Las empresas proveedoras ofrecieron cambiar las deudas en dólares por su equivalente en cereales (la lógica detrás de ello era esperar por un mayor valor del grano al momento de la cosecha, o acopiarlo hasta que esto ocurriera). La negativa inicial de los productores se resolvió mediante una combinación de estrategias de las proveedoras: discontinuar las ventas (dificultando el inicio de la siembra), haciendo interceder al gobierno, y proponiendo pagar a los productores el precio pleno de mercado internacional, sin descontar retenciones. Estas trasnacionales hicieron uso de su poder estructural para torcer el signo de la negociación. Mientras tanto, SRA y CRA, a la vista de que los beneficios de la devaluación para sus exportaciones más la pesificación de las deudas con el sistema financiero local, pasaron a ser –junto al FMI– quienes presionaban por unificar el mercado cambiario.

²³² Para un análisis detallado de esta confluencia discursiva y de demandas, ver Costantino (2013). En entrevista con el autor, Molini (FAA) consideró que la distancia entre grandes y pequeños productores se había acortado, morigerando las diferencias de sus demandas: “no nos unimos solo por espanto”.

²³³ La resolución 10 exceptúa de la pesificación de deudas a los contratos de canje de granos por agroquímicos, fertilizantes y semillas.

La imposición de retenciones no lograba alterar el efecto neto de la devaluación total del 200%, significando, entonces, tanto mayores ganancias para el sector agropecuario exportador, como su *relativo desplazamiento político dentro del BEP*. SRA, acostumbrada al histórico diálogo privilegiado con el gobierno (afianzado durante los años de la Alianza), vivió esa situación de modo traumático, criticando duramente al gobierno por lo que consideraba un programa desprolijo y poco preparado. No obtuvo ningún cargo relevante en el nuevo gabinete, y a pesar de participar de la Mesa del Diálogo Argentino, las organizaciones del agro fueron excluidas de ambas reuniones de la Mesa del Diálogo por el Empleo Decente (junio y diciembre de 2002), donde se determinaron los aumentos de salarios en el sector privado. Es decir, por un lado el agro concentrado, exportador, lograba grandes ganancias con la devaluación neta y la pesificación, y afianzaba así su rol de abastecedor de divisas, lo que le daba mayor poder estructural incluso que durante el orden neoliberal; pero por el otro, su poder político directo se veía erosionado, pues era desplazado abiertamente de los canales centrales de diálogo y se le imponían políticas públicas que rechazaba explícitamente. Esta posición desgarrada sería clave en la conflictividad por venir años más tarde (ver capítulo 6).

La pesificación de las deudas con el sistema financiero local benefició al agro. Una parte no trivial de las mismas estaban tomadas con la banca pública, lo que facilitó las moratorias. La idea original de la pesificación *asimétrica* fue sugerida por el economista Roberto Frenkel y el senador Raúl Baglini, quienes se reunieron con Duhalde el 3 de enero a sugerencia de Alfonsín, y fue incluida en la Ley de Emergencia Económica (Rodríguez Diez, 2003). Sin embargo, el GP requería de una medida más amplia, y por eso bregaba por una pesificación sin topes. Según aseguraba en esos días De Mendiguren, la idea había sido tomada del plan de Roosevelt en los '30, quien llegó a declarar ilegal la tenencia de oro (Cobe, 2009). El 20 de enero se reunieron con Duhalde, el ministro de Producción, Héctor Massuh, Roberto Arano y Alberto Álvarez Gaiani (todos de la UIA) para quitar el tope de \$100,000 porque en ese caso “la producción pagaría el costo y el sector financiero saldría indemne” (Rodríguez Diez, 2003: 89-90). Según relata el autor referido, los dirigentes industriales que participaron de la reunión señalaron que “se encargaban de convencer a los bancos que acepten”.

La plétora de críticas públicas a la decisión no puede omitir que la negociación final contó con la anuencia de los bancos, quienes además de evitar de esa forma una ola de quiebras por créditos incobrables, recibieron una sustancial compensación (Cobe, 2009). Los bancos de ABAPPRA, menos expuestos al descalce de monedas, sufrieron menos la devaluación en términos patrimoniales, y se encontraron en ventaja a la hora de rehabilitar el crédito. Su alianza con el GP los ponía en una mejor situación para dialogar con el Poder Ejecutivo. El argumento de la defensa de los intereses nacionales había motorizado el paso a ABAPPRA de un grupo de banqueros encabezados por Jorge Brito. Éste fue quien volvió a fundar la vieja entidad ADEBA en abril de 2003, anunciando que querían “discutir cómo hacer para recrear la burguesía nacional” (La Nación, 9/4/03). Los bancos extranjeros (ABA), contra lo que se esperaba de la concentración y extranjerización, en lugar de capitalizar sus sucursales, recurrieron a amenazas de retirarse del país (La Nación, 30/4/02). De hecho, la banca fue uno de los pocos sectores donde la extranjerización no avanzó en este período.

Debido a la devaluación, las empresas argentinas se habían abaratado significativamente en dólares. Con la expectativa de mejoras de rentabilidad en los sectores transables, la IED (gráfico 7, sección 1) se dirigió a la compra de empresas locales en esas ramas o la capitalización de filiales (Bezchinsky et al., 2008). No sólo capitales de los países centrales ingresaron con este fin, sino también de otros países que Marini (1973) llamó centros medianos de acumulación: India, China y Brasil. Los capitales de los países centrales se reorientaron en este período hacia Asia, abandonando negocios en América Latina, especialmente en el sector de no transables, lo que abrió un espacio de valorización para capitales locales (Burachik et al., 2010).

Por supuesto, el proceso de retirada no era total ni iba a estar exento de conflictos. Frente a un bajo perfil conservado durante la Convertibilidad, las empresas de servicios pasaron a presionar abiertamente a través de ADESPA, reclamando ajustes de tarifas, reducción de las exigencias de calidad e inversión, quita de multas, pago de deudas del Estado y compensaciones por la pesificación de sus activos. A esto se agregó la presión ejercida internacionalmente por dos vías. Por un lado, el gobierno español, representando el capital de la mayor parte de las privatizadas, no cejó en su lobby explícito. Por otro lado, las propias empresas comenzaron una estrategia de denuncias

ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) del BM, que provocaron embargos y dificultades financieras (ver sección 2). El FMI, además, se volvió el más aguerrido defensor del capital extranjero del sector servicios (privatizadas y banca), condicionando a estas prerrogativas cualquier acuerdo. Duhalde, buscando un acuerdo con el organismo, aceptó relajar condiciones a las privatizadas, ofreciéndoles compensaciones (subsidios), y evitando cualquier revisión integral de las concesiones: esto fue una conquista del capital extranjero (Azpiazu y Schorr, 2003).

El cuadro descrito hasta aquí reúne los puntos centrales del cambio en la correlación de fuerzas al interior del BEP: un retroceso *relativo* del capital financiero extranjero y de las privatizadas, que se vieron compensados por este cambio; un *desplazamiento político* del capital agrario concentrado, que no implica su marginación económica, sino más bien al revés (recupera centralidad su aporte de divisas); y un impulso al capital productivo industrial, especialmente, el exportado. El aumento del tipo de cambio junto la contención de las tarifas y los salarios formaron un cuadro de impulso claramente favorable a esta fracción. El uso de las retenciones como mecanismo para compensar a perdedores del cambio desplazó a CRA, el socio agropecuario de la UIA dentro del GP. El otro socio importante, CACons, vio compensado su apoyo con los planes de obra pública que se inician a mediados de 2002 (secciones 1 y 2).

Sin embargo, no todo era monolítico al interior de la UIA. Cuando De Mendiguren pasó a ocupar el ministerio, lo reemplazó en la entidad industrial Héctor Massuh, teniendo a Alberto Álvarez Gaiani, del MIA, como primer vicepresidente. La acción de De Mendiguren en el ministerio no fue aprobada por el conjunto de la UIA y acentuó las discrepancias internas. Esta situación se hizo explícita en la VIII Conferencia Industrial de 2002, que se desdobló en dos encuentros: el primero de ellos en octubre, enfocado en aspectos institucionales, y el segundo en noviembre, enfocado en aspectos productivos. Aparentemente, el segundo se realizó a pedido de una fracción del MIN que buscaba reivindicar la devaluación y sus efectos, pues en la primera conferencia se aplaudieron las críticas de Biolcati (vicepresidente de SRA) a la actividad de De Mendiguren (La Nación, 31/10/02 y 2/11/02). Según los propios industriales, se trataba de una pelea que excedía la discusión sobre el nivel del tipo de cambio, y consideraba cuestiones de liderazgo y de conveniencia política. Este dato es significativo: una parte

de la UIA (concretamente, el MIA), incluso siendo clara ganadora de la estructuración del PRE, encontraba riesgoso un involucramiento abierto con el gobierno. *¿Por qué cargar con los costos políticos (con otras fracciones del BEP y con las clases populares) de su presencia explícita si podían garantizarse representantes que dieran tramitación a sus demandas, incluso más allá de sus propias formulaciones originales?*

La posibilidad de que el ex presidente Menem ganase las elecciones de 2003, inclinó la balanza a favor de la elección de Álvarez Gaiani como presidente de la UIA, un referente de buena relación con aquel político. Las tensiones internas en torno a esta elección fueron muchas. A pesar de que, según el pacto de alternancia era el turno del MIA, el MIN buscaba consolidar los cambios puestos en marcha desde 2002. Finalmente, se armó una lista combinada, encabezada por el MIA, que resultó ganadora.²³⁴ No obstante, una fracción minoritaria del MIN presentó una lista alternativa, que mantuvo diversas disputas en torno a la representatividad de la lista ganadora, llegando a crear en junio una asociación civil llamada “Industriales”.

Estas tensiones internas a la UIA y al conjunto del gran capital motivaron la determinación de encontrar puntos de acuerdo mínimos (consenso básico). En este sentido, la acción más relevante fue la creación de la Asociación de Empresas Argentinas (AEA) en mayo de 2002. Se trataba de una entidad destinada a representar a las grandes empresas a través de una alianza transversal a los sectores de actividad. Su expresa finalidad era “insertar a la empresa privada en la sociedad” ante la preocupación por un discurso “antiempresarial” (La Nación, 24/5/02). Según explicaron, “no se dedicarán a defender intereses sectoriales, sino las bases mismas del sistema capitalista como aporte a la reconstrucción del país” (La Nación, 1/6/02; Estatuto AEA). La entidad fue presidida por Luis Pagani, un industrial de la línea interna MIA.

Aunque como declaración de principios fue efectiva, AEA no logró llegar a mayores acuerdos sobre cuestiones clave en la discusión del momento, como el nivel del tipo de cambio, de las tarifas o de los salarios. Sus demandas, claramente influidas por las fracciones desplazadas en el nuevo orden, fueron la formulación de reglas claras,

²³⁴ Entre los industriales se dijo al respecto que “habrá que encontrar una solución porque de otro modo habrá una crisis que puede llevar a una fractura que pondría en peligro la propia existencia de la UIA. Los costos de la ruptura serían tan grandes que en realidad se está ante un punto que podría llamarse de conciliación obligatoria” (La Nación, 15/3/03)

normalización de la situación financiera, arreglo con el FMI, pago de la deuda externa, ajuste del gasto, menor intervención directa del Estado -aunque aceptaron la regulación de la economía a través de organismos independientes del poder ejecutivo (ver Principios AEA). No es trivial la propia creación de una asociación dedicada a preservar el lugar de “la empresa privada en la sociedad”: evidentemente, la gran burguesía –más allá de demandas específicas por sector- encontraba indicios de que algunos elementos del “acuerdo fundamental” (Birle, 1997; Lindblom, 1999) se encontraban puestos en cuestión y era necesario salir a defenderlos.

Esta voluntad por encontrar acuerdos mínimos impulsó en octubre de 2002 un llamado de unidad del GP, ABAPPRA y SRA, encuentro al que CACom y ABA no asistieron, para alejarse de la prédica devaluatoria de la UIA (La Nación, 31/10/02). Al mes siguiente, en la VIII Conferencia Industrial, nuevamente se intentó un acercamiento: asistieron SRA, CRA, ABAPPRA, CACons y la Bolsa de Comercio. Aunque la conferencia intentó mostrar unidad, los aplausos a la SRA en la reunión anterior y las loas a la devaluación en esta conferencia, así como los problemas internos de la UIA, harían difícil el encuentro programático (La Nación, 2/11/02). En vísperas de la elección de 2003, una vez resuelta la interna de la UIA, los empresarios intentaron un nuevo acercamiento. Se convocó al G8, y asistieron UIA, Bolsa de Comercio, SRA, CRA, CACons, ADEBA, CACom, AEA y Bolsa de Cereales, pero se excluyó a ABA (La Nación, 3/5/03). En tal ocasión, no se llegó tampoco a acuerdos programáticos, orientando la discusión por el candidato más afín. De las reuniones que hicieron con los distintos candidatos, parecían mostrar cierta inclinación por la vuelta de Menem o por el ex ministro López Murphy (La Nación, 9/11/02). Si bien muchos empresarios apoyaban a Menem, temían que su elección exacerbara la protesta social, afectando sus negocios: “Tiene mucha gente en contra, probablemente podría generar una polarización social muy fuerte, como la que conmueve hoy a Venezuela” (La Nación, 16/3/03).

La devaluación y el *default*, dos puntos básicos del programa del GP, habían generado críticas que no se acallaban rápidamente. Una vez estabilizado el tipo de cambio, el punto de debate sería el manejo de la deuda. SRA se presentó en foros internacionales un proyecto de pago de la deuda con producción agrícola (La Nación, 13/3/02). La banca y las empresas de servicios públicos alentaban la rápida resolución,

para mantenerse dentro de los arreglos financieros mundiales. El GP, que había alentado la cesación de pagos, se mantuvo en relativo silencio sobre este punto, aunque apoyaba las negociaciones con el FMI (La Nación, 3/12/02).

La gran burguesía privilegiaría sobre este tema una estrategia de presiones individuales en lugar de utilizar sus asociaciones representativas. Para enfrentar los pasivos en el exterior, demandaron inicialmente la posibilidad de incluir las deudas privadas en la negociación del Estado, o crear un tipo de cambio diferenciado para sus deudas (La Nación, 12/2/02, 12/5/02, y 19/8/02). AEA demandaba la rápida solución negociada del problema de la deuda (La Nación, 2/6/02), pero no lograba conciliar una posición común respecto de las demandas por seguro de cambio (La Nación, 15/7/02). Rápidamente hizo a un lado su pedido por la negociación conjunta de deudas privadas y públicas, pues las empresas avanzaban individualmente con mayor rapidez en resolver sus deudas (La Nación, 20/6/02). La UIA y AEA criticaron al FMI por su falta de voluntad, pero demandaban el acuerdo: era necesario evitar caer en *default* con los organismos de crédito (La Nación, 26/9/02, y 6/11/02). Duhalde escuchaba el reclamo. Cuando en enero de 2003 se logra el acuerdo con el FMI, la gran burguesía vio con gusto el acuerdo, que daba “credibilidad y previsibilidad al país”.

A este momento, cuando la mayor parte de los pasivos habían sido resueltos (por reestructuración o quiebra), la gran burguesía demandaba, a través de un documento público de AEA, guiar la agenda del nuevo presidente por la salida del *default*: “Será un paso fundamental una reestructuración ordenada de la deuda pública y privada, llevando adelante una negociación firme pero razonable con los acreedores(,) un primer paso necesario para superar la crisis es afianzar la relación del país con los organismos multilaterales de crédito” (La Nación, 11/3/03). Es decir, al momento del recambio presidencial, el BEP marcaba este punto como una de sus máximas prioridades.

El capital se encontraba dividido también en relación al tratamiento de la relación con la clase trabajadora. CACom, CACons y CAME insistieron en darle mayor importancia a la recuperación del empleo. El costo de subir salarios era demasiado alto con un efecto poco evidente en la demanda. De hecho, las dos primeras entidades insistieron con que los aumentos salariales otorgados se considerasen como crédito fiscal para poder tolerarlos. AEA y UIA, en cambio, tempranamente comenzaron a demandar

la negociación salarial por sectores, que reemplazara el pedido de subas generalizadas (la idea de “gran paritaria” de la CGT). El gobierno de Duhalde sostuvo la negociación multisectorial de aumentos generalizados, sin aplicación al agro ni al sector público. Ante la conflictividad social ligada a las demandas de redistribución de las centrales obreras, la necesidad de cierta recuperación salarial parecía inminente, y el gobierno optó por buscar el mínimo acuerdo común sobre este aspecto.

La pequeña burguesía se veía particularmente afectada por esta situación. Respecto de la deuda, oscilaría entre la relativa indiferencia (FAA, FAN, CGE) y la toma de posiciones de mayor confrontación, demandando investigar la deuda o negociar forzando grandes quitas (APYME, CAME) (La Nación, 28/1/02). FAA orientaba sus demandas reclamando reforzar el instituto de tecnología agropecuaria (INTA), reconstruir un organismo público regulador de precios (como las antiguas Juntas Reguladoras), políticas regionales, incrementar la intervención del Programa Social Agropecuario, e incluso un proyecto para regular las compras de tierras. Entre las PyMEs urbanas, las demandas se centraban en moratorias fiscales, previsionales y financieras, aunque también apoyaron las medidas de protección externa y las disposiciones de “compre nacional”. El “corralito” financiero era un problema mayúsculo para estas empresas, no sólo por las dificultades que les ocasionaba para su capital de trabajo (menos bancarizado que en empresas de mayor tamaño) sino para sus propias ventas, realizadas en mayor medida en efectivo. La pesificación de deudas fue un gran alivio para el sector. CGE, con mayor presencia en el sector industrial, fue la que más festejó la devaluación. CAME, con mayor presencia en el comercio minorista, se vio afectada fuertemente por el aumento de precios mayoristas y la dificultad de trasladar a precios minoristas, dada la recesión y el severo ajuste en el poder adquisitivo de la población trabajadora. APYME fue probablemente la de postura más radical, en el sentido de manifestarse abiertamente contra la sola intención de negociar con el FMI.

El panorama puede entonces sintetizarse señalando que el BEP sufrió un cambio en el orden interno de prelación, viéndose desplazadas relativamente las fracciones ligadas al capital financiero extranjero y las privatizadas. El FMI actuó como representante de estos sectores, y sus presiones lograron algún resultado en términos de compensaciones. El agro, beneficiado por la devaluación, la pesificación y la caída del

costo salarial, se encontró, no obstante, con menor capacidad de influencia sobre y dentro del aparato estatal: era excluido de los canales privilegiados de diálogo, y se le aplicaban políticas contrarias a sus demandas. En este período se notan las disputas en la generación de consensos sobre el nuevo orden político-económico, que ganó aceptación en la medida en que mostró ser rentable y estable. La resolución del problema del *default* quedaba como la principal demanda común, junto a la búsqueda de formas de moderar la recuperación del mercado laboral. La pequeña burguesía enfrentaba diversos desafíos que dificultaban encontrar posturas comunes. El tratamiento no segmentado del capital por parte del gobierno facilitó acercamientos entre capitales de diversa escala.

3.2.2. Disputas de las clases populares

Las clases populares, como mostramos en el capítulo 3, lograron amplios niveles de organización y capacidad disruptiva en el espacio público (Bonnet, 2002). El rol de veto ante el sesgo cada vez más claro de las políticas del gobierno de De la Rúa fue central para explicar la caída de ese programa (E. López, 2012a). Sin embargo, por múltiples motivos –que incluyen no pocas diferencias internas- esto no significó un programa o dirección unificadas, capaces de disputar la orientación política del proceso.²³⁵ Por supuesto, jugaron un rol no menor los recursos de presión de la gran burguesía, su control de la circulación de información en los medios, y la predisposición de los partidos políticos mayoritarios a dar forma a salidas orientadas según los intereses de ésta. Pero, aún así, ninguna salida podía omitir la relevancia de los actores de las clases populares. Su éxito radicó, si se quieren, en eso: *la imposibilidad de invisibilizarlos*.

Las jornadas del 19 y 20 de diciembre significaron un hito en la sociedad argentina, marcando con claridad una frontera entre el poder político represivo y el pueblo en rebelión. Aunque se generaliza en los meses posteriores, ahí es que surgió como consigna el “que se vayan todos, que no quede ni uno solo”, una radical expresión del rechazo a la “clase” política, y, en tanto representación del orden neoliberal, una

²³⁵ Años más tarde, De Gennaro revalidaba la actuación de la CTA en las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, señalando que el objetivo político de destituir al gobierno del ajuste estaba logrado, y no estaban dispuestos a alentar un baño de sangre (ACTA, 2011). Según señalaba, el objetivo no era “la toma del Palacio de Invierno”, razón por la cual la central se retiró de Plaza de Mayo luego de anunciada la renuncia del gabinete. Con todo, hay bastante acuerdo en que las referidas jornadas –sin ser completa espontaneidad- no se caracterizaron por su coordinación centralizada (N. Iñigo Carrera y Cotarelo, 2006).

impugnación de éste. Este hito sería recuperado y reinterpretado por los gobiernos posteriores, como una referencia insoslayable del proceso político. Resulta de interés señalar que en estas jornadas se volvió evidente la presencia de sectores medios en la protesta, que habían protagonizado una gran cantidad de manifestaciones en los años precedentes y marcarían una presencia –a través de “cacerolazos” y escraches, entre otros- firme en el 2002 (por un análisis detallado, ver Ozarow, 2014; Piva, 2009).

Como analiza en detalle Muñoz (2010), la potencia destituyente de la consigna sirvió para aglutinar demandas y proyectos diversos, vaciándose de sentido para contener una heterogeneidad amplia, pero no fue capaz de convertirse en una estrategia de ordenación social, es decir, de dar forma a un nuevo sujeto político hegemónico. Sin embargo, este momento de “lo político”, como reformulación del orden, no fue estructurado por los sectores movilizados, sino por “la política” (la policía, en términos de Rancière). Tanto la fuerza del rechazo al orden previo como sus limitaciones fueron leídas con atención por parte del poder económico y político, que buscó ocupar el espacio vacío: no sólo en el aparato estatal –poniendo *sus* representantes- sino en la propia forma estatal, al lograr proponer su interpretación de cómo reformular la comunidad política, cómo suturar el espacio social.²³⁶

En este sentido, Rodríguez Saá (ver sección 3.1) tuvo especial importancia en mostrar la posibilidad de que confluencia entre el GP y las fracciones de la CGT se galvanizara en apoyo político concreto. Su apelación al peronismo como fuente de identidad, junto a un discurso con rasgos nacional populares, se completaron con una serie de anuncios que mostraban la orientación de estos apoyos. La CGT oficial señaló que la cesación de pagos “blanquea que el país no puede pagar la deuda externa con base en el hambre y el empobrecimiento y la violencia” (La Nación, 23/12/01). El anuncio de “un millón de empleos”, de restitución del 13% recortado, la no privatización de las obras sociales, la cesación de pagos, el anuncio de derogación de la reforma laboral fueron todas señales que entusiasmaron a la CGT (oficial y disidente). Tras la presencia aclamada de Rodríguez Saá en la sede de la CGT, el líder disidente Moyano sostuvo que era necesario “rodear y defender al Presidente” y que “el movimiento obrero está a su

²³⁶ Desde la corriente postfundacional se puede entender este momento como la emergencia en pleno de *lo político*, como reordenación de la sociedad como un todo, excediendo los límites de administración de *la política* como subsistema (Muñoz y Retamozo, 2013; Muñoz, 2010).

disposición” (Página/12, 27/12/01). “Cómo no lo vamos a apoyar si dijo todo lo que esperábamos”, insistió junto al oficialista Daer (La Nación, 27/12/01). El sindicalismo peronista se encontraba muy a gusto con esta propuesta, como lo refrendaría más tarde, apoyando esta candidatura presidencial en 2003.

El presidente también se reunió con la central alternativa, la CTA, que le alcanzó sus propuestas de redistribución y reclamó por la libertad a los presos políticos. “El Presidente necesita construir consensos y en esa búsqueda está retomando lo que viene planteando la dirigencia sindical; en ese sentido, Rodríguez Saá dijo lo que queríamos escuchar, aunque más difícil es saber si efectivamente puede llevarlo a cabo” señaló Ariel Basteiro (de aeronáuticos) al terminar la reunión (Página/12, 28/12/01).

Otro gesto relevante del presidente decembrino fue reunirse con algunos líderes piqueteros y con Madres de Plaza de Mayo, relajando la condena a la protesta social. De esta forma buscaba tomar contacto con demandas de otras organizaciones de las clases populares, cuyas orientaciones podrían más fácilmente superar la barrera del reclamo corporativo. Aunque no haya avanzado sobre acuerdos más específicos, se trató de una novedad relevante en términos de la relación de estas organizaciones con los gobiernos previos: de la represión y exclusión se pasa al diálogo.

Esta lección fue tomada en cuenta por Duhalde, quien –como ya explicamos exhaustivamente- recurrió a mecanismos institucionales paraestatales de diálogo social para legitimarse. No dio continuidad al acercamiento directo con organizaciones piqueteras o de DDHH, ni tampoco señales de preocupación por la represión a la protesta social, más turbado por “pacificar” el país. La falta de voluntad para convocar a elecciones inmediatas y la necesidad de un control político fuerte para aplicar el programa del GP requería de formas alternativas de contener la protesta social. La Mesa del Diálogo Argentino fue la iniciativa de mayor repercusión, pero también fueron importantes las convocatorias para negociar los aumentos salariales. La CGT y el MTA participaron de todas estas iniciativas, tentadas de encontrar en el caudillo peronista una continuidad de los anuncios de su antecesor.

La CGT y la CTA mostraban cierta confluencia en sus demandas en 2002: seguro de desempleo (por \$380-400), devolución del recorte del 13%, derogación de la reforma laboral de De la Rúa, convocatoria al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil,

aumentos salariales, oposición al aumento de tarifas, prohibición de los despidos, impulso al empleo. Ambas bregaban por una mejora en la distribución del ingreso, que en la CGT se expresaba como una “gran paritaria nacional” (La Nación, 8/5/02), donde se discutieran aumentos generales de salarios y la formalización del empleo no registrado, mientras que la CTA hablaba de “shock distributivo” (La Nación, 14/1/02), donde se considerase, además de las medidas reclamadas por la CGT, un ingreso ciudadano de \$60 por hijo y una jubilación mínima de cobertura universal para mayores (propuestas validadas en la consulta popular del FRENAPPO en diciembre de 2001). Como se ve, la CGT concebía el proceso de redistribución por la vía del empleo (paritaria), mientras que la CTA privilegiaba una matriz ciudadana (vía derechos).

La CTA consideraba que el problema no era discutir la alternativa “devaluación o dolarización” sino la redistribución del ingreso (La Nación, 27/12/01). Esta postura de la CTA marcó la crisis, aún cuando no fue capaz de llevarla a término, logró poner de soslayo la existencia de un sesgo de clase en el debate referido. La alternativa defendida, de redistribución basada en la ciudadanía, fue además validada por un mecanismo democrático de alto impacto, la consulta popular. Los puntos de este programa serían alcanzados a Duhalde a principios de enero de 2002, quien los desestimaría por considerarlos excesivos en el marco de una crisis (aún cuando los subsidios al capital eran claramente superiores en costos, ver sección 2).²³⁷ La CTA reclamó además, infructuosamente, por obtener la personería jurídica, íntimamente asociada al reclamo por libertad y democracia sindical. Esto marcó la distancia y el sesgo de las políticas públicas (contención salarial, insuficiencia de los planes sociales, represión) que mantuvieron a la CTA distante del gobierno.

Duhalde respondió que iba a ampliar la cobertura de los planes, pero que resultaban “impracticables” subir los montos pagados, ampliar el seguro de desempleo, u otorgar una asignación por hijo (La Nación, 29/1/02). Estos planes cubrían una triple función en este proceso: atenuar la pobreza y la indigencia, morigerar la conflictividad social, e introducir un factor de cooptación y conflicto con las organizaciones piqueteras (Félix y Pérez, 2007). Esta estrategia se combinaba con la represión abierta a la protesta

²³⁷ “Estaba escuchando y recibí por ejemplo al FRENAPPO, Frente Nacional Contra la Pobreza, estuve con ellos 3 horas, después estuve otras tres horas con sus técnicos y tienen buenas ideas, pero ideas impracticables en una Argentina quebrada” (Conversando con el presidente, 29/1/02).

social (Masseti, 2006). La CTA criticó estos planes por insuficientes, no universales, poco transparentes (C. Lozano, 2002), y reclamó la amnistía para los procesados por causas políticas y liberación de detenidos, así como la condena a los responsables de la represión durante el fatídico 2001.

Las organizaciones piqueteras (principales víctimas de la represión y persecución judicial) tenían demandas similares a las anteriormente referidas. Su principal reclamo era la ampliación de la cobertura de los planes sociales, aumento del empleo, aumento del salario Mínimo Vital y Móvil, asignación por hijo, jubilación de cobertura universal, mejora de los seguros de desempleo. Con la CTA se reclamaba por un plan alimentario nacional. También se pedía por los procesados y presos políticos, contra la represión, la denuncia al FMI y la deuda externa. Aunque siempre existieron diversas tendencias dentro del espacio piquetero, se puede decir que todas ellas confluían en estas demandas.

La FTV –parte de la CTA- interactuó con el gobierno en el marco de la Mesa del Diálogo Argentino, y a nivel subnacional disputándose el acceso y control de los planes sociales. Si bien en ningún momento logró manejar gran cantidad de planes (Svampa, 2004b), la posibilidad de participar de la política social masificada era un incentivo al diálogo. La CCC y BdP también buscaron tomar su cuota del reparto de planes, lo que les valió cierto repudio por parte del resto del arco piquetero, que, no obstante, también disputaba el acceso a planes. El MTD Evita se formó en estos meses buscando canalizar la disputa territorial por la ayuda estatal. Se trataba de las organizaciones que integramos como de orientación nacional-popular.

La corriente del Bloque Piquetero Nacional intentó enfatizar la necesidad de salida política autónoma, bajo un programa cercano al de los partidos trotskistas. Las divisiones internas de esta corriente (el FTC y el MTR se escinden en 2002, teniendo a su vez nuevas divisiones internas) y su dificultad para incorporar significantes ajenos pusieron tempranos límites a esta posibilidad (Moreno, 2013). En las elecciones de 2003, el trotskismo obtuvo cerca del 3% de los votos válidos, que, sin ser demasiado, eran más votos que los que obtuvo la UCR. Estas corrientes trataron de dar continuidad a los Congresos piqueteros de 2001 a través de la Asamblea Nacional de Trabajadores (ANT), que realizó 3 encuentros nacionales durante el período analizado.

La izquierda independiente, por su parte, si bien fue modificando sus lecturas sobre la estrategia y la coyuntura, acentuó en este período la idea de que la disputa por el aparato estatal era una forma de distraer la construcción de poder popular, orientada principalmente de modo territorial (AAVV, 2007; Cortés, 2010; Svampa, 2004a, 2004b). Entre los MTD, la referencia quizás más reconocida, aunque no la única, fue la de la CTD –luego MTD- Aníbal Verón (R. Rodríguez, 2012). Provenientes de diversas tradiciones ideológicas, estas organizaciones buscaban construir bajo prácticas de militancia diferentes a las de la izquierda tradicional. Esta corriente no ingresó al juego electoral ni estableció diálogo institucionalizado con el Estado, a través de las iniciativas institucionales de Duhalde.

Es importante señalar que este influjo de prácticas e ideas reconocía un espectro más amplio de referencias que los MTD. Durante este período, se multiplicó la aparición de asambleas barriales, clubes de trueque y empresas recuperadas por sus trabajadores. Todas estas alternativas de organización popular implicaban un cuestionamiento de tipo democrático a la toma centralizada de decisiones, sean éstas políticas o económicas, aunque no puede pensarse por ello que estuvieran coordinadas u organizadas de modo centralizado. Es más, incluso en muchos casos, el objetivo era más bien “defensivo”: lograr resolver las necesidades acuciantes ante la falta de respuesta del orden político-económico. No obstante ello, su mera aparición implicó la revisión de una serie de prácticas y discursos que pusieron en cuestión los roles institucionalizados, reconfigurando, al menos parcialmente, identidades (Antón, Cresto, Rebón y Salgado, 2011; Ana Fernández, 2006; Muñoz, 2010; Rebón, 2004; Trincherro, 2009).

Con esto no desestimamos la capacidad de coordinación y proyección de estas experiencias, sino más bien señalamos que resultaron significativas *incluso* aunque no estuvieran organizadas programáticamente. Se estaba poniendo en cuestión el comando centralizado del capital, a nivel económico y político. Los escraches a políticos, al Congreso, a la Corte Suprema, los ahorristas indignados acechando las sedes de los bancos, creaban un ambiente de inestabilidad evidente. Las medidas de fuerza de las centrales sindicales y de los MTD cerraban el panorama, ocurriendo no pocas confluencias en la acción –como ocurrió el 30 de agosto de 2002, con una convocatoria de CTA y FTV que logró repercusiones nacionales. Las referidas prácticas y la protesta

social, que no cesó en todo el año 2002 (2,336 acciones de protesta, según Massetti, 2006), fueron percibidos como un riesgo real por el capital (ver sección 3.2.1) y por el aparato estatal (ver sección 3.1). Esto era suficiente para articular una respuesta mancomunada por parte del capital y sus representantes, aún si diferentes limitantes internas ponían en duda la posibilidad real de un escenario más radical.

La falta de respuestas y el deterioro de la situación social fueron alejando al MTA y la CGT del gobierno. Moyano incluso revisaría sus anteriores posiciones, señalando que la devaluación había “pulverizado” los salarios, y que sólo se la había defendido porque la alternativa (dolarizar) era peor (La Nación, 5/5/02). Pero había ya corrido agua bajo el puente, y las tres centrales no volvían a coincidir ni en la acción en la calle. El 22 de mayo de 2002, Moyano convocó a un paro general, sin demasiado apoyo, y el 29 de ese mes, la CTA organizó otro paro, más multitudinario, del que participaron la CCC y la FTV (Nueva Mayoría, 2002; Página/12, 22/5/02). Aún con algunas coincidencias en las demandas, había una distancia en la interpretación del carácter y los límites del diálogo social del gobierno.

La respuesta de Duhalde llega con claridad palmaria: “Yo les pido que hagan sus protestas, pero que entiendan que hay decisiones que ya se han tomado y que vamos a seguir todos los pasos para que la Argentina pueda reinsertarse en el mundo” (Conversando con el presidente, 1/5/02). Es decir, el gobierno les declaraba a los trabajadores que no iban a participar de la toma de decisiones, que por otra parte, “ya se han tomado”, y no pensaba romper con el FMI como le reclamaban. El alejamiento quedó así marcado para el resto del mandato. La expresión última de esta distancia fue la cruenta represión de Puente Pueyrredón, que marcó la salida del gobierno de Duhalde. Las críticas llovieron por doquier, y el gobierno tuvo que adelantar las elecciones.

Las organizaciones de DDHH reclamaron sostenidamente por el sesgo represivo del gobierno. De hecho, la propia presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto sufrió un atentado en septiembre de 2002. El gobierno no mostró ningún diálogo con este sector. A pesar de ello, a nivel subnacional, el reclamo por justicia, memoria y verdad ganaba alguna influencia institucional, especialmente a través de la acción de la Comisión Provincial de la Memoria (Buenos Aires). Las elecciones de 2003

generaban poco entusiasmo para estas organizaciones: Hebe de Bonafini manifestó entonces que Menem, Duhalde y Kirchner, eran “*la misma mierda*” (Argenpress, 2004).

Dentro del movimiento sindical, las candidaturas de 2003 se dirimieron apoyos. Mientras la CGT oficial, con Daer, Barrionuevo y “gordos”, apoyaron a Kirchner por su cercanía al duhaldismo, Moyano apoyó a Rodríguez Saá (quien le había prometido a Héctor Recalde, cercano a Moyano, el MTESS), y la CTA jugó un rol más dubitativo (Lucca, 2011). Aunque la CTA consideró que la convocatoria era “restringida y trucha”, y que pretendía institucionalizar las políticas regresivas y el control represivo de la protesta social, algunos de sus referentes terminaron señalando que Carrió y Kirchner eran “lo más potable” (Quiroga, 2014). La opción electoral votada en diciembre de 2002 no se desarrolló a tiempo para participar de la contienda.

De conjunto, el período mostró una continuidad en la actividad de protesta y la capacidad disruptiva de las organizaciones de las clases populares, que, no obstante, mostraron ahora sus diferencias con claridad. La reacción de los gobiernos fue contener la protesta a través de una serie de mecanismos que implicaron la inclusión discursiva (Rodríguez Saá), la generación de mecanismos instituidos de diálogo social, la ampliación de los planes sociales y la represión. Esta última fue el rasgo de continuidad más marcado con los gobiernos de la Convertibilidad, que motivó los mayores reclamos hacia el gobierno, y de hecho, acabarían por ser su final. No obstante, mediante los mecanismos de interpelación –siempre subordinada– que el gobierno articuló, puso en cuestión la oposición frontal y total al Estado. La propia recuperación del mercado laboral alentó las promesas de inclusión por esa vía. Las tendencias político-ideológicas tomaron más claridad en su accionar al encontrar una forma de Estado que ya no se articulaba por la sola exclusión. Esto sería clave en la constitución del kirchnerismo.

4. Mirada de conjunto: el programa “productivo”

El momento del proceso político analizado en este capítulo se enmarca en las presidencias de Rodríguez Saá y Duhalde, y va desde la insurrección popular del 19 y 20 de diciembre de 2001 hasta la normalización institucional de las elecciones que ganó Kirchner en 2003. En estos meses, se producen acelerados cambios en distintas dimensiones del modo de desarrollo. Aunque se sostuvieron las regulaciones

estructurales, se modificaron las políticas macroeconómicas, dando forma a un nuevo impulso a la acumulación. Hubo variaciones en el discurso oficial, para diferenciarse de la fase neoliberal apelando a significantes ligados a la producción y la inclusión por la vía del empleo. Esto reflejó, y a la vez produjo, nuevos escenarios de disputa al interior del BEP y con las clases populares. Es decir, la lógica de la periodización no pasa por la secuencia de presidentes, sino por cambios en las dimensiones del modo de desarrollo.

Tal como explicamos en el capítulo anterior, el BEP mostró una división interna, que afloró con evidencia una vez que la crisis institucional puso sobre el tablero la necesidad de tomar una determinación sobre el rumbo a seguir. La caída del gobierno de De la Rúa fue resultado –principal pero no únicamente- de la movilización popular, que cuestionó de plano la legitimidad del conjunto del aparato estatal. Mientras se resolvía dentro del Congreso la sucesión presidencial, el GP hizo público su detallado programa, haciendo a un lado los matices para dejar en claro cuál era la nueva correlación de fuerzas. Resulta claro que el programa había sido delineado y corregido en los meses previos, lo que le permitió un pronunciamiento claro y veloz.

Los gobiernos de Rodríguez Saá y de Duhalde tomaron este programa como la guía de sus políticas públicas. La nueva estructuración del PRE alteraba la distribución de poder estructural entre las fracciones del capital: del lugar preeminente del capital extranjero ubicado en los servicios (financieros, en particular) durante la Convertibilidad, la nueva fase consolidó el lugar del capital productivo exportador como gran ganador. Esto se puede visualizar tanto en su rol como abastecedor de divisas, como en las políticas públicas destinadas a elevar su rentabilidad. La cesación de pagos de la deuda, la devaluación y la pesificación de la economía fueron el nuevo plan de regulación de la acumulación, medidas que sufrieron modificaciones según la disputa se iba resolviendo en cada caso. La distribución de ganancias y pérdidas entre fracciones del capital no se condice exactamente con sus posiciones políticas.

Las fracciones que fueron desplazadas del comando del BEP –el capital financiero extranjero y las privatizadas- recibieron compensaciones sustanciales a través del Estado; es decir, se socializó el costo de tal desplazamiento. El FMI ejerció toda la presión a su alcance para lograr estas compensaciones y otras prerrogativas para el capital, a las que el gobierno accedió (Los “14 puntos”, ley de quiebras, etc.). La gran

burguesía agraria tuvo un tratamiento diferente, pues, aunque se vio claramente beneficiada por el programa del GP, se le impuso el pago de una “cuota” de la renta apropiada mediante las retenciones. Aunque esto no mermó las ganancias obtenidas por esta fracción en el nuevo contexto, implicó una obligación contraria a sus demandas. Es decir, esta fracción, a pesar de ser ganadora desde el punto de vista de la economía política, fue relegada del comando político (como lo muestra su exclusión de los mecanismos de diálogo social). El capital concentrado del agro ocupó este lugar “desgarrado” en el BEP: ganador económico, desplazado político. El capital industrial, en cambio, no sólo se beneficiaba por las políticas, y además se garantizaba un lugar privilegiado en el diálogo con el gobierno (al punto de generar fricciones dentro de la UIA por el nivel de exposición y compromiso con las decisiones de gobierno).

Como mostramos, esta nueva correlación de fuerzas dentro del BEP causó no pocas controversias. Para poner límites a estas disputas internas, la gran burguesía mostró en la etapa una voluntad explícita por volver a agruparse de conjunto. Los llamados al G8 fueron infructuosos por las divergencias respecto de las políticas específicas, pero crearon AEA como demostración de unidad: la entidad tenía por objetivo principal defender el rol del capital concentrado –sin distinción de origen ni sector- en la economía argentina. Si bien sus demandas quedaron circunscriptas a la búsqueda de estabilidad, previsibilidad y un ambiente de negocios propicio (rémoras del orden neoliberal), su importancia radicó en explicitar la percepción por parte de las clases dominantes de un posible trastocamiento de las bases mismas de la sociedad.

Esto se relaciona con el nivel de organización y capacidad disruptiva de las clases populares, en sus diversas expresiones. Como hemos insistido, no existía una dirección ni un programa unificados, había dificultades en la construcción de un liderazgo común, y no pocas discrepancias político ideológicas. Pero estas limitaciones no impedían que las clases populares pudieran movilizarse y poner sus demandas en el espacio público, funcionando como actor con poder de veto. No sólo la caída de De la Rúa demostró esto, sino también el adelantamiento de las elecciones de 2003. Los gobiernos, en aras de contener esta presión, debieron poner en marcha una serie de iniciativas que considerasen –parcial e imperfectamente- las demandas populares.

En otros términos, se puede decir que, a partir del 19 y 20 de diciembre de 2001, apareció desplegada una solidaridad difusa entre demandas y organizaciones populares, con particular importancia del significativo tendencialmente vacío del “que se vayan todos”, pero sin avanzar en una articulación con visos hegemónicos. La disrupción del momento de lo político presentado con toda su fuerza no tuvo un sujeto político de posición popular que ocupara el momento de representación de la cadena de equivalentes, y ese lugar fue –o intentó ser- ocupado por líderes del mismo subsistema de la política que se buscaba repudiar (Mazzeo, 2011). Pero para hacerlo, éstos debieron recuperar la discursividad popular instalada en la escena política.

La revalorización del empleo como fuente ética y de inserción social fue una expresión de este cambio. No puede dejar de remarcarse que esta revalorización se hizo de modo subordinado al valor de *la producción*, que ponía a ciertos empresarios como agentes responsables del (nuevo) futuro de Argentina. Rodríguez Saá, pero más especialmente Duhalde, marcaban la diferencia con el pasado reciente de especulación neoliberal, dando esperanzas de una refundación nacional ligada a la producción industrial y a la inclusión vía empleo. La producción –que en Duhalde adquiría incluso valor moral vía Iglesia católica- era representada por todo el capital productivo en el discurso, pero se especificaba en la industria en las políticas públicas.

Es que la fuente de ese empleo estaba atada a las decisiones de acumulación de las fracciones ganadoras de la gran burguesía (GP), y por eso eran sus demandas las que había que tramitar en primer lugar. Mientras se “convencía” al capital de aplicar sus recursos a la acumulación productiva, la contención social pasó por una ampliación masiva de los planes sociales, la creación de mecanismos institucionales de diálogo social –propuestos por la Iglesia católica- y también la represión (“palos y planes”). Los planes y los mecanismos paraestatales de diálogo tuvieron un efecto al interior de las organizaciones populares: crear divergencias en la interpretación de la fase y la estrategia a seguir. Es decir, incluso con sus evidentes insuficiencias, se comenzaba a mostrar la productividad de estos mecanismos de inclusión limitada frente a la represión –que funcionaba como factor de unidad entre sectores de las clases populares.

Esta productividad, sin embargo, tenía restricciones insuperables para gobiernos no elegidos por el voto popular en un contexto de crisis de legitimidad. Rodríguez Saá y

Duhalde entendieron que el nuevo escenario dispersaba irremediablemente a los diferentes grupos partidarios, sólo que el primero subestimó el poder de veto que estos preservaban. El conjunto de los partidos políticos buscó reestructurarse, pero llegaron a las elecciones de 2003 con una disgregación significativa, que mostraba que la crisis de representación no tenía sencilla vuelta atrás. Las corrientes partidarias mayoritarias se fragmentaban en múltiples partidos, ninguno de los cuales era capaz de articular creíblemente demandas contradictorias. Es que la disputa atravesaba –como dijimos- al conjunto de las clases, y los partidos no podían escapar a esta realidad.

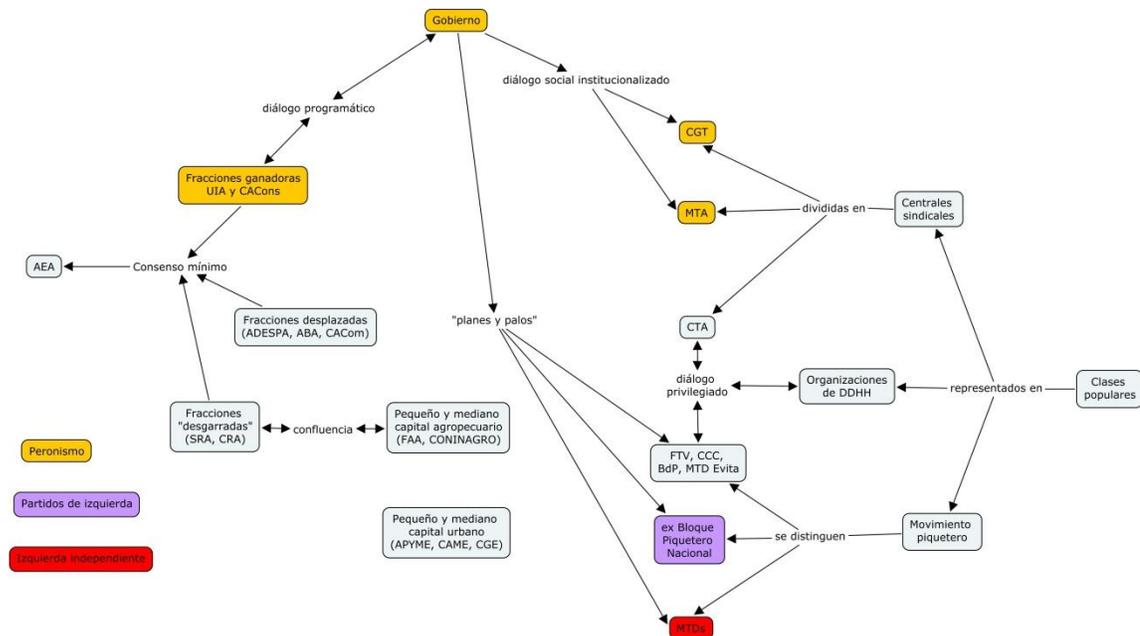
Resulta importante señalar que una parte de las características señaladas como constitutivas del populismo por el enfoque post-fundacional se encontraban presentes ya: la polarización entre pueblo y BEP, representado en este momento por quienes personifican el neoliberalismo y la usura, en una dicotomización del espacio político común, que permitía la irrupción conjunta de un grupo de demandas insatisfechas en el orden previo. La insuficiencia de esta definición obliga a la mayor parte de los estudios de este enfoque a omitir este período de su análisis, o a centrarse exclusivamente en la continuidad de la protesta. Una valiosa excepción es el caso de Muñoz (2010), que señala la efectividad que tuvo este cambio en el orden político: al poner al neoliberalismo como enemigo y al Estado como garante de la inclusión, se desbarataban los parámetros del antagonismo previo (“el enemigo había cambiado de forma”; p. 181), poniendo en crisis la incipiente constitución identitaria popular. Como señala la autora, esto favoreció la exacerbación de las diferencias discursivas y de estrategia al interior del campo popular, en el marco de una consigna común que nucleaba en la negatividad y el rechazo, pero impedía pensar un orden político nuevo.

¿Qué faltó? Dos de las mayores restricciones fueron que estos gobiernos no fueron elegidos por el voto, lo cual cuestionaba sus credenciales en tanto representantes, y la falta de eficacia en los efectos económicos mediatos de las políticas aplicadas, que comenzaron a notarse sólo meses después (especialmente, en salarios y empleo), cuando la credibilidad del gobierno había sido ya dilapidada. Ambas características ponen en relieve la importancia de las condiciones de producción y de recepción de los discursos: para que la interpelación populista fuera efectiva, tenía que provenir de un representante legítimo (no impuesto) y permitir una lectura creíble de las condiciones de existencia del

pueblo. El énfasis teórico en el carácter total y no enunciado del discurso, así como el sesgo empírico de estudiar principalmente el discurso hablado del líder (y eventualmente de las agrupaciones que lo siguen), atentan contra una comprensión acabada del proceso político que permitió la construcción de hegemonía en clave populista. Ahora bien, del capítulo aquí desarrollado queda claro que la estructuración del orden político fue guiada por las demandas de una fracción del BEP, que ya había iniciado el camino de construcción de hegemonía en el momento previo: incluyendo elementos de la discursividad popular y sus demandas, lo que modificaba el programa defendido (para que adquiriera visos de universalidad) pero sin afectar sus lineamientos básicos.

Tal como hicimos en el capítulo anterior, la ilustración 3 resume de modo *esquemático* los vínculos entre los agentes más relevantes (la ilustración prioriza el gobierno de Duhalde). Se puede notar allí: a) la relación programática con las fracciones ganadoras y dominantes del BEP; b) el diálogo “social” con la CGT y el MTA; c) la división del movimiento piquetero y la política de diálogo y represión del gobierno; d) las fracciones desplazadas –pero compensadas- del orden neoliberal; y e) las fracciones “desgarradas” del BEP, aquellas que perdieron poder político, pero ganaron económicamente (el agro concentrado).

Ilustración 3. Mapa social en la salida de la crisis





FLACSO
MEXICO

CAPÍTULO 5. LA RUPTURA POPULISTA Y EL ORDEN HEGEMÓNICO

Llegamos en este capítulo a un momento clave del argumento de esta tesis: el kirchnerismo fue el resultado de un proceso político de forma populista, dirigido por una fracción de la clase dominante. El *kirchnerismo* remite al orden político resultante, que es uno de tipo hegemónico, cuya estructuración se erige en el período analizado a continuación (mayo de 2003 a julio de 2008). Como efecto de este orden hegemónico, resultó la aparición de la identidad política kirchnerista –como veremos en el capítulo 6.

Vimos antes (capítulo 3) cómo el orden neoliberal entró en crisis por la acumulación de demandas irresueltas por parte de las clases populares y el GP, donde se produjeron diversas equivalencias tendenciales entre las demandas (y los demandantes). En el capítulo 4 mostramos cómo las directrices del GP fueron retomadas por los gobiernos provisorios, para reestructurar el discurso y las políticas públicas, modificando los ejes de antagonismo social. Sin embargo, la lenta incorporación de significantes ligados a las demandas de las clases populares requería de ciertos cambios para completar el pasaje de un orden de dominación basado en mecanismos de consenso negativo a uno de consenso positivo (que por eso entendemos como hegemónico). Estos cambios se lograron con la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, que completó así la ruptura populista (por ello el proceso tiene la forma populista).

El éxito de las clases dominantes fue imponer *su* conjunto de alternativas como campo de antagonismo: devaluación versus dolarización. Esta estructuración del orden político se solapó con aquel que las clases populares ponían en juego, donde se oponían al neoliberalismo y la democracia excluyente. Pero en este segundo caso, no había capacidad de dar forma a una solidaridad estructurante, capaz de construir un mito trascendente de orden, que produjera una distribución de lugares y roles a los actores del sistema. Las alternativas de las clases dominantes, en cambio, lograban realizar esto: con la devaluación se podían alinear (como se hizo) significantes de producción, mercado interno, trabajo, incluso soberanía nacional, todo lo cual permitía proponer políticas públicas claras, e identificar un campo de amigos y enemigos. Esto le permitió incorporar demandas y significantes de una parte de las clases populares, que fue expresado por los gobiernos de Rodríguez Saá y Duhalde. En cambio, la alternativa de la

dolarización aparecía como continuidad del neoliberalismo impugnado en las calles, y por lo tanto, casi anodino para interpelar al pueblo.

Es decir, considerando las dos directrices de configuración del conflicto social (ver sección 4.2 del capítulo 3), había dos campos de antagonismo en despliegue, que se solaparon para dar forma a la salida de la crisis, constituyendo un nuevo ordenamiento político, social y económico. Una fracción de la clase dominante fue capaz de dar nombre, políticas y lugares a ese orden, algo que las clases populares no pudieron completar. Rodríguez Saá y Duhalde cumplieron el rol institucional de desplegar este discurso desde el Estado, haciéndolo material en políticas concretas: el lugar de enunciación (el Estado) cambiaba, así como las condiciones de recepción (nuevas políticas, nueva relación entre política y economía), con un discurso que excedía los acuerdos programáticos para dar forma a una nueva comunidad política, construir subjetividad política. Así, estos presidentes avanzaban el pasaje hegemónico del GP en devenir Estado: ser capaz de enunciar los propios intereses y demandas como universales. Sus trayectorias personales y partidarias, así como los vínculos con las fracciones del BEP, dan cuenta de cuál era su base social de representación.

A la vez que se incorporaban demandas subalternas, se modificó de modo irremediable el campo de antagonismos, no sólo de las clases populares sino también al interior del BEP. Entre las clases populares, se marcó la distinción entre organizaciones según cómo comprendían el proceso político y el lugar del gobierno en él (ver sección 4.2.2 del capítulo 3 y 3.2.2 del capítulo 4). Al interior del BEP (ver sección 3.2.1 del capítulo 4), se produjo un desplazamiento compensado de las fracciones previamente dominantes (finanzas y privatizadas) y un “desgarramiento” de las fracciones del capital agropecuario (perdieron poder político, pero consolidaron su poder estructural). La fracción dominante y ganadora, el capital industrial, comenzó a tener fricciones internas tanto por la exposición política que tenía como por la disputa con el resto del BEP, abandonando por ello funciones de gobierno y buscando acuerdos mínimos comunes.

Los estudios post-fundacionales no han estudiado el rol de la clase dominante, sus disidencias y acuerdos, quedando de esta forma la estructuración del escenario político restringido a las clases populares (tratadas como pueblo, no como clases) y la relación con el sistema de representación estatal (partidos, gobierno, Congreso). El

problema de esta mirada es que parece asumir que las alternativas que surgen en el Estado sólo tienen correspondencia con las demandas populares o son creaciones *ex nihilo*. Esto impide ver no sólo los ganadores y perdedores al interior de la clase dominante, sino tampoco cómo las demandas de ésta dan forma a las alternativas de interpretación y discursos en la lid. Dicho de otra forma, la construcción de hegemonía parece ser una relación que excluye a la clase dominante, y por lo tanto, el populismo resultante es siempre un efecto del pueblo interpelado por un líder que se contrapone por completo al BEP. La derivación del populismo como construcción hegemónica de los sectores populares es así una conclusión sesgada por la selección del campo de análisis. Como venimos mostrando, la disputa al interior de las clases dominantes fue, hasta este momento, uno de los ejes más relevantes en dar forma a la crisis y su salida. La bibliografía relativa al “giro a la izquierda” realiza una operación semejante, aunque con menor precisión, constatando simplemente la crisis del sistema político y su posterior permeabilidad a un conjunto de demandas populares.

Los estudios guiados por la matriz más clásica, en cambio, han explicado con claridad el rol de las disputas dentro del BEP en la constitución del programa de salida de la crisis. Ahora bien, tiende a existir una menor valoración de los efectos discursivos de la construcción política, y en algunos casos, las clases populares aparecen como meras desestabilizadoras del orden previo. Es decir, la crisis se provocó por la movilización y protesta en el marco de una severa recesión económica, pero la salida se da por un programa formulado por una fracción de la clase dominante (tesis que aparece exacerbada en las propuestas de un “Argentinazo”). El problema de esta lectura es que sólo puede entender a las concesiones a las clases populares como mero engaño o cooptación, quitándoles toda creatividad propositiva en el nuevo escenario. No hay tampoco un reconocimiento claro de la influencia del nuevo escenario político en los posicionamientos y estrategias de las organizaciones populares. Así, el período abierto en 2002 se resume en el éxito del Grupo Productivo no sólo en aplicar su programa, sino en desmovilizar al pueblo. No habría mayor novedad, más que despliegue de lo mismo desde entonces. Las organizaciones populares, tras ser el epicentro de la disputa política, serían completamente despojadas de toda iniciativa o capacidad de negociación, lo que es, de mínima, extraño. En otros casos, se acepta que la situación política cambió, pero

no se la logra interpretar de modo consistente con las categorías conceptuales, como hace Basualdo (2011) cuando señala que las clases populares *comparten* la hegemonía con el GP, sin explicar cómo eso sería posible o cómo se distinguiría del transformismo que usa el autor para describir la fase previa.

Como ya explicamos, la crisis se estructuró por la interacción de dos ejes de conflictividad socio-política en conjunción con una crisis en el sistema de representación, y sobre un polo específico de uno de esos ejes fue que los gobiernos de Rodríguez Saá y Duhalde actuaron. Esto no significa que fueran meras marionetas en un libreto pre-escrito: el GP había modificado su discurso y demandas, al incorporar a su alianza a la CGT y el MTA, pero era incapaz (al menos hasta el momento) de interpelar a otras fracciones de las clases populares. Los gobiernos provisionales eludieron el problema de la representación tal como la democracia procedimental lo asumía, descartando la posibilidad de una salida más radical a la situación. Se privilegiaron entonces las tareas de relanzamiento de la acumulación capitalista en una nueva fase del modo de acumulación, que incluían la recuperación de la regulación estatal mediante instrumentos de política pública. La revalorización del rol del Estado y la política en la asignación de recursos y la justicia social fue un discurso puesto en práctica con políticas concretas, que modificaban el orden político previo.

Aún restaba la tarea de legitimar este proceso ante un escenario social que se mantenía convulsionado, pero sin capacidad de estructurar una propuesta de orden propia. Tanto el uso de significantes ligados a las ciertas demandas populares (trabajo, producción, inclusión), como la adopción del neoliberalismo como enemigo, ponían al gobierno en un lugar diferente al que las fuerzas populares habían entendido hasta entonces. La masificación de la asistencia social y la puesta en marcha de mecanismos paraestatales de diálogo social completaban la escenificación de este nuevo campo político. Aunque la represión se acentuó, y el ajuste social fue mayúsculo, el arco de políticas de contención y los efectos positivos de la reactivación se comenzaron a notar, se hacía posible buscar validar mediante el voto la orientación gubernamental.

Esto fue lo que se hizo en mayo de 2003, en las elecciones que gana Kirchner debido al abandono del ballotage por parte de Menem. Kirchner, delfín de Duhalde, dio continuidad macroeconómica a las políticas públicas lanzadas, y profundizó el giro

discursivo iniciado por éste y por Rodríguez Saá, incorporando nuevas demandas y significantes de las clases populares (Muñoz, 2010). Cuando al asumir hizo un llamado a construir un “capitalismo serio” junto a la “burguesía nacional”, estaba dando cuenta del sustrato de clase sobre el que funcionaba su interpelación. Se completó así la ruptura populista, y se logró constituir un orden político hegemónico, cuya estructuración fue definida en sus grandes directrices por una fracción de las clases dominantes. Este orden tuvo se modificó a mediados de 2008, cuando las fracciones “desgarradas” del BEP impugnaron políticamente el régimen instituido: el conflicto con “el campo”.

1. PRE

Al momento de asumir la presidencia Kirchner, el paquete de políticas económicas aplicado por Duhalde (sección 2 del capítulo 4) había comenzado a mostrar sus efectos: el capital estaba valorizándose mediante la acumulación aplicada a ramas productoras de bienes transables, expandiendo la actividad y reanimando el mercado laboral. El PBI – desestacionalizado, y a precios constantes de 1993, se expandió a una tasa anual promedio del 8.9%, logrando un incremento total entre el segundo trimestre de 2003 y mismo trimestre de 2008 del 50%, lo que muestra una fuerte valorización del capital.

El PBI alcanzó así un valor de \$382,010 millones (a precios constantes de 1993), superando desde principios de 2005 el valor máximo alcanzado en 1998, anterior pico de actividad. Es decir, la expansión no sólo fue recuperación de la recesión, sino genuino crecimiento. Esto mismo se comprueba al analizar el comportamiento de la inversión, que mostró un comportamiento procíclico aumentado: expandiéndose a una tasa anual promedio del 25% en el mismo período, superó su anterior máximo a fines de 2005. Tras haber caído al 11% del PBI durante 2002 (una proporción tan baja que dificultosamente permite siquiera reponer el capital depreciado), la inversión bruta llegó a representar el 23% del PBI. Esto significa que si bien la expansión inicial se originó aprovechando capacidad instalada ociosa –lo que permitió aumentar la producción adelantando capital sólo para la compra de insumos y el pago de salarios, disminuyendo el costo unitario de las mercancías-, rápidamente el proceso orientó recursos al aumento de la capacidad productiva (Amico, 2008a; Burachik, 2009; Damill, 2006; Grigera y Eskenazi, 2013).

La intensidad y duración de la expansión de la actividad y de la inversión tuvieron un determinante clave, que fue el *aumento sostenido de la tasa de ganancia del capital* (Azpiazu y Schorr, 2010; Burachik, 2009; CENDA, 2007; Félix y López, 2012; Michelena, 2009). Este aumento fue de tal magnitud que permitió no sólo impulsar la acumulación mediante la inversión productiva, sino que además permitió un proceso sostenido de desendeudamiento y de constitución de activos no ligados a la actividad principal de los capitalistas en cuestión (Manzanelli, 2011; Pérez Artica y Cantamutto, 2009; Pérez Artica, 2009). Es decir, el capital se benefició en una magnitud inusitada, lo que le permitió utilizar el excedente para más de un uso: algunos de ellos, como la valorización productiva, tenían un impacto positivo en la creación de empleo; pero otros no hacían sino sostener las contradicciones de una economía dependiente. De hecho, a pesar del su importancia en el producto total, considerado respecto de los niveles de las ganancias, la inversión productiva fue relativamente baja (Michelena, 2009). Entre los diversos sectores, como se explicó en la sección 1 del capítulo 4, las ramas productivas aumentaron sus ganancias por encima de las financieras: entre las empresas que cotizan en la Bolsa, las firmas del primer sector pasaron a ser las de mayores ganancias, revirtiendo la distribución de rentabilidades de los '90 (Azpiazu y Schorr, 2010).

Observando punta a punta (II-03 a II-08), la rama de actividad de mayor expansión fue la construcción (121%). Este dinamismo tuvo varios determinantes, entre los que vale la pena resaltar el incremento en la inversión pública y la construcción residencial de alta gama, ligada al atesoramiento de los capitalistas. Pero la importancia central de esta expansión reside en el elevado impacto en el empleo: se trata de la rama de actividad que demandó mayor cantidad de fuerza de trabajo, y que, además, lo hizo en condiciones de elevada informalidad y salarios relativamente bajos. Esta rama fue probablemente la estrella del período.²³⁸

La otra rama de alto impacto en el empleo, la industria manufacturera, se expandió en este período un 51%, apenas por encima del producto total.²³⁹ Cabe señalar varios puntos al respecto, puesto que el discurso oficial insistió en la idea de que se

²³⁸ No son pocos los grupos económicos nacionales ligados a la construcción que se expandieron en esta etapa, especialmente los ligados a la obra pública: Techint, Pescarmona, Cartellone, Electroingeniería, IRSA, Pampa Holding, Calcaterra, Caputo, Indalo/Cristóbal López, entre otros (A. Gaggero et al., 2014).

²³⁹ Si se toma el período 2002/2008, la expansión de esta rama fue del 71.6%, por encima del 63.3% que creció la economía en su totalidad. Se trata de parte del “efecto rebote” de la crisis.

inició en esta etapa un proceso de *reindustrialización* de la economía nacional. Esta idea formó parte no solo de las representaciones fomentadas desde el gobierno, sino que caló incluso entre las organizaciones populares, alimentando la interpretación del proceso aquí defendida: se tomó como uno de los significantes nodales la defensa de una fracción específica del capital, proponiendo su expansión como una conquista para las clases populares (ver sección 3 del capítulo 4). Retomaremos este punto más adelante, consignamos aquí los elementos económicos del proceso en cuestión.

En primer lugar, insistimos, la industria tuvo una expansión semejante a la del resto de la economía, es decir, no ganó participación en el producto, sino que mantuvo la que tenía. Frente a la retracción de su participación en las décadas previas, es éste un dato interesante, pero insuficiente para hablar de un proceso de industrialización. En este subperíodo, todas las ramas industriales crecieron, algo que se detendría hacia 2008 (ver sección 1 del capítulo 6). Sin embargo, esa expansión no sería homogénea.

Justamente, en segundo lugar, esta expansión no fue un proceso de modificación de la estructura productiva, que fuera completando la matriz industrial en sus “casilleros vacíos”, sino que se produjo con base en tres grandes áreas: la de las ramas ligadas a la producción de bienes de bajo valor agregado (manufacturas de origen agropecuario e insumos industriales de uso difundido), la cadena automotriz y la obra pública (Azpiazu y Schorr, 2011; Castells, Ferreira, Manzanelli, Schorr y Wainer, 2013; Schorr, 2012b). La primera área está fuertemente ligada al aprovechamiento de las ventajas naturales y los salarios reales relativamente bajos, produciendo para exportar al mercado internacional: estas ramas explicaron el 85% de la recuperación industrial hasta 2005 (Azpiazu y Schorr, 2010). Se trata del tipo de especialización dependiente característica de la economía nacional, que desplaza la relevancia de la demanda asalariada como fuente de realización de la ganancia (Osorio, 2004a), que en el período no hizo sino profundizarse.²⁴⁰ La cadena automotriz, controlada por un puñado de empresas transnacionales –ajenas a cualquier voluntad de desarrollo nacional-, depende fuertemente de la demanda del mercado brasileño, bajo los acuerdos propiciados en el MERCOSUR.

²⁴⁰ La especialización primarizante no refiere sólo a la producción agropecuaria y minera, sino también a las ramas industriales basadas en el aprovechamiento de los recursos naturales. Se trata de ramas con alta intensidad en capital, uso de tecnologías difundidas y alto grado de automatización, lo que normalmente lleva a elevados rendimientos a escala (J. Katz, 2000). Sobre esta tendencia primarizante dentro de la industria, se puede consultar Costantino (2015) y Castells y Schorr (2015).

En gran medida, la existencia de estos acuerdos fueron una de las principales vías que explican que la desindustrialización no haya avanzado en mayor escala (Puyana y Costantino, 2013).²⁴¹ Finalmente, la obra pública depende por completo de la demanda del Estado, que garantizó así nichos de mercado bajo su protección.

El punto clave que se deriva de lo anterior es que el crecimiento de la industria estuvo basado en la satisfacción de la demanda externa en condiciones de dependencia y en la protección estatal (A. Gaggero, Schorr y Wainer, 2014). Éste era el argumento fuerte del *neodesarrollismo*, presentado como contrapunto del neoliberalismo: impulsar la industria a través de las exportaciones, centrando la competitividad en el manejo del tipo de cambio (Féliz, 2012b; C. Katz, 2014). No hubo un proceso de industrialización que avanzara en encadenamientos productivos, que completaran los casilleros vacíos de la estructura productiva, que, por lo tanto, se mantuvo desequilibrada (sectores extractivos y ramas industriales basadas en las ventajas mencionadas versus el resto de la industria) y consolidó el perfil productivo de los noventa (Azpiazu y Schorr, 2010). La IED del período se dirigió a estas mismas áreas, con particular énfasis en la actividad extractiva, y con mayor intensidad que en la década pasada (Belloni y Wainer, 2014b; Bezchinsky et al., 2008; Cantamutto y Costantino, 2014). La posición dependiente del capitalismo argentino se vio así reforzada.

En tercer lugar, y derivado de lo anterior, es importante señalar el dualismo estructural de la industria, que se observa en el intercambio comercial sectorial. A pesar de que se observa un leve aumento de las exportaciones industriales, todas las ramas que no están ligadas a la producción primaria o que tienen niveles medios o altos de tecnología fueron deficitarias (Belloni y Wainer, 2012; A. Gaggero et al., 2014; Wainer, 2011). Hasta el 2006 inclusive, las ramas industriales basadas en ventajas estáticas lograron que el agregado sectorial resultara superavitario, pero escondiendo el sistemático déficit de todas los renglones basados en tecnología alta o media alta (Schorr, 2013). La dependencia tecnológica y la integración a cadenas globales de valor

²⁴¹ La cadena de valor de esta rama, tal como se estructura a nivel global, tiene una fuerte desintegración espacial, que implica la producción separada de insumos en plantas y empresas formalmente independientes, ubicadas en diferentes regiones del mundo, bajo el control centralizado de las empresas matrices (Sotelo Valencia, 2002). Esto implica que las empresas de la cadena, aunque puedan ser muchas, dependen casi por completo de la demanda de una o muy pocas casas matrices, que determinan con autonomía las especificaciones de la producción según sus propias necesidades de valorización.

implicaron que la industria muestre una elevada elasticidad ingreso de las importaciones, pues para poder expandirse debe recurrir a compras al exterior de insumos, maquinarias y bienes intermedios. Todas las ramas complejas mostraron un bajo crecimiento en este período, lo cual es clave, porque las mismas explican el 80-85% de las importaciones industriales (Azpiazu y Schorr, 2010). La cadena automotriz tuvo un comportamiento homologable a esta descripción, mostrando superávit sólo en 2002 debido al desplome de las importaciones (Bekerman y Montagú, 2007).

Es decir que la expansión del conjunto industrial requirió que otros sectores y algunas ramas compensaran el déficit que producía; de lo contrario, le resultaba imposible continuar el proceso de acumulación. Este faltante comercial fue cubierto, justamente, por las ramas primarias y las industriales ligadas a su procesamiento básico. Se trata de una versión actualizada de la conocida restricción externa al crecimiento (Braun, 1973; Diamand, 1972). Al hablar de reprimarización, no se está aludiendo sólo a los sectores primarios sino también a las ramas industriales basadas en ventajas estáticas. Las fracciones productivas exportadoras consolidaron así su poder estructural.

Por último, respecto de los agentes de esta expansión industrial, cabe hacer el señalamiento de que se consolidó durante el período la concentración de la producción y la extranjerización de la propiedad (Azpiazu et al., 2012; Burachik, 2008; Castells y Schorr, 2015; A. Gaggero et al., 2014; Schorr, 2012a). Muy pocos sectores y empresas explicaron las divisas generadas, y afianzaron con ello su poder estructural: mientras la cúpula de las mayores 100 empresas consiguió superávit externos, el resto de la industria fue sistemáticamente deficitaria (Azpiazu y Schorr, 2010). Un conjunto reducido de empresas, la cúpula industrial, produjo una gran parte del valor agregado y controló las exportaciones, condicionando así la acumulación del resto de la cadena productiva. Además, se observó una mayor rentabilidad, menor impacto en la generación de empleo y menor reinversión de utilidades por parte de las empresas extranjeras de esta cúpula. El capital nacional se logró valorizar refugiándose en la producción ligada a los recursos naturales (no sólo el agro, sino también algunos segmentos ligados a la minería, como el caso de Aluar, que no descarta el aprovechamiento de grandes beneficios fiscales de promoción) y en la obra pública (donde los vínculos con el poder político son centrales). Estos fueron los ámbitos privilegiados de acumulación –protegidos y generados por el

Estado (Castellani, 2012)- donde la “burguesía nacional” que Kirchner convocó (ver sección 2) logró hacer su aparición.

Es decir, si bien la industria se expandió al ritmo del PBI y absorbió fuerza de trabajo, esto no derivó en un proceso generalizado de industrialización. El sector se expandió con base en el perfil productivo de los '90: ventajas comparativas y la protección estatal, incapaz de superar las barreras de inferioridad tecnológica, con altos niveles de concentración y control extranjero de la producción, insertándose en cadenas de valor que favorecieron la especialización dependiente (Schorr, 2013). No hubo tal cosa como un proceso de sustitución de importaciones o de industrialización.

Esto no contradice que, bajo la expansión de las empresas líderes, se desarrollara un segmento de PyMEs industriales, revirtiendo su tendencia previa a desaparecer del mercado. Éstas explicaron una gran parte del empleo generado, pues tuvieron una mayor intensidad laboral de su función de producción, reposando su acumulación en condiciones precarias de contratación que compensen su reducida productividad (Graña et al., 2008). Las manufacturas más relevantes fueron controladas por un puñado de empresas, extranjeras en su mayoría, con inserción destacada en mercados mundiales, pero con muy escasos eslabonamientos internos y generación de empleo (Schorr, 2013).

Hemos dedicado un espacio considerable a la cuestión de la industria porque se trata de uno de los elementos más importantes del discurso oficial. Distinguido su peso en la expansión, el incremento de la actividad, y de las ventas al exterior, favorecieron una fuerte expansión del sector de transporte y almacenamiento, así como el comercio, todas ramas que crecieron por encima de la media. El turismo, que tuvo un rol muy importante en los primeros trimestres de salida de la crisis, sostuvo su expansión, pero ya por debajo del resto de las ramas de actividad.

Llama la atención que la intermediación financiera, luego de atravesar una recesión durante 2003/04, se volvió uno de los sectores más dinámicos: considerando la expansión hasta II-08, aumentó su valor agregado en un 81%, siendo el tercer sector de mayor crecimiento. Observando desde fines de 2004, cuando terminó su recesión sectorial, y el proceso de expansión de las ramas industriales se ligó más a la inversión y menos al uso de capacidad instalada ociosa, se trató del sector de mayor crecimiento (20% anual). Esto pone en cuestión otro elemento del discurso oficial, que insistió sobre

el relegamiento de la actividad especulativa. Existió una tendencia en la región del capital trasnacional a retirarse del sector de servicios, que se vio intensificada en Argentina debido a la modificación de los precios relativos descrita en el capítulo anterior (Burachik et al., 2010). El sector financiero fue uno de los que permitió al capital local expandirse, aprovechando las oportunidades de negocios ligadas a la colocación de los títulos públicos y, más adelante, el financiamiento del consumo en el contexto de salarios estancados (la inversión se financió básicamente con las ganancias).

Por su parte, la producción primaria (agropecuaria, pesca y minería) mostró una expansión relativamente menor, cercana al 20% de punta a punta. Este menor dinamismo no debe confundirse con un debilitamiento relativo del sector. Tal como describimos antes, la expansión de la economía dependió cada vez más de la generación de un superávit comercial externo por parte de estas ramas. En este sentido, el poder de veto estructural de este sector creció a lo largo de este período: en caso de negarse a producir o vender, estas ramas podrían dificultar la expansión del resto de la economía, y con ello, la generación de empleo. Este poder fue aprovechado por el capital en 2008. La expansión de estas ramas se vio favorecida por la fuerte mejora de los precios internacionales, lo que llevó a algunos analistas a sostener que se trató de un simple “viento de cola”. Sin embargo, el impacto de esta mejora de precios estuvo mediado por su efecto en el superávit comercial y la apropiación parcial por parte del Estado mediante retenciones. Que a través de ambos superávits esto permitiera una expansión de otras ramas y la generación de empleo dependió fuertemente de la estructuración de las políticas económicas resultante de los gobiernos de Duhalde y Kirchner (Schorr, 2012a).

La gigantesca reestructuración regresiva provocada en el marco de la crisis bajo el programa del GP significó un fuerte ajuste social en las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo (sección 1 del capítulo 4). Una vez que el costo laboral, principal (aunque no único) determinante de la ganancia del capital, fue encogido a un mínimo histórico y se logró asegurar un horizonte de estabilidad previsible en la recuperación del mismo, el capital encontró tentador aplicar sus recursos a la valorización mediante la producción (Cantamutto y Pérez Artica, 2008; Cantamutto, 2012b). La demanda externa y la de las clases dominantes fueron las fuentes de realización de esa ganancia (Raffo y

Lozano, 2006). Las mejoras distributivas que operaron en este subperíodo fueron resultado de este proceso, y no su causa.²⁴²

A medida que el capital requería de valorizarse en la producción, alentó la demanda de fuerza de trabajo, lo que produjo una disminución sostenida de la desocupación, pasando 17.8% de la población económicamente activa en II-03 al 8% en II-08. Esta nueva dinámica del mercado laboral, como era de esperarse, supuso una presión ascendente sobre los deprimidos salarios. Sólo cuando estas nuevas condiciones de valorización fueron puestas en marcha, y el proceso de inversión comenzó a elevar relativamente la productividad media, el capital estuvo en condiciones de permitir una lenta recuperación de los salarios, que, sin embargo, nunca alcanzó los niveles medios previos a la crisis (Graña y Kennedy, 2008, 2010; E. López y Cantamutto, 2013).²⁴³

Tanto el salario medio real como el mínimo real alcanzaron su máximo en la segunda mitad de 2006, estabilizándose a partir de allí (ver gráfico 12 del capítulo 6). Pero mientras que el salario mínimo duplicó su valor real de 2001, el salario medio se estancó en el nivel de finales de la Convertibilidad. Esto merece tres comentarios. Primero, es necesario resaltar que éste es un nivel *bajo* en términos históricos: el salario medio real de II-08 tenía un poder adquisitivo 37% menor que en 1974 (ver gráfico 14 del capítulo 6). Este dato constituye una *continuidad central* del modo de desarrollo abierto con la dictadura, que desplazó la importancia de la demanda asalariada como factor de impulso a la acumulación (Cantamutto y Costantino, 2014; Kennedy, 2014).

Segundo, durante el período en cuestión, se registraron aumentos de productividad, que implican mayor cantidad de producto por cada trabajador: esto es,

²⁴² No desarrollamos aquí la discusión, pero entendemos resulta por completo inadecuado el planteo de ciertos autores que tratan de resaltar el impulso de la demanda agregada como determinante de la acumulación (Amico, Fiorito y Hang, 2011; Amico, 2008c; Rapetti, 2005). El planteo marxista clásico toma a la acumulación como un todo, que involucra tanto la esfera de la producción como la de circulación (Marx, 1981; Shaikh, 2006). No hay, entonces, suposición de que la plusvalía –determinante de la ganancia– se determina sólo en la producción, sino que debe realizarse en el mercado, es decir, encontrar una demanda efectiva. El sesgo keynesiano de estos autores pretende hacer recaer todo el peso de la explicación en el comportamiento de esta última (Vernengo, 2011), omitiendo un tratamiento minucioso de la ganancia como determinante de la acumulación.

²⁴³ Desde 2006, el instituto oficial de estadísticas (INDEC) fue intervenido, y el relevamiento del índice de precios al consumidor modificado en 2007. Esto produjo una sistemática subestimación de la inflación real, lo que induce a no pocos problemas para la discusión de las tendencias económicas (Lindenboim y Müller, 2008). En esta tesis, para el cálculo de inflación se empalmó la estimación del INDEC con estimaciones del instituto CIFRA de la CTA, el CENDA y el informe del Congreso Nacional. Los salarios reales fueron deflactados por el índice resultante de esta corrección.

incluso cuando se le pagara lo mismo que en 2001, cada trabajador producía más que en ese año, habiendo por lo tanto aumentado la tasa de explotación. Tercero, durante el período de expansión del producto, mientras los salarios se recuperaban, el capital se apropió de una masa de valor creciente. Los tres comentarios abonan al hecho de que la fuerza de trabajo en Argentina, aún con la recuperación –en salarios y empleo– experimentada en este período, continuó superexplotada (Félic y López, 2010, 2012; Félic, 2008; Graña y Kennedy, 2007a; Kennedy, 2014).²⁴⁴

Si bien esta mejora del salario mínimo respecto del medio redujo parcialmente la heterogeneidad del mercado de trabajo, las diferencias persistieron (E. López y Cantamutto, 2012): mientras los asalariados registrados del sector privado alcanzaron el nivel de 2001 a principios de 2005, e incluso lo superaron levemente, los ocupados en el sector privado no registrados aún ganaban el 86% de aquel salario en II-08. Los trabajadores ocupados en el sector público, por su parte, ganaban el 74% de lo que ganaban en 2001. La informalidad alcanzaba aún a dos de cada cinco trabajadores.

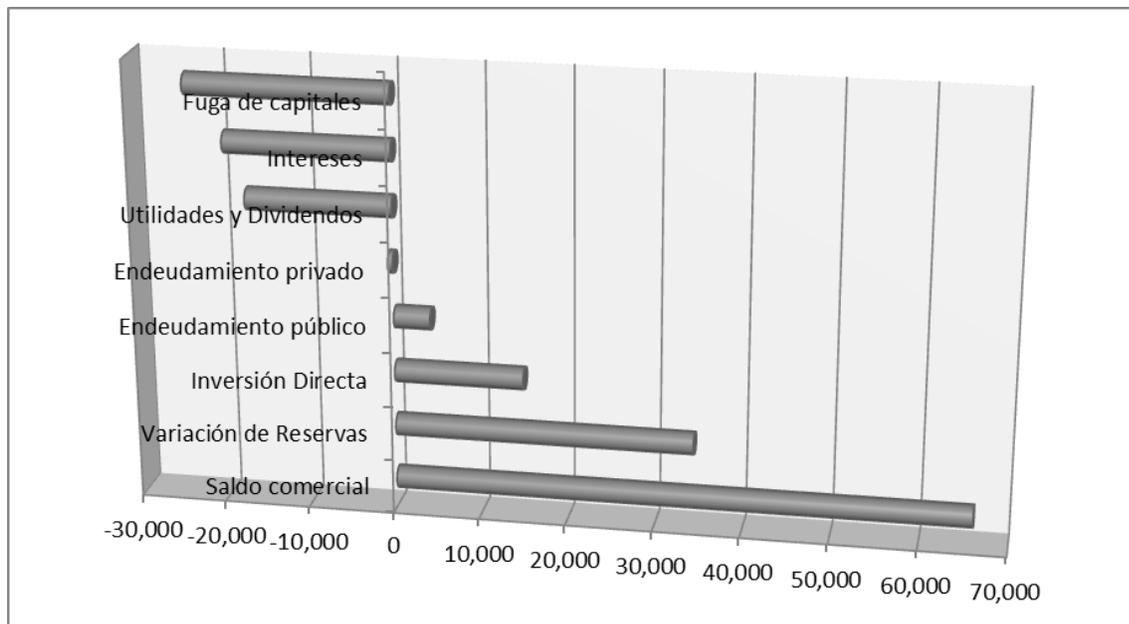
La situación mostró un peor desempeño en dólares: debido a que la devaluación fue mayor a la inflación, para II-08, el salario medio alcanzó el 79% de su valor de 2001 y el mínimo, el 59% (ver gráfico 12 del capítulo 6). El tipo de cambio nominal, tras la megadevaluación de 2002, rondó los 2.8 pesos por dólar en 2003 y se estabilizó relativamente en el nivel de los 3 pesos por dólar hasta el final del período analizado. El retraso de los salarios en dólares tiene pleno sentido en el marco del tipo de cambio real alto como la política pública central para fomentar la expansión de la actividad económica: ante la ausencia de otras políticas activas y coordinadas, el impulso a las ramas transables dependía de este deterioro (Cantamutto, 2012a; Castells y Schorr, 2015; Schorr, 2013).

Si bien los precios internos continuaron aumentando en el período, el tipo de cambio real multilateral se mantuvo elevado (más que duplica su valor de 2001), e

²⁴⁴ Usando las precisas estimaciones de Lindenboim, Kennedy y Graña (2011), la participación de la masa salarial en el producto rondaba el 38% en 2008. Es decir, tras 6 años de recuperación económica y del mercado laboral, el capital se apropiaba de un 62% del valor total producido. Considerando que, en el período en cuestión, los propietarios –pequeños, medianos y grandes– del capital no superan el 4% de la población económicamente activa del país (Cantamutto y Cuevas Valdés, 2013), no resulta difícil comprender el nivel de injusticia de esta distribución. No podemos dejar de reconocer que una parte no trivial del producto apropiado por el capital no queda en manos de los capitalistas nacionales, debido a los múltiples mecanismos de transferencia de plusvalor al exterior.

incluso levemente ascendente, debido a la revaluación de las monedas en las economías socias del país. Esto permitió mantener la competitividad externa aún en un contexto nacional inflacionario. Debe insistirse, no obstante, que debido a la baja productividad internacional de Argentina, el capital valorizado en el país pagó salarios reales bajos en dólares (Graña, 2009; Lindenboim, Kennedy y Graña, 2011a). Para poder garantizar una tasa de ganancia elevada, se compensó la falta de productividad con bajos salarios y devaluación de la moneda (Féiz y López, 2012). La combinación de bajos salarios en términos internacionales, un tipo de cambio multilateral relativamente alto, altos precios de los *commodities*, sumados a la demanda de Brasil de bienes manufacturados – básicamente, como dijimos, automóviles- y de China y la Unión Europea por bienes primarios, componen el cuadro que explicó el superávit comercial.

Gráfico 8. Fuentes y usos de los recursos externos, en millones de dólares, 2003-2007



Fuente: elaboración propia con datos de Mecon.

Como se puede ver en el gráfico 8, la constelación de fuentes y usos de los recursos externos de este período es una versión magnificada del orden constituido en el período analizado en el capítulo 4 (ver gráfico 7). El superávit comercial –impulsado por las ramas ya indicadas- alcanzó una magnitud superlativa, que permitió desplazar al futuro la restricción externa al crecimiento. La IED, dirigida a las actividades ya

señaladas, contribuyó también con recursos externos. Debemos insistir en el poder estructural que este comportamiento confiere a las fracciones del capital ubicadas en estas actividades productivas exportables.

Como se puede notar en el mismo gráfico, y contra las suposiciones del discurso oficial, el Estado continuó endeudándose en el exterior, aunque esta dinámica ya no cumplía el mismo rol que en la crisis, dado que la consistencia macro externa estuvo garantizada por el comercio y la IED. Hasta el año 2007, el BCRA hizo un significativo uso de sus recursos para pagar deuda externa –incluyendo la cancelación anticipada con el FMI en enero de 2006-, al igual que las empresas públicas. El gobierno nacional y los locales, en cambio, sostuvieron la lógica de endeudamiento de los años previos.

El endeudamiento estatal se explica por la renovación de deuda en condiciones desventajosas. Las tasas de interés internacionales se encontraban en un sostenido aumento hasta 2007, cuando estalla la crisis hipotecaria en EUA. En ese momento, los bonos del Tesoro estadounidense pagaban el 4.5% anual de interés. El riesgo país, por su parte, tuvo un crecimiento hasta noviembre de 2003, cuando alcanzó los 6,378 puntos, para descender luego a un valor medio de 5,200 puntos durante 2004. Una vez que empezó la negociación del canje de deuda, la prima de riesgo volvió a incrementarse hasta alcanzar los 6,700 en junio de 2005, lo que mostraba al chantaje como primera reacción del capital financiero ante la propuesta argentina. No obstante lo anterior, y como se puede ver en el gráfico 1 (capítulo 3), una vez completado el canje, el riesgo país se desplomó a menos de 500 puntos básicos, un nivel equivalente al EMBI+ del conjunto de la periferia. A partir de allí, promedió unos 400 puntos hasta el final el estallido de la crisis internacional.

Volviendo al gráfico 8, se puede decir que, de conjunto, estas tres fuentes (saldo comercial, IED y endeudamiento público) explican la posibilidad de acumular reservas internacionales en el BCRA, que pasaron de casi US\$10,000 millones en 2003 a cerca de US\$48,000 millones en junio de 2008. La elección de acumular reservas no fue azarosa: tal como Argentina vivió en 2001/02, las coyunturas de salida de capitales, en contextos de apertura financiera, han provocado caídas aceleradas de las reservas, que impulsaron a devaluaciones no controladas de las monedas nacionales (CEPAL,

2012).²⁴⁵ La acumulación de reservas apareció como una forma de *precaución* ante problemas de liquidez externa (Aizenman y Lee, 2005; De Gregorio, 2011).²⁴⁶ Visto desde un punto de vista alternativo, la acumulación de reservas como factor preventivo representó un enorme costo de oportunidad frente a aplicaciones productivas o sociales urgentes para la región (Toussaint, 2008).

Los usos de los recursos externos tampoco mostraron novedad respecto de 2002: se repartieron entre los pagos de intereses de deuda, la remisión de utilidades y dividendos, el desendeudamiento privado y la fuga de capitales. Los dos primeros usos se corresponden con la posición dependiente del país, que exporta excedente bajo la forma de distintas retribuciones al capital extranjero (Treacy, 2015). El desendeudamiento se correspondió con la sustancial suba de la tasa de ganancia del capital. Llamamos la atención sobre la fuga de capitales, que promedió unos US\$4,755 millones por año, puesto que se da en un contexto de valorización productiva del capital: incluso con las condiciones más favorables para la acumulación, el capital optó por atesorar parte de los recursos en el exterior, quitándolos de la circulación nacional. Para dar un parámetro de comparación del costo social de esta fuga, el presupuesto del plan JJHD del año 2002 fue de unos US\$ 43 millones (calculado con el dólar a 2.8 pesos), menos del 18% de los recursos fugados anualmente.

Finalmente, cabe hacer algunos señalamientos respecto del superávit fiscal. Tal como explicamos (sección 1 del capítulo 4), el saldo positivo de las cuentas del Estado dependía por el lado de los ingresos de la reactivación económica –que impactaba a través del IVA- y de las retenciones a las exportaciones, y por el lado de los gastos, del ahorro por bajos salarios reales de los empleados públicos y por no pago de parte de la deuda. Durante el período analizado no se realizó ninguna modificación relevante de la estructura tributaria. En tanto la economía y las exportaciones continuaban creciendo, las fuentes de recaudación mantuvieron su dinámica ascendente.

²⁴⁵ La acumulación de reservas es una tendencia mundial (Hur y Kondo, 2012), protagonizada por Asia oriental y el Pacífico, que ha reunido para 2008 el 53% de las reservas mundiales. América Latina y el Caribe posee para ese año el 11% de las reservas, y ha mostrado un dinamismo de acumulación menor a Oriente Medio y el Norte de África (cálculos basados en datos del Banco Mundial).

²⁴⁶ Si bien la tendencia general de los países no ha sido utilizar las mismas ante estas coyunturas (Gallagher y Shrestha, 2012), el gobierno argentino las aprovecharía durante el año 2008, conteniendo la salida de capitales en el marco del conflicto, para preservar el nivel del tipo de cambio.

El problema se plantearía por el lado de los gastos. El retraso de los salarios (que se mantenían un 26% debajo de su valor de 2001) implicaba un conflicto sistemático con los empleados estatales, y contradecía el discurso oficial. Sin embargo, en tanto se mantenían retrasados, no constituían la principal fuente de presión por los recursos. En cambio, al articular la salida de la cesación de pagos con el canje de 2005, las salidas por pagos de intereses comenzarían a crecer nuevamente, originando una presión sobre las cuentas públicas.²⁴⁷ Se suma, además, la presión creciente por las transferencias a las empresas privatizadas para sostener las tarifas congeladas.²⁴⁸ Finalmente, el aumento de la inversión pública para impulsar la actividad también implicaba un creciente costo fiscal. El superávit fiscal del período quedaría atrapado entre estas presiones.

De conjunto, se puede señalar que el período aquí analizado reúne el momento “virtuoso” del PRE en esta nueva fase. El aumento de los precios internacionales de los *commodities* junto a una reducción sustancial del costo laboral local, permitieron la expansión del capital productivo exportador, en particular, las ramas asociadas a ventajas comparativas (Wainer, 2013). El saldo comercial positivo originado por estas ramas permitió la expansión de la industria y la construcción, con un fuerte impacto en la contratación de fuerza de trabajo (Belloni y Wainer, 2014a). El Estado intervino intercediendo entre las fracciones del capital de modo de compensar a las empresas prestadoras de servicios para que mantengan bajas sus tarifas, subsidiando así la tasa de ganancia de la producción transable. Junto con los pagos al capital financiero y la inversión pública para impulsar la actividad, el costo fiscal se volvía creciente, poniendo límites a la recuperación salarial pública. En el ámbito privado, esta recuperación apenas alcanzó los niveles de la crisis de 2001. El capital productivo, que obtuvo ganancias récord en el período, no sólo destinó recursos a la acumulación, sino que aprovechó para desendeudarse y atesorar una gran cantidad de excedente.

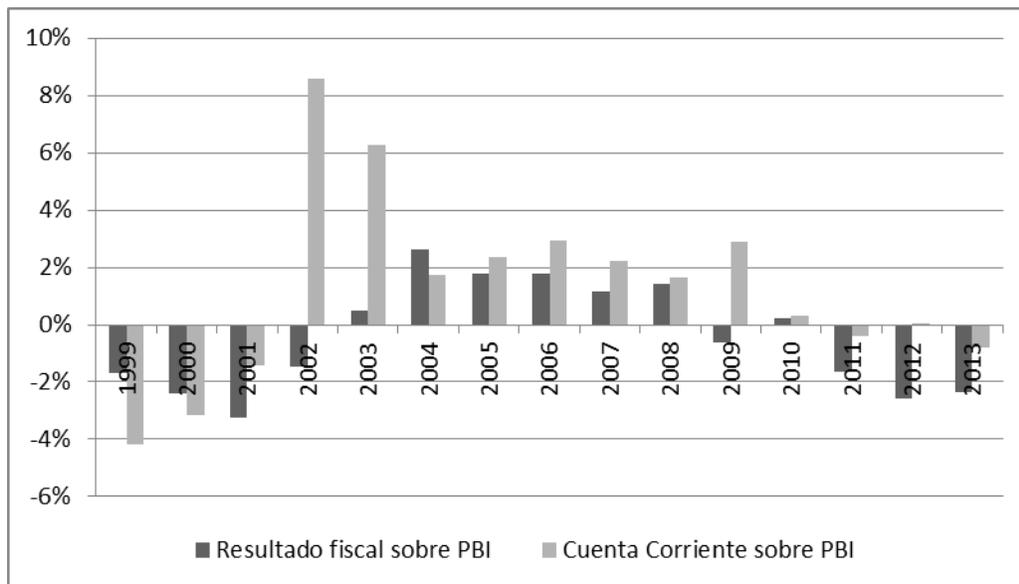
El gráfico 9 resume la lógica de los superávits gemelos, la clave del nuevo PRE. El conjunto de políticas macroeconómicas, explicadas en la sección 2 del capítulo 4, tuvo un claro efecto en la generación de un amplio superávit comercial y de ello, en la

²⁴⁷ Entre 2003 y 2007, los pagos de intereses crecieron un 139%. Pasaron de representar el 9.6% del gasto corriente del sector público nacional, a un 12.2% entre esos años.

²⁴⁸ En 2007 estas transferencias representaban un 1.8% del PBI, proporción que pasó al 3% en 2008 (Bona, 2012).

cuenta corriente, que desplazó la restricción externa al crecimiento. Si bien el nivel alcanzado en 2002 y 2003 se redujo con posterioridad, se mantuvo excedentario hasta 2009. El ajuste de las finanzas públicas indujo también a un exceso de recursos, que se sostuvo hasta 2008, y que permitió el permanente arbitraje entre clases y fracciones del BEP, como veremos a continuación. El contraste con los déficit gemelos de la crisis no podría ser mayor; sobre el agotamiento de este aspecto del PRE, ver capítulo 6.

Gráfico 9. Resultado fiscal y de la cuenta corriente respecto del PBI



Fuente: elaboración propia con datos de MEcon y BM.

Para poder otorgar ulteriores mejoras salariales, sin reducir las ganancias ni el atesoramiento, el capital requería de incrementar la productividad. Para ello, necesitaba mantener la expansión de la acumulación y la inversión, lo que lo llevaba a presionar por resolver la restricción del endeudamiento, que además favorecía al capital financiero. Pero esto implicaba mayores salidas de recursos en la balanza de pagos y en las cuentas fiscales. Ambos problemas ponían mayor presión sobre el intercambio comercial de las ramas excedentarias, reforzando la presión primarizante. Al mismo tiempo, se necesitaba sostener las tarifas de los servicios congeladas, pero esto incrementaba las necesidades de transferencias fiscales. El capital valorizado en estas ramas, no obstante, sujeto a la negociación permanente de esta mediación estatal, no invirtió en expandir la actividad al

ritmo del resto de la economía. Esta pérdida de competitividad sería visible en particular en el sector energético, cuyo superávit comercial iría erosionándose. Como se ve, sostener la acumulación bajo este esquema de políticas implicaba una serie de presiones cruzadas muy difíciles de arbitrar (E. López, 2013; Varesi, 2013). La intermediación estatal permanente era una necesidad de la valorización del capital.

2. Políticas públicas

Como desarrollamos en la sección 3.1, el principal desafío de Kirchner al asumir la presidencia era construir legitimidad, y luego, una fuerza política. El programa de gobierno impulsado por el GP, tal como se estructuró en el período previo, mostraba ser insuficiente para contener las demandas populares, y por lo tanto, no garantizaba la estabilidad y previsibilidad requeridas para considerarse un nuevo orden político. El débil caudal de votos, en el marco de la crisis de representación existente, obligaba a buscar apoyos por fuera de la institucionalidad procedimental.

En este sentido, el flamante presidente recuperó el régimen discursivo de sus antecesores desde el primer momento, revalorizando el lugar del Estado como garante de la inclusión social, como promotor del bienestar en tanto representante de la comunidad política, y por ello, con potestad para intervenir sobre los procesos económicos.²⁴⁹ De esta forma, se ponía al Estado –y más en particular, al gobierno- del lado del pueblo, como su genuino representante, con derecho a alterar el supuesto automatismo de mercado que el neoliberalismo había elevado a la categoría de supremo ordenador del sistema social. El presidente hablaba a “vecinos”, “ciudadanos”, “argentinos”, el “pueblo argentino” posicionándose como uno más entre ellos, al que le tocaba un rol particular de conducción. La operación consistía en profundizar el sesgo discursivo de sus antecesores, modificando el campo de antagonismos, al correr al Estado del lugar del enemigo, y explicar su propio rol como ajeno al resto de la repudiada “clase” política.

Tras la crisis –que se situaba casi en exclusivo en 2001-, el nuevo presidente venía a completar la “salida del infierno” –usando una imagen de fuerte connotación

²⁴⁹ Sobre elementos discursivos de Kirchner, ver sección 1.3.2 del capítulo 1. Dado que el discurso kirchnerista ha sido extensamente analizado y no creemos aportar mayor novedad sobre el respecto, reproducimos aquí las ideas centrales que la bibliografía especializada ya explicó (Barbosa, 2012; Biglieri y Perelló, 2007; Fair, 2009b; Muñoz y Retamozo, 2013; Muñoz, 2010; Patrouilleau, 2010).

religiosa, ya usada por Duhalde en reiteradas ocasiones.²⁵⁰ De lo que se trataba era de reconstruir la nación, la patria amenazada desde adentro en una democracia real, sustantiva. En este sentido, el neoliberalismo era responsabilizado como fuerza contraria a esta promesa de plenitud, y los actores que lo encarnaban podían cambiar según la ocasión: las corporaciones, los militares, el capital especulativo, etc. El neoliberalismo era leído en dos tiempos (Aboy Carlés, 2005): como el régimen de políticas de la Convertibilidad, pero también como la trayectoria inaugurada con la dictadura militar de 1976. Esto permitía recuperar la cadena de equivalentes construida por organizaciones populares como HIJOS o la CTA desde mediados de los noventa, donde la vulneración de los derechos sociales y económicos era homologada en una continuidad trazada por la exclusión a las clases populares (ver sección 4.2.2 del capítulo 3). *Este componente de relectura de la historia que admitiera esta equivalencia entre derechos no estaba presente en el discurso de Duhalde, y compone quizás la novedad en este respecto.* La cadena equivalencial encontraba ahora una enunciación desde el Estado, alterando así las relaciones con las organizaciones populares.

Frente a lo anterior, el nuevo gobierno sostenía un tono redentor de la comunidad, de la patria vulnerada: la restitución de los derechos ya no sólo políticos, sino sociales, era la clave para completar la tarea democrática. Aunque representaba a toda Argentina, se identificaba con *el pueblo* de la resistencia al neoliberalismo. Esto no significaba, sin embargo, encarnar una radicalidad extrema: recuperando significantes presentes en el campo popular, especialmente entre las organizaciones de origen nacional-revolucionario, se dio nuevo brío a la propuesta del GP puesta en marcha por Duhalde.²⁵¹ Así, la integración social pasaba centralmente por el empleo genuino, que

²⁵⁰ Tanto Barbosa (2012: 39) como Muñoz (2010: 204) hablan de la etapa de Duhalde como un “intento”, como una prueba frustrada por lograr un orden político, que sólo llegaría con Kirchner. Esta interpretación centra relativamente el eje de análisis en el proyecto personal del caudillo bonaerense, diluyendo la continuidad más relevante –y previa- sobre las fracciones de clase habían logrado articular un nuevo proyecto social y orden político. Los elementos del orden kirchnerista que se hallan presentes antes no constituyen un “antecedente” o un “ensayo”, sino las primeras partes de un proceso más amplio. Así como para Duhalde era imposible aplicar el plan del GP sin pagar un costo político, para Kirchner era igualmente imposible buscar legitimidad con base en un programa regresivo (no les funcionó a sus competidores políticos). Aunque a nuestro juicio el análisis no termina explicar el rol de Duhalde y sus limitaciones, debemos señalar que el trabajo de Muñoz (2010) aporta mucho de esta discusión.

²⁵¹ Es por esto que entrevistados ligados a este tipo de organizaciones –como Cornejo o Moler- entienden que el gobierno kirchnerista forma parte de la construcción popular iniciada en la resistencia de los noventa. Asimismo se expresaron entrevistados ligados al PS –Cimatti y Rivas- y militantes de la

sería responsabilidad del capital productivo, impulsado por el propio Estado de modo “inteligente”, reconstruyendo una “burguesía nacional” que tomara esas tareas. La remisión al primer peronismo como modelo de desarrollo reanimaba viejas ideas sobre reindustrialización guiada por el mercado interno, trabajo formal que diera protección social y permitiera la inclusión en el consumo. Esta reelaboración programática se conoció como neodesarrollismo, que buscaba retomar la industrialización –coartada por el neoliberalismo- en la asociación entre Estado y capital, bajo el impulso de la demanda externa (Félez y López, 2012; Félez, 2012b; C. Katz, 2014).²⁵²

Para hacer creíble este discurso, Kirchner impulsó con celeridad una serie de políticas públicas y gestos políticos que lo marcaron como diferente de su antecesor. De gran acuerdo en la bibliografía y las entrevistas realizadas para esta tesis, se señalan como más relevantes las que se explican a continuación.

La primera intervención del gobierno ocurrió a dos días de la asunción, cuando el presidente en persona se trasladó a Entre Ríos para negociar con los docentes en protesta, lo que resultó en la solución pacífica del conflicto. El gesto de Kirchner se magnificaba frente a sus antecesores: el primer acto del gobierno de De la Rúa fue reprimir una protesta en Corrientes (sección 3 del capítulo 3), y Duhalde se tuvo que retirar anticipadamente por el impacto de la represión en Puente Pueyrredón (sección 3.1 del capítulo 4). El nuevo presidente inició así un tratamiento diferente de la protesta social: al decirse parte de los excluidos, no podía continuar la represión sin perder credibilidad, y por ello ordenó abandonar la gestión represiva de la protesta.

Este cambio de gestión del conflicto fue muy relevante, especialmente por su impacto en las organizaciones piqueteras (Masseti, 2006), varias de las cuales lo leyeron como un gesto significativo. Sin embargo, no debe magnificársele: lo que se detuvo fue la confrontación abierta y directa, y aún así este gobierno tuvo un promedio anual de 212.2 muertes originadas en la represión, por encima de los valores de los gobiernos de la Alianza y de Duhalde (CORREPI, 2013). Asimismo, cuando comenzaron en 2004 las movilizaciones por la “inseguridad” de la mano de Juan Carlos

Cámpora -Stoikoff. Para otros entrevistados, lo que el gobierno hizo fue, de una u otra forma, pervertir esas demandas, quitarles potencia crítica y de cambio –Gandolfo, E. López, Vázquez García.

²⁵² Estas propuestas tenían entre sus defensores teóricos más conspicuos al Grupo Fénix, un agrupamiento de intelectuales aparecido en el año 2000, críticos del régimen de Convertibilidad. Aldo Ferrer y Abraham Gak fueron posiblemente sus principales referentes.

Blumberg, el gobierno respondió aceptando un endurecimiento de las penas, a través de la ley N° 25,886. Asimismo, aparece en este período la primera versión de la ley Antiterrorista (N° 26,734), en junio de 2007, un pedido explícito de EUA en su política de guerra global al terrorismo. Esta ley, que fue modificada una gran cantidad de veces en los años siguientes, serviría de marco para amenazar a la protesta social como actividad que cuestionara la seguridad nacional. No obstante, reiteramos, se detuvo la confrontación directa, y se apostó por el diálogo, ya no mediado por la Iglesia, sino de modo directo: Kirchner convocó al diálogo personal con él a referentes sociales (por ejemplo, se reunió con De Gennaro, de la CTA, a días de la asunción).

Una segunda política adoptada rápidamente (a los 3 días de asumir) estuvo en impulsar el relevo de toda la cúpula de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal, responsables de la represión no sólo durante la dictadura sino durante los gobiernos democráticos. El fuerte gesto apuntaba a desplazar a la dirigencia del aparato represivo ligada a los crímenes de lesa humanidad, y mostrar el poder del Poder Ejecutivo como comandante en jefe de estas fuerzas. Esto ocasionó no pocos resquemores, que fueron leídos como “revanchismo”.²⁵³ Los gestos no terminarían ahí. El 24 de marzo de 2004, en el acto en el Colegio Militar, Kirchner ordenó al flamante Jefe del Estado Mayor del Ejército, Roberto Bendini, descolgar los cuadros de los dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone, quitándolos como referencias para los nuevos militares. En esa misma ocasión, el presidente pidió “perdón de Estado por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia las atrocidades cometidas por los represores ilegales de la última dictadura militar” (La Nación, 25/3/04), reconociendo por vez primera la responsabilidad estatal con la impunidad.

Se trataba de una nueva política respecto de los DDHH, que se convertirían parte nodal del discurso sobre las políticas de Estado. La designación de Eduardo Luis Duhalde en la secretaría de DDHH del ministerio de Justicia fue un gesto fuerte para las organizaciones, por ser éste un viejo y reconocido referente.²⁵⁴ En 2004, se creó el Museo de la Memoria en el ex centro de detención clandestina de la Escuela de

²⁵³ El 6 de julio de 2003, la conservadora conductora televisiva Mirtha Legrand le asestó al flamante presidente la visión de una parte del establishment: “algunos dicen que con usted se viene el zurdaje”.

²⁵⁴ En 2006, Duhalde prologaría la reedición oficial del informe de la CONADEP, **Nunca más**, donde se defendería la tesis de que el golpe fue la forma de instituir régimen económico, lectura impulsada por varias de las organizaciones de DDHH (Llovich y Bisquert, 2008).

Suboficiales de Mecánica de la Armada (ESMA), inaugurando la memoria como política oficial de Estado (Llovich y Bisquert, 2008). En 2006, el 24 de marzo pasó a ser un feriado nacional, el día de la memoria. Con el impulso explícito del presidente, en agosto de 2003 se aprobó el proyecto de la diputada del MST Patricia Walsh (ley N° 25,779) para la anulación de las leyes de Punto final y Obediencia debida. Esto daría inicio a un amplio proceso de juicios por los crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles según los convenios internacionales ratificados por el país, lo que le permitió ganar un fuerte apoyo por parte de las organizaciones de DDHH.²⁵⁵ Hebe de Bonafini, referente de peso simbólico indiscutible, señalaría “me equivoqué, Kirchner no es igual a los otros”.²⁵⁶

En junio de 2005, Kirchner designó a Nilda Garré como embajadora en Venezuela, una conocida militante en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Pero el gesto se magnificó cuando a fines de ese año la embajadora es nombrada ministra de Defensa de la Nación. Desde este cargo, Garré impulsó diversas medidas para democratizar las FFAA (en el marco de una ley aprobada durante el gobierno Alfonsín), vetó el ascenso de militares involucrados en delitos de lesa humanidad, impulsó la igualdad de género, incorporó a la formación de los oficiales cursos obligatorios de DDHH. Esta política encontraba eco en la designación de León Arslanian (ex juez del tribunal del Juicio a las Juntas de 1985) como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante la gobernación de Felipe Solá (2004-2007). Arslanian puso en marcha políticas tendientes a sanear a la policía bonaerense, conocida por las denuncias de corrupción y abusos entre sus filas, y la presencia de efectivos involucrados en los delitos de lesa humanidad de la última dictadura.²⁵⁷

²⁵⁵ Los pedidos de juicio comenzaron a elevarse en 2005, y desde 2007 se inician. Hasta diciembre de 2013, se registran 1,069 procesados, de los cuales 520 cuentan ya con una condena por esos juicios. Se pueden consultar datos actualizados en: <http://www.mpf.gob.ar/lesa/recurso/>

²⁵⁶ Dal Maso (2004) señaló cómo estas políticas movilizaron también apoyos intelectuales de figuras reconocidas del peronismo de izquierda, como Horacio González o Nicolás Casullo, que recuperaron la actualidad de los debates de los setenta. En la prensa conservadora se acuñó la idea de que el gobierno representaba entonces una nostalgia desfasada de esa época, el “setentismo” (La Nación, 16/8/03). Carlos Kunkel, un viejo militante de la izquierda peronista, que asume como subsecretario de la presidencia, era el representante más conspicuo de esta tendencia dentro del gobierno (La Nación, 10/12/03).

²⁵⁷ Ante los pedidos por remover de la fuerza a estos efectivos, el gobierno provincial respondió que era necesario conservar la “gubernabilidad de la fuerza”. A pesar de reconocer la presencia de represores, sólo jubiló a 36 –en lugar de expulsarlos sin beneficios. Arslanian diría al respecto que “Nosotros tenemos sólo el 20 por ciento del control de la fuerza” (Graziano, 2013: 14).

A pesar de la importancia simbólica del reconocimiento de las demandas y de los referentes de los organismos de DDHH, los avances en la judicialización y los intentos por modificar la composición de las fuerzas de seguridad, el aparato represivo mantuvo muchas de sus prerrogativas. En el marco del juicio al represor Miguel Etchecolatz, en septiembre de 2006 fue desaparecido por segunda vez el testigo clave Jorge Julio López, como impactante acto de amenaza. La lenta e insuficiente reacción del Estado habría mostrado los límites de su compromiso con esta política (Graziano, 2013). No obstante, la radicalidad del cambio en la materia contrastaba fuertemente con los gobiernos previos, y esto le valió al gobierno un amplio e innegable reconocimiento.

Resulta de mayor interés resaltar este punto: independientemente del compromiso (o la falta de él) de Néstor Kirchner con la lucha por los DDHH antes de llegar al gobierno, o de su afinidad ideológica con las interpretaciones en disputa, cuestiones ambas de interminable discusión, los hechos concretos fueron las políticas y gestos recién relatados. Fueron éstos los que le ganaron el apoyo de las organizaciones de DDHH: imputar la cooptación de sus referentes como simples efectos de una transacción resulta inconsistente con la larga trayectoria de resistencia y compromiso de aquellos.²⁵⁸ Se trata de un caso testigo, de mayor relevancia y relativamente menos estudiado en esta clave (como sí se ha hecho con los MTD), donde se pone en juego la interpretación del kirchnerismo como construcción hegemónica: el apoyo de la mayoría de los y las militantes de los DDHH fue genuino, no mediado por recursos monetarios, y se trató de un respaldo novedoso, tras *décadas* de lucha. Y es de destacar que el efecto no se restringía a aquellas figuras que expresaban su apoyo: la transferencia simbólica resultante le extendía al gobierno el prestigio con que un amplio sector de la población consideraba a los y las referentes del movimiento.²⁵⁹

²⁵⁸ La entrevista para esta tesis con el Hugo Cañón –ex fiscal federal, reconocido referente de la lucha contra la impunidad- fue particularmente ilustrativa en expresar esta clave de interpretación. En igual sentido, aportaron las entrevistas a Kenis, Martínez y Moler, todos actores involucrados, desde distintos lugares, con la defensa de los DDHH.

²⁵⁹ Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S., APDH y el CELS son algunas de las organizaciones más relevantes que dieron su apoyo al gobierno y sus políticas. Esto no significa que todo el arco de los DDHH se alinearía directamente con el kirchnerismo. Varias de las antes mencionadas tuvieron un apoyo más o menos crítico (CELS, quizá el más evidente). Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y la CORREPI, la escisión de HIJOS, y figuras como Osvaldo Bayer o el premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel (SERPAJ), mantuvieron una posición más independiente del gobierno, siendo críticos de los aspectos irresueltos en la materia. Las divisiones al interior del movimiento de DDHH según la postura respecto del gobierno irían creciendo en el tiempo, al punto de tornarse en fuertes peleas.

Las políticas y gestos no terminaban ahí. Recuperando un reclamo de normalización institucional, junto al repudio generalizado contra la corrupción, Kirchner impulsó una renovación de la Corte Suprema de Justicia. La misma estaba asociada a la impunidad del menemismo, que le había ganado el mote de “Corte adicta. Kirchner, sin conflictos previos con la Corte –lo que quita la hipótesis de represalia- firmó un decreto (N° 222/03) en junio de 2003 donde se modificó el proceso de selección de los jueces de la Corte, limitando las atribuciones del Poder Ejecutivo y abriendo al escrutinio público las candidaturas en cuestión. Además, se dejó abierto el apoyo del gobierno para impulsar juicios políticos a los jueces en el Congreso, lo que funcionó como amenaza creíble. A raíz de estas medidas, se produjo un gran recambio dentro de la Corte, al abandonarla Adolfo Vázquez, Antonio Boggiano, Augusto Belluscio, Eduardo Moliné O’Connor, Guillermo López y Julio Nazareno, reemplazados por Carmen Argibay, Elena Highton de Nolasco, Eugenio Zaffaroni y Ricardo Lorenzetti. Así, se redujo el número de integrantes de 9 a 7, y logrando mayor equilibrio ideológico y de género.

La renovación de la Corte era leída como un enfrentamiento con lo que se consideraba una corporación dentro del Estado, al margen del control público. La política se alineaba con el recambio de la cúpula militar, y se le sumaba la intervención en junio de 2003 del PAMI, contra los intereses del senador por Catamarca y reconocido dirigente sindical Luis Barrionuevo. Como se puede notar, se trató de gestos y políticas en 3 ámbitos diferentes, todos orientados a validar el discurso oficial de pelea contra las corporaciones y la corrupción (Inda, 2012), un conjunto que lo ponía en buenas relaciones no sólo con la militancia de los DDHH, sino con un amplio conjunto de la ciudadanía. La defensa de valores republicanos sobre el bien común y la ética pública formaba parte del proyecto para tramitar las demandas de normalización existentes.

Según las encuestas de opinión de la época, esta renovación y la política de DDHH le generaron una fuerte imagen positiva, que no descendió del 70% el primer año de gobierno (Ollier, 2010). A este proceso es que Cheresky (2004) llamó la constitución de un “electorado poselectoral”, que consistía en lograr una opinión pública favorable sin la mediación de los cuestionados partidos políticos. La imagen del presidente que no respetaba ciertos códigos protocolares de vestimenta o su contacto directo con el público abonaban a esta relación que pretendía presentarse como no mediada.

Respecto del campo popular, Kirchner dio continuidad a varias de las políticas inauguradas por Duhalde, dándoles un formato institucional. En tal sentido, vistos los resultados de la Mesa del Diálogo, se impulsaron dos procesos que de generación de acuerdos tripartitos (capital, trabajo y Estado): la rehabilitación del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (en adelante, Consejo del Salario), y de las negociaciones colectivas de trabajo (Etchemendy, 2010; H. García, 2004; Senén González y Borroni, 2011; Trajtemberg, 2007). La función de este tipo de mecanismos es legitimar la toma de decisiones, más aún cuando implican algún tipo de desacuerdo potencialmente conflictivo, reponiendo el lugar de árbitro entre partes del Estado (Campione, 2008). Se nombró ministro de Trabajo a Carlos Tomada, un abogado laborista ligado a la UOM, un gesto de acercamiento al sindicalismo.

Desde agosto de 2004 (Decreto N° 1,095/04), el gobierno convocó anualmente a reuniones del Consejo del Salario, que había estado inactivo por 11 años. El Consejo estaba compuesto por 16 integrantes por los trabajadores, 16 del capital y un presidente nombrado por el MTESS. Entre los primeros, vale resaltar la presencia de 3 representantes de la CTA, lo que constituía un reconocimiento de la importancia y representatividad de la central, aunque no se le diera el mismo rango que la CGT. Entre los representantes del capital, el Consejo también reconocía sus afinidades electivas, puesto que la mayoría estaba reconocida a la UIA, con 5 representantes: dos lugares para Industriales (más cercanos al gobierno) y tres para el MIA. Pero al mismo tiempo, y a diferencia de las gestiones de Duhalde, se incluyó en el órgano a las 4 organizaciones más importantes del agro.²⁶⁰

Su principal resultado fue determinar los aumentos del salario mínimo, que marcaban una pauta para el conjunto de la estructura de remuneraciones a la fuerza de trabajo. Los resultados de las comisiones de trabajo fueron menos relevantes. A partir de este salario se establecían las diferentes escalas salariales en acuerdos por sector. Así, respecto de las negociaciones colectivas de trabajo, vale resaltar que crecieron de 348 en 2004 a 1,231 en 2008, pasando de involucrar 1,222,000 trabajadores a 3,992,000 en el mismo período (Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social, 2011). Es decir, se

²⁶⁰ Las cámaras patronales con representación en el Consejo eran UIA, CRA, SRA, FAA, CONINAGRO, CACom, UDES, CAME, CACons, ADEBA, Bolsa de Comercio, CEEN. AEA no aceptó la invitación del gobierno a participar “porque no representa a ningún sector” en particular.

amplió la cobertura de los acuerdos estructurados a nivel sectorial (no por empresa), creciendo de modo sistemático también los acuerdos salariales homologados.

Estas iniciativas tenían trayectoria. Por un lado, desde la filiación institucional se seguía la línea de trabajo de diálogo social trazado por Duhalde en concordancia con las propuestas de la OIT.²⁶¹ Pero, por otro lado, se atendía a una demanda explícita del capital.²⁶² En julio de 2003, Kirchner había emitido un decreto (N° 392/03) con un aumento no remunerativo de \$28 por mes, hasta llegar a los \$224 de aumento. En ese momento, la UIA se quejó por el mecanismo utilizado (sin consulta), pero no rechazó el aumento: el gobierno lo estaba reconociendo como horizonte de futuras mejoras la negociación por sectores.²⁶³ En diciembre se repitió el aumento, y el respectivo reclamo de AEA: las asociaciones empresariales reclamaban la negociación por sector.²⁶⁴ *El planteo de un salario mínimo dispuesto en el Consejo (contención) y acuerdos por sector en negociaciones colectivas (racionar aumentos sectoriales) era exactamente lo que el capital estaba reclamando.* Esta lógica se distinguía de las demandas de “shock distributivo” (CTA) o “gran paritaria” (MTA), caracterizadas por mejorías generales.

Se trataba de una respuesta apropiada para reconciliar las demandas de redistribución de los trabajadores con la necesidad de los capitalistas de morigerar los aumentos salariales: se negociaría aquí el salario mínimo, un “piso” para la estructura salarial, que afectaba principalmente a los trabajadores ocupados en peores condiciones. De esta manera, quedaba para la negociación colectiva la definición del salario medio de cada sector. La dinámica básica de la negociación implicaba siempre demandas por parte de los trabajadores de recomposición salarial, que excedían siempre las propuestas de los

²⁶¹ En palabras de Novik en entrevista para esta tesis, “éste es un gobierno muy *oitiano*”.

²⁶² En una entrevista previa con el autor, el Director de Estudios de Relaciones del Trabajo del MTESS, Héctor Palomino, insistió con que esta estrategia fue inducida desde el gobierno. Según el especialista, los sindicatos, tras una década de retrocesos, identificaban la negociación colectiva con un mecanismo para negociar y convalidar peores condiciones de trabajo. Es decir, se encontraban renuentes a reclamar por la negociación colectiva; habría sido el gobierno quien insistió con este mecanismo.

²⁶³ “Como resultado de este sinceramiento salarial, los actores protagónicos de las relaciones laborales, es decir, todas las entidades representativas de los empleadores y los trabajadores, estarán en mejores condiciones de negociar colectivamente con el fin de motorizar, encauzar y optimizar la acción impulsada por el Gobierno Nacional, para la redistribución progresiva del ingreso, especialmente ajustadas a las distintas particularidades y requerimientos de las diferentes actividades, sectores y empresas”, afirmaba el decreto.

²⁶⁴ “Hay que recomponer el poder de compra, porque está claro que hay una postergación en los salarios. Pero debería hacerse por paritarias, no por decreto. Lamentablemente, hasta ahora se ha hecho por decreto”, señaló el presidente de AEA, Luis Pagani (La Nación, 23/12/03).

empresarios.²⁶⁵ La CTA siempre pidió por la canasta básica familiar, monto al que jamás se aproximó el acuerdo. La CGT supo reconocer este horizonte, pero actuó bajo la lógica de que cualquier mejora que se consiga era valiosa. La CEEN y las asociaciones representadas en ella, en más de una oportunidad apoyaron los reclamos de los trabajadores por mayores salarios, votando en contra o absteniéndose junto a la CTA, ante el arreglo de subas menores a las necesarias para alcanzar la canasta básica familiar.

En un brío diferente se encuentra la Ley de Ordenamiento Laboral (N° 25,877), de marzo de 2004, que fue consultada con las centrales sindicales. La nueva ley creaba inspecciones de trabajo, limitaba el uso del período de prueba y la posibilidad de negociar fuera del convenio colectivo (a menos que de allí resultaran condiciones más favorables para el trabajador), y se preveía la renovación automática del convenio anterior ante la falta de un nuevo acuerdo a la fecha de vencimiento. De conjunto, esta ley retrotraía los efectos de la cuestionada ley Banelco, aunque no alteraba los fundamentos de la flexibilización laboral de las leyes de 1991 (ver sección 1 del capítulo 3). En diciembre de 2004, mediante el artículo 4 de la ley N° 25,972 se disponía la prórroga de la suspensión de los despidos sin causa justificada (establecida originalmente por el artículo 16 de la ley N° 25,561), hasta que la tasa de desocupación cayera por debajo del 10%. Esto ocurrió en septiembre de 2007, momento en el que se eliminó esta disposición mediante el decreto N° 1,224/07. Ambas normas fortalecían la capacidad de negociación de los sindicatos, sin obedecer a demandas del capital, como en los casos anteriores analizados.²⁶⁶ En particular, la CGT se vio beneficiada por este nuevo ordenamiento, lo que le valió al gobierno un fuerte apoyo de parte de esta central.

Sin embargo, al momento de asumir, todavía una gran parte de la fuerza de trabajo no se encontraba plenamente ocupada. Por ello es que el plan JJHD mantuvo su crecimiento, hasta alcanzar casi dos millones de beneficiarios en 2003, con un

²⁶⁵ En septiembre de 2004, CACons, CACom, ABA, Bolsa, CRA, UDES, SRA y UIA emiten un comunicado señalando que ya habían dado todo lo que podían. Esta misma sería la actitud en adelante.

²⁶⁶ En abril de 2006 se sancionó la ley N° 26,086, que reconocía la competencia de los jueces laborales para atender los reclamos de los trabajadores en procesos de concurso y quiebra, y la ley N° 26,088, que permitía recuperar las condiciones pactadas a aquellos trabajadores a quienes se les produjera una modificación unilateral y perjudicial de sus condiciones de trabajo. Se trata de las otras dos normas relevantes, favorables a la clase trabajadora, aprobadas en este período.

presupuesto total para ese año de \$3,645 millones (\$150 por mes por beneficiario).²⁶⁷ Sin embargo, el plan tendría a partir de allí una dinámica decreciente de cobertura (ver tabla 2), explicada por la reactivación del empleo, el incumplimiento de los requisitos y por el traspaso a nuevos planes (Fernández Soto, 2009).²⁶⁸

Tabla 2. Beneficiarios del plan JJHD, en miles de personas

Año	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Beneficiarios	574	1,991	1,763	1,526	1,317	949	571

Tomado de Fernández Soto (2009).

De acuerdo con las recomendaciones internacionales, se reformularon en 2004 (decreto N° 1,506/04) los programas de transferencia de ingresos, haciendo una reclasificación de los beneficiarios del JJHD, según las condiciones de *empleabilidad* de los mismos (Faur, Campos, Pautassi y Zimmermann, 2006; Giosa Zuazúa, 2006). Se crean así en 2003 los planes Manos a la Obra, Hambre más urgente y Plan Familias. El primero apuntaba a aquellos beneficiarios en condiciones de emprender por su propia cuenta actividades productivas, individual o colectivamente, aprovechando los supuestos beneficios de conjugar capital financiero y capital social (resolución MDS 1,375/04). Los otros dos apuntaban a aquellos beneficiarios sin cualidades valoradas por el mercado. Todos quedaban en manos del flamante Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Alicia Kirchner, hermana del presidente. Los planes no eran considerados como la forma de inclusión social, sino como un paliativo, siendo la creación de empleo la fuente de redistribución del ingreso (Arcidiácono et al., 2011). De hecho, la recuperación del Ministerio de Desarrollo Social,²⁶⁹ luego de su disolución institucional con Duhalde, operaba como una distribución de funciones con el Ministerio de Trabajo, que quedaba así abocado a la gestión tripartita de las relaciones asalariadas. La

²⁶⁷ Parte de este presupuesto fue financiado con créditos del Banco Mundial (Golbert, 2004), lo que cuestiona seriamente la orientación de este plan, así como las intenciones de autonomía de la política respecto de los dictados de los organismos internacionales de crédito.

²⁶⁸ Si bien la cantidad de beneficiarios se reduce después de la masificación impulsada por Duhalde, en todo el período no vuelve a reducirse a los niveles previos. Según los datos disponibles, para 2008 la cantidad de beneficiarios de planes era más de 6 veces superior a la cobertura de 2001.

²⁶⁹ Este Ministerio adquiere centralidad a partir de 2003, ampliando sus competencias y dependencias (decretos 141/03, 373/04, 2,035/13). Su personal pasó de 533 funcionarios en 2004 a 1,834 en 2013, con un presupuesto que creció en el mismo período de \$2,500 millones a \$35,700 millones.

discriminación de la población atendida por cada Ministerio determinaba sectores empleables –y por lo tanto, gestionados a través de las relaciones laborales en el mercado capitalista- y los vulnerables, a quienes se destinaba la política social y se los inserta en la “economía social” (Martos, 2014). Se organizaron centralizadamente los programas previos (76 vigentes a 2002) en 4 líneas: Familias, Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Plan Nacional de Recreación y Deporte Social. Éstas se concentrarían en 2007 en dos ejes: el Argentina Trabaja y Familia Argentina (Martos, 2014).

Si bien los planes sociales se gestionaron desde el Estado, algunas organizaciones populares tuvieron control sobre una parte de los mismos. Se trata de los que Kirchner distinguió, ya desde la campaña de 2003, como sectores “blandos” (básicamente, la orientación nacional-popular). La apuesta era dividir el movimiento piquetero: aquellos que no estaban dispuestos a desmovilizarse (las orientaciones marxista y de izquierda independiente), fueron denominados “piqueteros duros”, y con ellos la estrategia fue –según se atribuye al presidente- no usar “ni palos ni planes” (Boyanovsky Bazán, 2010; Muñoz, 2010; Rajland, 2008). La lógica era aislar a los grupos que no se incorporaban al proyecto de gobierno pero sin incurrir en la represión abierta.²⁷⁰ Esto se combinaba con la judicialización de la protesta (Campione, 2008). Además, el gobierno apeló a la necesidad de tiempo para atender las demandas pendientes, que, en el marco de cambios económicos y políticos, significaba la paulatina desactivación de esas demandas (Muñoz, 2010).

Como se puede notar por lo expuesto, el gobierno puso en marcha una serie de políticas públicas y tuvo gestos diferenciables muy rápidamente. En este sentido, se tomaban en cuenta elementos de la discursividad del campo popular que no habían sido considerados previamente, centralmente, la cuestión de los DDHH, pero también demandas de normalización más ligadas a sectores medios. El cambio en las políticas

²⁷⁰ “Cada vez son menos, hay que dejarlos que se debiliten por el aislamiento de la sociedad. Si los reprimimos hacemos lo que ellos quieren, porque necesitan victimizarse” explicó Kirchner (Clarín, 26/7/04). En una entrevista periodística, Federico Schuster explicaba la lógica de la política: “La idea de aislar a los considerados más duros es una estrategia de desgaste, que por ahora le está saliendo bien. La experiencia de los dos muertos del Puente Pueyrredón está muy grabada y por eso la idea es no reprimir. El Gobierno sabe que el paso de cualquier mínima represión a los muertos es muy complicado. Ese es un elemento que frena cualquier represión. Frente a esto hay una estrategia de desgaste. Cualquier organización de resistencia popular tiene inexorablemente un tiempo en el que puede desarrollarse, y luego es difícil de sostener” (Página/12, 2/3/04).

sociales, según condición de empleabilidad, no fue la única innovación al respecto.²⁷¹ Dentro del Ministerio de Desarrollo se produjo uno de los cambios más novedosos, que consistió en la incorporación de dirigentes sociales como funcionarios: en junio de 2004 Jorge Ceballos (BdP) fue nombrado Director Nacional de Asistencia Comunitaria, y en febrero de 2006 Luis D'Elía (FTV) como Subsecretario de Tierras para el Hábitat Social, al mismo tiempo que se creó la Subsecretaria de Organización y Capacitación Popular, que queda a cargo de BdP. Por primera vez, dirigentes sociales formados en la militancia territorial pasaban a formar parte del aparato estatal, lo que implicó todo un conjunto de debates en torno a su rol y posibilidades (ver sección 3.2.2).

Aunque es probable que existieran más incorporaciones en cargos menores, se trata de todos los registros que la bibliografía señala sobre la llegada de militantes sociales al Estado. Es decir, a pesar de lo indudablemente novedoso y relevante, se trató de cargos de menor jerarquía dentro de un ministerio abocado a la gestión de los planes sociales: ninguna incidencia lograron los MTD en otras áreas de mayor jerarquía o capacidad de regulación social (a diferencia de los organismos de DDHH que, como dijimos, lograron una cartera ministerial con Garré).

En cambio, las fracciones hegemónicas del BEP mantuvieron su influencia directa sobre el aparato estatal: la UIA sobre el Ministerio de Economía, al menos, hasta fines de 2007, y CACons sobre el Ministerio de Planificación. La salida de Lavagna en noviembre de 2005, fue cubierta por su discípula Felisa Miceli, de excelentes relaciones con la cámara industrial. En julio de 2007, ésta fue reemplazada –tras un escándalo de corrupción– por Miguel Peirano, un hombre orgánico de la UIA. Hasta ese momento, la industria lograba mantener el control del Ministerio de modo directo, es decir, colocando sus representantes, aprovechando de la dimensión más instrumental del Estado. En diciembre de 2007, Peirano fue reemplazado por Martín Lousteau, quien era funcionario con mejor relación con el capital financiero.²⁷² Es decir, la UIA mantuvo el poderoso

²⁷¹ En diciembre de 2004 se aprobó la Ley N° 25,994 de prestación de jubilación anticipada: cualquier persona que tuviera la edad exigida por ley para jubilarse y los años de trabajo requeridos, podría jubilarse aún sin tener los aportes correspondientes (se descontarían los pagos faltantes del propio haber previsional). Surgió así la moratoria jubilatoria, que tuvo especial impacto entre las amas de casa.

²⁷² Lousteau estudió en la Universidad de San Andrés (de tendencia liberal), aunque su principal referencia laboral está ligada al poderoso Banco Provincia de Buenos Aires. Antes de esto, fue ministro de producción y jefe de gabinete en esta provincia durante la gobernación de Felipe Solá. Ganó visibilidad política como asesor del BCRA bajo el patrocinio de Prat Gay, y como éste, era una joven promesa para

Ministerio bajo su franca influencia durante el período analizado, perdiendo la presencia *directa* recién al final del mismo.

Este cambio sugiere un movimiento de superioridad del poder político sobre el automatismo económico de los años anteriores: incapaces de desarrollar un orden de reproducción sin la intervención explícita, el Ministerio de Economía debía desarrollar intervenciones permanentes. Pero, al ubicar funcionarios propios, esto le ocasionaba mayores fricciones con otras fracciones del BEP. Es por esto que el Ministerio quedó en figuras cada vez más alejadas del control directo del capital industrial. Además, este Ministerio perdió no pocas funciones con la creación por parte de Duhalde, un día antes de salir del gobierno, del poderoso Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Decretos N° 27/03 y 1,283/03). Este nuevo Ministerio absorbía al de Producción, quedándose con las áreas de energía, comunicaciones, obras públicas, cuestiones hídricas, desarrollo urbano, vivienda, energía atómica, sector minero y del transporte.²⁷³ Es decir, el Ministerio de Economía se dividía para resolver las necesidades de arbitraje permanente del Estado entre las fracciones del capital. Esto expresa un cambio fuerte en la forma de Estado respecto de la que prevaleció durante la Convertibilidad (Bonnet y Piva, 2013; Bonnet, 2012; Piva, 2011).

Respecto del BCRA, bastión del capital financiero, no hubo mayores cambios: la relativa subordinación institucional seguía sin ser aceptada por esta fracción del BEP, pero no lograron revertirla. Esto no impidió que continuaran aportando los cuadros burocráticos a la gestión del organismo. El ex JP Morgan Prat Gay no renovó su mandato en 2004, debido a diferencias con Lavagna y Kirchner respecto de la negociación de la deuda, dando paso a Martín Redrado, un funcionario muy vinculado al capital extranjero en sus diversas formas.²⁷⁴ El tema de la renegociación de la deuda fue, justamente, el asunto más espinoso del período en materia de políticas económicas, puesto que sobre el resto de las materias no hubo cambios significativos.

el capital. En el Coloquio de IDEA de 2006 vaticinó “Es lógico que los empresarios quieran recuperar con rapidez márgenes de ganancia porque en tres años el país podría ingresar en otra crisis”.

²⁷³ Economía se quedaba con las de agricultura, ganadería y pesca, desregulación, pequeña y mediana empresa, defensa de la competencia y del consumidor, desarrollo regional, la industria y el comercio.

²⁷⁴ Redrado fue calificado de joven como “Golden boy” por el influyente Washington Post. Trabajó como consultor en varios procesos de privatizaciones para compañías extranjeras, además de un puesto directivo en el Security Pacific Bank. Su perfil favorable al capital extranjero le permitiría integrar desde 2011 el Tribunal de Solución de Controversias de la OMC.

Duhalde resolvió las directrices del PRE según el programa del GP, y las tensiones que éste generaba con las demás fracciones del capital. Respecto de la deuda, la lógica instaurada fue el pago del segmento no defaultado y la negociación con los acreedores como “socios del crecimiento” (ver sección 2 del capítulo 4). El rol del capital financiero era, pretendidamente, aportar recursos para la inversión del capital productivo. Ésta fue exactamente la lógica continuada por Lavagna y Kirchner: se continuó pagando un tramo de deuda, mientras se negociaba una salida para la parte en *default*. El hecho de que las ganancias del capital productivo fueran tan abultadas como para permitir la inversión, el desendeudamiento y el atesoramiento quitaron presión sobre los tiempos de la negociación.

Kirchner negoció el primer acuerdo con el FMI en septiembre de 2003, poco antes de la reunión anual del organismo en Dubai, donde se lanzó la primera oferta de canje. Sobre la base de esa propuesta, se negoció durante todo 2004, para lograr cerrar el canje –levemente modificado– entre enero y marzo de 2005. Se trató de un canje de dimensiones históricas por la magnitud y dificultades asociadas; aunque no por sus logros, como se suele malinterpretar.²⁷⁵ La reducción del valor de la prima de riesgo de los bonos de otros países periféricos como Brasil y de la tasa de interés de los bonos del Tesoro norteamericano hicieron más atractiva la propuesta argentina, que, además, incentivó el ingreso al canje al aprobar una ley que desconocía todo futuro reclamo por los bonos que no entraran al canje (la ley N° 26,017, conocida como ley “cerrojo”). El canje redujo la cantidad de bonos involucrados (de 152 a 3), el número de monedas y jurisdicciones, facilitando la gestión posterior de la deuda. Algunos bonos fueron emitidos en pesos y ajustables por inflación, además de prometer un rendimiento atado al crecimiento del PBI: ésta fue la forma concreta de hacer a los acreedores “socios del crecimiento” de la Argentina (Basualdo, Nahon y Nochteff, 2007; Damill et al., 2005; Datz, 2009; Macías Vázquez, 2008).

Si aceptamos los dichos de Lavagna al lanzar la propuesta, de “que hablen los mercados”, podemos decir que “el mercado” avaló el canje, dado el elevado porcentaje de aceptación (76%), por un total de US\$62,300 millones. EUA no dejó de apoyar las negociaciones en ningún momento, por ajustarse a sus pretensiones de manejar el

²⁷⁵ Por mayor detalle sobre este canje ver (Cantamutto, 2012b; Vázquez Valencia y Cantamutto, 2013).

problema como un concurso de acreedores privado (sección 2 del capítulo 4). El FMI, en cambio, atento a las presiones de los bonistas y del Club de París, tuvo una posición de apoyo, pero menos enfática. Desde el punto de vista de la expresión del capital financiero internacional, los enfrentamientos no pueden exagerarse: sus representantes estuvieron de acuerdo con las tratativas del gobierno argentino. Justamente, el canje sirvió para normalizar relativamente la situación de Argentina en el mercado de capitales. De hecho, durante los siguientes 3 años, Argentina accedió a nuevos recursos, encontrando una fuerte demanda por los títulos y bonos que emitía (Datz, 2009).²⁷⁶

El gobierno promocionó que el canje involucró una supuesta quita del 75%. Sin embargo, esto no fue más que una presentación distorsionada de los datos: al capitalizar los intereses caídos hasta el momento del canje, la quita era de un 60% respecto del monto involucrado, y de un 35% respecto de la deuda total (Vázquez Valencia y Cantamutto, 2013). Si además se toman en cuenta los valores actualizados del rendimiento del premio atado al PBI y las promesas de pagos de nuevos intereses, *la quita resulta nula* (Cafiero y Llorens, 2004; Lo Vuolo y Seppi, 2008). La falta de registro de los valores actualizados de la promesa de pago ajustada al crecimiento y las previsiones de pago por la indexación inflacionaria, así como de los bonos que quedaron fuera del canje (y serían reconocidos en futuras operaciones), provocó una disminución contable mayor a la real (Giuliano, 2014).

Más allá del debate sobre la quita, existe un punto muy relevante sobre esta negociación y es que significó convalidar la deuda cuestionada como ilegítima, ilegal y usurera. La demanda de suspensión de los pagos e investigación estaba en la escena pública desde hacía años, y había sido refrendada mediante una consulta popular realizada por la CTA en noviembre de 2003 –cuyos datos se entregaron a Kirchner en febrero de 2004–, donde el 88% de los más de 2 millones de votos se expresó contra el pago de la deuda (Echaide, 2005). Además, desde 2000 descansaba en el Congreso el fallo del juez Ballesteros sobre este respecto. Es decir, *el gobierno se encontraba con la mitad de la deuda en cesación de pagos, con jurisprudencia que avalaba su dudosa*

²⁷⁶ Como señala Fernández Alonso (2010), Kirchner realizó una típica operación populista con el canje, al denostar las deudas como un legado neoliberal y separar a los acreedores de la comunidad política legítima, pero al mismo tiempo reconocer la necesidad de pago para reinsertarse en la arquitectura financiera internacional: es decir, abonar al juego de inclusión/exclusión antagónica populista.

legalidad y una fuerte demanda pública contraria al pago; y sin embargo, optó por negociar y pagar. Éste fue el motivo fuerte del apoyo de EUA y el FMI a la iniciativa, de la misma forma que el capital concentrado (ver sección 3.2.1). El canje validaba el proceso de endeudamiento, como una lógica indeclinable. Como si esto fuera poco, una parte de los bonos emitidos mantuvieron como jurisdicción de aplicación a tribunales externos, sosteniendo así la cesión de soberanía (ya no en organismos internacionales sino directamente en Estados extranjeros) iniciada con la dictadura militar.²⁷⁷

La magnitud de los recursos ingresados al país y al Estado por la nueva configuración de la acumulación (ver sección 1), permitió dar continuidad al programa de pagos al capital por otras vías. Mientras el superávit comercial se sostuviera, era posible compensar los pagos de deuda, teóricamente aliviando compromisos futuros de pago, y dilatar la toma de nueva deuda, garantizando el lugar de poder de las fracciones productivas exportadoras del capital.

A través del decreto 1,599/05 se propuso el uso de las “reservas de libre disponibilidad” para realizar pagos anticipados a los organismos multilaterales. Se entendía por este tipo de reservas aquellas que excedían las necesarias para garantizar el 100% de la base monetaria. Utilizando esta definición, cerca de US\$10,000 millones de reservas resultaban de libre disponibilidad a fines de 2005: una cifra que permitía cancelar justamente los US\$9,810 millones adeudados al FMI. En enero de 2006 se realizó el pago (decretos 49/05 y 1,601/05), siguiendo el camino iniciado por Brasil y Venezuela, y como parte de este brío de normalizar los pagos de deuda, lo que supuestamente ganaba libertad de decisión para el país.²⁷⁸ Apareció en este momento la enunciación de la política de “desendeudamiento” (Decreto N° 1,601/05). Más allá del discurso, este pago adelantó una importante suma de capital al organismo, por una deuda de dudosa validez legal y ciertamente ninguna legitimidad. La existencia de recursos disponibles –producto del ajuste social iniciado en 2002- permitió generar la sensación de que el arreglo no generaba grandes costos sociales *en el momento* de pago.

²⁷⁷ Esta decisión probaría ser un severo problema a partir de 2012, como veremos en el capítulo 6.

²⁷⁸ “Concretamos, con esta medida, nuestra estrategia de reducción de deuda, a un nivel compatible con nuestras posibilidades de crecimiento y pago, ganando, además, grados de libertad para la decisión nacional” (discurso Néstor Kirchner, 5/12/05).

Contra su propia prédica de enfrentamiento el gobierno argentino, luego pagar, no se salió del organismo.²⁷⁹ De hecho, tuvo una política al interior del organismo, por ejemplo, cuando se presentó la candidatura para director del mismo de Strauss Kahn, supuestamente una opción reformista. Cuando éste ganó en septiembre de 2007, no ofreció más que tibios apoyos a Argentina. Aunque hubo algunos leves cambios en la distribución de los votos, la filosofía del FMI no se modificó sustancialmente (Nemiña, 2009; Ugarteche, 2009). Kirchner no tuvo interés en abandonar las instituciones del capital imperialista, proponiendo reformas que nunca llegaron a término.²⁸⁰

Al mismo tiempo, se daba valor al espacio latinoamericano como estrategia de negociación política. En el discurso, aparecía la referencia permanente a la región, que fortalecía al propio proceso argentino buscando filiación en otros procesos populistas de la región: la llegada al gobierno de Hugo Chávez en Venezuela (1999, que para 2005 había declarado el inicio del proceso al Socialismo del Siglo XXI en el V Foro Social Mundial), Lula da Silva en Brasil (2003), Tabaré Vázquez en Uruguay (2005), Evo Morales en Bolivia (2006), y Rafael Correa en Ecuador (2007). Se componía un escenario regional novedoso, que articularía *iniciativas de integración política* que diferían de la unificación de tipo económica promovida en décadas anteriores: en diciembre de 2004 se firmó la declaración de Cuzco para creación Comunidad de Naciones Suramericanas, que en mayo de 2008 se relanzó UNASUR en Brasilia. El objetivo de estas iniciativas era capitalizar en la negociación internacional la afinidad política del nuevo escenario latinoamericano.

En el aspecto económico de la integración, sin embargo, los resquemores del gobierno de Kirchner serían mayores. Desde su asunción, y dando continuidad al discurso de Duhalde, el presidente valoró el espacio del MERCOSUR como la alternativa lógica para el país. En estos años, se relanzó el proceso de integración incorporando mesas sectoriales, que facilitarían destrabar los acuerdos. A fines de 2004, Chávez propuso la iniciativa de la Alianza Bolivariana para América (ALBA), como un

²⁷⁹ A pesar de significar una clara presión contraria a los intereses nacionales, el gobierno no abandonó tampoco el CIADI del Banco Mundial (como sí hicieron Bolivia, Ecuador y Venezuela).

²⁸⁰ Vale remarcar que la propuesta del kirchnerismo de normar los canjes de deuda soberanos, aprobada en la asamblea de las Naciones Unidas en septiembre de 2014 es claramente consistente con lo indicado arriba. La imagen de un eufórico Kirchner abriendo las sesiones de Wall Street en septiembre de 2006 expresa su relación con los espacios del capital financiero.

proceso más amplio de integración, económica y política, que incluía a los movimientos sociales y tenía una clara orientación de izquierda.²⁸¹ El kirchnerismo no apostó en ningún momento a este espacio, descartando una alianza ideológicamente más definida. El principal desafío provenía de la iniciativa del ALCA, cuyas negociaciones avanzaban entretanto, y frente a la cual se había propuesto el ALBA (C. Katz, 2006a).

El momento clave de ruptura estuvo en las reuniones de 2005 en Mar del Plata. Se realizaron allí en paralelo la reunión de la V Cumbre de las Américas, donde los gobiernos se reunían para cerrar de una vez la tratativa del ALCA, y la III Cumbre de los Pueblos (o Contracumbre), organizada por los movimientos sociales agrupados en la Alianza Social Continental (ver sección 4.2.2 del capítulo 3). Sólo Chávez participó de ambas cumbres, y Morales de la Contracumbre (no era aún presidente). Kirchner, por su parte, adoptó junto a Brasil la postura de negociar un “ALCA *light*”, que consistía en aceptar el libre comercio si EUA cedía en el tema de los subsidios agrícolas (Simonoff, 2009). Sin esta concesión, los países del MERCOSUR privilegiaban su espacio. Kirchner no sostenía una confrontación con el proyecto del ALCA –como lo hacían las organizaciones sociales-, sino que usaba los espacios regionales para negociar.

No obstante, la falta de voluntad de hacer concesiones de EUA y la fuerte oposición social al ALCA hicieron fracasar el proyecto. Con este revés, Argentina quedó como la sede del fracaso de Bush, lo que alejó a Argentina de EUA. Venezuela aprovechó esta distancia y se ofreció a aportar fondos, comprándole a Argentina bonos de deuda en sucesivas ocasiones (cobrando tasas de 15% anual en dólares). Esto no hizo sino incrementar los resquemores con la potencia norteamericana, que le quitó el apoyo al país ante el FMI. Argentina quedaba entonces separada de los dictámenes directos de EUA, pero sin alinearse con los procesos más radicales de la región. En los espacios de integración económica, el MERCOSUR cobraría más valor, y esto se expresó (ver 1) en la relevancia de las exportaciones industriales a Brasil.

De conjunto, entonces, el gobierno de Kirchner formuló muy rápidamente una serie de políticas públicas orientadas a “normalizar” la institucionalidad del Estado, y a

²⁸¹ El ALBA cambió de nombre luego a Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP). Inicialmente fue lanzada por Venezuela y Cuba, a los que se sumaron luego Bolivia, Nicaragua, Honduras y Ecuador. Algunas organizaciones sociales (como el MST de Brasil o el FPDS de Argentina) participaron del proceso, aunque sus gobiernos no lo hicieran.

ganar el apoyo de las clases populares. Las políticas de DDHH fueron, en este último sentido, la novedad más relevante y que le permitió construir mayor legitimidad. Algunos movimientos sociales territoriales fueron considerados para integrarse al Estado, principalmente dentro del Ministerio de Desarrollo Social, lo que daba mayor énfasis al cambio producido durante los gobiernos previos: el Estado ya no podía considerarse sin más como el enemigo y garante de la exclusión. Aunque era (y es) materia de debate qué rol jugaba el Estado, quedaba claro que las fronteras del antagonismo político trazadas a fines de la Convertibilidad ya no eran operativas para ordenar el discurso y la estrategia política.

En el orden macroeconómico, Kirchner dio total continuidad a las políticas iniciadas por Duhalde, tratando de resolver la principal cuenta pendiente: el canje de la deuda. A pesar de algunas novedades del canje, el mismo tuvo como principal objetivo normalizar las relaciones con el capital financiero internacional, de modo de resolver la demanda de financiamiento de parte de las fracciones hegemónicas del BEP. Como explicamos antes, el nuevo esquema de regulación se basaba en un fuerte superávit comercial, que permitiera sostener la expansión de la economía al resolver la restricción externa (pagos de intereses y deuda, remisión de utilidades, importaciones) y financiar al Estado para que pudiera compensar a las fracciones desplazadas (subsidios a las tarifas). Con el canje de deuda se abría un nuevo frente de uso para los recursos externos y fiscales, que presionaba sobre las contradicciones explicadas.

El aumento de los precios internacionales permitía sortear el problema de los recursos externos, pero se mantenía la necesidad del arbitraje estatal. En tal sentido, en marzo de 2008, el gobierno decidió elevar la alícuota de las retenciones a las exportaciones agropecuarias bajo un esquema móvil. La resolución N° 125 que ordenaba este cambio, produjo una fuerte reacción por parte del capital agropecuario (ver sección 3.2.1), que terminó con la derogación de la misma en el Senado de la Nación, con el voto “no positivo” del vicepresidente Julio Cobos. Más allá de la disputa en cuestión, queremos resaltar en esta sección la *necesidad* del gobierno de aplicar una medida de este tipo: el arbitraje estatal que ordenaba la regulación económica y la legitimación social requería de fondos, que provenían de estas fuentes. La estructura fiscal expresaba con claridad los acuerdos y la disputa social en juego.

3. Disputas políticas y patrón de dominación

El proceso político aquí estudiado alcanza en este momento una reconfiguración relevante del orden político, donde la construcción hegemónica iniciada por una fracción de las clases dominantes alcanzó su mayor esplendor. Esto ocurrió no sólo por los elementos asociados a la economía política del proceso, sino, y quizás más aún, por la capacidad de desplazar del escenario político la disputa entre el capital y las clases populares, poniendo al frente a los propios representantes políticos. El mayor éxito del programa fue lograr presentarse como representación del interés nacional, estructurando así un orden en el doble sentido de dar un mito trascendental a la comunidad política y de distribuir lugares y funciones a los actores particulares. La gestión de ese orden (la política) requirió intervenciones sistemáticas del Estado, arbitrajes entre partes (incluyendo fracciones del BEP). Esto es lo que muchos intelectuales, militantes y el propio gobierno celebraron como “recuperación de la política”.

El nuevo escenario político implicó no pocas reconfiguraciones entre los partidos políticos, pero también una nueva situación para las clases dominantes y las populares. Que gran parte del debate se haya trasladado a la autonomía o no de los movimientos sociales respecto del Estado señala un sesgo particular del momento: la elusión del lugar del BEP. Como hemos explicado, el orden político se estructuró en función de las demandas de ciertas fracciones del capital, pero a la vez incorporó demandas populares. Ambas deben considerarse para comprender el nuevo orden.

3.1. Representantes en el Estado

Néstor Kirchner asumió en mayo de 2003 con un 22.24% de los votos válidos, tras el abandono de la segunda vuelta por parte de Menem. Como señalamos (sección 3.1 del capítulo 4), el apoyo del aparato duhaldista y las promesas de continuidad en materia económica fueron importantes componentes de la victoria. Eso explica por qué una parte del electorado lo eligió frente, por ejemplo, a la propuesta de Rodríguez Saá, que también era crítica del menemismo bajo un discurso de tipo populista. Las declaraciones contra el neoliberalismo, la necesidad de impulsar el empleo y la producción nacional, y garantizar la inclusión social a través de un Estado presente eran todos significantes

usados por ambos (y por Duhalde). La ventaja de Kirchner fue combinar la continuidad con su situación de relativo desconocimiento como figura en la escena nacional: una suerte de *outsider* dentro del propio sistema político.

Los estudios post-fundacionales sobre el kirchnerismo tienden a resaltar los elementos discursivos para definir la ruptura populista, omitiendo su presencia –en los actos de habla y en las políticas públicas- en los dos gobiernos anteriores. ¿Qué cambió? Hay al menos dos elementos relevantes que lo distinguen de sus antecesores. Primero, haber sido electo por el voto le daba una dosis de legitimidad institucional de la que carecían Rodríguez Saá y Duhalde. Segundo, las políticas públicas aplicadas por estos dos comenzaban a mostrar sus efectos positivos sobre las clases populares, lo que alteraba las condiciones de recepción del discurso populista. Los signos de crecimiento de la industria y la construcción, con su impacto en el empleo e incluso muy lentamente en los salarios, sumado a la masificación de los planes sociales, modificaban –sin un sentido unívoco- la superficie de inscripción del discurso. Kirchner, aprovechando su lugar de enunciación, fue capaz de proponer un discurso creíble que ordenara las demandas, reclamos e interpretaciones sobre la situación de los agentes en disputa.

La continuidad respecto de Duhalde se expresaba fuertemente en la figura del ministro de Economía, Roberto Lavagna, que sería el último responsable de esa cartera con presencia propia capaz de poner en duda las directrices planteadas por el presidente. De hecho, luego de su salida, Lavagna terminaría siendo candidato a la presidencia en 2007 por una fuerza promovida por radicales y desarrollistas del MID, una alianza llamada Una Nación Avanzada (UNA). Aníbal Fernández, que había sido secretario General de la Presidencia y, luego, ministro de la Producción con Duhalde, pasó al Ministerio del Interior. El vicepresidente Daniel Scioli provenía de los gobiernos de Menem y Duhalde. José Pampuro (ministro de Defensa) y Ginés González García (ministro de Salud Pública) completaban la presencia duhaldista en el nuevo gabinete (Lucca, 2011). Estas señales de continuidad mostraban la gravitación del ex presidente. Kirchner quiso deslindarse del caudillo bonaerense poco tiempo después, en particular, a partir de la campaña a las legislativas de 2005.

El gabinete tenía otro componente proveniente del círculo más cercano al presidente, un equipo que –según se refirió en varias entrevistas- se estaba preparando

originalmente para disputar la presidencia en 2007. Julio de Vido (Ministro de Planificación), Alicia Kirchner y Oscar Parrilli (Secretario General de la Presidencia) eran 3 figuras clave en tal sentido. El primero, un hombre plena confianza del presidente, sería central en el nuevo esquema de arbitraje del Estado entre fracciones del capital. Su hermana y, en especial, Parrilli fueron quienes entablaron la relación con los MTD y organizaciones territoriales (debe enfatizarse que previo a la presidencia, Kirchner no tenía ningún tipo de vínculo estable con éstas).

El resto del gabinete expresaba el proceso de reconfiguración de los partidos políticos, y cómo el nuevo gobierno implicaba un desafío no sólo para las organizaciones sociales. Alberto Fernández, un ex legislador por Acción por la República (partido comandado por Cavallo), fue jefe de gabinete hasta renunciar por el conflicto con el campo, siendo el único funcionario con que la SRA tenía diálogo fluido. La gestión coordinada del gabinete estuvo en todo el período en manos de un funcionario de tendencia liberal.

Pero también partidos de centro-izquierda aportaron lo suyo. Graciela Ocaña (una de las fundadoras del ARI) fue interventora del PAMI desde 2004 hasta su paso a la cartera de Salud a fines de 2007. Rafael Bielsa (ministro de Relaciones Exteriores) y Daniel Filmus (ministro de Educación) provenían del desencanto progresista con la Alianza. Se sumaron a ellos los cargos menores (subsecretarías) ocupados por militantes sociales provenientes de BdP y FTV, a los que se sumó el flamante MEvita en varios cargos de la provincia de Buenos Aires (su principal referente, Emilio Pérsico, fue subsecretario de Políticas Públicas y luego vicejefe de gabinete). En las elecciones de 2005, algunos movimientos pudieron sumar diputados nacionales al kirchnerismo, entre los que subrayamos a Edgardo Depetri (Frente Transversal). Aunque son de dudosa fiabilidad, los datos de Escudé (2009) señalan unos 50 integrantes de MTD participando de dependencias del Estado para 2006. En las elecciones de 2007, las listas del FpV para diputados incorporan otras importantes referentes de estos movimientos: Victoria Donda (Libres del Sur); Gloria Bidegain (MEvita), Adela Segarra (MEvita).

La amplitud de la alianza propuesta por Kirchner, no sólo con los partidos sino también con los movimientos sociales, tuvo un nombre específico: la *transversalidad* (Cheresky, 2004; Godio, 2004; Schuttenberg, 2012). Tal como lo anunció en su discurso

de asunción, Kirchner tenía claro que no controlaba el PJ (dividido en diversas simpatías) y que se enfrentaba a un escenario partidario de fragmentación y debilidad, donde ninguna fuerza era capaz de arrogarse la representación de la totalidad, ni siquiera de una mayoría sostenida.²⁸² Conociendo el poder de veto del propio PJ, la intención de Kirchner nunca fue salirse de su partido, sino crear una herramienta que lo excediera sin impugnarlo (Lucca, 2011).²⁸³ Así aparecía la idea de un espacio nuevo, que superara las barreras “sectarias” de los partidos bajo un ideario de centroizquierda, pluralismo y democracia, contrario al neoliberalismo y la “vieja política” (S. Gómez y Recio, 2005). Como se ve, hacía así de su principal debilidad su fortaleza, al recuperar las demandas de renovación ética de la política planteadas en 2001/02.

La transversalidad tuvo dos grandes frentes. Uno fue con los demás partidos, que, como se describió, se acercaron a integrar el gobierno. Pero también hubo transversales que sin integrar la fuerza del FpV se alinearon con el gobierno nacional. Desde marzo de 2004 aparecen como interlocutores privilegiados los intendentes Luis Juez (Córdoba), Hermes Binner (Santa Fe) y Aníbal Ibarra (Ciudad Autónoma de Buenos Aires), declarando explícitamente su afinidad.²⁸⁴ Esto, claro, significó resquemores dentro del PJ con gobernadores, como De la Sota y Jorge Obeid (Santa Fe),²⁸⁵ y referentes, como Cafiero o el propio Duhalde. En el congreso partidario de Parque Norte, el mismo mes, las críticas se hicieron públicas, y marcaron el inicio del enfrentamiento con el

²⁸² “La Argentina contemporánea se deberá reconocer y refundar en la integración de equipos y grupos orgánicos, con capacidad para la convocatoria *transversal*, el respecto por la diversidad y el cumplimiento de objetivos comunes” (discurso de asunción de Néstor Kirchner, 25/3/03; itálicas propias).

²⁸³ Kirchner reconocía las ambivalencias del justicialismo, que lo mismo podía funcionar para su proyecto que había servido para el neoliberalismo: “A los intereses concentrados de la economía, que la han transnacionalizado, que le han quitado el poder adquisitivo al conjunto de la sociedad, el manejo de nuestros recursos, de nuestras decisiones, les resultó fundamental tener el apoyo de una estructura como la del justicialismo, como la que consiguieron en la década del noventa. Eso les permitió avanzar dentro del campo de la democracia mucho más que, inclusive lo que pudieron hacer durante los propios procesos militares. Nosotros lo que queremos es que el justicialismo, convergiendo con fuerzas progresistas, con fuerzas de la centro izquierda, pueda construir una alternativa de gobernabilidad, que permita en la pluralidad y en el consenso reconstruir la Argentina” (Entrevista Revista Debate, 23/4/004).

²⁸⁴ Hacen público un documento donde se entienden como “un movimiento con autonomía política, pero que no es indiferente al destino del Gobierno nacional”. La lista de puntos de acuerdo no sorprenderá: son las “acciones del gobierno vinculadas a políticas de derechos humanos, renovación de la Corte Suprema de Justicia, negociación con los acreedores internacionales y la política regional del MERCOSUR”. El proyecto también los unía: “creemos necesario avanzar en la inclusión social y la redistribución de la riqueza para revertir esta grave situación de pobreza que atraviesa el pueblo argentino” (Clarín, 06/3/04).

²⁸⁵ “El enojo de algunos dirigentes del PJ con el Presidente es público. Los gobernadores se sienten desplazados por el proyecto oficial de transversalidad” (Página/12, 6/5/04).

duhaldismo, que se expresó en la campaña para las legislativas de 2005. La esposa de Duhalde, Chiche, y la de Kirchner, Cristina Fernández, se disputaron la representación en el Senado de Buenos Aires, una reyerta que tensionó las definiciones dentro del PJ.

Pero las tensiones también atravesaron a los partidos que se aliaban, integrándose o no, al FpV. El Polo Social (Francisco Gutiérrez) y el Partido de la Revolución Democrática (Miguel Bonasso) se integraron de lleno al FpV. El PS participó desde el inicio de las iniciativas de la transversalidad, sin que esto le impidiera avanzar en acuerdos con otras fuerzas (S. Gómez y Recio, 2005). El pase de figuras a integrar el gobierno (Jorge Rivas fue el referente más relevante) terminó provocando la ruptura del acuerdo en 2007, y la intervención del partido hasta 2010. El PI se alió al ARI en 2003, luego al PCA en 2005, y finalmente pasó a integrarse en el FpV en 2007.

El ARI sufrió rupturas por izquierda, con Ocaña integrándose al gobierno, y Mario Cafiero aliándose a Patricia Walsh (MST-UNITE) para las elecciones de 2005 (luego se integró a Proyecto Sur). Estas escisiones impulsaron el componente liberal de su tercera fundadora, Elisa Carrió, componiendo una oposición por derecha al gobierno. Algo parecido ocurrió con PAIS, que tras aliarse con el FpV en 2003, terminó uniéndose al ARI a principios de 2007, junto a Unión por Todos y el GEN (Generación para un Encuentro Nacional), una escisión de la UCR liderada por Margarita Stolbizer (también proveniente de la socialdemócrata Corriente de Opinión Nacional). Nacía así la Coalición Cívica. Dos días después, se separó el ARI Autónomo (que desde mayo de 2008 se llamó Espacio Solidaridad e Igualdad – SI), liderado por los diputados Eduardo Macaluse, Carlos Raimundi y Marta Maffei, alegando que “el ARI giró a la derecha”.

El radicalismo, luego del fracaso de la Alianza, había quedado en manos de la orientación socialdemócrata del ex presidente Alfonsín. No sólo prestó acuerdo a Duhalde, sino que se entusiasmó con Kirchner, luego de ser duramente derrotado en las urnas en 2003.²⁸⁶ La política de DDHH fue tanto el factor de unidad, como el punto de quiebre: en 2004, cuando se anunció la creación del feriado nacional del 24 de marzo, se alegó el compromiso de los gobiernos de la democracia con los crímenes de la dictadura,

²⁸⁶ El 30 de diciembre de 2003 el Comité Nacional de la UCR declaró que “en la medida en que el Gobierno Nacional actúe con firmeza y responsabilidad frente a las demandas más acuciantes de la sociedad, encontrará el respaldo claro de la UCR, como principal partido opositor” (disponible en <http://ucr.org.ar/notas/noticias/la-ucr-repudia-las-presiones-del-fmi>).

haciendo una lectura que ponía en el mismo nivel al menemismo con el alfonsinismo (neoliberalismo en la temporalidad larga). Por supuesto, esto generó fuertes resquemores y la ruptura de la buena relación (Schuttenberg, 2013). Pero además, al mostrar los límites para construir una oposición disputando el espacio socialdemócrata, dio impulso a las corrientes internas más críticas del gobierno, asociadas al componente social-liberal del partido expresado en dirigentes como Ángel Rozas (Chaco), Gerardo Morales (Jujuy) y Roberto Iglesias (Mendoza).²⁸⁷ El radicalismo comenzó a interpretar al kirchnerismo como continuidad del menemismo, “maquillada” de progresismo, caracterizada por la concentración del poder y la falta de diálogo. Su estrategia opositora se basó en enfatizar la necesidad de normalización y republicanismo.

Los radicales que no coincidían con esta estrategia tomaron básicamente dos caminos. Uno fue integrarse al gobierno, dentro de la propuesta de la transversalidad. Gobernadores e intendentes con capacidad de gobernar a nivel subnacional encontraban cada vez mayor distancia con la dirigencia nacional, tras el fracaso de la Alianza y las interpretaciones recién expuestas sobre el kirchnerismo. Agrupados como Recuperación y Reconstrucción Radical para la Concertación, pero conocidos como “radicales K”, en agosto de 2006 se acercaron a las filas del FpV el mendocino Julio Cobos (futuro vicepresidente de Fernández), los gobernadores Arturo Colombi (Corrientes), Eduardo Brizuela del Moral (Catamarca) y Miguel Saiz (Río Negro), y dirigentes como Gustavo López (interventor del COMFER de la Alianza). El otro camino fue salir del partido sin integrarse al gobierno, como hizo el GEN. Esta tendencia buscó alianzas principalmente con el ARI y el PS, que de conjunto no ahorraron en ambigüedades electorales, como cuando crearon el Frente Progresista, Cívico y Social (FPCyS) junto a la UCR, Libres del Sur y el Partido Demócrata Progresista en 2006 para disputar las elecciones provinciales que llevarían a Binner a la gobernación de Santa Fe.

Movimiento Libres del Sur fue creado como partido a principios de 2006, a partir de la unión de BdP y la Corriente Libres del Sur junto al PCCE. BdP, como ya señalamos, se integró a través de diversos cargos al gobierno nacional, y de hecho, continuará participando del proyecto oficial incluso en las elecciones de 2007,

²⁸⁷ En el cierre del congreso partidario de la UCR, Rozas apuntó de modo contundente: “Algunos dirigentes les hacen creer a los jóvenes que somos el Partido Comunista. No hay que mentirles, la UCR es socialdemócrata, progresista, pero actúa en el marco de un país capitalista” (Página/12, 31/1/04).

integrando la lista de diputados kirchneristas. Esto expresó la autonomía de este movimiento-partido respecto del gobierno, un rasgo que ha sido enfatizado en la bibliografía (M. Gómez, 2010; Perelmiter, 2010; Schuttenberg, 2012): a pesar de obtener planes y cargos, BdP siempre leyó la cercanía al kirchnerismo como una estrategia política de acumulación propia. Su ideología nacional revolucionaria le permitía no ser refractaria al peronismo, sin ser peronista.

Justamente, como ya señalamos, la transversalidad tenía dos grandes frentes. El primero era partidario, pero el segundo era una expresión movimentista más amplia, que incluía diversas organizaciones sociales de tendencia nacionalista. Los primeros apoyos al gobierno kirchnerista aparecieron ya en 2003, con el MEvita como principal actor: el movimiento (que abandona la definición de “desocupados”) se creó de hecho para apoyar al gobierno nacional, subordinando sus objetivos a los señalados por la conducción presidencial (Cortés, 2010; M. Gómez, 2010; Gusmerotti, 2013).²⁸⁸ En agosto de 2003, el dirigente D’Elía (FTV) –que había sido el único dirigente piquetero que llamó a votar por Kirchner en 2003- afirmó que defendería al presidente a cualquier costo: si es necesario, “a los tiros” (La Nación, 24/8/03). La presencia unificada como “piqueteros K” llegó en junio de 2004, con el lanzamiento en un acto en Parque Norte del Frente de Organizaciones Populares (FOP), donde se convocaba a apoyar al gobierno kirchnerista. Lo integraron la FTV, BdP y el MEvita, al que se sumaría luego el Frente Transversal Nacional y Popular de Depetri. En noviembre de ese año se realizó en Chapadmalal otro encuentro de militantes sociales, llamado por Alicia Kirchner.

La idea de la transversalidad, quizás una de las más novedosas del período en materia política, permitió al kirchnerismo construir una fuerza propia sin romper con el justicialismo, lo que produjo un fuerte cimbronazo para el conjunto de los partidos y las organizaciones sociales. La frontera de antagonismo desdibujada en el discurso y las políticas de Rodríguez Saá y Duhalde se trasladaba ahora al aparato de representación

²⁸⁸ El principal referente del MEvita, Emilio Pérsico despejó dudas en un discurso de mayo de 2006: “El Movimiento Evita es indivisible, compañero presidente, de las políticas de Estado. Este Movimiento no tiene destino si a usted le va mal presidente, si a los argentinos les va mal. Porque nuestra estrategia es la estrategia central del gobierno” (Revista Evita, Año II, número 7).

institucional (Estado y partidos), generando una serie de efectos que redefinía las identidades en juego, incluso de partidos de vieja raigambre –como la UCR o el PS.²⁸⁹

Esta estrategia le permitió a Kirchner romper el alineamiento con Duhalde, y además, mostró ser efectiva como mecanismo electoral: en las legislativas de 2005, pensadas como un “plebiscito a la gestión” ((Página/12, 13/3/05), el FpV consiguió cerca del 30% de los votos válidos para diputados y el 45% para senadores, siendo clara mayoría en ambos casos. La victoria se magnificó al ver los resultados de sus competidores: la siguiente fuerza, la UCR, consiguió el 8.9% y 7.5% de los votos en cada caso, muy lejos del oficialismo. El ARI se colocó como tercera fuerza y recién luego el PJ; todo lo cual produjo rápidos realineamientos. Con una fuerza propia en el Congreso, con especial ímpetu en el Senado –fruto de los acuerdos con gobernadores- el kirchnerismo pudo impulsar sus propias leyes con mayor celeridad.²⁹⁰

Luego de las elecciones legislativas de 2005, la jueza Servini de Cubría intervino el PJ con intención de normalizarlo, pues no se convocaban a elecciones internas desde la victoria de Kirchner en 2003. Esto fue la gota que colmó el vaso de un peronismo alterado por la idea de la transversalidad. Provocó la aparición del Peronismo Federal o Disidente (PF), donde se incluyeron varios conocidos de la escena política nacional: Busti, Puerta, Reutemann, Rodríguez Saá, Romero. Las tensiones con el kirchnerismo no harán sino exaltarse con el tiempo. En julio de 2007, se realizó el Congreso Nacional Justicialista de Potrero de los Funes (San Luis), que decidió cambiar la sede del PJ nacional llevándola a San Luis, creando el “Comando Superior Peronista” integrado por los ex presidentes Menem, Puerta y Rodríguez Saá. Como se puede ver por el listado de nombres, este conjunto de opositores quedaba más ligado por su oposición al kirchnerismo que por sus propias afinidades: es decir, el gobierno funcionó como exterior constituyente. Aunque, sabemos, esto no resulta suficiente para constituir un programa de gobierno, ni una identidad.

²⁸⁹ Por supuesto, esto no significa una alteración total y absoluta de sus tradiciones partidarias, sino un acomodamiento en los términos del nuevo escenario.

²⁹⁰ En el período 2005-07, el gobierno tuvo una mayoría de 38 en Senadores y 128 en Diputados (se necesitan 129 para tener quórum). La mayoría de los proyectos del Ejecutivo ingresaron por Senadores y fueron aprobados. Fernández iniciaría con una mayoría absoluta de 143 diputados y 47 senadores, que, sin embargo, se quebraría rápidamente en 2008 debido al conflicto del campo (Ollier, 2010).

Estas tendencias se convalidaron en 2007, cuando Cristina Fernández ganó la presidencia junto a Cobos con el 46.3% de los votos válidos, dejando muy atrás a sus principales opositores: la fórmula Carrió-Giustiniani (ARI-PS) logró el 23% de los votos válidos, Lavagna (UNA) el 16.9%, y Rodríguez Saá (PF – FREJULI) el 7.7%. Vale señalar que la abstención junto al voto blanco o nulo alcanzaron el 29.6% del padrón electoral; es decir, más que en 2003 (aunque menos que en 2001). El gobierno había logrado afianzarse como mayoría, duplicando sus votantes respecto de aquel año. Gómez y Recio (2005) sugieren que el kirchnerismo explotó esta productividad electoral de la transversalidad más que sus potencialidades político-ideológicas.

Por fuera de las fuerzas más cercanas al kirchnerismo, la presión centrífuga y centrípeta del nuevo proceso se hizo sentir también. En el arco de la derecha, Unión por Todos (Bullrich) y Compromiso por el Cambio (Macri) empezaron a proyectarse a nivel nacional. El paso se consolidó en mayo de 2005, cuando se creó Propuesta Republicana (PRO), como una alianza de RECREAR, Compromiso para el Cambio y Partido Federal. El PRO reunía sectores de derecha del peronismo y el radicalismo, referentes del “mundo empresarial”, de las ONG y de los *think tank* de políticas públicas (Fundación Creer y Crecer, Grupo Sophia, Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), y se presentó como un equipo eficiente, que no provenía de “la política” (Vommaro, 2014). En 2007, la alianza se expandió como Unión PRO, incluyendo a la UCeDé, llevando a Francisco de Narváez como candidato a gobernador y a López Murphy como candidato a presidente. Obtuvieron el 1.43% de los votos.

El espacio se consolidó cuando, a fines de 2007, Macri ganó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lo que le permitió presentarse como la derecha que gana elecciones y gobierna (una novedad desde que existe el voto libre, señaló Verbitsky en *Página/12*, 22/2/15). El PRO se constituiría como antagonista polar del gobierno nacional, buscando presentar la política como gestión, y no como conflicto. A diferencia de otras fuerzas previas de derecha, el PRO enfatizó una ideología liberal más consistente, en el sentido de conciliar sus posturas económicas y en torno a los derechos individuales. El PF, en cambio, sostuvo su sesgo conservador en lo político.

Dentro del arco de la izquierda, el trotskismo obtuvo el 2.06% de los votos válidos, sumando a 4 partidos separados: MST, PO, PTS y MIJD. Proyecto Sur, una

fuerza creada en 2007, alcanzó el 1.6% de los votos. Su principal referente, Pino Solanas, funcionó como líder para aliar al PSA, el MST, el Partido del Trabajo y el Pueblo – PCR, a Buenos Aires Para Todos (Claudio Lozano) y Unidad Popular (Víctor de Gennaro). La presencia de reconocidos referentes sociales seguía sin ser suficiente para ganar una elección. El kirchnerismo valorizaba la propuesta de gobernabilidad tomando significantes tanto de cambio como de estabilidad (normalidad). Sólo quedaban “disponibles” las versiones extremas, que no lograban capitalizar los votos.

La transversalidad probó ser fructífera en este sentido, más allá de las intenciones de los diversos actores participantes. Sin embargo, también mostraría sus riesgos. Cuando estalló el conflicto del campo, la reacción del gobierno fue defenderse como legítimo representante de la totalidad política, avalada por la mayoría de los votos, acusando a la vez a sus antagonistas de funcionar como corporaciones de intereses espurios. Esto supuso dos innovaciones de énfasis (ambas son tensiones propias del populismo como tal, remarcamos el cambio de énfasis y no su novedad). Por un lado, el gobierno populista buscó legitimarse mediante la validación institucional, relegando su propia aparición desde una ruptura con el orden institucional previo. Por otro lado, esta reacción marcó el límite de su intención hegemónica, pues ya no se buscaría la incorporación de otras partes al propio proyecto, sino el afianzamiento de la fuerza propia. El gobierno, para defender el orden político, debía reforzar la frontera interna a la comunidad política, sesgándose sobre el particularismo en detrimento –relativo- del hegemonismo. Esto sirvió al kirchnerismo para mantenerse como mayoría electoral, pero produjo un cambio en el orden de prelación de elementos de la forma populista.

Ocurre que el inestable equilibrio del orden del capital industrial no lograba contener las demandas de las fracciones “desgarradas”, y a partir de este momento, abandonarían los intentos por tramitarlas. El efecto de esta estrategia agregó conflictividad, y facilitó la unificación a las asociaciones del agro, a las que se acercaron rápidamente los partidos de centro derecha. El capital agrario reclamó contra el modelo decisionista, centrado en el poder del Ejecutivo en manos de la presidenta. Esto respondía a su pérdida de gravitación al interior del BEP, que lo llevaba a apostar por llevar el conflicto al Congreso, donde las diversas fracciones del capital encontraban mayor representatividad (Bonnet y Piva, 2013). En efecto, el conflicto terminó en julio

de 2008 con el voto “no positivo” de un transversal: el vicepresidente Julio Cobos. Se marcaban así las diferencias ideológicas y políticas (abandonaron el gobierno por este conflicto el ministro de Economía Lousteau y el jefe de gabinete Fernández). El voto marcó, en definitiva, el final de la transversalidad (Moreira y Barbosa, 2010). Si bien el “regreso” de Kirchner al PJ era previo, adopta a partir de aquí sus implicancias más claras en términos de la dinámica política. Libres del Sur abandonó el gobierno por ello, alegando una vuelta al “pejotismo”, que no se correspondía con el ideario peronista.

De conjunto, la llegada de Kirchner al gobierno y su estrategia de poder modificaron los antagonismos en el campo político, siguiendo el camino iniciado por Rodríguez Saá y Duhalde. La incorporación de referentes de otros partidos y de movimientos sociales (piqueteros y DDHH) produjo un cambio importante en el lugar del Estado en el ordenamiento social. No sólo implicó un desafío en términos de las posibilidades electorales, sino que produjo una incipiente modificación en la estructuración de las identidades políticas. En estos años, el kirchnerismo logró representar de modo el orden hegemónico del capital industrial concentrado.

3.2. Disputas socio-políticas

En estos años, el kirchnerismo se afianzó como fuerza política, y permitió –impulsó– un desplazamiento de las fracciones ganadoras del BEP del centro de la escena política. Su capacidad de representar sus demandas expresó de modo contundente el paso hegemónico de estas fracciones, al incorporar demandas y referentes de parte de las clases populares, modificando su discurso al punto de no ser los sujetos de enunciación. Esto desafió al conjunto de las clases populares. Al interior del BEP, permitió privilegiar el programa mínimo de acuerdos de políticas públicas.

3.2.1. Disputas dentro del BEP

Estos años se caracterizaron por la relativa consolidación de la correlación de fuerzas al interior del BEP emergente de la crisis. Sintéticamente, la fracción industrial (y de la construcción) logró cristalizar el esquema de políticas económicas articulado en 2002, que la favorecía a la vez que instituía compensaciones para las fracciones desplazadas. El despliegue de este programa involucraba tensiones macroeconómicas, expresadas en

diferentes restricciones: externa, fiscal, redistributiva (sección 1). Una vez que el conjunto del BEP “aceptó” la nueva distribución de poder, el gran objetivo era enfocarse en las demandas centrales de conjunto: mejorar el clima de negocios, dar previsibilidad, solucionar el problema de la deuda. Todas las fracciones apoyaron este programa mínimo. A la vez, existía un conflicto respecto de la contención social: si bien todas las fracciones consideraban propicio regular las demandas populares, no todas coincidían en los alcances de estas concesiones. Este panorama resume el momento político respecto de las clases dominantes.

Las cámaras empresariales estaban divididas respecto del apoyo a los candidatos en 2003, y las fracciones desplazadas y las “desgarradas” no dejaron pasar el tiempo para advertir al flamante presente. A través de una serie de editoriales del diario La Nación (26/1/03, 30/4/03 y 15/5/03), donde sus reclamos siempre encontraron eco, estas fracciones del BEP estipularon sus demandas. Entendían que Kirchner, para lograr gobernabilidad, debía cumplir algunas condiciones: reunirse rápidamente con el embajador estadounidense, con los empresarios (de quienes no era el candidato esperado o favorito), tomar medidas excepcionales de seguridad pública (contener represivamente la protesta social) y evitar una revisión del pasado. Es decir, sostener ejes del orden neoliberal. Se acusaba al nuevo gobierno de llegar con un discurso “virulento, retrógrado y salpicado de rencor” contra las corporaciones. Como señaló Verbitsky (Página/12, 18/5/03), se trataba de una expresión de la disputa interna del capital, donde las fracciones relegadas no veían con buenos ojos que otros “grupos económicos locales” buscaran “ampliar sus alianzas sociales”. La promesa de continuidad estructurada por Kirchner y el discurso de asunción donde se resaltaba la creación de una burguesía nacional y un “capitalismo serio” (R. Gómez, 2012; Rajland, 2012) era el programa de estos “grupos económicos”.

Como ya señalamos, ante los decretos presidenciales de julio y diciembre de ese año, aumentando los salarios, la UIA y AEA se expresaron contra el mecanismo utilizado, aunque no contra la suba en cuestión. La demanda por un mecanismo de consulta institucionalizado para moderar la recuperación salarial fue escuchada por el gobierno, con las iniciativas del Consejo del Salario y las negociaciones colectivas de trabajo (que no eran demandadas por los sindicatos). Llamamos la atención sobre el

hecho de que todas las fracciones del capital encontraron representación en el Consejo del Salario, a diferencia de las iniciativas previas de Duhalde, que excluían al agro. En este sentido, Kirchner, sin desconocer la primacía industrial (con 5 representantes) buscaba minimizar el roce entre fracciones del capital.

El capital financiero, que era la fracción erigida en el discurso como el máximo representante del neoliberalismo, tenía participación en las voces de ADEBA y la Bolsa de Comercio, asociaciones que no tardarían en expresar su apoyo al gobierno. A fines de la Convertibilidad, un grupo de banqueros argentinos había decidido pasarse de ABA a ABAPPRA, argumentando la defensa de los intereses nacionales. Este grupo, encabezado por Jorge Brito (Banco Macro), reflató ADEBA en abril de 2003, anunciando, en consonancia con el proyecto de Kirchner, que querían “discutir cómo hacer para recrear la burguesía nacional” (La Nación, 9/4/03).²⁹¹ ABA quedó así como representante del capital financiero internacional. ADEBA y ABAPPRA se acercaron al gobierno y a la industria, aportando a los elementos inclusivos del discurso oficial: debido a la falta de demanda de créditos –por la falta de confianza en el sistema y la estrategia de autofinanciamiento del capital productivo- demandarían el impulso a la demanda interna, incluyendo subas salariales y seguros de desempleo.

La reactivación del mercado interno favoreció a las PyMEs, que se agruparon como en julio de 2004 como la Central de Entidades Empresariales Argentinas (CEEN), compuesta entre otras por ABAPPRA, APYME, FAA y FAN.²⁹² Su objetivo: “cambiar el modelo impuesto en los 90”, y recuperar “el aparato productivo, desde la implementación de una política de producción para el desarrollo nacional”. CGE y CAME no se alinearon con esta Central, pero mantuvieron la misma postura de apoyo al nuevo “modelo”. El conjunto del pequeño y mediano capital –sin distinción de sectores de actividad- se acercó al gobierno. Este acercamiento no se había producido antes (ver ilustración 2 del capítulo 3 e ilustración 3 del capítulo 4).

El GP, en cambio, luego de lograr la aplicación de su programa con los gobiernos anteriores, mostraría sus divergencias (ver sección 3.2.1 del capítulo 4). Al interior de la UIA, las aguas se calmaron cuando el nivel de tipo de cambio se estabilizó, y la

²⁹¹ Por más detalles sobre la representación del sector financiero, ver Cobe (2009) y Noriega (n.d.).

²⁹² La nueva central surge de un acuerdo entre la Coordinadora Interempresarial Argentina y la Mesa del Empresariado Nacional Pyme (que había reclamado infructuosamente atención a De la Rúa).

demanda central fue la resolución del problema de la deuda y la creación de un clima de negocios estable. Si bien se mantuvo en un diálogo muy cercano, se logró incorporar representantes del sector en puestos clave del Estado (ver sección 3.1), y fue el principal beneficiario del conjunto de políticas públicas (ver sección 2), el capital industrial no se organizó en un apoyo explícito y sistemático (como el sector PyME). En noviembre de 2004, CONINAGRO y la línea Industriales de la UIA intentaron una alianza para apoyar al gobierno, llamada Grupo Campo e Industria para la Producción, el Empleo y la Competitividad (Cipec), pero la misma no tuvo ninguna trascendencia, pues no logró convocar ni a otras entidades del campo ni a la conducción de la propia UIA. Dado que Kirchner respetaba la continuidad del programa ya definido, la “intromisión” explícita sólo podía implicar costos: responsabilidad directa por las decisiones del gobierno y mayores fricciones al interior del BEP. Carecía de sentido, entonces, que la UIA o la CACons se involucrasen de modo más directo, pudiendo delegar en representantes políticos la tramitación de sus demandas, así como la ampliación de la base de legitimidad de su programa.

Una vez establecido el mecanismo de negociación de salarios, la UIA dejó de reclamar nuevas devaluaciones, que era su demanda permanente hasta fines de 2004. A partir de allí acompañó al resto de las asociaciones (excepto las entidades del campo, que insistirían sistemáticamente con que quitar las retenciones a las exportaciones era más importante que el nivel del tipo de cambio) en la demanda de *estabilidad* de la paridad cambiaria de aquel momento. La UIA buscó conciliar posturas directamente con la CGT, puesto que entre ambas asociaciones sumaban más de la mitad de los miembros del Consejo. Para algunas entidades, como CACons, la importancia del salario mínimo pactado en esta instancia era más relevante que para otras, porque sus salarios de convenio muchas veces apenas si superaban el mínimo. Desde ese momento, la UIA buscó que los aumentos salariales estuvieran ligados a los de la productividad. Para ese momento, la capacidad instalada ociosa ya escaseaba y los salarios de los trabajadores ocupados y registrados en el sector privado estaban alcanzando el (bajo) nivel de 2001. Atar las subas de salarios a aumentos de la productividad implicaba absorber todo lo ganado en los años transcurridos.

La CGT no aceptaba esta propuesta, y demandaba el ajuste por inflación real.²⁹³ Para morigerar las demandas salariales que preocupaban al capital, el gobierno inició una política de contención de la inflación basado en acuerdos con empresas formadoras de precios: de esta manera, se decía, se reducía la inercia inflacionaria. Al principio, esta medida fue respaldada sólo por APYME y CAME: para la pequeña burguesía se trataba de una buena medida, al afectar principalmente los precios de las grandes empresas, es decir, sus proveedores o su competencia. La CGT y la CTA también la vieron como una intervención auspiciosa del Estado sobre segmentos concentrados del poder económico. El capital agrario, por entender que los principales controles recaerían sobre productos de la canasta básica (sus productos), se opusieron fervientemente. La UIA misma aseguró que “el Estado no debería intervenir en la regulación de precios” así como tampoco “en la cuestión de los salarios” (La Nación, 25/7/05).

Sin embargo, no pasarían más que un par de meses para que la UIA cambiara de parecer y apoyara la postura contraria: los acuerdos eran necesarios para dialogar con los sindicatos (La Nación, 25/10/05). Incluso ABA ratificaría estos acuerdos, en tanto quebrasen la inercia inflacionaria. La gran burguesía pronto comprendió que esta regulación podía servirle, siempre que lograra contener las demandas salariales de los trabajadores: es decir, que impidieran futuras mejoras en términos reales. De hecho, existía un precio regulado desde 2002: las tarifas de los servicios. Si bien entendían que esta regulación afectaba las decisiones de inversión, modificarla implicaría un aumento del costo de producción que no podrían tolerar. El problema era que para permitirse una suba de este costo, era necesario contener las demandas salariales.²⁹⁴

La gran burguesía encontró en la contención del aumento de salarios uno de sus puntos de acuerdo. Los argumentos variaban: que el salario mínimo ya era el más alto de América Latina (UIA), que era más apropiado negociar por región del país (CACom, CAME, UIA), que se privilegiara el pase de los ocupados a condición de formalidad (ABA, AEA, UIA) o la propia creación de empleo (AEA, CACons). Por una parte, los

²⁹³ No aceptaba tampoco utilizar la inflación del presupuesto nacional, como la UIA intentó acordar.

²⁹⁴ AEA sostenía que para controlar la inflación era necesario impulsar la inversión, no controlar los precios (SRA adhirió tempranamente a este argumento). AEA consideraba que “se debe impulsar un fuerte y sostenido crecimiento económico de largo plazo que, adicionado a un incremento significativo de la productividad, permita gradualmente a las empresas pagar salarios más altos” (La Nación, 11/8/05). Es decir, primero *crecer un largo plazo* y subir *significativamente* la productividad, para recién luego subir *lentamente* los salarios.

empresarios tenían conciencia de que los aumentos de salarios implicaban mayor demanda para sus propios negocios.²⁹⁵ Por otra parte, mientras pudieran trasladar a precios los aumentos salariales otorgados, los empresarios se encontraban en posición de negociar. El límite apareció a fines de 2007, cuando la inflación mayorista alcanzó la devaluación, haciendo desaparecer la devaluación real y poniendo en jaque la política de protección cambiaria (ver sección 1). Ese año la UIA retomó sus reclamos de nuevas devaluaciones, aunque sin el apoyo de otras organizaciones empresariales, que veían riesgo de mayor inflación en caso de nuevos ajustes del tipo de cambio.

A pesar del problema que les pudiera representar a los empresarios que el salario se acercara a los niveles de 2001, sabían que era necesario ceder para poder contener la situación social: de lo contrario, se arriesgaban a una nueva ola de protesta social.²⁹⁶ No en vano la misma UIA reclamaba un horizonte de previsibilidad que incluyera salarios, precios y tarifas desde 2006 (La Nación, 28/5/06 y 18/10/06). La entonces candidata Cristina Fernández tomó nota de este reclamo, y una de sus principales propuestas fue la de reconstruir un *Pacto Social*, algo que entusiasmó a los empresarios: ADEBA, UIA, CACom, CAME y CGE se apresuraron a declarar su apoyo a esta propuesta (La Nación, 21/7/07 y 31/10/07). El desgaste de la devaluación real y la espiral inflacionaria estaban consolidando una situación de disputa por la distribución del ingreso en la que ninguna parte estaba dispuesta a ceder, ni podía hacer ceder a las demás. La promesa del Pacto Social no era fácil de cumplir. Entre la gran burguesía, el problema central era detener los aumentos salariales y analizar cómo distribuir la carga del aumento de tarifas.²⁹⁷

El gran punto de acuerdo del período estuvo ligado a la cuestión de la deuda. Más allá de las declaraciones coyunturales, el conjunto del capital entendía que esto implicaba una mejora del clima de negocios y una disminución del costo de

²⁹⁵ “Sin salario no hay mercado interno. Sin mercado interno no hay inversión de calidad. Sin inversión de calidad no es posible cambiar la matriz productiva”, expresaría con claridad el líder industrial De Mendiguren (La Nación, 15/11/07).

²⁹⁶ Méndez, presidente de la UIA, consideró que “la visión macro” de la situación social “es lo que le permite” al Gobierno “decir que tiene que hacer esto (por el aumento por decreto) porque garantiza la paz social y la tranquilidad” (La Nación, 11/12/04). Asimismo, el presidente de CACons, de la Vega, admitió que el sector empresarial “está tomando conciencia de que el desarrollo social y económico van de la mano. Cuando se ven hechos de desestabilización social en algunos países de la región es reflejo de la necesidad de vincular ambos factores” (La Nación, 4/11/06).

²⁹⁷ La gran burguesía no vio con buenos ojos la aprobación en Diciembre de la ley N° 26,341, que los obligaba a otorgar carácter remunerativo a las cifras que venían pagando mediante vales de compras, tickets y otras formas de aumentos no contributivos.

financiamiento, además de que algunas fracciones esperaban de ello una apertura de mercados para sus productos. Esta posición favorable se expresó una y otra vez ante las gestiones del gobierno de Kirchner.

Tras el acuerdo con el FMI de septiembre de 2003 y el lanzamiento de la propuesta de canje, el apoyo de la burguesía fue inmediato. Los argumentos indicaban la importancia de reinsertarse en el mercado financiero internacional, más allá del resultado exacto de la deuda canjeada.²⁹⁸ Se acentuaban los elementos de credibilidad de la propuesta, así como el gesto de buscar darle salida al problema. De hecho, a pedido del ministro Lavagna ante el rechazo de acreedores en el exterior, el arco empresarial elevó un apoyo explícito al gobierno. A fines de octubre de 2003, se realizó una reunión con la presencia de 46 empresarios de 19 asociaciones: UIA, ABA, ADEBA, ABAPPRA, CAME, APYME, CACons, CACom, SRA, CONINAGRO, CRA, FAA, AEA, UDES y ADESPA. Es decir, prácticamente todo el arco de la burguesía, pequeña, mediana y grande. “Si el frente interno está unido, la Argentina no correrá riesgos con su propuesta de renegociación de la deuda” era la lógica, expresada por el titular de CAME, Osvaldo Cornide (La Nación, 31/10/03). El documento que emitieron en esa reunión, en clara sintonía con el gobierno, expresaba que era “fundamental que los recursos que la Argentina asignará a servir los intereses de su deuda sean compatibles con el crecimiento económico en marcha y la atención de la deuda social, de modo que el cumplimiento de los compromisos sea sustentable en el tiempo” (La Nación, 1/11/03).

Los apoyos de la gran burguesía se repitieron de modo constante, insistiendo en la sustentabilidad de la propuesta, respecto de la capacidad real de pago. AEA, UIA, CACom, CACons, CRA, SRA se ofrecieron para integrar comisiones técnicas de

²⁹⁸ ABA declaró que la propuesta constituía “un paso indispensable y muy positivo para restablecer el crédito internacional hacia la Argentina y encarar el crecimiento sostenido que necesita la economía”. UIA, enfatizó la responsabilidad de la propuesta en términos de viabilidad: “la voluntad de acelerar la reinsertión de la economía argentina en el mundo, teniendo en cuenta la capacidad de pago del país a los acreedores y evitando asfixiar el proceso de recuperación”. En el mismo sentido se expresó ADEBA: “El hecho de que se base en supuestos creíbles respecto de las reales posibilidades económicas y sociales del país, le otorga a la misma un carácter de seriedad y previsibilidad que debe servir para sentar las bases de un período de crecimiento sustentable (...). Al expresar la voluntad de asumir sus compromisos internacionales, destaca la vocación de la Argentina y sus dirigentes de aceptar la palabra empeñada” (La Nación, 23/9/03).

asesoramiento al gobierno (La Nación, 3/6/04).²⁹⁹ El capital financiero local enfatizó su apoyo a la propuesta.³⁰⁰ Incluso el apoyo de EUA no cejó en ningún momento, dado que Argentina jamás habló de no pagar su deuda ni de investigarla. AEA y la Bolsa de Comercio expresaban la ambivalencia central que les ocasionaban las reestructuraciones con quita y aplazamiento de pagos: como tenedores de bonos, les implicaba al mismo tiempo un recorte de sus derechos y una revalorización de capital (los títulos ganaban valor una vez canjeados); como empresarios, les mejoraba el panorama por completo.

Cuando finalmente se completó el canje, la UIA explicó con claridad el logro: “la clave no está en la extensión de los plazos o en la baja de la tasa de interés; ni siquiera en la magnitud de la quita. (...) La principal razón del éxito de la propuesta de canje es la seriedad de la misma, que permitió sostenerla con firmeza y capacidad negociadora” (La Nación, 3/3/05). Es decir, el éxito de la estrategia estaba en que indicaba la voluntad de pago. A pesar de sus diferencias con el gobierno, incluso SRA expresó su acuerdo, pues le otorgaba “sustentabilidad al crecimiento”, al restablecer la confianza (La Nación, 15/3/05). Según entendía el capital, se resolvía así la necesidad de acceso a mercados de capitales de un sector muy concentrado de la gran burguesía.³⁰¹ Para AEA se lograba así “echar las bases para un acceso de las empresas argentinas al financiamiento internacional, requisito indispensable para la concreción de importantes inversiones productivas y para una consistente reducción del desempleo” (La Nación, 3/3/05). ABA indicó que “superar el *default* es un paso absolutamente indispensable para consolidar la mejora que tuvo la economía en estos dos últimos años” (La Nación, 2/3/05).

Es decir, el camino de negociación para resolver el problema de la cesación de pagos contó con el apoyo explícito y reiterado de todas las fracciones del capital, incluso de aquellas relativamente desplazadas y “desgarradas” del BEP. El gobierno apostó a continuar este camino con las ofertas al Club de París, que encontró dos grandes trabas:

²⁹⁹ UIA señaló que la oferta “permite compatibilizar el crecimiento de la economía con el pago de las obligaciones del país”, mientras que para CACom representaba “un hito para la reinserción del país en la comunidad financiera internacional” (La Nación, 13/1/05).

³⁰⁰ Brito (ADEBA) indicó que “está claro que la Argentina no puede pagar más de lo que la propuesta ofrece” (La Nación, 3/11/04). ABAPPRA insistió en que el estilo de negociación “no viene de un concepto filosófico, sino de la convicción profunda de que no hay una alternativa distinta a esta que está planteada” (La Nación, 6/9/04). ABA y la Bolsa de Comercio también expresaron su apoyo en diversas ocasiones.

³⁰¹ La toma de deuda está altamente concentrada en un grupo que, según los datos oficiales desde los noventa y hasta 2005, alcanza como máximo 320 empresas (Basualdo, Nahon y Nochteff, 2007: 211)

el monto total de la deuda y la intermediación del FMI.³⁰² A medida que la inflación empujaba los salarios, en capital también encontró un punto de acuerdo en la contención de las demandas de la fuerza de trabajo. Ambas cuestiones buscaban resolverse en un marco de estabilidad pactado, que funcionara como horizonte de regulación a futuro, previsible: la inserción externa y la distribución del ingreso no podían depender del arbitraje estatal contingente, el capital buscaba cristalizar los acuerdos en cierto automatismo. Esto fue exactamente lo que Cristina Fernández buscó recuperar en la campaña presidencial, al llamar al Pacto Social, llamado que renovó al inicio de las sesiones del Congreso en 2008, proponiendo lograr los Acuerdos del Bicentenario.

Sin embargo, la permanente intermediación del Estado para permitir la valorización del capital suponía una mayor presencia del mismo en la economía, y al mismo tiempo, una negociación permanente entre las fracciones del capital. Esto, si bien era tolerado, no demoró en irritar a algunas de las fracciones desplazadas relativamente del comando del BEP; concretamente, al capital agropecuario. Las entidades del agro reclamaban desde fines de 2006 por la eliminación de las retenciones a las exportaciones: FAA, FAN y CRA protagonizaron 3 *lock out* entre ese año y el siguiente. Entre marzo y julio de 2008, la esta confluencia se expresó en la creación de la Mesa de Enlace con las 4 entidades del sector (SRA, CRA, FAA y CONINAGRO), que protagonizaron el conflicto por la resolución 125, marcando el final del momento político analizado en este capítulo. Ante este reclamo, la industria rápidamente se alineó con el gobierno: no podría tolerar un tipo de cambio estable (para controlar la inflación) y un aumento tanto de salarios como de tarifas.

El estallido del conflicto entre el gobierno y el agro expresó un conflicto profundamente político: el capital agrario concentrado podía soportar sin tener pérdida alguna el impacto del aumento de las retenciones, por lo que la cuestión no era tanto su peso económico, como el poder de determinar los usos del plusvalor apropiado por el capital de conjunto. Dicho de otra forma, aunque el antagonismo se trazó con el gobierno, el cuestionamiento de fondo era el lugar ocupado dentro del BEP, y la creciente discrepancia entre el poder estructural de esta fracción y su escasa influencia

³⁰² Desde la intervención del FMI, el gobierno argentino ya no volvió a permitir la revisión macroeconómica anual -correspondiente a todos los socios según el artículo IV del estatuto del FMI- ocasionando mayores dificultades en la negociación.

política (su “desgarramiento”). El estallido de la crisis internacional en octubre de 2007 apareció en el momento en que las contradicciones internas del PRE (sección 1) comenzaban a hacerse notar, y este panorama jugó un rol no trivial en la percepción de la situación global que enfrentaba el capital. Las fracciones desgarradas volvieron a la carga con más fuerza que al inicio del gobierno kirchnerista.

Pero esto no debe oscurecer el hecho de que durante el período 2003-2008, las fracciones hegemónicas lograron desplazarse del centro de la escena, dejando recaer la responsabilidad –y en cierta medida, la iniciativa- sobre el gobierno, morigerando así las discrepancias internas. Así, el programa mínimo común estaba en sostener el tipo de cambio alto, los salarios reales atrasados, resolver el problema de la deuda, y buscar mayor previsibilidad. Este último punto operaba como una quimera, en tanto el Estado debiera seguir interviniendo para compensar las diversas fracciones del BEP y para tramitar demandas populares: sin “la política”, el PRE no podía funcionar; por “la política”, el PRE forzaba las tensiones al interior del BEP.

3.2.2. Disputas de las clases populares

Tal como ya señalamos, la llegada al gobierno de Kirchner implicó una profundización del discurso y las políticas públicas iniciadas por Rodríguez Saá y Duhalde. La incorporación de las demandas de DDHH constituyó una de las novedades más relevantes en cuanto a los componentes del discurso, que se produjo en un nuevo contexto macroeconómico (condiciones de recepción) y a partir de un presidente elegido por el voto (condiciones de enunciación). La postura de diálogo de Kirchner, evadiendo la confrontación directa, y la iniciativa de la transversalidad, modificaron el campo de antagonismo político. Si esto modificó al conjunto de los partidos políticos (sección 3.1), su efecto en el campo popular no fue menor.

El impacto de las políticas de DDHH fue muy fuerte, porque organizaciones históricas reconocieron al gobierno dentro del campo de los “amigos”, generando una transferencia simbólica de su prestigio al flamante presidente. Si ya en agosto de 2003 Hebe de Bonafini señaló que Kirchner no era igual a sus predecesores, esta lectura se cristalizó a comienzos de 2006 cuando sentenció “el enemigo ya no está en la Casa Rosada” (Página/12, 25/1/06). La lectura era clara; mientras que antes el Estado había

sido garante de la exclusión, un enemigo exterior para las organizaciones populares, ahora el gobierno (y el Estado) ya no ocupaban ese lugar, y en todo caso, pasaban a estar en disputa, a ser un espacio de batalla (Gualdi y Roldán, 2011; Solís Delgadillo, 2010). Aunque diversas organizaciones mantuvieron su distancia crítica, era imposible desconocer que el rol, las políticas y el discurso del gobierno habían cambiado.

La desaparición de Julio López en septiembre de 2006 y el asesinato del maestro Carlos Fuentealba en abril de 2007 constituyeron dos fuertes desafíos a la política oficial, que cuestionaba el compromiso de la política oficial para terminar la represión y sanear las fuerzas de seguridad. Este último evento provocó la única huelga general declarada por la CGT y la CTA en todo el período (Payo Esper, 2013). El gobierno buscó en ambos casos deslindarse de los hechos, condenando la represión y las amenazas, pero alegando su incapacidad de resolver el conjunto del problema: se escudaba bajo la idea de que quedaban *cuentas pendientes* y de la necesidad de que el proceso fuera gradual.³⁰³ Sin embargo, la política de DDHH, con sus límites, no dejaba de irritar a otros sectores sociales. Entre ellos, vale la pena resaltar a la Iglesia Católica, que en noviembre de 2005 emitió un comunicado condenatorio, lo que producía un alejamiento de esta entidad que había sido clave durante el gobierno de Duhalde.³⁰⁴

En este momento ganaron importancia los reclamos contra la inseguridad, que venían apareciendo en el espacio público desde 2001. En 2004, Juan Carlos Blumberg – padre de una víctima de secuestro y asesinato- lideró una serie de manifestaciones multitudinarias, que lograron el establecimiento de penas más duras para los delincuentes (Antón et al., 2011; Galar, 2009). En el discurso de muchos manifestantes de sectores medios, la situación era interpretada como una supuesta defensa del gobierno de los criminales, contra las víctimas: en un nada trivial giro lingüístico, se hablaba de

³⁰³ Respecto de la desaparición de López, Kirchner señaló que “el pasado no está ni derrotado ni vencido, estemos atentos (...) no podemos dejar que se vuelva a ese pasado” (Clarín, 27/9/06). Kirchner se cuidó de que ningún funcionario hablara de “desaparecido” (Graziano, 2013). Respecto del asesinato de Fuentealba en la provincia de Neuquén, Kirchner dijo “Repudiamos la violencia fuertemente y los que estamos en el Estado tenemos que ejercer con responsabilidad”. “Yo abrazo este sistema con todas mis fuerzas. Surgen tensiones en distintos ámbitos, pero esto no habilita, bajo ningún aspecto, la doctrina de seguridad nacional bis” (Diario 26, 9/4/07)

³⁰⁴ El 25 de mayo de 2005 Kirchner no asistió a la misa de Te Deum en la Catedral metropolitana, para no evitar las críticas del entonces arzobispo de Buenos Aires, Jorge Bergoglio. El alejamiento que no se resolvería sino hasta meses después de la asunción de Bergoglio como papa Francisco (Infobae, 25/5/13; Perfil, 31/3/13).

que el gobierno defendía los DDHH de los delincuentes en lugar de los de la ciudadanía, en obvia referencia a la reapertura de los juicios por los delitos de lesa humanidad. En este sentido, no se puede menospreciar la influencia en esta interpretación de sectores conservadores, agraviados por los procesamientos de personal asociado a la última dictadura.³⁰⁵ El reclamo perdió fuerza luego de que se aprobaron las leyes demandadas.

Un proceso similar al de los organismos de DDHH puede detectarse entre los MTD. La valorización productiva del capital impactó en una creciente demanda de fuerza de trabajo, lo que redujo significativamente la desocupación durante el período. Junto a la consolidación de los planes sociales, el movimiento piquetero se vio confrontado a una nueva situación que exigía definiciones. La mayor parte de las organizaciones de desocupados fue lentamente cambiando su impronta, manteniendo su inserción territorial. El lanzamiento del Manos a la Obra y otros planes semejantes abonaron a este sesgo, dado que permitía a las organizaciones funcionar como cooperativas y encarar micro-emprendimientos productivos, lo que fue aprovechado por el movimiento para crecer en el territorio (Martos, 2014).

Se produjeron diversas reacciones entre las organizaciones: mientras algunas optaron por integrarse en el Estado como representantes o como funcionarios (FTV, BdP, MEvita, MUP), otras sostuvieron el enfrentamiento. Esta distinción es la que el gobierno (ver sección 2) y los medios de comunicación bautizaron, un tanto maniqueamente, como piqueteros “blandos” y “duros” (Boyanovsky Bazán, 2010).

Detrás de estos posicionamientos, como ya se señaló en los capítulos 3 y 4, se encontraban lecturas diferentes respecto de la construcción política y el lugar del Estado en el cambio social (Cortés, 2010; Moreno, 2010; Natalucci y Schuttenberg, 2013; Perelmiter, 2010; Retamozo, 2009; Schuttenberg, 2012). Mientras que para el MEvita sus objetivos se fundían con los del gobierno, el FTV y BdP entendían que se trataba de un gobierno en disputa, y el rol de los movimientos era interceder en esta lucha –que no excluía al propio Estado- para inclinarla en favor de las clases populares. Si bien las tres organizaciones reconocían en el peronismo un movimiento popular cuyo un momento

³⁰⁵ Por ejemplo, a partir de 2005 apareció y cobró visibilidad pública la *Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina*, liderada por Cecilia Pando, que reivindicaba la “tarea” realizada por la dictadura militar y hablaba de una persecución política a los militares involucrados. Esta organización tuvo muy fluidos vínculos con sectores de la Iglesia católica.

histórico significó un progreso social sustantivo, diferían en los alcances como construcción política: mientras que para MEvita peronismo y emancipación se confundían entre sí, FTV y en particular BdP entendían que el peronismo era parte de los movimientos populares emancipatorios, pero no los representaba en su totalidad (diversas corrientes lo componían, incluyendo tendencias socialistas y marxistas). BdP entendía que parte del peronismo había mutado con el neoliberalismo en una deformación burocrática, el “pejotismo”: una tipo de formación partidaria que no contenía las potencialidades del movimiento. El MUP tuvo una fuerte revisión de sus bases ideológicas a partir de la llegada de Kirchner al gobierno (pasaron de posiciones anarquistas a peronistas), que terminó abonando a una postura muy semejante al MEvita.

Estas organizaciones, junto al Frente Transversal de la CTA, llamaron en junio 2004 a un acto en Parque Norte, constituyendo la Primera Asamblea Nacional del FOP. Se discutió allí el documento “La hora de los pueblos”, donde la interpretación del gobierno como un aliado se hacía explícita: aunque Kirchner no proviniera del campo popular, claramente retomaba las demandas planteadas por estas organizaciones y por lo tanto, apoyarlo significaba defender lo conquistado (Muñoz, 2010). Kirchner se apoyó en estas organizaciones, especialmente mientras no contaba con una fuerza propia dentro del Estado. Así, por ejemplo, cuando Shell y ESSO amenazaron con aumentar el precio de las naftas en marzo de 2005, el presidente llamó a un boicot que fue rápidamente acatado por los MTD afines, mostrando así una capacidad de intervención que excedía largamente la estructura estatal (Gualdi y Roldán, 2011). Si bien el gobierno desmintió haber ordenado la acción y las organizaciones reivindicaron su autonomía de decisión (Clarín 14/3/05, La Nación, 14/3/05, Página/12, 11/3/05), este evento mostró que las organizaciones eran reconocidas por el gobierno. Éstas repitieron su apoyo en diversas oportunidades, como en mayo de 2005 con el lanzamiento del MEvita en el Luna Park o en octubre de ese año en el acto de apoyo a Kirchner del Frente Transversal. Aparece así una gran novedad del período, que son las *manifestaciones de apoyo* al gobierno.

Para todas estas organizaciones, participar del Estado en calidad de representantes o funcionarios implicó un fuerte proceso de redefinición de identidades, estudiado en la bibliografía citada. Para algunos autores, el problema no pasó más que por la compra de voluntades (Escudé, 2007, 2009). En otros casos, se lo interpretó como

un proceso de cooptación ligado a las necesidades de pacificación social del gobierno (Borón, 2012; Rajland, 2012; Svampa, 2011). A pesar de que lo anterior de ninguna forma anula la anuencia y capacidad de negociación de las organizaciones, se ha criticado el rol pasivo que la idea de cooptación sugiere (M. Gómez, 2010; J. I. Lozano, 2013; Moreno, 2010; Muñoz, 2010; Schuttenberg, 2012). Para que la situación pueda definirse como una transacción –planes o cargos por apoyo político- requiere de tener ciertos significados compartidos que la hagan posible (Auyero, 2007; Paladino, 2006; Rajland, 2008). Los planes como posible forma de compra de voluntades existían desde hacía años: ¿por qué motivo de un momento a otro lograban movilizar acuerdos políticos? Por otra parte, organizaciones que manejaron gran cantidad de planes, como la CCC, no se alinearon con el gobierno, rompiendo incluso la vieja alianza que tenían con la FTV. Cada organización optó por diversas vías (debate, centralización, etc.) para tomar decisiones respecto de la relación con el gobierno, pero parece haber acuerdo en que no se trató de una imposición externa (Muñoz, 2010; Rajland, 2008).

En tal sentido, se ha sugerido que las concepciones político ideológicas de los movimientos tuvieron una influencia categórica en la decisión de acercarse o no al gobierno. En términos sencillos, las organizaciones que compartían las tradiciones nacional-populares fueron las que se hicieron eco de la interpelación de Kirchner, que usó como “puentes” discursivos los significantes de estas tradiciones para establecer el diálogo (Schuttenberg, 2011). Se ha insistido en los diversos grados de autonomía de las organizaciones que se aliaron, o directamente incorporaron, al gobierno. En este sentido, resulta más difícil encontrar actos disruptivos de MEvita o el Frente Transversal. El MUP se unió con otras organizaciones de menor peso (Compromiso K, Juventud Presente y Generación para la Emancipación Nacional) en diciembre de 2006, atendiendo al llamado realizado desde el gobierno a apoyar las políticas oficiales. Con un fuerte componente de juventudes, nace así La Cámpora, una fuerza política creada desde el propio gobierno (Bosia, 2014a; Vázquez y Vommaro, 2012).

El FTV, en cambio, protagonizó varios actos que le generaban al gobierno más problemas que apoyos: el mismo mes de lanzamiento del FOP, D’Elía tomó una comisaría en La Boca reclamando por el asesinato del “Oso” Cisneros, un referente popular del Comedor Los Pibes. El reclamo tuvo un alto impacto mediático, que

alimentaba el relato de los piqueteros –asociados al gobierno- como “violentos”. En agosto de 2006, D’Elía protagonizó cortó las cadenas de la tranquera de un campo en Esteros del Iberá, perteneciente al empresario estadounidense Tomkins. Estas acciones provocaban malestar en el gobierno, que quedaba asociado así a una lógica de confrontación y desafío extra-institucional (La Nación, 27/8/06, Página/12, 17/8/06).

En el caso de BdP, la autonomía fue aún mayor. A pesar de participar con más cargos relevantes dentro del aparato estatal nacional, y haber acompañado las listas oficiales en varias elecciones, esta organización entendía que el kirchnerismo le aportaba a su construcción y no al revés.³⁰⁶ De modo consecuente, en abril de 2006, realizan un acto de lanzamiento del Movimiento Libres del Sur, partido que reunía al movimiento Barrios de Pie, la Agrupación Martín Fierro, el Frente Barrial 19 de Diciembre, la Agrupación Envar El Kadri, la Corriente Patria Libre y al PCCE. Ese año participaron de una alianza electoral en Santa Fe, en el FPCyS. Cuando se acercaron las elecciones de 2007, Ceballos renunció a su cargo en el Ministerio de Desarrollo por la falta de apoyo oficial a un candidato propio a intendente, reincorporándose luego. Fue en abril de 2008 cuando BdP-Libres del Sur rompió abiertamente con el gobierno, debido al énfasis de Kirchner en la importancia del PJ (ver sección 3.1).

Otro conjunto de organizaciones quedó fuera del llamado a la transversalidad, ajenas a los puentes discursivos que el presidente proponía para interpelarlas: aquellos que fueron llamados “piqueteros duros”. Éstas protagonizaron la mayor parte de las manifestaciones y protestas *contra* el gobierno, reclamando por más planes y por mayores montos, por comida y trabajo, así como por el desprocesamiento de luchadores sociales. Entre ellas, estaban las organizaciones territoriales ligadas a distintos partidos de izquierda (CCC, PO, MTR, MIJD, CUBa, FTC, MST-TV). Ya desestructurada la posibilidad de un campo unificado de resistencia piquetera, estas organizaciones se dispersaron en sus propias construcciones políticas. Se ha estudiado cómo la construcción discursiva de estas agrupaciones se sostiene sobre significantes muy

³⁰⁶ En agosto de 2003, en una manifestación contra el ALCA había dicho “Para nosotros este gobierno no es lo mismo que los anteriores, como tampoco es lo mismo Kirchner que Duhalde. Nosotros hemos sido opositores a Eduardo Duhalde, por eso no podríamos ser oficialistas ahora. No somos kirchneristas, pero vemos positivamente algunas de las medidas que se han tomado frente a los derechos humanos y las empresas privatizadas” (citado en Escudé, 2009).

estructurados, que difícilmente registran interpelaciones exteriores, priorizando en su discurso la diferenciación interna entre corrientes cercanas (Moreno, 2013).

Pero no sólo el arco ligado a partidos de izquierda quedó fuera de la transversalidad. Las organizaciones de la izquierda independiente comenzaron un proceso de transformación a través del debate sobre las alternativas de construcción popular que no se centraran en el Estado, pero que no lo negaran, operando sucesivas relecturas sobre su propuesta (AAVV, 2007; Becher et al., 2013; Martos y Makuc Urbina, 2014; R. Rodríguez, 2012; Thwaites Rey, 2004). La mayor parte de estas agrupaciones había participado de la CTD-AV, que en 2004 tomó la decisión de incorporar a su construcción a trabajadores ocupados, estudiantes, campesinos, minorías, bajo la lectura de que sujeto político de la revolución era plural –y no sólo ni centralmente el proletariado, tal como lo entendían ciertas tradiciones de izquierda marxista. Este grupo tomó el nombre del piquetero asesinado por Duhalde, y nació así el Frente Popular Darío Santillán (FPDS). Durante este período, el FPDS se centró en desarrollo territorial, absteniéndose de participar en elecciones.

La última acción coordinada por todas las anteriores agrupaciones fue la protesta con movilización realizada en agosto de 2005, bajo las demandas antes referidas de masividad de planes y desprocesamiento (Indymedia, 2/8/05). Las dificultades de sostener la movilización en las calles, con un tratamiento mediático fuertemente adverso, se magnificaban con el abandono de organizaciones masivas como FTV y BdP que antes formaban parte del espacio. Otra de las organizaciones masivas, la CCC, que contaba con una gran capacidad de movilización, se mantuvo crítica al gobierno, participando de gran parte de las protestas. La política de Kirchner de “ni palos ni planes” mostró funcionar, pues no sólo intentaba deslegitimarlos ante la sociedad, sino entre sus propios militantes, al ver que resultaba más efectivo alinearse con el gobierno que enfrentarlo. El repliegue territorial resultó entonces “táctico”.

Dentro del campo sindical, el kirchnerismo también produjo nuevos alineamientos. El MTA había apoyado la candidatura de Rodríguez Saá en 2003, indicando de modo explícito su anuencia con el discurso populista del ex presidente (quien incluyó en sus listas a Héctor Recalde y Julio Piumato, dos representantes del MTA). No obstante ello, ni la CGT ni el MTA tenían una posición particular con

Kirchner, y mostraron un rápido acercamiento al gobierno que ponderaba positivamente el trabajo asalariado y la producción industrial como formas de inclusión. La tradición peronista invocada jugaba un rol no menor para atraer a los dirigentes de la central. El nuevo presidente, además, propuso un trato valioso para ambas partes.

Por un lado, Kirchner reconoció el valor de los sindicalistas en su construcción política y en la tradición peronista, lo que representó un cambio respecto del lugar relegado que habían ocupado en los noventa. Por otra parte, la renovación de las negociaciones colectivas de trabajo y la participación mayoritaria en el Consejo del Salario Mínimo (ver sección 2) implicaban importantes beneficios mutuos: el gobierno podía por esta vía moderar los alcances de la recuperación salarial, y la burocracia sindical podía adjudicarse los aumentos como logros propios, consolidando su posición de control de las demandas corporativas de la clase trabajadora (Casas, 2011).

Sobre esta sociedad, se logró en julio de 2004 la reunificación de la CGT, bajo un triunvirato liderado por Moyano y completado por Susana Rueda –cercana a los “Gordos”- y Luis Lingieri -cercano al menemismo (Lucca, 2011). Al año siguiente, la dirección de la central quedó exclusivamente en manos de Moyano. La elección del gobierno de fortalecer a este dirigente no era arbitraria: se trataba de uno de los referentes de la CGT en la resistencia al neoliberalismo (ver sección 4.2.2 del capítulo 3), que pasaba ahora a comandar la integración con el gobierno kirchnerista (Campione, 2008). Es decir, facilitaba al gobierno validar su discurso contrario al neoliberalismo, a pesar de no haber sido una fuerza política protagónica de aquel proceso.

El apoyo de la CGT al presidente sería total durante el período aquí analizado, incluso cuando esto contrariaba los intereses de sus representados o sus previas posturas políticas (E. López y Cantamutto, 2013). El caso más claro fue el de la deuda, pues se pasó del repudio al apoyo a los pagos sin investigación. Durante el canje de 2005, Moyano insistiría que se trataba de “una causa nacional y en una verdadera política de Estado detrás de la cual debe encolumnarse y embanderarse la sociedad” (La Nación, 18/1/05). Cuando se definió el pago al FMI, el argumento se repitió afirmando que la decisión “reafirma nuestra soberanía política y la independencia económica”, aunque se encargó de recordar que ya era “el turno de pagar la deuda social” (La Nación, 18/12/05). Continuando con la lógica iniciada por el GP, continuada por Rodríguez Saá

y Duhalde, el gobierno kirchnerista lograba convocar el apoyo de una fracción de los trabajadores para un programa ajeno, en el caso de la deuda, sin concesiones directas.

El acuerdo no era, sin embargo, total, como se vería más tarde. Aunque el alineamiento con el oficialismo se mantuvo en todo el período, las amenazas de ruptura comenzaron durante la convocatoria al Pacto Social de la campaña de 2007, cuando Cristina Fernández señaló que prefería otra conducción para la central. En diciembre de ese año, el gobierno insistió con que vería bien otra conducción para la CGT, mencionando a Caló (UOM) o Martínez (UOCRA), ambos más cercanos a los “Gordos” que a Moyano.³⁰⁷ Esto generó resquemores con la conducción sindical. Para contener la posibilidad de ruptura, la presidenta amenazó con darle la personería jurídica a la CTA, algo intolerable para la CGT. Pero quedaba claro que las fracciones internas de la CGT seguían siendo fuertes. En octubre de 2006 ya se habían producido duros hechos de violencia entre éstas durante el traslado de los restos de Perón. La central lograría mantenerse unida hasta el conflicto del agro, cuando la CGT apoyó con movilizaciones y manifestaciones públicas al gobierno. La única presencia en el gabinete ligada al sindicalismo fue, no trivialmente, el ministro de Trabajo Carlos Tomada.

La CTA, por su parte, había expresado que consideraba las elecciones de 2003 una farsa electoral, aunque los candidatos Carrió y Kirchner eran “lo menos peor”. Una vez en el gobierno, Kirchner convocó a una reunión a De Gennaro, donde evaluó las propuestas de esta central. En lugar de desestimarlas como hizo antes Duhalde, Kirchner no hizo promesas, pero resulta evidente que las consideró: los DDHH, el repudio a la represión y a la corrupción tenían gran importancia para esta central, y fueron parte de las políticas públicas clave del inicio del mandato (ver sección 2). El gobierno habilitó el diálogo con la central alternativa, incluyéndola en el Consejo del Salario Mínimo y en las mesas de trabajo del MERCOSUR, aunque no avanzó en su reconocimiento legal (usando esta demanda como amenaza para disciplinar a la CGT). La CTA sufrió desde adentro la salida de organizaciones hacia el kirchnerismo: el Frente Transversal, la FTV, BdP formaban parte sustancial de su militancia. No obstante, la central consideró que sus demandas eran consideradas de forma distorsionada en las políticas aplicadas o en su

³⁰⁷ Martínez terminó desestimándose al revelarse su rol en tareas de inteligencia para la dictadura militar.

recuperación discursiva. La dirigencia interna incluía sectores de izquierda más radicales. Esto favoreció cierta indefinición de la CTA respecto del nuevo gobierno.

Esto no quita que cuando el gobierno cerró el acuerdo con el FMI en septiembre de 2003, la CTA –a diferencia de la CGT- sostuvo sus críticas.³⁰⁸ A pesar de presentarse como un enfrentamiento al organismo, la estrategia negociadora sólo repetía los lineamientos planteados por Duhalde. El acuerdo no mostraba diferencias importantes respecto de anteriores acuerdos, repitiendo propuestas de política y objetivos (Mansilla y Tumini, 2004). Incluso resultaba más exigente en términos de ajuste fiscal que los acuerdos firmados por Cavallo en 2001, sumado a que no se negociaba ninguna quita y se reconocían intereses caídos, constituyendo un mal antecedente para la reestructuración por venir (Colectivo del Departamento, 2004). La CTA organizó al mes siguiente una consulta popular –Autoconvocatoria NO al ALCA- donde volvió a mostrar la capacidad de desplegar acciones en todo el territorio nacional. El resultado de esa consulta fue un rechazo rotundo a los pagos de la deuda y al ALCA.

Sin embargo, la estrategia de Kirchner siguió sus propios pasos (ver sección 2), priorizando los arreglos con el capital financiero internacional por sobre las acuciantes necesidades sociales. Por este motivo, la CTA junto a las agrupaciones piqueteras críticas, denunciaron el trato desigual del gobierno tenía entre la deuda externa y la deuda social, pues “se pone la lupa para investigar a cada jefe de hogar para ver si va a cobrar o no 150 pesos y todavía no se ha investigado la deuda externa” (La Nación, 1/5/04). La propuesta de canje fue criticada como “un retroceso con respecto a la oferta que se presentó en Dubai”, pues se incrementaban los pagos prometidos, comprometiendo la recaudación del Estado para continuar pagando una deuda ilegítima (La Nación, 7/6/04). Incluso se llamó la atención sobre la creciente necesidad de fondos que abría la posibilidad de que “el Estado recurra a los fondos jubilatorios privados para hacer frente a esos pagos”.³⁰⁹ Agrupaciones piqueteras insistían en usar el dinero

³⁰⁸ Lozano declaró que “El único aspecto positivo del acuerdo es que no hay compromisos de reformas estructurales (...), como ocurrió en acuerdos anteriores. Esto mejora la autonomía en materia de decisiones económicas. Pero no se logró situar con claridad en el acuerdo que el Fondo fue corresponsable de la crisis argentina. Y se deberían haber postergado el pago de los intereses de la deuda con los organismos multilaterales, no solo del capital” (La Nación, 20/9/03).

³⁰⁹ Como veremos en el capítulo 6, esto ocurrió a fines de 2008.

destinado al pago de la deuda para la universalización de los planes sociales, incrementar su monto y a la construcción de viviendas populares (La Nación, 21/10/04).

Durante el año 2005, la CTA fue la protagonista más importante de la organización de la Contracumbre, donde –como se explicó– se discrepaba respecto de la política oficial del gobierno en torno a integración y tratamiento de la deuda. La relevancia de la Contracumbre fue clave para definir como una derrota política el rechazo al ALCA, pues, como dijimos, el gobierno no se oponía frontalmente. El pago al FMI profundizó el sesgo de la crítica, pues la CTA entendía que así “se distraen recursos que se pueden usar para el desarrollo interno”, al mismo tiempo que suponía “el abandono definitivo de la idea de corresponsabilidad, que supone compartir costos. Acá sólo pone una parte, que es la Argentina” (La Nación, 16/12/05). Las agrupaciones piqueteras “duras” también repudiaron la decisión, organizando manifestaciones y protestas en contra (La Nación, 2/1/06).³¹⁰

A pesar de estas discrepancias, algunos sectores internos de la central observaban con agrado las políticas oficiales. Estas divisiones se hicieron públicas en julio de 2006, cuando el voto de la CTA dentro del Consejo del Salario Mínimo se dividió: la corriente de Yasky (oficialismo) apoyó el acuerdo alcanzado, mientras que la línea de De Gennaro (oposición) se abstuvo de votar por considerar el acuerdo insuficiente. En noviembre de ese año se resolvió un secretariado unificado entre ambas corrientes para evitar la ruptura. Cuando Cristina Fernández ganó la presidencia, la CTA lanzó, junto a APYME, FAA y el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, una Paritaria Social, en un intento por incluir en el Pacto Social la ansiada redistribución de riquezas: asignación por hijo, salario mínimo igual a la canasta familiar, movilidad jubilatoria, entre otras. Si bien en la reunión con la presidenta recién electa no obtuvieron respuestas concretas, puede notarse el peso que tendrían estas demandas en las políticas públicas por venir (ver sección 2 del capítulo 6).

De conjunto, la llegada al gobierno por el voto de Kirchner, con un discurso populista afincado en políticas públicas y gestos específicos, con un trasfondo de creciente ocupación y asistencia social, produjeron un desafío a las interpretaciones

³¹⁰ El líder del MIJD, Castells, señaló que “la política económica [de Kirchner] es igual a la de Menem, (...) la diferencia es que éstos, que se hacen los izquierdistas, para pagarle al FMI se ponen una remera del Che Guevara” (La Nación, 14/3/06).

políticas del proceso. En estos años, ninguna de las contradicciones internas del PRE tuvo una expresión evidente (ver sección 1), lo que favoreció la interpretación de que todos podían ganar con este “modelo”. Asumiendo al Estado como un campo de batalla más, y obteniendo reconocimientos explícitos de éste, las organizaciones de orientación nacional-popular y la CGT unificada se alinearon e integraron con el gobierno. Esto asentó el quiebre al interior del campo popular que se había perfilado en los años previos (ver sección 3.2.2 del capítulo 4). Las organizaciones de orientaciones marxista y de izquierda independiente, así como la CTA mantuvieron una distancia crítica o de franca oposición. La acción estatal, maquiavélica o no, no podría haber funcionado si no era en el marco de interpretaciones en pugna de las propias clases populares.

4. Mirada de conjunto

La llegada al gobierno de Néstor Kirchner supuso un nuevo momento en el proceso político aquí analizado. Sintéticamente, se completó la ruptura populista, al ganar las elecciones la propuesta que discursivamente se ordenaba en un antagonismo entre el BEP y el pueblo. Proponiéndose como el líder como significante tendencialmente vacío, éste podía funcionar como superficie de inscripción de las cadenas equivalenciales de demandas populares –y de fracciones del BEP- que en momentos previos habían confluído sin darse constitución identitaria. Aunque quizás en este período se privilegiaron las alianzas estratégicas –no constituirían lo que Laclau llamaba una articulación-, resulta innegable que el campo de antagonismo político se había modificado, pues el Estado ya no garantizaba la especulación y exclusión del neoliberalismo, sino que se erigía como garante de la inclusión a través del impulso a la producción y el empleo. La construcción de una fuerza política con base en este discurso, da lugar a una identificación retroactiva de diversos agentes con Kirchner, dando origen al *kirchnerismo*. El orden político –construcción del mito trascendente y distribución de roles- de estos años logró no sólo cierta estabilidad, sino que convocó el apoyo explícito de parte de las clases populares, por lo que devino en hegemónico.

Los estudios post-fundacionales remarcan el aspecto de ruptura populista, pero omiten o soslayan las fuertes continuidades respecto de la estructuración previa del orden político. Naturalmente, como este enfoque resalta, el populismo siempre se juega

entre la continuidad y la ruptura: no constituye una revolución. En tal sentido, no hay desacuerdo alguno. La discrepancia se basa en la falta de definiciones precisas sobre qué fue exactamente lo novedoso que aportó la llegada de Kirchner respecto de lo que antes ocurría, y qué fue lo que se sostuvo. La mirada totalizante aquí propuesta busca compensar estos déficits.

En este sentido, como hemos insistido, no fue Kirchner quien estructuró el discurso populista en el que el Estado se desplazaba del campo enemigo, al oponerse al neoliberalismo (la especulación financiera, la exclusión, el gobierno de las corporaciones) como origen de los males del pueblo argentino. La estructuración de estos significantes *desde* el gobierno había sido ya realizada por Rodríguez Saá y Duhalde, y antes que ellos, en la disputa política no estatal, había sido anticipada por el GP y diferentes organizaciones de las clases populares. Fue por eso que, en ambos casos y por diferentes vías, se iniciaron diálogos con esas organizaciones para validar el discurso, y se dio forma a las políticas macroeconómicas que modificaban la regulación del PRE. Algunas de las propias organizaciones populares reconocieron este cambio, desplazando el eje de su antagonismo: la CGT, el MTA, la FTV y Madres de Plaza de Mayo se acercaron al breve presidente decembrino, mientras que la CGT y el MTA participaron del Diálogo Social de Duhalde, mientras que la FTV y la CCC negociaron planes sociales en las instancias subnacionales.

¿Qué agregó entonces Kirchner? Según señalamos, hay al menos dos condiciones de enunciación y recepción del discurso que cambiaron, y se incorporó un nuevo significativo a la cadena de equivalentes, que permitió una nueva narrativa de la historia, que proponía cierta coherencia al proceso en ciernes. Las condiciones que se modificaron fueron que Kirchner fue electo por el voto y asumió en el momento en que el PRE mostraba sus características más inclusivas en términos de empleo y salarios. Ambas circunstancias difieren de las de sus antecesores, y favorecen la efectividad de la interpelación discursiva tanto por el lugar de enunciación (de mayor legitimidad) como por las condiciones de recepción (la promesa de inclusión se hacía palpable). Se puede agregar que la masificación de los planes sociales dispuesta por los gobiernos anteriores se había consolidado para entonces, aportando también la receptividad del discurso.

El elemento que fue incorporado al discurso y a las políticas por Kirchner fue la cuestión de los DDHH, ausente en sus antecesores. Los múltiples gestos en relación a este tema le valieron un rápido y fuerte apoyo por parte de la mayoría de los organismos de DDHH, lo que le confirió un prestigio que sin lugar a dudas fue clave en la constitución del kirchnerismo en una fuerza política. Tomando el discurso ya puesto en la escena pública por la CTA y la agrupación HIJOS (ver capítulo 3), el presidente realizó una operación de lectura de la historia en dos tiempos: el neoliberalismo se expresó en la exclusión social de los noventa, pero como continuidad de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. El flamante gobierno venía a romper esta continuidad, para formar una democracia real, de pleno respeto de los derechos en su amplio sentido. Si se quiere, se proponía el pasaje de una democracia procedimental a una sustantiva.

El efecto de esta nueva discursividad, apoyada en políticas públicas y gestos, se hizo sentir en el orden político de modo ineludible. El campo de antagonismo se vio completamente trastornado, al poner al Estado como garante de derechos en lugar de corresponsable de la exclusión. Al mismo tiempo, la promesa de renovación y normalización (como *democratización dentro de la democracia*) interpelaba no sólo a organizaciones sociales sino también a los sectores medios movilizados.

La transversalidad expresó en toda su magnitud esta novedad. Como vimos, un las organizaciones identificadas con las tradiciones políticas nacional-populares se integraron en el Estado, movilizándose y manifestándose a favor del gobierno (MEvita, MUP, BdP, FTV). La CGT se unificó y funcionó en el marco de una fuerte alianza con el gobierno. Suponer que todas estas organizaciones fueron compradas con planes y cargos no se ajusta al proceso comentado –sin perjuicio de que esto haya existido. Cada organización realizó una interpretación del proceso y actuó en consecuencia. Este consenso movilizado, explícito y organizado, de una parte significativa de las clases populares resultó una completa novedad, permitiendo caracterizan al orden político como hegemónico, a diferencia del neoliberal (ver sección 1 del capítulo 3).

Entre los partidos, el FpV actuó como un imán que incorporó referentes de todos los partidos políticos mayoritarios. Gracias a esta atracción, la transversalidad funcionó con una valiosa productividad electoral: el kirchnerismo se consolidó como fuerza

mayoritaria en los poderes del Estado. Partiendo del PJ, se estructuró una nueva coalición que capitalizaba referentes de centroizquierda de otros partidos.

La transversalidad como estrategia y el discurso populista modificaron también el campo de relaciones con las fuerzas políticas que no se incorporaron al kirchnerismo. Entre la oposición partidaria, se produjo una serie de realineamientos que favoreció definiciones hacia la derecha: en algunos partidos esto operó relegando sus propios elementos progresistas (UCR, PS, ARI, PJ), en otros casos supuso la creación misma de opciones de derecha liberal (PRO). Los partidos de izquierda reforzaron los elementos constituyentes de sus identidades, afianzando así opciones polares a izquierda que lograban incidir en la disputa discursiva dentro del espacio público pero no lograban productividad electoral. La única variante partidaria de centro-izquierda no kirchnerista que logra cierta repercusión en el período fue la aparición de Proyecto Sur.

Entre las organizaciones de desocupados no oficialistas, operó una profundización territorial, y se desestructuró la unidad ya no sólo programática sino incluso en la acción. Aquellas de orientación marxista profundizaron su afinco en las identidades “duras” de origen, mientras que las de orientación de nueva izquierda comenzaron un proceso de revisión ideológico-política, separándose por el momento de la disputa por el Estado. La CTA fue su principal aliada en la crítica al gobierno, ya desvinculada de la CGT oficialista. La recuperación de demandas de la CTA también la ponía en crisis interna, con múltiples organizaciones y dirigentes que buscaban acercarse al gobierno. Pero al mismo tiempo la insuficiencia de las políticas oficiales (como los planes y las subas salariales), la ausencia de otras (universalización, ingreso ciudadano) y el rumbo directamente opuesto en otras (tratamiento de la deuda), la mantuvieron en cierta oposición. La CTA continuó mostrando una gran capacidad organizativa, al margen del Estado, con la realización de la consulta popular en 2003 y la Contracumbre en 2005, ambas en oposición a las políticas oficiales.

Pero, ¿qué pasaba mientras tanto con la clase dominante? Aplicados los lineamientos centrales del programa del GP, el conjunto de la gran burguesía se alineó en demandas de estabilidad y previsibilidad del clima de negocios, que se expresaban con rotunda claridad en el manejo de la deuda. La política de resolución de la cesación de pagos sólo tuvo rechazo por parte de muy pocas organizaciones de acreedores creadas

ad hoc. El conjunto del capital fue muy enfático en avalar al gobierno y apoyarlo de diversas formas. Se trataba de la cuenta pendiente más relevante para continuar la valorización del capital en la nueva fase del modo de desarrollo. Al garantizar continuidad a las políticas de regulación del PRE y avanzar sobre los puntos pendientes comunes, el gobierno le permitía al capital evitar recurrir a la presión explícita.

El otro punto de acuerdo era morigerar la recuperación de los ingresos de la fuerza de trabajo. El gobierno creó diversos espacios para que el capital pudiera resolver estas necesidades de acuerdo con sus propias tensiones (Consejo del Salario Mínimo y negociaciones colectivas de trabajo). Si bien se reconocía la primacía del capital industrial concentrado, no dejaba de incluirse a todas sus fracciones. El PRE se estructuró requiriendo la intervención explícita y permanente del Estado: centralmente, conteniendo aumentos de salarios y compensando a las fracciones desplazadas a través de subsidios. Ambos elementos apuntaban a sostener la reducción del costo de producción en la fracción industrial exportadora, gran ganadora de la etapa. La expansión de esta fracción requería además –tanto por las divisas como por los recursos fiscales que aportaba- de la profundización primaria-exportadora, reforzando el poder estructural de las fracciones del capital ubicadas en esas actividades, a las que hemos denominado “desgarradas”, por su particular situación en el orden político y el PRE.

El BEP mostró así una alteración respecto de su situación previa. Si bien no hubo ningún cambio de sus integrantes (no salió ni entró ninguna clase o fracción), sí hubo un desplazamiento en su interior: se consolidó la dirección política del capital industrial exportador, que relegó así al capital financiero extranjero y el que opera en los servicios públicos, privilegiados en el orden neoliberal. El capital financiero local y el ligado a la construcción se mantuvieron asociados a la fracción dominante, y de este modo se expandieron fuertemente en el período, volviéndose uno de los principales apoyos del gobierno. La pequeña burguesía industrial y comercial completa el arco de lo que bien podríamos llamar las *fracciones kirchneristas del capital*. En un lugar muy diferente se encontró el capital agropecuario, que por un lado consolidó su poder estructural, volviéndose clave para garantizar la expansión del conjunto del capital, pero por el otro se vio desplazado relativamente de su poder político (capacidad de influir en las políticas públicas y el discurso). Así, aunque fue sin dudas una de las fracciones ganadoras en lo

económico, claramente perdió relevancia en la dirección política. Esta tensión, el “desgarramiento”, fue la que impulsó y permitió que a mediados de 2008 la fracción agropecuaria del BEP pusiera en cuestión el orden político (ver capítulo 6).

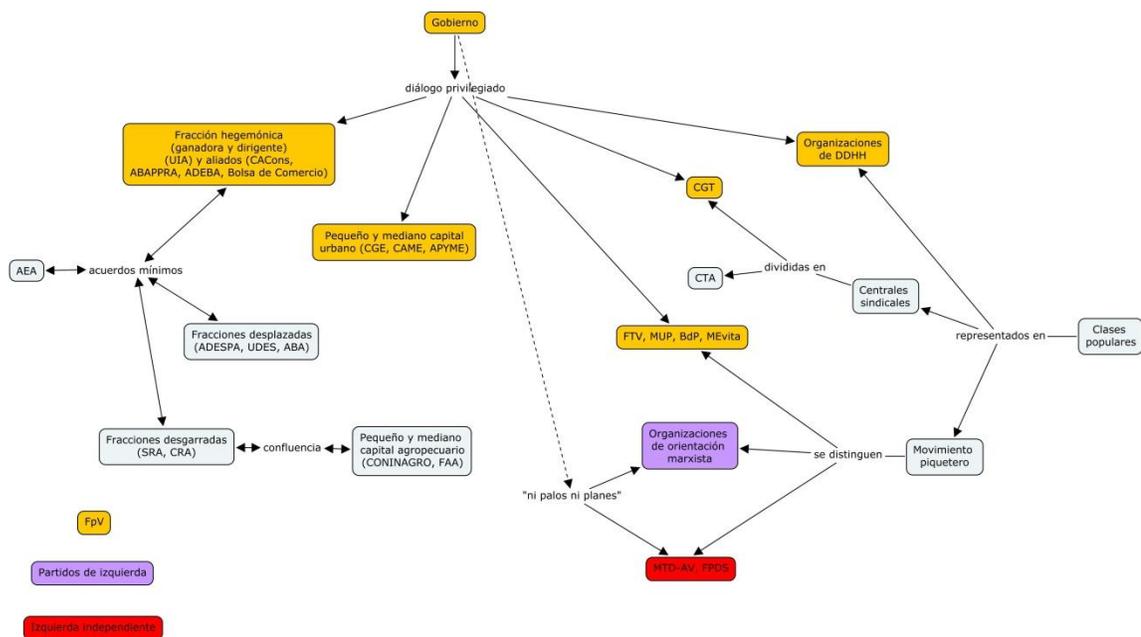
Es relevante enfatizar un punto para cerrar este capítulo. Contra una interpretación difundida de que fue Kirchner o su grupo político quienes construyeron hegemonía, aquí se sostiene que fue el capital industrial concentrado (exportador), es decir, una fracción del BEP, la que dirigió el proceso de universalización de sus demandas. En tal sentido, el capital industrial logró incorporar de manera subordinada demandas de otras fracciones del capital e incluso de las clases populares: esta expansión de su programa se puede ver en el pasaje del pedido de devaluación al discurso de producción nacional e inclusión con empleo, e incluso los pedidos por programas sociales (capítulo 3). Este proceso de vaciamiento de sus significantes le permitió incluir demandas de otros grupos, en el discurso y en las políticas públicas que dan forma a un PRE (capítulo 4). Es decir, modificó su propio programa (conjunto de demandas), sin ceder por ello en lo que consideraba fundamental. En tal sentido, se las demandas de clases populares fueron incluidas, consideradas efectivamente, aunque de modo subalterno, lo cual es una clave para hablar de un orden hegemónico, esto es, que hubo concesión efectiva –en lo simbólico y lo material. Estas concesiones reales fueron las que motivaron interpretaciones favorables de parte de las clases populares, que redirigieron la capacidad organizativa y disruptiva que lograron en la resistencia al neoliberalismo al apoyo explícito del gobierno. Una (parte de) las clases populares organizada para mostrar anuencia es una fuente de consenso activo, otra clave del carácter hegemónico del orden político.

El rol de Kirchner (y su fuerza política) no fue trivial en esta tarea, pues aportó una serie de particularidades específicas a la construcción –que revisamos en este capítulo- sin las cuales no resultaba posible completar la ruptura populista, que dio la *forma* concreta de esta construcción hegemónica. Por caso, y como ya señalamos, las limitaciones programáticas, ideológicas y del origen institucional de Duhalde impedían que realizara esta tarea, por lo que el suyo fue un rol diferente. Esto no significa que Duhalde fuera un mero “intento”, sino que resolvió otra parte del proceso. Kirchner –con sus ambiciones personales, sin duda- completó la ruptura política que el capital

industrial necesitaba para validar su programa. Tan así es que durante el período analizado, el capital industrial pudo retraerse relativamente de la dirección del aparato estatal, legando esta tarea al personal político kirchnerista, difuminando así su rol hegemónico. Lo que aparece como autonomía del Estado (la intervención política) en el discurso kirchnerista no es sino el mayor éxito de la hegemonía del capital industrial: ¿qué más consensuado que aquello de lo que parece no ser necesario hablar?

El conjunto de relaciones entre clases sociales y sus fracciones, a través de las organizaciones representativas, y el gobierno, pueden verse de modo esquemático en la ilustración 4. Como se puede notar, el gobierno actúa como pivote de diálogo entre un amplio conjunto de fracciones del capital con parte de las clases populares, que ahora exceden al sindicalismo para incorporar a parte del movimiento piquetero y las organizaciones de DDHH. Que el kirchnerismo haya logrado incorporar las demandas de estos dos últimos sectores al programa de demandas articuladas del capital –que permaneció inalterado en sus fundamentos–, desplazando a la fracción hegemónica del centro de escena, ilustra el logro de un orden político de tipo hegemónico.

Ilustración 4. Mapa social del orden hegemónico.



CAPÍTULO 6: LA RADICALIZACIÓN PARTICULARISTA

Este capítulo analiza el último momento del proceso, que va desde la crisis con el capital agrario (mediados de 2008) hasta el final de los dos mandatos de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta (diciembre de 2015). Debido a que la investigación y la escritura de esta tesis transcurrieron en paralelo al proceso, resultó imposible consignar cada cambio o novedad. Creemos, no obstante, que sin buscar predecir el rumbo que tomarán los acontecimientos, fue posible dar cuenta de las tendencias generales del período. A fin de cuentas, no se trata de una crónica periodística.

El momento del proceso político se inició con la impugnación de las fracciones desgarradas del BEP, lo que resaltó las contradicciones del PRE, puso fin a la transversalidad tal como existía, e inició el alejamiento de algunos de los socios principales del gobierno en el período anterior (la fracción de Moyano de la CGT, BdP-Libres del Sur, pero también crecientes cuestionamientos desde el propio capital industrial). La estrategia política del gobierno fue crear y sostenerse en una nueva fuerza propia, enfatizando su particularidad, consolidando así la emergencia del kirchnerismo como identidad política. La efectividad de esta estrategia mostró vaivenes en las sucesivas elecciones, pero consolidaron al kirchnerismo como la principal fuerza política, cerrando el período (antes de las elecciones generales de 2015) con mayoría en ambas cámaras del Congreso.

Si el momento previo del proceso político se caracterizó por completar la ruptura populista y por esta vía lograr un orden de tipo hegemónico, el momento analizado aquí supone una modificación relativa del proceso donde la frontera identitaria se desplaza (el pueblo trabajador a los “sectores excluidos”) y se refuerza el sesgo de reafirmación particularista (potencia de la fuerza propia) contra el hegemonismo. Se trata de la una tensión característica del populismo que se enfatiza en un sentido, y produce una identificación más visible con la fuerza en el gobierno, lo que podremos ver con la aparición de organizaciones estrictamente kirchneristas (ilustración 5). Sin embargo, ésta afirmación produce una tensión creciente con el BEP, incluyendo al capital industrial, que se debate entre sostener los arbitrajes necesarios del PRE y su legitimación, o

apostar por la construcción de un nuevo orden político, uno que ya no necesariamente sea de tipo hegemónico (basado en el consenso activo).

La fracción agraria del capital intentó una impugnación general del orden político, pero fue incapaz de superar sus límites corporativos. Por ello, en este período, ensayó una expansión de su programa que incorporase demandas comunes del BEP e incluso –con menos énfasis– problemáticas de clases populares. De esta forma, aunque la fracción hegemónica no perdió el control sobre los fundamentos del PRE, las fracciones desgarradas buscaron tentar al conjunto del capital para avanzar en una salida combinada de ruptura y continuidad. Entre las clases populares, la impugnación del capital agrario reforzó la polaridad antagónica, generando la identificación con el kirchnerismo de varias fuerzas. Esto produjo la ruptura de alianzas previas, y estimuló nuevas oposiciones. El capítulo se organiza de acuerdo con las dimensiones del proceso político ya utilizadas.³¹¹

1. PRE

Los fenómenos económicos analizados en esta sección se enmarcan en el estallido y despliegue de la crisis mundial. Si en 2007 ya habían comenzado los problemas con las hipotecas en EUA y la Unión Europea, para el año siguiente se hizo evidente que el problema se extendía al conjunto del sistema financiero.³¹² Esta expansión de la crisis cobró nuevas dimensiones cuando en septiembre de 2008 quebró el gigante Lehman Brothers y Merrill Lynch y Co. fue adquirida por el Bank of America. Si parecía que la crisis sería digerida por el propio mercado, al mes siguiente el gobierno de EUA tuvo que intervenir Freddy Mac y Fannie Mae para evitar un contagio mayor de la crisis. En febrero de ese año, el gobierno inglés había nacionalizado al banco Northern Rock.

³¹¹ Una parte de las ideas discutidas en este capítulo fueron originalmente trabajadas junto a Héctor Hurtado, de donde este documento se nutre (Cantamutto y Hurtado Grooscors, 2014).

³¹² Esta crisis fue resultado de la expansión financiera en un contexto de depresión salarial e incremento de la desigualdad en la distribución del ingreso, que permitió sostener el consumo bajo un esquema de endeudamiento creciente. Este esquema se expandió hasta alcanzar sectores de la población en condiciones de absoluta precariedad, con un pésimo perfil crediticio, que fue ocultado a través de la operatoria con títulos derivados que aglomeraban créditos de diversa cobrabilidad. Las agencias calificadoras afirmaban la viabilidad de estos nuevos activos, que se vendían en los mercados secundarios. Cuando el desempleo y los deprimidos salarios impidieron cumplir los créditos originales, la creciente morosidad tuvo un impacto que se dispersó más allá de las entidades prestamistas originales.

De hecho, tras largas discusiones, el gobierno de Bush acabó por reconocer la necesidad de una intervención más sistemática. Sin embargo, en lugar de incrementar salarios, crear empleos o nacionalizar las hipotecas, el Congreso estadounidense aprobó un plan de salvataje para los bancos por un total de US\$700,000 millones en octubre de 2008. La Unión Europea dilataría una reacción similar; recién en mayo de 2010 creó un paquete de rescate por la –aún mayor– cifra de €750,000 millones. La política de *money easing* completaba esta lógica, reduciendo las tasas de interés, bajo la hipótesis neoclásica de que esto impulsaría la inversión productiva.³¹³ Estas políticas demostraron ser poco efectivas, pues el conjunto de los países centrales mostró un bajo dinamismo económico.³¹⁴ Ésta es una de las razones por las que, en estos años, ganaron presencia mundial las economías de la semi-periferia: Brasil, Rusia, India y China (los BRIC's).

Esto significa que durante el período aquí analizado el sistema mundial del capital atravesó una nueva etapa, cuyas implicancias aún se debaten. Dado que Argentina no había logrado reanudar el proceso de endeudamiento externo, debido a la digestión del *default*, los reajustes de los flujos financieros globales tuvieron un efecto relativamente menor. De hecho, el principal canal de transmisión de la crisis para el país fue la demanda externa, afectada por el crecimiento mundial (particularmente malo en 2009), los precios internacionales, y en particular por la situación brasileña.

La primera reacción de los capitales financieros fue un *flight to quality* que los llevó a refugiarse en activos más seguros, saliendo de los países periféricos, ocasionando severas presiones sobre sus monedas. El real brasileño mostró una fuerte devaluación, cercana al 50% entre mediados y fines de 2008, ocasionando severos problemas de competitividad para Argentina. En el mismo lapso, los precios de los *commodities* se desplomaron. El contexto externo para el país sufrió así un duro cimbronazo. Sin embargo, una vez la política de *money easing* comenzó a inundar el mercado de divisas (dólares y euros), y con muy bajos rendimientos financieros en los países centrales, los

³¹³ De hecho, la reducción de tasas de interés fue la primera respuesta en EUA. Los bonos del Tesoro estadounidense que pagaban 5.25% a mediados de 2007, ya habían reducido su rendimiento al 1% para el momento en que quiebra Lehman Brothers. Desde fines de ese año y hasta 2014, la tasa se mantuvo en 0.25% anual. La Unión Europea, en cambio, comenzó a reducir sus tasas de referencia recién a mediados de 2008, siguiendo una trayectoria de reducción más gradual, pero llegando a los mismos valores.

³¹⁴ La crisis se trasladó, en el ínterin, a la “periferia” del centro: Portugal, Irlanda, Grecia y España atraviesan duras recesiones, con restricciones financieras y severas explosiones sociales. Se los llamó de modo denigrante PIGS (cerdos), por sus iniciales en inglés. El país que más velozmente superó la crisis fue Islandia, que en 2008 no dudó en nacionalizar la banca.

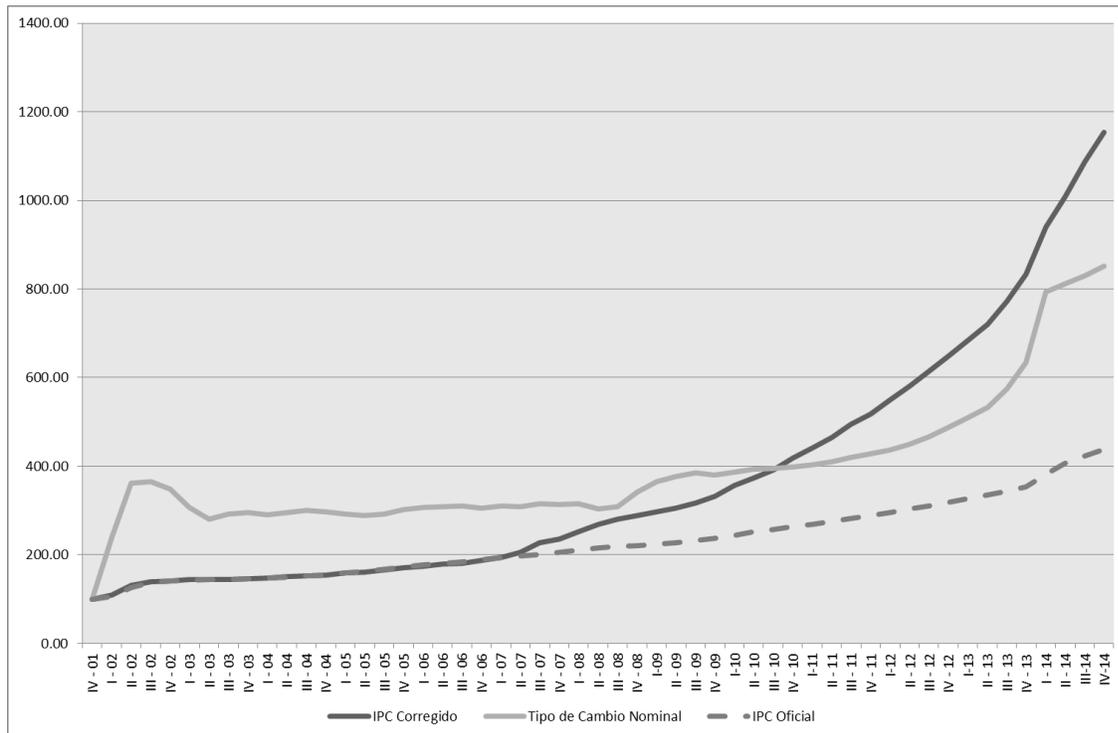
capitales volvieron a dirigirse a la periferia. Esto generó los efectos opuestos a los descritos: desde fines de 2008 y hasta mediados de 2011, los precios de los *commodities* volvieron a crecer y el real brasilero se apreció sostenidamente (ambas series alcanzaron sus valores previos). Ambas tendencias favorecieron a Argentina durante ese período, aunque desde mediados de 2011 volvió a enfrentar una reversión en ambos frentes –esta vez, menos brusca. Estas mismas tendencias pueden encontrarse en los valores del riesgo país, que rozó a fines de 2008 los 2,000 puntos básicos para Argentina. De hecho, este índice promedió 880 puntos desde entonces hasta el final del período (ver gráfico 1 del capítulo 3). Su efecto sobre la economía fue menor respecto de lo que ocurrió a finales de la Convertibilidad, por la menor relevancia de los flujos financieros.

Este marco general tuvo impacto en la escena nacional, al combinarse con las tensiones propias de la consistencia macroeconómica externa del PRE (secciones 1 y 2 del capítulo 5). La restricción externa al crecimiento comenzaría a reaparecer, sin provocar una crisis pero poniendo amenazas. Aunque los saldos comerciales se mantuvieron positivos, resultarían insuficientes para cubrir las salidas de divisas por pagos de intereses –resultado de las reestructuraciones- y de utilidades y dividendos (ver gráfico 15). A partir de 2011, los saldos corrientes comenzarían a ser deficitarios, obligando a cubrir la diferencia con entradas de capital (ver gráfico 9 del capítulo 5), lo que significaba alentar el ingreso de inversiones extranjeras y tomar nueva deuda. Como veremos (sección 2), por esto es que la política exterior se orientó a satisfacer todas las demandas del capital extranjero, en aras de obtener nuevos recursos.

Por otra parte, se acrecentaba la presión para garantizar los saldos comerciales superavitarios. Esto ponía tensión sobre el tipo de cambio como instrumento central de la política económica: debía garantizarse la competitividad de la producción exportable para evitar un problema cambiario. Pero esto se combinaba con el problema interno de la inflación real, que para 2008 había prácticamente anulado la ventaja obtenida en 2002: el “modelo” de tipo de cambio real alto se agotaba por la lógica de su propio funcionamiento (Schorr, 2013). A partir de entonces la disputa por el ingreso expresada en la inflación adquirió un nuevo estándar de algidez, provocando un incremento sustancial de su nivel. La intervención del INDEC generó severos problemas de

estimación en las series deflactadas por precios. En el gráfico 10 se pueden ver los comportamientos del tipo de cambio y los precios –oficiales y estimados.³¹⁵

Gráfico 10. Tipo de cambio nominal e índices de precios al consumidor (oficial y corregido)



Fuente: elaboración propia con base en datos de INDEC, CENDA, CIFRA, Congreso Nacional.

Dos observaciones básicas se pueden hacer respecto del gráfico. La primera es que, tras 5 años de tipo de cambio nominal estable, el gobierno dio inicio a una política de lenta pero continuada devaluación, que llevó el precio del dólar de cerca de \$3 en 2008 a \$8.50 al final de 2014. Se reconocen dos momentos de alza más notables, uno entre fines de 2008 y mediados de 2009 (19%), ligada a la presión de fuga de capitales por la crisis global y el conflicto del campo, a la que el BCRA respondió vendiendo divisas para contener, y otra en enero de 2014 (25%), que fue una política deliberada

³¹⁵ La estimación propia del IPC empalma la serie oficial con las estimaciones del CENDA, CIFRA y la inflación del Congreso. Si bien es discutible la representatividad de este índice, no lo es menos el cálculo oficial. Solamente las series de salarios reales fueron deflactadas por el IPC Corregido.

para corregir el tipo de cambio real.³¹⁶ La segunda observación es que, aunque con intensidades claramente diferentes, ambos índices de precios señalan un proceso sostenido de inflación. La diferencia clave es que la devaluación se habría ajustado por encima de la inflación oficial, manteniendo la política de tipo de cambio real alto, mientras que, según la estimación alternativa, se estaría sufriendo una apreciación real, que provocaría un creciente deterioro de la competitividad (el gráfico no permite considerar la corrección de las series por productividad, pero da una idea del panorama). Seguramente, la realidad se ubicó en un escenario intermedio, cuya estimación nos resulta impracticable debido a la falta de datos.

Determinar qué explica la dinámica inflacionaria fue y es materia de mucho debate. Un determinante estructural está en el carácter dependiente de Argentina, que impide a su moneda fungir como reserva de valor, expresado en la fuga sistemática de capitales (ver gráfico 15): cuando la moneda nacional representa menos valor, debe ajustar su precio frente a las mercancías, y esto significa inflación. Otro aspecto de la dinámica inflacionaria está ligado a la disputa social por el ingreso, cuando ninguna clase o fracción es capaz de imponer una distribución al resto. La carrera entre salarios, precios y tipo de cambio tiene que ver con este punto. En este marco, el margen de rentabilidad de las 500 empresas más grandes cayó de 11.2% en 2002-2008 a 8.8% en 2009-2013, lo que aún representa mayor rentabilidad que en el período expansivo de la Convertibilidad, 1993-1998, cuando obtenían el 6.3% (Castells y Schorr, 2015).

Por supuesto, este nuevo contexto impactó en la valorización del capital, que redujo su aplicación productiva, disminuyendo el crecimiento del PBI: de un promedio trimestral de 2.1% en el período anterior (II-03 a II-08), se pasó a un promedio de 1.2% (II-08 a IV-13). Es decir, más allá de la breve recesión entre fines de 2008 y principios de 2009, el crecimiento continuó, aunque a una tasa significativamente inferior (poco más de la mitad). La inversión, por su parte, creció 1.4% anual promedio, tras haber crecido a cerca de 5.1% en el período anterior, mostrando una franca desaceleración. El factor dinámico de la demanda fue, sin dudas, el gasto público, que se expandió casi un 50% entre puntas. El consumo privado, finalmente, completó el impulso a la demanda,

³¹⁶ Los episodios de fuga de capitales de este período son estudiados en mayor detalle por A. Gaggero et al. (2015).

dado el dinamismo decreciente del comercio exterior (demanda externa deprimida). Las estimaciones de CEPAL señalaron que 2014 terminó con una recesión leve, del orden del 0.2% (El tiempo, 10/4/15). Es decir, el Estado intentó compensar el menor dinamismo del capital, lo que se puede ver en otros aspectos como el empleo.

Entre los sectores de actividad, la expansión más notable del período fue la de la intermediación financiera, con un crecimiento total de 126% hasta 2013.³¹⁷ Este dato resulta una clara contradicción con el discurso oficial sobre el sesgo productivista del proceso (ver sección 2 del capítulo 5).³¹⁸ Esta impactante expansión fue seguida por el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones, con un 56%, y por el comercio, que creció un 45%. En los tres casos son actividades no transables, menos expuestas a la pérdida de competitividad ligada al tipo de cambio. En particular, la expansión del sector financiero se ligó a préstamos al consumo y al sector público, que colocó deuda en el mercado interno por las dificultades ligadas a la salida del *default*. El resto de los demás sectores de actividad creció por debajo del PBI agregado, perdiendo, por lo tanto, participación. El coeficiente de industrialización cayó sin pausa desde 2007: tras la recuperación de los primeros años de la nueva fase, el modo de desarrollo consolidó el bajo peso de este sector. En este nuevo período, las ramas ligadas al mercado interno se relegaron, mientras que las asociadas a ventajas comparativas y las protegidas se expandieron, consolidando el perfil estructural de la década previa (Schorr, 2013).

Como señalamos, el impulso a la industria se basó casi por exclusivo en la relación tipo de cambio real alto y salarios bajos, con una evidente ausencia de políticas industriales. Cuando esa combinación de precios dejó de garantizar la competitividad, lo que ocurrió alrededor de 2010 (ver gráfico 12), la expansión de la industria recayó en las ramas ligadas a ventajas estáticas y las ramas protegidas. Esta *dualidad estructural* de la

³¹⁷ La corrección de estas estimaciones oficiales por el índice de precios alternativo arroja para el período una recesión generalizada entre todos los sectores, cuya única excepción fue la intermediación financiera.

³¹⁸ En 2013, los bancos obtuvieron ganancias por \$26,000 millones, un 34% más que en 2012 (La Capital, 13/1/14). Según se señala en un diario oficialista, “La banca argentina sigue siendo la estrella del modelo económico al que sus interlocutores critican sistemáticamente. La performance de la rentabilidad del sector financiero a lo largo del último lustro supera el desempeño de cualquier otro sector de la economía argentina” (Página/12, 22/2/14). Respecto de las cotizaciones en Bolsa de Comercio, la propia empresa Telecom señaló: “Los grandes beneficiarios del modelo económico fueron los bancos, que en promedio mejoraron en un 50 por ciento sus ganancias interanuales. Los acompañaron las empresas de telecomunicaciones” (<http://mediatelecom.com.mx/index.php/telecomunicaciones/empresas/item/61651-ganancias-record>).

industria (Castells y Schorr, 2015) se expresó con claridad en el intercambio externo: mientras que desde 2007 el agregado sectorial resulta deficitario, 3 ramas ligadas al procesamiento de materias primas mantuvieron el superávit hasta 2013; alimentos y bebidas, metales comunes, y cuero y curtidos (en 2007 se incluían además refinación de petróleo y madera). La rama automotriz –a pesar de los acuerdos en el marco del MERCOSUR- y las de bienes de capital fueron altamente deficitarias todo el período (Schorr, 2013). Incluso en algunas de estas ramas se produjo una “sustitución inversa”, pasando a importar componentes antes producidos en el país (Castells et al., 2013). El capital industrial mostró un nulo dinamismo en las ramas intensivas en tecnología.³¹⁹

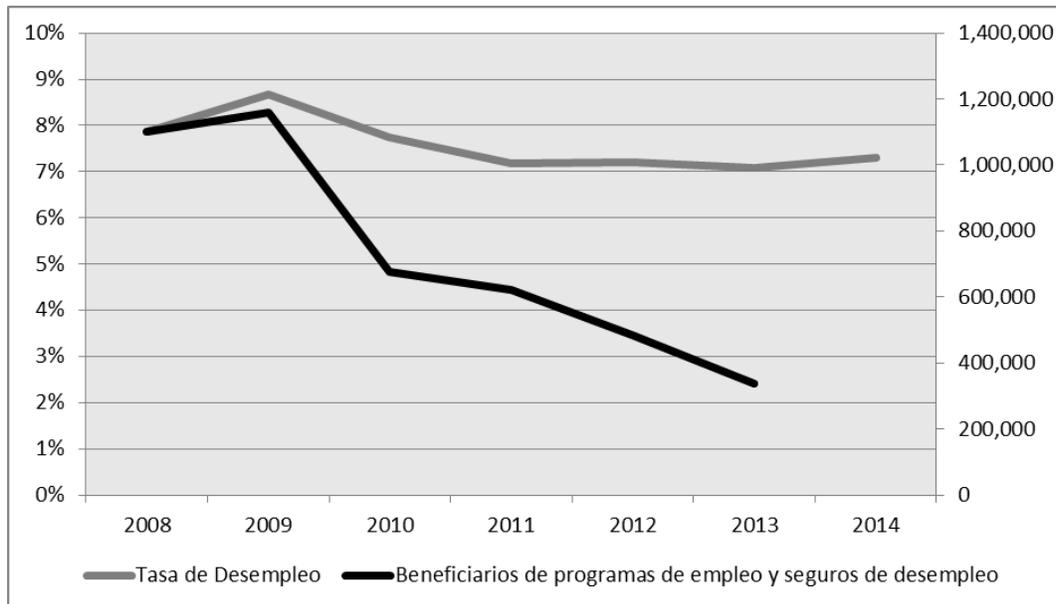
El menor dinamismo de la industria y la construcción –que siguieron creciendo pero a un ritmo menor- fueron particularmente relevantes, en tanto habían sido las principales fuentes de creación de empleo: la elasticidad entre producción y ocupación cayó de 0.47 entre 2002 y 2008, a 0.07 entre ese año y 2013 (Castells y Schorr, 2015). Justamente, la disminución sostenida de la desocupación del período anterior se detuvo entre 2008 y 2009, en torno al 9.1% de la población económicamente activa. Luego se produjo una nueva disminución hasta fines de 2011, cuando otra vez el desempleo apareció como variable de ajuste. La tasa de desocupación promedio del período fue de 7.6%, lo que indica que la tendencia global fue de estancamiento en la absorción de mano de obra. Según los datos del INDEC, entre los sectores de actividad, el comercio y los servicios fueron los que más empleo absorbieron, mientras que la construcción –que jugó el rol central en la creación de puestos de trabajo en el período anterior- expulsó fuerza de trabajo (en 2013 empleaba un 20% menos de trabajadores que en 2007). La industria, aunque con menor intensidad, continuó generando puestos de trabajo. De conjunto, durante el período, el sector privado creó puestos de trabajo a una tasa del 2% anual, mientras que el sector público lo hizo al 5%, explicando el 20% del total de puestos (datos del MEcon).³²⁰ Los movimientos de la tasa de desocupación se pueden observar en el gráfico 11, junto a la cobertura de planes sociales de empleo y seguros de

³¹⁹ En octubre de 2014 se lanzó al espacio el satélite ARSAT-1, un evidente logro científico-tecnológico. El mérito, sin embargo, correspondió a la empresa estatal INVAP, pues el capital local no aportó prácticamente ni componentes. El desajuste entre las capacidades técnicas disponibles y los intereses del capital local se explican por el rol dependiente de la economía nacional en la valorización del capital a escala global.

³²⁰ Hasta 2006 la creación de empleo público había sido baja. Se puede constatar un mayor dinamismo de las contrataciones por sobre el pase a planta permanente (Pomares, Gasparin y Deleersnyder, 2013).

desempleo. Tal como aparece allí, la tendencia prevaeciente es una cobertura cada vez menor de estos planes y seguros, que apenas mostraron un leve aumento en 2009.

Gráfico 11. Tasa de desempleo y beneficiarios planes de empleo y seguros de desempleo

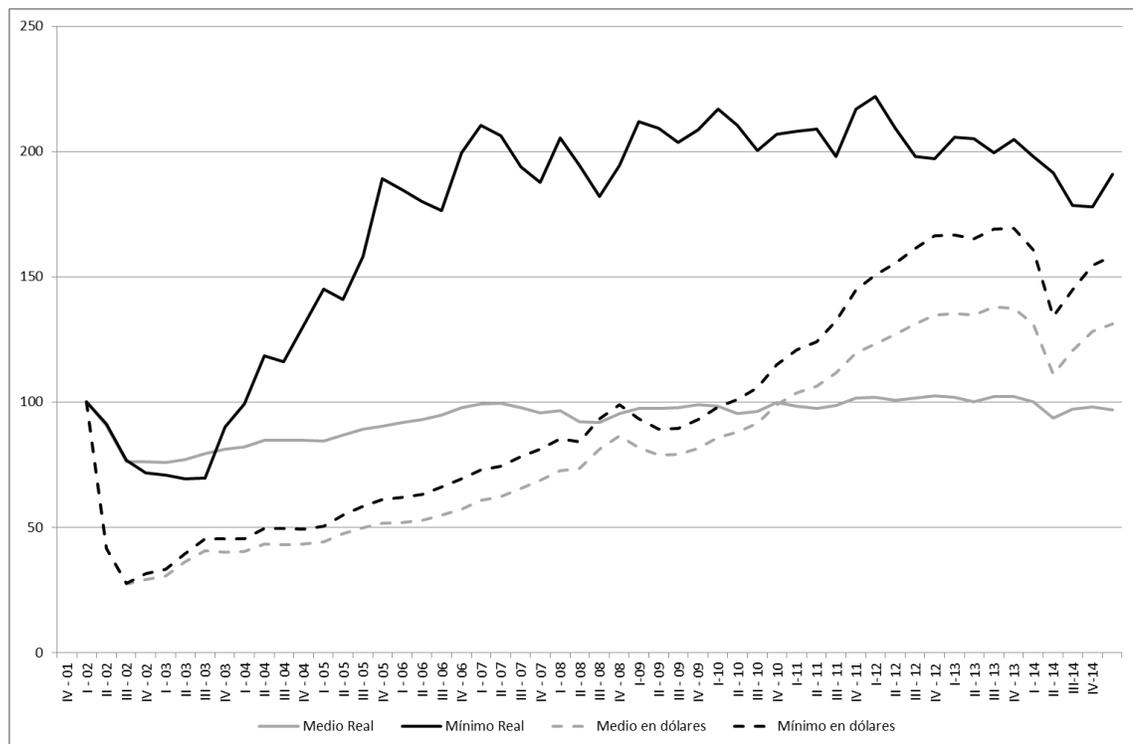


Fuente: elaboración propia con base en datos MECON y MTESS.

Vale recuperar en este período el análisis de la remuneración a la fuerza de trabajo en un panorama amplio. Según se puede ver en el gráfico 12, los salarios reales mínimo y medio se estabilizaron en torno a los valores alcanzados en 2007, manteniéndose estancados durante los años analizados en este capítulo: para el salario medio ese nivel fue el de 2001, mientras que el mínimo duplicó el valor de aquel año, aunque en los últimos años sufrió un ajuste. El gráfico permite notar, además, que ambos salarios mostraron una tendencia creciente y constante de su valor en dólares. A partir de 2010, superaron sus niveles de 2001, y esto explica la creciente preocupación del capital productivo por ver mermadas sus ganancias, expresado en la demanda de ajuste cambiario. El efecto macroeconómico de esta relación salarios-tipo de cambio fue la desaparición del superávit corriente, uno de los pilares del PRE de esta fase (ver gráfico 9 del capítulo 5). El gobierno, como veremos (sección 2), atendió a este reclamo en 2014, que se inició con una fuerte devaluación que “corrigió” parcialmente este “exceso” del costo salarial: el primer trimestre de ese año, el salario medio en dólares

cayó un 20% y el mínimo un 37%. En los siguientes meses, los salarios recuperaron una parte de esta caída, alcanzando su poder adquisitivo de principios de 2012.

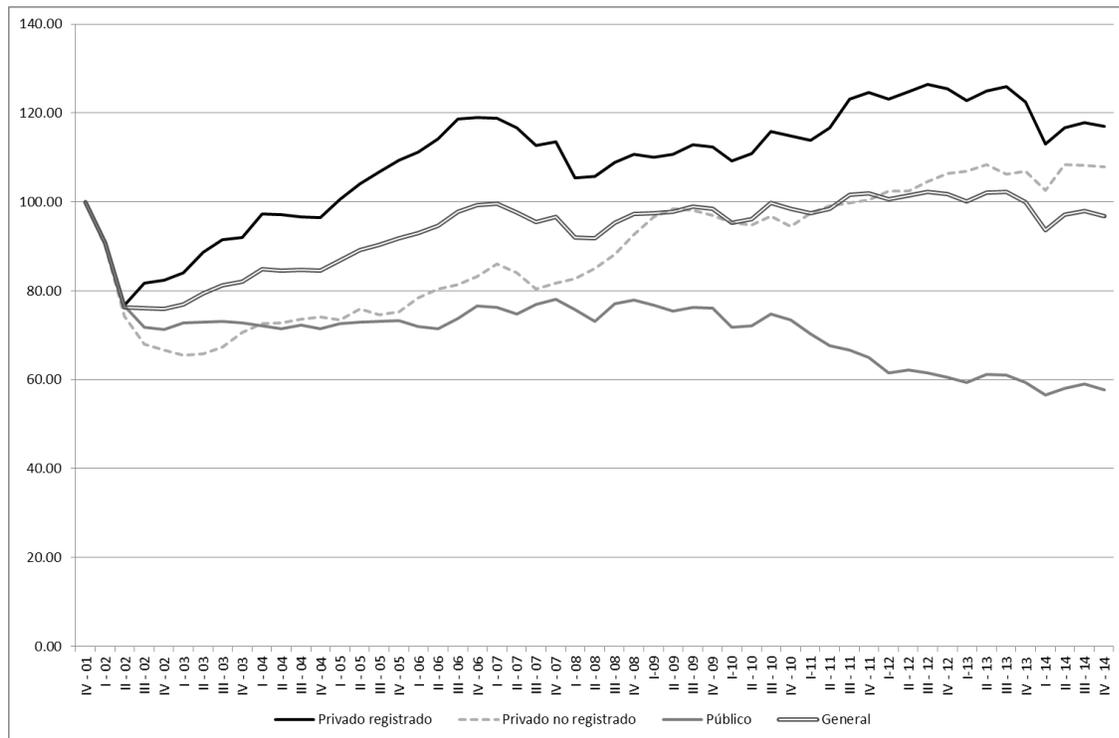
Gráfico 12. Salarios medio y mínimo, en términos reales y en dólares (IV-01 a IV-14).
IV-01 = 100



Fuente: elaboración propia con datos de CENDA, CIFRA, Congreso, MEcon y MTESS.

Hay que agregar que la heterogeneidad del mercado laboral se mantuvo, al constatar que el salario de los ocupados en el sector público (el más dinámico del período en cuanto a creación de empleo) cayó sistemáticamente (ver gráfico 13). En el sector privado, la brecha entre trabajadores registrados y no registrados se acortó, gracias a la mejora de las remuneraciones de los segundos (Groisman, 2012). Según señalamos, el salario mínimo real se mantuvo estancado, lo que cuestiona la existencia de una relación directa entre éste y las remuneraciones de los trabajadores informales. Durante el período, cerca de un tercio de la fuerza de trabajo ocupada estaba en condiciones de informalidad, tras un máximo que superó la mitad de la misma en 2002 (Frega, 2012; Longo, 2011; Poy Piñeiro, 2011).

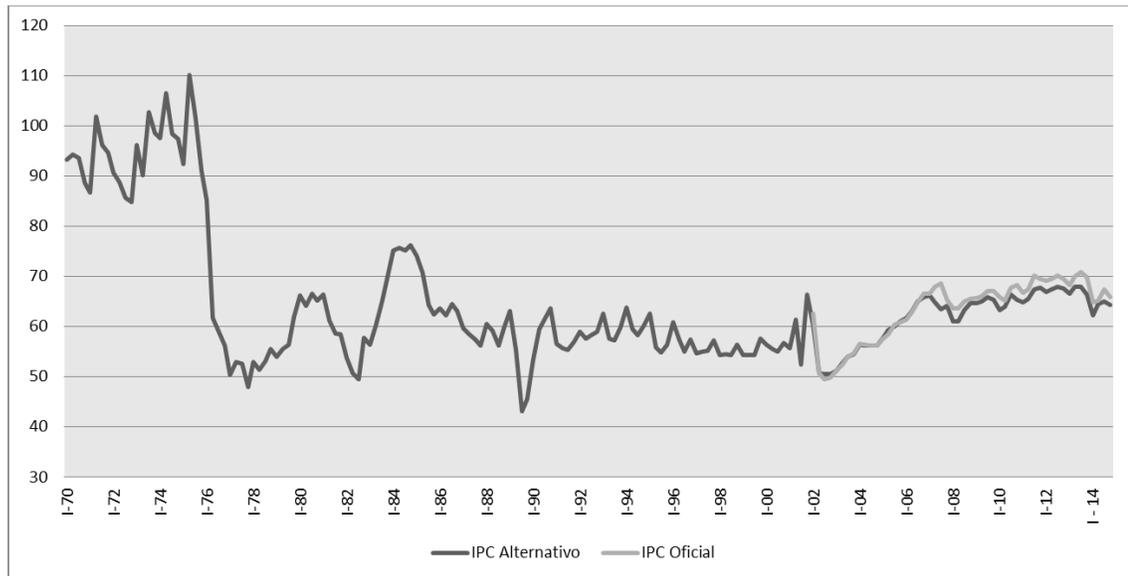
Gráfico 13. Salarios reales (IV-01 a IV-14). IV-01 = 100



Fuente: elaboración propia con datos de INDEC, CENDA, CIFRA, Congreso de la Nación Argentina.

Finalmente, vale la pena remarcar que todas estas variaciones se dan en marco de una continuidad más profunda. Como se ve en el gráfico 14, el salario medio real mantiene un bajo nivel en una perspectiva de largo plazo. Tras el profundo ajuste recesivo provocado en la dictadura, se estableció un nuevo nivel tendencial del salario, sobre el cual se producen variaciones. El salario no jugó ni juega un rol dinámico en la acumulación de capital en Argentina: desde 1974 perdió un tercio de su valor. Esta estimación no se ve afectada por el índice de precios utilizado para deflactar, tal como se observa en el gráfico, la discrepancia es ínfima en la mirada estructural.

Gráfico 14. Salario real medio (I-70 a IV-14). 1974=1



Fuente: elaboración propia con datos CENDA, CIFRA, Congreso, Dirección Nacional de Programación Macroeconómica, FIDE, INDEC, MTESS e Iñigo Carrera (2007).

Dada la manipulación de los índices de precios es difícil determinar qué proporción de la población se encontró bajo la línea de pobreza, que permita registrar el impacto de este comportamiento del mercado laboral sobre las condiciones de vida. Gambina (2014), usando datos oficiales de la EPH, señala que la mitad de los trabajadores ocupados en julio de 2014 ganaban menos de \$4,500. La canasta de pobreza estimada por el CIFRA-CTA para ese momento rondaba los \$5,500 a \$6,500, dependiendo de la zona del país. Es decir, más de la mitad de los trabajadores ocupados ganaba un salario de pobreza. Esto convalidaría la tendencia del modo de desarrollo abierto a deteriorar fuertemente las condiciones de vida la población trabajadora en momentos de crisis, y ofrecer recuperaciones que nunca superan los niveles previos: se fue “perforando el piso” por shock y menor recuperación (como después de 1976 y de 1989). Tras 12 años de la salida de la Convertibilidad, la superexplotación de la fuerza

de trabajo se sostuvo como condición para la valorización del capital en Argentina (Félicz, 2012a; Kennedy, 2014; E. López, 2013; Roslan y Hirsch, 2013).³²¹

En este marco de desaceleración, baja creación de empleo y salarios reales estancados, como dijimos, la intervención activa del Estado cobró mayor relevancia. El esfuerzo del sector público por impulsar la demanda a través del gasto en inversión y la creación de empleo (basado en salarios reales deprimidos), junto a los crecientes pagos de intereses, significó una erosión del superávit fiscal (Rial, 2009). En efecto, en el marco de recursos cada vez más restringidos, el Estado intervino activamente para sostener el PRE, y así amparar la correlación de fuerzas entre clases y fracciones, lo que ocasionó cada vez más roces al interior del BEP (ver sección 3.2.1). Para mantener la expansión de la actividad de las fracciones ganadoras, impulsó la inversión en obra pública (favoreciendo al capital ligado a la construcción) y mantuvo bajas las tarifas de los servicios (favoreciendo al capital industrial), además de contener la suba de salarios. Con respecto a las fracciones desplazadas, arregló con los acreedores externos para intentar resolver la restricción financiera, comprometiendo pagos cada vez mayores de intereses, y compensó a las privatizadas con subsidios (fue la partida de mayor relevancia, representando más de un quinto del gasto total en 2013). Para sostener el carácter hegemónico del orden político, debió mantener el nivel de empleo, contratando fuerza de trabajo por su cuenta. ¿Quién pagaría por todo ello?

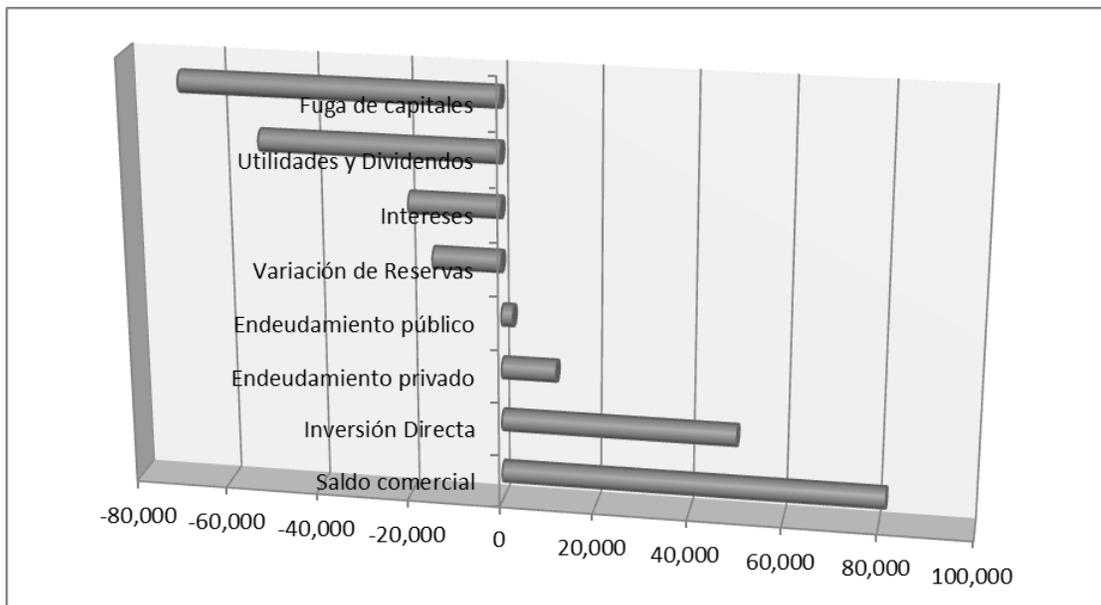
Una de las formas de obtener recursos fue mantener una estructura impositiva de tipo regresiva, a la que se sumó el impuesto a las ganancias aplicado a los trabajadores (ver sección 2). A principios de 2008 se intentó cargar más la tributación sobre las fracciones desgarradas del BEP, pero éstas reaccionaron intensamente, impidiéndolo. El resultado indefectible sería la reaparición del déficit fiscal, como de hecho ocurrió en 2009, y tras un 2010 con las cuentas balanceadas, se consolidó desde 2011 (ver gráfico 9 del capítulo 5). Es decir, desapareció así el segundo pilar del PRE, finalizando los superávits gemelos.

En este contexto, la estatización de la seguridad social en 2008 implicó un aumento de los gastos, pero también de los ingresos. Fueron). Al margen de resultar

³²¹ Esta superexplotación se traslada a los adultos mayores en la forma de pobreza relativa. A pesar de los incrementos de haberes, a principios de 2014 casi tres cuartos de los jubilados cobraban el mínimo, que estaba por debajo de la canasta de pobreza (C. Lozano, Raffo, Rameri y Haimovich, 2014).

infructuosa en la recuperación del crédito externo, esta política incrementó la deuda total modificando su composición, como veremos en la siguiente sección. El punto relevante a resaltar está en que esta tensión del PRE –la intervención del Estado para subsidiar la tasa de ganancia del capital industrial- se incrementa sostenidamente durante este período. Entre 2009 y 2012, el Estado mostró un resultado financiero deficitario, anulando uno de los pilares de la post-Convertibilidad. Este déficit fiscal requería ser financiado, sea a través de inflación (que licúa gastos y eleva la recaudación por impuestos indirectos) o de deuda pública. El gobierno usó ambos mecanismos.

Gráfico 15. Fuentes y usos de los recursos externos (2008-2014)



Fuente: elaboración propia con base en datos de INDEC.

Finalmente, respecto del sector externo, como podemos ver en el gráfico 15, a grandes rasgos se mantuvo la estructuración definida en 2002. El comercio exterior –basado en el superávit de los sectores primarios- y la IED fueron los grandes responsables de ingresar divisas al país. En este período, el sector energético se sumó a los rubros deficitarios del comercio. La IED sostuvo su sesgo hacia actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales, y provisión de bienes y servicios para el mercado interno con bajo nivel de integración local (Belloni y Wainer, 2014a). El sector privado, que había sostenido una política de desendeudamiento hasta 2005,

inicia desde allí un nuevo ciclo de endeudamiento, que significa para el país el ingreso de divisas. El sector público, en cambio, bajo la lógica de cambiar la composición de la deuda, quitó divisas del circuito nacional para pagar a acreedores externos, mientras colocó nuevos títulos en pesos.

Por el lado de los usos de estos recursos, la fuga de capitales se sostuvo como la principal vía de salida, retirando de la economía nacional un 84% de las divisas ingresadas por el superávit comercial.³²² Los siguientes dos rubros que ganaron peso fueron la remisión al exterior de utilidades y dividendos y los pagos de intereses de deuda, que juntos explicaron un valor incluso mayor a la fuga por atesoramiento. Debe considerarse que, en el marco de la crisis mundial, las empresas con operaciones en Argentina obtuvieron crecientes ganancias que no reinvirtieron, sino que retiraron del país, presumiblemente capitalizando así filiales asentadas en otros países. El peso de estas salidas fue imposible de contener, lo que produjo una caída de las reservas en manos del BCRA, que pasaron de cerca de US\$50,000 millones en abril de 2008 a US\$31,400 millones en diciembre de 2014: una caída de casi el 40%.³²³

De conjunto, el período aquí analizado expresó el lento agotamiento de las condiciones de valorización del PRE prevaleciente. Para que el capital industrial se pudiera expandir y crear empleo, tal como señalamos en los capítulos anteriores, requería de: a) la contención de los salarios; b) la contención de las tarifas de servicios; c) el superávit comercial originado en las ramas primarias o procesadoras de recursos naturales. La primera condición se logró cumplir a costa de una creciente conflictividad con las clases populares (ver sección 3.2.2) y de la reanimación de un proceso inflacionario de amplia escala (Longo, 2011). La segunda condición, además de desincentivar la inversión sectorial (particularmente, en energía), erosionaba el superávit fiscal, obligando a presionar sobre el capital agrario, que enfrentaba un contexto de demanda externa menos dinámica y con precios a la baja. Estos mismos motivos ponían

³²² Algunos estudios señalan que este cálculo subestima la fuga, debido, entre otras razones, a las variadas formas de evasión y elusión fiscal, entre ellas la subdeclaración de exportaciones y sobrevaluación de importaciones, los precios de transferencia, pagos de royalties y patentes, o el pago de intereses entre empresas relacionadas (Belloni y Wainer, 2014a; J. Gaggero, Rúa y Gaggero, 2013; Treacy, 2014).

³²³ En rigor, las reservas cayeron durante el epicentro de la crisis, durante 2008 y 2009, cuando el gobierno intervino en el mercado de cambios vendiendo dólares para evitar una devaluación repentina. Tras perder cerca del 10% de sus reservas en esta tarea, la posición del BCRA se recuperó alcanzando en enero de 2011 su máximo nivel histórico, con US\$52,600 millones de reservas.

límites al cumplimiento de la tercera condición, donde se sumó en este período la presión de salida del sector energético. El gobierno –como veremos a continuación– buscó arbitrar entre estas restricciones, no sin cierto éxito, pero las condiciones de valorización ya no resultaban tan prometedoras como en 2003, ocasionando un menor crecimiento, menor creación de empleo, estancamiento de salarios, y una mayor salida de recursos por remisión de utilidades o directamente fuga de capital.

2. Políticas públicas

Según explicamos en los capítulos anteriores, la sustentabilidad del PRE requería de la intervención sistemática del Estado, para arbitrar entre fracciones del BEP y entre éste y las clases populares. Aunque teóricamente sería posible pensar en un esquema institucional estable definido bajo estas necesidades (como fue la Convertibilidad), el desafío era político: lograr que el conjunto de las fuerzas socio-políticas acepten este régimen de intervenciones como legítimo. En este sentido se comprende que la promesa de campaña de 2007 fuera el Pacto Social: un intento por acordar las reglas estables. Sin embargo, el capital agrario impugnó el orden político durante la primera mitad de 2008. Se trataba de la única de las fracciones del capital desplazadas en el interior del BEP que se encontraba en una posición de pérdida relativa de poder político y afianzamiento de poder estructural (a diferencia de las privatizadas o incluso la banca extranjera). Por esta particular situación hemos llamado a estas fracciones *desgarradas*. La magnitud e importancia del conflicto abrió un nuevo momento del proceso político.

La disputa se inició por la resolución N° 125 de marzo de 2008, que establecía un nuevo sistema de retenciones móviles para la exportación de productos primarios, afectando en particular al agro. De acuerdo con las variaciones de precios internacionales, se ajustaría la alícuota del tributo, lo que, en la perspectiva de marzo significaba un aumento. Tal como ya explicamos reiteradamente, el Estado necesitaba aumentar sus recursos fiscales para poder sostener sus diversas intervenciones: pagos de deuda, transferencias a sectores de servicios, política social. Modificar la alícuota de un tributo existente aparecía como la alternativa más simple, especialmente cuando el contexto externo parecía facilitararlo. Pero esta medida no contempló las diversas situaciones al interior del sector: hacía ya algunos días, FAA venía reclamando por un

régimen de tributos diferenciados. La falta de respuesta del gobierno a este reclamo y lo que apareció como una suba de la presión fiscal, facilitaron a las entidades de pequeños y medianos productores acercarse a los grandes productores del sector. Comenzó así la protesta del agro reunido sin distinción de escala: la Mesa de Enlace reunió a todo el capital que operaba en el sector.

Si bien nos detenemos más adelante en los conflictos del BEP (sección 3.2.1), conviene referir en el desarrollo de esta dimensión que la respuesta estatal tuvo mucho que ver con la dinámica posterior. Durante todo el conflicto, el gobierno utilizó alternadamente los siguientes recursos: a) criticar la metodología de corte de ruta y manifestación,³²⁴ b) acusar de desestabilización institucional (riesgo de golpe de Estado),³²⁵ c) negarse a realizar modificaciones a la política en cuestión,³²⁶ d) aplicar la ley de Abastecimiento (N° 20.680),³²⁷ e) intentar diferenciar al interior de la Mesa de Enlace, f) reunirse con ésta. Salvo esta última alternativa, todas las demás lo único que lograban era generar un clima de mayor antagonismo (Artese, Cresto, Gielis y Barrera, 2012; Castro García et al., 2009). Sin embargo, la estrategia más sistemática del gobierno fue proponerse como legítimo representante de la totalidad de la comunidad política, erigido como tal a través de los mecanismos institucionales que la Constitución establece, que desarrollaba una política de orden y desarrollo frente a un grupo de corporaciones en defensa de intereses sectoriales.

Así, por ejemplo, en su primer discurso sobre el tema (26 de marzo de 2008), la presidenta Fernández distinguió entre “los piquetes de la miseria y la tragedia de los argentinos”, refiriendo a los de 2001, y lo que ella denominó “piquetes de la abundancia”. Mientras que cuando se pedía trabajo en 2001, algunos sectores

³²⁴ Se envió a Gendarmería a desmontar algunos cortes de ruta, ocasionando algunos enfrentamientos, y unas pocas detenciones. Diversos periódicos constataron la presencia de armamento en los piquetes, reconocido por los propios manifestantes.

³²⁵ La condena oficial más clara vendría del Consejo del PJ, con Néstor Kirchner como su presidente, que calificó a la protesta como un “antidemocrático ataque con ánimo destituyente”, llamando a “construir un nuevo país, frente a los agoreros y golpistas que pretenden detener los cambios como en 1930, 1955 y 1976” (Clarín, 28/5/08). La presidenta refirió en el discurso del 26 de marzo (primero del conflicto) que era emblemático que el paro se llamara para Semana Santa, aludiendo al levantamiento militar carapintada durante el gobierno de Alfonsín.

³²⁶ Ante el reclamo de modificaciones, el entonces ministro de Economía, Martín Lousteau, dijo que “no va a haber absolutamente ningún cambio” (Infobae, 17/7/12).

³²⁷ Una ley aprobada en 1974, que había sido usada por Kirchner para multar a Shell por \$23 millones en 2005 por retener combustible (La Gaceta, 21/4/08). El secretario de Comercio Guillermo Moreno incautó algunos productos mediante esta ley (La Nación, 2/4/08).

reclamaban represión, en 2008 “curiosamente, entonces, aparecen nuevamente los piquetes, pero esta vez mucho más violentos, y protagonizados por el sector, tal vez, de mayor rentabilidad en los últimos cuatro años y medio” y nadie pide represión. Se trata de un comportamiento que explicó como “una suerte de socialización de las vacas flacas, y cuando las vacas vienen gordas, las vaquitas para ellos, y las penitas para los demás”. El eje de la alocución estaba puesto en señalar el sesgo corporativo del reclamo de sectores poderosos, negados a aportar al desarrollo del país a pesar de sus ganancias (pero siempre dispuestos a reclamar cuando tienen problemas).

Poco después se satirizó el carácter espurio de la ganancia del agro, debida a los altos precios internacionales, sin ningún esfuerzo por parte de los productores. Dijo el 31 de marzo que “la soja es, en términos científicos, prácticamente un yuyo que crece sin ningún tipo, digamos, de cuidados especiales”. Para un gobierno que defendía un proyecto de nación basado en la inclusión y el trabajo, las ganancias del agro se basaban en privilegios y suerte, y por lo tanto, eran inmerecidas. La reacción de las entidades del agro fue repudiar estos dichos y movilizarse. El 1 de abril, luego de una manifestación de apoyo al gobierno, la presidenta explicó con claridad el argumento político: se trataba de una minoría corporativa que ponía en riesgo los intereses comunes de la nación, atentando desde *dentro* de la comunidad política contra el bienestar del conjunto, y que, por lo tanto, el gobierno, en calidad de representante de la totalidad, tenía derecho a decidir sobre la parte. En palabras de la presidenta:

En nombre de todos los argentinos, de todas las argentinas, en nombre de los productores, las horticultoras, los horticultores, en nombre de las industrias, de las PyMEs, de las mini PyMEs familiares, en nombre, en fin, de los argentinos yo les pido, una vez más, y todas las veces que tenga que hacerlo –porque para eso soy presidenta de la República Argentina- que por favor dejen transitar a los camiones y además que, por favor, también, que se piensen como parte de un país, no como propietarios del país, sino como parte. (...) Cuando un gobierno constitucional, en el ejercicio de las facultades que le confiere la Constitución, las leyes, y esencialmente el voto popular, toma una medida que está en ese marco de legalidad y de legitimidad, tiene que ser, por ahí no aceptado (...) pero sí entendido. (...) Yo les pido que, en nombre de las instituciones, en nombre de la calidad institucional, en nombre del pueblo, en nombre de todo lo que les ha tocado vivir a los argentinos, recapaciten un poco.

En la cita se puede notar que la presidenta validaba su accionar en las instituciones democráticas (con la Constitución como máxima referencia) y en el voto popular, una doble referencia de legitimidad, característica del populismo, con las que no contaban sus interlocutores. Debe notarse, además, que, a pesar de las acusaciones de golpismo e ilegitimidad, la presidenta no excluye de la comunidad a los manifestantes, sino que los llama a reflexionar, a recapacitar. Ésta es otra nota típica del populismo, que juega en el corrimiento de la frontera interna del orden político, sin buscar una exclusión total de la posición antagónica (Aboy Carlés, 2013). Finalmente, al hablar en nombre de los y las argentinas, del pueblo, puede encontrarse una enunciación no exhaustiva de quienes integran ese pueblo: industrias, pequeños y micro productores, incluidos los del sector agrícola (horticultores). Debe completarse esta referencia con otras donde se justifican las retenciones por su uso para políticas sociales, en lo que completa la enunciación de beneficiarios de la política oficial: los sectores vulnerables. Como se ve, y tal como hiciera Néstor Kirchner al asumir, el gobierno no habla sólo en nombre de la *plebs*, sino que involucra explícitamente a lo que Duhalde llamaba la alianza productiva. El *populus* legítimo y democrático era heterogéneo, y no sólo *popular*.

Esto no significaba que no se atacara el ánimo destituyente de la patronal agropecuaria, a la que se vinculaba –no sin razón- a los golpes de Estado históricos. En ese mismo acto, la figura del enemigo del pueblo incorporó un nuevo actor, antes ausente. Apareció la crítica a los medios de comunicación, que ofrecían una cobertura de los hechos que el gobierno consideraba distorsionada y parcial. “Esta vez no han venido acompañados de tanques, esta vez han sido acompañados por algunos ‘generales’ multimediáticos que además de apoyar el *lock out* al pueblo, han hecho *lock out* a la información, cambiando, tergiversando, mostrando una sola cara.” La presidenta criticó como mensaje “cuasi mafioso” la caricatura de Hermenegildo Sabat aparecida en el diario Clarín, donde se la veía a ella amordazada. Esto provocó la reacción de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que argumentaron la defensa de la libertad de prensa. La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires se pronunció denunciando los evidentes sesgos de la cobertura mediática.

Se trazaba así una nueva frontera al interior de la comunidad política, pues ya no eran los sectores especulativos quienes representaban la amenaza neoliberal al pueblo

(acorde con la cada vez mayor presencia económica y política de las finanzas como aliados del gobierno), sino las *corporaciones* que defendían ambiciones particulares y atentaban contra el todo, poniendo sus reclamos por encima de los intereses de la Patria. En el fondo, ésta era la disputa, y no un problema estrictamente económico de reparto del excedente (Basualdo, 2011; Bonnet y Piva, 2013; Cantamutto, 2013b). Ésta fue la lógica con la que argumentó la presidenta en el acto del 25 de mayo (aniversario de la Revolución de 1810), y en el “Acto por la Democracia” del 18 de junio de 2008 (los extractos reproducidos son de éste último, énfasis añadido):

Cuando vine aquí el 1º de abril, a hablar con todos ustedes, *yo creía que realmente estaba ante la batalla por la redistribución del ingreso* porque, tal vez, quienes tenían que resignar una pequeña parte de su renta extraordinaria disputaban y discutían; creía - les juro sinceramente - que estaba ante esa batalla, la de la redistribución del ingreso, la de la lucha de los intereses naturales en toda democracia donde hay conflicto social. Pero luego, *cuando comenzaron a pasar los días y yo veía que desde un sector de la sociedad, desde una corporación, cuatro personas a las que nadie votó, a las que nadie eligió, se reunían, deliberaban, decidían y comunicaban al resto de los argentinos quién podía andar por las rutas del país y quién no, me di cuenta que estaba ante otra situación muy diferente.*

Pero quiero creer sinceramente que tal vez esas cuatro personas, llevadas por la propia dinámica de los hechos, *por la propia dinámica de las corporaciones que muchas veces no pueden ver más allá de sus propios intereses sectoriales, no se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Yo quiero en nombre de la vigencia democrática, en nombre de la Constitución, en nombre de las leyes de la República, que adviertan que si la historia primero fue tragedia hoy se repite como comedia, y que ya los argentinos no queremos más comedias.*

Nuevamente, se repetía el recurso de legitimarse mediante la elección popular y mediante el respeto a las instituciones democráticas, además de la apelación al pueblo, del que su gobierno era intérprete, frente a demandas sectoriales, puntuales, corporativas. Se resaltó así el sesgo anti-democrático y anti-popular del reclamo del capital agrario, basándose en el carácter particular de la corporación. Esta novedad, este corrimiento del antagonismo interno, marcó la dinámica política del período, no sólo respecto del BEP sino con las clases populares. Se hizo más gris la distinción de quiénes personificaban la amenaza, porque ya no tenían arraigo en valores e ideas (conservadores y neoliberales) ni en ocupaciones (finanzas, especulación) o en distorsiones de la función (corrupción) como al inicio del mandato apuntaba Kirchner,

sino en *el carácter particular de la demanda*. ¿Cuándo una demanda era particular, y por ello corporativa? Cuando contrariaba el programa del gobierno, votado por la mayoría, y por ello, defensor de la comunidad completa; este sesgo se amplificó cuando el gobierno ganó las elecciones de 2011 por una muy amplia mayoría (sección 3.1). Corporación pasó a ser todo grupo que cuestionara el orden discursivo y político propuesto desde el gobierno.

Una vez que el conflicto acabó, la personificación por antonomasia de la corporación pasó a ser el multimedios Clarín, hasta entonces socio del gobierno.³²⁸ La “corpo” -como se la llamó despectivamente desde entonces- se tornaría en el principal enemigo del pueblo, volviéndose probablemente el exterior constitutivo más fuerte del kirchnerismo: “¿Qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso?” le espetó Kirchner en marzo de 2009.³²⁹ Resulta por demás relevante que este nuevo antagonismo ha sido no pocas veces entendido como enfrentamiento con “los poderosos”, aunque el diagnóstico de corporativo no aplicó sólo a actores del BEP: no pocas veces fue tildado bajo este mote todo reclamo de la CGT y la CTA opositoras. Las tensiones con los sindicatos terminarán por favorecer la ruptura interna de ambas centrales: Moyano se alejó del gobierno y la CTA se dividió según sus simpatías con la presidenta (sección 3.2.2).

Este proceso es analizado detalladamente por Inda (2012), quien demuestra el corrimiento discursivo de la presidenta, que abandonó relativamente la referencia al “pueblo trabajador” (típica del peronismo) afincándose en el referente de los “sectores vulnerables”. Así, señala la autora, trabajadores sindicalizados y capitalistas fueron puestos en un plano de igualdad, partes que reclamaban, legítimamente, pero que corrían el riesgo de excederse. La presidenta, como cabeza del Estado, representante del todo, priorizaría el bienestar común en lugar de entrometerse en disputas particulares. Si bien

³²⁸ Hasta poco antes de estallar el conflicto con el campo, el gobierno había mantenido una buena relación con el multimedios, habiéndole extendido Kirchner las licencias en 2005. Los roces empezaron por dos motivos: en relación a la gestión de Papel Prensa (principal empresa productora de papel de diario, cuya propiedad se reparte entre los diarios Clarín y La Nación, y el Estado nacional, y se encuentra bajo sospecha de adquisición ilícita durante la dictadura) y por la posibilidad de habilitar el sistema de *triple play* que demandaban las empresas de telefonía (dueñas de las redes de fibra óptica). La cobertura sesgada del conflicto terminó de hacer implosionar la relación. El gobierno recuperó a partir de entonces una consigna que había sido puesta en las calles en 2001: “Clarín miente”.

³²⁹ El enfrentamiento con el agro y con Clarín son una referencia casi permanente en la enumeración de hitos que acercan militantes al gobierno (Vázquez y Vommaro, 2012). Fue resaltado en las entrevistas realizadas para esta tesis a Cañón, Cimatti, Cornejo, Kenis, G. López, Moler, Rivas y Stoikoff.

este desplazamiento discursivo es relevante (y por ello le destinamos este espacio), no deja de ser coherente con la trayectoria de reafirmación de la voluntad del kirchnerismo desde 2003 de enfrentar a las corporaciones: primero las militares, las de políticos corruptos, los poderes económicos, luego los medios de comunicación, y hasta los sindicatos. El punto clave fue realzar la capacidad del Estado de intervenir políticamente, ordenando en función de los objetivos del conjunto, por encima de las partes. La “recuperación de la política” (Rinesi, 2011) fue, en definitiva, la defensa del proyecto que necesitaba de la mediación estatal permanente, especialmente cuando había partes que no lo aceptaban. Durante la etapa de recuperación (período 2003-2007) en que todos parecían ganar, el conflicto por la intervención se diluyó, pero cuando alguien debía ceder, los ánimos cambiaron.

El capital agrario, consciente de esta situación, bregó por llevar el conflicto al Congreso, donde las fracciones del BEP están mejor representadas en su diversidad (Bonnet y Piva, 2013; Piva, 2011). El argumento era un cierto decisionismo presidencial, con el que se comenzaría a acusar al gobierno, asociando esta característica a un modelo populista, irrespetuoso de las instituciones democráticas. Este discurso, de corte republicano, ganaría lentamente fuerza en el escenario público (Fair, 2009a; G. Rodríguez y Freibrun, 2011). La votación sobre la resolución N° 125 se resolvió por el “voto no positivo” del vicepresidente Julio Cobos, que desempató la votación en su calidad de presidente del Senado. El 18 de julio la presidenta instruyó al ministro de economía a derogar la resolución, respetando la decisión del Congreso, restableciendo las retenciones fijadas en las resoluciones 368 y 369 de 2007, del 35% para la soja y 28% para el trigo.³³⁰

El gobierno adoptó a partir de ese momento el énfasis explicado de defensa de su carácter de representante de la comunidad política nacional, lo que indujo a subrayar la presentación del Estado como separado de poderes particulares. Concretamente, sirvió para deslindar la dirección política del aparato estatal de las fracciones hegemónicas del BEP, permitiendo la consolidación de la fuerza gobernante como identidad política. Para las fracciones hegemónicas, esto era definitivamente un triunfo, toda vez que se

³³⁰ Esto probaría ser un error para el capital agrario cuando el precio de la soja se desplomó de US\$ 602 en julio a US\$ 318 en octubre de 2008, lo que hubiera disminuido la alícuota al 30%.

respetaban los lineamientos básicos de sus demandas, sin necesidad de intervenir de modo explícito, irritando más las diferencias internas del BEP: de esta forma, el costo político era cargado sobre el gobierno.

Éste expresó su fidelidad en sucesivas aproximaciones: en los festejos del Bicentenario en 2010 nominó el proceso como *crecimiento con inclusión*, luego de ganar las elecciones de 2011 afirmó que se iniciaba la *sintonía fina* del modelo, en marzo de 2012 lanzó el slogan de la *década ganada*. Las tres referencias afirmaban el orden político estructurado previamente, del que sabemos por los anteriores capítulos, las grandes ganadoras eran ciertas fracciones del BEP (¿década ganada?), que requerían ahora pulir los mecanismos de intervención sobre el PRE (¿sintonía fina?), para mantenerlo funcionando (¿crecimiento?) y legitimado (¿con inclusión?). Las políticas analizadas en el resto del capítulo parecen explicarse en este contexto. A modo de síntesis sobre la narración que explica “el modelo”, resulta clarificadora la promoción oficial del programa de crédito subsidiado Ahora 12 creado en septiembre de 2014 (resolución conjunta Mecon 671/14 y de Industria 267/14):

En los últimos diez años, Argentina experimentó una etapa de crecimiento sostenido sin precedentes en su historia. A diferencia de otros momentos históricos, este *crecimiento se basó en la reindustrialización del país, la generación de empleo, la mejora en las condiciones de vida y la recuperación de derechos sociales para el pueblo argentino*.

Es necesario un gobierno activo, que fomente un mercado vigoroso a través de políticas que promuevan la inclusión social, porque la demanda, así como la producción y la inversión son motores del modelo de crecimiento. En este marco, el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reafirma *sus objetivos de impulso al consumo, el empleo y la industria nacional*.

Porque un país que no sostiene políticas de crecimiento e inclusión no tiene futuro, llega Ahora 12, un programa de crédito para fomentar el consumo, el comercio, la producción y el empleo. Con *el Estado como articulador* de la cadena de valor, los argentinos podrán comprar en 12 cuotas sin interés con tarjeta de crédito. *Porque cuando un argentino consume, muchos otros sostienen su trabajo*. Para alentar a la industria nacional, con Ahora 12 habrá crédito para comprar distintos bienes y servicios (...). *Apostar al consumo dinamiza la economía. Con la compra de cada argentino, nos beneficiamos los 40 millones. Sigamos construyendo una Argentina para todos. Con crecimiento e inclusión. Argentina nos incluye*.

(Fragmentos del spot oficial del programa Ahora 12, disponible en www.ahora12.gob.ar/programa.htm, énfasis añadido)³³¹

Aunque se trata de un programa de impulso al consumo entre otros (ver infra), resulta representativo de la articulación discursiva oficial: el orden político se basó en impulsar el crecimiento industrial e incluir a través del consumo y el empleo. El resultado esperado era la construcción de la nación a través de incorporación de quienes habían sido relegados (la “Argentina (que) nos incluye”), y la forma de hacerlo era a través del fomento al consumo como vía para impulsar la economía y la inclusión. La mejora de las condiciones de vida y de la ampliación de los derechos sociales serían resultados del impulso al capital industrial: la “reindustrialización” se mantuvo como significativo nodal en la narración oficial del proceso. ¿Acaso se puede imaginar un lugar más central para una fracción del capital, que se no sólo motor de la economía sino también de la inclusión en la nación? El Estado cumpliría un rol de “articulador” en esta tarea: no sería su agente pero tampoco se haría a un lado. Entendemos que ésta es una muestra cabal del carácter hegemónico de esta fracción, que no sólo resulta ganadora económica sino que es capaz de proveer de dirección política para el conjunto de la sociedad, mediada a través del Estado.

Debemos agregar dos rasgos más del mismo mensaje. Por un lado, se puede notar que más allá del Estado articulando y el capital industrial invirtiendo, el “argentino” aportaría a este orden en tanto “consumidor”: de su compra de mercancías se derivaría la creación de empleo y derechos sociales de inclusión que beneficiarían a “los 40 millones”. Por otro lado, las finanzas dejarían de ser un exterior constitutivo, recuperando la lógica de la narrativa de Duhalde: se trataba de socios en estos objetivos, financiar el consumo para fomentar así la actividad comercial e industrial y generar así empleos. Es muy relevante marcar que este objetivo es posiblemente una de las líneas centrales del programa de reformas neoliberales, tal como se presenta en los países centrales, que –combinado con el estancamiento salarial- fue justamente lo que indujo la crisis que estalló en 2008 (Duménil y Lévy, 2014). No se busca aquí denunciar engaño o falsedad, sino mostrar cómo el kirchnerismo logró articular discursivamente la nueva fase del mismo modo de desarrollo, combinando novedad y cambio: el recambio de

³³¹ El spot elegido tuvo una actualización de 2015 en los mismos términos. Disponible en el mismo sitio.

fracciones hegemónicas al interior del mismo BEP, y su relación con las clases populares.

Volvamos al escenario posterior al conflicto de 2008. La necesidad de arbitrar entre fracciones del capital creció en complejidad debido al agotamiento del impulso inicial de la acumulación. Por eso, en el marco de atención a las necesidades del capital frente a la crisis mundial, se creó en noviembre de 2008 el Ministerio de Industria (antiguo Ministerio de la Producción), destinado a fomentar la competitividad de las empresas (Rial, 2009). Quedó a cargo de Déborah Giorgi, una funcionaria con trayectoria esta área en la provincia de Buenos Aires y en el gobierno nacional (fue secretaria de industria y de energía durante el gobierno de la Alianza). Se incluyó dentro del Ministerio a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, a cargo de Carlos Cheppi, quien, como ex funcionario del INTA, se asumía podía mejorar el diálogo con el sector. De hecho, esta secretaría sería ascendida a Ministerio un año más tarde, quedando a cargo de Julián Domínguez. En junio de 2012 se transfirió el área de Transporte al Ministerio del Interior, a cargo de Florencio Randazzo. Se completaba de esta forma el proceso de subordinación del Ministerio de Economía al poder político, desperdigando sus previas funciones en 5 Ministerios (Economía, Producción, Agricultura, Interior e Infraestructura). La multiplicación de áreas específicas señala la complejidad de la tarea de arbitraje entre fracciones que el Estado encaró.

El gobierno se enfrentó a la imposibilidad de resolver la necesidad de fondos por la vía impositiva, y en el marco del estallido de la crisis mundial descrito, desarrolló una serie de políticas públicas novedosas. Por el lado de los fondos, se tomaron tres decisiones de particular peso posterior: a) mejorar la fiscalización del impuesto a las ganancias, cargando las tintas sobre los trabajadores en relación de dependencia (resolución general 2,437/08 de la AFIP); b) se renacionalizó el sistema previsional, pasando de la capitalización privada de las AFJP a un sistema solidario universal en la gestión de ANSES; y c) se reanudó la ruta del endeudamiento. Este plan anticrisis se complementó con (Varesi, 2013): d) medidas comerciales de protección que trababan las importaciones (derechos antidumping, licencias no automáticas, etc.); e) una ley de Promoción de Inversiones (N° 26,360) que redujo aranceles de importación y otorgó

exenciones fiscales; f) reiteradas instrumentaciones de blanqueos de capital (Ley N° 26,860 fue la más relevante); y g) moratorias impositivas.

La aplicación del impuesto a las ganancias a trabajadores permitió un aumento de la recaudación, gracias a un permanente atraso en la escala de aportes. Significó además una suerte de “tijera” para los asalariados: la inflación les erosionaba sistemáticamente los salarios, pero si la negociación colectiva lograba un ajuste cercano o por encima del aumento de precios, el trabajador debía pagar impuesto a las ganancias (Casas, 2011; IPYPP, 2012).³³² Esto fomentó diversas formas de eludir aumentos formales de salarios (sumas no remunerativas, menores horas extras, etc.), lo que operó como un incentivo a la informalidad por “lo alto” de la escala salarial.

La estatización del sistema previsional, más allá de las consabidas preocupaciones por el “avance” del Estado en la economía (particularmente, por la posibilidad de designar representantes en los directorios de las empresas en las que las AFJP tenían participación accionaria), fue recibida sin mayores fricciones por el capital: la caja resultante tendría usos atractivos para gran parte del capital (ver sección 3.2.1). Sus arcas financiaron varios subsidios al capital productivo, con impactos para las clases populares en términos de empleo o necesidades insatisfechas, así como pagos de la deuda, a cambio de bonos de dudosa cobrabilidad, conquistando la anuencia incluso del capital financiero en esta política (Giuliano, 2015). Veamos.

Del sistema previsional saldrían los fondos para financiar las políticas de contención de la crisis mundial, entre las que se pueden mencionar (Rial, 2009): el Programa de Recuperación Productiva (REPRO), que establece subsidios directos a las empresas, pagando parte de los salarios de sus empleados,³³³ el Régimen para la Regularización de Relaciones Laborales y Promoción para la Incorporación de Nuevos Puestos de Trabajo (ley N° 26,476), y el Programa de Inserción Laboral en el Sector Privado, que financiaba parte de los salarios a las empresas que contrataran beneficiarios de seguros administrados por el MTESS. Como explica Frega (2012), se trató de

³³² El gobierno argumentó que “todos tienen que aportar” para la redistribución del ingreso. Sin embargo, a la fecha de escribir esta tesis, las ganancias originadas en la especulación financiera —especialmente la bursátil— están exentas de pago del tributo. Éstas y otras omisiones cuestionan severamente el argumento redistributivo, que tiene un alcance restringido al interior de la fuerza de trabajo (C. Lozano et al., 2014)

³³³ Según datos de la autora, el REPRO asistió a 1,328 empresas con casi 16,000 trabajadores en 2003, mientras que en 2009 alcanzó las 2,669 empresas —casi 140,000 trabajadores—. El programa pasó de destinar \$13 millones en 2003, a \$500 millones en 2009.

diversas políticas de desgravación impositiva para reducir el costo laboral a las empresas, manteniendo la precarización como lógica de la contratación. Estas políticas se sumaban a la vigente promoción de inversiones (ley 25,924 de 2004), al mantenimiento del régimen preferencial de la industria automotriz, y la prórroga de algunos regímenes promocionales regionales, que tenían por beneficiarios directos un grupo muy reducido de grandes empresas (Azpiazu et al., 2012; A. Gaggero et al., 2014).

La política de subsidio al capital productivo se complementó con el Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario (lanzado en 2010), que subsidió tasas de interés para financiar inversiones productivas, y el Fondo para el Desarrollo Argentino (FONDEAR, de 2014) para proyectos productivos de innovación tecnológica. ANSES financió también dos programas con implicaciones directas para las clases populares: AUH y PROCREAR.³³⁴ Este último, estaba destinado a impulsar el consumo en bienes inmuebles, a través de subsidios crediticios para los trabajadores ocupados formalmente. La lógica fue repetida más tarde con el PROCREAUTO (julio de 2014), financiado por el Banco Nación, destinado a automóviles. Como se vio respecto de Ahora 12, la lógica de impulso al consumo mediante el financiamiento ofreció una posibilidad de impulso a la actividad productiva. Se puede notar el despliegue de una amplia gama de políticas destinadas a este fin.

Respecto de la deuda, el gobierno buscaría por diversas vías reanudar el crédito externo, lo que fuera la voluntad explícita del canje de 2005 (ver sección 2 del capítulo 5). Sin embargo, el capital financiero internacional no iba a dejar pasar fácilmente el *default* unilateral y el discurso de confrontación –aún cuando éste no estuviera respaldado en políticas públicas. En el contexto de la crisis mundial, las exigencias de previsibilidad se reforzaban. El gobierno desplegaría una voluntad abierta de pagos sistemáticos al capital, política que denominó “desendeudamiento” (decretos 1,394/08 y

³³⁴ El Programa de Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (PROCREAR), lanzado a mediados de 2012, se destinó a financiar créditos hipotecarios baratos, como forma de atender una muy antigua demanda ligada al déficit habitacional.

2,010/09), y que fuera explicitada por el ministro de Economía Boudou en 2010 (la “Hoja de ruta”).³³⁵

En septiembre de 2008, tres grandes bancos internacionales (Barclays, Citigroup y Deutsche Bank) le acercaron a la presidenta una propuesta para reabrir el canje de 2005. Al igual que en el Megacanje de 2001, eran las propias entidades acreedoras las que propiciaban una reestructuración.³³⁶ Dado que contaban con no menos de un tercio de los títulos que seguían en *default* (los *holdouts*), el canje tenía garantizada una aceptación mínima, lo que entusiasmó a la presidenta, que anunció de inmediato la reanudación de las negociaciones con estos bonistas y con el Club de París. La reapertura del canje llegó en 2010, modificando la legislación nacional al derogar la ley “cerrojo”. Quedaba normalizada así casi el 93% de la deuda que entró en default en 2001. La negociación con el Club de París demoraría mucho más, pues el acuerdo se alcanzaría a principios de 2014. En el transcurso, la deuda con el Club pasó de US\$6,089 millones al momento del *default* a US\$9,700 millones del arreglo final: un aumento de casi el 60% de la deuda en poco más de una década.

En el mismo brío de pagos, en 2009 se creó el Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilidad (decreto 2010/09), para garantizar los pagos de deuda. Esto ocasionó una fuerte fricción con Redrado, presidente del BCRA, que se negaba a utilizar las reservas con tal fin, a riesgo de erosionar la base monetaria (en clara sintonía con lo que fue la lógica de la Convertibilidad). Esta resistencia provocó que el gobierno intentara destituirlo (decreto 18/10), lo que finalmente no prosperó, debido al accionar del Poder Judicial y la oposición en el Congreso. Redrado terminó renunciando, siendo reemplazado por un funcionario del radicalismo, Miguel Pesce, que a su vez sería sucedido al cabo de un mes por Mercedes Marcó del Pont.³³⁷ En aras de lograr la subordinación a los objetivos de política del Poder Ejecutivo, se reformó en marzo de 2012 la Carta Orgánica del BCRA (ley N° 26,739). De esta forma, se terminó el control directo de la banca sobre el BCRA. El Fondo del Bicentenario no tuvo efectos reales.

³³⁵ Los puntos desarrollados a continuación fueron tratados más extensamente en otros trabajos (Cantamutto, 2012b, 2013c, 2014).

³³⁶ La agencia colocadora de deuda (Arcadia Advisors) fue denunciada por tráfico de influencias: todos sus directivos tenían vínculos con los bancos acreedores (C. Lozano, 2010; Olmos Gaona, 2013).

³³⁷ Marcó del Pont provenía del grupo Fénix y era militante del MID, espacios ambos (académico uno, político el otro) de fuerte sesgo desarrollista.

En el contexto de cumplir con el capital extranjero y otorgar seguridad jurídica, se arregló a fines de 2013, el pago a la española REPSOL por la compra de YPF (US\$6,000 millones más intereses) y se reconoció un juicio perdido en el CIADI del Banco Mundial (US\$ 677 millones).³³⁸ En 2015 perdería otro juicio ante el Grupo francés Suez en ese tribunal. El reconocimiento de los reclamos del capital extranjero para lograr la supuesta previsibilidad y seguridad jurídica tenía por objetivo convocar inversiones extranjeras.

Esta política de pagos de deuda, sin embargo, tropezó con un escollo. Un grupo de fondos de inversión especializados en la compra de bonos en *default* y el litigio posterior con el deudor (conocidos por esta práctica como “fondos buitres”) inició demandas ante juzgados en el exterior, y logró varias sentencias en su favor. En 2012 fueron capaces de incautar por unas semanas la Fragata Libertad en Ghana. En 2013, los fondos buitres NML Capital Ltd y Aurelius Capital Management (que tienen US\$1.330 millones en títulos) ganaron un litigio en New York: el fallo en primera instancia del juez Thomas Griesa fue avalado por la Cámara de Apelaciones, considerando que los fondos buitres eran acreedores en igualdad de condiciones al resto (a pesar de haber comprado los bonos después del default) y a Argentina como desigual ante la ley por ser un “deudor serial” (Cafiero y Llorens, 2013; Lucita, 2013b). Esto llevó a que el gobierno accediera a una nueva reapertura del canje en 2013, quebrando toda credibilidad respecto de la propia legislación. La Corte Suprema de aquel país se negó a tratar el tema, convalidando el fallo de Griesa. Como dijimos en el anterior capítulo, la negativa del gobierno a investigar la deuda y a modificar la jurisdicción de aplicación tuvo efectos perniciosos.

Este enfrentamiento marcó todo el 2014. El gobierno, impulsó la consigna “Patria o buitres”, que le valió una mejora en la imagen pública, buscando aglutinar a la comunidad argentina contra el agresor externo (los buitres). A pesar del fuego verbal, el gobierno se esforzó por cancelar deudas en los términos de los canjes previos. Los

³³⁸ Un grupo de empresas extranjeras, luego de retirarse del país durante la crisis en 2001/02, inició demandas en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), órgano encargado de resolver conflictos legales internacionales ligados a inversiones. Su clara trayectoria a favor de las transnacionales (sus propios datos indican que favoreció a éstas en dos tercios de los fallos –ICSID, 2014) impulsaron a Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela a retirarse del mismo, reivindicando su soberanía nacional. El camino elegido por Argentina no fue el mismo: además de permanecer bajo la órbita del órgano, aceptó sus fallos como extorsión para acceder a nuevas líneas de crédito.

fondos buitres y el juez Griesa, sin embargo, trabaron los pagos al menos 5 veces, provocando el *default* selectivo de Argentina, y las fricciones con algunas entidades financieras.³³⁹ El problema de cumplir las demandas de este pequeño grupo residía en la posible ampliación de esas condiciones de pago al conjunto de los acreedores que entraron en los canjes previos, debido a las interpretaciones sobre la cláusula *pari passu*.

Así, se cayó en la extraña situación explicada por el ministro de Economía Kicillof: “Argentina quiere seguir pagando su deuda reestructurada pero no la dejan. Es un caso inédito, insólito” (Infonews, 25/6/14). Para sortear este escollo, se aprobó en septiembre de ese año una Ley de Pago Soberano (N° 26,984), que habilitaba a los bonistas regulares a cambiar su jurisdicción de cobro a la Argentina y el agente fiduciario al Banco Nación. Asimismo, y contradictoriamente, la misma ley que declaraba de interés público el pago de la deuda, incorporó la creación de una comisión bicameral de investigación, constituida en abril de 2015. Los resultados previstos son inciertos. La estrategia de denuncia a los fondos buitres surtió efecto para el gobierno a escala internacional, donde obtuvo fuerte apoyo del G77 + China, la UNASUR y CELAC, pero también de otros fondos de inversión (como los liderados por George Soros y Nicola Stock) y gobiernos europeos. El problema de esta demanda era que creaba un antecedente jurídico peligroso para la viabilidad de cualquier futura reestructuración de deuda. Por ello, la propuesta argentina de definir un marco regulatorio para las reestructuraciones de deuda soberana en la Organización de Naciones Unidas contó con un amplio aval.

Esta política de manejo de la deuda tuvo tres grandes efectos en el período: su caída respecto del PBI, una mayor proporción nominada en pesos y en manos del Estado. Si bien la deuda total respecto del PBI cayó, no se trata de un buen indicador de exposición financiera, al menos no de modo aislado (Guarnizo Useche et al., 2006; Lo Vuolo y Seppi, 2008). De hecho, este indicador mostraba niveles aceptables en Argentina en momentos previos al estallido de la crisis en 2001. Las recesiones, la inflación y la devaluación pueden deteriorar rápidamente el indicador. La mayor

³³⁹ En 2015 el gigante Citibank quedó atrapado en esta disputa, porque el juez le prohibió utilizar los fondos del gobierno argentino para pagar los bonos canjeados. El gobierno presionó amenazando con quitarle la licencia para operar en el país. Finalmente, el Citibank logró habilitar el pago, pero decidió abandonar el negocio de los bonos públicos argentinos, para ahorrarse problemas (Cantamutto, 2015b).

proporción de deuda nominada en pesos fue un cambio real, impulsado a través de los canjes, operatoria que concordaba con las recomendaciones del FMI para disminuir el riesgo cambiario, según su Informe de Estabilidad Financiera Global de 2004 (Ugarteche, 2009). Esta modificación, no obstante, solo era posible en el contexto de superávit comerciales que permitieran contar con los fondos externos para cubrir los pagos. Accesoriamente, incrementaban la presión fiscal interna: ambos problemas se expresarían con la erosión de los superávit gemelos (ver sección 1).

El tercer cambio se debió a la estrategia deliberada del gobierno de realizar pagos a acreedores externos mediante la colocación de nuevos bonos en organismos del Estado, principalmente el BCRA, el Banco Nación Argentina y la ANSES (Arencibia, 2013), pero también en el organismo de recaudación fiscal (AFIP), la lotería nacional, el instituto de tecnología agraria (INTA), entre otros. El 58% de la deuda pública a mediados 2014 estaba en manos de organismos estatales. El oficialismo subrayó las facilidades de negociación de este cambio, que son en efecto reales, pero omite otros efectos.

Al no tener previstos pagos de estos bonos, sino su renovación y canje por nuevos bonos, los correspondientes organismos se vieron desfinanciados, perdiendo capacidad de ejecutar políticas públicas (Giuliano, 2013a, 2014). Por ejemplo, debido a que ANSES utilizó sus fondos para pagar deuda, no pudo utilizar esos fondos para otras aplicaciones productivas o socialmente relevantes. También le pone límite a la posibilidad de llevar los haberes jubilatorios al 82% móvil de los salarios por convenio (Perfil, 14/10/10), como se propuso en el Congreso y la presidenta vetó. Por su parte, el Banco Central –recuperada su capacidad de avalar y propiciar la política del gobierno– ha prestado sistemáticamente divisas para el pago de deuda. Este mecanismo de pago ha deteriorado el respaldo de la base monetaria, favoreciendo el proceso de paulatina devaluación del peso. Para esterilizar la mayor oferta monetaria, el BCRA colocó títulos de corto y mediano plazo –Lebac/Nobac– llegando a pagar entre el 15% y 20% anual de interés (Giuliano, 2013a). La última emisión de bonos disponible al momento de escribir estas líneas (abril de 2015), llegó a pagar en dólares más de 9%. Es decir, el Estado nacional “empapeló” otros organismos estatales con deuda sin cumplimiento cierto, evitando que estos pudieran utilizar su presupuesto en aplicaciones específicas. Es decir,

el endeudamiento intra-Estado escondió un vaciamiento del propio Estado, la imposibilidad de cumplir sus funciones.

Finalmente, debe cuestionarse la idea misma de “desendeudamiento”. El valor total de la deuda, de acuerdo con las propias cifras oficiales, referidas por el gobierno, *la deuda ha crecido*. Según los anuncios oficiales, el stock de deuda pública en 2001 era de US\$145,000 millones, cifra que creció hasta los US\$176,000 millones para 2005. El canje de ese año, según las cifras oficiales, dejó la deuda en US\$126,000 millones, pero en este cálculo no se incluyeron los US\$19,500 millones de bonos que no entraron al canje, conocidos como *holdouts*. Si consideramos ambos montos, el total arroja US\$145,500 millones, poco más que en 2001 antes del *default*: es decir, no habría quita alguna. Para mediados de 2014, siempre con cifras oficiales, la deuda total llegaría a los US\$250,000 millones, considerando solo el Estado central. Mientras tanto, durante la década del kirchnerismo se pagaron US\$192,000 millones, a lo que la presidenta había llamado comportarse como un “pagador serial” (Cristina Fernández, discurso en Cadena Nacional, 26 de agosto de 2013).

Debe señalarse que las cifras expuestas no consideran la deuda de provincias y municipios, las del Banco Nación, de las empresas del Estado, de los organismos nacionales, de los Fondos Fiduciarios ni las provisiones por juicios contra el Estado con sentencia en firme. Tampoco se consignan las provisiones de pago por intereses por pagar ni por las expectativas de pago a los bonos atados al PBI (Arencibia, 2013; Giuliano, 2013b). Estas cifras no fueron consignadas en la estimación oficial, lo que subestima su monto y pone en cuestión cualquier reducción de la deuda durante la etapa kirchnerista (Arencibia, 2013; Cafiero y Llorens, 2013; Giuliano, 2013a, 2015).

Si los programas de subsidio al capital productivo y la reanudación de la ruta de la deuda apuntaban a resolver las tensiones del PRE, esto se complementó por algunas nuevas normativas que fomentaron la tendencia primarizante del mismo.³⁴⁰ Siguiendo el análisis de Costantino (2015), se puede señalar que la política más significativa fue el “Plan estratégico agroalimentario y agroindustrial participativo y federal 2010-2020”, lanzado en 2010, cuyos objetivos se orientaron hacia una profundización de la

³⁴⁰ Para un análisis más detallado de estas políticas y su relación con la fase del modo de desarrollo, ver capítulo 4 de Costantino (2015).

explotación de carácter extractivo, destinada al mercado externo, ampliando la frontera agrícola. En el mismo sentido se había orientado el Plan Minero Nacional que Kirchner había lanzado en 2004, que retomaba el Código de Minería de la ley N° 1,919 de 1997, sosteniendo amplias exenciones impositivas (Ortiz, 2008; Renaud, 2009; Svampa y Sola Álvarez, 2010). En 2008, la presidenta Fernández vetó la ley de Glaciares (decreto 1,837/08) impulsada por Libres del Sur, para evitar entorpecer la actividad minera. En 2014, se aprobó un nuevo Código Civil que quitó el acceso a agua como derecho humano, y una nueva ley de Hidrocarburos, que habilita técnicas de extracción altamente contaminantes, como la fractura hidráulica. Con ambas leyes se está fomentando la actividad minera extractiva. La lógica sistemática fue el fomento de las actividades extractivas primarias, que proveyeron de divisas a la economía, para resolver el equilibrio macroeconómico externo.

Lejos de constituir excepciones, estas leyes guardan clara coherencia con la persistencia de las reformas estructurales neoliberales. La persistencia de la ley de inversión extranjera (N° 21,382) de 1976, reafirmada por decreto en 1993, ha posibilitado la extranjerización de la estructura productiva, particularmente en la industria, y facilitado la IED dirigida a las actividades procesadoras de recursos naturales (Azpiazu et al., 2012; Belloni y Wainer, 2014b), reafirmando el rol dependiente de la economía argentina. La ley de desregulación financiera de 1977 (ley N° 21,526) ha mantenido las ventajas del capital financiero extranjero, facilitando la libre movilidad del capital (Cibils y Allami, 2010). La desregulación laboral (leyes N° 24,013 y 24.028, decreto 1,334/91) ha mantenido las formas legales de flexibilización, permitiendo la desvalorización de la fuerza de trabajo. La ley de reforma del Estado de 1989 (N° 23,697) y el decreto de desregulación de 1991 (N° 2,284) mantuvieron sus principales efectos, al mantener bajo propiedad privada la mayor parte de los servicios públicos y desregulado el comercio exterior. De los 58 Tratados Bilaterales de Inversión que el país firmó en los noventa, 55 se mantuvieron vigentes en aras de “atraer el capital extranjero”. No hay, en el período, ninguna revisión de fondo de las leyes estructurales neoliberales, lo que habilita a sostener que se trata de *la misma etapa del modo de desarrollo* (Cantamutto y Costantino, 2014).

Existen dos conjuntos de normas que parecieron orientarse en un sentido distinto. Por un lado, aquellas leyes que regulan la acción del capital sobre recursos naturales, limitando en particular al capital extranjero. Se trata de las leyes de Tierras de comunidades indígenas originarias (N° 26,160) de 2006, la ley de Bosques nativos (N° 26,331) de 2007, la nueva ley de Glaciares (N° 26,639) de 2010, y la ley de Tierras (N° 26,737) de 2011. En todos estos casos, el gobierno ha incurrido en evidentes incumplimientos, falta de fiscalización, y delegación de responsabilidades en niveles subnacionales, retomando proyectos previos pero haciéndolos menos restrictivos (Costantino, 2015). En un mismo sentido, el “Plan Estratégico Industrial Argentina 2020” formulado en 2011, a pesar de su nombre, no tiene ninguna política ni meta clara, y consta más bien de principios generales. Algunas de las políticas antes enunciadas, tuvieron la intención de impulsar sectores específicos a través del consumo, con efectos muy limitados: PROCREAR, PROCREAUTO, Ahora 12 (Castells y Schorr, 2015; Schorr, 2013).

Por otro lado, a partir de 2011, se sucedieron algunas medidas de control de capitales, tratando de contener la fuga (que, como vimos en la sección anterior, se constituyó en la principal fuente de salida de divisas). A través de resoluciones de la AFIP (N° 3,210/11 y 3,333/12) y en acción coordinada con el BCRA, se restringieron las compras de dólares. La resolución 3550/13 de AFIP elevó al 35% el impuesto a los consumos en el exterior del país. En 2012 se aprueba una nueva ley mercado de capitales (N° 26,831), que regula la salida de divisas por parte de las empresas trasnacionales, que fue complementada por la modificación a la ley de impuesto a las ganancias (N° 26,893) de 2013, que eliminó la exención del pago de este impuesto de la que gozaban la distribución de dividendos y utilidades de las empresas, las transacciones de acciones de empresas, bonos y otros valores. En 2012 también se implementaron diversos mecanismos para desalentar las importaciones. Todo lo anterior impulsó la formación de un mercado de dólar paralelo (ilegal), que para mayo de 2015 se alejaba un 40% del valor oficial (\$12.5 por dólar en contra \$8.9 oficiales). El impacto mediático de esta brecha cambiaria ha sido una constante desde entonces –conocida como “cepo”.

Existe un tercer conjunto de cambios que relativizan la continuidad con la etapa neoliberal previa. Se trata de las nacionalizaciones ocurridas en el período. En años

anteriores, por la salida de los capitales extranjeros, se estatizaron algunas empresas, como Aguas Bonaerenses y AyS. En estos años, además de la estatización de las AFJP, se produjo la nacionalización de Aerolíneas Argentinas (julio de 2008) y la de YPF (mayo de 2012).³⁴¹ En ambos casos se trató de salvatajes a empresas españolas (grupo Marsans, y REPSOL), que luego de vaciar los activos de ambas empresas locales buscaban retirarse del mercado. La estrategia oficial fue buscar primero socios locales (López Mena y Eskenazi, respectivamente), al fallar este intento, presentar la compra como una conquista de soberanía, y terminar pagando cuantiosas compensaciones a los capitales extranjeros (Burachik et al., 2010). En ninguno de los casos las empresas pasaron a ser estatales (y en tal caso, sometidas a auditorías y escrutinio público), sino que se mantuvieron como sociedades anónimas con participación mayoritaria del Estado. Se exaltó el componente de recuperación nacional, que fue particularmente relevante –por el peso simbólico– en el caso de YPF. Este último componente se enfatizaría con las progresivas estatizaciones de servicios de ferrocarriles sucedidas desde 2008, con luego de la creación de Trenes Argentinos Operadora Ferroviaria (ley N° 26,352), que desde 2013 operó 5 de las 7 líneas urbanas de la Ciudad de Buenos Aires, además de varias líneas nacionales (servicios a Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe y Tucumán).

Este conjunto de cambios, sin un programa establecido claro, y contradictorios con las tendencias centrales del PRE, no implican per se un cambio en el modo de desarrollo. Sin embargo, constituyen modificaciones que habilitarían a pensar la posibilidad de una nueva fase del mismo, cuyas consecuencias posteriores no podemos prever. El rol contradictorio de algunas de estas medidas, especialmente las nacionalizaciones, sirvieron para alimentar la interpretación progresista de la política del gobierno.

En el marco de estas crecientes erogaciones para pagar deuda y subsidiar al capital, el Estado, para sostener su perfil de intervención por encima de las partes, debía articular algún tipo de política para las clases populares. Éstas enfrentaron la crisis en un marco de estancamiento de la creación de empleo y de los salarios. En este sentido,

³⁴¹ Otra operación relevante fue la estatización de la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín a fines de 2009, sin costos para el fisco.

como ya mencionamos, el Estado subsidió a las empresas para que detener los despidos. La otra línea de acción fue la formalización de empleo no registrado, cuyos efectos fueron más tenues. La lógica de la intervención se enfocó en la negociación salarial, sin modificar los componentes no salariales, que mantuvieron la lógica de flexibilización de la década anterior (Longo, 2011). En términos de salarios, no hubo mayores novedades institucionales en el período, aunque se reforzó de modo evidente la presión oficial para negociar por debajo de la inflación. El salario mínimo se mantuvo al ritmo de la inflación (ver gráfico 12), siendo usado como una política contra la pobreza, que redujo en parte la heterogeneidad salarial (Groisman, 2012).

El foco de atención, en línea con lo expresado discursivamente, fue atender a los “sectores vulnerables”: aquellas fracciones de la clase trabajadora que no lograban insertarse en el mercado laboral, y quedaban por ello por fuera de toda la regulación orientada sobre ese plano. La acción se distribuyó entre ejes de capacitación y seguros de desempleo del MTESS y los programas socio-laborales del Ministerio de Desarrollo, estructurados bajo la lógica de que “la mejor política social es el trabajo” (ministra Alicia Kirchner, Télam, 6/3/14). Es decir, el objetivo de la política estuvo en lograr la inserción laboral en el mercado, compensando las falencias a través de capacitación, apoyo económico, y aprovechamiento del capital social (Martos, 2014). No menos relevante era contener demandas sociales de sectores de la población que tras años de fuerte crecimiento, seguían excluidos del mercado laboral. “¿Alguien piensa que el problema de la pobreza se soluciona con 100 pesos?”, dejaba en claro la ministra Kirchner (Página/12, 22/2/09): el objetivo era contener e incluir en el mercado laboral. El principal eje de acción del Ministerio, lanzado justo durante la explosión de la crisis mundial (agosto de 2008), se llamó emblemáticamente *Argentina Trabaja*.³⁴²

En este marco, el programa socio-productivo más relevante del kirchnerismo, por su presupuesto y alcances territoriales, fue el Programa Ingreso Social con Trabajo, creado en agosto del 2009 (resolución MDS 3,182/09). El presupuesto del programa pasó de \$1,500 millones en 2009 a \$4,611 millones en 2013 (usando los precios del

³⁴² En este eje se desarrolló un amplio conjunto de normativas de promoción y fortalecimiento de la acción cooperativa y emprendedora: Marca Colectiva (ley N° 26,355), Microcréditos (ley N° 26,117), Monotributo Social (leyes N° 25,865 y 26,233), Talleres familiares y de Grupos Comunitarios, Proyectos integrales socioproductivos, Comercialización y Compre Social, Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Fernández Soto, 2009).

INDEC, significa que se mantuvo estable en términos reales), significando un 13% del presupuesto total del Ministerio. Se orientó a la creación de empleo, la capacitación y promoción de la organización colectiva de los sectores vulnerables, funcionando a través de la conformación de cooperativas de trabajo orientadas a la ejecución de obras públicas de mediana y baja complejidad.

A pesar de haber sido calificado como una gran novedad, siguiendo el exhaustivo estudio de Martos (2014), se puede constatar que el programa fue una continuidad y profundización de las líneas de intervención previas. Mantenía la idea de promoción del Estado para garantizar derechos, abandonando la figura de “beneficiario” por la de titular de derechos (Alicia Kirchner, Página/12, 22/2/09), buscando la inclusión e integración social por la vía laboral, por lo que se exigieron contraprestaciones. La novedad estuvo en recuperar la organización cooperativa, respondiendo al proceso de los MTD, que se habían coordinado de modo de aprovechar al plan JJHD para su propio beneficio (ya desde 2001 venían recuperando esta lógica). Sin embargo, siguiendo al autor, se pueden constatar otras continuidades, entre las que podemos resaltar: a) la cooperación fue subordinada a políticas definidas por fuera de las organizaciones, b) mantuvo la focalización masiva en detrimento de la universalidad, c) no tuvo reglamentación operativa, lo que otorgó gran discrecionalidad en la implementación, d) mantuvo la lógica de descentralización del neoliberalismo, e) consolidó trayectorias de empleo precario (se absorbía beneficiarios de otros programas), y f) mantuvo a los trabajadores en un limbo, donde no eran ni empleados en relación de dependencia ni cuentapropistas ni cooperativistas (Martos, 2014).

De todas formas, sin dudas, la política estrella orientada a los “sectores vulnerables” fue la Asignación Universal por Hijo/a (AUH) de octubre de 2009 (decreto 1,602/09). La misma determinó la ampliación del sistema de asignaciones familiares mediante el subsistema no contributivo, destinado hacia todos los menores de 18 años cuyos padres o tutores se encontrasen desocupados, fueran monotributistas sociales, o se desempeñaran en la economía informal o en el servicio doméstico, siempre que percibieran remuneraciones inferiores al salario mínimo. La AUH significó un gasto total de \$14,096 millones en 2013, lo que representa un 0,48% del PBI, alcanzando a aproximadamente tres millones y medio de beneficiarios. A pesar de su importancia y

masividad, esta política resultó extremadamente barata para el Estado, comparándola con otras finalidades del gasto en el presupuesto 2013: representa un cuarto de los gastos destinados a pagos deuda (\$55,606 millones, ó 1.9% del PBI), o menos la séptima parte de lo transferido a las empresas de servicios (\$102,656 millones, ó 3.5% del PBI).

La AUH se basó en viejas propuestas del ARI de ingreso ciudadano y la consulta popular del FRENAPO de 7 años antes. Como Fernández Soto (2009) señala, se trató de un reconocimiento explícito de la persistencia de la exclusión y de la insuficiencia de las políticas públicas. El propio decreto de creación (1,602/09) afirma que, a pesar de los esfuerzos, “subsisten situaciones de exclusión de diversos sectores de la población que resulta necesario atender”. Los considerandos del mismo afirmaban que no pretendían “garantizar la salida de sus beneficiarios de la pobreza”, sino que se trataba de una política paliativa que suponía “más dinero en los bolsillos de los sectores más postergados”. En este sentido, mantuvo la lógica de la política social kirchnerista, que era la expectativa de incluir a través del empleo, compensando pobremente a quienes no lo logran.

Si bien la AUH representó una clara mejora cualitativa respecto de sus antecedentes (JJHD y Familias), mantuvo rasgos cuestionados por especialistas, tales como la incompatibilidad con otros planes, la actualización de los montos por decisión el poder Ejecutivo (no un mecanismo automático de actualización), la discontinuidad con las asignaciones familiares de monotributistas y asalariados (que duplica el sistema administrativo y genera incentivos a la informalidad), la exclusión de migrantes y privados de la libertad. Todo lo anterior habilita a señalar que el programa, a pesar de su extensión de cobertura e importancia simbólica, quedó a mitad de camino entre un plan de transferencia condicionada y un ingreso ligado a un derecho universal (Arcidiácono et al., 2011; Fernández Soto, 2014; Lo Vuolo, 2010; Migliorisi, 2013).

Finalmente, es necesario recalcar la significativa actividad de regulación en la ampliación de derechos (civiles, políticos y sociales) durante el período. El conjunto de políticas enumerado a continuación tiene una caracterización general compartida, que es el hecho de que no afectaron al PRE ni cuestionaron las demandas del BEP, sino que se orientaron en un sentido diferente de la disputa, y tuvieron un muy elevado impacto simbólico. En las entrevistas realizadas, la mayor parte de estas leyes fue enumerada al

momento de explicar el apoyo al gobierno nacional. Componen derechos ligados a tradiciones democráticas y liberales, que amplían la noción de ciudadanía.

En la segunda mitad de 2009, se aprobó la ley Orgánica de los Partidos Políticos (N° 23,298), que reglamentó las internas abiertas obligatorias, y la ley de Servicios Audiovisuales (N° 26,522), conocida como ley de medios. Esta última incorporó el enfrentamiento con el multimedios Clarín, recuperando un proyecto largamente impulsado por medios comunitarios. El gobierno ya había dado inicio a esta disputa, pero le dio nuevos bríos a partir de la disputa del campo, y más aún a partir del debate de la ley de medios. El canal estatal (antigua ATC, actual TV pública) recibió un fuerte impulso político y también financiero, que fue notable en la calidad y proliferación de producciones propias de contenido. En 2010 se lanzó el Plan Nacional de Telecomunicación «Argentina Conectada», que incluyó la creación de nuevos canales estatales: el infantil Pakapaka (2010), el de cine principalmente nacional INCAA TV (2010), el educativo Tecnopolis TV (2011) y el de deportes DeporTV (2014), que se sumaron al ya existente canal cultural Encuentro (2007). Desde 2010, el gobierno impulsó la distribución de decodificadores de TV satelital con un paquete de 16 canales –incluyendo señales privadas– para ampliar la cobertura. Este enorme esfuerzo se acopla además a la transmisión abierta desde fines de 2009 de los partidos de las ligas nacionales de fútbol a través de Fútbol para todos, espacio que fue ampliamente aprovechado por el gobierno para hacer propaganda oficial.

El uso más asiduo de la cadena nacional para transmitir discursos oficiales fue otra estrategia muy utilizada, donde la presidenta desplegó sus dotes de oradora con un tono pedagógico. Se impulsó la creación de radios pertenecientes a las universidades públicas, y también a periódicos privados afines (Tiempo Argentino, Miradas al Sur, Crónica, Infobae, entre otros).³⁴³ Se componía así un nuevo mapa comunicacional. Además de ello, el gobierno fomentó la creación de nuevos museos y centros culturales, siendo el Museo del Bicentenario, probablemente, el más conocido. Esta lógica tendría

³⁴³ La pelea con el grupo Clarín indujo al gobierno a hacer acuerdos con otros grupos económicos de menor peso en el mercado comunicacional, como Vila-Manzano, Szpolski-Garfunkel, Pierrri y Cristóbal López. Por un mapa de los medios afines al gobierno consultar en: <http://blogdelmedio.com/shots/mapa-de-medios-oficialistas-aliados-al-gobierno-kirchnerista-argentina-2013/>

uno de sus puntos álgidos con la creación de la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional en 2014, a cargo del filósofo Ricardo Forster.

En 2010 se lanzó el programa Conectar Igualdad, que coordinó la distribución de equipos de computación en las escuelas del país, en un proyecto de amplio alcance para facilitar el acceso a nuevas tecnologías. Ese mismo año se aprobó la ley de Matrimonio igualitario (N° 26,618), permitiendo la unión legal entre personas del mismo sexo. En mayo de 2012 se aprobó la ley de Identidad de Género (N° 26,743), reconociendo la potestad de cada persona de determinar su condición de género, y reconociéndole los derechos de tratamiento médico correspondientes. Este conjunto de políticas resultó de gran peso en una disputa cultural de corte progresista.³⁴⁴

Debe enfatizarse además la continuidad de las políticas de DDHH. En este período es que se llevaron adelante la casi totalidad de los juicios por crímenes de lesa humanidad, además de haber desclasificado en febrero de 2012 el Informe Rattenbach. La ministra de Defensa Garré aplicó numerosas políticas dentro de las fuerzas armadas orientadas en este sentido, especialmente en materia de capacitación en DDHH e igualdad de género. En un mismo sentido se desempeñó a partir de diciembre de 2010 en la cartera de Seguridad, donde renovó sus políticas aplicadas ahora a fuerzas de seguridad (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria).³⁴⁵

Esto, como hemos señalado en anteriores capítulos, no significó un desmérito de ordenamientos represivos sobre los sectores populares. En este período, se realizaron múltiples reformas a la ley Antiterrorista, afianzando el alineamiento con la política de EUA. De la mano de la expansión de las fuerzas represivas con impunidad de acción, en enero de 2009, desapareció de una comisaría el joven Luciano Arruga, por negarse a delinquir para la policía. En noviembre de 2011, a raíz de denuncias de la abogada de DDHH (CeProDH) y militante del PTS, Myriam Bregman, salió a la luz el llamado Proyecto X, consistente en operaciones de inteligencia, seguimiento y vigilancia de militantes populares, para facilitar información a jueces en el procesamiento de los

³⁴⁴ Por negativa de la propia presidenta, no se pudo avanzar con una regulación del aborto. De hecho, el ya referido Código Civil de 2014 produce un retroceso en este sentido, reconociendo al feto como ser humano, en línea con las posturas de la Iglesia católica.

³⁴⁵ Más polémico fue su apoyo a la sanción de la ley antiterrorista.

mismos por causas políticas. Los datos de CORREPI (2013) señalan 241.5 muertes en promedio por año, guarismo sólo superado por la represión de 2001. En julio de 2013 se designó a César Milani como Jefe de Estado Mayor General del Ejército, quien aparecía denunciado en el informe Nunca Más de La Rioja.

De conjunto, entonces, durante el período se aplicó una amplia gama de políticas públicas destinadas a contener las tensiones de la fase del modo de desarrollo. A partir de la dificultad de elevar las retenciones al agro, y en el contexto de crisis mundial junto a agotamiento de las fuentes de expansión económica del período anterior, el Estado orientó múltiples estrategias destinadas a subsidiar el capital productivo industrial, reanudar el acceso a financiamiento externo y contener las demandas salariales. La tendencia a la recesión, sin estallar en una crisis, se expresó en diversas polémicas en torno a la regulación del PRE. Durante 2012, por ejemplo, el Ministerio de Economía impulsó la idea de bajar las tasas de interés para promover las inversiones, pero desde 2014 el BCRA logró imponer la idea de subirlas para atraer capitales. La inversión relativamente estancada del capital productivo ponía en peligro la continuidad del PRE.

En aras de sostener la legitimidad, la política social se expandió y se sucedió una importante serie de políticas ligadas a derechos civiles, políticos y sociales. Esto último tuvo un muy fuerte impacto simbólico, reafirmando la construcción política kirchnerista, pero, como se puede notar, no pone en cuestión ningún aspecto relevante del dominio dirigido por el capital industrial: la expansión de derechos sociales y económicos quizás estuviera reñida con el orden neoliberal, pero claramente no provocó problemas al nuevo orden político. El antagonismo del período, según los trazos del discurso oficial, se orienta a cuestionar la legitimidad de todo reclamo considerado particular, sin importar si proviene del BEP o las organizaciones sindicales, reafirmando al Estado como garante del bienestar colectivo.

3. Disputas políticas y patrón de dominación

Como explicamos en la sección anterior, frente al conflicto con la patronal agraria, el gobierno reanimó su estrategia discursiva como representante de la totalidad de la comunidad política, frente a un reclamo corporativo, particular. El efecto esperado de tal estrategia fue lograr un antagonismo que reafirmara dos polos de identidad: el legítimo

representante y quienes atentaban contra el orden. Veremos en la sección 3.2.1 que el capital agrario buscó realizar una operación similar, reafirmando su lugar como “el campo”. De conjunto, la sociedad entera se vio interpelada a tomar un lugar en ese espacio polarizado, lugares que no todas las fuerzas encontraron cómodos, pero que sin dudas produjo un reacomodamiento de posiciones al interior del patrón de dominación.

Entre los partidos políticos y las fuerzas de las clases populares, la tensión por alinearse con el gobierno o quedar con el campo inauguró un nuevo momento político. El episodio, lejos de restringirse a su ocurrencia, irradió la dinámica posterior. El gran problema era que el discurso de orientación liberal del agro no lograba interpelar a otros sectores. Los partidos políticos mayoritarios de oposición buscaron acercarse al agro, enfatizando sesgos republicanos y liberales. El kirchnerismo, afirmando su particularidad y radicalizando su programa, se volvió la fuerza mayoritaria, aunque al mismo tiempo abandonando ciertas pretensiones hegemónicas (Aboy Carlés, 2013). Es por ello que la mayoría de las fuerzas políticas se acercaron entre sí, combinando sus programas con elementos del propio gobierno. La excepción la constituyó el PRO, que funcionó como polo antagónico extremo, capitalizando electoralmente esa diferencia.

La fracción agraria del BEP ensayó así una salida parcial del orden político kirchnerista, que, sin ser capaz de cuestionar de conjunto su estructuración (no logra construir hegemonía), le permitió reducir lo que consideraba “excesos”. La fracción hegemónica (el capital industrial) se dividió y osciló entre sostener el orden actual, o aceptar una salida parcial. Los riesgos de división del BEP y los costos crecientes de la legitimación del orden político impulsaron un alejamiento real entre el gobierno y la fracción hegemónica, dejando de esta forma al primero como responsable del orden en cuestión. Esta separación sirvió para mistificar la relación entre gobernantes y clases dirigentes, presentando al gobierno como factótum de logros y males del orden.

Desde el punto de vista de la conformación de identidades políticas, esto favoreció la posibilidad de consolidar la identidad kirchnerista. Entre las clases populares, la reafirmación particular del kirchnerismo se observó con claridad en la aparición de fuerzas identificadas con el programa de gobierno, frente al quiebre de alianzas previas. Dentro del sindicalismo, la CGT de Moyano terminaría por acercarse a fuerzas políticas estructuradas a partir de los intereses del BEP, mientras que la CTA

opositora se acercó a los instrumentos electorales de la izquierda independiente. El trotskismo, como polo antagónico por izquierda, ganó presencia electoral. Veamos.

3.1. Representantes en el Estado

Durante todo el período aquí analizado, Cristina Fernández de Kirchner fungió como presidenta de la nación. Tras completar su primer mandato en 2011, fue reelegida hasta 2015 obteniendo el 54.11% de los votos válidos. Esto certificó la potencia electoral de la afirmación particularista, al constituir una clara mayoría de votantes y en el poder Legislativo. Además, sirvió de impulso a lo que la fuerza política entendió como la lógica del gobierno kirchnerista: “Vamos por todo”, dijo la presidenta en febrero de 2012 en Rosario. Haciendo a un lado el temor que generó esto en cierta prensa (La Nación, 27/2/13), la idea del “vamos por todo” en un contexto de mayoría legislativa y control del Ejecutivo, habilita a analizar este período como la expresión más acabada del kirchnerismo en tanto orden político, con sus logros, tensiones y contradicciones.³⁴⁶

Como ya explicamos, este período se inició con la impugnación de las fracciones desgarradas del BEP, tensión antagónica que dio especificó la lógica política subsiguiente. El gobierno buscó legitimarse como representante de la comunidad política total, habilitado por la Constitución y el voto popular, contra corporaciones con intereses particulares. En su estrategia de validación de este discurso, apeló a la defensa de los derechos democráticos de las mayorías populares, relegadas por anteriores gobiernos: se puso a sí mismo como el legítimo representante de las clases populares, frente a históricos actores que amenazaron la democracia y los derechos sociales. La tradición nacional-popular se afirmó como sostén para el gobierno, que la explotó radicalizando sus políticas de ampliación de derechos (ver sección 2). Además, permitió la renovación de funcionarios estatales, menos ligados a las diferentes fracciones del BEP. Esta separación entre gobierno y fracciones del BEP —expresada en políticas públicas, en funcionarios y en el discurso— facilitó la constitución de una identidad política novedosa, que implicó a parte de las clases populares —y del BEP.

³⁴⁶ Debido a que transcurrió durante estos años el proceso, algunos medios y militantes prefieren hablar de “cristinismo” en lugar de kirchnerismo. Optamos por dar continuidad a la segunda nominación.

Pero no sólo las apelaciones del gobierno fueron fructíferas en movilizar apoyos, sino también las del capital agrario, generando dos polos de atracción respecto de los cuales gravitar. Algunos partidos (PRO, ARI-CC, UCR) intentaron rápidamente ligarse al capital y sus reclamos, mientras que el gobierno buscaba posicionarse como única opción progresista. Esto puso en movimiento al conjunto de los representantes políticos. El reclamo del agro era fácilmente leído desde el liberalismo (no intervención del Estado) y desde el republicanismo (división de poderes), por lo que fueron las principales corrientes político-ideológicas desde las que los partidos se apoyaron para tratar de representar la demanda y expandir el horizonte de interpelación. Como espejo, esto llevó al gobierno a enfatizar su componente nacional-popular como fuente democrática (Fair, 2009a). El éxito electoral de la opción oficial, llevó a los partidos de oposición a buscar variantes que combinaran la crítica liberal-republicana con continuidades progresistas, pero también a enfatizar su diferencia (en especial, en el caso del PRO).

Dentro del cuerpo de funcionarios, la primera baja del conflicto fue la del ministro de Economía Martín Lousteau en abril de 2008. A pesar de haber defendido la propuesta inicial del gobierno (negando cambios), Lousteau terminó alegando presión desde la presidencia para defender un proyecto con el que no estaba de acuerdo.³⁴⁷ La conducción del Ministerio de Economía tendría un devenir con altibajos desde allí. Tras un año en manos de un desconocido funcionario de carrera, Carlos Fernández, asumió la cartera Amado Boudou, ex militante de la Ucedé formado en el CEMA, que terminaría acompañando la fórmula de 2011 como vicepresidente.³⁴⁸ Boudou fue responsable de anunciar la “Hoja de ruta” de resolución del frente externo, que describimos antes (sección 2). Su reemplazo fue Hernán Lorenzino, otro funcionario proveniente de la gestión en la provincia de Buenos Aires, que se abocaría de lleno a resolver el frente externo, en particular, el problema de la deuda. La suya fue una figura que no resaltaría por su presencia, pues, de hecho, sería opacado por el Secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo, nombrado al mismo tiempo que el ministro, Axel

³⁴⁷ Llamativamente, las entidades del agro ya habían tenido un conflicto similar con él en agosto de 2005 cuando era ministro de la producción de la provincia de Buenos Aires.

³⁴⁸ Desde 2013 estuvo envuelto en un escándalo de corrupción ligado a la emisión de papel moneda, que al momento de escribir esta tesis aún no está resuelto en los tribunales.

Kicillof.³⁴⁹ Kicillof, quien provenía de la gestión estatal de Aerolíneas y como integrante por el Estado en el directorio de SIDERAR, resultaría un personaje de mucha mayor proyección, constituyéndose a fines de 2013 en el primer ministro de perfil ciertamente heterodoxo y con una marcada presencia pública.³⁵⁰

De conjunto, se puede señalar que el otrora poderoso Ministerio de Economía dejó de estar en manos de representantes de alguna fracción del capital, como ocurría antes.³⁵¹ En lo que refiere a la propia estructura del Ministerio, como ya señalamos, el principal cambio fue la creciente división de tareas en otros 5 ministerios. La impugnación del capital agrario al orden político requería respuestas de diverso tipo, incluyendo una dilución de la representación dominante del capital industrial (como tenía con Lavagna, Peirano o Miceli). Por eso los sucesivos ministros tuvieron un perfil favorable al capital de conjunto. La excepción la constituye Kicillof, cuya presencia fue desde el inicio –por su formación y discurso– un intento por disciplinar al capital de conjunto. Incluso al querer *ordenar* la acumulación a través de regulaciones, cumplió con la equidistancia respecto de las fracciones del BEP de sus antecesores. Su actuación intentó reformular la coherencia interna de las políticas públicas, a partir de los significantes de “sintonía fina” y “crecimiento con inclusión”. Si tomamos el inicio de 2014 como una muestra de ello, la política se orientó al ajuste interno –devaluación, aumento de tarifas, control de las paritarias–, y la resolución del frente externo –acuerdos comerciales con potencias como Rusia (2015) y China (2014), arreglos de pago de deudas financieras o en litigio, a las que se suma la vital promoción de políticas sociales compensatorias, orientadas a impulsar el consumo.

³⁴⁹ La escasa capacidad de Lorenzino de intervenir en el espacio público se hizo patente en abril de 2013, cuando se hizo público un documental donde se le preguntaba por la inflación real del país y el ministro contestó “No sé, no sé” agregando un lacónico “Me quiero ir” (La Nación, 25/4/13).

³⁵⁰ El joven proveniente de la academia era conocido por sus trabajos de corte keynesiano-estructuralista.

³⁵¹ Quizás la mención como “representantes directos” resuene estridente en este contexto, pero es útil para marcar el contraste. Sin demeritar un funcionario a mero mandatario, es posible postular que las trayectorias laborales y de formación ciertamente condicionan las redes de contactos y las ideas en torno a las cuales se ejerce el cargo público más tarde (cuestión que desarrolló en detalle Millband, ver sección 1.2.1 del capítulo 1 y sección 4 del capítulo 2). Incluso más, estas afinidades suelen ser elogiadas o criticadas –según el caso– por las propias organizaciones del capital. Así, resulta difícil discutir la asociación de López Murphy con las demandas de la banca internacional o de Lavagna con la industria. Frente a esas afinidades, la proyección de funcionarios de carrera o provenientes del ámbito académico, implica una reducción sensible de la influencia directa del BEP sobre el aparato del Estado.

El conflicto con el agro impactó también en la jefatura de gabinete, al renunciar Alberto Fernández, quien tenía buen diálogo con SRA. Su reemplazo fue Sergio Massa, también ex militante de la UCeDé y funcionario del menemismo y del duhaldismo.³⁵² Massa había sido parte de las listas a diputados del FpV en 2005, aunque no asumió el cargo, quedándose en la ANSES hasta ser elegido intendente de Tigre en 2007. Tras el paso por la jefatura de gabinete entre julio de 2008 y julio de 2009, volvería a la intendencia, desde donde proyectaría su propia fuerza política de oposición, como veremos más adelante. Fue reemplazado por Aníbal Fernández, quien fuera ministro del Interior con Kirchner y luego de Justicia con Cristina Fernández. Su sucesor fue Juan Abal Medina, quien fue reemplazado en noviembre de 2013 por Jorge Capitanich. Todos ellos formaban parte de la dirigencia propia del kirchnerismo, y expresaron un afianzamiento sobre la propia fuerza en la tarea de coordinación de Ministerios, lo que parece lógico en el marco descrito de creciente complejidad de la intervención del Estado y reafirmación particular.

Los efectos de la crisis política de 2008 estuvieron lejos de terminar en los cambios descritos de la estructura del gobierno. El hecho de que la resolución haya provenido del voto “no positivo” del vicepresidente Cobos, del radicalismo, expresó con palmaria claridad el final de la estrategia de transversalidad. Si bien lo cierto es que esta solución le dio al gobierno una salida digna al largo conflicto, pues quien cedía a la presión era un referente de otro partido, por otro lado expresó las limitaciones de un marco de alianzas basado en la productividad electoral más que en la afinidad ideológica. Esto implicó un cambio de prioridades para el gobierno, que lo llevaría a priorizar una nueva estrategia, que combinaba la construcción de una fuerza política propia con el vuelco hacia el PJ: en este sentido es que podemos afirmar que finaliza la transversalidad como propuesta, a pesar de que hayan persistido diversas alianzas. El kirchnerismo modificó al conjunto del sistema político, como veremos, desestabilizando la representación partidaria previa.

Una vez que Cristina Fernández asumió, Kirchner se había orientado a normalizar el PJ, y aprovechó la presidencia del partido para expresar el apoyo al

³⁵² Massa militaba en la Juventud Liberal, y dio sus pasos dentro del peronismo gracias al apoyo de Luis Barrionuevo. Fue asesor de Ramón Ortega durante su paso por el Ministerio de Desarrollo Social. Duhalde lo nombró director de la ANSES, cargo que mantuvo hasta pasar a la jefatura de gabinete.

gobierno durante el conflicto de 2008. Esto no hizo sino tensar aún más las relaciones con el PF, que fue una de las fuerzas que lideró la oposición a la resolución N° 125 dentro del Congreso, con Rodríguez Saá a la cabeza. Cobró así nuevos bríos la disputa por definir cuáles eran los valores e ideas que defendía el peronismo, donde – esquemáticamente- el PF enfatizaría los rasgos de orden frente al carácter popular del kirchnerismo.

Los esfuerzos de Kirchner por mantener unido al PJ entraban en conflicto tanto con los dirigentes peronistas con proyectos propios, como con las fuerzas no peronistas del FpV. Como ya comentamos, BdP-Libres del Sur rompió con el gobierno a fines de 2008, expresando su descontento con el vuelco hacia el pejetismo. El arco del radicalismo que apoyaba al gobierno se dividió entre quienes volvieron a las filas de la UCR opositora y quienes se mantuvieron como “radicales K”. Entre estos últimos, se conformó el Partido de la Concertación – FORJA, en alusión a la histórica agrupación radical que fungió como fuente ideológica para el peronismo. Esta fuerza, con presencia en la mayor parte de las provincias, tuvo por figura más destacada a Gustavo López, quien asumió en julio de 2008 como Subsecretario General de la Presidencia.³⁵³

Pero a la vez que viejas alianzas se quebraban, otras nuevas también surgían. A principios de 2009, aparece en la escena nacional el Frente Nuevo Encuentro, que reúne al partido Encuentro por la Democracia y la Equidad (Martín Sabatella), SI, el PC, Movimiento Libres del Sur y el Instrumento Electoral por la Unidad Popular (estos dos últimos se irían del frente a pocos meses de su creación). El perfil de este agrupamiento, en el marco de la *tensión restrictiva* (Varesi, 2013) de la polarización entre gobierno y oposición de centro-derecha, sería el de una fuerza independiente que apoyaba al gobierno. Una suerte de kirchnerismo por fuera del FpV. Esta idea atrajo a diferentes fuerzas con presencia en el Congreso, entre los que se destacan el Partido Solidario (una escisión del PC, liderada por Carlos Heller) y la línea interna del PS de Ariel Basteiro y Jorge Rivas, que lanzaron en 2011 el partido Unidad Socialista para la Victoria

³⁵³ El partido fue fundado por la diputada Silvia Vásquez, de quien se aduce la autoría intelectual de la ley de medios (Perfil, 5/6/13). El impulso de la ley fue producto de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, creada en 2004 a propuesta del Foro Argentino de Radios Comunitarias.

(Página/12, 8/8/11).³⁵⁴ Sabbatella, principal referente de Nuevo Encuentro (ex militante del PC e integrante de la Alianza) fue designado al frente del AFSCA en 2012.³⁵⁵ En esta misma tendencia se puede señalar la formación del Movimiento Integrador Latinoamericano de Extracción Social (MILES), partido político lanzado por el líder de la FTV Luis D'Elía a principio de 2011, con menor presencia nacional. El PCCE y el Frente Grande se mantuvieron aliados al kirchnerismo.

En el marco de este énfasis identitario en la propia fuerza, La C mpora gan  presencia, en los espacios del Estado y en la agenda medi tica, haciendo a sus dirigentes figuras conocidas y pol micas.³⁵⁶ El perfil juvenil de la agrupaci n permit  reafirmar la promesa de renovaci n de la pol tica que estaba en el horizonte desde 2001, y funcionaba como apelaci n a una generaci n que se incorporaba a la militancia durante esta etapa. La presencia “desacartonada” de Boudou o Kicillof apuntaron en la misma direcci n.³⁵⁷ De hecho, la agrupaci n, que no ten a mayor relevancia en la escena nacional, recib  un inusitado impulso a partir del conflicto del campo, componiendo una parte de las fuerzas movilizadas en apoyo al gobierno, en actos de fuerte contenido simb lico.

Adem s de La C mpora, que ya exist a y era la fuerza propia de mayor presencia, aparecen nuevas agrupaciones kirchneristas en este per odo. En julio de 2010 hizo su aparici n la Corriente de Liberaci n Nacional (Kolina), creada desde el Ministerio de Desarrollo Social por parte de Alicia Kirchner. Ese mismo a o se fund  la Corriente Peronista Descamisados, que lanz  en 2011 un frente juvenil, la JP Descamisados “para profundizar los cambios”. Esta corriente surg a de la unificaci n de

³⁵⁴ Tambi n atrajo a nuevas figuras a la pol tica, como el caso de Hugo Ca n, ex fiscal federal y presidente de la Comisi n Provincial por la Memoria, un muy importante referente del movimiento de los DDHH.

³⁵⁵ La Autoridad Federal de Servicios de Comunicaci n Audiovisual (AFSCA) se aboca a vigilar el cumplimiento de la ley de medios. Su designaci n fue apoyada por un arco amplio de referentes sociales.

³⁵⁶ Nos referimos a Jos  Ottavis, Andr s Larroque (ambos diputados por Buenos Aires), Juan Cabandi  (legislador en la Ciudad Aut noma de Buenos Aires), Mariano Recalde (director de Aerol neas Argentinas), y al propio hijo de Kirchner y Fern ndez, M ximo Kirchner.

³⁵⁷ M s all  de la cuesti n generacional y las propias inclinaciones personales, este perfil fue explotado por la fuerza pol tica kirchnerista como estrategia. El fuerte sesgo juvenil de la agrupaci n fue indagado por V zquez y Vommaro (2012). Su investigaci n muestra que, salvo por los cuadros dirigentes, hay una notable ausencia de militancia previa entre sus simpatizantes. Para la mayor a, se trata de la primera experiencia de incorporaci n a la pol tica, impulsada a partir del apoyo al gobierno por actitudes o pol ticas que se encuentran significativas, entre las cuales se resalta el conflicto con el campo, la ley de medios, la ley de matrimonio igualitario, entre otras. El gobierno se presenta como encarnaci n significativa de la cadena de equivalentes formada por demandas atendidas y *resueltas* (Orsini, 2007)

dos espacios preexistentes, la Corriente Peronista Germán Abdala y el Movimiento Peronista Revolucionario. Ese mismo año apareció, de la mano del ministro de Trabajo Carlos Tomada, la agrupación Jóvenes de la Gestión Pública, y, por impulso del entonces ministro de Economía Boudou, La graN macrKo, una corriente de estudiantes y profesionales de ciencias económicas (ya contaba con el antecedente de la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina, AEDA, en funciones desde 2008). Como se puede apreciar, existió un esfuerzo explícito y deliberado por crear espacios para canalizar la militancia desde el Estado, con un carácter centralizado y vertical.

El desborde de militantes respecto de los espacios de decisión sesgó la participación hacia la presencia en el espacio público con los únicos objetivos de apoyo explícito al gobierno y reafirmación identitaria,³⁵⁸ y las actividades de “compromiso social”.³⁵⁹ Si bien la alusión a la “juventud maravillosa” de la JP de los setenta fue explícita y permanente (expresada en consignas y cantos), a diferencia de aquella, que chocaba y disputaba el sentido de la construcción política, incluso con el propio Perón, las agrupaciones oficialistas kirchneristas asumieron como límite incuestionable el programa del gobierno.³⁶⁰ La alusión a la juventud de las bases como renovación de la política y como referencia a la lucha de los setenta fue un fuerte componente de la *mística* kirchnerista, la apelación identitaria a través de referencias simbólicas.

Debe referirse en este punto, que la militancia kirchnerista tuvo un muy fuerte impulso tras el súbito fallecimiento de Néstor Kirchner en octubre de 2010. El impacto emocional de este evento fue fuerte, leído como la suerte de un dirigente que dejaba la

³⁵⁸ Muchas de las apariciones públicas de estas agrupaciones se agotaron en el canto de consignas a favor del gobierno, sin demandas ni reclamos, asumiendo explícitamente un lugar subordinado, disponible para ser movilizado. La relación con la líder del movimiento, además, apelaron a un vínculo emocional, como puede leerse en la consigna tantas veces coreada: “Cristina, Cristina, Cristina corazón // acá tenés los pibes para la liberación”.

³⁵⁹ Nos referimos, por ejemplo, a la organización de festivales, ayuda en comedores populares, o frente a catástrofes (como la inundación de La Plata en 2013). Algunas de estas actividades fueron impulsadas a través de programas de subsidios nacionales de Voluntariado, que abastecían de materiales.

³⁶⁰ Juan Gómez Parodi, de la JP Descamisados, dijo “Hay muchos menores de veinticinco, que descubrieron la política de la mano de Néstor y Cristina”, lo que fue explicado por otra referente de la Corriente Peronista Nacional, Lorena Pokoik: “Algunos empezamos a militar en los noventa, en una época de resistencia, de sueños y metas chiquitas, en la que teníamos que hacer grandes esfuerzos para contenernos entre compañeros, para no desmoralizarnos. A partir de 2003 recuperamos la esperanza, recuperamos la política y recuperamos el orgullo de nuestra identidad peronista. Hoy el desafío es otro: no se trata de resistir sino de *construir, de acompañar, de seguir creciendo*” (Parlamentario.com, 29/4/11, *italicas propias*). La graN maKro, en su sitio oficial (www.granmakro.com.ar), señala que tiene por “objetivo principal *estudiar, conceptualizar y difundir los lineamientos estratégicos del modelo económico* que se desarrolla en nuestro país desde el 25 de mayo de 2003”.

vida en el compromiso político, pues fallecía relativamente joven (60 años) debido al stress. El funeral del ex presidente resultó una enorme manifestación pública de apoyo, que se transfirió a la presidenta en lo que Argumedo -en entrevista para esta tesis- señaló como “solidaridad en el padecimiento”: para muchos, era el momento de mostrar el apoyo explícito al proyecto ahora liderado por Cristina Fernández, que de otra forma “quedaba sola”. Que este evento, naturalmente por completo fortuito, tuviera semejante efecto político no es fruto de la casualidad, sino que resultó de la lectura retroactiva de los logros del gobierno como parte de las demandas populares.

El peso de estas agrupaciones oficialistas, sin embargo, generó algunas tensiones con otros componentes del kirchnerismo. Concretamente, el sindicalismo se vio desplazado por esta nueva fuerza, en lo que consideró una falta de reconocimiento al apoyo brindado. El crecimiento de estas agrupaciones en las listas oficiales, frente al estancamiento de los representantes sindicales, fue cuestionado duramente por Moyano antes de alejarse definitivamente del gobierno en febrero de 2012.³⁶¹ Este alejamiento estaba motivado, además de las propias apetencias personales del dirigente, por las presiones de base en torno al creciente deterioro de los salarios reales, cuestionado desde la presidencia como un privilegio frente a las necesidades de los “sectores vulnerables” (Inda, 2012; E. López y Cantamutto, 2013). Para evitar una dispersión creciente de los apoyos, se lanzó Unidos y Organizados en abril de ese año, con presencia de La Cámpora, MEvita, el Frente Transversal y Nuevo Encuentro, entre otros. Como continuidad de la transversalidad, al interior de este espacio se reproducirían las tensiones entre fuerzas peronistas y no peronistas del kirchnerismo.³⁶² Mientras las agrupaciones creadas por el kirchnerismo jugaron un doble rol entre este espacio y el PJ, las fuerzas no peronistas estaban restringidas a disputar desde Unidos y Organizados su lugar en el FpV: entre ellas, FORJA, Convocatoria Popular, PC, PCCE, PS, MILES, PH, SI.

El kirchnerismo se afianzaba así en términos de identidad, más allá de acuerdos electorales. Frente al discurso liberal-republicano, el gobierno buscó enfatizar su

³⁶¹ Incluso el sindicalismo que continuó siendo oficialista se resintió por esta presencia, en lo que pareció revivir la tensión de los setenta con Montoneros. Así fue referido en entrevista por Daniel López.

³⁶² Así apareció señalado en las entrevistas realizadas para esta tesis a Cañón, Cornejo y G. López, militantes de diversas fuerzas del kirchnerismo.

componente nacional-popular como fuente de democracia sustantiva. Frente al estancamiento de las mejoras estructurales económicas, el gobierno orientó su accionar a políticas de reconocimiento de derechos de fuerte impacto simbólico y político (sección 2). Así, por ejemplo, diversas leyes fueron leídas como “democratizaciones” sustanciales: de la comunicación (ley de medios), de los partidos políticos (reforma política), de la justicia (intento de reforma del Consejo de la Magistratura), etc.³⁶³ La idea de que esta democratización involucraba el cumplimiento de derechos fundamentales se expresó con claridad en la AUH.³⁶⁴ Esta expansión de derechos, sin embargo, enfrentaría resistencias, que eran propias de las corporaciones que ponían trabas a la democracia popular.³⁶⁵ Por su parte, el componente nacional apareció con fuerza en las negociaciones de la deuda (en particular, con la consigna “Patria o buitres”) y en la compra de participación en YPF.

Las dificultades de construir un espacio de centroizquierda o progresista diferenciado del oficialismo explica el derrotero de PSur y de Libres del Sur. Apoyar muchas de las iniciativas del gobierno por considerarlas avances políticos (por ejemplo, la ley de medios), dificultaba la distinción programática de PSur, a pesar de su perfil crítico. Libres del Sur, tras formar parte del gobierno, buscó socios políticos que le permitieran continuar su crecimiento. En ambos casos, no sin idas y vueltas, el partido que generó más atracción fue el PS unificado, que había logrado la gobernación de Santa Fe en 2007 gracias a una amplia coalición electoral, el Frente Progresista, Cívico y Social. Esta alianza fue un antecedente del camino a seguir, que incluía a sectores salidos del radicalismo, como el GEN y el ARI. La delimitación ideológica de esta oposición perdía claridad a medida que incorporaba socios para mejorar su caudal electoral.

Es que, de hecho, hacia afuera del kirchnerismo, la mayor parte de las fuerzas políticas se inclinaron hacia la centroderecha, para lograr una distinción de la identidad

³⁶³ La presidenta leyó como “democratizaciones” a la Reforma política en el acto en ANSES, 9/11/09; y a la reforma de la Justicia en el acto en Museo del Bicentenario, 7/4/13.

³⁶⁴ Alicia Kirchner explicó que la política social del gobierno se basaba en la necesidad de abandonar la figura de “beneficiario” por la de titular de derechos (Página/12, 22/2/09).

³⁶⁵ Por ejemplo, respecto de la ley de medios, la presidenta aseguró que no había que confundir “la libertad de prensa con la libertad de los propietarios de la prensa”. Estos propietarios eran la amenaza real a la democracia y a la república, pues representaban “un suprapoder en la Argentina, lo que significa que por sobre los poderes instituidos por la Constitución hay otros poderes que tienen suficiente fuerza para imponer decisiones en cualquiera de los tres poderes a partir de la presión” (Página/12, 28/8/09).

del oficialismo. Enfatizando la interpretación liberal del populismo, como un gobierno autoritario, irrespetuoso de las instituciones de la democracia y tendencialmente corrupto, se fue gestando la convergencia señalada en el párrafo anterior. Recordamos que tanto la UCR como el ARI habían tenido un fuerte proceso de definición hacia los componentes liberales de su tradición “pan-radical” (sección 3.1 del capítulo 5). Este último partido, tras la salida de otros referentes, quedó atrapado en el personalismo excluyente de su líder, Elisa Carrió, quien impulsó en 2009 la constitución como partido de la alianza electoral creada en 2007, la Coalición Cívica (CC), desplazando simbólicamente su previa construcción, el ARI. Más allá del PS, el radicalismo era el socio disponible con caudal electoral propio.

Así, rumbo a las legislativas de 2009, se formó el Acuerdo Cívico y Social, entre el PS y el pan-radicalismo: la propia UCR, el ARI y el GEN. En junio de 2011, para las presidenciales, hizo su aparición el Frente Amplio Progresista (FAP), compuesto por el PS, Libres del Sur y el GEN. En esas elecciones, obtuvo el segundo lugar, con el 17% de los votos válidos, constituyéndose en la principal fuerza de oposición. Es de notar que las tres primeras fuerzas del FAP habían participado de la transversalidad kirchnerista en distintos momentos, por lo que puede pensarse esta fuerza como una diferencia matizada del oficialismo, no antagónica. La situación que dejó afuera del FAP a PSur fue algo extraña, pero que no impidió retomar el diálogo más adelante. De hecho, en junio de 2013, a raíz de las elecciones en Capital Federal se formó el Frente Amplio UNEN, que reunió al PSur, Movimiento Libres del Sur, PS, PSA, GEN, CC-ARI y la UCR, bajo un perfil que intentaba perfilarse como de centro-izquierda. Sin embargo, las fuertes discrepancias ideológico-políticas de sus partidos y dirigentes fue una constante evidente. La inteligencia del FAUNEN fue aprovechar el mecanismo instituido de internas abiertas para capitalizar electoralmente esas diferencias como un espacio de diálogo y consenso. Entre las distintas fuerzas que lo componían, lograron posicionarse en esas elecciones como segunda fuerza a nivel nacional.

Si la disputa al interior de FAUNEN incluyó tendencias de centroizquierda y de centroderecha, buscando definiciones programáticas más allá de los mecanismos de elección, dentro del “pan-justicialismo” la inclinación tuvo un sentido más claro hacia la derecha del espectro ideológico. En la disputa por la tradición política del peronismo

(Mocca, 2014), en las elecciones legislativas de 2009, el PF llevó como primer candidato a diputados por la provincia de Buenos Aires a Francisco de Narváez, fruto de una alianza con el PRO y el recién creado (2008) partido Unión Celeste y Blanco. La campaña se basó en la polarización con el gobierno con un programa de “mano dura” frente a la inseguridad.³⁶⁶

Las elecciones de 2009, de hecho, hicieron sufrir un retroceso al kirchnerismo dentro del Congreso, que bajó de 116 diputados propios a 87. Resulta llamativo que el FpV quedara segundo en la provincia de Buenos Aires llevando a Kirchner como primer candidato, lo que magnifica el retroceso de esta elección. Este desafío de gobernar sin mayoría propia en el Poder Legislativo no desincentivó al oficialismo. De hecho, como vimos en la sección anterior, una gran parte de las leyes más interesantes del período, y que mayor legitimidad social le permitieron construir, fueron aprobadas en este período 2009-2011, es decir, negociando con la oposición. La oposición no antagónica de las fuerzas que luego constituirían FAUNEN ayudó en esta tarea, así como las dificultades del PF para construir un liderazgo unificado. El PF se presentaría dividido en las presidenciales de 2011, con dos candidatos: Alberto Rodríguez Saá (7.96% de los votos válidos) y Eduardo Duhalde (5.86%). La UCR aún no se había integrado a FAUNEN, y presentó a Ricardo Alfonsín (hijo del ex presidente) como candidato, explotando el sesgo liberal del partido, y quedando como tercera fuerza, detrás del FAP.³⁶⁷

Resulta de mayor importancia apuntar aquí que la estrategia de apoyarse sobre la propia fuerza y buscar acuerdos parlamentarios por fuera del FpV para legislar resultó para el kirchnerismo un rotundo éxito. Tras el embate liberal-conservador que acompañó el conflicto con el agro, se produjo una “radicalización progresista” dentro del kirchnerismo (Varesi, 2013), que impactó al conjunto de los partidos. El éxito de esta estrategia se pudo ver en las presidenciales de 2011, que ganó Cristina Fernández de Kirchner con el 54.11% de los votos válidos.³⁶⁸ Ahora bien, ser mayoría no implicaba construir hegemonía, pues, como vimos, la estrategia fue apoyarse en la particularidad

³⁶⁶ En 2013, de Narváez explotaría esta estrategia con un simple slogan de campaña que refería a la presidenta como polo de poder centralizado y discrecional frente al individuo: “Ella o vos”.

³⁶⁷ Igual que como ocurriera con el FREPASO en las elecciones de 1995, esto motivó a la UCR a incorporarse a la alianza. La diferencia está en que los componentes socialdemócratas del radicalismo ya estaban en el FAP antes del ingreso de la UCR al acuerdo.

³⁶⁸ La abstención, voto nulo y blanco llegaron al 24.04% del electorado, niveles equivalentes a los de la década de los noventa.

propia, que mostraba ser electoralmente más potente (y más seguro para gobernar). El gobierno se proyectó como una fuerza política en sí misma, ya no una mera alianza. La ambivalencia entre sus fuentes peronistas y no peronistas fue constitutiva, atravesada por la apelación nacional popular transversal a estos orígenes. Legítimamente puede decirse por ello que el kirchnerismo apareció en este período como una identidad política.

Dado que el kirchnerismo se convertía en la fuerza política mayoritaria, obligó a los demás partidos a revisar sus estrategias y, en última instancia, sus propias identidades. Como dijimos, la segunda fuerza en esas elecciones de 2011 tenía un sesgo de centroizquierda e importantes componentes de ex integrantes de la transversalidad: la votación se expresaba en un claro sentido favorable a los cambios dispuestos. Sin embargo, al mismo tiempo, otra parte de la oposición propuso un discurso que combinaba elementos republicanos y liberales para criticar el aplastante predominio del oficialismo, que fungía como referencia de una mayoría sin respeto por las minorías. Recordemos que el discurso oficial estructurado a partir del conflicto con el agro criticaba a las partes (corporaciones) que ponían en riesgo la comunidad política; en este sentido, el discurso de avasallamiento de las minorías era el reverso directo de la interpretación oficial. La minoría (el agro) trataba de ser aplastada por una mayoría (el gobierno), abriendo el riesgo del totalitarismo. Esto abría las posibilidades de buscar otras “minorías” expuestas al supuesto riesgo totalitario, ampliando el horizonte de la interpelación del agro³⁶⁹. Estos discursos, como ya señalamos, fueron tomados por algunos partidos (ARI-CC, PRO, UCR centralmente) para buscar representar a esta fracción del capital, y completar su intento de expansión hegemónica hacia el resto del pueblo argentino.

Habría dos grandes ejes de conflicto estructurados desde el liberalismo, respecto de los derechos de propiedad y de libertad de expresión. Los primeros estarían cuestionados por los supuestos avances del Estado sobre la propiedad privada, a partir de las nacionalizaciones de las AFJP y Aerolíneas (que luego sería reforzado con el caso de YPF). Pero incluso los intentos de fiscalidad progresiva (retenciones al agro) parecían cuestionar la libre disposición privada de la propiedad. Esta variante del discurso cobró

³⁶⁹ No faltaron excesos en este sentido, como tildar al gobierno de “nazismo”, como hizo el gobernador de Córdoba, De la Sota (La Nación, 27/2/13).

más fuerza gracias a la posibilidad de interpelar a los asalariados afectados por el pago de impuesto a las ganancias, buscando una equivalencia entre la tributación sobre la renta y el salario. Cuando, a partir de 2012, se iniciaron los controles de cambios, el liberalismo interpretó estas medidas como el control estatal de la economía privada, una alteración del libre juego del mercado, definitivamente ilegítima. El sesgo de esta interpretación se encuentra claramente asociado a intereses del capital por la libre movilidad y disposición de sus recursos, y emergía, en tal sentido, a partir de los reclamos del agro de 2008. La consigna de “Vamos por todo” fue leída en este sentido, acusando al gobierno de orientarse en una expansión estatista sobre la economía.

Respecto de los derechos de expresión y libertad de prensa, se trata del argumento estructurado a partir de la disputa con el multimedios Clarín, escenificado a partir del debate por la ley de medios. Según este último, el gobierno buscaba silenciar las opiniones críticas y avanzar en el control de la comunicación, en un sesgo de tipo totalitario. El gobierno, por su parte, defendía el proyecto como una forma de quebrar un monopolio comunicacional³⁷⁰ y recuperar la demanda democrática popular de pluralidad de voces.³⁷¹ A pesar de tratarse de interpretación evidentemente sesgada por el interés material del grupo económico en cuestión (la ley fue resultado de la presión de dos décadas de medios comunitarios), este discurso liberal de falta de respeto de la libertad de expresión apareció en el escenario y fue retomado por varios partidos políticos.

Justamente, este supuesto totalitarismo del gobierno (que generalizó la errónea idea de hegemonía como predominio) por falta de respeto a derechos liberales se

³⁷⁰ Llamativamente, esto recupera los elementos liberales de la tradición del socialismo argentino de principios de siglo (la competencia de mercado como instrumento para mejorar la situación de vida de los asalariados). Esta recuperación de la tradición socialdemócrata como complemento del peronismo se hacía explícita, por ejemplo, en el lanzamiento de la AUH, cuando se retoma la iniciativa del FRENAP: “Porque entrar en discusiones entre peronistas y antiperonistas, yo me acuerdo cuando era chica, yo en cada tenía uno, era mi papá, que decía: “¿por qué, si el peronismo no hizo nada? Fueron las viejas leyes de los socialistas”, lo cual es rigurosamente cierto, las viejas leyes eran idearios, convicciones e historia del Partido Socialista, pero lo cierto también es que el que pudo hacerlas cumplir, en la República Argentina, fue el peronismo, y creo que esto no le resta méritos a ninguno de los dos. Al contrario, a unos por haberse preocupados desde siempre y a otros por haber encontrado los instrumentos y las formas para poder hacerlo” (Discurso Fernández en ANSES, 9/11/09).

³⁷¹ Frente a este bloqueo corporativo, se erigía la demanda democrática popular. En palabras de Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora: “Gobierno tras gobierno el pueblo esperó la democratización de la comunicación... y esperó en vano. Siempre hubo «mayores» intereses que la fueron dejando de lado. Y la vergüenza de un país con 25 años de democracia y la comunicación reglamentada por leyes autoritarias de origen represivo era cuestión de cada día. Por eso hoy saludamos la posibilidad de abrir el juego a las opiniones y poder debatir la propuesta que fuera presentada por Cristina Fernández de Kirchner, fruto de ese trabajo colectivo”.

conjugó en el discurso opositor con las corrientes republicana y constitucionalista. El origen de tal avasallamiento de libertades estaría sostenido en una supuesta ausencia de división de poderes al interior del Estado. Todas aquellas medidas en las que los poderes públicos coinciden en un mismo sentido fueron leídas como un sojuzgamiento del Ejecutivo sobre el conjunto del Estado.³⁷² La crítica al hiperpresidencialismo del populismo, proponiendo una lectura que exacerba el componente refundacional que fue también leído como una búsqueda de poder personal de los líderes (Fair, 2009a).

El intento de reformar el Consejo de la Magistratura en 2013 (decreto 577/13), para votar candidatos en las internas abiertas, fue leído como la convalidación de que el gobierno trataba de controlar al Poder Judicial. El hecho de tener varios funcionarios procesados o amenazados de procesamiento aparecía como explicación del por qué se intentaba controlar a la Justicia. En este sentido, este supuesto atropello se vinculó con la lectura republicana centrada en problemas de ética y justicia pública: la corrupción como el deterioro de la ciudadanía por el ejercicio continuado del poder. Los mayores escándalos en este sentido fueron la tragedia ferroviaria de Once, donde murieron 51 personas, la aparente asociación ilícita del vicepresidente Amado Boudou, y el enriquecimiento de empresarios asociados al gobierno (Tagina y Varetto, 2013).

Sin embargo, el discurso que atacaba la supuesta concentración de poder por parte del gobierno, no lograban una buena presencia electoral.³⁷³ Esto orientó a buscar acuerdos con partidos cuyo discurso ocupara un lugar en el espectro ideológico comparable al oficialismo. La UCR y el ARI se incorporaron a lo que sería UNEN, mientras parte del PF encontró su respuesta en la aparición del Frente Renovador en junio de 2013, bajo el liderazgo de Massa. El intendente de Tigre, con militancia juvenil en el liberalismo, había participado en diferentes cargos de gobiernos peronistas y del propio kirchnerismo. Massa buscó orientar un discurso de reconocimiento de los logros

³⁷² Por ejemplo, la aprobación de la ley de medios argentina en el Congreso y su validación en la Corte Suprema fue interpretada por el multimedio Clarín bajo este argumento. La aplicación desigual de esta ley, según las cercanías políticas de los dueños, permitió a Clarín homologar su reclamo de Clarín con una denuncia a la corrupción (Aboy Carlés, 2014).

³⁷³ La escasa productividad electoral de la denuncia liberal-republicana al populismo quedaba patentada en el derrotero de Elisa Carrió. Tras haber quedado segunda en las elecciones de 2007, Carrió apenas logró un 1.82% de los votos en 2011. De modo memorable e irresponsable, la referente de la CC-ARI declaró que a partir de entonces lideraría “la resistencia al régimen de Cristina Kirchner”, comparando al gobierno electo con un régimen totalitario (Infobae, 25/10/11).

con crítica de los excesos, tratando de explotar la apertura al diálogo como contrapunto al oficialismo.

Cuando en las elecciones de 2009, la lista propia sacó más votos a nivel local que la del FpV, Massa vio una veta a explotar. Su llamado involucró a un grupo de intendentes del PJ, pero también de otras fuerzas políticas: la idea de la transversalidad no estaba completamente desechada, aunque ahora volvía recargando su indefinición ideológica (justamente, lo que el kirchnerismo abandonó).³⁷⁴ Una parte del capital vio con buenos ojos esta propuesta: el conocido Ignacio de Mendiguren (UIA) se integró a esta fuerza. En las legislativas de 2013, Massa logró casi el 44% de los votos válidos en la provincia de Buenos Aires, ganándole nuevamente al kirchnerismo en el distrito con más votantes del país. Se consolidaba así una fuerza peronista que reúne elementos del kirchnerismo con una tendencia más liberal. A nivel nacional, quedó como tercera fuerza, con 19 diputados, y el 17% de los votos válidos.

Otra de las salidas para el PF estuvo en buscar alianzas con espacios abiertamente liberales, concretamente el PRO. En este período, el PRO se consolidó como fuerza política, a partir del momento en que Macri ganó las elecciones en Capital Federal en 2007. Desde la gestión gubernamental, el ex presidente de Boca Juniors se constituyó en el principal antagonista político del gobierno nacional, capitalizando esa polaridad, lo que le permitió absorber a otros partidos de centro-derecha (como RECREAR) y formalizarse como partido en 2010. Su propuesta política enfatizó la idea de eliminar el conflicto de la política, lo que constituía un polo antagónico con la estrategia del gobierno: en sus mensajes, se percibía siempre una estetización del espacio, evitando tomar definiciones ideológicas fuertes (su falta de expresión no implica que carecieran de las mismas), basándose en la capacidad de “gestionar” y “emprender” traídas del mundo privado (Vommaro, 2014). Se contraponía así a la hiperpolitización del kirchnerismo, donde todo es público, político y por ende, debatible, por una fuerza que buscaba ocupar espacio político sin conflicto, garantizando una

³⁷⁴ Además del apoyo de fuertes intendentes del conurbano, el ex gobernador Felipe Solá, el ex jefe de gabinete Alberto Fernández, se acercaron al Frente Renovador de otras fuerzas, como Adrián Pérez (ARI) o Mario Meoni (UCR).

gestión basada en políticas públicas.³⁷⁵ A diferencia de otras fuerzas de centro-derecha, no se resaltaron en el PRO componentes conservadores: por ejemplo, algunos de sus referentes eran militantes por la diversidad sexual (Pedro Robledo). Se constituyó así como polo extremo (en términos de su presencia real, no teórica) del arco ideológico.

Sin embargo, esta fuerza no logró consolidarse en el espacio nacional, dependiendo de múltiples acuerdos electorales, que en 2011 y 2013 tuvieron al PF como principal –pero no único- aliado. A nivel nacional, el PRO y sus aliados lograron quedar como 4° fuerza en 2013, con 18 diputados, correspondientes al 9% de los votos válidos. A pesar de su presencia mediática, y haber logrado renovar el mandato en la capital del país en 2011 (con nada menos que el 64% de los votos válidos en ese distrito), al momento de escribir esta tesis no había aún logrado conquistar otros distritos electorales con fuerzas propias (a pesar de mostrar crecimiento en Santa Fe de la mano del cómico Miguel del Sel). No obstante, el PRO logró impulsar alianzas con otras fuerzas en el marco de esta lectura liberal del oficialismo. En 2014, la CC se desprendió del FAUNEN aliándose con el PRO. Esta actitud fue seguida por la UCR, que optó por esta estrategia tras una convención partidaria muy tensa en 2015. El radicalismo –repitiendo el esquema de la Alianza- ofrecía al PRO una amplia presencia territorial, incluyendo intendencias y gobernaciones, mientras que el PRO explotaba su potencia electoral.

De esta forma, para 2015 –sin tener resultados de elecciones al momento de escribir la tesis- la oposición de centro-izquierda representada en el FUANEN se diluyó. La alianza entre el PS, GEN y Libres del Sur se sostuvo, pero perdió su capacidad de congregar fuerzas. PSur se dividió por desacuerdos con la dirigencia de Solanas, creando Emancipación Sur en 2015. Solanas, por su parte, se inclinó a apoyar a Massa, quien además logró acuerdos con parte del PF (De la Sota). El pan-radicalismo quedó disperso en alianzas y apoyos al Frente Renovador, al PRO y al kirchnerismo.

De todas formas, el arco ideológico no se cerraba en estas opciones. Durante el período analizado, hay al menos dos novedades relevantes por fuera del mismo. Por un lado, se puede constatar una interesante proyección nacional del trotskismo. Durante el

³⁷⁵ En diciembre de 2009, un grupo de 22 intelectuales liberales y conservadores (incluyendo a Mariano Grondona, Rosendo Fraga y Juan José Sebreli) propusieron en el Foro del Bicentenario un “decálogo de la convivencia”, apelando a la necesidad de alcanzar “una república con mejores instituciones, más libertad, progreso económico y realización personal para todos”, lo que implicaba, según ellos, división de poderes, respeto del Estado de derecho, “vivir reconciliados” (Los Andes, 9/12/09).

conflicto con la patronal agraria en 2008, excepto por el MST, el resto del trotskismo optó por no alinearse en el antagonismo central, buscando una posición autónoma.³⁷⁶ Sin embargo, la proyección nacional vendría por imposición de la reforma política del gobierno, que obligaba a obtener un mínimo del 1.5% de los votos para en las primarias abiertas para poder participar de las elecciones generales. Ante la duda de alcanzar el piso, el PO, el PTS e Izquierda Socialista crearon en 2011 el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), que probaría ser una potente herramienta electoral. En las legislativas de 2013 lograron el 5.11 % de los votos válidos, obteniendo 4 diputados.³⁷⁷ Su apuesta funcionó reafirmando como el extremo izquierdo del arco ideológico, más allá del oficialismo, PSur o el FAP, frente a la polarización de derecha. La estrategia discursiva se basó en no reconocer ningún logro al gobierno kirchnerista, considerando sus políticas como meros engaños y compra de voluntades.

Con una estrategia distinta, y también a la izquierda del gobierno, aparecieron en este período las alternativas electorales de los movimientos de izquierda independiente. Tras más de una década de acción en el territorio, el problema del poder político reaparecía como una alternativa a debatir: ante la amenaza de marginalidad política y pérdida de las bases sociales, la posibilidad de intervenir y disputar dentro de la institucionalidad debía evaluarse.³⁷⁸ Así, tras la ruptura interna de uno de los frentes de mayor trayectoria, el FPDS y el FPDS-Corriente Nacional se presentan a elecciones en las legislativas de 2013 (el segundo, en alianza con Marea Popular). La cantidad de desafíos y definiciones a tomar en esta nueva etapa impidieron una candidatura a nivel nacional, restringiéndose a propuestas locales. En un proceso semejante, se lanza en Neuquén a fines de 2010 la Constituyente Social, propuesta política de CTA. Tarde, disgregada y sin la capacidad de movilización de 2001, la CTA recuperaba la discusión sobre presentarse a elecciones. En 2013, De Gennaro y Lozano lanzaron Unidad Popular a partir de esos debates, aliándose con Marea Popular y FPDS-CN en Capital Federal.

³⁷⁶ El PTS levantó una campaña bajo la consigna “Ni con el gobierno ni con la oligarquía”, mientras que para el PO señaló que se trataba de “una pelea entre capitalistas” (Indymedia, 9/5/08). Además del MST, el PCR y el MIJD participaron de protestas del agro contra el gobierno, leyéndola como una protesta popular que desestabilizaba al gobierno.

³⁷⁷ En algunas provincias, como Mendoza o Salta, el FIT disputó el segundo lugar en estas elecciones.

³⁷⁸ Para una discusión rigurosa de este proceso, ver Martos y Makuc Urbina (2014).

La alianza, que se llamó Camino Popular, logró el 2.28% de los votos válidos. En otras localidades los resultados también fueron promisorios para una primera elección.³⁷⁹

Durante 2014, sectores del FPDS-CN y Marea Popular, junto a otras organizaciones, formaron Patria Grande como movimiento político, y ya no simple herramienta electoral. La estrategia de diálogo amplio con fuerzas de izquierda y centroizquierda incluyó a fuerzas ligadas al kirchnerismo (MEvita, entre otros) y opuestas a éste (De Gennaro apoyó la candidatura de Buzzi de FAA en Santa Fe, y Lozano fue recordado por su voto contra la Resolución 125 en 2008). Esta tensión produjo que otros sectores de la izquierda independiente (FPDS, Corriente Rompiendo Cadenas, entre otras) decidieran en 2014 intentar una alianza con el FIT, buscando constituir un polo de izquierdas.

A pesar de los cuestionamientos por izquierda y por derecha, el gobierno salió fortalecido de las elecciones legislativas de 2013. Si bien el caudal de votos respecto de las presidenciales de 2011 se había reducido, la renovación de cargos correspondía a la mala elección de 2009. En tal sentido, el 33.15% de los votos válidos obtenidos le garantizó 132 diputados propios, mayoría simple con la cual mejoraba largamente su situación frente a las elecciones de 2009. En el Senado, en cambio, sufrió un leve retroceso (pasa de 41 senadores propios a 39), pero mantuvo también la mayoría simple. Es decir, a pesar de que la elección fue leída como una derrota por los medios –por el descenso de votantes respecto de las presidenciales de 2011, el gobierno consolidó mayoría propia en ambas cámaras.

De conjunto, entonces, podemos señalar que en el período 2008-2015 se produjo un reacomodamiento a partir de la impugnación realizada por el capital agrario al orden político estructurado en los años previos. Este conflicto provocó el final de la transversalidad, tal como existía, sesgando al gobierno en el sentido de reafirmar su particularidad, apoyándose en sus propias fuerzas. El afianzamiento de la tradición nacional-popular como fuente democrática, provocó una radicalización progresista que resultó muy productiva en términos electorales: el gobierno terminó el período aquí analizado con mayoría simple en ambas cámaras del Congreso, habiendo ganado las

³⁷⁹ Hubo buenos resultados en La Plata (Patria Grande, 5.1% de los votos), Luján (4.5%), Rosario (Frente Ciudad Futura, 2.6%), Jujuy (Partido por un Pueblo Unido, 1.63%) entre otras ciudades.

últimas presidenciales con el 54% de los votos. Esta potencia electoral, las políticas públicas y el discurso que las sustentaron, habilitaron a una separación relativa del gobierno respecto de las fracciones hegemónicas del BEP, dando al kirchnerismo una proyección propia, que impulsó renovaciones identitarias. Creemos por ello que es inadecuado reducir su accionar a engaño o mera reproducción del programa del capital industrial, como tienden a hacer los estudios de matriz marxista.

El desafío para la oposición interesada en representar las demandas del agro fue construir un discurso que interpelara más allá de lo particular, que fueron construyendo a partir de lineamientos de corte liberal y republicano. Las dificultades de conquistar el electorado a partir de estas interpretaciones llevaron a algunas fuerzas a acercarse en el espectro a otros partidos o alianzas que buscaran combinar este sesgo con continuidades respecto del gobierno (FAUNEN o Frente Renovador). Sin recurrir a esta estrategia quedó el PRO, funcionando como polo antagónico liberal, y por izquierda, con una menor potencia electoral, la novedosa proyección del trotskismo (FIT).³⁸⁰

3.2. Disputas socio-políticas

Las disputas entre partidos políticos descritas en la sección anterior no fueron un proceso autónomo del sistema político. La reafirmación particular del kirchnerismo tensionó las instancias hegemónicas tanto al interior del BEP como entre las clases populares. En ambos casos, se conformó un grupo más restringido de actores que dialogaron y acordaron con el gobierno, dejando al resto de sus fracciones por fuera. En el caso de la clase dominante, la fracción disruptiva, la agraria, buscó trazar puentes de acuerdo con el resto del BEP, al mismo tiempo que trató de estructurar su intención hegemónica más allá de las fracciones del capital. Las dificultades para romper los límites corporativos de su reclamo, resultaron en un programa ambiguo, que combinó elementos del orden político actual con elementos de ruptura, y por ello mismo no fue rechazado de plano por la fracción hegemónica. El capital industrial, sometido a esta tensión, se distanció del gobierno, que sin embargo siguió defendiendo las demandas de esta fracción. Entre las clases populares se produjo una afirmación simbólica y cultural de la identificación

³⁸⁰ La dinámica propia de año de elecciones (2015) escapa las posibilidades de análisis completo de esta investigación. Dejamos señaladas las principales tendencias, sin augurar resultados.

kirchnerista, apareciendo fuerzas sociales identificadas con el gobierno, una novedad relevante del período, lo que produjo una ruptura de alianzas previas. Veamos.

3.2.1. Disputas dentro del BEP

El nudo de la disputa la interior del BEP se estructuró por el rechazo de la fracción agropecuaria a aceptar su posición ambivalente de menor poder político pero afianzamiento de su poder estructural (desgarramiento). Esta brecha entre lo político y lo económico sólo se expresó con total claridad en esta fracción del BEP, a diferencia de otras fracciones desplazadas, como las privatizadas o la banca extranjera. El desplazamiento al interior del BEP de estas fracciones fue más consistente, a pesar de las múltiples concesiones que obtuvieron. La consciencia de esta situación impulsó a la dirigencia agropecuaria a lanzar una impugnación general al orden político hegemónico por el capital industrial. Se inauguró así una nueva etapa en la conflictividad social, donde organizaciones patronales ocuparon el espacio público con repertorios antes asociados a los sectores populares (Antón et al., 2011). Si para el capital agropecuario el problema estaba en expandir su interpelación a otros sectores sociales, al capital industrial se le planteaba el dilema de hasta qué punto le eran útiles los mecanismos de estructuración del orden político. Dicho de otra forma, la intervención autónoma del Estado para arbitrar entre fracciones del capital y de éste con el trabajo comenzó a ser demasiado costosa, económica y políticamente.

Como dijimos, si bien el conflicto de 2008 inició con un reclamo económico-corporativo por apropiación del excedente, el desarrollo del mismo generó una disputa política más general (Basualdo, 2011; Bonnet, 2012; Svampa, 2011). El agro argentino había experimentado un proceso de concentración y creciente agriculturización (sojización, en específico), que generaron modificaciones importantes en su estructura social (Costantino, 2012b). Luego de la devaluación de 2002, los pequeños productores sobrevivientes lograron captar parte de la renta extraordinaria, produciéndose un lento acercamiento a las posturas políticas de aquellos actores que los estaban desplazando (Costantino, 2013). Es decir, para 2008, ya estaban dadas las condiciones de confluencia política, que la gran burguesía agraria explotó en la polarización antagónica, impidiendo que otros actores del sector formaran parte de la disputa (Castro García et al., 2009). El

gobierno, al desoír los reclamos de las organizaciones de productores de pequeño y mediano porte, presentó la oportunidad de aglutinar al “campo” como uno solo actor frente a un exterior constitutivo simple y unívoco: el gobierno.³⁸¹ Esta pretendida exterioridad sería leída con facilidad desde componentes liberales, que colocan al Estado en relación de extrañeza respecto de la sociedad (ver sección 4 del capítulo 2). Como efecto opuesto, esta misma lectura serviría para justificar el pretendido jacobinismo del gobierno, como fuerza progresista que aprovecha la política para moldear la sociedad (Rinesi, 2011).

La fracción agropecuaria de la gran burguesía buscó posicionarse como referente para un conjunto social más amplio, al nuclear bajo su demanda una serie de descontentos más amplios con las políticas gubernamentales, apelando para ello a referencias históricas arraigadas en el imaginario nacional; centralmente, la de una Argentina aparentemente próspera ligada a la etapa agroexportadora (1870-1930), el “Granero del mundo”. La gran difusión de esa imagen de bienestar supuestamente general –transmitida por décadas a través de la historia oficial enseñada en las escuelas del país- permitía hacer una lectura diferente del pasado, buscando la promesa de la patria que puede cumplir su destino de grandeza pero es amenazada desde adentro. La propuesta no era novedosa: era la versión liberal ensayada desde la aparición del peronismo. En esta visión de la sociedad, Argentina tiene sólo un destino posible y es aceptar que su prosperidad depende de que el sector agropecuario responda a lo que el mundo espera del país, bienestar permanente amenazado por la intervención innecesaria y arbitraria del Estado (Panero, 2011).

Lo interesante es que la interpelación a recuperar la grandeza de la patria permitía a sectores medios urbanos a plegarse al reclamo, canalizando allí sus descontentos aún sin intereses directos en el sector. No en vano, uno de los actos más masivos y de mayor importancia política fue realizado en el Monumento a la bandera en Rosario, el 25 de mayo (aniversario de la Revolución de 1810), entonando el himno nacional como principal fuente de autoidentificación. Tal como explica con claridad

³⁸¹ Desde fines de 2006 CRA, FAA y FAN reclamaban por la eliminación de las retenciones, protagonizando 3 *lock out* entre ese año y el siguiente. Al momento de anunciar la resolución N° 125, FAA llevaba dos días de paro. La falta de atención del gobierno acercó a estas entidades a SRA. Sobre la construcción discursiva de los interlocutores en disputa, ver Palma (2014).

Panero (2011), la Mesa de Enlace interpretaba que el interés del campo *era* el interés de la sociedad entera: “sin campo, no hay Argentina”. El acto de Rosario fue, justamente, en el centro de la zona núcleo productora de soja, componiendo una perfecta imagen de lo que la Mesa de Enlace entendía por economía, política y bienestar social. Pero justamente, esta estrechez de miras a la hora de incluir otras demandas sociales en sus propios intereses limitaba la capacidad de interpelación del llamado del agro, por masivo que pareciera. Debe recordarse que, en todo momento, la demanda concreta que aglutinó fue derogar la resolución N° 125, sin tomar nunca en cuenta, por ejemplo, los pedidos de regulación o de diferenciación por estrato de producción que sostenía FAA.

De hecho, el gobierno fue quien respondió por la vía de intentar separar las demandas (ver sección 2). Si bien las propuestas no prosperaron en el marco de la crisis, el gobierno seguiría buscando quebrar la unidad de la Mesa de Enlace, recuperando estas demandas. La ley de Tierras, que regula la participación del capital extranjero en la propiedad rural, recuperó una demanda histórica de FAA, que fue incluso formulada – con un alcance bastante superior al texto final- como proyecto de ley durante el kirchnerismo. Pero en el marco de una confrontación abierta, estos intentos por atender demandas parciales eran extemporáneos al reclamo de las organizaciones del agro.

La respuesta del gobierno, como explicamos antes (secciones 2 y 3.1), fue radicalizar esta polarización con su estrategia política: insistir con su legitimidad como gobierno electo por una amplia mayoría frente a un grupo particular con demandas corporativas. Si las opciones polares ponían al agro y al gobierno en los extremos, vale señalar que con éste último se encontraban la UIA, CACons, ADEBA y la CGE, reclamando a la Mesa de Enlace que detenga las protestas (Cotarelo, 2008; Sanz Cerbino, 2012). Beneficiarios directos de las políticas públicas que redistribuían la renta del agro, estas cámaras expresaban preocupaciones sinceras y propias al respecto, y no era altruismo o apoyo espurio al gobierno. La UIA fue más explícita, al señalar la importancia de establecer un modelo económico que promoviera la industria como generadora de valor agregado (Infobae, 27/3/08).

La UIA, fracción hegemónica, fue la que llamó a defender el régimen de políticas, aunque aceptó la necesidad de establecer regulaciones más precisas, menos sujetas al “arbitrio” gubernamental: la “sintonía fina” fue el reclamo permanente de la

UIA. Resulta significativo que en el marco del conflicto con el agro, en julio de 2008, fuera el entonces presidente de la UIA, Juan Carlos Lascurain, el que hiciera este llamado, que la presidenta recuperaría más tarde, para las elecciones de 2011. En ese momento, Lascurain refería a resolver las necesidades de financiamiento, controlar los aumentos salariales e impedir una revaluación cambiaria para no perder competitividad (MDZOnline, 2/7/08). En similares términos fue recuperado por el sucesor De Mendiguren (Infobae, 10/12/11), cuando invitó a la presidenta a cerrar la reunión anual de la UIA en 2011, que, por su parte, dio la anuencia al proyecto, pero reclamó qué buscaba a cambio: inversión y diálogo tripartito. Debemos resaltar la convergencia de este reclamo con las políticas públicas ejecutadas en el período (ver sección 2). Incluso en 2014, otro dirigente de la UIA, Funes de Rioja, seguía utilizando la idea de “sintonía fina” para reclamar acceso al crédito, elevar la competitividad, reducir impuestos, contener salarios y reducir la litigiosidad laboral (Clarín 19/5/14; Iprofesional, 20/5/14). Tras años de apoyo al régimen de políticas, el reclamo del capital industrial expresaba la falta de cambio estructural y necesidad de intervenciones estatales para continuar la acumulación, conteniendo aumentos salariales y protegiendo de la competencia externa (Castells y Schorr, 2015).

Volviendo al conflicto, el conjunto del capital buscó establecer diálogos para evitar una ruptura interna al BEP. AEA llamó al diálogo, reconociendo la importancia de todos los sectores en el desarrollo del país. El pre-coloquio anual de IDEA –realizado también en Rosario en 2008- sirvió como punto de incipiente encuentro. Por dura que fuera la confrontación de una fracción del capital con el gobierno como representante de otra fracción, los acuerdos básicos del conjunto del BEP inclinaban la balanza a buscar acuerdos. En esa ocasión, los hombres de negocios acordaron que los principales problemas habían sido generados por el gobierno, que anunció los cambios tributarios después de la siembra –impidiendo a los productores agropecuarios decidir con la información completa-, decidiéndolos sin consultar al Congreso, y reaccionando mal ante las críticas (Página/12, 26/6/08). El punto clave para lograr acuerdos más allá de lo básico entre las diversas fracciones del capital estaba en desplazar el eje de conflicto del esquema de redistribución de renta originado en las retenciones a la discrecionalidad en

su aplicación. De esta forma, la “culpa” no era del capital industrial y sus socios, sino del gobierno incapaz de cumplir la tarea encomendada.

El capital concentrado, representado en los directivos de AEA Luis Pagani, Paolo Rocca y Jaime Campos, se reunió a principios de septiembre con el ministro de Economía Fernández. Tras elogiar los 5 años de crecimiento previos, sintetizaron su programa: “se necesita avanzar en una nueva etapa donde las inversiones productivas jueguen un papel central que permita continuar sosteniendo altos niveles de crecimiento en un marco de estabilidad macroeconómica, lo cual requiere suficiente financiamiento de mediano y largo plazo” (AEA, 2/9/08). Dicho de otra forma el reclamo central era rehabilitar el crédito externo y estructurar un esquema previsible de políticas si se quería que invirtieran y el país continuara creciendo. La importancia del problema del financiamiento sería recalcada ese mismo mes, recordando que era la condición necesaria para la creación de empleo: “Una plena integración al mundo, y en particular el acceso normal a fuentes externas de crédito, son objetivos de gran importancia, ya que contribuirán de manera decisiva al desarrollo de nuevas inversiones productivas, la creación de empleos y el aumento de los niveles de vida de todos los argentinos” (AEA, 23/9/08). Reabrir el financiamiento podía reducir las tensiones de la intervención estatal entre fracciones del capital, y por esto se constituía en un programa común para éstas.

Pero, como ya señalamos, ese mes de 2008, la quiebra de Lehman Brothers dio forma real a la anunciada crisis mundial, y esto sirvió de excusa para la UIA para volver al ruedo con sus reclamos de devaluación en Argentina. La presidenta respondió asegurando que esa medida aceleraría la inflación, algo que los empresarios buscaban contener desde hacía años. La UIA se unió entonces en el reclamo de la SRA por un mecanismo de devaluación real sin afectación al tipo de cambio nominal: una desgravación fiscal (La Nación, 18/9/08 y 19/9/08). La devaluación del real brasilero al mes siguiente incrementó la preocupación: parecía que se volvía a la situación de 1999. CACons, APYME, CAME acompañan a los industriales en sus pedidos de nuevas devaluaciones para recuperar la competitividad. La UIA y CACons amenazaron con despidos (haciendo gala de la conciencia de su poder estructural), insistiendo con que no podían garantizar el nivel de empleo (La Nación, 4/10/08 y 18/10/08). El gobierno medió entonces para frenar las demandas de los trabajadores de la CGT, y acordó junto a

esta central y la UIA enfocarse en monitorear el nivel de empleo, mientras se analizaban medidas de salvaguarda ante la crisis (La Nación, 15/10/08). El anuncio de la estatización de las AFJP para garantizar los fondos a estos planes de rescate vendría justo después de este movimiento de tigre y afloje: para no perder empleos (olvidando cualquier mejora de salarios), el gobierno necesitaba articular un plan de subsidios a la competitividad, buscando fondos sin tasar de más al agro.

La lectura del problema propuesta en el pre-coloquio de IDEA 2008 se vio favorecida por este anuncio. La estatización suponía una renovación de la caja para subsidiar al capital industrial y contener demandas sociales, a partir de recursos contribuidos por la propia fuerza de trabajo: los aportes previsionales. De esta forma, se eludía la necesidad de una mayor presión tributaria sobre el capital. Por estos diversos motivos, ninguna de las fracciones de las clases dominantes se indignó más de la cuenta con la iniciativa.³⁸² Incluso el capital financiero se veía favorecido, pues por esta vía la caja de ANSES se podía utilizar –como se hizo- para pagar bonos de deuda, que se canjearon por nuevos títulos que terminaron entre los activos –incobrables- del sistema previsional. No obstante, se trataba de una estatización, ocurrida poco después de la compra de participación en Aerolíneas –difundida erróneamente como otra estatización. La diferencia estaba en que las antiguas AFJP tenían entre sus activos acciones de empresas que operaban en Argentina. Una vez estatizado el sistema previsional, el Estado tenía derecho así a poner representantes en los directorios de grandes empresas, algo que, por supuesto, aprovechó.

Así, la estatización de las AFJP era leída como una intromisión –esta vez no figurada, sino literal- del Estado en la economía privada. Nuevamente, el gobierno aparecía como incapaz de realizar un salvataje al capital sin entrometerse de más, excediéndose en su tarea. En el marco de una crisis internacional que requería respuestas, un gobierno fuera de control –del capital- era tanto riesgo como la propia crisis. El coloquio de IDEA, realizado a fines de octubre, enumeraba entonces las razones del “mal” año para el capital: el conflicto, la crisis internacional, la estatización de las AFJP (Síntesis ejecutiva IDEA, 27/10/08). Esta potencial confluencia explica que

³⁸² AEA, representativa del conjunto más concentrado del capital, no criticó *per se* la estatización, sino la toma apresurada de la decisión, y los potenciales efectos sobre el mercado de capitales (declaración AEA, 30/10/08).

las entidades empresariales se negaran a dejar afuera al agro de los llamados de la presidenta a reflotar el Pacto Social, la promesa de campaña. El BEP entendía que era necesario buscar acuerdos comunes para sostener el esquema de políticas. Porque, tal como anunciaban en ese encuentro, “si bien algunos ven esta situación como el fin o una situación terminal, en realidad se presenta una enorme oportunidad. Las crisis representan una oportunidad porque estimulan cambios para mejor” (Síntesis ejecutiva IDEA, 27/10/08). El único funcionario invitado al Coloquio fue el vicepresidente Cobos, quien, debe enfatizarse, completó el mandato estipulado. No se puede eludir la fuerza de esta señal de diálogo al conjunto del capital.

Por el lado del BEP, las señales se enfocaban en generar un sistema más predecible para sostener el esquema de intervenciones sin alterar la renta o las ganancias de ningún sector. El reclamo de “reglas claras”, previsibilidad, estabilidad, políticas de Estado, se volvería el eje más fuerte de demandas del capital como conjunto, particularmente visibles en las memorias de AEA en estos años.³⁸³ Como ya señalamos, la vuelta a los mercados financieros aparecía como uno de los puntos comunes más fuertes del programa. Por eso, cuando gracias a la propuesta del Barclays, Citibank y Deutsche se prometió reabrir el canje de deuda de 2005 y negociar con el Club de París, el anuncio cosechó rápidamente los apoyos de la gran burguesía, con un nivel de generalidad y cohesión que llaman la atención (Vázquez Valencia y Cantamutto, 2013).

ABA se pronunció a favor de normalizar las relaciones financieras, y en ese sentido “la decisión debe ser interpretada como una señal muy favorable para mejorar el clima de negocios e impulsar la inversión”. La UIA entendió que “no es solamente lo que puede implicar en la relación internacional, sino la posibilidad de nuevos financiamientos”, es decir, el doble efecto de mejorar las relaciones internacionales y posibilitar el acceso a nuevo crédito. En el mismo sentido se expresó AEA en una reunión con el ministro de economía Carlos Fernández, hablando de un paso “muy positivo”. CACom también apoyó el anuncio, identificando la infraestructura como el principal destino de los nuevos créditos, mientras que ABAPPRA señalaba la necesidad de incorporar bienes de capital importados (La Nación, 3/9/08). CRA, CONINAGRO y

³⁸³ Resaltando la necesidad de esquemas previsibles de arbitraje y rescate de las fracciones del capital, AEA se expresaba a favor de “las medidas de promoción del consumo interno, así como la profundización del Plan de Obras Públicas y la creación del Ministerio de la Producción” (AEA, 11/12/08).

SRA también elogiaron el anuncio, aunque esta última cuestionó la idea de usar las reservas como modo de pago (La Nación, 3/9/08). CAME, por su parte, entendía que “el anuncio repercutirá favorablemente para el financiamiento público y privado que necesita la Argentina”. La excepción a este acuerdo general fue FAA, que se opuso a la decisión: “no es para aplaudir de pie; deberían tener como prioridad la deuda interna” (La Nación, 2/9/08). El presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, afirmaría que era “un paso importante porque sirve para generar mayor confianza en la economía argentina y también porque el Gobierno recibió la propuesta para hacerlo de parte de tres bancos extranjeros” (La Nación, 23/9/08).

El pedido de previsibilidad, reduciendo la discrecionalidad en el arbitraje estatal, y resolución del frente externo se erigieron entonces como demandas centrales del capital unificado. La participación del gobierno en los directorios ocasionaba no pocas irritaciones: Brito (ADEBA), Méndez (UIA) y Rocca (AEA), que supieron tener posturas cercanas al gobierno se quejaban por esta situación. La búsqueda de nuevos acuerdos, más allá de lo fundamental, estaba en la orden del momento para el capital. En abril de 2009, se realiza una reunión informal entre la UIA, CACom, CACons, la Bolsa de Comercio, ADEBA, ABA, SRA, CRA y AEA, en lo que se llamó Grupo de los 7 (una obvia alusión al poderoso G8 que fundó el apoyo para la Convertibilidad). A pesar del entusiasmo de la dirigencia rural, que señaló que “el apoyo empresario al oficialismo se está resquebrajando de manera acelerada”, ninguna de las cámaras empresarias no agrarias realmente consideró una ruptura con el gobierno (La Nación, 22/4/09).

Al asumir Boudou a mediados de 2009, presentó una “Hoja de ruta” que oficializó con el presupuesto 2010: mantener el subsidio al consumo y la inversión pública para impulsar la demanda interna, fomentar las exportaciones a través de un tipo de cambio real relativamente alto, y resolver el frente externo (Página/12, 18/9/09). De esta forma, se hacía explícito el programa de políticas del kirchnerismo. En relación al frente externo, los pasos de la hoja de ruta eran resolver el problema con los *holdouts*, negociar con el Club de París, y compatibilizar los gestos requeridos para el poder financiero global de modo de reinsertar a Argentina en un nuevo ciclo de endeudamiento (Giuliano, 2013a, 2014). El sucesor de Boudou, Lorenzino tenía trayectoria en esta área y fue su principal preocupación. Este frente externo de la Hoja de Ruta se sostuvo sin

mayores cambios hasta el momento de escribir esta tesis. En el frente interno, en cambio, las políticas específicas de impulso al consumo –especialmente en bienes durables- se riñó con el ajuste salarial en escena desde 2014, cuando la inflación y la devaluación parecen ganarle a las paritarias. En un contexto de estancamiento salarial, el impulso al consumo se hizo viable a través del financiamiento: no en vano, desde 2009 la banca sería el sector de actividad de mayores ganancias.

Por lo pronto, el Coloquio de IDEA de 2009 resumió nuevamente cuál era el punto de convergencia: más allá del nivel de tipo de cambio o el régimen laboral, el problema era “la política”. El reclamo era, entonces, previsibilidad, reglas claras, o lo que es otra forma de decirlo, un mecanismo articulado de intervención consensuado por el capital, sin interferencia permanente del gobierno. “¿Qué busca un inversor? (...) Sin duda, previsibilidad en los resultados de una empresa. Si no tenés institucionalidad de las políticas en el tiempo, la previsibilidad no existe” (La Nación, 1/11/09). Ese año se presentaron las propuestas resultantes de 3 años de discusiones entre fracciones del capital (IDEA: “Aportes para una Agenda Estratégica de la Argentina”), entre las que se destacan en primer lugar las demandas de reducir el poder del Ejecutivo: respetar la división de poderes, “acotar el régimen presidencialista dentro del sistema republicano”, proteger al Consejo de la Magistratura de intervenciones, mejorar el diálogo.

No resulta un ejercicio complejo detectar que éstas son las mismas interpretaciones defendidas por los partidos de oposición, que se acercaron en primera instancia al agro en 2008 (sección 3.1). El BEP, buscando consensos comunes, señalaba puntos de la agenda a la oposición. Dado que las tensiones específicas entre fracciones estaban lejos de estar resueltas, la propuesta del capital era llevar esas tensiones a un espacio político donde no hubiera una predominancia de una única fracción, sino que se expresaran las divergencias internas: el Congreso. Por eso es que la división de poderes reapareció como necesidad.³⁸⁴ El problema que el capital volvía a enfrentar era hacer

³⁸⁴ El documento “Aportes para una Agenda Estratégica de la Argentina” resumía con claridad el discurso que articulaba sus demandas (p. 6): “El funcionamiento del sistema republicano requiere de un juego armónico de las facultades respectivas de los tres poderes del Estado. El papel protagónico del presidencialismo en nuestra organización política hace necesario que el Poder Legislativo y el Poder Judicial ejerzan con independencia sus competencias. Asimismo, resulta cada vez más evidente que la independencia de la Justicia es esencial para el crecimiento económico y el empleo, como consecuencia de su relación directa con la asignación de las inversiones.”

interesante su programa para otras clases sociales, conquistar acuerdos más allá de los propios (con las dificultades del caso).

Uno de los puntos que aparecía en el referido documento de IDEA era la reducción de la informalidad (reiterado en el Coloquio del año siguiente, ver Síntesis IDEA 2010), que, en principio, puede apelar de buen grado a las clases populares. Como muestra Frega (2012), ciertamente la informalidad no había sido ni era una preocupación real para las clases dominantes, ¿por qué lo retomaban entonces? El fundamento de este reclamo era extremadamente parecido al discurso del gobierno: las subas de salarios reclamadas por los sindicatos mejoraban la situación de los trabajadores que se encontraban en relativas mejores condiciones, cuando el foco de la pobreza y la vulnerabilidad estaba en el desempleo y la informalidad. La preocupación de fondo para el capital era contener las demandas salariales. Pero por otra parte, sabían que una conflictividad social en ascenso no era una buena perspectiva para ninguna fracción, más allá de los alineamientos respecto de las políticas particulares, por lo que presionaron para resolver el conflicto (ver declaraciones de Funes de Rioja, en Clarín, 19/5/14). En tal sentido, además de la amenaza de mayores despidos, las clases dominantes usaron dos recursos. Por un lado, bregaron por una reforma laboral flexibilizadora, que abaratara el costo de contratación. Por otro lado, aprovecharon los múltiples subsidios que el gobierno usó en sus políticas anticrisis.

En 2009 retomó fuerza, además, otro reclamo de las clases dominantes que tenía posibilidades de interpelar a sectores por fuera de sus propias asociaciones: la inseguridad. Lo que en el discurso del capital comenzaba como una demanda de seguridad en el rendimiento de las inversiones (previsibilidad), podía “perder” referencia clara, para diluirse en un significado más amplio. Así, la supuesta inseguridad ante violaciones del derecho de propiedad originada en las estatizaciones y la participación en directorios, se fue modificando para referir a los delitos a la propiedad en general (robos). No fue difícil asociar este problema social a un clima más general de inseguridad ligado incluso a la integridad física (recordemos que en 2009 la figura de De Narváez representando este discurso ganó lugar mediático y político). Retomando su propio reclamo por la falta de reglas claras y previsibilidad, el capital, y en particular,

los medios de comunicación fomentaron el discurso sobre el origen de la inseguridad en la discrecionalidad del gobierno y su ineficacia para actuar.

Este discurso se arraigó con cierta facilidad en un sentido de época bastante generalizado en las sociedades contemporáneas, donde la inseguridad aparece como una suerte de aleatoriedad del peligro (Bauman, 2001). La deslocalización incrementa el miedo a la inseguridad, y no tiene un arraigo particular a la experiencia de victimización (Kessler, 2011). Así, aunque Argentina mostró índices de criminalidad muy por debajo del promedio regional, la percepción de inseguridad fue creciente en el tiempo y siempre superior a su medición “objetiva”.³⁸⁵ Argentina, de hecho, tiene la mayor brecha del continente entre percepción de la población y la victimización (Aguirre, 2007; Tagina y Varetto, 2013). Se ha estudiado que la inseguridad económica (eventos de hiperinflación o miedo a la desocupación) y fuertes confrontaciones políticas (como el conflicto de 2008) favorecen incrementos en la percepción de la inseguridad, tendencia que se relaciona con la circulación de información que parece expandir la sensación de victimización (Kessler, 2011). En este sentido, los medios masivos de comunicación promovieron sistemáticamente esta percepción (Bazzano y Pol, 2011; Galar, 2009; Observatorio de la Deuda Social Argentina, 2009). La reacción gubernamental, al minimizar el reclamo u ocultar las estadísticas, agravó el problema, al exacerbar la frustración de los demandantes.

El registro de la violencia y la inseguridad se volvieron una constante en el discurso empresarial y, en particular, de los grandes medios de comunicación, registro que permitía una expansión más allá de los límites corporativos. Durante 2009 fue cuando la pelea entre el gobierno y Clarín tomó parte en la escena pública con más claridad. El multimedios actuó en consecuencia, acelerando y esparciendo la reproducción de discursos críticos del gobierno, brío en el cual lograron incorporarse al

385 Existe cierta subvaluación de los hechos delictivos por la propia participación de agentes de las fuerzas de seguridad en los mismos (Bazzano y Pol, 2011), así como por la falta de comunicación del Estado (Moreno, 2011). Los índices de criminalidad y percepción referidos provienen de encuestas de Latinobarómetro, que omiten el “filtro” estatal de la información. La percepción se asocia a la pregunta sobre el problema considerado como principal, mientras que la medición de victimización se hace con base en la pregunta sobre si el encuestado o su grupo familiar fue víctima de algún tipo de delito en el último año.

escenario mediático no sólo las voces políticas que representaban estos intereses sino incluso sectores de izquierda.³⁸⁶

Existió, además, otra situación que permitió la expansión de las demandas de la gran burguesía, situación originada por esta misma clase. Hablamos de la inflación, que se incrementa sostenidamente durante el período. La inflación del período expresó, por un lado, la dependencia de la economía nacional (la fuga de recursos por diversas vías erosiona toda base monetaria), y, por otro lado, los límites aceptados por el capital a la recuperación en la distribución del ingreso (Chitarroni, 2013). Es decir, el capital es la fuente misma de la inflación a través de sus decisiones, usando la desvalorización de la moneda como recurso de presión para contener los salarios y presionar al Estado.³⁸⁷ El aumento generalizado de precios afectó, sin embargo, al conjunto de la población, y por ende, fácilmente aparecía como un problema general. El capital ha utilizado en diversas oportunidades el recurso de exacerbar la inflación para desestabilizar las condiciones de vida del pueblo, facilitando la aceptación de programas de orden, incluso contra sus propios intereses inmediatos o mediatos (Furtado, 1984; Gramsci, 1975).

La explicación neoliberal del fenómeno inflacionario que responsabiliza al exceso de gasto del Estado, y en particular, su posterior monetización, se ha vuelto hasta cierto punto parte del sentido común de la población. Sin embargo, el gobierno actualizó al menos una forma alternativa de comprender el fenómeno, que apuntaba al rol que cumplen los actores con más poder en la cadena de valor, que practicaron aumentos sistemáticos de precios para garantizarse ganancias superlativas. Sin dirimir aquí las causas de la inflación, señalamos los efectos políticos de cada interpretación. La ventaja de la explicación neoliberal es que pone como responsable al Estado, como entidad por fuera de la sociedad, exculpando al mismo tiempo a los actores de disímil poder en la sociedad (y en el mercado, más concretamente). Aunque los efectos de la inflación se

³⁸⁶ Posiblemente el epítome de este proceso haya sido la campaña del periodista del espectáculo Jorge Rial conocida como “Un milagro para Altamira”, que promovía desde la pantalla y en Twitter el voto al FIT en las elecciones de 2011 (Perfil, 8/8/11). Es evidente que Rial no hacía esto por convicciones ideológicas.

³⁸⁷ No deja de resultar atractivo traer a colación lo que Canitrot (1975) señalaba respecto del Pacto Social de 1973, “el éxito del programa destruye el elemento constitutivo de la alianza. Al aproximarse al pleno empleo, los intereses conflictivos reemplazan a los complementarios. El conflicto se hace muy intenso porque se desarrolla en medio de un contexto inflacionario explosivo, que es resultante de utilizar el incremento de salarios como instrumento de expansión de la demanda. En menor o mayor plazo, la alianza se destruye, la burguesía industrial se inclina hacia una nueva alianza con la burguesía rural, el populismo termina enredado en sus propias contradicciones y un nuevo programa de orden y recesión emerge.”

distribuyen de modo desigual de acuerdo con las distintas capacidades de aprovechar mecanismos de protección, el fenómeno parece afectar a toda la sociedad, y por ello, no es difícil que emerja como un problema que aparentemente involucra a todos. El responsable sería unitario y estaría *fuera* de la sociedad. En cambio, la explicación alternativa pone a los responsables *dentro* de la sociedad, apelando a un mecanismo típico de la interpelación populista, al cohesionar a la comunidad política legítima ante aquellos integrantes que la amenazan. Cualquier solución que se intente bajo esta lectura implica un mayor control estatal sobre la actividad empresarial, y por ende, una irritación de la misma que conlleva diversas reacciones –que incluyen, en algunos casos, el desabastecimiento.

¿Qué componía entonces el programa común del capital hacia 2010? Podemos señalar que las demandas eran la resolución del frente externo, previsibilidad y reglas claras, respeto de los derechos de propiedad, división de poderes, el reclamo por la inseguridad y la contención de la inflación. Como hemos visto, gran parte de estos problemas estaban originados no en el accionar autónomo del Estado –que sin dudas agregó su cuota de teatralidad- sino en el orden político estructurado a partir del programa de la fracción industrial del capital (concentración del poder de decisión en el gobierno, y necesidad de intervención de arbitraje permanente), y al accionar del conjunto del capital (inseguridad e inflación). Por ello mismo, el BEP no lograba avanzar en un programa más claro y cohesionado: “La fragmentación impide incluso que los intereses sectoriales sean eficazmente defendidos y no permite que a partir de una defensa legítima de tales intereses se construya progresivamente el bienestar general” señalaron sus propios representantes en el Coloquio de IDEA 2010 (Síntesis IDEA, 2010).

Todavía en 2010 los caminos de acercamiento eran esquivos. Durante el conflicto por el uso de reservas del BCRA para pagar deuda (Fondo del Bicentenario) que acabó en la renuncia de Redrado, 3 asociaciones de la Mesa de Enlace (SRA, CRA y CONINAGRO) encabezaron las críticas: “deja en evidencia la búsqueda desesperada de fondos (...) hay un claro atentado contra las instituciones y la división de poderes” dijo Biolcati (SRA), mientras que Llambías (CRA) señaló que, al igual que con la resolución N° 125, ambas crisis “son consecuencia directa de los atropellos y la prepotencia del

Gobierno, en un caso contra un sector productivo y ahora contra un organismo autárquico” (El argentino, 12/1/10). Mientras tanto, ADEBA y ABAPPRA se pronunciaban, en cambio, a favor de los pagos de deuda, alegando una reducción del riesgo país (Argenpress, 7/1/10; Fortuna, 6/1/10). Cuando el capital buscó unirse en marzo, a instancias de un llamado de AEA, no participaron ni la UIA, ni SRA, ni CRA. En un segundo intento en agosto, se logró reunir en AEA a UIA, CACons, CACom y la Bolsa de comercio, pero sin la presencia del agro, y el resultado fue “una coincidencia ‘completa’ en señalar como indispensables la seguridad jurídica, reglas de juegos estables y previsibles y el pleno respeto por la actividad privada” (Clarín, 4/8/10), es decir, no fueron más lejos de lo que ya estaban. Incluso a fines de año, Hugo Biolcati, de SRA, aún reprochaba en público al industrial Cristiano Rattazzi su apoyo a las retenciones (Página/12, 17/10/10).

La imposibilidad de unificar un programa común más específico fue aprovechada por la fracción hegemónica para sostener el orden político tal como había sido estructurado en el período anterior. De hecho, del mismo Coloquio surgía que ante la imposibilidad de cohesionar un nuevo programa –o que alguna nueva fracción lograra modificar el orden de prelación interno al BEP- la opción preferida, por descarte, era continuar con las cosas tal como estaban. “Si no hay otro, es el mejor” dijeron los empresarios, refiriéndose a Scioli, señalando su preferencia por la continuidad (La Nación, 14/10/10). En tal sentido, la opción por el kirchnerismo en 2011 tiene una parte de la explicación en la preferencia del capital por la continuidad ante la imposibilidad de formular una alternativa (Santucho, Genoud, Rodríguez y Maccia, 2014). El resultado final, sin contradecir esta preferencia de continuidad, resultó concentrar demasiado poder en el Ejecutivo.

Se abría entonces un momento en el que el gobierno impulsó algunas de las políticas de regulación más interesantes de todo el período (ver sección 2). La ley de Tierras, si bien modificada, atendía a proyectos de FAA expresados un lustro antes (Clarín, 22/12/11; Página/12, 23/12/11). Al igual que el Estatuto del Peón Rural, aprobado en noviembre de 2011, un mes antes, se trataban de medidas que apuntaban a regular específicamente sobre el sector rural, en el marco de la oposición permanente de

SRA y CRA, pero tratando de conquistar los apoyos de FAA.³⁸⁸ Las regulaciones al movimiento de divisas, en cambio, trataban de contener las salidas sistemáticas en la balanza de pagos, cuestionando mayormente los privilegios del capital extranjero (ver sección 1). Más allá de disputas puntuales con una parte del sector financiero (la banca extranjera), el gobierno mantuvo buenas relaciones con la cámara representante, ABA (Página/12, 22/8/13). AEA, en cambio, se expresó en contra de las regulaciones: “la vigencia del nuevo régimen de Mercado de Capitales constituye un grave desaliento a las inversiones en Argentina (porque permite) intervenir de manera discrecional” (declaración AEA, 17/8/13). La UIA, sin apoyar la medida, tenía una postura de crítica menos dura (La Nación, 17/8/13).

Es interesante consignar aquí la respuesta de la presidenta, que explicó que estas regulaciones tenían por único fin lograr que el capital fuera reinvertido en el país, sin cuestionar los niveles de ganancias obtenidos. El gobierno apelaba, tras una década organizando la regulación del PRE, a la racionalidad del capital. Esta racionalidad se basaría en una idea de reciprocidad, por la cual si el capital logra valorizarse, debería generar alguna ventaja para el pueblo trabajador; de lo contrario, se expone a la posibilidad de estallidos sociales que lo perjudican más. La presidenta, sin decirlo, estaba explicando con claridad la tensión entre acumulación y legitimación: el capital y el Estado capitalista actúan juntos pero no son la misma cosa.

Por eso pedimos la reinversión de utilidades en la Argentina, por eso pedimos que se produzca en la Argentina, porque *estamos dando ventajas muy importantes y porque además la han juntado con pala en estos nueve años. Y no me molesta que los empresarios ganen plata, al contrario, para eso son empresarios, para eso invierten, para eso quieren tener su rentabilidad. A nadie le gusta perder, pero también esa rentabilidad tiene que estar acorde con el desarrollo, crecimiento y sustentabilidad de la economía. Porque cuando no hay relación entre la rentabilidad y lo social termina implosionando el mundo, porque el mundo se mueve a fuerza de consumo, a fuerza de lo que consumen las sociedades, si las sociedades dejan de consumir dejan los empresarios de producir y podrán tener plata en el banco, adentro o afuera, pero finalmente se producen momentos muy difíciles como los que vivimos políticos, empresarios y banqueros en el año 2001, cuando si te agarraban en la calle no te iba muy bien si eras político, empresario o banquero.*

³⁸⁸ El gobierno incluso buscó interceder en las elecciones internas de FAA, favoreciendo líneas más afines. Así apareció referido en la entrevista para esta tesis con Molini (FAA).

(Discurso de promulgación de la ley de interés público del abastecimiento de hidrocarburos, 5/5/12, itálicas agregadas)

Aunque persistieron las dudas al interior del BEP sobre un programa mejor especificado, esto no impidió fomentar los acuerdos comunes. A partir de esos puntos comunes, el capital avanzó en la búsqueda de consensos más allá de sus propias filas. Y en cierta medida, lo logró, como se hizo visible en las protestas del 13 de septiembre y 8 de noviembre de 2012 (conocidas, respectivamente, como 13S y 8N), y con menor éxito, el 18 de abril de 2013. Los motivos de la protesta fueron variados: inflación, desvalorización de la moneda nacional, restricción a la compra de dólares, inseguridad, corrupción, desempleo, manipulación de los datos (INDEC), problemas de libertad de expresión, justicia, miedo, inflación, contra la reforma de la constitución, falta de respeto a las instituciones democráticas, las restricciones a las importaciones, la radicalización del relato y el tono de confrontación permanente del kirchnerismo (La Nación, 2012; Pérez Paladino, 2013; Santos da Silva, 2013; Tagina y Varetto, 2013). La pluralidad de demandas excedía con mucho a un grupo de problemas “principales” que pudieran contener un disgusto generalizado con múltiples elementos de la realidad argentina.³⁸⁹ Estas manifestaciones fueron un paso en la convergencia de demandas heterogéneas. No estamos señalando que el sujeto político implicado en estas protestas fuera sólo la clase dominante, sino, justamente, que ésta logró interpelar a un conjunto heterogéneo de sujetos, excediendo sus límites de clase y corporativos.

La primera de las protestas tuvo una convocatoria centrada en el uso de las redes sociales (Pérez Paladino, 2013; Santos da Silva, 2013), sin que esto niegue la participación deliberada de actores concretos instigando a la protesta (Wainfeld, 2012). Este último autor señaló que el límite de la protesta era “su absoluta carencia de reclamos precisos, objetivos inmediatos accesibles, liderazgos visibles y (aspecto no menor en jugadas similares) oradores que las expresen, sinteticen o encuadren en el cierre de los actos”. Especialmente en la segunda manifestación, una parte del arco opositor (los dirigentes Mauricio Macri, Elisa Carrió, Hermes Binner, Ricardo Alfonsín, Eduardo Amadeo, Fernando Solanas, entre otros) intentó vincularse, aunque con escaso

389 De hecho, las demandas en el 13S eran menos y más focalizadas. En el 8N las demandas se dispersaron, aunque inseguridad, reelección y corrupción concentran la mayor parte (60% de los reclamos en el 13S pasa al 49% en el 8N) (COPUB, 2012).

éxito (Tagina y Varetto, 2013; Verbitsky, 2012). “Sin dudas se trató de una masa heterogénea, espontánea, inorgánica y sin conducción” (Pérez Paladino, 2013: 21).³⁹⁰

El gobierno criticó esta falta de organización, oponiendo a esas demandas dispersas un conjunto de políticas públicas a las que el discurso oficial daba cierta coherencia. Mientras que en las manifestaciones la única “consigna” común (frente a la pluralidad de carteles con demandas específicas) era la entonación del himno nacional, el gobierno respondió con un tajante “somos el 54%” (de los votos). Esto ponía en un lugar ideal a las fracciones cercanas al kirchnerismo: la UIA, CACons, ADEBA, ABAPPRA, CAME, CACom. Estas cámaras serían las interlocutoras sistemáticas del gobierno, hasta el final del período bajo estudio, marginando de modo explícito a las asociaciones del campo (La Nación, 21/8/13).³⁹¹ En el marco de las elecciones legislativas, la presidenta convocó a varias reuniones sectoriales, bajo la idea de que “puede haber correcciones, no cambio de rumbo” (Página/12, 22/8/13).

Por otra parte, al carecer de un liderazgo que logre consolidar las posiciones de la cadena equivalencial, la oposición expresada en las protestas y entre los capitalistas se mantenía dispersa. Para 2015, se fueron delineando como los dos principales candidatos de la oposición Sergio Massa (Frente Renovador) y Mauricio Macri (PRO). Ninguno de ambos tuvo problemas con reunirse con diversos sectores del capital: SRA, AEA, Bolsa de Comercio y parte de la UIA. Massa buscaba representar tanto a aquellos sectores opositores dentro del BEP, como tentar a los disidentes dentro de las propias fracciones ganadoras: hablando de lo heterogéneo de su fuerza política, señaló que eran “el único espacio donde tienen representación las cuatro centrales sindicales del país, y también el campo y la industria” (Página/12, 8/8/13). Su programa buscaba reunir las críticas del conjunto del capital, y por lo tanto, habló de un escenario de “falta de previsibilidad y mirada de largo plazo”, señalando la necesidad de volver a los mercados de crédito,

³⁹⁰ Se puede señalar la repetición de una manifestación de este tipo el 18 de febrero de 2015, por una marcha convocada por fiscales opositores al gobierno, ante la muerte sospechosa del fiscal Alberto Nisman, quien había denunciado a la presidenta (La Nación, 19/2/15). Los referentes de la oposición se presentaron en la marcha, aunque sin hacerse convocantes. Los reclamos estaban orientados alrededor de la falta de seguridad y la impunidad reinantes, y la demanda por el esclarecimiento del hecho y la denuncia.

³⁹¹ En entrevista para esta tesis, Peruzotti (ADEBA) señaló que dentro del arco empresarial, se puede hablar de cámaras estrictamente kirchneristas, como CACons. Luego habría otras que dialogan con el gobierno, como la UIA o ADEBA. En el polo opuesto, como anti-kirchneristas irredimibles, el entrevistado sólo señaló a SRA, alegando que en ese caso, se trata del viejo antiperonismo de la entidad.

actualizar el tipo de cambio, garantizar la división de poderes, respetar los derechos de propiedad (La Nación, 8/8/13). Pero este programa no representaba una distinción clara del de Macri, que tampoco dudó en acercarse a la CGT opositora, en las figuras de Moyano y Barrionuevo (La Nación, 23/1/14), sin necesidad de explicitar sus vínculos con el campo (Página/12, 19/7/12).

El periódico La Nación –insospechado de simpatías con el gobierno- editorializó en su nota respecto del programa de Massa que era “casi el credo de las cámaras empresariales. (...) Es la apuesta del establishment. No tanto por convicciones de las que algunos todavía recelan, sino por capacidad de erigirse como alternativa al kirchnerismo, un movimiento que suponen agotado” (La Nación, 8/8/13). Sin embargo, esta combinación de “lo bueno” del orden kirchnerista sin “sus excesos”, era una combinación que el propio FpV podía producir. De hecho, a fines de ese año, se hizo claro que era la apuesta interna del gobierno, ser sucedido por el gobernador Daniel Scioli, que combinaba menemismo, duhaldismo y kirchnerismo sin el perfil de confrontación criticado. En una reunión en Mendoza en octubre de ese año, Scioli también se pronunció a favor de resolver las cuestiones pendientes en el frente externo y recuperar la competitividad, aunque con un perfil definido “No se van a equivocar los que apuesten a la reindustrialización del país” (Los Andes, 31/10/13). De hecho, el conocido analista de Clarín, Carlos Pagni, señaló que Scioli era el candidato del poder económico (Santucho et al., 2014).

Es que la clase dominante se concentró en generar expectativas claras sobre sus demandas en común, como plataforma compartida para cualquiera de estos candidatos. En el 50° Coloquio de IDEA de diciembre de 2014 desfilaron todos los referentes de los partidos mayoritarios: Scioli (FpV), Massa (Frente Renovador), Macri (PRO), Binner (PS), Sanz (UCR), Carrió (CC). El presidente de IDEA y director de Swiss Medical, Miguel Blanco, le señaló a Scioli el problema: “hemos perdido lugares en el mundo por decisiones erráticas” (Notas, 23/10/14). Esta síntesis expresaba con claridad el eje para el BEP: el problema no era la intervención estatal en sí, sino su carácter supuestamente impredecible; y el efecto era la pérdida de posiciones en el mercado mundial. La salida era, pues, también lógica: resolver las trabas a la inserción plena de la economía argentina en el mundo, y garantizar la previsibilidad de las decisiones asociadas.

En tal sentido, fueron expresadas las demandas de las fracciones desgarradas y desplazadas del BEP, que crearon en 2014 el Foro de Convergencia Empresarial para actuar de manera unificada. Se expresaban ahí 67 entidades empresariales, incluyendo AEA, la Mesa de Enlace, ABA, la Bolsa de Comercio y varias cámaras de comercio bilateral, aunque no contaron con la anuencia inicial de la banca nacional ni CACons (que se sumó luego), quedando la UIA dividida (Bosia, 2014b). Este Foro lanzó 2 documentos ese año, “La hora de la convergencia” de enero y “Bases para la formulación de políticas de Estado” de abril. En ambos se enfatizó que el problema era “político”, y que era necesario “dejar hacer al mercado”: la demanda principal, tal como explicamos, era previsibilidad. De hecho, el capital respondía al cuestionamiento de la presidenta, al señalar por qué no invertían sus recursos en la acumulación: si esto buscaba el gobierno, requerían “previsibilidad, estabilidad y formalidad de las reglas de juego para promover la inversión privada”. Los reclamos incluían reducción de impuestos, quita de trabas a las exportaciones, resolución de los conflictos externos, división de poderes, entre otros. En la reunión de noviembre de 2014 se hicieron presentes todos los candidatos opositores, menos Scioli.

A diferencia de otros previos intentos de unidad, este Foro sostuvo su actividad en el tiempo. En un documento presentado en junio de 2015, llamado “El rol del Estado y el buen gobierno republicano”, explicaron qué políticas consideraban no se debían tocar, sin importar qué candidato ganara las elecciones. Allí explicaron que había que defender el “capitalismo con rostro humano” que la Constitución establece (sic.). Explícitamente llamaban la atención sobre la presunción de que demandan un Estado débil, sin capacidad de intervención, bajo imputación de neoliberalismo: dejaban en claro que necesitan un Estado fuerte, presente. Esa intervención debería priorizar el respeto del Estado de derecho (la ya referida previsibilidad), pero también sostener la política social activa. Sus dudas involucraban la “intromisión” en *ciertas* actividades económicas; concretamente, aquellas que resultan rentables: cuestionaban las leyes de Abastecimiento y de Mercado de Capitales (ver sección 2) y la designación de directores de ANSES en las empresas. No había cuestionamiento alguno a que el Estado sostenga actividades productivas de menor rentabilidad relativa, como Aerolíneas o YPF.

De conjunto, entonces, la impugnación del orden político (el “relato” y las políticas públicas) por parte de las fracciones desgarradas mostró las dificultades de subordinar sus intereses al interior del propio BEP. Sin embargo, debido al carácter restringido –corporativo– de sus demandas, esta impugnación no alcanzaba para construir un nuevo orden. Durante el período analizado, el BEP buscó los acuerdos mínimos que le permitieran realizar demandas conjuntas, entre las que se resaltaron las de previsibilidad, protección del derecho de propiedad, resolución del problema de la deuda, fortalecimiento de la competitividad (contención de salarios y ajuste del tipo de cambio). Todos estos pedidos fueron atendidos por el Estado (sección 2). Mientras se incorporaban demandas comunes sin alterar la regulación del PRE, el capital industrial se mantuvo como hegemónico y las fracciones asociadas (banca nacional, construcción, comercio interno) ganaron un lugar en la coalición. Las finanzas en general fueron la incorporación más relevante del período, beneficiarias de las políticas de subsidio al consumo y del arreglo de la deuda (sección 2), que les permitió ser el sector de mayor expansión y ganancias (sección 1).

Buscando ampliar su capacidad de ordenar la sociedad, las fracciones desgarradas y las desplazadas buscaron interpelar otros actores por fuera de su clase. Los significantes “inseguridad” e “inflación” sirvieron a estos propósitos, informando ambos a partir de un discurso neoliberal. En la proyección partidaria (sección 3.1), esto irradió la búsqueda de nuevos representantes en el arco de la centroderecha. Esta alternativa, sin embargo, tenía las dificultades de no representar tampoco al conjunto del empresariado y carecer de potencia electoral suficiente. Por eso, el capital diversificó su estrategia, buscando maximizar la representación de sus propias diferencias internas a través del Congreso. Al momento de escribir esta tesis, el BEP se debatía entre la opción de dar continuidad al kirchnerismo, que le garantizaba un orden mínimo hasta que se pudiera construir una alternativa, privilegiado por las fracciones hegemónicas, apostar por un gobierno más cercano a las fracciones desgarradas y las desplazadas (PRO), o una opción intermedia (Frente Renovador). Para cualquiera de las opciones, dejaron claras sus prioridades: con diferentes ritmos, la apuesta era por el ajuste (Infobae, 26/10/14).

3.2.2. Disputas de las clases populares

Existieron dos grandes tendencias respecto de las clases populares durante este período. La reafirmación particular del gobierno y el conjunto de políticas públicas no ligadas al PRE produjeron el efecto de fortalecer la identificación con la fuerza de gobierno de una parte de los sectores populares, más allá de alianzas entre organizaciones. Por otro lado, reforzar este sesgo en el mismo momento en que se agotaba la recuperación de las condiciones de vida de las clases populares, quebró algunas de las alianzas previas.

Como ya describimos, el conflicto de 2008 tensó el escenario político, con los contendientes forzando un posicionamiento polar: o campo o gobierno. Algunas organizaciones populares (MST, MIJD y PCR) entendieron que se trataba de una revuelta popular, que desestabilizaba el régimen burgués, y por lo tanto había que apoyarla (en el caso del maoísta PCR, y en parte en el MIJD, se sumaba la interpretación de que en la protesta había elementos “campesinos”). Con un tono semejante, aunque sin ninguna expectativa insurreccional, Pino Solanas (PSur) también se acercó al agro. El sindicato de trabajadores agrarios (UATRE), bajo la dirección burocrática de Jerónimo *Momo* Venegas, se puso en una supuesta equidistancia en la contienda, ofreciéndose como mediador. En cambio, el FPDS acompañó al Movimiento Nacional Campesino Indígena (Vía Campesina) en denunciar el olvido de los verdaderos damnificados del régimen económico, los “condenados de la tierra” (Indymedia, 9/5/08).³⁹² Sin intención alguna de terciar, una parte del trotskismo (MAS, PTS y PO) no aceptó la polaridad, enfatizando que se trataba de una disputa entre capitalistas, y por lo tanto, cualquier resolución terminaría en perjuicio de la clase trabajadora.

Si bien no faltaban elementos de verdad a esta interpretación, al igual que en la coyuntura 2001/02, esto no significaba que cualquiera de las salidas de las fracciones del capital tuviera las mismas implicancias para las clases populares. Esta situación se superpuso con las afinidades políticas de las fuerzas ya identificadas con el kirchnerismo. Ya el 25 de mayo se organizó una manifestación para “detener el golpe de Barrio Norte” y apoyar al gobierno. La encabezaron la FTV, MEvita, Libres del Sur y el Frente Transversal. Durante ese acto, hubo un cruce donde el dirigente Luis D’Elía

³⁹² El Frente Nacional Campesino, integrado por el MOCAFOR (Formosa), el MOCASE (Santiago del Estero), el MAM (Misiones) y el MOCAJU (Jujuy), intentó sin éxito denunciar su situación al calor del conflicto. El antagonismo polar logró silenciar las voces discrepantes (Artese et al., 2012).

terminó golpeando de un puñetazo al ruralista Alejandro Gahan, lo que alimentó el relato opositor de la agresividad del oficialismo. D'Elía pediría perdón unos meses después por este incidente (Página/12, 10/6/08). Frente a la radicalización del referente de la FTV, que tildó de “gorilas” y “golpistas” a los defensores de la protesta rural, De Gennaro se acercó en primera instancia al dirigente de FAA Eduardo Buzzi, mostrando divisiones internas en la CTA: el diputado Claudio Lozano terminaría votando contra la resolución usando argumentos de insuficiencia de regulación (Página/12, 12/9/10). Sin embargo, Yasky –de buen diálogo con el espacio de Sabatella- se movilizaría en apoyo al el gobierno. De modo conjunto, se convocó a una marcha a Plaza de Mayo el 1° de abril, con la presidenta como oradora final. Estaban presentes el PC y el PS, una parte de la CTA, la CGT, el Frente Transversal, La Campora, MEvita, y las organizaciones de DDHH Madres de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo linea fundadora, APDH, Agrupacion de Familiares de Detenidos Desaparecidos, H.I.J.O.S. y las Abuelas de Plaza de Mayo. La CGT llamara en junio a una huelga general “por el dialogo y en defensa del gobierno popular”.

En el marco de este conflicto, el 13 de mayo se reunieron en el Cafe Gandhi unas 750 personalidades de la cultura. De esa reunion surgio la primera Carta Abierta de apoyo al gobierno, en lo que se constituyo el primer grupo de intelectuales de apoyo al kirchnerismo.³⁹³ Dos semanas mas tarde, un nutrido grupo de artistas publico una solicitada con la protesta agraria titulada “Una amenaza del pasado que agrede nuestro futuro”.³⁹⁴ Impulsado desde el multimedios Clarin, se creo el grupo de intelectuales Aurora, para respaldar los reclamos liberal-republicanos contra el gobierno. Tiempo despues aparecio Plataforma 2012, que busco una posicion mas critica del gobierno, pero sin adherirse a las criticas del campo (Pavon, 2013; Retamozo, 2012)

La importancia de estas declaraciones de apoyo al gobierno por parte de influyentes figuras publicas no puede subestimarse, porque tuvo un rol muy relevante en

³⁹³ Entre otros, se puede mencionar la presencia de Nicolas Casullo, Jose Pablo Feinmann, Leon Ferrari, Ricardo Forster, Norberto Galasso, Nestor Garcia Canclini, Julio Godio, Horacio Gonzalez, Eduardo Gruner, Noe Jitrik, Eduardo Jozami, Adriana Puigrros, Eduardo Rinesi, Federico Schuster, Horacio Verbitsky. Tambien firmaba Ernesto Laclau, quien apoyo explicita y permanentemente al gobierno, interpretandolo desde sus propias categoras conceptuales (Palermo, 2011).

³⁹⁴ Entre otros, firmaban Mercedes Sosa, Victor Heredia, Juan Gelman, Teresa Parodi, Miguel ngel Estrella, Leon Ferrari, Mempo Giardinelli, Soledad Silveyra, Jose Pablo Feinmann, Griselda Gambaro y Leonardo Favio

la construcción identitaria del kirchnerismo como fuerza nacional popular, convocando defender las conquistas obtenidas. Este llamado a respaldar al gobierno tuvo un fuerte impacto en el apoyo progresista dentro de la opinión pública, y particularmente en la construcción de organizaciones kirchneristas (Svampa, 2011). Se ha señalado que hasta ese momento, el kirchnerismo no había operado como superficie de inscripción que completara la ruptura populista: no había como tal una identidad kirchnerista, sino alianzas y acuerdos (de Ípola, 2005; Palermo, 2011).

En particular, Carta Abierta (que siguió publicando intervenciones públicas hasta el momento de escribir esta tesis) reivindicó la política y la discusión pública de las diferencias como cenit democrático, lo que, entendía, era el punto clave del proyecto kirchnerista, y por ello, reivindicable. Sobre ese punto de apoyo, se recuperaban las políticas progresistas aplicadas, en particular, las ligadas a los derechos humanos. La enumeración de logros, gestos y políticas como explicación del apoyo no era novedosa; lo diferente era que un conjunto de intelectuales irrumpieran en el espacio público dispuestos aportar a la construcción de una identidad y un relato que contenga esa enumeración de un modo coherente, operando relecturas de la historia y disputando con los grandes medios de comunicación la interpretación de la coyuntura (Mazzeo, 2011). Recuperando explícitamente las nociones gramscianas, Carta Abierta se dispuso a dar una batalla cultural, que apuntalara el proyecto oficial (Palermo, 2011; Pavón, 2013; Waiman, 2012).

¿Qué significa que la batalla fuera cultural? Lo que definía era el ámbito de la disputa política, que, siguiendo el razonamiento, superaba los límites del Estado para dirimirse en las trincheras de la sociedad civil. Frente a las entidades del agro y los medios masivos de comunicación, era necesario dar una pelea que no se resolvía sólo en los votos del FpV contra los de los partidos de centro-derecha. El objetivo, podríamos decir, era reforzar y promover ciertos valores e ideas, asociados en términos generales con la tradición nacional-popular y cierto progresismo de los sectores medios urbanos. Construir una narrativa que dé coherencia a lo que, de otra forma, constituyen simplemente significantes contiguos, afines pero desvinculados. En esta disputa cultural, pues, un nutrido grupo de intelectuales y artistas se colocó a la par del gobierno (que, por cierto, los tuvo muy en cuenta en su propia discursividad).

Sin necesidad de ahondar, se puede notar el creciente esfuerzo del oficialismo por complementar y retroalimentar el proyecto de la disputa cultural, de la mano de la creación de espacios de difusión y discusión (ver sección 2). Sin embargo, este impulso se dio, justamente, durante el período en que el PRE mostró sus límites para mejorar las condiciones de vida de las clases populares y cuando las políticas públicas se orientan en el sentido de satisfacer las demandas comunes del BEP. Es decir, en el mismo momento de reafirmarse los límites de las concesiones a las clases populares y el poder estructural del capital, la batalla cultural pretendió afirmar la construcción de una nueva hegemonía. No es trivial notar que el sujeto de esta disputa pareció ser el propio gobierno, y no una clase social específica, diluyendo así la ambigüedad constitutiva del propio kirchnerismo. Tal como ya enfatizamos, la separación relativa del gobierno de cualquier fracción del BEP, favorecía su presentación como fuerza independiente, aún cuando no dejara de tramitar las demandas de la fracción hegemónica del BEP y garantizar su lugar en el discurso oficial. Es por esto que hacemos propias las palabras de Waiman (2012: 18):

Es en este sentido que afirmamos que *aceptar el centro de la batalla como simplemente cultural implica un rasgo hegemónico* en tanto actúa como límite para pensar el conflicto y las batallas efectivas entre clases sociales, que no se agotan (aunque incluyen) lo simbólico. Se autonomiza la cultura de las relaciones de lucha entre las clases, y se monta sobre esta esfera autónoma el centro del conflicto. La operación de “culturalizar” la hegemonía funciona como elemento hegemónico en tanto el plano cultural la dominación puede asumir una multiplicidad de formas, y al limitarse el debate político a un enfrentamiento entre las mismas sin referirlas a las relaciones sociales de dominación de las que son producto, se niega la posibilidad de pensar más allá de las correlaciones de fuerza dadas.

La operación no careció de efectos dentro del campo popular. Como ya señalamos (sección 3.1), en esta etapa creció de manera sustantiva la militancia propiamente kirchnerista. La creación de Kolina y la JP Descamisados, así como la sostenida expansión de La Cámpora, presentes en Unidos y Organizados, señalaron una importante afluencia al espacio kirchnerista. Como dijimos, una gran parte de esta nueva militancia tenía un perfil juvenil, sin experiencia previa de participación política, que se acercó atraída por políticas que entendía progresivas (la resolución N° 125 y la ley de medios en primer lugar), reconociendo como horizonte de proyección política el

programa del propio gobierno (Barrau Vera, Dobruskin y Peña Boerio, 2013; Vázquez y Vommaro, 2012). En este sentido, se acercaron mucho a la lectura del kirchnerismo realizada por MEvita (Gusmerotti, 2013). La FTV (y de allí, MILES) y el Frente Transversal, que entendían que la suerte del movimiento popular estaba atada a los destinos del gobierno, y por lo tanto, aunque no necesariamente asumían como límite de acción al proyecto gubernamental, entendían que un retroceso del kirchnerismo era un retroceso popular. Este conjunto de fuerzas, todas ellas pertenecientes al campo de las clases populares, reafirmó en este período su pertenencia al espacio del FpV, y, más aún, se identificó con el kirchnerismo.

Al interior del aparato del Estado, estas organizaciones consolidaron su presencia. Además del crecimiento ya señalado de La Cámpora, MEvita y el Frente Transversal consolidaron su presencia, particularmente en el Ministerio de Desarrollo. Cuando Libres del Sur se aleja del gobierno, Ceballos fue reemplazado en la Subsecretaría de Organización y Capacitación Popular. Se creó además a fines de 2008 la Subsecretaría de Comercialización de la Economía Social, que quedó en manos del MEvita (el propio Emilio Pérsico se hizo cargo hasta 2012), y a fines de 2012 la Coordinación de Articulación Estratégica, a cargo de Cecilia Merchán (ex Frente Barrial 19 de Diciembre). La Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional también quedó en manos del MEvita (Emilce Moler), mostrando una íntima imbricación entre la política social y las organizaciones territoriales referidas. En relación a las organizaciones de DDHH, la ministra Garré, se mantuvo en primera línea (en los ministerios de Defensa primero, y de Seguridad después) hasta junio de 2013. Los juicios por los crímenes de lesa humanidad avanzaron también durante estos años, lo cual incrementó la identificación con el proyecto oficial. De hecho, gracias al impulso oficial a estos juicios, algunas de las organizaciones diversificaron sus actividades, destacándose el caso de Madres de Plaza de Mayo. El gobierno apoyó estas iniciativas.³⁹⁵

Dentro del campo sindical, el proceso de identificación kirchnerista implicó varias rupturas. Durante este período, si bien no se ingresó en una crisis, los elementos que facilitaban los acuerdos sociales entre empresarios y trabajadores se vieron

³⁹⁵ En 2011 estalló el escándalo por desvío de fondos públicos en el proyecto “Sueños Compartidos”, que involucraba al gestor de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender.

erosionados, favoreciendo el inicio de nuevas tensiones ligadas a la distribución de los excedentes (Antón et al., 2011; E. López y Cantamutto, 2013). El gobierno, en lugar de resolver estas tensiones, las templó al calor de nuevas políticas -como la aplicación a los asalariados del impuesto a las ganancias- y un constante ataque discursivo sobre las direcciones sindicales no aliadas, señalándolas como una “aristocracia obrera”, que había que distinguir del “genuino pueblo trabajador” que el gobierno vendría a representar (Castillo, 2012; Inda, 2012). Se repetía así la estrategia utilizada frente al agro, de adjudicarse la representación legítima del pueblo frente a grupos corporativos que atentaban contra la comunidad, abandonando los intentos por incorporarlos o retenerlos en su lid. La lógica fue proponer la primacía de la política y el Estado como representante de la totalidad frente a las partes en conflicto (capital-trabajo) y sus corporaciones representativas (Inda, 2012).

La CGT toleró estas tensiones durante cierto tiempo, en el cual Moyano aceptó reducir los reclamos salariales, en acuerdo con la demanda del capital de contener la crisis mundial. El apego al proyecto oficial hizo que el dirigente se pronunciara a favor de demandas del BEP contrarias (o ajenas) a los intereses de sus representados: por ejemplo, cuando apoyó la política de pago a los *holdouts* y el Club de París con el extraño argumento de que servía para “generar la apertura de líneas de crédito” (La Nación, 2/9/08). La CTA, en cambio, criticó el uso de estos recursos para el pago de la deuda en lugar de destinarlos al pago de jubilaciones (cuya legislación se encontraba en ese momento en discusión en el Congreso). Se criticaba el origen espurio de la deuda, contraída por la dictadura y renovada mediante mecanismos legales cuestionables. En la misma línea se expresaba organizaciones territoriales críticas del gobierno.

Las políticas públicas se alejaban cada vez más de las demandas de los sindicatos. Sin dudas, la política que más apoyos concitó fue la creación de la AUH, a pesar de las críticas por sus insuficientes alcances. Mientras que Moyano la calificó de “revolucionaria”, Yasky fue más medido, hablando de “un avance trascendental” (Perfil, 29/10/09). La política de formalización del empleo fue apoyada por las centrales, pero no tuvo grandes efectos más allá de contener la precarización en el marco de la crisis. En 2010, el diputado Héctor Recalde -cercano a Moyano- presentó una propuesta para que los trabajadores participen en las ganancias, que el gobierno desestimó, a presión del

capital. Ese año se aprobó en el Congreso un proyecto de ley de Lozano (CTA) y PSur, para la movilidad jubilatoria del 82%, que fue vetado por la presidenta.

El principal motivo de movilización fue, sin embargo, el reclamo salarial (contra la inflación y la tributación de impuesto a las ganancias). Con este motivo y unificados por la oposición al gobierno nacional, el 20 de noviembre de 2012 se realizó la primera huelga general contra el gobierno de Cristina Fernández, coincidiendo la CGT de Moyano, la CGT Azul y Blanca (Barrionuevo) y la CTA de Micheli (Payo Esper, 2013). Esta huelga coincidió en el breve lapso de tiempo con las movilizaciones del 8N y el momento más álgido de la disputa entre el gobierno y Clarín, lo que le aseguró buena prensa a la movilización –por oponerse al gobierno.³⁹⁶ Los paros nacionales se repitieron en abril y agosto de 2014, teniendo por reclamos centrales la inflación y el impuesto a las ganancias. Fuerzas territoriales y partidos trotskistas participaron de estas movilizaciones, sumando reclamos sobre tercerizados y otros temas.

La primera división dentro de la CGT fue en 2008, cuando la fracción ligada a las reformas neoliberales de Barrionuevo se separa de la conducción oficial, por su acuerdo con el gobierno (Arturo Fernández, 2010). En un sentido inverso, aparece la división de la CTA en 2010, cuando una fracción (liderada por Hugo Yasky) pasaría al apoyo irrestricto del gobierno. Esto dividió a la CTA, quedando en la oposición la fracción conducida por Pablo Micheli. Finalmente, luego de los intentos frustrados por tener lugares más visibles dentro de las listas oficiales en 2011, la conducción de la CGT (Moyano) se alejó del gobierno, para iniciar acercamientos con la CTA combativa y con candidatos de oposición (tanto Massa como Macri). Así, después de años de distancia, la CTA combativa y la CGT de Moyano convergieron en protestas callejeras, con demandas de aumento salarial y contra el impuesto a las ganancias (Tagina y Varetto, 2013).³⁹⁷ Una fracción de la CGT (liderada por Antonio Caló) se mantendría alineada junto al kirchnerismo. Desde 2012, las centrales de trabajadores se encontraron divididas en 5 fracciones: 2 de ellas alineadas al gobierno y 3 en oposición (Payo Esper, 2013).

³⁹⁶ Para el diario oficialista Página/12 la movilización “no fue muy importante” mientras que para el opositor La Nación “paralizó el país” (Payo Esper, 2013). Resulta evidente que la cobertura de la noticia estaba impregnada del clima de afinidades políticas de los redactores.

³⁹⁷ Los sectores dominantes y los medios masivos de comunicación avalaron el reclamo contra el impuesto a las ganancias, aunque naturalmente no se sumaron a las manifestaciones: todo pedido por bajar impuestos, y más si es a las ganancias, cuenta con su rápido apoyo.

La CGT liderada por Moyano realizó diversos acercamientos políticos al arco opositor. A principios de 2013, lanzó un frente político junto a De Narváez, Lavagna y De la Sota, haciendo público el documento “Unidos para cambiar”. En esta alianza, el sindicalista incorporó los significantes que parte de las clases dominantes estaban promoviendo (ver sección 3.2.1), en particular a través de las figuras de De Narváez y De la Sota: buscarían “aportar soluciones concretas que terminen con la inflación, los injustos impuestos al trabajo y la producción, la violencia de la inseguridad y la precarización del empleo” (Clarín, 1/5/13). Uno de los hijos del dirigente, Facundo Moyano, en cambio, se proyectó a otra variante del PF, representada por el Frente Renovador, al cual se integró como diputado (Perfil, 25/12/13). En 2014, Moyano y Barrionuevo se reunieron con la UIA y con Macri del PRO, ampliando el arco de alianzas (La Nación, 23/1/14). Es decir, al igual que hiciera en la salida de la Convertibilidad, la dirigencia de la CGT se orientó entre alternativas partidarias – preferentemente peronistas-, acoplándose a un programa diseñado desde fracciones del BEP. En este momento, se ensayaron dos variantes de ruptura, una más frontal (De Narváez, De la Sota, Macri) y una más ambigua (Massa).

A pesar de que el gobierno adjudicó toda la responsabilidad de la ruptura con la CGT a las ambiciones políticas de Moyano –que sin duda las hubo-, la situación material de la clase obrera (E. López y Cantamutto, 2013) y la presión de demandas en las organizaciones de base (Castillo, 2012) ponen en duda esta interpretación. No puede negarse el peso que ganó a partir de 2009 el movimiento de comisiones internas y cuerpos de delegados que disputaron los sindicatos a nivel de base, sin llegar a poner en cuestión la dirección burocrática (Casas, 2011; Castillo, 2012; Longo, 2011; Montes Cató, Lenguita y Varela, 2010; Payo Esper, 2013; Wyczykier, 2011). La tensión con el sector sindical se incrementó en la medida en que la competencia entre burocracias y el sindicalismo de base superó los beneficios del acuerdo con el gobierno.

Gran parte de estas comisiones internas y corrientes antiburocráticas fueron impulsadas por organizaciones trotskistas y de la izquierda independiente. Entre ellas, se destacan la Corriente Desde Abajo (ligada al PTS), y el Movimiento Intersindical Clasista y la Corriente Rompiendo Cadenas (ambas informadas desde la izquierda independiente). Estas fuerzas fueron las que protagonizaron, además, los principales

piquetes populares del período, especialmente visibles en 2010, pero que continuaron entre fines de 2011 y mediados de 2012, con múltiples protestas –que incluyeron acampes y movilizaciones- ligadas a la asignación de los planes Argentina Trabaja (Sleiman, Morua y Audisio, 2012). Con diferentes alcances, participaron de las mismas BdP, el Polo Obrero, MST-TV, el FPDS, MTD-Aníbal Verón, la CCC y el MTR-Santucho, entre otras. Este conjunto de organizaciones sindicales y territoriales compusieron el núcleo de la resistencia popular al programa oficial de gobierno.

Para el trotskismo, estaba claro que el ciclo de nacionalismo burgués se agotaba, lo cual implicaba, ajuste social, fin de las concesiones demagógicas (derechos humanos) y de la capacidad de compra de voluntades: toda discusión entre opciones del capital, ajenas a la clase trabajadora carecían de sentido, y era necesario oponerse (ver por ejemplo, el Informe político al XIX Congreso del Partido Obrero). La presencia permanente en sindicatos de base, en empresas recuperadas (siendo FASINPAT el ejemplo de mayor alcance), en conflictos clave (Pepsico, Kraft, Tenaris, entre otros) y en las universidades, se combinó con la estrategia de unidad (FIT) y una mayor presencia mediática (gracias al enfrentamiento entre gobierno y Clarín, y la reforma política que garantizaba espacios de difusión), para resultar en un crecimiento del caudal electoral del trotskismo. Como señalamos, consiguió 4 bancas en el Congreso en las elecciones de 2013, algo inédito. Algunas fracciones de la izquierda independiente decidieron en 2015 acercarse al FIT: el agrupamiento político Pueblo en Marcha,³⁹⁸ intelectuales críticos (incluyendo Economistas de Izquierda), el Frente Único MIR-OTR-FOTE, entre otras. Las discrepancias en las formas de entender la construcción política, prácticas y espacios, serían parte del debate inconcluso al momento de escribir estas líneas.³⁹⁹

En la izquierda independiente, se retomaron en este período las discusiones en torno a los espacios de disputa política, concretamente, la arena electoral (Martos y Makuc Urbina, 2014). La presencia en diversos espacios de lucha –que coincidían con los del trotskismo- impulsó una reflexión sobre los límites de una construcción al margen del Estado, lo que llevó a que algunas organizaciones decidieran presentarse en las elecciones legislativas de 2013 (ver sección 3.1). Los procesos de Bolivia y

³⁹⁸ Compuesto por una parte del FPDS, el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio social, Democracia Socialista, El Avispero (Marcha, 13/2/15).

³⁹⁹ Una excelente entrevista a Horacio Tarcus ensayaba sobre estas diferencias (Marcha, 8/5/15).

Venezuela, con los cuales muchas organizaciones se encontraban en contacto directo a través del ALBA de los Movimientos, pusieron señales sobre las posibilidades de este tipo de horizontes. Esto no demeritó otras iniciativas importantes, como la creación de coordinadoras amplias, guiadas por la lógica de construcción de poder popular, como la Corriente de Organizaciones de Base La Brecha. En los casos en que se avanzó en ese sentido, la lógica de esta izquierda no era solo electoral, pues se entendía al Estado como otra arena de disputa, inconcebible sin un contrapeso popular que lo excediera.

Los desafíos de ampliar el horizonte de interpelación sin renunciar a los principios de construcción política fueron motivo de no pocos roces. Una parte de la izquierda independiente, entendiendo también que la etapa progresiva del kirchnerismo llegó a un agotamiento, apuntó al diálogo incluso con organizaciones kirchneristas (como el MEvita). En este sentido, a diferencia del trotskismo, aceptó la idea de en la última década el gobierno hubiera tomado decisiones progresivas y realizado concesiones reales a las clases populares, derivando de ello que la filiación kirchnerista de algunas organizaciones no era mera cooptación sino convicción real. En un sentido semejante se orientó la alternativa política de la CTA, Instrumento Electoral para la Unión Popular, creada en 2009. Como se puede comprender del mismo nombre, la arena electoral estaba concebida como una herramienta para algo más.⁴⁰⁰ En sus primeros momentos de formación, el espacio coqueteó con acercamientos al partido Nuevo Encuentro (Página/12, 22/7/09). Esta alternativa no prosperó, y el nuevo partido no logró gran rendimiento electoral. Hacia 2013 se produjo un acercamiento de Unidad Popular con los instrumentos electorales creados desde la izquierda independiente (Patria Grande), y en 2015 esto se expandió a Emancipación Sur, la escisión de PSur, y el Partido del Trabajo, con el lanzamiento del Frente Popular.

Vale resaltar en este punto otro orden de conflictividad social que el gobierno dejó fuera de tramitación política, y cuya presencia en la escena pública coincidió con la década del kirchnerismo: los conflictos socio-ambientales (Costantino y Gamallo, 2014). Según explican detalladamente los autores referidos, el impulso primarizante

⁴⁰⁰ El nombre alude al proceso boliviano, que fue protagonizado por el Movimiento Al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos, un frente electoral unificado de movimientos sociales. La dirigencia de la CTA valoró positivamente la experiencia de Bolivia, tanto como la de Brasil. En ambos casos, el nuevo sindicalismo dio un paso más allá en la arena política.

extractivista del PRE se unió a limitaciones propias de estos conflictos, como aislamiento geográfico y la escalaridad del reclamo, para dificultar su resolución bajo el orden político nacional. Coincidieron en estos reclamos vecinos, productores rurales y campesinos afectados por la mega-minería y por el avance de los cultivos transgénicos, y quizás justamente por su potencial disruptivo, sus reclamos no fueron atendidos (Comelli, 2010; Costantino y Gamallo, 2014; Svampa y Sola Álvarez, 2010).

De conjunto, durante el período aquí analizado, se puede constatar el efecto de la reafirmación particular del gobierno en la emergencia de organizaciones identificadas estrictamente como kirchneristas. Las políticas no asociadas al PRE, en especial las orientadas en la ampliación de derechos ciudadanos alimentaron una lectura progresista del gobierno, que fue impulsada por una agresiva política cultural. El conflicto con el agro favoreció un posicionamiento que puso al kirchnerismo como una fuerza separada de las fracciones del BEP, en defensa de las conquistas para la comunidad política. El gobierno impulsó esta lectura y recibió el apoyo explícito de un nutrido grupo de artistas e intelectuales. La fuerza de atracción de este discurso tensionó las limitaciones materiales del PRE, que orientaban rupturas en lugar de identificaciones con el oficialismo. La aparición ya no sólo de demostraciones abiertas de apoyo por parte de organizaciones populares, sino directamente la identificación política con el kirchnerismo fue la novedad del período. Tanto la CGT como la CTA se vieron divididas por esta tensión. Las organizaciones trotskistas y de la izquierda independiente fueron protagonistas gran parte de los conflictos sociales del período, expandiendo en ambos casos sus disputas en la arena electoral.

4. Mirada de conjunto

El período analizado en este capítulo (mediados de 2008 a mediados de 2015) se caracterizó por la afirmación particularista de la fuerza en el gobierno, que implicó la consolidación de una identidad propiamente kirchnerista. Esta afirmación de la particularidad supuso un desmedro por la intención hegemónica del gobierno, al presentar fronteras menos lábiles dentro de la comunidad política. Sin embargo, justamente, es aquí donde debe enfatizarse el peligro de pensar la construcción política *desde* la fuerza en el gobierno, y no *a través de* ella. Fue en este mismo período que se

consolidó la hegemonía del capital industrial y sus socios, al tener en el gobierno un representante que garantizó el cumplimiento de sus demandas, agregándole elementos que el capital nunca hubiera considerado, en una narración que fomentó la idea de separación entre poder económico y político, facilitando el proceso de identificación popular con el kirchnerismo. Aparecieron así ya no sólo las alianzas y manifestaciones de apoyo al gobierno, sino organizaciones *identificadas* con el orden político kirchnerista.

Lo que resulta por demás relevante es que este cambio de énfasis en el proceso político se inició por la impugnación de las fracciones desgarradas del BEP al orden estructurado en el período anterior: el capital agrario, desplazado de la hegemonía política pero reafirmado en su poder económico, cuestionó de conjunto las políticas públicas, el PRE y el discurso que le daba coherencia. Es decir, el orden político entero fue enfrentado por una fracción de las clases dominantes. La estrategia política del gobierno, al afirmarse como representante del pueblo relegado frente a las corporaciones del BEP, permitió la reafirmación del carácter populista del proceso político.

Como explicamos, el PRE requería de la intermediación permanente del Estado, para arbitrar entre las diferentes necesidades de las fracciones del BEP y de éste con las clases populares. Respecto de las primeras, las tareas centrales del Estado eran compensar a las fracciones cuyos precios se encontraban congelados para subsidiar la tasa de ganancia industrial y garantizar las condiciones que favorecían el superávit comercial primario. Respecto de las segundas, el punto clave era contener las demandas por mejores condiciones de vida. A esto se sumaban otras demandas comunes del BEP, que seguirían como eje en este período: garantizar previsibilidad y resolver el problema de la deuda. Sobre estos ejes avanzó el gobierno desde el período anterior, y enfrentó las contradicciones que implicaban justo cuando estalla a nivel mundial la crisis.

Durante 2008, la impugnación del capital agrario fue incapaz de trasgredir sus propias fronteras corporativas, a pesar de postular un discurso con pretensiones universales. La tarea de expandir sus horizontes de interpelación fue retomada por partidos de oposición (especialmente, PRO, ARI-CC y UCR), que incorporaron un registro liberal-republicano como superficie de inscripción para ordenar ese discurso. Los límites de esta interpelación al interior del propio BEP obligó a buscar acuerdos

mínimos sobre los que avanzar, entre los que la contención de las demandas populares y la resolución del frente exterior estaban en primer orden. El pedido de previsibilidad se enfrentó el propio desacuerdo sobre las reglas a establecer: el capital industrial necesitaba de intervenciones que el capital agrario se negaba a aceptar.

Por su parte, el antagonismo entre este discurso y el del gobierno produjo la reafirmación del segundo como popular, lo cual inició un proceso de identificación de fuerzas sociales como propiamente kirchneristas. Esto fue incluso tematizado como una disputa por la hegemonía cultural a través de una amplia política mediática del Estado, la ampliación de derechos ciudadanos de diverso tipo y la intervención sostenida de intelectuales –agrupados en Carta Abierta. Las clases populares enfrentaron esta reafirmación antagónica del kirchnerismo en el mismo período en el que se expresan los límites en la recuperación de las condiciones de vida de la población. La presión a niveles de base por el agotamiento material de la recuperación y el carácter instrumental de los acuerdos previos llevó a la ruptura de las alianzas con la CGT y BdP. No pretendemos aquí aducir un engaño, sino enfatizar que el orden político hegemónico dirigido por el capital industrial no entraba en necesaria contradicción con la ampliación de algunos derechos sociales o de cierta disputa cultural.

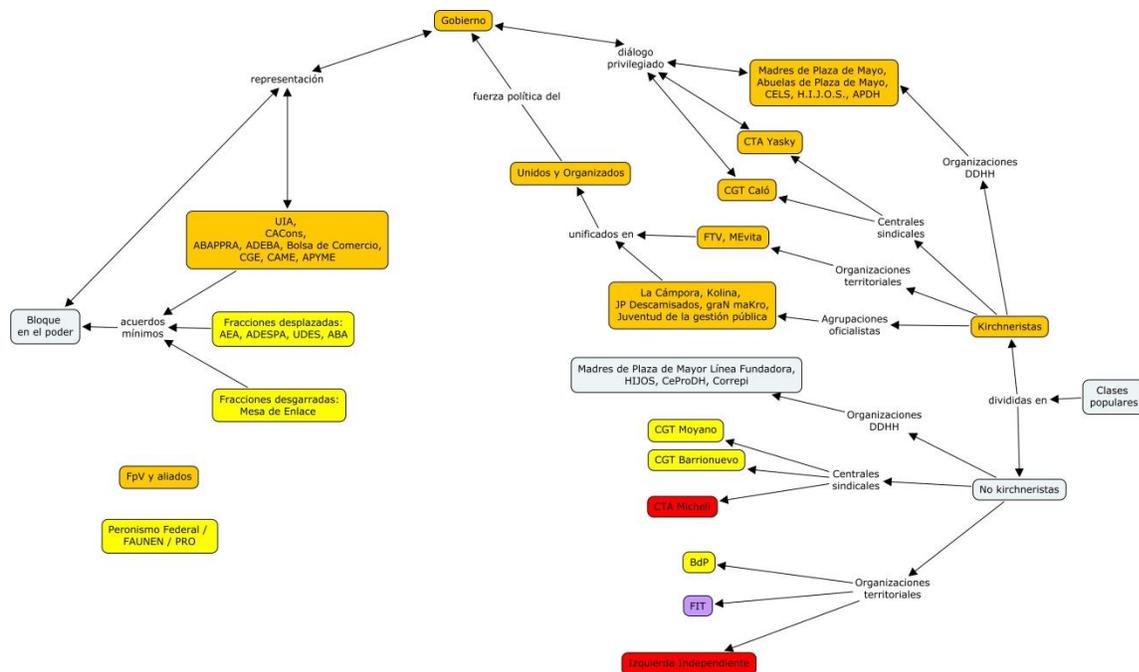
El gobierno enfatizó su carácter de representante de la totalidad, frente a reclamos particulares, corporativos, entre los que igualmente se encontraban las entidades de la Mesa de Enlace o la CGT. El lábil giro a la supuesta defensa de los intereses de la totalidad de la nación amenazada por los excesos particulares: “está bien tener grandes ganancias si se reinvierte”, “está bien redistribuir si todos cooperan”. Los sectores vulnerables se volvieron así la auténtica *plebs* que el gobierno transfigura en *populus*. Esta plebe no podía estar organizada, que significaría una particularización, sino que era representada por el propio gobierno, que sería así *nacional y popular*.

Esta tensión antagónica reestructuró el conjunto del orden político. Si el kirchnerismo se autoafirmó, produjo un desplazamiento general *a derecha* de otros partidos mayoritarios. El PRO quedó establecido como límite liberal, con la UCR, el ARI-CC y el PF buscando un espacio intermedio entre el gobierno y el PRO, para lo cual recurrieron a alianzas con fuerzas de centro-izquierda (PS, PSur, GEN, Libres del Sur). Este arco intermedio tensionó al propio gobierno, que no era inmune al contexto en

que se inserta: el Frente Renovador, FAUNEN y el propio FpV (en la figura de Scioli) buscaron representar este espacio intermedio del orden político kirchnerista y elementos más liberales. Éste era el programa mínimo común del BEP, siendo la alternativa del PRO la propuesta de las fracciones desgarradas y las desplazadas. A la izquierda de este núcleo, y sin relación con las demandas del capital, aparecen como opciones electorales el trotskismo y la izquierda independiente.

Este conjunto de relaciones entre agentes sociales y el gobierno pueden verse de modo esquemático en la ilustración 5. Podemos resaltar que el gobierno se erigió como representante de las demandas comunes del BEP, y en particular de la fracción hegemónica y sus aliados. Pero al mismo tiempo, el gobierno logró modificar el campo político entre las clases populares, que pasaron a tener por principal distinción su identidad kirchnerista o no –distinción que atravesó al conjunto de las clases. Como se puede ver, el campo político de conjunto se dividió por la identificación (o no) con el orden político kirchnerista.

Ilustración 5. Mapa social de la radicalización particularista



CONCLUSIONES

La presente tesis se preguntó por el kirchnerismo como orden político, vigente desde mayo de 2003 y, en principio, diciembre de 2015, completando los mandatos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Identificamos tres cuerpos de estudios sobre el tema, uno ligado a la situación regional, otro desde una matriz marxista, y un tercero desde una matriz postfundacional (capítulo 1). La apuesta de la investigación fue a construir una mirada conceptual que permitiera dar cuenta del fenómeno de cambio en la sociedad argentina contemporánea, haciendo dialogar y completando los estudios señalados.

La mirada, sin embargo, no se restringió a las figuras de los líderes, ni a sus gobiernos, ni tampoco a la fuerza política creada desde allí. El kirchnerismo, en esta tesis, se entendió como una propuesta de tareas y responsables para que la sociedad alcance su plenitud, una distribución de roles y tareas entre los agentes sociales para alcanzar objetivos comunes. El carácter construido y disputado del orden político fue explicado a través del proceso que le dio forma. Los agentes sociales se imbrican en relaciones de conflicto y solidaridad para disputar las relaciones de poder, y lo hacen a través de acciones identificables que se pueden ordenar conceptualmente. El proceso político, sin embargo, no ocurre en el vacío, sino que se trata de eventos enraizados en una historicidad que marca trayectorias de regularidad y cambio. Las relaciones sociales siempre se juegan en mutaciones no evolutivas, donde nada es completa novedad ni total conservación. La herramienta de análisis que propusimos para pensar esa dinámica en torno a las relaciones de dominación y explotación fue la categoría de *modo de desarrollo*. Para analizarlo, estudiamos las disputas de los agentes sociales de clase y su interacción con el sistema de representación partidaria. Esto implicó definir qué entendíamos por estos agentes, en un rescate de la clase social para el estudio del conflicto político, que evitara hiatos entre la estructura y la acción. Dando lugar a un rol activo de la representación organizada: en tal sentido, los principales agentes considerados fueron organizaciones de las clases populares y del bloque en el poder.

El argumento defendido ha sido que se trató de un orden de tipo hegemónico, dirigido por una fracción del capital. Todo orden político está sometido a presiones de

cambio y conservación: algunos de ellos alcanzan cierta estabilidad en el tiempo, otros no. Pero la característica de estabilidad debe distinguirse del carácter hegemónico, pues no son equivalentes, como la perspectiva postfundacional parece asumir. Acordamos con este planteo, como también lo hacen los planteos derivados de la propuesta teórica de Poulantzas, en que la mediación del Estado capitalista moderno requiere de una “cuota” de hegemonía para cualquier fuerza social que busque gobernar. El problema, entendemos, es que esto no nos permite distinguir entre diferentes órdenes políticos dentro del capitalismo moderno: ni siquiera las dictaduras militares se basan en la pura coerción física. Según discutimos (capítulo 2), creemos atinado predicar la hegemonía de órdenes políticos que incluyan mecanismos de consenso activo de las clases populares, a través de la consideración de sus demandas dentro del orden político (lo que expresa en políticas públicas y un discurso gubernamental que las consienta), logrando que (algunas de) sus organizaciones reconozcan explícitamente su anuencia.

Esto se distingue entonces de órdenes basados en mecanismos de coerción y consenso negativo, que tienden a excluir las demandas de las clases populares, desorganizándolas. Usando el contrapunto antes propuesto, esto marcaría la diferencia entre el orden neoliberal y el kirchnerista: mientras que en el primero las clases populares cada vez que pudieron organizarse lo hicieron para expresar su desacuerdo, en el segundo una parte de las mismas lo hizo –con bastante sistematicidad– para dar cuenta de su apoyo. Por supuesto, se puede discutir que se trata de una cuestión de grados; pero entendemos que para un orden político estable es posible identificar la presencia regular del atributo definitorio: la expresión de las clases populares a través de su representación organizada para dar cuenta de su apoyo. Mientras que los estudios desde la perspectiva regional no abordan este problema y trazan relaciones esquemáticas entre gobiernos y clases populares, los de la matriz marxista tienden a entender el orden kirchnerista como pura dominación de clase; en el mejor de los casos, como revolución pasiva. Los estudios postfundacionales, en cambio, reconocen como característico este rasgo hegemónico.

Sin embargo, estos últimos trabajos tienen dificultades para establecer con claridad quiénes son los agentes que construyen hegemonía, resultando ésta un efecto

estructural (del discurso). En el mejor caso, atribuyen la agencia a la fuerza política gobernante. En tal sentido, nuestra investigación polemiza con esta interpretación, estableciendo con claridad al capital industrial como el agente de clase que dirigió el proceso. Esta dirección no debe entenderse ni como una prefiguración proyectada del orden, ni como un comando centralizado del accionar del resto de los agentes y representantes partidarios. El carácter dirigente lo define que sea *su interpretación* del orden, *sus* propuestas de *objetivos* sociales comunes, *sus demandas* las que guían la consecución de plenitud social, dándole, por supuesto, un *rol central* en tal tarea.

El capital industrial pudo hacer esto a través de diferentes tipos de intervenciones en múltiples espacios a lo largo del período estudiado. Su propuesta de orden se superpuso con la disputa protagonizada por las clases populares: éstas, con gran capacidad organizativa y disruptiva, no pudieron proponer y generalizar un orden político propio. Los intentos del resto del BEP de sostener un orden diferente eran infructuosos, toda vez que se aislaban más y más con el gobierno del resto de las fuerzas sociales. Las clases populares, protagonistas de la caída del orden neoliberal, no desaparecieron del mapa en los años siguientes, sino que exacerbaban las interpretaciones y estrategias presentes. Identificamos tres vínculos discursivos en disputa entre las organizaciones populares (el espacio piquetero; la orientación nacional-popular junto a la CTA y organismos de DDHH; la CGT y el puente al Grupo Productivo), ninguno de ellos protagonista excluyente del conflicto político.

A pesar de las rencillas internas, la Unión Industrial no dejó de ser el principal representante de esta fracción del capital. Su accionar puede seguirse en un arco que fue desde la escisión interna del BEP, el impulso a sus demandas mediante un proceso de generalización que involucró parte de las clases populares (capítulo 3), llegando a orientar de modo directo las políticas públicas (capítulo 4), a un retiro gradual del vínculo con el gobierno para afianzar vínculos con el BEP escindido, en la misma temporalidad en que el gobierno reafirmó su defensa del orden impulsado por el capital industrial (capítulos 5 y 6). Su *conjunto de alternativas fue el que se impuso y sostuvo*, a un grado tal que su presencia para defenderlo pudo diluirse de la expresión pública, quedando su reafirmación en manos del gobierno, e incluso de organizaciones populares.

Posiblemente con un interés meramente instrumental, el capital industrial inició un proceso de ampliación de sus alianzas, con la creación del Grupo Productivo y el diálogo con la CGT, que fue modificando sus demandas en un sentido de generalización, lo que, a la postre, permitiría plantearlas como objetivos de la sociedad entera. En tanto estos se transformaron en políticas públicas y discurso gubernamental, el apoyo excedió las alianzas –instrumentales- para transformarse en algo más. La hegemonía define al orden político y tiene un agente identificable, sin ser obra deliberada, planificada de éste.

El capital industrial no sólo logró impulsar sus demandas inicialmente, sino que las sostuvo durante todo el período estudiado; es por ello que el BEP permaneció escindido. Este punto es relevante y necesitamos remarcarlo una vez más: si bien el BEP como *bloque* se mantuvo inalterado, sufrió un *cambio interno* de sus fracciones, donde las financieras y las privatizadas perdieron gravitación frente a la industrial y sus socios. Llamamos a las primeras fracciones desplazadas no porque hayan salido del BEP, sino porque perdieron su primacía. Pero más llamativo aún, las fracciones productivas no industriales –concretamente, el capital concentrado agropecuario- afianzaron su poder estructural, siendo ganadoras en términos económicos, al mismo tiempo que perdieron poder político; denominándolas por ese motivo fracciones “desgarradas”. Este desfasaje, como vimos, es la clave para entender el conflicto de 2008, y derivado de allí, para explicar la identidad kirchnerista emergente.

Por supuesto, nada de esto era posible sin la mediación activa de la representación partidaria. No en vano, a pesar de que sostenemos que fue una fracción de la gran burguesía la que construyó hegemonía, el fenómeno en cuestión lo conocemos como *kirchnerismo*. Al afirmar la hegemonía que favorece al capital industrial, no decimos que éste ocupó el comando del Estado; los partidos políticos (y sus líderes) intervinieron creativamente en la representación de las demandas sociales, dándoles forma más allá de un mero mandato. En tal sentido, los gobiernos de Rodríguez Saá y Duhalde permitieron que las demandas del GP se transformaran en políticas públicas, alterando incluso el discurso que las explicaba. Es interesante que esto produjo un cambio en la forma en que gran parte de las organizaciones populares entendían en lugar del Estado, y a partir de ello, revisaran sus estrategias de acción y alianzas. La forma

populista del proceso político, pues, marcó una temporalidad propia en la función de representación. Con estos gobiernos quedó claro que el orden político se había modificado, pero la ruptura no estaba completa. Si los estudios de la perspectiva regional omiten este interregno, algo parecido hacen los de la matriz postfundacional, que interesados por el discurso (oficial) no ofrecen distinciones claras entre estos gobiernos y el de Néstor Kirchner. Los estudios de la perspectiva marxista, en cambio, dan una relevancia mayúscula a estos, al punto de asumir que el resto del período se entiende como la preservación del orden estructurado en este momento.

Ninguna de estas opciones, creemos, es correcta. La llegada de Kirchner al gobierno mediante elecciones libres (condiciones de enunciación), cuando los efectos “inclusivos” del PRE empezaban a ser visibles (condiciones de recepción), permitió que el discurso interpelara a las clases populares. Los DDHH fueron el signifiante agregado a la cadena de equivalencias, lo que permitió una relectura de la historia nacional desde la última dictadura militar como la disputa por relegar y excluir al pueblo de la comunidad política. Estos tres elementos son importantes para comprender por qué Kirchner completó la ruptura populista y no sus antecesores, pero también para dar luces sobre por qué las clases populares –a través de algunas de sus organizaciones- expresaron su apoyo: no por engaño o por una mera transacción (anuencia por recursos). Un conjunto de organizaciones de orientación nacional popular se vieron acogidas en el nuevo discurso oficial. La estrategia del kirchnerismo para canalizar esta reconfiguración de las fuerzas sociales y partidarias fue la transversalidad. Si bien el modo de desarrollo no cambió, se abrió una nueva fase, y una de sus nuevas características es esta relación con las clases populares. Las relaciones de dominación y explotación, claro, se sostuvieron; pero al mismo tiempo mutaron, y es posible dar cuenta de esto: un nuevo orden político se consolidó, uno de tipo hegemónico.

Resultado de la impugnación de las fracciones desgarradas del BEP al orden político en 2008, se abrió un nuevo momento, que denominamos de reafirmación particularista. Desde el gobierno se buscó afianzar la diferencia respecto de los agentes contenciosos, a los que interpretó como corporaciones con demandas particulares, posicionándose como defensor del interés genuinamente nacional, representante de la

comunidad política total. Las fracciones desgarradas iniciaron una interacción novedosa con las fracciones desplazadas del BEP, pero también con los partidos de oposición mayoritaria, en un intento por superar las barreras corporativas de su reclamo original. Elementos de liberalismo y constitucionalismo ofrecieron significantes para interpretar el proceso, estableciendo cadenas de equivalencias nuevas, aunque aún huérfanas de liderazgo unívoco al momento de escribir estas líneas.

El antagonismo renovado como forma de construir fuerza política impulsó a un conjunto de fuerzas sociales y políticas a defender el proyecto nacional representado por el gobierno, iniciándose la disputa “cultural”. Se produjo un proceso de identificación política con la fuerza gobernante, más allá de alianzas entre organizaciones: se puede afirmar que se constituye en uno de los hitos constitutivos más relevante. El kirchnerismo como identificación política, de hecho, excedió las organizaciones existentes, apareciendo otras nuevas, basadas en su referencia al gobierno. El discurso gubernamental se continuó sosteniendo sobre significantes como “industrialización”, “producción”, “crecimiento con inclusión”, definiendo con claridad el rol prioritario del capital industrial como protagonista del desarrollo que permitiera la reparación del pueblo argentino excluido.

Es muy interesante resaltar dos puntos al respecto. El primero es que justamente por esta *nueva* polarización, el orden político sufrió algunos cambios que no permiten pensarlo como la mera repetición de sí mismo desde 2002. Los términos del antagonismo a partir del embate de las fracciones desgarradas fueron relativamente novedosos, y cambiaron las relaciones entre partidos, organizaciones populares y el BEP. Debe enfatizarse, pues, el peligro de pensar la construcción política *desde* la fuerza en el gobierno, y no *a través de* ella. La hegemonía del capital industrial y sus socios se consolidó al tener en el gobierno un representante que garantizó el cumplimiento de sus demandas, agregándole elementos que el capital nunca hubiera considerado, en una narración que fomentó la idea de separación entre poder económico y político, facilitando el proceso de identificación popular con el kirchnerismo.

El segundo es que el momento grafica con claridad la inconmensurabilidad de lo político: no había nada definido *a priori* que impidiera a las fuerzas en conflicto haber

tomado otras resoluciones. Las tensiones del PRE, de las políticas públicas, pero también de la disputa entre fracciones del BEP y de éstas con las clases populares, se condensaron en este episodio –que duró meses-, siendo factibles otras salidas. Esto no significa que la situación fuera indeterminada, pues las tensiones contenidas surgen de la misma estructuración del orden político. Pero sí significa que era imposible predecir el resultado: la historicidad sirve para explicar las tensiones del proceso, los cursos de acción posibles son múltiples. Para graficar este punto, vale la pena resaltar el escenario electoral dispuesto al momento de escribir estas líneas, que hace el resultado de octubre de 2015 impredecible, sin por ello estar indeterminado: las fuerzas en disputa se describieron aquí. Lo mismo aplica para el modo de desarrollo: hasta el momento, no podemos hablar de una nueva etapa, distinguible de la abierta con la dictadura; sin embargo, la aplicación de nuevas políticas públicas en los últimos años habilita tanto a modificaciones estructurales más hondas, como a una remoción de los elementos disruptivos. El resultado de la contienda no es, por supuesto, solo electoral, sino que hunde sus raíces en la disputa política entre agentes de clase y partidos por la interpretación de la situación y las modificaciones necesarias para lograr avanzar hacia la –inalcanzable- plenitud de Argentina.

Lo anterior nos lleva a proponer varios puntos a considerar teóricamente, sin intenciones de cubrir en este cierre todos los problemas. En primer lugar, el proceso político se juega siempre entre continuidades y rupturas. Si esto es válido para un cambio de tipo revolucionario, más aún aplica al populismo, y esto no es mácula alguna. Hemos propuesto el concepto de modo de desarrollo, y utilizado sus dimensiones para explicar esta mutación de las relaciones sociales bajo un nuevo orden político. Las relaciones de dominación y explotación subsisten en tanto la sociedad sigue siendo capitalista, pero el cambio en su forma concreta no es trivial. Creemos, no obstante, que es posible indagar con mayor profundidad sus alcances conceptuales y especificar mejor la metodología que lo acompaña.

En segundo lugar, respecto de la forma populista del proceso, entendimos atinado recuperar las relaciones con el PRE, de modo de no desvincular de modo tajante la política de la economía. Si la reducción economicista hizo mucho mal a una

comprensión acabada de los procesos, el exceso politicista no nos parece una salida adecuada. El populismo como pura lógica de la política incurre en excesos que vuelve dificultoso distinguirlo de la demagogia. Entendido como puro engaño, tampoco agrega nada valioso a la comprensión de un proceso. Como vimos aquí, la estructuración del PRE tuvo implicancias en la posibilidad de interpelar a las clases populares, pero también en las tensiones que llevaron a la impugnación de las fracciones desgarradas. Las formas de las relaciones de dominación interactúan con las formas de explotación.

Esto no lleva a subsumir una vez más una dimensión a otra. De hecho, en un hallazgo relevante de esta tesis, se distinguió un desfase relevante entre economía y política al hablar de fracciones desgarradas del BEP. Los análisis que reducen el proceso a una economía política a veces confunden ganancias con dirigencia política, lo que impide notar distinciones relevantes para comprender el proceso: las propias fracciones hegemónicas debieron *construir* su primacía, incluso cuando en el camino perdieran el control del proceso, resultando ganadoras luego de haber hecho la operación política. Este desfase constituye un tercer punto que merece más atención, para evaluar mecanismos propios de cada dimensión del modo de desarrollo y sus interacciones.

En cuarto lugar, vale la pena detenerse en la renovación de la perspectiva clasista. Según afirmamos en esta tesis, las clases no se definen por el lugar que ocupan en las estructuras –política y económica- sino que requieren de la actuación a través de representantes, que –aún tras el embate neoliberal- siguen siendo organizaciones colectivas. ¿Cuál es la ventaja de hablar de agentes de clase? Que nos permite comprender la agencia detrás del proceso, notando interpretaciones y demandas en pugna, interacciones, oportunidades y limitaciones, sin por ello asumir actores *ad hoc* para cada paso de la investigación. Predicar algo de los agentes que actúan en los procesos nos permite, además, mejorar la comprensión del populismo. A partir de 2008, el gobierno (populista) enfrentó la posibilidad real de una ruptura del orden político por parte de fracciones del BEP... bajo una forma populista. Alternativamente, ¿hubiera sido posible el kirchnerismo como populismo sin la anuencia expresa de organismo de DDHH o de movimientos piqueteros? La perspectiva postfundacional llega a

conclusiones no siempre acertadas al omitir el análisis de una parte de las fuerzas sociales determinantes del proceso político.

Aunque teóricamente esto no produzca mayores problemas para el enfoque postfundacional, los estudios empíricos tienden a pasar apresuradamente de la lógica política a un cierto sustrato social. Consideramos más apropiado, pues, afirmar la necesidad de considerar demandas de las distintas clases. Esto, nuevamente, no reduce el análisis a una constatación de intereses de clases fijas en las políticas públicas: las propias demandas son constituidas al fuego de la disputa, y las clases se expresan en distintas organizaciones, que interpretan las situaciones y actúan en consecuencia. De hecho, explicamos ya, las tradiciones a las que recurrían las diferentes organizaciones populares impactaron en la interpretación de las mismas políticas, generando acercamientos con el gobierno para unas, y distancias para otras. De la misma forma, las distintas fracciones del BEP requirieron de significantes en disputa para interpretar la situación y actuar: ¿por qué otro motivo el capital agropecuario concentrado, que claramente obtuvo ganancias muy superiores a años previos, se opuso al orden político?

De lo anterior podemos resaltar, en quinto lugar, la consideración del discurso como una arista de la disputa entre agentes. La realidad sólo es aprehensible a través de significantes, pero esto no hace que la realidad *sea* un discurso.⁴⁰¹ La polémica entre interpretaciones de diferentes agentes sobre una realidad que siempre las excede es parte relevante del proceso político, y requiere de la detenida consideración. Pero al entenderlo como una parte de la disputa, su poder no es total ni totalizante, aceptando la polémica como constitutiva de la realidad. El discurso enunciado desde el poder ejecutivo del Estado tiene una fuerza particular, pero de ninguna forma agota la disputa. Sería apropiado buscar estrategias metodológicas más propicias para captar estas polémicas, para lo cual el diálogo con la lingüística sería particularmente prolífico.

Finalmente, sobre los usos de la hegemonía. Hemos propuesto una manera específica de entender la misma, que posiblemente sea motivo de discordia, pero que

⁴⁰¹ En lingüística se conoce esta posición como hipótesis fuerte de Sapir-Whorf, desacreditada por determinista –incluso en su versión débil. Esta discusión atraviesa el campo de estudios de la relación entre lengua y sociedad, aceptándose en la actualidad la perspectiva que propone el discurso como terreno de negociación permanente entre todos los actores participantes de la interacción.

consideramos útil y apropiada para estudiar y distinguir entre órdenes políticos. No refiere a un tipo de acción política –que han tipificado otros autores- ni a la condición estructural moderna de generalización de las propuestas a través del Estado, la necesidad de *nacionalizar* las demandas particulares. Sobre esta base, se tiende a afirmar la construcción de hegemonía con cada elección gubernamental, lo cual, creemos, demerita las luces que esta perspectiva puede aportar. Según propusimos, refiere a un tipo específico de forma de la dominación, que involucra la anuencia expresa de las clases populares. No repetimos la discusión, pero enfatizamos la propuesta, y la necesidad de indagarla teóricamente.

Los seis puntos recién enunciados constituyen líneas de indagación, conceptual y empírica, que surgen de esta tesis como puntos clave de debate, con sus limitaciones. Entendemos que sólo en esta imbricación teórico-empírica puede avanzar la investigación en ciencias sociales. Vale la pena resaltar el énfasis expuesto: sin demérito por las herramientas que aportan cada una de las disciplinas, creemos que es necesario apostar por una comprensión no segmentada de la realidad social. Porque, a fin de cuentas, la apuesta de esta investigación no es el conocimiento por sí mismo, sino en la perspectiva de actuar en la realidad que se indaga.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AAVV. (2007). *Reflexiones sobre el poder popular*. Buenos Aires: El Colectivo.
- Aboy Carlés, G. (2001a). *Las dos fronteras de la democracia argentina. La reformulación de las identidades políticas de Alfonsín a Menem*. Rosario: Homo sapiens ediciones.
- Aboy Carlés, G. (2001b). Repensando el populismo. En *XXIII Congreso Internacional Latin American Studies Association* (p. 42). Washington.
- Aboy Carlés, G. (2005). Populismo y democracia en la Argentina contemporánea. Entre el hegemonismo y la refundación. *Estudios Sociales*, 28(1), 125-137.
- Aboy Carlés, G. (2010). Populismo, regeneracionismo y democracia. *POSTData*, 15(1), 11-30.
- Aboy Carlés, G. (2013). De lo popular a lo populista o el incierto devenir de la plebs. En G. Aboy Carlés, S. Barros y J. Melo (Eds.), *Las brechas del pueblo. Reflexiones sobre identidades populares y populismo* (pp. 17-40). Los Polvorines, Argentina: UNDAV Ediciones.
- Aboy Carlés, G. (2014). El declive del kirchnerismo y las mutaciones del peronismo. *Nueva Sociedad*, (249), 4-15.
- ACTA. (2011, noviembre 22). A diez años del 19 y 20 de diciembre: De Gennaro, «el fin de la dictadura». *Argenpress*. Buenos Aires.
- Adamovsky, E. (2007). Historia y lucha de clase: repensando el antagonismo social en la interpretación del pasado. *Nuevo Topo*, (4), 7-33.
- Adamovsky, E. (2013). «Clase media»: reflexiones sobre los (malos) usos académicos de una categoría. *Nueva Sociedad*, (247), 38-49.
- Adamovsky, E. (2015). Anexo para la séptima edición: Observaciones teóricas y metodológicas a propósito de Historia de la clase media argentina. En *Historia de la clase media argentina: Apogeo y decadencia de una ilusión, 1919-2003* (pp. 497-514). Buenos Aires: Booket/Planeta.
- Águila, G. (2012). La Historia reciente en la Argentina: un balance. *Historiografías*, (3), 62-76.
- Aguilar, S. y Funes, M. J. (2011). De lo macro a lo micro en el análisis relacional de Charles Tilly. En M. J. Funes (Ed.), *A propósito de Tilly. Conflicto, poder y acción colectiva* (pp. 77-103). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

- Aguirre, E. (2007, diciembre). Acerca de la inseguridad y el miedo al delito. *Revista electrónica Derecho Penal Online*.
- Aibar Gaete, J. (s. f.). Lo imaginario: el olvido de Laclau. *Diecisiete, teoría crítica, psicoanálisis, acontecimiento*.
- Aibar Gaete, J., Cortés, F., Martínez, L. y Zaremberg, G. (2013). Introducción. En J. Aibar, F. Cortés, L. Martínez y G. Zaremberg (Eds.), *La helicoide de la investigación: metodología en tesis de ciencias sociales* (pp. 13-56). México: FLACSO México.
- Aizenman, J. y Lee, J. (2005). *International Reserves: Precautionary vs. Mercantilist Views, Theory and Evidence* (No. 05-198).
- Alavi, H. (1977). El Estado en sociedades poscoloniales: Pakistán y Bangladesh. En H. Sonntag y H. Valecillos (Eds.), *El Estado en el capitalismo contemporáneo* (pp. 184-223). Madrid: Siglo XXI.
- Alesina, A. y Drazen, A. (1991). *Why are stabilizations delayed?* (No. 3053). Cambridge, MA.
- Alexander, J. y Giesen, B. (1994). De la reducción a la vinculación: la visión a largo plazo del debate micro-macro. En AAVV (Ed.), *El vínculo micro-macro* (pp. 9-58). Guadalajara: Gamma Editorial.
- Allen, V. (1981). La diferenciación de la clase obrera. En *Clases y estructura de clases* (pp. 76-100). México: Nuestro Tiempo.
- Alonso, L. (2007). Sobre la existencia de la historia reciente como disciplina académica. Reflexiones en torno a Historia Reciente. Perspectivas y desafíos de un campo en construcción. *Prohistoria*, XI(11), 191-204.
- Althusser, L. (1970). *Ideología y aparatos ideológicos del Estado. Freud y Lacan*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Althusser, L. y Balibar, É. (1990). *Para leer el capital*. México: Siglo XXI.
- Alvater, E. (1977). Notas sobre algunos problemas del intervencionismo del Estado. En H. Sonntag y H. Valecillos (Eds.), *El Estado en el capitalismo contemporáneo* (pp. 88-133). México: Siglo XXI.
- Amico, F. (2008a). Argentina: diferencias entre el actual modelo de dólar alto y la convertibilidad. *Investigación Económica*, LXVII(264), 63-93.
- Amico, F. (2008b). Ciclo devaluatorio, conflicto distributivo y restricción externa en Argentina. En *4° Coloquio Internacional del SEPLA* (p. 14). Buenos Aires.

- Amico, F. (2008c). Sobre el ciclo económico argentino: de Diamand a Goodwin. En *II Jornadas de Economía Política* (p. 27). Los Polvorines, Argentina: UNGS.
- Amico, F., Fiorito, A. y Hang, G. (2011). *Producto potencial y demanda en el largo plazo: Hechos estilizados y reflexiones sobre el caso argentino reciente* (No. 35). Buenos Aires.
- Anderson, P. (1978). *Las antinomias de Gramsci. Estado y Revolución en Occidente*. Barcelona: Fontamara.
- Antón, G., Cresto, J., Rebón, J. y Salgado, R. (2011). Una década en disputa. Apuntes sobre las luchas sociales en la Argentina. En M. Modonesi y J. Rebón (Eds.), *Una década en movimiento. Luchas populares en América Latina en el amanecer del siglo XXI* (pp. 19-44). Buenos Aires: CLACSO.
- Arceo, E. (2006). El fracaso de la reestructuración neoliberal en América Latina. Estrategias de los sectores dominantes y alternativas populares. En E. Basualdo y E. Arceo (Eds.), *Neoliberalismo y sectores dominantes* (pp. 27-65). Buenos Aires: CLACSO.
- Arceo, E. (2011). Argentina en la periferia próspera. Renta internacional, dominación oligárquica y modo de acumulación., 1-5.
- Arcidiácono, P., Carmona, V. y Straschnoy, M. (2011). La asignación universal por hijo para protección social: rupturas y continuidades, ¿Hacia un esquema universal? *Revista Margen*, (61), 1-16.
- Arcidiácono, P., Fairstein, C. y Kletzel, G. (2009). El «enfoque de Derechos» en políticas sociales y la experiencia de judicialización del Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados: ¿Por la buena senda? En V. Abramovich y L. Pautassi (Eds.), *La revisión judicial de las políticas sociales: estudio de casos en Argentina* (pp. 91-142). Buenos Aires: Ediciones del Puerto.
- Arditi, B. (2009). Argumentos acerca del giro a la izquierda en América Latina ¿Una política post-liberal? *Latin American Research Review*, 43(3), 59-81.
- Arditi, B. (2015). El pueblo como representación y como evento. En C. De la Torre (Ed.), *The Promise and Perils of Populism. Global Perspectives* (pp. 91-112). Lexington, EUA: University of Kentucky Press.
- Arencibia, F. (2013, julio 12). Más allá del «desendeudamiento» la deuda sigue creciendo. *Argenpress*, p. 5. Buenos Aires.
- Argenpress. (2004, enero 1). Las Madres de Plaza de Mayo respaldan a Nestor Kirchner. *Argenpress*. Buenos Aires.

- Aricó, J. (2005). *La cola del diablo*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Aricó, J. (2010). *Marx y América Latina*. Buenos Aires: FCE.
- Aróstegui, J. (2004). *La historia vivida. Sobre la historia del presente*. Madrid: Alianza.
- Arrighi, G., Hopkins, T. y Wallerstein, I. (1999). *Movimientos antisistémicos*. Madrid: Akal.
- Artese, M., Cresto, J., Gielis, L. y Barrera, M. (2012). ¿El campo somos todos?: El enfrentamiento de significaciones en torno a la protesta de empresarios agrarios en 2008. En *VII Jornadas de Sociología de la UNLP*. La Plata, Argentina: Universidad Nacional de La Plata.
- Astarita, R. (2001). Ciclos económicos en la Argentina de los noventa. *Revista Herramienta*, (16).
- Astarita, R. (2005). Sobre Estado y relaciones sociales. Una aproximación desde el punto de vista del método. *Realidad Económica*, (212), 53-77.
- Astarita, R. (2006). *Valor, mercado mundial y globalización*. Buenos Aires: Kaicrón.
- Astarita, R. (2008). Fundamentos metodológicos en economía neoclásica y economía política. Buenos Aires: Revista Realidad Económica.
- AUNO. (2011, diciembre 19). La consulta del FRENAPPO, preludio de aquellos días. *Agencia Universitaria de Noticias y Opinión*. Lomas de Zamora.
- Auyero, J. (2007). *La zona gris. Violencia colectiva y política partidaria en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Azpiazu, D., Forcinito, K. y Schorr, M. (2001). *Privatizaciones en la Argentina: renegociación permanente, consolidación de privilegios, ganancias extraordinarias y captura institucional*. Buenos Aires.
- Azpiazu, D. y Schorr, M. (2002). *Privatizaciones, rentas de privilegio, subordinación estatal y acumulación del capital en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires.
- Azpiazu, D. y Schorr, M. (2003). La renegociación de los contratos entre la Administración Duhalde y las prestatarias de servicios públicos. ¿Replanteo integral de la relación Estado-empresas privatizadas o nuevo sometimiento a los intereses de estas últimas? *Realidad Económica*, (193).
- Azpiazu, D. y Schorr, M. (2010). La industria argentina en la posconvertibilidad: reactivación y legados del neoliberalismo. *Problemas del Desarrollo*, 41(161), 111-139.

- Azpiazu, D. y Schorr, M. (2011). La industria argentina en las últimas décadas: una mirada estructural a partir de los datos censales. *Realidad Económica*, (259), 12-41.
- Azpiazu, D., Schorr, M. y Manzanelli, P. (2012). *Concentración y extranjerización*. Buenos Aires: Capital Intelectual.
- Bachrach, P. y Baratz, M. (1962). The two faces of power. *The American Political Science Review*, 56(4), 947-952.
- Bachrach, P. y Baratz, M. (1963). Decisions and Nondecisions: An Analytical Framework. *The American Political Science Review*, 57(3), 632-642.
- Balibar, É. (1977). *Sobre la dictadura del proletariado*. (J. (traductora) Cordero y G. (traductor) Albrac, Eds.). México: Siglo XXI.
- Balsa, J. (2006). Las tres lógicas de la construcción de la hegemonía. *Revista Theomai*, (14), 16-36.
- Balsa, J. (2010a). Hegemonía y lenguaje. En *Primeras Jornadas Debates Actuales de la Teoría Política Contemporánea* (p. 21). Buenos Aires.
- Balsa, J. (2010b). Las dos lógicas del populismo, su disruptividad y la estrategia socialista. *Revista de Ciencias Sociales*, (17), 7-27.
- Barba Solano, C., Ordóñez Barba, G. y Valencia Lomelí, E. (2009). Introducción. En C. Barba Solano, G. Ordóñez Barba y E. Valencia Lomelí (Eds.), *Más allá de la pobreza. Regímenes de bienestar en Europa, Asia y América* (pp. 9-36). Guadalajara/Tijuana: Universidad de Guadalajara/El Colegio de la Frontera Norte.
- Barbieri, G. (2007). Las huellas: la persistencia del peronismo en el kirchnerismo. En P. Biglieri y G. Perelló (Eds.), *En nombre del pueblo. La emergencia del populismo kirchnerista* (pp. 123-144). Buenos Aires: UNSAMedita.
- Barbosa, S. (2010). Menemismo y kirchnerismo en Argentina: un análisis político discursivo de su construcción hegemónica. *Pensamiento Plural*, (6), 11-34.
- Barbosa, S. (2012). La incipiente formación de la identidad popular en el primer kirchnerismo (2003-2007). *Pensamiento Plural*, (10), 23-57.
- Barrau Vera, M. P., Dobruskin, L. y Peña Boerio, F. (2013). Acerca de las motivaciones de la participación y la militancia: una aproximación a las organizaciones kirchneristas y su relación con la política. En *X Jornadas de sociología de la UBA*. Buenos Aires.
- Barrera, F. y López, E. (2010). El carácter dependiente de la economía argentina. Una revisión de sus múltiples determinaciones. En M. Féliz, M. Deledicque, E. López y

- F. Barrera (Eds.), *Pensamiento crítico, organización y cambio social. De la crítica de la economía política a la economía política de los trabajadores y las trabajadoras* (pp. 13-34). La Plata, Argentina: Centro de Estudios para el Cambio Social.
- Barrera, M. (2011). Rediscutiendo el «populismo»: apuntes y reflexiones en torno de su capacidad explicativa. *Intersticios. Revista Sociológica de Pensamiento Crítico*, 5(2), 199-214.
- Barros, S. (2009). Salir del fondo del escenario social: sobre la heterogeneidad y la especificidad del populismo. *Pensamento Plural*, (5), 11-34.
- Barrow, C. (2000). The Marx Problem in Marxian State Theory. *Science y Society*, 64(1), 87-118.
- Basualdo, E. (2006a). *Estudios de Historia Económica Argentina. Desde Medios del Siglo XX a la Actualidad*. Buenos Aires: FLACSO/Siglo XXI.
- Basualdo, E. (2006b). La reestructuración de la economía argentina durante las últimas décadas. De la sustitución de importaciones a la valorización financiera. En E. Basualdo y E. Arceo (Eds.), *Neoliberalismo y sectores dominantes* (pp. 123-177). Buenos Aires: CLACSO.
- Basualdo, E. (2007). *Concepto de patrón o régimen de acumulación y conformación estructural de la economía* (No. 1). Buenos Aires.
- Basualdo, E. (2011). *Sistema político y modelo de acumulación: tres ensayos sobre la Argentina actual*. Buenos Aires: Atuel.
- Basualdo, E., Lozano, C. y Schorr, M. (2002). Las transferencias de recursos a la cúpula económica durante la presidencia Duhalde. El nuevo plan social del gobierno. *Realidad Económica*, (186).
- Basualdo, E. y Nahon, C. (2007). Empresas privatizadas y sector externo en Argentina durante la convertibilidad. Análisis desde la perspectiva de la balanza de pagos. *Comercio Exterior*, 57(3), 169-182.
- Basualdo, E., Nahon, C. y Nochteff, H. (2007). La deuda externa privada en la Argentina (1991-2005). Trayectoria, naturaleza y protagonistas. *Desarrollo Económico*, 47(186), 193-224.
- Bauman, Z. (2001). *La globalización. Consecuencias humanas*. México: FCE.
- Bazzano, M. y Pol, L. (2011). *Las condiciones de producción de las estadísticas criminales en Argentina*. Buenos Aires.

- Beasley-Murray, J. (2010). *Poshegemonía. Teoría política y América Latina*. Buenos Aires: Paidós.
- Beasley-Murray, J., Cameron, M. y Hershberg, E. (2009). Latin America's Left Turns: A Tour d'Horizon. En M. Cameron y E. Hershberg (Eds.), *Latin America's Left Turns: Politics, Policies, and Trajectories of Change* (pp. 1-20). Boulder, EUA: Lynne Rienner Publishers.
- Becher, P., Martín, J. y Martín, L. (2013). Sobre la cuestión del poder popular y la constitución del sujeto revolucionario: notas teóricas sobre una discusión en curso. En *Jornadas Internacionales «Actualidad de la teoría crítica»- VI Coloquio Internacional «Teoría Crítica y Marxismo Occidental»*. Rosario: Universidad Nacional de Rosario.
- Bechhofer, F. y Paterson, L. (2000). *Principles of research design in the social sciences*. London: Routledge.
- Beigel, F. (2006). Vida, muerte y resurrección de las «teorías de la dependencia». En AAVV (Ed.), *Crítica y teoría en el pensamiento social latinoamericano* (pp. 287-326). Buenos Aires: CLACSO.
- Bekerman, M. y Montagú, H. (2007). ¿Por qué la Argentina pierde terreno en el comercio con el Brasil? *Realidad Económica*, (232), 8-28.
- Belloni, P. y Wainer, A. (2012). El problema de restricción externa y el rol del capital extranjero. Una aproximación a partir del análisis del incremento de la presencia de empresas transnacionales en la economía argentina durante las últimas dos décadas. En *III Congreso Latinoamericano de Historia Económica y XXIII Jornadas de Historia Económica*. Bariloche.
- Belloni, P. y Wainer, A. (2014a). Dependencia y (neo)desarrollo en la Argentina: el regreso de la restricción externa. En *VII Jornadas de Economía Crítica*. La Plata.
- Belloni, P. y Wainer, A. (2014b). El rol del capital extranjero y su inserción en la América del Sur posneoliberal. *Problemas del Desarrollo*, 177(45), 87-112.
- Beltrán, G. (2014). El empresariado argentino frente a la crisis. En A. Pucciarelli y A. Castellani (Eds.), *Los años de la Alianza: La crisis del orden neoliberal* (pp. 295-344). Buenos Aires: Siglo XXI.
- Bembi, M. y Nemiña, P. (2005). El FMI y la Argentina en la posconvertibilidad. En *XXV Congreso ALAS* (p. 11). Porto Alegre, Brasil: UFRGS.
- Bensaïd, D. (2004). *Cambiar el mundo*. Madrid: Libros de la Catarata.

- Bensaïd, D. (2006). Una mirada a la historia y la lucha de clases. En A. Borón, J. Amadeo y S. González (Eds.), *La teoría marxista hoy. Problemas y perspectivas* (pp. 247-262). Buenos Aires: CLACSO.
- Bezchinsky, G., Dinenzon, M., Giussani, L., Caino, O., López, B. y Amiel, S. (2008). Inversión extranjera directa en la Argentina. Crisis, reestructuración y nuevas tendencias después de la convertibilidad. En B. Kosacoff (Ed.), *Crisis, recuperación y nuevos dilemas. La economía argentina 2002-2007* (pp. 149-185). Santiago de Chile: CEPAL.
- Biglieri, P. (2007). El retorno del pueblo argentino: entre la autorización y la asamblea. Argentina en la era K. En P. Biglieri y G. Perelló (Eds.), *En nombre del pueblo. La emergencia del populismo kirchnerista* (pp. 61-84). Buenos Aires: UNSAMedita.
- Biglieri, P. (2011). El enfoque discursivo de la política: a propósito del debate sobre el pueblo como sujeto de una posible política emancipatoria. Laclau, Žizek y De Ípola. *Debates y Combates*, 1(1), 91-112.
- Biglieri, P. y Perelló, G. (2007). *En el nombre del pueblo. El populismo kirchnerista y el retorno del nacionalismo* (No. 15). Buenos Aires.
- Birle, P. (1997). *Los empresarios y la democracia en la Argentina. Conflictos y coincidencias*. Buenos Aires: Editorial Belgrano.
- Bitonte, M. E. (2010). Ni unidos ni dominados, sencillamente, sordos. Algunas peculiaridades de la retórica de Cristina Fernández. En *Congreso Regional de la Cátedra UNESCO en Lectura y Escritura: «Cultura Escrita y Políticas Pedagógicas en las Sociedades Latinoamericanas Actuales»* (p. 12). Los Polvorines, Argentina.
- Block, F. (1989). Los orígenes del desorden económico internacional. México: FCE.
- Bobbio, N. (1977). ¿Existe una doctrina marxista del Estado? En AAVV (Ed.), *El Marxismo y el Estado* (pp. 27-47). Barcelona: Avance.
- Bobbio, N. (1985). *Estudios de historia de la filosofía. De Hobbes a Gramsci*. Madrid: Debate.
- Bohoslavsky, E. y Soprano, G. (2010). Introducción. En *Un Estado con rostro humano. Funcionarios e instituciones estatales en Argentina (de 1880 a la actualidad)* (pp. 1-38). Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento y Prometeo Libros.
- Bona, L. (2012). Subsidios a los sectores económicos en la Argentina de la post Convertibilidad: interpretación desde una perspectiva de clase. En M. Félix, E. López, P. Pérez, F. Barrera, P. Chena, L. Bona, ... F. J. Cantamutto (Eds.), *Más*

allá del individuo. Clases sociales, transformaciones económicas y políticas estatales en la Argentina contemporánea (pp. 103-124). Buenos Aires: El Colectivo.

- Bonnet, A. (2002). Que se vayan todos. Crisis e insurrección en Argentina 2001. *Bajo el volcán*, (5), 36-62.
- Bonnet, A. (2008). *La hegemonía menemista. El neoconservadurismo en Argentina, 1989-2001*. Buenos Aires: Prometeo.
- Bonnet, A. (2011). Las relaciones entre estado y mercado. ¿Un juego de suma cero? En A. Bonnet (Ed.), *El país invisible: debates sobre la Argentina reciente* (pp. 15-44). Buenos Aires: Continente.
- Bonnet, A. (2012). La crisis del Estado neoliberal en la Argentina. En M. Thwaites Rey (Ed.), *El Estado en América Latina: continuidades y rupturas* (pp. 279-302). Santiago de Chile: CLACSO/ARCIS.
- Bonnet, A., Holloway, J. y Tischler, S. (Eds.). (2005). *Marxismo abierto. Una visión europea y latinoamericana, Volumen I*. Buenos Aires: Universidad Autónoma de Puebla - Herramienta.
- Bonnet, A. y Piva, A. (Eds.). (2009). *Argentina en pedazos. Luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis de la Convertibilidad*. Buenos Aires: Continente.
- Bonnet, A. y Piva, A. (2013). Un análisis de los cambios en la forma de estado en la posconvertibilidad. En J. Grigera (Ed.), *Argentina después de la convertibilidad (2002-2011)* (pp. 3-32). Buenos Aires: Imago Mundi.
- Borón, A. (2000a). Filosofía política y crítica de la sociedad burguesa: el legado teórico de Karl Marx. En A. Borón (Ed.), *La filosofía política moderna. De Hobbes a Marx* (pp. 289-328). Buenos Aires: CLACSO.
- Borón, A. (2000b). *Tras el búho de Minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo de fin de siglo*. Buenos Aires: FCE.
- Borón, A. (2004). La izquierda latinoamericana al comienzo del siglo XXI. *Revista OSAL*, V(13), 41-55.
- Borón, A. (2008). Teoría(s) de la dependencia. *Realidad Económica*, (238), 20-43.
- Borón, A. (2012). ¿Una nueva era populista en América Latina? En M. Márquez Restrepo, E. Pastrana Buelvas y G. Hoyos Vázquez (Eds.), *El eterno retorno del populismo en América Latina y el Caribe* (pp. 131-158). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.

- Borón, A. (2013, febrero 14). Argentina es un país sin Estado. *Argenpress*, p. 5. Buenos Aires.
- Borsani, H. (2008). Gobiernos de izquierda, sistemas de partidos y los desafíos para la consolidación de la democracia en América del Sur. En A. Rivarola Puntigliano y A. Garcé (Eds.), *Latin America: Left, Right or Beyond?* (pp. 45-56). Estocolmo: Stockholms Universitet.
- Bosia, U. (2014a, abril 15). Máximo, etapa superior del camporismo. *Notas. Periodismo popular*. Buenos Aires.
- Bosia, U. (2014b, mayo 5). Neodesarrollismo sin populismo. *Notas. Periodismo popular*. Buenos Aires.
- Bourdieu, P. (1997). *Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción*. Barcelona: Anagrama.
- Bourdieu, P. (1998, marzo). La esencia del neoliberalismo. *Le Monde Diplomatique*.
- Bourdieu, P. (2007). *El sentido práctico*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Boyanovsky Bazán, C. (2010). *El aluvión. Del piquete al gobierno: los movimientos sociales y el kirchnerismo*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Braun, O. (1973). Desarrollo del capital monopolista en la Argentina. En O. Braun (Ed.), *El Capitalismo Argentino en Crisis*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Brenta, N. (2008). *Argentina atrapada: historia de las relaciones con el FMI: 1956-2006*. Buenos Aires: Ediciones Cooperativas.
- Bresciano, J. (2010). Introducción. En J. Bresciano (Ed.), *El tiempo presente como campo historiográfico. Ensayos teóricos y Estudios de casos* (pp. 9-16). Montevideo: Cruz del Sur.
- Briones, Á. (1988). *De la economía y la política: la economía política*. México: UNAM.
- Bruno, D. (2012). El régimen de la crisis permanente. Un balance de nueve años de kirchnerismo. *Hic Rhodus*, (2), 1-18.
- Bukstein, G. (2008). Tiempo de oportunidades: el movimiento piquetero y la democratización en la Argentina. En C. Raventós (Ed.), *Innovación democrática en el Sur: participación y representación en Asia, África y América Latina* (pp. 143-160). Buenos Aires: CLACSO.
- Bulmer-Thomas, V. (1998). *La historia económica de América Latina desde la Independencia*. México: FCE.

- Burachik, G. (2008). Un análisis de la Encuesta Nacional a Grandes Empresas del INDEC y un intento de conceptualización. *Realidad Económica*, (235), 62-83.
- Burachik, G. (2009). *Economía aplicada. La economía argentina en el corto y en el largo plazo*. Bahía Blanca: Ediuns.
- Burachik, G., Cantamutto, F. J., Costantino, A., Fernández Massi, M., Pérez Artica, R. y Recalde, M. (2010). Un análisis del proceso reciente de «Argentinización» en el sector servicios. En *III Jornadas de Economía Crítica* (p. 23). Rosario, Argentina.
- Burdman, J. (2002, marzo 18). Origen y evolución de los «piqueteros». *Nueva Mayoría*. Buenos Aires.
- Cafiero, M. y Llorens, J. (2004). «O juremos con deuda morir». *Análisis de la propuesta de reestructuración de la deuda pública argentina post-Dubai y sus consecuencias financieras económicas y sociales*. Buenos Aires.
- Cafiero, M. y Llorens, J. (2013, septiembre 12). Una propuesta concreta para derrotar a los «recalcitrantes» fondos buitres. *Argenpress*. Buenos Aires.
- Calderón, F. (2008). Una inflexión histórica. Cambio político y situación socio institucional en América Latina. *Revista de la CEPAL*, (96), 121-134.
- Cameron, M. (2009). Latin America's Left Turns: beyond good and bad. *Third World Quarterly*, 30(2), 331-348.
- Campione, D. (2002). Concentración capitalista y vida política. Buenos Aires: FISYP. Recuperado a partir de [http://fisyp.rcc.com.ar/Concentracion capitalista.pdf](http://fisyp.rcc.com.ar/Concentracion%20capitalista.pdf)
- Campione, D. (2008). «Reaparición obrera» en Argentina a partir de 2004. En M. López Maya, N. Iñigo Carrera y P. Calveiro (Eds.), *Luchas contrahegemónicas y cambios políticos recientes de América Latina* (pp. 279-298). Buenos Aires: CLACSO.
- Campione, D. y Rajland, B. (2006). Piqueteros y trabajadores ocupados en la Argentina de 2001 en adelante. Novedades y continuidades en su participación y organización en los conflictos. En G. Caetano (Ed.), *Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina* (pp. 297-330). Buenos Aires: CLACSO.
- Campos, E. (2009). ¿Que 20 años no es nada ? Globalización, posmodernidad y rebelión en Argentina, de Menem a Kirchner (1988-2008). *Argumentos*, 22(61), 95-123.
- Canitrot, A. (1975). La experiencia populista de redistribución de ingresos. *Desarrollo Económico*, 15(59), 331-351.

- Canitrot, A. (1980). La disciplina como objetivo de la política económica. Un ensayo sobre el programa económico del Gobierno argentino desde 1976. *Desarrollo Económico*, 19(76), 453-475.
- Canoni, F. (2007). El pueblo kirchnerista performado por la memoria. En P. Biglieri y G. Perelló (Eds.), *En nombre del pueblo. La emergencia del populismo kirchnerista* (pp. 145-160). Buenos Aires: UNSAMedita.
- Cantamutto, F. J. (2012a). Dinámica sociopolítica de la devaluación: alianzas, disputas y cambio. En M. Félix, E. López, P. Pérez, F. Barrera, P. Chena, L. Bona, ... F. J. Cantamutto (Eds.), *Más allá del individuo. Clases sociales, transformaciones económicas y políticas estatales en la Argentina contemporánea* (pp. 45-78). Buenos Aires: El Colectivo.
- Cantamutto, F. J. (2012b). *Economía política de la política económica: Coaliciones de gobierno y Patrón de acumulación en Argentina, 1998-2008*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
- Cantamutto, F. J. (2012c). *Fases de acumulación para América Latina durante la etapa neoliberal. Referencia al caso de Argentina* (No. 2). México.
- Cantamutto, F. J. (2013a). ¿Giro a la izquierda? Nuevos gobiernos en América Latina. *RELACSO*, 1(2), 21.
- Cantamutto, F. J. (2013b). El kirchnerismo como construcción hegemónica populista. *Debates Urgentes*, 2(3), 29-56.
- Cantamutto, F. J. (2013c). Grados de autonomía: notas sobre la situación externa latinoamericana. *Revista NuestrAmérica*, 1(1), 41-56.
- Cantamutto, F. J. (2013d). Sobre la noción de Estado en Marx: un recorrido biográfico--teórico. *Eikasia. Revista de filosofía*, (49), 97-116.
- Cantamutto, F. J. (2014). Algunos aspectos sobre la renegociación internacional de la deuda externa argentina. En *Conferencia FLACSO - ISA*. Buenos Aires: ISA.
- Cantamutto, F. J. (2015a). Construcción de hegemonía y Estado: algunas bases teóricas. *Estudios Sociales del Estado*, 1(1), 171-203.
- Cantamutto, F. J. (2015b, abril 10). Llamado al orden al camarada Citybank. *Marcha*. Buenos Aires.
- Cantamutto, F. J. y Costantino, A. (2012, octubre 15). ¿Superación de la restricción externa? *Marcha*, p. 2. Buenos Aires.

- Cantamutto, F. J. y Costantino, A. (2013). Neodesarrollismo: ¿cuánto hay de nuevo? *Revista Herramienta Web*, (14).
- Cantamutto, F. J. y Costantino, A. (2014). Modos de desarrollo: conceptualización y aplicación al caso argentino. En *1° Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Posgrado en Ciencias Sociales*. México.
- Cantamutto, F. J. y Cuevas Valdés, P. (2013). Los cambios en la conflictividad y en la estructura social latinoamericana. Un estudio comparativo entre Argentina y Chile. En *XIV Jornadas Interescuelas de Historia*. Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo.
- Cantamutto, F. J. y Hurtado Groscors, H. (2014). Gobiernos populistas y demandas irresueltas: los casos de Argentina y Venezuela. En *De la Democracia liberal a la Soberanía Popular: articulación y crisis en América Latina*. México: FLACSO.
- Cantamutto, F. J. y Pérez Artica, R. (2008). Aportes para repensar las restricciones a la acumulación en Argentina. En *IV Coloquio de la SEPLA* (p. 25). Buenos Aires: Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico.
- Cantamutto, F. J. y Velázquez, A. (2014). Cambios en la configuración política del Estado en Argentina: de la convertibilidad a Néstor Kirchner. En *De la Democracia liberal a la Soberanía Popular: articulación y crisis en América Latina*. México: FLACSO.
- Cantamutto, F. J. y Wainer, A. (2013). *Economía política de la Convertibilidad. Disputa de intereses y cambio de régimen*. Buenos Aires: Capital Intelectual.
- Cardoso, F. H. (1970). *Teoría de la dependencia: análisis concreto de situaciones de dependencia* (No. 1). México.
- Cardoso, F. H. y Faletto, E. (1986). *Dependencia y desarrollo en América Latina* (20° ed.). México: Siglo XXI.
- Casar, M. A. (1982). En torno al debate marxista sobre el Estado. *Revista Mexicana de Sociología*, 44(4), 1187-1202.
- Casas, A. (2011). La clase trabajadora a diez años de la rebelión popular. *Revista Herramienta*, XV(46).
- Castañeda, J. (2006). Latin America's Left Turn. *Foreign Affairs*, 3(85), 28-43.
- Castellani, A. (Ed.). (2012). *Recursos públicos, intereses privados. Ámbitos privilegiados de acumulación. Argentina 1966-2000*. Buenos Aires: UNSAMedita.

- Castells, M., Ferreira, E., Manzanelli, P., Schorr, M. y Wainer, A. (2013). *Argentina en la posconvertibilidad: ¿desarrollo o crecimiento industrial? Estudios de economía política*. (M. Schorr, Ed.). Buenos Aires: Miño y Dávila.
- Castells, M. y Schorr, M. (2015). Cuando el crecimiento no es desarrollo. Algunos hechos estilizados de la dinámica industrial en la posconvertibilidad. *Cuadernos de Economía Crítica*, 1(2), 49-77.
- Castillo, C. (2007). Contradicciones del actual patrón de acumulación. *Lucha de clases*, (7), 25-45.
- Castillo, C. (2012). El sindicalismo combativo bajo el nuevo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En *VII Jornadas de Sociología de la UNLP*. La Plata, Argentina: Universidad Nacional de La Plata.
- Castorina, E. (2009). Center-Left (neo) populism: the case of Kirchner. En *IPSA 2009* (p. 25). Santiago de Chile: International Political Science Association.
- Castro García, C., Comelli, M., Ciccolella, M., Negro, M., Godfrid, J. y Schwartz, A. (2009). El campo en conflicto: disputas y sentidos en torno a la Resolución N° 125. En *V Jornadas de Jóvenes Investigadores IIGG*. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani.
- Cavadias, E. (2001). El nuevo institucionalismo en América Latina. *Ciencias de gobierno*, 5(10), 11-25.
- CENDA. (2007). *La trayectoria de las ganancias después de la devaluación: la «caja negra» del crecimiento argentino* (No. 4). Buenos Aires.
- CEPAL. (2012). *Cambio estructural para la igualdad. Una visión integrada del desarrollo*. Santiago de Chile.
- Cerroni, U. (1976). *Teoría política y socialismo*. (A. (traductora) Palos, Ed.). México: Era.
- Cheresky, I. (2002). *Las elecciones nacionales de 1999 y 2001. Fluctuación del voto, debilitamiento de la cohesión partidaria y crisis de representación* (No. 10). Montreal.
- Cheresky, I. (2004). Argentina. Cambio de rumbo y recomposición política. *Nueva Sociedad*, (193), 4-16.
- Chihu Amparán, A. (1991). *Gramsci y un nuevo paradigma en la concepción de la política*. México: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.
- Chitarroni, H. (2013). *Lucha de clases e inflación en la Argentina*. Buenos Aires.

- Cibils, A. y Allami, C. (2010). El sistema financiero argentino. Desde la reforma de 1977 hasta la actualidad. *Realidad Económica*, (249), 107-133.
- Cibils, A., Weisbrot, M. y Kar, D. (2002). La Argentina desde la cesación de pagos: el FMI y la depresión. *Realidad Económica*, (192), 14.
- Cobe, L. (2009). *La salida de la Convertibilidad. Los bancos y la pesificación*. Buenos Aires: Capital Intelectual.
- Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. (2005). La Ilegitimidad de la Deuda Externa. Recuperado 15 de enero de 2013, a partir de <http://www.colectivodeabogados.org/La-Ilegitimidad-de-la-Deuda>
- Colectivo del Departamento. (2004). *Deuda externa argentina. Verdades que encandilan* (No. 34). Buenos Aires.
- Colectivo Situaciones. (2005). Diagrama argentino de la normalización: trama y reverso. Buenos Aires: Colectivo Situaciones.
- Comelli, M. (2010). Acciones colectivas «por la vida» frente a la expansión de la minería a cielo abierto en la región cordillerana de Argentina. En *II Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos: Movimientos Sociales, Procesos Políticos y Conflicto Social: Escenarios de disputa*. Córdoba, Argentina: Universidad Nacional de Córdoba.
- COPUB. (2012). *Del 13S al 7D*. Buenos Aires.
- CORREPI. (2013). *Anti Represivo. Informe anual de la situación represiva*. Buenos Aires.
- Cortés, M. (2008). Movimientos sociales y Estado en Argentina: entre la autonomía y la institucionalidad. Buenos Aires: CLACSO.
- Cortés, M. (2010). Movimientos sociales y Estado en el «kirchnerismo». Tradición, autonomía y conflicto. En A. Massetti, E. Villanueva y M. Gómez (Eds.), *Mobilizaciones, protestas e identidades políticas en la Argentina del bicentenario* (pp. 97-117). Buenos Aires: Nueva Trilce.
- Costantino, A. (2012a). *La pampa sigue ancha y ajena. La persistencia del poder terrateniente en la región pampeana argentina en la etapa de la sojización*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
- Costantino, A. (2012b). *La soja en la región pampeana: ¿nuevos actores ganadores? Informe Instituto de Estudios Fiscales y Económicos*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

- Costantino, A. (2013). Discurso chacarero y disputas hegemónicas en la pampa argentina. En D. Vázquez y J. Aibar (Eds.), *Procesos políticos de América Latina. Una lectura crítica del neoliberalismo* (pp. 97-122). México: FLACSO México.
- Costantino, A. (2015). *La extranjerización de la tierra y el modo de desarrollo en Argentina, 2002-2013*. FLACSO México.
- Costantino, A. y Cantamutto, F. J. (2014). Patrón de reproducción del capital y clases sociales en la Argentina contemporánea. *Sociológica*, 29(81), 39-86.
- Costantino, A. y Gamallo, L. (2014). Los conflictos socioambientales durante los gobiernos kirchneristas en Argentina. En *De la Democracia liberal a la Soberanía Popular: articulación y crisis en América Latina*. México: FLACSO.
- Cotarelo, M. C. (2008). *Cronología del Conflicto Social* (No. 229). Buenos Aires.
- Cuevas Valdés, P. (2013). Estado, biopoder, exclusión. Análisis desde la lógica del capital, de Jaime Osorio. *Revista Herramienta Web*, (12).
- Dahl, R. (1963). *Who Governs?: Democracy and Power in an American City*. New Haven: Yale University Press.
- Dal Maso, J. (2004). Tragedia y farsa de la intelectualidad peronista. *Lucha de clases*, (4), 15.
- Dalle, P. (2012). Clases sociales, estratificación y movilidad en las sociedades latinoamericanas del siglo XXI. El cambio social en cuestión. *Entramados y perspectivas. Revista de la carrera de sociología*, 2(2), 9-14.
- Damill, M. (2006). *Ahorro, inversión y superávits sectoriales: El escenario posterior a la crisis de 2001-2002* (No. 24). Buenos Aires.
- Damill, M. y Frenkel, R. (2009). *Las políticas macroeconómicas en la evolución reciente de la economía argentina* (No. 112). Buenos Aires.
- Damill, M., Frenkel, R. y Rapetti, M. (2005). La deuda argentina: historia, default y reestructuración. *Desarrollo Económico*, 45(178), 187-233.
- Datz, G. (2009). What life after default? Time horizons and the outcome of the Argentine debt restructuring deal. *Review of International Political Economy*, 16(3), 456-484.
- Daidsen, B.-I. (2010). Towards a critical realist-inspired economic methodology. *The Journal of Philosophical Economics*, III(2), 74-96.

- Davydov, V. (2008). Las chances de América Latina en el mundo que viene. *Nueva Sociedad*, (214), 75-86.
- De Gregorio, J. (2011). Acumulación de Reservas Internacionales en Economías Emergentes. En A. Giraldo y C. Díaz (Eds.), *Mecanismos de blindaje financiero, fondos regionales y otros esquemas sustitutos o complementarios* (pp. 37-53). Colombia: Fondo Latinoamericano de Reservas.
- De Ípola, E. (1979). Populismo e ideología (A propósito de Ernesto Laclau: Política e ideología en la teoría marxista). *Revista Mexicana de Sociología*, 41(3), 925-960.
- De Ípola, E. (1982). *Ideología y discurso populista*. México: Folios Ediciones.
- De Ípola, E. (2005, diciembre 19). Falta un elemento integrador en la identidad kirchnerista. *Página/12*, p. 3. Buenos Aires.
- De Ípola, E. y Portantiero, J. C. (1981). Lo nacional popular y los populismos realmente existentes. En *Los nuevos procesos sociales y la teoría política contemporánea* (p. 22). Oaxaca, México: Series FLACSO.
- Diálogo Argentino. (2002a). Boletín informativo N° 1. Buenos Aires.
- Diálogo Argentino. (2002b). *Procesamiento y análisis de las entrevistas*. Buenos Aires.
- Diamand, M. (1972). La estructura productiva desequilibrada argentina y el tipo de cambio. *Desarrollo Económico*, (45).
- Dikenstein, V. y Gené, M. (2014). De la creación de la Alianza a su vertiginosa implosión. Reconfiguraciones de los elencos políticos en tiempos de crisis. En A. Pucciarelli y A. Castellani (Eds.), *Los años de la Alianza: La crisis del orden neoliberal* (pp. 35-80). Buenos Aires: Siglo XXI.
- Documentos del Conflicto. (2001). Buenos Aires: OSAL.
- Dolce, G. (2011). A 10 años del FRENAPPO. *Malas Palabras*. Buenos Aires: Malas Palabras.
- Donot, M. (2012). Retórica legitimante de un nuevo modelo de sociedad en la Argentina contemporánea. Carlos Menem versus Néstor Kirchner. *Retor*, 2(2), 203-222.
- Dornbusch, R. y Edwards, S. (1991). *Macroeconomic Populism in Latin America* (No. 2986). Washington.

- Dos Santos, T. (1998). La teoría de la dependencia: un balance histórico y teórico. En F. López Segrera (Ed.), *Los retos de la globalización. Ensayo en homenaje a Theotonio dos Santos*. Caracas, Venezuela: UNESCO.
- Dossi, M. (s. f.). *La acción colectiva de la Unión Industrial Argentina en el período 1989-2002* (No. 10). Buenos Aires.
- Duek, C. y Inda, G. (2006). La teoría de la estratificación social de Weber: un análisis crítico. *Revista Austral de Ciencias Sociales*, (11), 5-24.
- Duménil, G. y Lévy, D. (2007). *Crisis y salida de la crisis. Orden y desorden neoliberales*. México: FCE.
- Duménil, G. y Lévy, D. (2014). The crisis of the early 21st Century: Marxian perspectives. En R. Bellofiore y G. Vertova (Eds.), *The great recession and the contradictions of contemporary capitalism* (pp. 26-49). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Dussel, E. (2001). *Hacia una filosofía política crítica*. Bilbao: Desclée de Brouwer.
- Dussel, E. (2007). Cinco tesis sobre el «populismo». México: UAM-Iztapalapa.
- Echaide, J. (2005). *Construcción de herramientas de resistencia contra el ALCA. El caso de la Consulta Popular de 2003 en Argentina*. Buenos Aires.
- Elster, J. (1985). *Making Sense of Marx*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Emmerich, G. (1980). *Un cuarto de siglo de hegemonía y dominación en Argentina, Brasil y Venezuela*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
- Engels, F. (1895). Introducción a la edición de 1895. En *Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850* (p. 19). Marxists Internet Archive.
- Errejón Galván, Í. (2011). La construcción discursiva de identidades populares. *Viento Sur*, (114), 75-84.
- Errejón Galván, Í. (2012a). ¿Qué es el análisis político? Una propuesta desde la teoría del discurso y la hegemonía. *RELACSO*, (1).
- Errejón Galván, Í. (2012b). De las rupturas populistas a los Gobiernos de cambio en América Latina. Apuntes para una mínima evaluación. *Papeles de relaciones ecosociales y cambio global*, (117), 87-98.
- Escudé, C. (2006). De Estado cautivo a Estado fallido: la Argentina y su populismo sistémico, 1975-2006". En *12° Encuentro de Latinoamericanistas Españoles* (p. 15). Santander, España.

- Escudé, C. (2007). *Kirchner y la cooptación de piqueteros 2003-2007* (No. 359). Buenos Aires.
- Escudé, C. (2009). Piqueteros al gobierno: un experimento populista, 2003-2007. *Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe*, 20(1), 117-145.
- Espeche Gil, M. Á. (1991). Ilícitud del alza unilateral de los intereses de la deuda externa. *Anuario Hispano-Luso-Americano de derecho internacional*, (9), 13-37.
- Esteve, M. (2010). Aportes para el estudio de los movimientos sociales en América Latina: un estado de la cuestión. *Revista IDEAS*, 4(2), 328-265.
- Etchemendy, S. (2004). Represión , exclusión e inclusión : relaciones gobierno-sindicatos y modelos de reforma laboral en economías liberalizadas. *Revista SAAP*, 2(1), 135-164.
- Etchemendy, S. (2005). Old actors in new markets: transforming the populist/industrial coalition in Argentina, 1989-2001. En S. Levitsky y M. V. Murillo (Eds.), *Argentine democracy. The politics of institutional weakness* (pp. 62-87). Pennsylvania, EUA: Pennsylvania State University Press.
- Etchemendy, S. (2010). La Concertación y la Negociación Colectiva: perspectiva histórica y comparada. *Revista de Trabajo*, 6(8), 199-205.
- Fair, H. (2008). Ciudadanía, representación y liderazgo. Apuntes del caso argentino acerca de un vínculo indestructible. *Pensares. Publicación del CIFYH*, (5), 247-267.
- Fair, H. (2009a). El debate «nacionalismo sano» versus «patriotismo republicano». *Colección*, XV(20), 173-229.
- Fair, H. (2009b). Identidades, discurso y política en la Argentina contemporánea. *Revista de la Facultad*, (15), 69-91.
- Fairclough, N. (2003). *Analyzing Discourse: Textual Analysis for Social Research*. Nueva York y Londres: Routledge.
- Faur, E., Campos, L., Pautassi, L. y Zimermann, S. (2006). *Las políticas para la disminución de la pobreza implementadas en la Argentina entre los años 2002 y 2005*. Buenos Aires.
- Fazio, H. (1998). La historia del tiempo presente: una historia en construcción. *Historia Crítica*, (17), 47-57.
- Félix, M. (2008). Argentina: Los límites macroeconómicos del neo-desarrollismo. En 4° *Coloquio Internacional del SEPLA*. Buenos Aires.

- Féliz, M. (2012a). Neoextractivismo, neodesarrollismo y proceso de acumulación de capital. ¿Superando el ciclo stop-and-go? Argentina, 2003-2012. En *VII Jornadas de Sociología de la UNLP «Argentina en el escenario latinoamericano actual: debates desde las ciencias sociales»*. La Plata: FAHCE UNLP.
- Féliz, M. (2012b). Proyecto sin clase: crítica al neoestructuralismo como fundamento del neodesarrollismo. En M. Féliz, E. López, P. Pérez, F. Barrera, P. Chena, L. Bona, ... F. J. Cantamutto (Eds.), *Más allá del individuo. Clases sociales, transformaciones económicas y políticas estatales en la Argentina contemporánea* (pp. 13-43). Buenos Aires: El Colectivo.
- Féliz, M. y Chena, P. (2006). La crisis recurrente del desarrollo capitalista en la periferia. Una lectura desde Argentina. En J. C. Neffa y P. Pérez (Eds.), *Macroeconomía, grupos vulnerables y mercado de trabajo. Desafíos para el diseño de políticas públicas* (pp. 15-38). Buenos Aires: CEIL-PIETTE/Trabajo y Sociedad.
- Féliz, M. y López, E. (2010). La dinámica del capitalismo periférico posneoliberal-neodesarrollista. Contradicciones, barreras y límites de la nueva forma de desarrollo en Argentina. *Herramienta. Revista de debate y crítica marxista*, (45).
- Féliz, M. y López, E. (2012). *Proyecto neodesarrollista en la Argentina. ¿Modelo nacional-popular o nueva etapa en el desarrollo capitalista?* Buenos Aires: Herramienta - El Colectivo.
- Féliz, M. y Pérez, P. (2007). ¿Tiempos de cambio? Contradicciones y conflictos en la política económica de la posconvertibilidad. En R. Boyer y J. C. Neffa (Eds.), *Salida de crisis y estrategias alternativas de desarrollo. La experiencia argentina* (pp. 319-352). Buenos Aires: Miño y Dávila/CEIL-PIETTE/Institut CDC pour la Recherche.
- Fernández, A. (2006). *Política y Subjetividad. Asambleas barriales y fábricas recuperadas*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Fernández, A. (2010). El sindicalismo argentino frente al Bicentenario: una reseña histórica. *Revista de Trabajo*, 6(8), 83-104.
- Fernández Alonso, J. (2010). La política hacia las inversiones extranjeras del gobierno de Néstor Kirchner: tras los rasgos de un populismo atemperado. *Sociedade e Cultura*, 13(2), 201-210.
- Fernández Soto, S. (2009). Políticas de transferencia de ingresos en Argentina: emergencia, desarrollo y transiciones del Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados. *Revista de Políticas Públicas*, 13(2), 203-218.

- Fernández Soto, S. (2014). Estado, hegemonía y políticas en el capitalismo contemporáneo. La Asignación Universal por Hijo en Argentina. Límites y perspectivas. En *VII Jornadas de Economía Crítica*. La Plata.
- Figueroa Ibarra, C. y Iñigo Carrera, N. (2010). Contribuciones al debate sobre el concepto de Historia Reciente. En M. López, C. Figueroa y B. Rajland (Eds.), *Temas y procesos de la historia reciente* (pp. 13-34). Santiago de Chile: CLACSO/ARCIS.
- Fitoussi, J.-P. (2004). *La democracia y el mercado*. Madrid: Paidós.
- Franco, M. y Levín, F. (2007). El pasado cercano en clave historiográfica. En M. Franco y F. Levín (Eds.), *Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción* (pp. 1-25). Buenos Aires: Paidós.
- Franzé, J. (2012). La política más allá del Estado: ¿una omisión de la violencia? *Revista Española de Ciencia Política*, (29), 67-83.
- Franzé, J. (2013). Fisonomía de la metafísica decolonial: lo damné, una identidad sin narración. *Tabula Rasa*, (18), 229-251.
- Frega, M. (2012). ¿Ganancia o supervivencia? La persistencia de la informalidad laboral y el papel de los sectores empleadores en la Argentina pos 2003. En *VII Jornadas de Sociología de la UNLP*. La Plata.
- Frenkel, R. (2008). Tipo de cambio real competitivo, inflación y política monetaria. *Revista de la CEPAL*, 3 y 4(96), 189-199.
- Frenkel, R. (2010). Lecciones de política macroeconómica para el desarrollo, a la luz de la experiencia de la última década. En *XV Reunión de Investigadores de Bancos Centrales del Continente Americano* (p. 46). La Paz, Bolivia: CEDES.
- Frenkel, R. y Avenburg, A. (2009). Los cambiantes roles del Fondo Monetario Internacional y América Latina. *Desarrollo Económico*, 49(194), 179-201.
- Frenkel, R. y Rapetti, M. (2007). *Política cambiaria y monetaria en Argentina después del colapso de la convertibilidad*. Washington.
- Frente Popular Darío Santillán. (2012). *Darío y maxi, dignidad piquetera. El gobierno de Duhalde y la planificación criminal de la masacre del 26 de junio en Avellaneda*. Buenos Aires: El Colectivo.
- Frosini, F. (2007). Gramsci y la sociedad. De la crítica de la sociología marxista a la ciencia de la política. *Revista Internacional de Sociología*, LXV(47), 179-199.

- Furtado, C. (1984). Transnacionalización y monetarismo. En S. Méndez (Ed.), *La crisis internacional y la América Latina*. México: FCE.
- Gaggero, A., Gaggero, J. y Rúa, M. (2015). Principales características e impacto macroeconómico de la fuga de capitales en Argentina. *Problemas del Desarrollo*, 182(46), 67-89.
- Gaggero, A., Schorr, M. y Wainer, A. (2014). *Restricción eterna: el poder económico durante el kirchnerismo*. Buenos Aires: Futuro Anterior.
- Gaggero, A. y Wainer, A. (2006). Burguesía nacional - Crisis de la Convertibilidad: el rol de la UIA y su estrategia para el (tipo de) cambio. *Realidad Económica*, (204), 19.
- Gaggero, J., Rúa, M. y Gaggero, A. (2013). Argentina. fuga de capitales (2002-2012). En *BEPS and the future of corporate taxation* (pp. 1-40). London: City University.
- Galafassi, G. (2006). Cuando el árbol no deja ver el bosque. Neofuncionalismo y posmodernidad en los estudios sobre movimientos sociales. *Revista Theomai*, (14), 37-56.
- Galafassi, G. (2012). Para una relectura de los procesos de conflicto y movilización social en la Argentina de inicios del milenio (2001-2003). *Revista Mexicana de Sociología*, 74(1), 69-98.
- Gallagher, K. y Shrestha, E. (2012). The Social Cost of Self-Insurance: Financial Crisis, Reserve Accumulation, and Developing Countries. *Global Policy*, 3(4), 501-509.
- Gallardo, H. (2007). Siglo XXI. El lugar de la izquierda en América Latina. En Y. Acosta (Ed.), *Siglo XXI: El lugar de la izquierda en América Latina*. Pensamiento, *Sociedad y democracia* (pp. 132-164). Montevideo: CEIL.
- Gálvez, E. (2011). Los conflictos internos de los grandes empresarios argentinos durante la transición entre la convertibilidad y la post-convertibilidad (1999-2003). Buenos Aires.
- Gamallo, L. (2014). ¿Es hegemónico el kirchnerismo? Apuntes para un estado de la cuestión. En *VII Jornadas de Economía Crítica*. La Plata.
- Gambina, J. (2014, noviembre 17). Presiones sobre los precios: del dólar y de la fuerza de trabajo. *Argenpress*. Buenos Aires.
- García, A. (2001). Estudio. El megacanje de los acreedores. *Realidad Económica*, (180), 22-32.

- García, H. (2004). Tripartismo e institucionalización del diálogo social en la Argentina y el Mercosur. *Revista Derecho del trabajo*.
- García, M. A. (2008). Nuevos Gobiernos en América del Sur. Del destino a la construcción de un futuro. *Nueva Sociedad*, 128, 118-126.
- Garzón Rogé, M. (2009). La construcción imaginario de los límites políticos a través de las personas gramaticales y los enunciados polifónicos: el caso del discurso de Néstor Kirchner. *Anclajes*, XIII(13), 91-113.
- Germani, G. (1962). *Política y sociedad en una época de transición*. Buenos Aires: Paidós.
- Giarracca, N. (Ed.). (2001). *La protesta social en la Argentina. Transformaciones económicas y crisis social en el interior del país*. Buenos Aires: Alianza.
- Giddens, A. (1987). *Las nuevas reglas del método sociológico*. Buenos Aires: Amorroutu.
- Giosa Zuazúa, N. (2006). *La estrategia de la administración Kirchner para enfrentar los problemas del mercado de empleo* (No. 12). Buenos Aires.
- Giuliano, H. (2013a, febrero 19). Argentina: Deuda pública y déficit fiscal. *Argenpress*. Buenos Aires.
- Giuliano, H. (2013b, septiembre 27). En torno a un artículo del senador Calcagno sobre la deuda pública argentina. *Argenpress*. Buenos Aires.
- Giuliano, H. (2014, febrero 11). Argentina: La crisis de la deuda K. *Argenpress*. Buenos Aires.
- Giuliano, H. (2015). La deuda bajo la administración Kirchner. *Cuadernos de Economía Crítica*, 1(2), 153-159.
- Godio, J. (1998). *La ALIANZA*. Buenos Aires: Grijalbo.
- Godio, J. (2004, noviembre 1). Características y futuro de la Mesa Coordinadora (transversal) de apoyo a Kirchner. *Rebanadas de la realidad*. Buenos Aires.
- Gogliormella, C. y Malic, E. (2013). La deuda pública en Argentina: un análisis del canje del año 2005. *La Revista del CCC*, 18(6).
- Golbert, L. (2004). *¿Derecho a la inclusión o paz social? Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados* (No. 84). Santiago de Chile.

- Gold, D., H. Lo, C. y Olin Wright, E. (1977). Recientes desarrollos de la teoría marxista del Estado capitalista. En H. Sonntag y H. Valecillos (Eds.), *El Estado en el capitalismo contemporáneo* (pp. 23-61). México: Siglo XXI.
- Goldman, B. y Grandinetti, V. (2013). Testimonios de una crisis: la visión de la Iglesia Católica Argentina. En *X Jornadas de sociología de la UBA* (p. 16). Buenos Aires.
- Gómez, M. (2010). Acerca del protagonismo político y la participación estatal de los movimientos sociales populares: falacias, alucinaciones y cegueras del paradigma normal de análisis. En A. Massetti, E. Villanueva y M. Gómez (Eds.), *Movilizaciones, protestas e identidades políticas en la Argentina del bicentenario* (pp. 65-95). Buenos Aires: Nueva Trilce.
- Gómez, R. (2012). La hegemonía «revisitada». Apuntes para una caracterización del nuevo «clima cultural» (y político) en la Argentina poselectoral de 2011. *La Revista del CCC*, 6(16), 16.
- Gómez, S. y Recio, M. (2005). El sentido de la «transversalidad» en el discurso político del kirchnerismo y del Partido Socialista (Período 2003-2004). En *VII Congreso de la SAAP*. Córdoba.
- Gough, I. (1977). Gastos del Estado en el capitalismo avanzado. En H. Sonntag y H. Valecillos (Eds.), *El Estado en el capitalismo contemporáneo* (pp. 224-302). México: Siglo XXI.
- Gough, I. y Farnsworth, K. (2000). The Enhanced Structural power of Capital: A Review and Assessment. En I. Gough (Ed.), *Global capital, human needs and social policies* (pp. 77-102). Hampshire, Inglaterra: Palgrave.
- Gramsci, A. (1975). *Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno*. (J. Aricó, Ed.). México: Juan Pablos Editor.
- Gramsci, A. (1981). *Escritos políticos (1917-1933)*. (Pasado y Presente, Ed.). México: Siglo XXI.
- Gramsci, A. (1984a). *Cuadernos de la Cárcel. Tomo III*. (V. Gerratana, Ed.) (Edición cr.). México: Era.
- Gramsci, A. (1984b). *El materialismo histórico y la filosofía de Benedetto Croce*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Graña, J. M. (2009). Problema histórico argentino. Productividad y sus fuentes extraordinarias de compensación. En *2º Jornadas de Economía Crítica* (p. 20). Bahía Blanca, Argentina.

- Graña, J. M. y Kennedy, D. (2007a). Límites a la reproducción de la fuerza de trabajo como forma necesaria del crecimiento actual. En *VII Jornadas de Sociología* (p. 23). Buenos Aires.
- Graña, J. M. y Kennedy, D. (2007b). Salarios y productividad: especificidades de tamaño en la distribución del excedente. En *I Jornada de Economía Política* (p. 25). Los Polvorines, Argentina: UNGS.
- Graña, J. M. y Kennedy, D. (2008). El deterioro del salario real como fuente de plusvalía extraordinaria. Argentina en los últimos treinta años. En *4º Coloquio Internacional del SEPLA* (p. 24). Buenos Aires: Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico.
- Graña, J. M. y Kennedy, D. (2010). Distribución funcional del ingreso, salario real y productividad en Argentina en perspectiva latinoamericana. Desde mediados de los setenta hasta la actualidad. En *IV Congreso ALAP «Condiciones y Transformaciones Culturales, Factores Económicos y Tendencias Demográficas en Latinoamérica»* (p. 18). La Habana, Cuba.
- Graña, J. M., Kennedy, D. y Valdez, J. (2008). El «modelo» de la post Convertibilidad: contenido, límites y perspectivas. En *II Jornada de Economía Política* (p. 26). Los Polvorines, Argentina: UNGS.
- Graziano, M. (2013). *En el cielo nos veos. La historia de Jorge Julio López*. Buenos Aires: Peña Lillo y Continente.
- Grigera, J. (2011). La desindustrialización en Argentina. ¿Agresión a la manufactura o reestructuración capitalista? En A. Bonnet (Ed.), *El país invisible: debates sobre la Argentina reciente* (pp. 81-102). Buenos Aires: Continente.
- Grigera, J. y Eskenazi, M. (2013). Apuntes sobre la acumulación de capital durante la posconvertibilidad. En J. Grigera (Ed.), *Argentina después de la convertibilidad (2002-2011)* (pp. 165-194). Buenos Aires: Imago Mundi.
- Grisoni, D. y Maggiori, R. (1974). *Leer a Gramsci*. Madrid: ZERO.
- Groisman, F. (2012). Salario mínimo y empleo en Argentina. *Revista de Economía Política de Buenos Aires*, 6(11), 9-47.
- Grosso, A. (2009). Discurso político e Instituciones. Un estudio bi-dimensional sobre la emergencia del peronismo en Córdoba. *Studia Politicae*, (19), 25-48.
- Grossman, G. y Helpman, E. (2001). *Special Interest Groups*. Cambridge, MA y Londres, RU: MIT Press.

- Gualdi, I. y Roldán, A. (2011). El kirchnerismo y los movimientos sociales: una integración conflictiva. Un abordaje desde la experiencia del FTV. En *IX Jornadas de Sociología de la UBA*. Buenos Aires.
- Guarnizo Useche, T., Pérez Fuentes, D. y Missaglia, M. (2006). *Sostenibilidad social de la deuda externa en América Latina*. Cartagena, Colombia: Escuela Latinoamericana de Cooperación y desarrollo.
- Guerrero Iraola, J. (2011). Apuntes sobre hegemonía. Disquisiciones acerca de la construcción de sentido del «kirchnerismo». *Question*, 1(31), 9.
- Gunder Frank, A., Puigrós, R. y Laclau, E. (1970). *América Latina. Feudalismo o capitalismo*. México: Ediciones Quinto Sol.
- Gusmerotti, L. (2013). Interacciones entre el Movimiento Evita y el Estado. Reflexiones en torno al proceso de conformación de cooperativas de trabajo. En M. Retamozo, M. Schuttenberg y A. Viguera (Eds.), *Peronismos, izquierdas y organizaciones populares. Movimientos e identidades políticas en la Argentina contemporánea* (pp. 235-260). La Plata: UNLP.
- Hall, S. (1981). Lo «político» y lo «económico» en la teoría marxista de las clases. En *Clases y estructura de clases* (pp. 17-75). México: Nuestro Tiempo.
- Harnecker, M. (1969). *Política y clases sociales en Poulantzas (estudio crítico)*. Chapingo, México.
- Harvey, D. (2004). *El nuevo imperialismo*. Ediciones AKAL.
- Harvey, D. (2007). *Breve historia del neoliberalismo*. Madrid: Akal.
- Hirst, P. (1981). Clases económicas y política. En *Clases y estructura de clases* (pp. 155-191). México: Nuestro Tiempo.
- Hirst, P. y Thompson, G. (1995). Globalization and the future of the nation state. *Economy and Society*, 24(3), 408-442. doi:10.1080/03085149500000017
- Hobsbawm, E. (1992). *Naciones y nacionalismo desde 1780*. Barcelona: Grijalbo.
- Hobsbawm, E. (2003). *Historia del siglo XX* (5° ed.). Buenos Aires: Planeta.
- Holloway, J. (1980). El Estado y la lucha cotidiana. *Cuadernos Políticos*, (24), 7-27.
- Hur, S. y Kondo, I. (2012). *A Theory of Rollover Risk, Sudden Stops, and Foreign Reserves*. Pittsburgh, EUA.

- Ianni, V. (2011). Argentina: ¿Una totalidad o una parte del todo? Las relaciones entre espacio nacional y mercado mundial. En A. Bonnet (Ed.), *El país invisible: debates sobre la Argentina reciente* (pp. 103-130). Buenos Aires: Continente.
- ICSID. (2014). *The ICSID Caseload – Statistics*. Quebec.
- Iglesias, E. (2012). Transformaciones de las identidades políticas. Origen y mutación de la Corriente Clasista y Combativa en la ciudad de Rosario (2000-2010). *Trabajo y Sociedad*, (19), 149-166.
- Inda, G. (2012). La disputa por la hegemonía político-ideológica: trabajadores y sindicatos en el discurso presidencial kirchnerista (Argentina, 2007-2012). *Estudios Sociales Contemporáneos*, (7/8), 183-214.
- Informe y resoluciones de la asamblea piquetera en Buenos Aires. (2001, septiembre 6). *Indymedia*. Buenos Aires.
- Iñigo Carrera, J. (2001). *Realidades de la economía argentina. Tras otra década de estancamiento y contracción de la riqueza nacional*. Buenos Aires.
- Iñigo Carrera, J. (2007). *La formación económica de la sociedad argentina Volumen I Renta agraria, ganancia industrial y deuda externa. 1882-2004*. Buenos Aires: Imago Mundi.
- Iñigo Carrera, N. y Cotarelo, M. C. (2006). Génesis y desarrollo de la insurrección espontánea de diciembre de 2001 en Argentina. En G. Caetano (Ed.), *Sujetos sociales y nuevas formas de protesta en la historia reciente de América Latina* (pp. 49-92). Buenos Aires: CLACSO.
- IPYPP. (2012, julio 4). Mínimo no Imponible, análisis comparativo de Salarios, MNI, Precios y PBI: Lozano. Los dos Gobiernos. *Argenpress*, p. 9. Buenos Aires.
- Isaac, J. (1987a). *Power and Marxist Theory*. London: Cornell University Press.
- Isaac, J. (1987b). *Power and Marxist Theory*. London: Cornell University Press.
- Isuani, E. y Nieto, D. (2002). La cuestión social y el Estado de Bienestar en el mundo post-keynesiano. *Revista del CLAD Reforma y Democracia*, (22), 1-13.
- Iuorno, G. (2010). A propósito de la Historia Reciente: ¿Es la interdisciplinariedad un desafío epistémico para la Historia y las Ciencias Sociales? En M. López, C. Figueroa y B. Rajland (Eds.), *Temas y procesos de la historia reciente* (pp. 35-50). Santiago de Chile: CLACSO/ARCIS.

- Ives, P. (2005). Lenguaje, Agency and Hegemony: a Gramscian Response to Post-Marxism. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 8(4), 455-468.
- Izaguirre, I. y Aristizábal, Z. (2002). Perfil social de los asalariados desaparecidos en la Argentina. *Razón y Revolución*, (6), 22.
- Jelin, E. (2007). La conflictiva y nunca acabada mirada sobre el pasado. En M. Franco y F. Levín (Eds.), *Historia reciente. Perspectivas y desafíos para un campo en construcción* (pp. 307-340). Buenos Aires: Paidós.
- Jessop, R. (2008). *El futuro de la sociedad capitalista*. (A. de Cabo y A. García, Eds.). Madrid: Los libros de la catarata.
- Jorgensen, M. y Phillips, L. (2002). *Discourse Analysis as Theory and Method*. London: SAGE.
- Kaiser, J. (2008). Nuevos conceptos para el análisis y el manejo de la deuda ilegítima. En G. Weber (Ed.), *Sobre la deuda ilegítima. Aportes al debate. Argumentos entre consideraciones éticas y normas legales* (pp. 51-65). Quito, Ecuador: Centro de investigaciones CIUDAD/Observatorio de la Cooperación al Desarrollo en Ecuador, Jubileo 2000 Red Guayaquil.
- Kan, J. y Pascual, R. (2011). Integración regional en América Latina y Argentina. ¿Solamente una cuestión de Estados? En A. Bonnet (Ed.), *El país invisible: debates sobre la Argentina reciente* (pp. 45-80). Buenos Aires: Continente.
- Katz, C. (2006a). *El rediseño de América Latina: ALCA, MERCOSUR y ALBA*. Buenos Aires: Ediciones Luxemburg.
- Katz, C. (2006b). Socialismo o neodesarrollismo. Buenos Aires: La Haine.
- Katz, C. (2013, enero 17). Anatomía del kirchnerismo. *Rebellion.org*, p. 16. Buenos Aires.
- Katz, C. (2014, julio). ¿Qué es el neodesarrollismo? Una visión crítica. *Argenpress*. Buenos Aires.
- Katz, J. (2000). *Reformas estructurales, productividad y conducta tecnológica en América Latina*. Santiago de Chile: CEPAL/FCE.
- Keifman, S. (2009). Tipo de cambio, nivel de actividad y empleo: en torno a ciertos virajes del estructuralismo. *Revista de Economía Política de Buenos Aires*, 3(5-6), 95-107.

- Kennedy, D. (2014). Producción y apropiación del valor en Argentina: el rol del deprimido salario real. *Problemas del Desarrollo*, 176(45), 157-182.
- Kessler, G. (2011). La extensión del sentimiento de inseguridad en América Latina: relatos, acciones y políticas en el caso argentino. *Revista de Sociología Política*, 19(40), 83-97.
- Kohan, A. (2002). *¡A las calles! Una historia de los movimientos piqueteros y caceroleros de los '90 al 2002*. Buenos Aires: Colihue.
- Kohn, C. (1991). Usos y abusos del concepto gramsciano de hegemonía. En AAVV (Ed.), *Gramsci en América Latina. Del silencio al olvido* (pp. 23-41). Caracas: Fondo Editorial Tropykos.
- Laclau, E. (1978). *Política e ideología en la teoría marxista*. Madrid: Siglo XXI.
- Laclau, E. (1991). La especificidad de lo político. En H. Tarcus (Ed.), *Debates sobre el Estado Capitalista/1* (pp. 121-152). Buenos Aires: Imago Mundi.
- Laclau, E. (1993). *Nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo*. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Laclau, E. (2006a). Consideraciones sobre el populismo latinoamericano. *Cuadernos del CENDES*, 23(62), 115-120.
- Laclau, E. (2006b). La deriva populista y la centroizquierda latinoamericana. *Nueva Sociedad*, (205), 56-62.
- Laclau, E. (2006c). *La razón populista*. México: FCE.
- Laclau, E. (2011, octubre 2). La real izquierda es el kirchnerismo. *Página/12*, p. 2. Buenos Aires.
- Laclau, E. y Mouffe, C. (1987). *Hegemonía y Estrategia Socialista. Hacia una radicalización de la democracia*. Madrid: Siglo XXI.
- Lanata Briones, C. y Lo Vuolo, R. (2011). *Regímenes de acumulación, cambios estructurales y límites al crecimiento económico en la Argentina de la post-Convertibilidad* (No. 81). Buenos Aires.
- Lanzaro, J. (2008). La socialdemocracia criolla. *Nueva Sociedad*, (217), 40-58.
- Lechner, N. (1978). Poder y orden. La estrategia de la minoría consistente. *Revista Mexicana de Sociología*, 40(4), 1201-1258.

- Lechner, N. (1985). Aparato de Estado y forma de Estado. En J. Labastida y M. del Campo (Eds.), *Hegemonía y alternativas políticas en América Latina* (pp. 81-111). México: Siglo XXI.
- Lechner, N. (1994). La (problemática) invocación de la sociedad civil. *Perfiles Latinoamericanos*, (5), 131-144.
- Leiras, M. (2007). Latin Americas Electoral Turn; Left, Right, and Wrong. *Constellations*, 3(14), 398-408.
- Lenin, V. I. (1972). *Imperialismo, etapa superior del capitalismo*. Buenos Aires: Anteo.
- Lenin, V. I. (2007). *El Estado y la Revolución*. Buenos Aires: Acercándonos Ediciones.
- Levitsky, S. y Murillo, M. V. (2005). Building castles in the sand? The politics of institutional weakness in Argentina. En S. Levitsky y M. V. Murillo (Eds.), *Argentine democracy. The politics of institutional weakness* (pp. 21-44). Pennsylvania, EUA: Pennsylvania State University Press.
- Levy, E. (2003). Desempleo y pobreza en la Argentina. Algunas consideraciones críticas. En *6° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo* (p. 14). Buenos Aires.
- Levy Yeyati, E. (2001). 10 Años de Convertibilidad: la experiencia argentina. *Revista de Análisis Económico*, 16(2), 3-42.
- Levy Yeyati, E. y Valenzuela, D. (2007). *La resurrección. Historia de la poscrisis argentina*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Lieberman, A. (2011). (Neo)populismo Argentino desde el discurso Kirchnerista. *Diálogos Latinoamericanos*, (18), 1-17.
- Liguori, G. (2000). El debate sobre Gramsci en el cambio de siglo. En D. Kanoussi (Ed.), *Gramsci en América. II Conferencia internacional de estudios gramscianos* (pp. 305-323). México: Plaza y Valdés-BUAP.
- Lindblom, C. (1999). *Democracia y sistema de mercado*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Lindenboim, J., Kennedy, D. y Graña, J. M. (2011a). *Distribución funcional y demanda agregada en Argentina. Sesenta años en perspectiva comparada* (No. 16). Buenos Aires.
- Lindenboim, J., Kennedy, D. y Graña, J. M. (2011b). *Share of labour compensation and aggregate demand - discussion towards a growth strategy* (No. 203). *United Nations Conference on Trade and Development*. Naciones Unidas.

- Lindenboim, J. y Müller, G. (2008). *Inflación (real) y salario real*. Buenos Aires.
- Llovich, D. y Bisquert, J. (2008). *La cambiante memoria de la dictadura: discursos públicos, movimientos sociales y legitimidad democrática*. Los Polvorines, Argentina: Universidad Nacional de General Sarmiento.
- Lo Vuolo, R. (2010). *Las perspectivas del Ingreso Ciudadano en América Latina. Un análisis en base al «Programa Bolsa Familia» de Brasil y a la «Asignación Universal por Hijo para Protección Social» de Argentina* (No. 76). Buenos Aires.
- Lo Vuolo, R. y Seppi, F. (2008). *La falacia del desendeudamiento del sector público en la Argentina. Evolución de la deuda post-default y sus impactos fiscales* (No. 61). Buenos Aires.
- Lodola, G. (2005). Protesta popular y redes clientelares en la Argentina: el reparto federal el Plan Trabajar (1996-2001). *Desarrollo Económico*, 44(176), 515-536.
- Logiudice, E. (2015). Del concepto de pueblo a la materialidad del líder. Breves notas sobre el populismo de Ernesto Laclau. *Herramienta*, (56).
- Longo, J. (2011). Los conflictos contra la precariedad ante el resurgimiento de la conflictividad laboral (2006-2010). En *IX Jornadas de Sociología de la UBA*. Buenos Aires.
- López, A. (2011). Crisis orgánica o crisis de coyuntura... el kirchenrismo impide la revolución? *Ramble Tamble*. Recuperado 23 de octubre de 2014, a partir de <http://rambletamble.blogspot.mx/2011/09/crisis-organica-o-crisis-de-coyuntura.html>
- López, E. (2012a). El rol de los actores con poder de veto informal en la determinación del gasto social en la Argentina post-neoliberal (2002-2008). *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, LVII(215), 97-114.
- López, E. (2012b). Las clases dominantes en el nuevo modo de desarrollo argentino (2002-2009). Cambios y continuidades en sus aspectos materiales. En *Más allá del individuo. Clases sociales, transformaciones económicas y políticas estatales en la Argentina contemporánea* (pp. 79-102). Buenos Aires: El Colectivo.
- López, E. (2013). *Emergencia y consolidación de un nuevo modo de desarrollo. Un estudio sobre la Argentina post-neoliberal (2002-2011)*. Universidad Nacional de La Plata.
- López, E. y Cantamutto, F. J. (2012). Situación económica y política de la clase trabajadora en la etapa de la post Convertibilidad. En *V Jornadas de Economía Crítica* (p. 30). Córdoba, Argentina: JEC.

- López, E. y Cantamutto, F. J. (2013). Las demandas económicas de la clase trabajadora en el nuevo modo de desarrollo argentino (2002-2011). De la recomposición parcial a las limitaciones estructurales. *Conflicto Social*, 6(10), 47-72.
- Los cacerolazos por el 8N llegaron a distintas ciudades del mundo. (2012, noviembre 10). *La Nación*. Buenos Aires.
- Lozano, C. (2002). Acerca del programa nacional para jefes y jefas de hogar sin empleo. Buenos Aires: CTA.
- Lozano, C. (2010). Un canje inconstitucional, ilegal y sospechado. Reestructuración sin quita. Buenos Aires: Buenos Aires para Todos en Proyecto Sur.
- Lozano, C., Raffo, T., Rameri, A. y Haimovich, A. (2014). *Un breve repaso sobre los recientes aumentos anunciados por la Presidenta de la Nación: Jubilaciones y Pensiones y Ayuda Escolar Anual*. Buenos Aires.
- Lozano, J. I. (2013). Transformar el Estado, militándolo. Reflexiones sobre una experiencia de organizaciones sociales en la gestión de gobierno en la Provincia de Buenos Aires. En M. Retamozo, M. Schuttenberg y A. Viguera (Eds.), *Peronismos, izquierdas y organizaciones populares. Movimientos e identidades políticas en la Argentina contemporánea* (pp. 261-278). La Plata: UNLP.
- Lucca, J. B. (2011). El gobierno de Néstor Kirchner en Argentina (2003-2007) y la reconfiguración de la escena política. En *IV Congreso Latino Americano de Opinião Pública da WAPOR*. Belo Horizonte.
- Lucita, E. (2007, marzo 13). Nueva etapa de acumulación, ¿Qué perspectivas? *Argenpress*, p. 10. Buenos Aires.
- Lucita, E. (2013a, enero 29). La parte del todo (a propósito de la intervención política). *Argenpress*, p. 8. Buenos Aires.
- Lucita, E. (2013b, agosto 30). «Fondos buitres»: la deuda en debate y el cerco financiero al país. *Argenpress*. Buenos Aires.
- Luhmann, N. (1995). *Introducción a la teoría de sistemas*. (J. Torres Nafarrete, Ed.). México: Universidad Iberoamericana.
- Luhmann, N. (1998). *Complejidad y modernidad: de la unidad a la diferencia*. (J. Berian y J. García Blanco, Eds.). Madrid: Trotta.
- Lukes, S. (2007). *El poder. Un enfoque radical*. México: Siglo XXI.

- Lustig, N. (2012). Desigualdad y pobreza en América Latina. En AAVV (Ed.), *América Latina en los albores del siglo XXI. Vol. 1. Aspectos Económicos* (pp. 89-116). México: FLACSO México.
- Lynch, N. (2007). What the left means in Latin America now. *Constellations*, 14(3), 373-383.
- Macías Vázquez, A. (2008). La reestructuración de la deuda soberana: multilateralismo, acción colectiva y canje. *Problemas del Desarrollo*, 39(155), 53-76.
- Macías Vázquez, A. (2009). La reestructuración de la deuda soberana en la crisis argentina. *Asteriskos*, (7/8), 211-228.
- Magrini, A. L. y Quiroga, M. V. (2011). A 10 años de diciembre de 2001: De la protesta social, luchas, desafíos y reinenciones de lo político. *Estudios*, (26), 59-79.
- Maguire, J. M. (1984). *Marx y su teoría de la política*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Máiz, R. (2011). Las dos lógicas de la explicación en la obra de Charles Tilly: Estados y repertorios de protesta. En M. J. Funes (Ed.), *A propósito de Tilly. Conflicto, poder y acción colectiva* (pp. 49-76). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Malamud, C. (2009). La crisis de la integración se juega en casa. *Nueva Sociedad*, (219), 97-112.
- Manin, B. (1998). *Los principios del gobierno representativo*. Madrid: Alianza.
- Manin, B., Przeworski, A. y Stokes, S. (2002). Elecciones y representación. *Zona abierta*, (100/101), 19-49.
- Mansilla, D. y Tumini, L. (2004). *Un análisis del acuerdo con el FMI: ¿un nuevo rumbo o el mismo camino?* (No. 45). Buenos Aires.
- Manzanelli, P. (2011). Peculiaridades en el comportamiento de la formación de capital en las grandes empresas durante la posconvertibilidad. *Apuntes para el cambio*, 1(1), 23-37.
- Marini, R. M. (1973). *Dialéctica de la dependencia*. México: Era.
- Martino, R. (2010). M.T.R.: Apuntes para una historia piquetera. *El Aromo*, (57).
- Martos, Á. (2014). *Organizaciones político-sociales, lucha por recursos del Estado y proyectos políticos*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.

- Martos, Á. y Makuc Urbina, M. (2014). Izquierda independiente y elecciones en Argentina y Chile. Ensayando ¿nuevas? formas de articulación política. En *De la Democracia liberal a la Soberanía Popular: articulación y crisis en América Latina*. México: FLACSO.
- Marx, K. (1852). Carta a Joseph Weydemeyer. En *Marx y Engels Collected Works: Volume 39* (p. 58). Progress Publishers/Lawrence y Wishart/International Publishers.
- Marx, K. (1981). *El Capital*. México: Siglo XXI.
- Marx, K. (2002). *Crítica a la Filosofía del Estado de Hegel*. (Á. Prior y J. (traductor) Ripalda, Eds.). Madrid: Editorial Biblioteca Nueva.
- Marx, K. y Engels, F. (1968). *La ideología alemana*. (W. (traductor) Roces, Ed.) (2° ed.). Montevideo: Pueblos Unidos.
- Marx, K. y Engels, F. (1981). El 18 Brumario de Luis Bonaparte. En *Obras escogidas en tres tomos* (pp. 404-498). Moscú: Editorial Progreso.
- Marx, K. y Engels, F. (1999). *Manifiesto del Partido Comunista*. Marxists Internet Archive.
- Massetti, A. (2006). «Piqueteros eran los de antes»: Sobre las transformaciones en la Protesta Piquetera. *Laboratorio*, (19).
- Massetti, A. (2010). Limitaciones de los movimientos sociales en la construcción de un estado progresista en Argentina. *Argumentos. Revista de crítica social*, (12), 81-108.
- Mateos, A. (1998). Historia, Memoria, Tiempo presente. *Hispania Nova*, (1).
- Mazzeo, M. (2004). *Piqueteros. Notas para una tipología*. Buenos Aires: Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas.
- Mazzeo, M. (2011). *Poder popular y nación. Notas sobre el Bicentenario de la Revolución de Mayo*. Buenos Aires: El Colectivo y Herramienta.
- Meckstroth, T. (2000). Marx and the Logic of Social Theory: The Capitalist State. *Science y Society*, 64(1), 55-86.
- Meiksins Wood, E. (2000). *Democracia contra capitalismo*. México: Siglo XXI.
- Merino, G. (2012). El Movimiento Obrero Organizado, la crisis de 2001 y el gobierno de Duhalde. El caso de la CGT disidente. *Sociohistórica*, (30), 89-119.

- Merino, G. (2014). *El surgimiento del grupo productivo y el retorno de los «Capitanes de la industria» al centro de la lucha política, 1999-2003*. Universidad Nacional de La Plata.
- Michelena, G. (2009). La evolución de la tasa de ganancia en la Argentina (1960-2007): caída y recuperación. *Realidad Económica*, (248), 83-106.
- Migliorisi, P. (2013). *La Asignación Universal por Hijo para Protección Social*. Universidad Nacional del Sur.
- Míguez, P. (2010). El debate contemporáneo sobre el Estado en la teoría marxista: su relación con el desarrollo y la crisis del capitalismo. *Estudios Sociológicos*, XXVIII(84), 643-689.
- Miliband, R. (1970). *El Estado en la sociedad capitalista*. México: Siglo XXI.
- Miliband, R. (1991). Marx y el Estado. En H. Tarcus (Ed.), *Debates sobre el Estado Capitalista/1* (pp. 41-69). Buenos Aires: Imago Mundi.
- Ministerio de Economía y Producción. (2004). *Argentina, el FMI y la crisis de la deuda* (No. II). Buenos Aires.
- Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social. (2011). Boletín de Estadísticas Laborales. *Revista de Trabajo*, 7(9), 60.
- Mocca, E. (2008). Las dos almas de la izquierda reformista argentina. *Nueva Sociedad*, (217), 127-144.
- Mocca, E. (2009). Izquierda democrática: el difícil camino de la unidad en la diversidad. Buenos Aires: Fundación Friederich Ebert.
- Mocca, E. (2014, agosto 31). Kirchnerismo y peronismo. *Página/12*. Buenos Aires.
- Modonesi, M. (2012). Revoluciones pasivas en América Latina. Una aproximación gramsciana a la caracterización de los gobiernos progresistas de inicio del siglo. En M. Thwaites Rey (Ed.), *El Estado en América Latina: continuidades y rupturas* (pp. 139-166). Santiago de Chile: CLACSO/ARCIS.
- Monedero, J. C. (2008). Introducción. El Estado moderno como relación social: la recuperación de un concepto politológico del Estado. En A. de Cabo y A. García (Eds.), *El futuro del Estado capitalista* (pp. XIII-XL). Madrid: Libros de la Catarata.
- Montes Cató, J., Lenguita, P. y Varela, P. (2010). Trabajo y Política en Argentina: la potencialidad de la acción gremial en el lugar de trabajo. *Revista Estudios Políticos*, 2(1), 28-45.

- Moreira, C. (2007). Los dilemas de la nueva izquierda gobernante en América Latina. *Argumentos*, 20(54), 37-50.
- Moreira, C. y Barbosa, S. (2010). El kirchnerismo en Argentina. Origen, apogeo y crisis. Su construcción de poder y forma de gobernar. *Sociedade e Cultura*, 13(2), 193-200.
- Moreno Brid, J. C. y Paunovic, I. (2006). The future of economic policy making by left-of-center governments in Latin America: old wine in new bottles? *Harvard Review of Latin America*, 5(1), 44-47.
- Moreno, J. E. (2010). ¿Lo tomo, lo dejo, lo rompo o lo uso? Concepciones sobre el Estado y estrategias políticas entre las organizaciones del campo popular. En A. Massetti, E. Villanueva y M. Gómez (Eds.), *Movilizaciones, protestas e identidades políticas en la Argentina del bicentenario* (pp. 119-136). Buenos Aires: Nueva Trilce.
- Moreno, J. E. (2013). «Seamos zurdos, lo demás no importa nada». Ideología, identidad política y convergencia. En M. Retamozo, M. Schuttenberg y A. Viguera (Eds.), *Peronismos, izquierdas y organizaciones populares. Movimientos e identidades políticas en la Argentina contemporánea* (pp. 71-94). La Plata: UNLP.
- Muñoz, A. (2004). Los discursos de la desocupación y la pobreza, las organizaciones de desocupados y la esfera político estatal. *Laboratorio*, 4(15), 14.
- Muñoz, A. (2010). *Sísifo en Argentina. Orden Conflicto y sujetos políticos*. México: Editorial Universitaria Villa María, Plaza y Valdés.
- Muñoz, A. y Retamozo, M. (2013). «Kirchnerismo»: gobierno, política y hegemonía. En M. Retamozo, M. Schuttenberg y A. Viguera (Eds.), *Peronismos, izquierdas y organizaciones populares. Movimientos e identidades políticas en la Argentina contemporánea* (pp. 47-70). La Plata: UNLP.
- Murillo, M. V. (2001). *Labor unions, partisan coalitions, and market reforms in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Naishtat, F., Schuster, F., Nardacchione, G. y Pereyra, S. (2005). *Tomar la palabra: estudios sobre la protesta social y acción colectiva en la Argentina contemporánea*. Buenos Aires: Prometeo.
- Natalucci, A. y Schuttenberg, M. (2013). Pensar el kirchnerismo: estado actual de los estudios sobre movimientismo e identidades nacional-populares. En M. Retamozo, M. Schuttenberg y A. Viguera (Eds.), *Peronismos, izquierdas y organizaciones populares. Movimientos e identidades políticas en la Argentina contemporánea* (pp. 23-46). La Plata: UNLP.

- Neffa, J. (1998). *Modos de regulación, regímenes de acumulación y su crisis en Argentina(1880-1996)*. Buenos Aires: Eudeba, PIETTE.
- Nemiña, P. (2009, septiembre 20). El nuevo viejo FMI. *Página/12*, p. 3. Buenos Aires.
- Niosi, J. (1974). *Los Empresarios y el Estado Argentino (1955-1969)*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Noriega, N. (s. f.). *El sector bancario durante la crisis de la Convertibilidad. La fractura de la Asociación de Bancos de Argentina a la luz de la debacle del modelo económico* (No. 2). Buenos Aires.
- Nueva Mayoría. (2002). *Con el paro de la CTA, Duhalde es el presidente que enfrentó mayor frecuencia de paros generales desde 1983*. Buenos Aires.
- O'Donnell, G. (1977). Estado y alianzas en la Argentina, 1956-1976. *Desarrollo Económico*, 16(64), 523-554.
- O'Donnell, G. (1982). *El Estado Burocrático Autoritario*. Buenos Aires: Editorial Belgrano.
- O'Donnell, G. (2004). Acerca del Estado en América Latina contemporánea: diez tesis para discusión. En PNUD (Ed.), *La democracia en América Latina. Contribuciones para el debate* (pp. 149-192). Argentina: PNUD.
- Ocampo, J. A. (2004). La América Latina y la economía mundial en el largo siglo XX. *Trimestre Económico*, (284), 725-786.
- Offe, C. (1977). La abolición del control del mercado y el problema de la legitimidad. En H. Sonntag y H. Valecillos (Eds.), *El Estado en el capitalismo contemporáneo* (pp. 62-87). México: Siglo XXI.
- Offe, C. (1992). *La gestión política* (No. 36). Madrid: Centro de Publicaciones - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
- Offe, C. y Ronge, V. (1975). Theses on the Theory of th State. *New German Critique*, (6), 137-147.
- Olin Wright, E. (1983). *Clase, crisis y estado*. Madrid: Siglo XXI.
- Ollier, M. (2010). Kirchner al poder institucional e informal (2003-2010). *Temas y debates*, 14(20), 39-58.
- Olmos Gaona, A. (2011). La deuda argentina como delito: un aspecto no tratado por el derecho penal. *Rebela*, 1(1), 51-71.

- Olmos Gaona, A. (2013, septiembre 2). Apuntes sobre el canje. *Argenpress*. Buenos Aires.
- Ordaz Sánchez, L. (2012). La historia del presente y el conocimiento histórico. *HAO*, (29), 133-140.
- Orsini, L. (2007). La demanda social y los límites de lo heterogéneo. En P. Biglieri y G. Perelló (Eds.), *En nombre del pueblo. La emergencia del populismo kirchnerista* (pp. 105-122). Buenos Aires: UNSAMedita.
- Ortiz, R. (2008). La extracción de recursos naturales y la persistencia de las reformas neoliberales en la Argentina «progresista». En *Seminario Internacional «Postneoliberalismo. Cambio o continuidad»*. La Paz, Bolivia: Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario.
- Osorio, J. (2001). *Fundamentos del análisis social. La realidad social y su conocimiento*. México: FCE - UAM Xochimilco.
- Osorio, J. (2004a). *Crítica de la economía vulgar. Reproducción del capital y dependencia*. México: Miguel Ángel Porrúa.
- Osorio, J. (2004b). *El Estado en el centro de la mundialización. La sociedad civil y el asunto del poder*. México: FCE - UAM Xochimilco.
- Osorio, J. (2008). ¿Por qué hablar de patrón de reproducción del capital? *Revista OIKOS*, (28), 149-186.
- Osorio, J. (2012). *Estado, biopoder, exclusión. Un análisis desde la lógica del capital*. Barcelona y México: Anthropos-UAM Xochimilco.
- Ozarow, D. (2014). When all they thought was solid melted into air. Resisting Pauperization in Argentina during the 2002 Crisis. *Latin American Research Review*, 49(1), 178-202.
- Paggi, L. (1981). La teoría general del marxismo en Gramsci. En *Escritos políticos (1917-1933)* (pp. 13-84). México: Siglo XXI.
- Palacio, M. (2011). *Populistas: el poder de las palabras. Estudios de política*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
- Paladino, M. (2006). *Redes clientelares y organizaciones piqueteras. Cultura y política, Cambio y continuidad*. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
- Palermo, V. (2011). Consejeros del príncipe. Intelectuales y populismo en la Argentina de hoy. *RECSO*, 2, 81-102.

- Palma, A. (2014). Quienes protestan y por qué: construcción de destinatarios durante el conflicto en torno a las retenciones móviles en la argentina (marzo-julio 2008). *Tonos Digital. Revista de Estudios Filológicos*, II(27).
- Palti, E. (2005). *Verdades y saberes del marxismo. Reacciones de una tradición política ante su «crisis»*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Panero, M. (2011). «NUESTRO PAÍS RURAL» La dimensión política del pensamiento económico de la Sociedad Rural Argentina. En *IX Jornadas de Sociología de la UBA*. Buenos Aires.
- Paramio, L. (2006). Giro a la izquierda y regreso del populismo. *Nueva Sociedad*, (205), 63-74.
- Parsons, T. (1974). *La sociedad: perspectivas evolutivas y comparadas*. México: Trillas.
- Parsons, W. (2007). *Políticas públicas: una introducción a la teoría y la práctica del análisis de políticas públicas*. (F.-S. México, Ed.). México: FLACSO.
- Patrouilleau, M. M. (2010). Discurso y narración en las dinámicas de constitución identitaria. La experiencia kirchnerista en Argentina. *CONfines*, (6), 37-58.
- Pautassi, L., Rossi, J. y Campos, L. (2003). *Plan Jefes y Jefas. ¿Derecho social o beneficio sin derechos?* Buenos Aires.
- Pavón, H. (2013). Argentina: el regreso de los intelectuales públicos. *Nueva Sociedad*, (245), 149-162.
- Payo Esper, M. (2013). Las huelgas generales en el período 2002-2012. Notas sobre su dinámica y la relación con la conflictividad laboral. En *VII Jornadas de Jóvenes Investigadores*. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani.
- Peralta Ramos, M. (1978). *Acumulación del capital y crisis política en Argentina (1930-1974)*. México: Siglo XXI.
- Peralta Ramos, M. (2007). *La economía política argentina: poder y clases sociales (1930-2006)*. Buenos Aires: FCE.
- Perelmiter, L. (2007). ¿Es posible la debilidad estatal? Notas de investigación en torno de la construcción del Estado en política social. *Papeles de trabajo. Revista electrónica del Instituto de Altos Estudios Sociales*, 1(2).
- Perelmiter, L. (2010). Militar el Estado. La incorporación de movimientos sociales de desocupados en la gestión de políticas sociales. Argentina (2003-2008). En A. Massetti, E. Villanueva y M. Gómez (Eds.), *Movilizaciones, protestas e identidades*

- políticas en la Argentina del bicentenario* (pp. 137-156). Buenos Aires: Nueva Trilce.
- Pereyra, C. (1979). Gramsci: Estado y sociedad civil. *Cuadernos políticos*, (21), 66-74.
- Pereyra, C. (1988). *El sujeto de la historia*. México: Alianza Universidad.
- Pereyra, G. (2012). Límites y posibilidades del discurso populista. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 17(58), 11-26.
- Pérez Artica, R. (2009). Un enfoque micro del ciclo posconvertibilidad. *Realidad Económica*, (246), 105-126.
- Pérez Artica, R. y Cantamutto, F. J. (2009). Fuentes y destinos de fondos, la relevancia de la financierización. Un estudio de caso de grandes empresas en Argentina. En 4° Congreso Nacional de Estudiantes de Postgrado de Economía (p. 30). Bahía Blanca, Argentina: Universidad Nacional del Sur.
- Pérez Liñán, A. (2008). Instituciones, coaliciones callejeras e inestabilidad política: perspectivas teóricas sobre las crisis presidenciales. *América Latina Hoy*, (49), 105-126.
- Pérez, P. (2006). Tensiones entre la política macroeconómica y la política de ingresos en la Argentina post-Convertibilidad. *Laboratorio*, 8(19), 5-12.
- Pérez, P. y Félix, M. (2010). La crisis económica y sus impactos sobre la política de empleo e ingresos en Argentina. *SER Social*, 12(26), 31-58.
- Pérez Paladino, P. (2013). Los mensajes que dejaron las cacerolas. *Más poder local*, (14), 20-21.
- Pérotin-Dumon, A. (2007). Liminar. Verdad y memoria: escribir la historia de nuestro tiempo. En A. Pérotin-Dumon (Ed.), *Historizar el pasado vivo en América Latina* (p. 149).
- Pinto, A. (2008). Notas sobre los estilos de desarrollo en América Latina. *Revista de la CEPAL*, (96).
- Piva, A. (2007). Acumulación de capital y hegemonía débil en la Argentina (1989-2001). *Realidad Económica*, (225), 72-98.
- Piva, A. (2009). Vecinos, piqueteros y sindicatos disidentes. La dinámica del conflicto social entre 1989 y 2001. En A. Bonnet y A. Piva (Eds.), *Argentina en Pedazos. Luchas sociales y conflictos interburgueses en la crisis de la convertibilidad* (pp. 19-70). Buenos Aires: Continente.

- Piva, A. (2011). Una aproximación a los cambios en la Forma de Estado en Argentina (2002-2009). *Theomai*, (23), 1-23.
- Piva, A. (2012). Burocracia y teoría marxista del Estado. *Intersticios. Revista Sociológica de Pensamiento Crítico*, 6(2), 27-48.
- Polanyi, K. (1989). *La gran transformación. Crítica del liberalismo económico*. Madrid: Ediciones de la Piqueta.
- Pomares, J., Gasparin, J. y Deleersnyder, D. (2013). *Evolución y distribución del empleo público en el sector público nacional argentino. Una primera aproximación* (No. 117). Buenos Aires.
- Portantiero, J. C. (1977). Economía y política en la crisis argentina: 1958-1973. *Revista Mexicana de Sociología*, 39(2), 531-565.
- Portantiero, J. C. (1981). *Los usos de Gramsci*. México: Folios Ediciones.
- Portantiero, J. C. (1982). *Sociedad civil, Estado, sistema político*. México.
- Portelli, H. (1976). *Gramsci y el bloque histórico* (3° ed.). México: Siglo XXI.
- Portes, A. y Hoffman, K. (2003). La estructura de clases en América Latina: composición y cambios durante la era neoliberal. *Desarrollo Económico*, 43(171), 355-387. Recuperado a partir de <http://www.jstor.org/stable/3455890?origin=crossref>
- Poulantzas, N. (1969a). *Hegemonía y dominación en el Estado moderno*. México: Pasado y Presente.
- Poulantzas, N. (1969b). *Poder político y clases sociales en el Estado capitalista*. México: Siglo XXI.
- Poulantzas, N. (1980). *Estado, poder y socialismo*. Madrid: Siglo XXI.
- Poulantzas, N. (1991). El problema del estado capitalista. En H. Tarcus (Ed.), *Debates sobre el Estado Capitalista/1* (pp. 71-90). Buenos Aires: Imago Mundi.
- Poy Piñeiro, S. (2011). El trabajo en la post- devaluación: una mirada sobre las formas de inserción laboral en la Argentina reciente. En *IX Jornadas de Sociología de la UBA*. Buenos Aires.
- Pucciarelli, A. (2014). Crisis sobre crisis: la Ley de Déficit Cero. Golpe de mercado, retorno a la ultraortodoxia, crisis política y comienzo de la resistencia popular. En A. Pucciarelli y A. Castellani (Eds.), *Los años de la Alianza: La crisis del orden neoliberal* (pp. 161-214). Buenos Aires: Siglo XXI.

- Pucciarelli, A. y Castellani, A. (2014). Introducción. Los años de la Alianza: transformación de la crisis de acumulación en crisis orgánica. En A. Pucciarelli y A. Castellani (Eds.), *Los años de la Alianza: La crisis del orden neoliberal* (pp. 13-34). Buenos Aires: Siglo XXI.
- Puigrós, R. (1969). *El peronismo: las causas*. Buenos Aires: Editorial Jorge Álvarez.
- Puricelli, S. (2005). La teoría de movilización de recursos desnuda en América Latina. *Revista Theomai*, (12).
- Puyana, A. y Costantino, A. (2013). Sojización y enfermedad holandesa en Argentina: ¿la maldición verde? *Problemas del Desarrollo*, 175(44), 81-100.
- Quiroga, M. V. (2014). Constitución y redefinición de identidades políticas: La Central de Trabajadores de la Argentina (2000-2005). *Trabajo y Sociedad*, (22), 307-323.
- Raffo, T. y Lozano, C. (2006). Evolución de la distribución del ingreso, el consumo popular y el consumo superior. *Equipo de investigaciones Rodolfo Walsh*.
- Rajland, B. (2008). Movilización social y transformación política en Argentina: de autonomías, articulaciones, rupturas y cooptaciones. En M. López Maya, N. Iñigo Carrera y P. Calveiro (Eds.), *Luchas contrahegemónicas y cambios políticos recientes de América Latina* (pp. 339-363). Buenos Aires: CLACSO.
- Rajland, B. (2012). El estado del Estado en la Argentina después de 2001. Continuidades y rupturas. En M. Thwaites Rey (Ed.), *El Estado en América Latina: continuidades y rupturas* (pp. 255-277). Santiago de Chile: CLACSO/ARCIS.
- Ramos Torre, R. (1993). Problemas textuales y metodológicos de la sociología histórica. *Reis*, (63), 7-28.
- Rapetti, M. (2005). *La Macroeconomía Argentina durante la Post-convertibilidad: Evolución, Debates y Perspectivas* (No. 5). New York.
- Rauber, I. (2004). *Movimientos sociales y representación política*. La Habana, Cuba: Edición Ciencias Sociales.
- Raus, D. (2014). El Partido Justicialista en el gobierno de la Alianza. En A. Pucciarelli y A. Castellani (Eds.), *Los años de la Alianza: La crisis del orden neoliberal* (pp. 81-130). Buenos Aires: Siglo XXI.
- Rebón, J. (2004). *Desobedeciendo al desempleo. La experiencia de las empresas recuperadas*. Buenos Aires.
- Reisenman, M. (2005). CTA: «presionando» al Estado, diluyendo a la clase trabajadora. *Lucha de clases*, (5), 1-16.

- Reiss, E. (2000). *Una guía para entender a Marx*. Madrid: Siglo XXI.
- Remes Lenicov, J., Todesca, J. y Ratti, E. (2003). La política económica de principios de 2002. *Archivos del presente*, 8(31).
- Renaud, J. (2009). *Impacto de la megaminería sobre las poblaciones locales en Argentina*. Buenos Aires.
- Retamozo, M. (2009). *Movimientos sociales. Subjetividad y acción de los trabajadores desocupados en Argentina*. México: FLACSO México.
- Retamozo, M. (2011). Movimientos sociales, política y hegemonía en Argentina. *Polis*, (28), 1-25.
- Retamozo, M. (2012). Intelectuales, kirchnerismo y política. Una aproximación a los colectivos de intelectuales en Argentina. *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*. Recuperado 15 de agosto de 2014, a partir de <http://nuevomundo.revues.org/64250>
- Retamozo, M. y Stoessel, S. (2014). El concepto de antagonismo en la teoría política contemporánea. *Estudios políticos*, (44), 13-34.
- Reygadas, L. (2007). Entre el asistencialismo revolucionario y la socialdemocracia moderna: las políticas sociales de los gobiernos de izquierda en América Latina. En *Coloquio Left turns in Latin America*. Vancouver: University of British Columbia-Simon Fraser University.
- Rial, N. (2009). La crisis mundial y la experiencia argentina. *Revista del Trabajo*, 5(7), 175-184.
- Rieznik, P. (2003). 1982-2002: Dos décadas de democracia y el Argentinazo. *Razón y Revolución*, (11), 19-23.
- Rinesi, E. (2011). Notas para una caracterización del kirchnerismo. *Debates y Combates*, 1(1), 141-172.
- Roberts, K. (2002). El Sistema de Partidos y la Transformación de la Representación Política en la Era Neoliberal Latinoamericana. En M. Cavarozzi y J. M. Abal Medina (Eds.), *El Asedio a la Política. Los partidos latinoamericanos en la era neoliberal* (pp. 55-76). Buenos Aires: Editorial Homo Sapiens.
- Roberts, K. (2008). ¿Es posible una socialdemocracia en América Latina? *Nueva Sociedad*, (217), 86-98.
- Rodríguez, C. (2001). *Columna de opinión* (No. 17). Buenos Aires.

- Rodríguez Diez, A. (2003). *Historia secreta. Devaluación y pesificación*. Buenos Aires: Bifronte.
- Rodríguez, G. y Freibrun, N. (2011). La república es de los otros ¿o puede ser mía? Un dilema para el intelectual kirchnerista. En *IX Jornadas de Sociología de la UBA* (p. 19). Buenos Aires.
- Rodríguez, J. (s. f.). El papel del Fondo Monetario Internacional en la crisis de la Argentina. *Agenda internacional*, 1(3), 66-80.
- Rodríguez Kauth, Á. (2002). Un concepto olvidado: la deuda odiosa. *Revista de Ciencias Sociales*, VIII(2), 347-359.
- Rodríguez, R. (2012). *De la fragmentación a la unidad de lo diverso. Una aproximación a los movimientos sociales desde las Relaciones Internacionales. La experiencia del Frente Popular Darío Santillán de Argentina*. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.
- Rodrik, D. (1992). *The Rush to Free Trade in the Developing World: Why so late? Why now? Will it last?* (No. 3947). Cambridge.
- Rodrik, D. (1996). Understanding Economic Policy Reform. *Journal of Economic Literature*, XXXIV, 9-41.
- Romero, L. A. (1990). Los sectores populares urbanos como sujetos históricos. *Proposiciones*, (19), 268-278.
- Romero, L. A. (2007). La violencia en la historia argentina reciente: un estado de la cuestión. En A. Pérotin-Dumon (Ed.), *Historizar el pasado vivo en América Latina* (p. 137).
- Roslan, C. y Hirsch, M. (2013). El papel del salario real en la acumulación de capital en la Argentina. Aportes para su discusión. En *X Jornadas de sociología de la UBA*. Buenos Aires.
- Rossi, F. (2014). Conciliar agendas múltiples: la lucha de los sindicatos contra el neoliberalismo en Argentina. *CIDOB d'Afers Internacionals*, (105), 165-189.
- Rosso, F. (2011). ¿Progresista o Restaurador? Otra vez sobre Gramsci y el kirchnerismo (una respuesta a Artermio López). *El violento oficio de la crítica*. Recuperado 25 de octubre de 2014, a partir de <http://elviolentooficio.blogspot.mx/2011/09/progresista-o-restaurador-otra-vez.html>
- Rosso, F. (2013). Reflexiones sobre Gramsci y la anatomía del kirchnerismo. *Rebellion.org*. Recuperado 21 de octubre de 2014, a partir de <http://www.rebellion.org/noticia.php?id=162969>

- Sanmartino, J. (2009). *Crisis, acumulación y forma de estado en la Argentina post-neoliberal. Cuestiones de Sociología-Revista de Estudios Sociales*. Santiago de Chile.
- Santos da Silva, M. (2013). Ciberativismo nas redes sociais no contexto latinoamericano: um estudo sobre o movimento argentino 8N. En *IX Conferencia Brasileira de Mídia Cidadã*. Curitiba, Brasil.
- Santucho, M., Genoud, D., Rodríguez, M. y Maccia, J. (2014). El aristócrata que quería ser marginal. *Revista Crisis*, (17).
- Sanz Cerbino, G. (2012). Burguesía agraria, conflictividad política y quiebres institucionales. Argentina, 1975-2008. *Polis*, (31).
- Schmitt, C. (2001). El concepto de lo «político». En H. Aguilar (Ed.), *Carl Schmitt, teólogo de la política* (pp. 167-223). México: Fondo de Cultura Económica.
- Schorr, M. (2001). *Atrapados sin salida?: la crisis de la convertibilidad y las contradicciones en el bloque de poder económico*. Buenos Aires.
- Schorr, M. (2012a). Argentina: ¿nuevo modelo o viento de cola? Una caracterización en clave comparativa. *Nueva Sociedad*, (237), 114-127.
- Schorr, M. (2012b). Industria y neodesarrollismo en la posconvertibilidad. *Voces en el Fénix*, (16), 14-25.
- Schorr, M. (2013). Presentación. En M. Castells, E. Ferreira, P. Manzanelli, M. Schorr y A. Wainer (Eds.), *Argentina en la posconvertibilidad: ¿desarrollo o crecimiento industrial? Estudios de economía política* (pp. 11-18). Buenos Aires: Miño y Dávila.
- Schuster, F. (2005). Izquierda política y movimientos sociales en la Argentina contemporánea. En C. Rodríguez Garavito, P. Barret y D. Chavez (Eds.), *La nueva izquierda en América Latina. Sus orígenes y trayectoria futura* (pp. 239-282). Bogotá: Norma.
- Schuster, F., Pérez, G., Pereyra, S., Armesto, M., Argelino, M., Balladares, C., ... Zipcioglu, P. (2006). *Transformaciones de la protesta social en Argentina 1989-2003* (No. 48). Buenos Aires.
- Schuttenberg, M. (2011). La reconfiguración de las identidades «nacional populares». Los puentes discursivos para la inserción de tres tradiciones políticas en el espacio «transversal kirchnerista». *Sociohistórica*, (28), 41-73.

- Schuttenberg, M. (2012). Los movimientos sociales «nacional populares» en la etapa kirchnerista: una revisión crítica de la bibliografía sobre el período. *Intersticios. Revista Sociológica de Pensamiento Crítico*, 6(2), 191-207.
- Schuttenberg, M. (2013). El espacio de centro derecha en la Argentina kirchnerista. La dinámica política de las identidades liberales. En *X Jornadas de sociología de la UBA*. Buenos Aires.
- Schvarzer, J. (1996). *La industria que supimos conseguir. Una historia político-social de la industria argentina*. Buenos Aires: Planeta.
- Schvarzer, J. y Finkelstein, H. (2003). Bonos, cuasi monedas y política económica. *Realidad Económica*, (193), 12.
- Shinkman, D. (2013, diciembre 14). Eduardo Duhalde: «Por qué no llaman a Lavagna, estamos en problemas». *La Nación*. Buenos Aires.
- Senén González, C. y Borroni, C. (2011). Diálogo social y revitalización sindical. Una reflexión sobre las relaciones laborales en Argentina post devaluación. *Revista de Ciencias Sociales*, 24(29), 32-53.
- Sevares, J. (2002). *Por qué Cayó la Argentina. Imposición, Crisis y Reciclaje del Orden Neoliberal*. Buenos Aires: Norma.
- Shaikh, A. (2006). *Valor, acumulación y crisis: ensayos de economía política*. Buenos Aires: Razón y Revolución.
- Simonoff, A. (2009). Regularidades de la política exterior de Néstor Kirchner. *Confines*, 5(10), 71-86.
- Skocpol, T. (1991). Temas Emergentes y Estrategias Recurrentes en Sociología Histórica. *Historia Social*, (10), 101-134.
- Sleiman, V., Morua, C. y Audisio, N. (2012). Humo, asfalto y conquistas. El Plan Argentina Trabaja y la lucha piquetera. *El Aromo*, (66).
- Solé-Tura, J. (1975). El Estado como sistema de aparatos e instituciones. En AAVV (Ed.), *El Marxismo y el Estado* (pp. 7-26). Barcelona: Avance.
- Solis Delgadillo, J. (2010). *Dos visiones, dos historias de la Plaza de Mayo. Estrategias de Abuelas y Madres para la articulación de políticas públicas de la memoria en la Argentina*. Salamanca, España.
- Sonntag, H. y Valecillos, H. (1977). Nota introductoria sobre la problemática teórica del Estado capitalista. En H. Sonntag y H. Valecillos (Eds.), *El Estado en el capitalismo contemporáneo* (pp. 9-22). México: Siglo XXI.

- Sotelo Valencia, A. (2002). La gestión del trabajo flexible en la mundialización del capital. *Revista de la Facultad de Economía - BUAP*, VII(21), 63-81.
- Stavenhagen, R. (1970). Clases sociales y estratificación. En *Las clases sociales en la sociedad capitalista avanzada* (pp. 169-189). Barcelona: Península.
- Stawski, M. y Cortés, R. (2008). Asistencialismo y negocios: la Fundación Eva Perón y el gobierno peronista (1948-1955). En *Primer Congreso de estudios sobre el peronismo: la primera década*. Mar del Plata: Red de estudios sobre el peronismo.
- Sunkel, O. y Paz, P. (2005). *El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo* (28.^a ed.). México: Siglo XXI.
- Svampa, M. (2004a). Cinco Tesis sobre la nueva matriz popular. *Laboratorio*, 4(15), 1-6.
- Svampa, M. (2004b). El devenir de las organizaciones piqueteras en Argentina. *Barataria*, (1).
- Svampa, M. (2005). *La sociedad excluyente. Argentina bajo el signo del neoliberalismo*. Buenos Aires: Taurus.
- Svampa, M. (2006). La Argentina: movimientos sociales e izquierdas. *Entre Voces*, (5), 4.
- Svampa, M. (2011). Argentina, una década después. Del <<que se vayan todos>> a la exaltación de lo nacional-popular. *Nueva Sociedad*, (235), 17-34.
- Svampa, M. y Pereyra, S. (2004). *Entre la ruta y el barrio: la experiencia de las organizaciones piqueteras*. Buenos Aires: Biblos.
- Svampa, M. y Sola Álvarez, M. (2010). Modelo minero, resistencias sociales y estilos de desarrollo: los marcos de la discusión en la Argentina. *Ecuador Debate*, (79), 105-126.
- Tagina, M. L. y Varetto, C. (2013). Argentina: del apogeo electoral a la inminencia de la crisis sucesoria. *Revista de Ciencia Política*, 33(1), 3-34.
- Tapia, L. (2007). Consideraciones sobre las metamorfosis de las izquierdas en América Latina: sus posibilidades y límites histórico-políticos. En Y. Acosta (Ed.), *Siglo XXI: El lugar de la izquierda en América Latina. Pensamiento, Sociedad y democracia* (pp. 118-131). Montevideo: CEIL.
- Tarcus, H. (1991a). Claus Offe o los límites de la Teoría Sistémica del Estado. *El cielo por asalto*, 1(2), 141-147.

- Tarcus, H. (1991b). Estudio preliminar. En H. Tarcus (Ed.), *Debates sobre el Estado Capitalista/1* (pp. 7-40). Buenos Aires: Imago Mundi.
- Thwaites Rey, M. (1994). La noción gramsciana de hegemonía en el convulsionado fin de siglo. Acerca de las bases materiales del consenso. En L. Ferreyra, E. Logiudice y M. Thwaites Rey (Eds.), *Gramsci mirando al Sur. Sobre la hegemonía en los 90*. Buenos Aires: Kyai.
- Thwaites Rey, M. (2004). *La autonomía como búsqueda, el Estado como contradicción*. Buenos Aires: Prometeo.
- Tilly, C. (2000). How do Relations Store Histories? *Annual Review of Sociology*, 26, 721-723.
- Tilly, C. (2001). Mechanisms in Political Processes. *Annual Review of Political Science*, (4), 21-41.
- Torre, J. C. (2005). Citizens versus political class: the crisis of partisan representation. En S. Levitsky y M. V. Murillo (Eds.), *Argentine democracy. The politics of institutional weakness* (pp. 165-180). Pennsylvania, EUA: Pennsylvania State University Press.
- Touraine, A. (2006). Entre Bachelet y Evo Morales, ¿existe una izquierda en América Latina? *Nueva Sociedad*, (205), 47-55.
- Toussaint, E. (2008, noviembre). Developing Countries: Dangerous Times for the Internal Public Debt. *MRzine*, 6.
- Tovar Mendoza, J. (2008). Tres Corrientes y un dilema de la izquierda latinoamericana. *Revista Metapolítica*, (57), 21-25.
- Trajtemberg, D. (2007). La negociación colectiva en 2006: un nuevo mecanismo de coordinación. En C. Tomada y M. Novik (Eds.), *Trabajo, ocupación y empleo. Los retos laborales en un proceso de crecimiento sostenido* (pp. 37-66). Buenos Aires: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
- Treacy, M. (2014). *Teoría de la dependencia: reflexiones sobre el capitalismo periférico latinoamericano y elementos para analizar la transferencia de excedente en la Argentina en la actualidad*. FLACSO Argentina.
- Treacy, M. (2015). Dependencia, restricción externa y transferencia de excedente en la Argentina (1970-2013). *Cuadernos de Economía Crítica*, 1(2).
- Trincherro, H. (2009). De la exclusión a la autogestión. Innovación social desde la experiencia de las empresas recuperadas por sus trabajadores (ERT). En A. Ruggeri

- (Ed.), *La economía de los trabajadores, autogestión y distribución de la riqueza*. Buenos Aires: Ed. Cooperativa Chilavert.
- Udry, C.-A. (1997). Los orígenes del neoliberalismo. *Viento Sur*, VI(31), 89-94.
- Ugarte, J. M. (2005). La Mesa del Diálogo Argentino: Una experiencia de prevención de conflictos y formulación de políticas públicas por la sociedad civil argentina en momentos de grave crisis nacional. *Pensamiento propio*, 10(22), 95-121.
- Ugarteche, Ó. (2009). *Historia crítica del FMI*. México: IIEc-UNAM.
- Ugla, F. (2008). A Turn to the Left or to the Centre? *STOCKHOLM REVIEW OF LATIN AMERICAN STUDIES*, (3), 9-21.
- Valenzuela, A. (2008). Presidencias latinoamericanas interrumpidas. *América Latina Hoy*, (49), 15-30.
- Valenzuela Feijóo, J. (1990). *¿Qué es un patrón de acumulación?* México: UNAM.
- Van Dijk, T. (1993). Principles of Critical Discourse Analysis. *Discourse y Society*, 3(4), 249-283.
- Varela, P. (2010). Los límites del territorio. Una hipótesis sobre la tesis de «territorialización de la política». En A. Massetti, E. Villanueva y M. Gómez (Eds.), *Movilizaciones, protestas e identidades políticas en la Argentina del bicentenario* (pp. 447-469). Buenos Aires: Nueva Trilce.
- Varesi, G. (2013). Modelo de acumulación, dinámica política y clases sociales en la Argentina posconvertibilidad. En J. Grigera (Ed.), *Argentina después de la convertibilidad (2002-2011)* (pp. 195-222). Buenos Aires: Imago Mundi.
- Vázquez, M. y Vommaro, P. (2012). La fuerza de los jóvenes: aproximaciones a la militancia kirchnerista desde La Cámpora. Buenos Aires: CLACSO.
- Vázquez Valencia, L. (2009). *Democracia y mercado. Viejas disputas, nuevas soluciones: el caso argentino*. México: FLACSO.
- Vázquez Valencia, L. y Cantamutto, F. J. (2013). El poder empresarial en Argentina: la negociación de la deuda. En L. Vázquez Valencia y J. Aibar Gaete (Eds.), *Procesos políticos de América Latina. Una lectura crítica del neoliberalismo* (pp. 157-198). México: FLACSO México.
- Veltmeyer, H. y Petras, J. (2005). Latin America's Social Structure and the Dynamics of Change. En J. K. Black (Ed.), *Latin America: its problems and its promise: a multidisciplinary introduction* (4^o ed., pp. 119-138). Boulder, EUA: Westview Press.

- Verbitsky, H. (2012, noviembre 9). Voces de la calle. *Página/12*. Buenos Aires.
- Vernengo, M. (2011, mayo 19). El significado de la Economía Heterodoxa, y por qué es importante. *Revista Circus*. Buenos Aires.
- Viguera, A. (1998). La política de la apertura comercial en la Argentina, 1987-1996. En *Latin American Studies Association meeting*. Chicago.
- Vilas, C. (1994). El populismo latinoamericano: un enfoque estructural. En C. Vilas (Ed.), *La democratización fundamental. El populismo en América Latina* (pp. 119-149). México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
- Vilas, C. (1995). Actores, sujetos, movimientos: ¿Dónde quedaron las clases? *Sociológica*, 10(28).
- Vitelli, G. (1990). *Las Lógicas de la Economía Argentina. Inflación y Crecimiento*. Buenos Aires: Pendergast.
- Vitelli, G. y Brenta, N. (1995). Planes de ajuste, proceso inflacionario e inversión: la experiencia argentina anterior a los años '80. *Ciclos*, 5(9).
- Vommaro, G. (2014). «Meterse en política»: la construcción del PRO y la renovación de la centroderecha argentina. *Nueva Sociedad*, (254), 57-72.
- Waiman, J. (2012). El debate sobre la hegemonía cultural kirchnerista. En *VII Jornadas de Sociología de la UNLP*. La Plata.
- Wainer, A. (2010). *Clase dominante, hegemonía y modos de acumulación. La reconfiguración de las relaciones de fuerza en el interior de la burguesía durante la crisis y salida de la convertibilidad (1998-2003)*. FLACSO Argentina.
- Wainer, A. (2011). Inserción argentina en el comercio mundial. De la restricción externa al desarrollo económico. *Realidad Económica*, (264), 60-88.
- Wainer, A. (2013). Cambios en el bloque en el poder a partir del abandono de la Convertibilidad. ¿Una nueva hegemonía? En J. Grigera (Ed.), *Argentina después de la convertibilidad (2002-2011)* (pp. 63-96). Buenos Aires: Imago Mundi.
- Wainfeld, M. (2012, noviembre 9). Apuntes sobre la marcha. *Página/12*. Buenos Aires.
- Wallerstein, I. (1998). *Impensar las ciencias sociales*. México: Siglo XXI.
- Wallerstein, I. (2008). *Historia y dilemas de los movimientos antisistémicos*.
- Wallerstein, I. y Balibar, É. (1991). *Raza, nación y clase*. Madrid: Iepala.

- Weber, G. (2008a). ¿Qué es deuda ilegítima? En G. Weber (Ed.), *Sobre la deuda ilegítima. Aportes al debate. Argumentos entre consideraciones éticas y normas legales* (pp. 33-40). Quito, Ecuador: Centro de investigaciones CIUDAD/Observatorio de la Cooperación al Desarrollo en Ecuador, Jubileo 2000 Red Guayaquil.
- Weber, G. (Ed.). (2008b). *Sobre la deuda ilegítima. Aportes al debate. Argumentos entre consideraciones éticas y normas legales*. Quito, Ecuador: Centro de investigaciones CIUDAD/Observatorio de la Cooperación al Desarrollo en Ecuador, Jubileo 2000 Red Guayaquil.
- Weber, M. (1964). *Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensiva*. México: FCE.
- Wortman, A. (1997). Nuevos sentidos de la palabra cultura en la sociedad argentina del ajuste. *Estudios Sociales*, VII(13), 59-84.
- Wyczykier, G. (2011). Notas para pensar la acción gremial de base y la precariedad laboral en el sector industrial argentino. *Trabajo y Sociedad*, XV(17), 285-308.
- Zapata, M. (2008). Reseña sobre Historia reciente: perspectivas y desafíos para un campo en construcción. *Temas y debates*, (16), 183-188.
- Zemelman, H. (2007). Algunas reflexiones en torno al populismo. En *Giro Práctico. Situación Actual de América Latina* (p. 24). México: Latinoamericanos.
- Zuleta Puceiro, E., Calvo, C., Gerzon, M. y Rial, J. (2004). *Evaluación del Diálogo Argentino*. Buenos Aires.

REFERENCIAS HEMEROGRÁFICAS

DISCURSOS PRESIDENCIALES

- <http://www.presidencia.gob.ar/discursos>
- <http://www.cfkargentina.com/category/nelson/discursos-nelson-2/discursos-2003-2007/>
- <http://www.presidenciaduhalde.com.ar/>

DOCUMENTOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES

- Asociación de Empresas Argentinas (AEA): <http://www.aeanet.net/>
- Foro de Convergencia Empresarial: <http://convergenciaempresarial.org/>
- Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) www.ideared.org

PRENSA

Argenpress: www.argenpress.info

Clarín: www.clarin.com

Crónica: www.cronica.com.ar

Diario 26: www.diario26.com

El argentino: www.diarioelargentino.com.ar

El tiempo: <http://www.eltiempo.com>

Fortuna: www.fortunaweb.com.ar

Indymedia: www.argentina.indymedia.org

Infobae: www.infobae.com

Iprofesional: www.iprofesional.com/

La Capital: www.lacapital.com.ar

La Gaceta: www.lagaceta.com.ar

La Nación: www.lanacion.com.ar

Los Andes: www.losandes.com.ar

Marcha: www.marcha.org.ar

MDZOnline: www.mdzol.com

Notas de Periodismo Popular: www.notas.org.ar

Página/12: www.pagina12.com.ar

Parlamentario: www.parlamentario.com

Perfil: www.perfil.com

Télam, Agencia Nacional de Noticias: www.telam.com.ar

ENTREVISTAS

Fueron realizadas entre el 4 de julio y el 13 de agosto de 2014. Se trata de una herramienta exploratoria, por lo que no transcribimos las entrevistas. Se entrevistó a los siguientes referentes, ordenados alfabéticamente, y consignando entre paréntesis la pertenencia aducida al momento de la entrevista:

- Alcira Argumedo (Proyecto Sur)
- Daniel López (Unión Obrera Metalúrgica, CGT oficialista)
- Diego Kenis (Agencia Paco Urondo)
- Diego Martínez (CELS)
- Emiliano López (FPDS-Patria Grande)
- Emilce Moler (MEvita – Ministerio de Desarrollo Social)
- Enrique Gandolfo (CTA disidente)
- Gustavo López (Subsecretaría General de la Presidencia de la Nación)
- Hugo Omar Cañón (Comisión Provincial de la Memoria)
- Iván Stoikoff (La Cámpera)
- Jorge Rivas (Unidad Socialista para la Victoria)
- José Cornejo (Agencia Paco Urondo)
- Laura García Vázquez (Proyecto Sur)
- Marta Novik (Ministerio de Trabajo)
- Norberto Peruzotti (ADEBA)
- Pedro Wasiejko (CTA)
- Roberto Cimatti (PS)
- Roberto Molini (FAA)

SIGLAS Y ABREVIATURAS

ABA: Asociación de Bancos de Argentina
ABAPPRA: Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina
ADEBA: Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino
ADESPA: Asociación de Empresas de Servicios Públicos Argentinos
AEA: Asociación de Empresas de Argentina
APYME: Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios
BCRA: Banco Central de la República Argentina
BEP: Bloque en el poder
BM: Banco Mundial
Bolsa: Bolsa de Comercio de Buenos Aires
CACom: Cámara Argentina del Comercio
CACons: Cámara Argentina de la Construcción
CAME: Confederación Argentina de la Mediana Empresa
CGE: Confederación General Económica de la República Argentina
CGT: Confederación General del Trabajo
CONINAGRO: Confederación Intercooperativa Agropecuaria
CRA: Confederaciones Rurales Argentinas
CTA: Central de Trabajadores de Argentina
EUA: Estados Unidos de América
FAA: Federación Agraria Argentina
FMI: Fondo Monetario Internacional
G8: Grupo de los 8, agrupamiento de ABRA, ADEBA, Bolsa de Comercio, CACom, CACons, SRA, Unión Argentina de la Construcción (UAC), UIA.
GP: Grupo Productivo, agrupamiento de la UIA, CRA y CACons.
MEcon: Ministerio de Economía de la Nación
MTA: Movimiento de los Trabajadores Argentinos (escisión interna de la CGT)
MTESS: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
PRE: Patrón de reproducción económica
SRA: Sociedad Rural Argentina

UIA: Unión Industrial Argentina